

EDUCA (Buenos Aires).

Desajustes en el desarrollo humano y social (2010-2011-2012). Inestabilidad económica, oscilaciones sociales y marginalidades persistentes en el tercer año del Bicentenario.

Agustín Salvia, Dan Adaszko, Eduardo Donza, Carolina Moreno, Solange Rodríguez Espínola, Bianca Musante, Julieta Vera, Alejandro Mendoza Jaramillo.

Cita:

Agustín Salvia, Dan Adaszko, Eduardo Donza, Carolina Moreno, Solange Rodríguez Espínola, Bianca Musante, Julieta Vera, Alejandro Mendoza Jaramillo (2013). *Desajustes en el desarrollo humano y social (2010-2011-2012). Inestabilidad económica, oscilaciones sociales y marginalidades persistentes en el tercer año del Bicentenario*. Buenos Aires: EDUCA.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/agustin.salvia/296>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pnKz/1f1>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

ODSA

Observatorio
de la Deuda
Social Argentina

BARÓMETRO
DE LA DEUDA SOCIAL
ARGENTINA

Serie del Bicentenario (2010-2016) / Año III



Desajustes en el desarrollo humano y social (2010-2011-2012)

Inestabilidad económica, oscilaciones sociales y marginalidades persistentes en el tercer año del Bicentenario

Agustín Salvia (Coordinador) / Dan Adaszko / Eduardo Donza
Alejandro Mendoza Jaramillo / Carolina Moreno / Bianca Musante
Solange Rodríguez Espínola / Julieta Vera



ISBN 978-987-620-236-7
ISSN 1852-4052

BARÓMETRO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA
Serie del Bicentenario (2010-2016) / Año III

BARÓMETRO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA

Observatorio de la Deuda Social Argentina
Pontificia Universidad Católica Argentina

Barómetro de la Deuda Social Argentina
Serie del Bicentenario (2010-2016) / Año III

**DESAJUSTES EN EL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL (2010-2011-2012)**
**Inestabilidad económica, oscilaciones sociales
y marginalidades persistentes en el tercer año del Bicentenario**

Agustín Salvia (Coordinador)
Dan Adaszko
Eduardo Donza
Alejandro Mendoza Jaramillo
Carolina Moreno
Bianca Musante
Solange Rodríguez Espínola
Julieta Vera

Agustín Salvia (coordinador)

Desajustes en el desarrollo humano y social
(2010-2011-2012) : Inestabilidad económica,
oscilaciones sociales y marginalidades
persistentes en el tercer año del Bicentenario .
- 1a ed. - Buenos Aires : Educa, 2013.

Buenos Aires, Argentina.

300- p. ; 21x27 cm.

ISBN 978-987-620-236-7
ISSN:1852-4052

1. Sociología. 2. Desarrollo Humano. 3. Deuda Social.
4. Marginalidades. 5. Desigualdad

CDD 306

1ª edición: julio de 2013

Tirada: 2000 ejemplares.

Diseño gráfico:
Santiago Ascaso
www.santiagoascaso.com.ar
Impreso en AGI

Libro editado y hecho en la Argentina
Printed in Argentina

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

© Fundación Universidad Católica Argentina
Av. Alicia M. de Justo 1300.
Buenos Aires, Argentina.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o cualquier otro sistema de archivo y recuperación de información, sin mención de la fuente.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina agradece a la gerencia de responsabilidad social del Banco Galicia y a la Fundación Diario La Nación la confianza y el respaldo brindados al desarrollo de las investigaciones que han hecho posible la realización de esta publicación. También a los directivos y profesionales del Observatorio Social por su apoyo a la realización del trabajo de campo, así como a cada uno de los equipos técnicos que desde distintos lugares del país aportaron su conocimiento, experiencia y compromiso a las tareas de relevamiento de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, Serie del Bicentenario 2010-2016. En el mismo sentido, reconocemos la desinteresada colaboración brindada por cada uno de los hogares que han participado de la encuesta. Asimismo, agradecemos a la Fundación Florencio Pérez su respaldo a nuestra tarea de investigación.

Por último, expresamos el agradecimiento a las autoridades de nuestra Universidad que continúan apoyando la continuidad de este programa de investigación, extensión y formación de recursos humanos.

AUTORIDADES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

RECTOR

Mons. Víctor Manuel Fernández

VICERRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES

Gabriel Limodio

VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Horacio Rodríguez Penelas

VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Beatriz Balian de Tagtachian

DIRECTORA GENERAL DEL PROGRAMA

OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA

Alicia Casermeiro de Pereson

COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA

Agustín Salvia

COORDINADOR

Agustín Salvia

AUTORES

Dan Adaszko

Eduardo Donza

Alejandro Mendoza Jaramillo

Carolina Moreno

Bianca Musante

Solange Rodríguez Espínola

Agustín Salvia

Julieta Vera

COLABORADORES

Isidro Adúriz

María Sol González

Diego Quartulli

Cecilia Tinoboras

Depto. de Docencia e Investigación en Biomedicina, Facultad de Cs. Médicas, UCA

Depto. de Neumonología, Hospital Universitario Austral

ASISTENCIA TÉCNICA

María de Hertelendy

Fernando J. Mehaledjean

Pilar Rostagno

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Natalia Regulsky

Natalia Ramil (Prensa)

Nerina Baio (Asistente)

María Belén Follin (Asistente)

COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

Cecilia Tinoboras

Christian Gabriel García

CORRECCIÓN DE ESTILO

Karina Bonifatti

Los autores del presente estudio ceden sus derechos en forma no exclusiva a la Universidad Católica Argentina para que ésta pueda incorporar la versión digital del mismo a su Repositorio Institucional, como así también a otras bases de datos que considere de relevancia académica.

Los capítulos publicados son responsabilidad de sus autores y no comprometen la opinión de la Universidad Católica Argentina.

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO:

La tarea dura de ser vigías de una deuda.....	13
Mons. Víctor Manuel Fernández.	

INTRODUCCIÓN:

EL ESTADO DE LAS DEUDAS SOCIALES EN EL PAÍS REAL AL TERCER AÑO DEL BICENTENARIO	15
Agustín Salvia.	

RESUMEN EJECUTIVO

Desajustes en el desarrollo humano y social (2010-2011-2012)	23
--	----

CAPÍTULO 1

CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA DE LOS HOGARES	33
Julietta Vera, Bianca Musante y Alejandro Mendoza Jaramillo.	
1.1 Pobreza estructural: Inseguridad alimentaria y necesidades básicas insatisfechas	36
1.2 Los ingresos monetarios y la capacidad de subsistencia	46
1.3 Capacidades de consumo y ahorro monetario desde una perspectiva subjetiva.....	60
1.4 Los programas sociales y su función de asistencia económica a los hogares.....	67
1.5 Resumen de resultados.....	74
1.6 Nota de investigación: Estimación del impacto de la AUH y las pensiones para madres con siete hijos sobre los ingresos familiares, la indigencia y la pobreza urbana en la Argentina del bicentenario.	76

CAPÍTULO 2

HÁBITAT, DESARROLLO URBANO Y DERECHO A LA CIUDAD EN LA ARGENTINA DEL BICENTENARIO	85
Dan Adaszko.	
2.1 Acceso a una vivienda digna.....	89
2.2 Acceso a servicios domiciliarios de red.....	103
2.3 Acceso a la infraestructura urbana básica	114
2.4 Acceso a condiciones ambientales saludables.....	124
2.5. Resumen de resultados.....	135
2.6 Nota de investigación: Segregación residencial socioeconómica en cinco áreas metropolitanas de la Argentina.....	139

CAPÍTULO 3

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143
Eduardo Donza.	
3.1 Participación en el mercado de trabajo y posibilidades de inserción laboral.....	147
3.2 Calidad del empleo y riesgo de desempleo.....	149
3.3 Participación en el sistema protección social	163
3.4 Ingresos provenientes del trabajo	174
3.5 Resumen de resultados.....	180
3.6 Nota de investigación: Los jóvenes y el empleo.....	182

CAPÍTULO 4

ESTADO Y ATENCIÓN DE LA SALUD, RECURSOS PSICOLÓGICOS Y CAPACIDADES SOCIALES	185
Solange Rodríguez Espínola.	
Participación: Guido Simonelli, Daniel Pérez Chada, Daniel P. Cardinali y Daniel E. Vigo.	
4.1 Estado, atención y hábitos de salud.....	188
4.2 Recursos psicológicos para el bienestar subjetivo.....	205
4.3 Capacidades sociales de agencia.....	221
4.4 Resumen de resultados.....	229
4.5 Nota de investigación: Trastornos de sueño: aspectos sociodemográficos y su relación con el estado de salud.....	231

CAPÍTULO 5

CULTURA DEMOCRÁTICA, CONFIANZA INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y VIDA CIUDADANA	235
Carolina Moreno.	
5.1 Preferencias, conformidad y atributos de la democracia.....	238
5.2 Confianza en las instituciones ciudadanas.....	244
5.3 Participación ciudadana en actividades políticas, sociales y solidarias.....	262
5.4 Seguridad ciudadana e integridad corporal.....	273
5.5 Resumen de resultados.....	279
5.6 Nota de investigación: Influencia de la venta de drogas y la vigilancia policial sobre el problema de la inseguridad.....	281

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	285
---------------------------------	-----

PRÓLOGO

LA TAREA DURA DE SER VIGÍAS DE UNA DEUDA

Siempre me preocupo por recordar que la tarea de nuestro Observatorio de la Deuda Social Argentina está sobradamente explícita en su nombre. Se trata de estar atentos para observar y llamar la atención sobre la “deuda” pendiente de la sociedad con los sectores menos favorecidos. No nos mueve un interés ideológico, sino el amor a los pobres que nos enseña el Evangelio.

No somos un grupo opositor, pero, para ser fieles a la identidad del ODSA, no nos queda más que ser un tábano que recuerda dolorosamente la “deuda”, es decir, lo que falta. Lo haremos con cualquier gobierno, nacional o local, presente o futuro, de cualquier signo político.

Si este año indicamos un leve aumento de la pobreza, no nos parece que deba sorprender. Basta pensar, para dar un solo ejemplo, en las consecuencias previsibles de la inflación –la que mide un ama de casa– cuando incide en los que trabajan en negro, cuyos ingresos no suelen ajustarse al ritmo inflacionario.

Por otra parte, no dejamos de modificar nuestras apreciaciones cuando los datos que relevamos nos dan otras señales. Este año, por ejemplo, indicamos que “la hipótesis de que la Asignación Universal por Hijo no haya tenido impacto positivo sobre la escolarización parece ser la menos factible, del mismo modo que es poco plausible que dicho instrumento haya logrado alterar de manera significativa la marginalidad estructural que afecta a cientos de miles de niños y jóvenes ciudadanos de este país”.

Nuestro Barómetro utiliza una metodología probada y aporta 5.700 casos de todo el país, por lo que su margen de error es bajo. Además, contamos con un Consejo Académico conformado por profesionales ex-

ternos a la Universidad. Las garantías de seriedad son muchas, motivo por el cual lo utilizan gobernadores de todo el país, embajadores que envían información a sus respectivos países y académicos de muchas instituciones, tanto argentinas como extranjeras.

Agradecemos a las empresas que siguen sosteniendo fielmente esta costosa tarea, y no dejamos de lamentar que algunas hayan dejado de hacerlo. Nosotros seguimos y seguiremos apostando a este aporte que la Universidad ofrece generosamente al país.

Particularmente, quiero felicitar a los investigadores y becarios que elaboran los informes y cuidan el ODSA con abnegación, entusiasmo, esfuerzo y un profundo sentido social.

Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández

Rector de la Pontificia Universidad
Católica Argentina

INTRODUCCIÓN

EL ESTADO DE LAS DEUDAS SOCIALES EN EL PAÍS REAL AL TERCER AÑO DEL BICENTENARIO

AGUSTÍN SALVIA

Durante los primeros tres años del Bicentenario argentino 2010-2016 se han hecho presentes tanto una efervescente recuperación en materia socioeconómica, pasada la crisis internacional de 2009, como una preocupante persistencia de la recesión económica iniciada a principios de 2012; todo ello en un contexto altamente inflacionario, con estancamiento en la generación de empleo y una marginalidad estructural que hace caso omiso al relato de una "década ganada". Una vez más, la inestabilidad económica y sus efectos negativos sobre el malhumor social parecen dominar parte del escenario de la vida política y social del país.

Sin necesidad de recurrir a estadísticas sofisticadas, sobran a diario testimonios y evidencias cotidianas –aunque a menudo se busque ocultarlas– que permiten reconocer la persistencia de penurias humanas de diverso orden que finalmente terminan estallando en el escenario social. De poco sirve que se nieguen las situaciones de exclusión social, suponiendo, con táctica del avestruz, que nada pasa. Poca justicia se hace a los pobres cuando una sociedad niega su existencia. De ahí que nos toque a nosotros decir una vez más que pese a las indiscutibles mejoras logradas durante casi una década de continuado crecimiento socioeconómico y avances en los derechos sociales, incluido el período 2010-2012 que aquí se estudia, queda aún mucho por hacer en materia de desarrollo, integración y justicia social, así como en el perfeccio-

namiento del sistema democrático, para el alcance de una ciudadanía plena para todos.

El programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en cuanto programa universitario de investigación interdisciplinaria, extensión y formación de recursos humanos, busca hacer un aporte a la necesaria tarea de diagnosticar el estado en que se encuentra el desarrollo humano y social de la sociedad argentina contemporánea y su evolución reciente. Ahora bien, no son pocas las veces que los científicos sociales deben enfrentarse a los dispositivos montados por los sectores que dominan la construcción de sentido. Por lo general, cuando los hallazgos contradicen las expectativas –sean oficiales u opositoras–, los protagonistas que se sienten aludidos suelen percibirse injustamente evaluados, creyendo que la representación científica de los hechos los tiene –para bien o para mal– como responsables, sin darse cuenta de que el objeto de nuestras predicaciones son las estructuras, las causas y los efectos sociales más profundos, y no los eventuales “actores”, cuyo simple recambio o eventual ascenso poca mella le hacen a la reproducción social.

Así como en otras cuestiones de la vida humana, las “deudas sociales” que atraviesan a nuestra sociedad son responsabilidad de todos y no de algunos; aunque algunos, sin duda, sean los que más deben desprenderse o compartir para poder superarla. Un cambio social profundo requiere de modificaciones

en las condiciones materiales, sociales y simbólicas de reproducción social, tanto nacionales como internacionales. Una tarea que demanda la participación de actores, voluntades e intereses colectivos. Nuestra concepción de la historia se funda en la idea de que no cabe suponer detrás de los procesos históricos acciones individuales o sectoriales aisladas capaces de definir el curso de la vida social. Para que haya cambios reales es menester un ideario y un compromiso colectivo, acorde a las dificultades y los desafíos que presenta cada momento de la historia. Las personas son importantes, pero mucho más lo son los lazos sociales que motivan, estructuran y hacen posible su existencia. Sin duda, los hechos son el resultado de acciones intencionadas; pero los resultados no son imputables subjetivamente ni de manera directa a la voluntad de alguna persona, grupo político o económico.

Es por lo tanto fundamental para el Observatorio de la Deuda Social Argentina hacer explícito, una vez más, que el objetivo de sus investigaciones no es evaluar a los dirigentes ni juzgar su desempeño. Nuestra misión es otra, no tan lineal, mucho más compleja, no menos política ni menos comprometida con la sociedad que tenemos y con la que soñamos: dar cuenta de las deudas sociales que afectan, frenan o violentan los procesos de desarrollo e integración humana y social en nuestro país, con el fin de que formen parte de nuestra agenda política, social y cultural. En cuanto sociedad y en cuanto actores colectivos, cargados de ideas y voluntades, somos responsables del presente, del pasado y, ante todo, del futuro que espera nuestra intervención humana.

En tal sentido, el período del Bicentenario 2010-2016 constituye un momento histórico convocante para mantener viva la conciencia, renovar la responsabilidad y potenciar la acción colectiva con el propósito de procurar una sociedad más justa, solidaria e integrada. Estas son nuestras intenciones. Los sistemas teóricos en que se basan nuestras investigaciones, así como la metodología empleada, constituyen los medios para servir a tal cometido. Sin duda, nos podemos equivocar, no somos portadores de “verdades” absolutas, ni tampoco traficantes de “engaños”. Nuestra misión es elaborar, siguiendo los métodos de las ciencias sociales, una serie de aproximaciones realistas, objetivas y profundas sobre los problemas que afectan nuestra vida social con el fin de tomar

conciencia de ellos y que la sociedad y sus dirigentes puedan actuar en consecuencia.

LOS ESPACIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL

La mayor parte de los estudios actuales sobre desarrollo humano se orientan a una representación del progreso social vinculado al concepto de “calidad de vida” en un sentido amplio. No obstante, si bien esta perspectiva es superadora de los enfoques economicistas clásicos, puede ser insuficiente cuando se asume que el desarrollo es parte de un proceso histórico, de por sí inseparable del contexto sociocultural constitutivo de cada sociedad.

En el marco de este debate, el programa Observatorio de la Deuda Social Argentina ha definido la “Deuda Social” como el conjunto de privaciones económicas, sociales, políticas, psicosociales y culturales que recortan, frustran o limitan el progreso histórico de las necesidades y capacidades de desarrollo humano y de integración social de nuestra sociedad. Tal como se ha explicitado en otros trabajos, esta perspectiva se apoya en tres líneas de antecedentes: a) los enfoques interdisciplinarios del desarrollo humano; b) las teorías sobre las estructuraciones socioeconómicas; y c) el enfoque normativo de los derechos sociales.¹

Al respecto, cobran particular relevancia los derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales de las poblaciones a vivir una vida digna y libre de pobreza. Desde esta perspectiva, las estructuras sociales deben posibilitar un efectivo ejercicio de tales derechos, de suerte que pueda garantizarse el desarrollo de las capacidades humanas y sociales de manera integral.² Dicho en otros términos, todos los seres humanos tienen el derecho de acceder a están-

1 Una serie de anteriores trabajos realizados en el marco del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina ha ido confluyendo en este resultado. Al respecto, pueden consultarse Tami y Salvia (2005), Salvia (2006), Salvia y Lépre (2008) y Salvia (2011a y 2011b).

2 En el informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina, Bicentenario (2010-2016), Año I (Salvia *et al.*, 2011), la figura 1.2.1 da cuenta –desde la perspectiva de los temas que aborda el ODSA– de los principales vínculos conceptuales identificados entre la pobreza de desarrollo humano y la violación de derechos sociales.

dares mínimos de bienestar e integración en razón de su condición humana, independientemente de cualquier situación económica, política, étnica, social o cultural. Por lo tanto, el desarrollo de las capacidades humanas y sociales exige el acceso seguro de la población a una serie de condiciones materiales, sociales y simbólicas que conciernen a la protección, conservación, reproducción y desarrollo social. Es decir, se trata no solo de preservar la vida de manera sustentable, sino también de acceder efectivamente a las condiciones justas de autonomía, integración y realización humana que lo permitan.³

De este modo, tanto el avance de la teoría social como el progreso de los derechos humanos posibilitan la elaboración de un “listado” de dimensiones / indicadores básicos que deben ser evaluados para examinar el desarrollo humano y social en cualquier sociedad. Por otra parte, el examen de la normativa internacional en materia social, incluida la propia doctrina social de la Iglesia Católica, permite reconocer derechos fundamentales de las personas y de los pueblos, cuyo sentido práctico, en términos de medios comunes asociados a fines humanos valiosos, hacen exigible su ejercicio cualquiera sea el contexto donde se apliquen.

En función de atender los desafíos teórico-metodológicos que convoca el estudio sistemático de las dimensiones sociales del desarrollo humano y social, desde un enfoque de derechos es importante responder al menos tres cuestiones: a) ¿cuáles son los conceptos e indicadores válidos y confiables para medir el desarrollo de las capacidades humanas en términos de funcionamientos y satisfactores necesarios?; b) ¿a partir de cuáles umbrales corresponde juzgar si se cumple con los parámetros mínimos establecidos en cada caso?; y c) ¿cuál es el mejor método para medir, monitorear y evaluar los cambios en el estado del desarrollo humano y social bajo tales criterios teórico-metodológicos?

Dar respuesta a estas preguntas implica fijar los funcionamientos sociales necesariamente presentes para la identificación de la población afectada en sus derechos sociales. Es decir, una vez identificadas las

necesidades y los funcionamientos básicos para el desarrollo de las capacidades humanas y sociales, es menester fijar aquellos “mínimos” a partir de los cuales se violentan tales capacidades. En tal sentido, la distancia presentada por las condiciones de vida de una persona, familia o grupo con respecto a una serie de parámetros que fijan las condiciones, recursos y realizaciones mínimas, según estándares normativos vigentes, habrá de constituir una medida válida de la “Deuda Social”.

En otras palabras, para lograr un estado justo de desarrollo humano, los sistemas sociales deben garantizar a todas las personas, familias y grupos sociales un acceso seguro a los satisfactores y funcionamientos considerados “mínimos necesarios” para el sostenimiento y desarrollo de una vida digna “cada vez más” humana, acorde a los derechos sociales que velan por su cumplimiento. La identificación de umbrales “mínimos” a partir de las privaciones relativas ofrece criterios válidos para la identificación de situaciones de déficit correspondientes a una necesidad / capacidad determinada, según los estándares normativos, sociales y culturales de una sociedad.⁴ Así, la “deuda social” no solo comprende las privaciones “absolutas” a las que se ve sometida parcial o totalmente la población, sino también los despojos, impedimentos o carencias de carácter “relativo” que, según una norma social, implican una distribución desigual de capacidades de acceso a recursos y a satisfactores existentes, sean estos materiales, psicosociales o político-institucionales.⁵

Las consideraciones precedentes determinan las dimensiones implicadas a la hora de evaluar las “deudas sociales” en materia de desarrollo humano

4 Una contribución importante en esta misma línea se encuentra en los aportes realizados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH, 2002, 2004), pues la misma viene desarrollando durante los últimos años un gran esfuerzo de elaboración dirigido a formular un marco de referencia que permita establecer un enfoque de derechos humanos aplicado a las estrategias de reducción de la pobreza. Al respecto, se sostiene que el estudio de la dimensión de la pobreza incluye un reconocimiento explícito del marco normativo de los derechos sociales involucrados.

5 Aunque el criterio normativo está formalmente en contradicción con la concepción que define la pobreza como una privación de carácter relativo (Townsend, 1979, 1995), según la cual las necesidades dependen de la cultura y el grado de desarrollo de una sociedad o un grupo dentro de ella, este último enfoque ofrece interesantes posibilidades cuando se lo utiliza para la definición de los umbrales mínimos fundados en derechos de equidad.

3 En este sentido, estos elementos resultan fundamentales para que las personas puedan acceder a condiciones que aseguren una vida digna como miembros activos de una comunidad económica, social y política. Se trata de “condiciones sin las cuales los seres humanos no pueden sobrevivir, evitar la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento” (Allardt, 1996:127).

y social. Para ello, la estrategia de esta investigación consiste en establecer un conjunto de satisfactores / funcionamientos sociales fundamentales que deben cumplirse según los derechos correspondientes. Resulta necesario, por consiguiente, especificar los indicadores respectivos que midan las privaciones en términos de presencia o ausencia de tales realizaciones, y no solo de recursos indirectos o de satisfactores directos a los cuales se puede o no acceder. Desde este enfoque, tanto las condiciones materiales de vida como las de integración humana y social constituyen ámbitos fundamentales donde evaluar, de forma multidimensional, el grado en que las personas, los grupos y las comunidades logran ejercer sus derechos, desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades humanas con autonomía de gestión y como miembros activos de un sistema de organización económica, social y política de carácter colectivo.⁶

Al igual que en las primeras ediciones del Barómetro de la Deuda Social Argentina, y acorde con los argumentos teóricos planteados, el campo de análisis de las necesidades humanas y sociales no puede ser abordado de manera unidimensional, por lo que corresponde distinguir dos niveles de condiciones: a) las condiciones materiales de vida, y b) las condiciones de integración humana y social. Ambas constituyen un espacio integrado y válido de evaluación del nivel de desarrollo humano y social alcanzado por la Argentina contemporánea, además de su evolución histórica; motivo por el cual la Serie Bicentenario (2010-2016) vuelve a incluir estas dimensiones en la investigación.

El primer nivel de condiciones, abordado en los capítulos 1 y 2 de este libro, reconoce una serie de funcionamientos que son de carácter material o que requieren de satisfactores socioeconómicos para su cumplimiento. El espacio de las condiciones materiales de vida remite, en efecto, a una serie de necesidades que requieren de satisfactores económicos,

los que bien pueden ser generados por los propios hogares o por los mercados y distribuidos por el Estado-comunidad de manera subsidiaria. Se trata de recursos y satisfactores materiales y sociales sin los cuales los seres humanos no pueden garantizar su subsistencia, desarrollar funcionamientos básicos, relacionarse con otras personas y evitar la exclusión social (alimentación, ingresos de subsistencia y condiciones del hábitat).

El segundo nivel de condiciones, analizado en los capítulos 3, 4 y 5, reconoce una serie de funcionamientos psicosociales, relacionales, políticos y ciudadanos requeridos para el bienestar subjetivo y la adecuada integración de las personas a la vida económica, social y comunitaria. El espacio de la integración social se expresa, esencialmente, con el florecimiento de las capacidades relacionales y psicosociales del desarrollo humano. Desde esta perspectiva, la integración se concreta con el rango de oportunidades que ofrece la vida colectiva a nivel económico-ocupacional, psicosocial, cultural, así como en el plano de la integridad personal, la confianza comunitaria, la participación política y la libertad ciudadana, entre otros factores.

EL ESPACIO DE LAS CONDICIONES MATERIALES DE VIDA

El análisis de las condiciones materiales de vida implica la evaluación de un conjunto de funcionamientos asociados a fuentes de bienestar material (acceso seguro a los servicios y consumo razonable de bienes básicos, resguardo de los recursos económicos suficientes para el sostenimiento de la vida bajo condiciones de hábitat dignas, acceso a medios públicos de inclusión social) cuya realización se halla tanto en el ámbito público como en el privado. Si bien se incluyen indicadores de ingresos monetarios, la definición de desarrollo humano y social utilizada es mucho más compleja y abarca una serie amplia de satisfactores económicos y realizaciones materiales por parte de los hogares. En esta dimensión de análisis, se distinguen dos aspectos básicos que agrupan aquellos indicadores relacionados con las condiciones materiales para el desarrollo humano desde la perspectiva de derechos: a) las capacidades de subsistencia económica de los hogares; y b) las condiciones de vida en el hábitat urbano (ver figura A).

⁶ La diferenciación entre condiciones materiales y aspectos vinculados a la integración humana y social se encuentra ampliamente referenciada en el marco teórico del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, así como en las investigaciones e informes realizados desde 2005 hasta la fecha. Pueden consultarse los Informes del Barómetro de la Deuda Social Argentina (2004-2009) números 1 a 6 y números I y II de la Serie Bicentenario (2010-2016) en: <http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/investigacion/programa-observatorio-de-la-deuda-social-argentina/publicaciones/informes/>.

FIGURA A

ASPECTOS BÁSICOS QUE COMPRENEN LAS CONDICIONES MATERIALES DEL DESARROLLO HUMANO A NIVEL DE LOS HOGARES

CAPACIDADES DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA

- » INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
- » LOS INGRESOS MONETARIOS Y LA CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA
- » CAPACIDADES DE CONSUMO Y AHORRO DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA
- » LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SU FUNCIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS HOGARES

CONDICIONES DE VIDA EN EL HÁBITAT URBANO

- » VIVIENDA DIGNA
- » SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED
- » INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA
- » CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES

EL ESPACIO DE LAS CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL

En el espacio de la integración humana y social se considera que las expresiones básicas se refieren a las capacidades productivas, biológico-psicológicas y político-ciudadanas, de manera que incluyen un conjunto de funcionamientos asociados a fuentes de bienestar social (tanto materiales como simbólicas) que encuentran su realización especialmente en el espacio público a través de las oportunidades de empleo, la inversión social y el fortalecimiento de las instituciones sociales, culturales y políticas comunitarias.

Se evalúa de manera particular, en esta dimensión, el grado razonable de bienestar psicológico-emocional de las personas, expresado en la existencia de recursos psicosociales, el acceso adecuado a los servicios de salud biológica y psicológica, la disposición de vínculos sociales que sirvan de apoyo mutuo y la impresión personal que tienen sobre el neurálgico tema de la situación de seguridad. Asimismo, se examinan los elementos considerados indispensables para el buen funcionamiento de la democracia representativa: las condiciones de credibilidad de las instituciones políticas y sociales, la per-

cepción ante el sistema de gobierno, los medios de acceso a la información y la efectiva participación ciudadana a través de los canales ideados para tal fin. Aquí se distinguen tres dimensiones básicas que agrupan los indicadores examinados de integración humana y social: a) los satisfactores laborales y de protección social; b) el acceso a los sistemas de salud y desarrollo de capacidades biológico-psicológicas; y c) la vida democrática, la confianza institucional y la participación ciudadana (ver figura B).

FIGURA B

ASPECTOS BÁSICOS QUE COMPRENEN LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO HUMANO A NIVEL DE LA POBLACIÓN

SATISFACTORES LABORALES Y DE PROTECCIÓN

- » PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO
- » CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO
- » PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
- » INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO

SALUD, RECURSOS PSICOLÓGICOS Y VIDA SOCIAL

- » ESTADO, ATENCIÓN Y HÁBITOS QUE DETERIORAN LA SALUD
- » RECURSOS PSICOLÓGICOS PARA EL BIENESTAR SUBJETIVO
- » CAPACIDADES SOCIALES DE AGENCIA

CULTURA DEMOCRÁTICA Y VIDA CIUDADANA

- » PREFERENCIAS, CONFORMIDAD Y ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA
- » CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES CIUDADANAS
- » PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES POLÍTICAS, SOCIALES Y SOLIDARIAS
- » SEGURIDAD CIUDADANA E INTEGRIDAD CORPORAL

Como en las ediciones anteriores del Barómetro de la Deuda Social Argentina, la evaluación del estado, características y evolución reciente de la “Deuda Social” en nuestro país –en cuanto privaciones en las capacidades de desarrollo humano e integración social– se hace a través de un análisis estadístico sistemático de estas dimensiones y sus indicadores. Metodológicamente se aplican dos tipos de ejercicios: (a) se comparan en el tiempo los alcances que presentan las privaciones en relación con los estándares normativos

de funcionamientos mínimos, y (b) se comparan las privaciones relativas entre diferentes grupos o sectores sociales, por ejemplo, el que predomina en alguna categoría social aventajada (los sectores socioeconómicos mejor ubicados en la estructura social).

En general, las privaciones o logros referidos por los indicadores se miden en términos de nivel de incidencia, es decir, en porcentaje de hogares o de población de 18 años y más por debajo o arriba de los umbrales mínimos establecidos en cada caso. La lista de indicadores utilizados en cada espacio y por dimensión se despliega en la presentación teórico-metodológica de cada capítulo.

A partir del año 2010, el Barómetro de la Deuda Social ha ampliado el estudio de estos temas a partir de una serie de indicadores relevados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina, Período del Bicentenario 2010-2016 (EDSA-Bicentenario). En todos los casos, las medidas elaboradas representan las condiciones de desarrollo humano y social de los hogares y de la población de diferentes regiones urbanas. En particular, esta nueva encuesta se aplicó en el cuarto trimestre de 2012 a una muestra probabilística estratificada con 5.689 hogares urbanos válidos, relevándose información sistemática sobre el barrio/vecindario, la vivienda, el hogar y las personas que habitan el hogar.⁷

A través de este diseño teórico-metodológico, los capítulos reunidos en este libro ofrecen al lector un balance comparativo detallado del grado en que se encuentran afectadas y han evolucionado las condiciones de desarrollo humano e integración social durante el período reciente 2010-2011-2012. En todos los casos, este análisis se especifica para distintas categorías sociodemográficas, socioeconómicas y residenciales, las cuales buscan representar la desigual distribución de posiciones, recursos y atributos socioeconómicos y socioculturales en la población ur-

ba. En tal sentido, los capítulos contienen un análisis comparativo de los niveles de incidencia, brechas de desigualdad y diferencias sociales fundamentales para las variables e índices utilizados, así como de los porcentajes que presentan los indicadores de privación que conforman cada dimensión de estudio.

UN BALANCE NECESARIO AL TERECER AÑO DEL BICENTENARIO Y LA AGENDA PENDIENTE

La serie de estudios realizados por los informes del Barómetro de la Deuda Social Argentina entre 2004 y 2010 tuvieron siempre el objetivo evaluar desde una perspectiva integral la evolución de las condiciones de desarrollo humano e integración social de la población urbana del país. Sin duda, cada vez más lejos de la profunda crisis experimentada por nuestra sociedad en los primeros años del milenio, el núcleo problemático que fue atravesando los diferentes informes puede resumirse en la pregunta: ¿en qué medida el crecimiento económico, la ampliación de los derechos sociales y las mejoras en las políticas públicas promovidas durante la última década impactaron de manera positiva en el desarrollo humano y en una más justa distribución de las capacidades de integración social para el conjunto de la población?

Después de la crisis 2001-2002 no cabe duda que el desempeño económico tuvo un papel fundamental en la reducción de la pobreza, la normalización institucional y la recuperación de la confianza. Ello fue posible principalmente en virtud del crecimiento de la economía, la recuperación del empleo y el aumento de las remuneraciones reales de los trabajadores formales, así como también gracias a un importante esfuerzo de transferencia de ingresos a través del gasto social por parte del Estado. Sin embargo, no todos los sectores sociales lograron beneficiarse de la misma forma, ni dicha política logró, tal como sabemos, una plena incorporación de la población “sobrante” al modelo productivo. En este contexto, a pesar del crecimiento y la caída del desempleo, la desigualdad no cedió terreno.

Esta etapa de gran recuperación económica y político-institucional mostró sus primeros signos problemáticos en el año 2007, cuando se aceleró el proceso inflacionario y se frenó la creación de empleos productivos. A ese proceso le siguió una primera retrac-

⁷ Dado el tipo de muestra empleada, las estimaciones son generalizables a la totalidad de los hogares o a la población adulta con residencia en ciudades del país con 80.000 habitantes o más. Resultando los aglomerados urbanos considerados por la muestra: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia. Para mayor información sobre el diseño y el tamaño muestral, cobertura geográfica, representatividad estadística y otras características de la Encuesta de la Deuda Social Argentina del Bicentenario, véase el Anexo Metodológico de esta misma publicación.

ción y un reflujo en las expectativas sociales durante la primera parte de 2008. A fines de ese año y durante buena parte de 2009, los efectos internos de la crisis financiera internacional afectaron directamente la actividad económica e impusieron mayores barreras a la movilidad social de los sectores más pobres. A finales de 2009, se inició una sensible recuperación de la economía, alcanzando una tasa de crecimiento elevada durante 2010 y 2011, aunque bajo un persistente proceso inflacionario. Al mismo tiempo, con el objetivo de paliar los problemas de ingresos de amplios sectores en condiciones de marginalidad laboral, el Estado nacional amplió las transferencias de ingresos a dichos sectores, tanto a través de un nuevo diseño de programas sociales de empleo (Argentina Trabaja), como, sobre todo, mediante una más universal asistencia económica no contributiva a hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años (la Asignación Universal por Hijo).

Con todo, a partir de 2012 el crecimiento nuevamente se detuvo; la generación de empleo pleno se estancó y la inflación continuó en ascenso. A pesar de algunas medidas de ajustes, se mantuvo la política de subsidios y se tomaron otras medidas orientadas a evitar un mayor costo social. En esa secuencia, aun cuando continuó aumentando el gasto social, la marginalidad estructural se ha constituido en un núcleo duro de excluidos, al mismo tiempo que volvió a aumentar la pobreza por ingresos.

En este contexto, quedó constatado que una parte importante de la sociedad continúa siendo “población sobrante”, carente de condiciones dignas de subsistencia económica e integración social. Por lo tanto, si bien nuestras investigaciones nunca dejaron de mostrar tanto los avances como los retrocesos logrados en este campo, la investigación interdisciplinaria ha ido demostrando que, más allá de las buenas intenciones y los pocos o muchos esfuerzos realizados a nivel gubernamental para resolver estos problemas, persiste un orden económico, social y cultural profundamente desigual, el cual hace inalcanzable el desarrollo humano, la integración cultural y la movilidad social a vastos sectores de la sociedad. Al respecto, parece confirmarse una y otra vez que, junto a una importante mejora de los indicadores económicos y sociales lograda sobre una recuperada y extensa franja de sectores populares y medios, el consumo y la asistencia pública en au-

mento no logran resolver la trampa en materia de desigualdad, generando un crecimiento que es voraz para algunos y miserable para otros.

De ahí que el monitoreo sistemático y la información académica actualizada sobre el estado de situación que atraviesa la cuestión social constituyan tareas imprescindibles para permitir el debate acerca de las prioridades sociales y el conocimiento objetivo de las condiciones de partida para cualquier proyecto estratégico de desarrollo. Una pregunta de alcance crucial resulta obligada en este marco: ¿en qué medida se encuentran fortalecidas o disminuidas las capacidades políticas y sociales para acompañar este proceso histórico en función de hacer posible un cambio económico, político y social hacia un modelo de sociedad más justa y equitativa?

Si bien no es este el lugar para ensayar una respuesta a este interrogante, es dable señalar que el presente estudio ofrece evidencias y algunas pistas sobre las posibilidades y debilidades que brinda nuestro país al respecto. Sin embargo, un hecho que también merece ser destacado, lamentablemente, es que la información oficial no ofrece la confianza necesaria para presentar, en un diálogo abierto, los temas que demanda la agenda social. Esta contrariedad, aunque parezca un hecho secundario, no deja de ser un signo de los problemas que organizan el tiempo político-institucional en nuestro país. Más allá de los problemas de credibilidad que implican para el relato oficial carecer de estadísticas públicas transparentes y confiables en materia socioeconómica, tal ausencia ilustra tanto la dificultad como sociedad para discutir, consensuar y coordinar políticas de Estado, como para reconocer la responsabilidad que tenemos todos –aunque unos más que otros– hacia la compleja realidad de la pobreza, en sus múltiples causas, consecuencias y manifestaciones

Es ante estos desafíos que cobra valor específico la presente investigación, por cuanto ofrece a la sociedad hipótesis, hallazgos y evidencias plausibles sobre el estado y la evolución del estado del desarrollo humano y la integración social en nuestro país durante los primeros tres años de esta nueva oportunidad histórica que abre el período del Bicentenario 2010-2016. Está en el centro de las motivaciones de los investigadores del Observatorio de la Deuda Social Argentina contribuir a la superación de estos problemas de manera profesional, honesta y comprometida.

RESUMEN EJECUTIVO

DESAJUSTES EN EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (2010-2011-2012)

CAPÍTULO 1: CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA DE LOS HOGARES

La evolución de la inseguridad alimentaria total descendió de 13% a 11,7% entre los años 2010 y 2012, principalmente debido a la caída de la inseguridad alimentaria moderada. Las mayores probabilidades de presentar inseguridad alimentaria durante el mismo período se concentraron tanto en los hogares con niños como en aquellos con jefes en empleos precarios o subempleados y de estrato socioeconómico muy bajo. Asimismo, se destaca el hecho de que aun cuando 2012 fue un año recesivo, la inseguridad alimentaria no se agravó, lo cual puede explicarse –entre otros factores– por la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la permanencia de otros programas sociales que actuaron como un seguro ante la posible inestabilidad en el acceso a la alimentación.

Entre los años 2010 y 2012 la pobreza medida a través del enfoque de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) no presentó cambios significativos. Simultáneamente, las desigualdades sociales se mantuvieron similares a lo largo del período, en tanto que fueron los hogares de jefes en empleos precarios o subempleados, con niños, del estrato social muy bajo y de villas o asentamientos precarios los que presentaron los valores más altos de déficit. En este sentido, se puede inferir que las medidas económicas señaladas no resultaron suficientes para revertir las condiciones de vulnerabilidad estructural en la que se encuentra al menos 1 de cada 10 hogares en la Argentina.

Entre los años 2010 y 2012 los ingresos totales familiares y per cápita a valores constantes evidenciaron un incremento moderado, el cual se explica íntegramente por la suba exhibida entre 2010 y 2011, puesto que entre 2011 y 2012, en un contexto recesivo, de elevada inflación e intensificación de la problemática laboral, los ingresos de los hogares perdieron capacidad adquisitiva. En lo que respecta a las brechas de desigualdad existentes en la distribución de los recursos monetarios, las mismas se mantuvieron aproximadamente con igual intensidad durante el período bajo análisis. Los hogares con jefe en empleo precario-subempleo, con niños, pertenecientes al estrato más bajo y localizados en villas o asentamientos continuaron presentando ingresos familiares totales y per cápita inferiores al promedio.

Cualquiera sea el valor empleado, las tasas de indigencia experimentaron una caída durante todo el período 2010-2012. Esto se explica por los aumentos de los montos que brindan los programas sociales de transferencia de ingresos (AUH principalmente), pues es válido recordar que la mayor parte del presupuesto de los hogares de más bajos ingresos está formada por este tipo de ayudas económicas. Por otro lado, el descenso de la tasa de indigencia se explicaría por el aumento del subempleo de subsistencia (una mayor auto-explotación de la fuerza de trabajo familiar). Sin embargo, es de resaltar que más allá de la mejora exhibida en este indicador, existe aún un importante porcentaje de hogares y población en situación de marginalidad económica estructural.

Las tasas de pobreza estimadas mediante el uso de canastas no oficiales habrían aumentado entre 2011 y

2012, aunque todavía alcanzando valores inferiores a los que presentaba en 2010. Así pues, tanto estos hogares como aquellos que están levemente por encima de la línea pobreza habrían experimentado una caída en sus ingresos reales debido a la retracción del mercado informal y de las remuneraciones que se estipulan en el mismo. En definitiva, los mayores riesgos de caer en situación de indigencia y pobreza continúan concentrándose en los hogares cuyo jefe tiene un trabajo precario o problemas de subempleo, en aquellos con presencia de niños y en unidades domésticas que integran el estrato más bajo (25% inferior) o se localizan en villas o asentamientos precarios.

En cuanto a la insuficiencia de ingresos evaluada desde una perspectiva subjetiva, si bien se observa un retroceso durante el período 2010-2011, se percibe un incremento entre 2011 y 2012. Del mismo modo que lo señalado para los indicadores de ingreso promedio y tasas de indigencia/pobreza, la percepción subjetiva del nivel de ingresos se halla fuertemente vinculada a características socioeconómicas del hogar y al tipo de inserción de los individuos en el mercado laboral. En línea con estos resultados, la capacidad de ahorro de los hogares, luego de verse fortalecida en el período 2010-2011, exhibió una reducción significativa en 2012. Previsiblemente, los hogares con más posibilidades de ahorro mostraron ser aquellos cuyo principal sostén económico se encontraba desarrollando un empleo de buena calidad, las unidades domésticas integradas solamente por adultos, las familias del estrato medio alto y las que residían en los mejores barrios dentro de la traza urbana formal.

Entre los años 2010 y 2012, el porcentaje de hogares beneficiarios de programas sociales aumentó del 19,8% al 23,5%. La recepción de transferencias económicas se evidenció principalmente en los hogares con niños, con jefes en situación de precariedad laboral, pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo y los localizados en villas o asentamientos precarios de los aglomerados urbanos del interior del país. Por su parte, la asistencia social a los hogares en situación de pobreza reveló un aumento sostenido entre 2010 y 2012, pues el porcentaje de hogares con programas sociales subió del 50,6% al 57,6%. Al respecto, la recepción de ayudas se concentró principalmente en los siguientes hogares: con niños, cuyos jefes eran mujeres, en situación de precariedad laboral o desempleo, pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo y los ubicados en barrios con trazado

urbano de nivel socioeconómico bajo o villas y asentamientos. Dentro de los hogares pobres, el aglomerado urbano fue un factor que no incidió en las posibilidades de recibir programas sociales.

El análisis del perfil presentado por los hogares pobres que no percibieron transferencias económicas puso de relieve la alta vulnerabilidad social que padecen los hogares con niños, en los que sus jefes no terminan la secundaria y están insertos de manera precaria en el mercado laboral. Asimismo, los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo, localizados en barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo del Gran Buenos Aires (principalmente el Conurbano Bonaerense), evidenciaron la menor recepción de asistencia social, aun cuando se los considere hogares con insuficiencia económica (por debajo de la línea de pobreza).

CAPÍTULO 2: HÁBITAT, DESARROLLO URBANO Y DERECHO A LA CIUDAD EN LA ARGENTINA DEL BICENTENARIO

La situación de acceso a una vivienda digna registró una ligera mejora entre los años 2010 y 2012, experimentando cada indicador una evolución particular. A lo largo de los tres años bajo análisis se produjo una leve reducción de la tenencia irregular de la vivienda: del 13,5% de los hogares en 2010, pasó al 12,4% en 2012, alcanzando en este último año de la serie al 14,2% de la población residente en los grandes centros urbanos del país. A su vez, en la totalidad del período analizado, los hogares con niños duplicaron la tenencia irregular en comparación con aquellos otros donde no había presencia de menores (17,6% y 7,6%, respectivamente, en 2012). No se apreciaron variaciones significativas en el estrato más pobre de los hogares (alrededor del 25% a lo largo del período); y particularmente en 2012, más de la mitad de los habitantes de hogares ubicados en villas y asentamientos precarios reconocían no ser propietarios ni inquilinos de la vivienda donde residían, frente a tan solo el 5,1% de aquellos otros situados en los mejores barrios.

Entre 2010 y 2012 se produjo un descenso de 3,1 puntos porcentuales (p.p.) en los hogares cuyos habitantes manifestaban temor a perder la vivienda, pasando del 10,2% al 7,1% (equivalente en el último año de la serie al 6,7% de la población urbana adulta).

Como es de esperar, tal temor se registró mayormente en los hogares que alquilaban (en 2012, el 11,6%) o que se hallaban bajo una modalidad irregular de tenencia (en 2012, el 18,1%). No obstante, a lo largo de la serie en ambos grupos se apreció una reducción considerable de este indicador.

La problemática de las viviendas precarias, que resulta persistente en el tiempo, casi no experimentó modificaciones sustantivas entre 2010 y 2012, alcanzando hacia el final del período a poco más del 11% de los hogares urbanos, lo que en términos de personas equivalía a cerca del 13% de la población. En 2012 habitaba en viviendas precarias el 19,2% de los hogares cuyo jefe se hallaba en situación de precariedad laboral, frente a tan solo el 6,5% de aquellos donde el principal sostén económico contaba con un empleo pleno. Por su parte, durante los tres años analizados, el valor del indicador que da cuenta de la precariedad material de la vivienda doblaba en los hogares con niños al de aquellos sin presencia de menores (16% y 7,1%, respectivamente, en 2012). En cuanto al estrato socioeconómico, mientras en el segmento más aventajado de la sociedad el indicador no superó el 2% a lo largo de la serie, en el estrato inferior experimentó una ligera reducción, si bien en 2012 seguía habitando viviendas precarias el 25,8% de estos hogares y el 42,1% de las familias alojadas en villas y asentamientos precarios.

A similares conclusiones se arriba cuando se examina el porcentaje de hogares sin baño, retrete o sin descarga mecánica de agua. Entre 2010 y 2012 este indicador se mantuvo constante, alcanzando al 8,7% de las familias y al 9,3% de la población en el último año analizado. A su vez, también en 2012, la ausencia de este tipo de recurso llegó al 12,5% de los hogares con niños y adolescentes, al 24% de aquellos pertenecientes al estrato socioeconómico más pobre o localizados en villas y asentamientos precarios. En todos los casos, las variaciones entre ambos años extremos de la serie resultaron por demás acotadas.

Entre 2010 y 2012 se produjo una ligera reducción del hacinamiento medio (3 o más personas por cuarto habitable) al pasar del 7,5% al 7% de los hogares, registro que en el último año de la serie implicaba al 11,3% de la población urbana. Dado que se trata de un indicador estrechamente vinculado con la presencia de menores en la vivienda, donde no los había prácticamente no se registró hacinamiento alguno, mientras que en aquellos hogares en los que sí vivían

niños y adolescentes se produjo una leve retracción, ubicándose en el 13,7% en 2012. En el mismo año esta problemática trepó al 15% de los hogares del estrato más pobre de la sociedad y al 19,7% de los ubicados en villas y asentamientos precarios.

En líneas generales, los datos relevados por la EDSA (Encuesta sobre la Deuda Social Argentina)-Bicentenario (2010-2016) permiten apreciar una leve mejora en materia de reducción del déficit de acceso a servicios domiciliarios de red, excepto por el de suministro eléctrico, lo que no implicó una disminución de la tasa de conexión, sino, fundamentalmente, un considerable empeoramiento en la calidad del servicio. En este sentido, mientras que en 2010 el 56,8% de los hogares reportó que durante los 12 meses previos había experimentado cortes o bajas frecuentes de tensión, en 2012 el indicador alcanzó al 71,5% de los hogares urbanos, lo que equivale a una tasa de incremento en la incidencia de esta problemática del 26% entre ambos años extremos de la serie. En términos de personas –ya no de hogares–, en el último año padecía cortes o bajas frecuentes de tensión eléctrica el 71,7% de la población. El principal deterioro de la calidad del suministro se produjo entre 2011 y 2012 y afectó fuertemente a los hogares con niños y adolescentes. No obstante, la problemática resulta tan generalizada, que las brechas con respecto a los demás tipos de hogar son mucho más acotadas que en otros indicadores de hábitat. Por ejemplo, mientras que en 2012 el 79,5% de los hogares más pobres sufrió cortes reiterados o bajas frecuentes de tensión, en el estrato medio alto el indicador alcanzó al 65,9%. Esta problemática también se registró en el 91,9% de quienes habitaban villas o asentamientos precarios, frente al 65,9% de aquellos otros que residían en los mejores barrios de la ciudad. Por último, el principal deterioro a lo largo de los tres años examinados se produjo en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, pasando del 53,6% de los hogares en 2010 al 73,6% en 2012.

La conexión a la red de agua corriente constituye un indicador sanitario de primer orden. Según los datos del presente estudio, entre 2010 y 2012 se evidenció un ligero retroceso del déficit, del 13,4% de los hogares urbanos al 12,9%, situación que en el último año de la serie abarcó al 13,4% de la población. Específicamente, en 2012 carecía de agua de red pública el 15,6% de los hogares con niños, el 61,3% de los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico más

pobre de la sociedad y el 68,6% de los situados en villas y asentamientos precarios. Por último, a lo largo del período bajo análisis, la falta de conexión a la red era mayor en el Gran Buenos Aires que en el resto del país; la principal reducción del déficit se produjo en el aglomerado más populoso, afectando en 2012 al 38,3% de sus unidades domésticas.

No obstante el indiscutible impacto sanitario de la red cloacal, así como también el atraso que en la Argentina tiene el desarrollo de este servicio urbano esencial, los datos relevados por la EDSA-Bicentenario muestran una paulatina disminución del déficit entre los años 2010 y 2012, pasando del 35,9% al 34,1% de los hogares urbanos, lo cual equivale a que durante el último año de la serie no contaba con este recurso el 37,3% de la población. En 2012 se vieron afectados por este problema el 41,6% de las familias con niños, el 61,3% de los hogares más pobres y el 68,6% de los localizados en villas o asentamientos precarios. Por otro lado, mientras que en el Resto Urbano Interior no se produjo modificación alguna entre los dos años extremos de la serie (26,3%), en el Gran Buenos Aires se computó una ligera reducción, pasando del 41,1% al 38,3% de los hogares.

La falta de inversión en materia de infraestructura energética del país, reflejada en un deterioro de la calidad del suministro eléctrico, se tradujo en el caso del gas natural domiciliario en que a lo largo de los tres años analizados prácticamente no varió el porcentaje de hogares sin conexión a este servicio esencial. Así, en 2012, esta problemática afectó al 26,8% de los hogares urbanos y al 30,8% de la población. Como en el resto de los servicios domiciliarios de red, este déficit impactó más sobre los hogares con niños (36,8%), duplicando el valor de los hogares sin presencia de menores. Las brechas según el estrato socioeconómico y la condición residencial no se vieron alteradas a lo largo de la serie. Particularmente en 2012 no contaba con conexión a la red de gas natural domiciliario el 56,8% de las unidades domésticas más pobres, frente a tan solo el 4,1% de aquellas que forman parte del estrato más alto; en tanto que el valor para las villas y asentamientos alcanzó al 83,4% en comparación con el 3,1% de las unidades domésticas emplazadas en los mejores barrios de la ciudad. Tampoco se modificó la brecha entre el Gran Buenos Aires y el Resto Urbano Interior, siendo afectado en el último año de la serie el 25,1% de los hogares del aglomerado más grande del país y el 29,9% de los localizados en el Resto Urbano.

En lo que respecta a la infraestructura urbana básica de la ciudad, los datos relevados muestran que entre 2010 y 2012 se produjo una muy leve reducción del porcentaje de hogares sin pavimento al frente de sus viviendas, cuando del 20,9% pasó al 19,5%, si bien en el último año de la serie implicó al 21,8% de la población. Concretamente, en 2012 este déficit alcanzó al 25,3% de las familias con niños, al 36% de los hogares más pobres y a más de la mitad de quienes habitaban en villas y asentamientos precarios, en comparación con apenas el 3,8% de los hogares emplazados en los barrios más urbanizados y con mayor poder adquisitivo de la ciudad. Por último, tanto en el Gran Buenos Aires como en el Resto Urbano Interior se evidenció una ligera disminución del déficit, pero en 2012 seguía sin pavimento al frente de su vivienda el 21,3% de los hogares del Gran Buenos Aires, frente al 16% de los situados en otras áreas urbanas del país.

La ausencia de alcantarillado y desagües pluviales, así como de un sistema integral de drenaje urbano, tiene múltiples consecuencias sanitarias y económicas que impactan en la vida cotidiana de los habitantes. Los datos arrojados por el presente estudio revelan que en el período bajo análisis, al nivel del total urbano, el porcentaje de hogares sin desagües pluviales al frente de sus viviendas se redujo del 32,2% al 30%. En 2012, no contaba con este recurso el 33,5% de la población; y específicamente en el caso de los hogares con niños y adolescentes, el indicador se ubicó en el 36,8%. Con relación a la estratificación socioeconómica, si bien las unidades domésticas más pobres y las localizadas en villas y asentamientos registraron una ligera reducción de sus niveles de déficit en este punto, las brechas con respecto a los hogares en mejor situación se incrementaron ligeramente, en razón de que también las unidades domésticas del estrato medio alto y de los mejores barrios de la urbanización experimentaron una mejora en materia de provisión de desagües pluviales. Aun así, durante 2012, el 53,8% de las familias más pobres y el 63,7% de las residentes en villas y asentamientos precarios no contaban con este importante recurso.

La presencia de terrenos y calles inundables, como se sabe, constituye un indicador indirecto del nivel de mantenimiento, mejora o deterioro de la infraestructura urbana básica. Pues bien, entre 2010 y 2012 se produjo un incremento de la incidencia de terrenos y calles inundables en las inmediaciones de las

viviendas, pasando del 28,9% al 31,3% de los hogares, y afectando en el último año al 32,4% de la población urbana. Dado que durante el período analizado se produjo una disminución del déficit de pavimento y desagües pluviales, como ya se ha dicho, parte del incremento de la presencia de terrenos y calles inundables se debió al aumento del caudal de precipitaciones experimentado fundamentalmente en 2012. Por lo general, las brechas entre las distintas categorías sociales examinadas se mantuvieron constantes en todas las variables de corte, si bien es de remarcar que en el último año la problemática afectó al 42,3% de los hogares del estrato más pobre y al 54,6% de los emplazados en villas y asentamientos precarios.

En la ciudad no se distribuyen únicamente recursos tales como viviendas, servicios, infraestructura o equipamiento, sino también condiciones ambientales. En este sentido, hay zonas y barrios que acceden a un medio ambiente más saludable, mientras que otros se encuentran afectados por problemas de contaminación y degradación ambiental. En líneas generales, los datos de la EDSA-Bicentenario revelan que mientras en el período 2010-2012 se produjo una ligera mejora en materia de acceso a una vivienda digna, así como a servicios domiciliarios de red y a infraestructura urbana básica, en el caso de las condiciones ambientales sucedió precisamente lo contrario.

Un serio problema, fundamentalmente de las grandes áreas metropolitanas, es la gestión de los residuos sólidos. Los datos reunidos en esta investigación muestran que entre 2010 y 2012 el porcentaje de hogares próximos a basurales ascendió del 18,7% al 20,7%, lo que en el último año de la serie equivalía al 22,1% de la población. En el caso de los hogares con niños, este indicador se incrementó también en dos puntos al pasar de 21,9% a 23,9% entre los años extremos de la serie. Por su parte, si bien la brecha entre el estrato medio alto y el muy bajo experimentó una ligera reducción, no fue así en cuanto a la condición residencial, pues en 2012 esta problemática ambiental afectó al 34,7% de las familias más pobres y al 62,1% de las que viven en villas y asentamientos precarios. Por último, la diferencia entre el Gran Buenos Aires y el Resto Urbano Interior prácticamente no se vio alterada (19,1% y 23,7%, respectivamente, en 2012).

Aun cuando la prevalencia de basurales se incrementó entre 2010 y 2012, los datos del presente estudio indican que a lo largo del trienio examinado se

produjo una ligera disminución del porcentaje de hogares próximos a fábricas e industrias contaminantes. No obstante, dado que la diferencia no resulta estadísticamente significativa, puede concluirse que, a grandes rasgos, el indicador se ha mantenido estable, en torno al 12% de los hogares y al 12,9% de la población urbana. Durante toda la serie, las categorías más afectadas fueron los hogares con niños y adolescentes (13,3%) y los pertenecientes al estrato más pobre (15,6%); en tanto que la brecha experimentó una ligera ampliación entre las unidades domésticas ubicadas en los mejores barrios de la ciudad (6,9% en 2012) y en las villas o asentamientos precarios (25%). En lo que respecta al aglomerado urbano, la diferencia también se mantuvo invariante, afectando en mayor grado a los hogares del Gran Buenos Aires (13,1%) en comparación con los del Resto Urbano Interior (9,3%).

De forma concordante con el incremento de basurales en las proximidades de las viviendas, también se produjo un aumento de la prevalencia de plagas urbanas. Al nivel del total urbano, entre 2010 y 2012 se registró un ligero incremento de los hogares afectados por esta problemática ambiental, pasando del 25,7% al 26,8% y alcanzando, en el último año de la serie, al 28,7% de la población. Los grupos sociales ya afectados por este tipo de problema fueron los que más lo sufrieron: el 30,8% de los hogares con niños, el 41% de los correspondientes al estrato muy bajo y el 62,7% de los localizados en villas y asentamientos. Por último, en lo tocante al aglomerado urbano, no solo el Resto Urbano Interior mostró niveles más elevados de déficit a lo largo de todo el período, sino que también experimentó el mayor incremento entre ambos años extremos de la serie. Así, en 2012 fue afectado por plagas urbanas el 30,7% de estos hogares, frente al 24,6% de los ubicados en el Gran Buenos Aires.

En el mismo período de análisis, al nivel del total urbano, la presencia de fuentes o espejos de agua contaminada en napas o en la superficie se mantuvo constante, sin una variación estadísticamente significativa. De este modo, en 2012 tal problemática afectó al 15,7% de los hogares urbanos y al 17,3% de las personas. Los grupos más vulnerables fueron los mismos que resultaron afectados por los indicadores precedentes: las familias con niños y adolescentes (19,6%), los hogares más pobres (25,5%, frente a tan solo el 5,6% de los del estrato socioeconómico medio alto) y los emplazados en villas y asenta-

mientos precarios (43,7%, frente a solo el 5,3% de las familias residentes en los barrios más pudientes de la ciudad). En 2012, el porcentaje de hogares del Gran Buenos Aires afectados por este problema de contaminación (18,9%) casi duplicó a los del Resto Urbano Interior (9,8%).

Entre los factores condicionantes del acceso a barrios o vecindarios con distinto grado de presencia de viviendas dignas, servicios domiciliarios de red, infraestructura urbana básica y condiciones ambientales saludables, más allá de las variables sociodemográficas –como el sexo o la educación del jefe de hogar– u otros atributos –la presencia o no de niños, por ejemplo–, en todos los casos se detectaron dos factores decisivos: uno, el lugar que los hogares ocupan en la estratificación socioeconómica; y dos, la distribución intraurbana que esta variable asume de acuerdo con el fenómeno de la segregación residencial socioeconómica. Esto último se traduce en el hecho de que, utilizando distintos modelos predictivos, en todos los casos el peso de las variables demográficas básicas y el propio nivel socioeconómico se reducen cuando se incorpora al análisis la condición residencial. Dicho en otros términos, el área o barrio de residencia determina en el hogar el acceso a mejores o peores condiciones de vivienda, servicios, infraestructura y atributos ambientales. A su vez, el Conurbano Bonaerense acumula un nivel de atraso en materia de urbanización que claramente condiciona las posibilidades de acceso a servicios domiciliarios de red e infraestructura urbana básica de calidad. Por último, dado que se trata de indicadores de carácter estructural cuya modificación en el tiempo resulta lenta, el peso que en el análisis de regresión asume la variable que remite al año del relevamiento es menor.

La nota de investigación 2.6 muestra que en las grandes áreas metropolitanas de la Argentina los hogares se asientan según un patrón de segregación residencial socioeconómica claramente identificable y mensurable. Esto es, más allá de que pudiera prevalecer un mayor o menor grado de desigualdad socioeconómica entre los hogares, estos no se encuentran mezclados en la ciudad, sino que tienden a asentarse próximos a otros con similares características socioeconómicas. Los aglomerados con mayores niveles de segregación residencial son el Gran Buenos Aires y el Gran Rosario, siendo este último donde el fenómeno en cuestión asume su menor intensidad.

CAPÍTULO 3: CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Entre 2010 y 2012, el porcentaje de población económicamente activa con empleo pleno de derechos descendió muy poco: de 44,5% a 44%; la desocupación, de 11,2% a 9,3%; mientras que el empleo precario se mantuvo en 35,3% y el subempleo inestable ascendió de 9% a 11,3%. Se evidenciaron en este aspecto la persistencia de un sector informal (que en 2012 alcanzó al 48,2% de los ocupados), la heterogeneidad de la estructura productiva y las limitadas posibilidades de acceso a un trabajo decente. En el marco de un mercado de trabajo segmentado, para el conjunto de los ocupados la marginalidad laboral afectó principalmente a los integrantes del hogar que no son jefes, a los jóvenes y a los adultos mayores, así como a los habitantes de villas o asentamientos precarios, a los residentes en el Gran Buenos Aires y a los que no culminaron los estudios secundarios.

La alta rotación entre períodos de empleo y desocupación continúa siendo preocupante. Entre 2010 y 2012, el porcentaje de activos que no tuvo continuidad laboral en el último año se mantuvo en valores cercanos al 24%, mientras que entre los ocupados se sostuvo la tendencia a demandar más horas de trabajo. Como posible consecuencia de los bajos ingresos horarios y de trabajos a tiempo parcial involuntarios, en todo el período analizado el porcentaje de ocupados que expresaron su necesidad de trabajar más horas aumentó de 23,8% a 26,1%, en tanto las condiciones laborales insatisfactorias determinaron que el porcentaje de ocupados con deseo de cambiar de trabajo se estabilizase en valores cercanos al 25%.

A pesar de las campañas para promover la registración laboral, entre 2010 y 2012 el porcentaje de ocupados sin realización de aportes al Sistema de Seguridad Social se incrementó de 47,2% a 49,4%. Dentro del grupo de asalariados, en el mismo lapso, la falta de registro laboral se estabilizó en valores cercanos al 30%, es decir que perduran en forma elevada las contrataciones laborales no declaradas. Por otro lado, las inserciones de baja calidad en las actividades por cuenta propia determinaron que el 72,4% de estos trabajadores no realizara sus aportes jubilatorios. La falta de participación en el Sistema de Seguridad So-

cial, que se encontró ampliamente extendida, se presentó además asociada a un factor estructural como es la inserción sectorial, siendo esto independiente de las características sociodemográficas, educativas e incluso socioeconómicas de los trabajadores.

La falta de participación en el Sistema de Seguridad Social condicionó el acceso a la cobertura de salud y limitó la asistencia médica de algunos trabajadores a los servicios brindados por el sistema público. Entre 2010 y 2012, sin embargo, disminuyó de 33,2% a 30,6% el porcentaje de ocupados carentes de cobertura de salud proveniente de obra social, mutual o prepaga (independientemente de si esta cobertura se originaba en forma personal o familiar). Por otra parte, la falta de afiliación sindical de los asalariados sigue siendo relativamente elevada. En 2012, un 58,2% los asalariados declararon no poseer afiliación a sindicatos. La determinación de las afiliaciones parece deberse a cuestiones estructurales y organizativas de las unidades de producción, así como a la historia laboral de los trabajadores adultos y la precariedad laboral.

Las dispares evoluciones de los ingresos laborales reales, según la fuente de origen del índice de actualización aplicado, evidencian la necesidad de seleccionar deflatores confiables para un análisis consistente de las retribuciones al trabajo. Con esta premisa, entre 2010 y 2012 la media de ingresos laborales mensuales registró un incremento de 3,6% (pasó de \$ 3.982 a \$ 4.127). En el mismo período se observa una importante disparidad en la evolución de los ingresos según la calidad del empleo: el promedio de ingresos mensuales de los trabajadores con empleo pleno de derechos aumentó el 4,2% (\$ 5.004 a \$ 5.215); el promedio de los de empleo precario, el 9,2% (pasó de \$ 3.236 a \$ 3.533); mientras que el de los ocupados en subempleos inestables disminuyó el 5% (\$ 1.850 a \$ 1.757).

Entre 2010 y 2012, los ingresos horarios mostraron una disminución real de 4,5% (pasando de \$ 33,5 a \$ 31,9), en tanto que las variaciones fueron dispares según la calidad del empleo: la media de ingreso horario de los trabajadores con empleo pleno de derechos disminuyó 5,9% (de \$ 38,4 a \$ 36,1); para los precarios, aumentó 2,1% (de \$ 30,5 a \$ 31,1); y para los trabajadores con subempleo inestable disminuyó 12% (de \$ 20,8 a \$ 18,3).

Por medio de los indicadores utilizados, en los tres años sometidos a análisis se verificó la hipótesis de

la existencia de condiciones de heterogeneidad en la estructura productiva y del funcionamiento segmentado del mercado de trabajo, dos componentes generadores de desigualdad e inequidad. En líneas generales, dicha realidad fue en desmedro de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los trabajadores sin secundario completo, los pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos y los residentes en villas o asentamientos precarios, así como en desmedro de los ocupados en el sector informal de la economía. Estos son los grupos sobre los que deben concentrarse las políticas públicas para lograr saldar las injusticias económicas y sociales con el propósito de evitar la cristalización de las inequidades.

CAPÍTULO 4: ESTADO Y ATENCIÓN DE LA SALUD, RECURSOS PSICOLÓGICOS Y CAPACIDADES SOCIALES

La percepción negativa del estado de salud aumentó levemente en el año 2012 con respecto al bienio 2010-2011. Entre el primer y último año los valores ascendieron según las características individuales, socioeconómicas y residenciales, demostrando un mayor déficit en la percepción del estado de salud. Las mujeres, los adultos mayores, los que no tienen un secundario completo y los que pertenecen a un estrato muy bajo fueron quienes más evidenciaron problemas de salud graves o crónicos. Además, el malestar psicológico fue un indicador casi estable a lo largo de la serie en estudio. Las personas encuestadas de género femenino y las de menor nivel educativo presentaron mayores déficits, en tanto que la brecha entre los habitantes más pobres y los más favorecidos económicamente fue notoria, posicionando a los primeros en un marcado deterioro de bienestar psicológico.

Aun cuando en la totalidad del período se observó, en todas las características, un descenso en la falta de atención médica, la no asistencia a un médico durante 2012 se manifestó más en los varones, los adultos menores de 60 años y en los habitantes de zonas residenciales precarias. Del total de los que dijeron haber realizado una consulta, aproximadamente el 30% mencionó que en dicha ocasión utilizó un sistema de salud público. Estos datos se presentan con mayor presencia en las mujeres, en los jóvenes y en los individuos de menor nivel educativo; reportando

que los de menos recursos usan un sistema de atención médica pública casi en un 50%, en tanto que los de condiciones socioeconómicas y residenciales altas casi no utilizan hospitales o centros de salud públicos.

Entre los hábitos negativos relativos a la salud, el tabaquismo marcó una tendencia decreciente en los años en estudio. Si bien las mujeres mostraron fumar más en 2012, siguen siendo menos fumadoras que los varones. La edad también es un indicador importante en este hábito, ya que se eleva marcadamente cuanto más joven es la persona. Otro de los déficits incluidos en este campo, como es no practicar ejercicio físico semanalmente, exhibió un incremento en el último bienio y se presentó con mayor porcentaje en las categorías de variables referidas a menor capital socioeducativo y económico.

Las variaciones interanuales observaron un incremento en el período 2010-2012 respecto del afrontamiento negativo y las creencias de control externo. Los valores significativamente elevados en el año 2012 en el uso de estrategias evitativas de afrontamiento correspondieron a los varones, a los menores de 59 años y a quienes tienen estudios secundarios completos. No obstante, comparando las categorías de análisis, tanto las mujeres como los adultos mayores y los ciudadanos de menor nivel socioeducativo y económico presentaron con frecuencia un estilo de afrontamiento negativo. Las creencias de control externo registraron una brecha en el trienio 2010-2012 entre las mujeres, los mayores de 60 años, los de bajo nivel educativo y los que viven en el Gran Buenos Aires. Asimismo, presentaron mayores índices de externalidad de creencias quienes poseen un nivel socioeducativo y residencial más bajo. En oposición, disminuyó la falta de objetivos y metas en el último bienio, siendo los adultos mayores de 60 años y los de estrato socioeconómico muy bajo quienes más carencia evidenciaron en proyectos de vida.

El déficit en la felicidad se presentó sólo en uno de cada diez entrevistados, con énfasis en las personas de mayor edad y menor capital educativo y económico, si bien según las características individuales los más jóvenes y los más pobres elevaron su percepción de infelicidad en los datos interanuales. Pese a ello, entre 2010 y 2012 la percepción de soledad se mantuvo igual, registrando un aumento leve en 2011 al exhibir que se sienten solos en mayor medida las personas adultas de sexo femenino, sin secundario completo y con menor nivel socioeconómico y residencial. En cambio, la percepción de no sentir paz espiritual se

presentó con un porcentaje mayor en los varones y en las personas de nivel socioeconómico medio alto, mientras que entre las de más educación decrecieron sus valores del primer al último año del período. La falta de paz se observó con mayor incidencia en los jóvenes, en los habitantes del Gran Buenos Aires y en los más pobres.

Entre los indicadores relativos a las capacidades sociales, la falta de amigos obtuvo en 2010 el mayor porcentaje, coincidiendo las diferencias en la serie entre las mujeres y los adultos mayores. A un tiempo, fue muy notoria la brecha entre la gente que tiene menor condición socioeducativa y económica. Manifestaron asimismo sentirse mayormente discriminados los ciudadanos pertenecientes a grupos sin educación secundaria completa y a sectores socioeconómicos y de condiciones residenciales con menos recursos. Por último, tres de cada diez personas afirmaron no contar con gente que los ayude ante un problema; en este marco, los varones y las personas sin secundario completo registraron mayor déficit, mientras que el estrato socioeconómico inferior se distanció en casi el doble de ausencia de apoyo social respecto del más alto. En 2012, quienes habitan en villas y barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo reportaron mayor déficit en este último aspecto.

CAPÍTULO 5: CULTURA DEMOCRÁTICA, CONFIANZA INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y VIDA CIUDADANA

El presente informe se enmarca dentro de un contexto político, social y económico particular que de alguna manera influye sobre las percepciones, valoraciones y comportamientos de la población adulta analizada. El año 2010 estuvo fuertemente condicionado por la crisis económica internacional, seguido por un año marcado por un contexto de crecimiento económico y de reformas sociales, así como un panorama alentador respecto a las expectativas de la sociedad en cuanto a la evolución de la economía del país. En 2011, la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se realizó luego del amplio triunfo electoral del gobierno oficial. Sin embargo, los resultados demuestran que dichos aspectos positivos se vieron opacados en 2012 por un mapa económico internacional complejo y por cuestiones postergadas en el plano interno, como los altos índices de inflación y los graves niveles de pobreza y desigualdad.

En términos generales, los resultados de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) han mostrado durante todo el período de estudio (2010, 2011 y 2012) una caída de 3,1 p.p. en la preferencia de la sociedad por un gobierno donde el poder esté concentrado en la figura presidencial. Sin embargo, y coincidiendo con el año electoral, en 2011 se observó un crecimiento de dicha preferencia sobre todo en la población que no terminó sus estudios secundarios, entre los del estrato muy bajo y entre los habitantes de villas o asentamientos precarios, siendo estos sectores los que a su vez percibieron una mayor caída en dicha preferencia durante el último año analizado.

Asimismo, el déficit en la conformidad con el funcionamiento de la democracia, que había caído 15,8 p.p. durante el bienio 2010-2011, sufrió un aumento de 16,3 p.p. en 2012 para colocarse en niveles superiores a los de 2010 (56,3%). El aumento de la percepción sobre la incapacidad de la democracia para resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad se produjo en toda la población de 18 años y más, analizada independientemente de sus características personales, nivel educativo, estrato socioeconómico y condición residencial.

Algo similar ocurrió con el indicador de déficit en la consideración del voto como factor de cambio social, puesto que a pesar de la caída registrada durante el bienio 2010-2011, su ascenso en 2012 llevó a un aumento punta a punta de 2,7 p.p. En este caso, el aumento en el porcentaje de personas de 18 años y más que consideran inservible el voto para producir cambios en la realidad social del país durante el bienio 2011-2012 afectó en mayor medida a los sectores más vulnerables y a los residentes del Gran Buenos Aires, quienes registraron comportamientos más inestables durante los tres años analizados.

Un dato interesante para destacar es la considerada inestabilidad y vulnerabilidad presentadas por el indicador de confianza gubernamental. Luego de producirse un aumento de 15,9 p.p. en el nivel de confianza en el Gobierno Nacional entre 2010 y 2011, el mismo cayó en igual magnitud en 2012 para colocarse en porcentajes cercanos a los del año base (26,8%). Estos cambios se verificaron en todo el universo de la población analizada, aunque con mayor magnitud entre la población más vulnerable. Es decir, el aumento de la confianza en el primer bienio de estudio y su posterior caída se produjo con mayor impulso entre quienes no terminaron sus estudios secundarios, quienes pertenecen al cuartil inferior de la escala socioeconómica y quienes residen en villas o asentamientos precarios.

Por el contrario, los niveles de confianza en el Congreso y en la Justicia se mantuvieron relativamente más bajos y más estables en el tiempo. En este caso, fueron las personas que culminaron sus estudios secundarios y las que pertenecen al cuartil superior de la escala socioeconómica quienes presentaron, generalmente, mayores niveles de confianza en estas dos instituciones. Sin embargo, aunque no tan abrupta como en el caso del Gobierno Nacional, la caída durante el último bienio (2011-2012) de la confianza en la Justicia y en el Congreso se produjo, sobre todo, por el comportamiento de estos sectores, llevando, al igual que con el indicador gubernamental, a un efecto de disminución de las diferencias.

De todas las instituciones analizadas, las de representación de intereses evidenciaron los niveles de credibilidad más bajos, no logrando superar el 10% en el último año de estudio, en el cual los sindicatos obtuvieron el mayor puntaje (10,8%), seguidos por los partidos políticos (8,5%) y los movimientos piqueteros (4,9%). Al igual que lo observado en las instituciones de gobierno, las de representación mejoraron sus niveles de credibilidad en 2011 para luego sufrir un retroceso en 2012. Dicho aumento se produjo fundamentalmente por el incremento de la confianza entre los jóvenes y varones de 18 años y más. Por su parte, la caída de 2012 afectó tanto a varones como a mujeres y a todos los grupos de edad analizados.

Las instituciones de la sociedad civil suelen presentar mayor estabilidad y superiores niveles de confianza que las demás instituciones analizadas. Así, las ONGs, Cáritas y la Iglesia percibieron niveles de alta confianza cercanos al 50% durante todo el período de estudio. En cuanto a la confianza en los medios de comunicación, aunque en niveles más bajos, se observó un crecimiento constante durante todo el período (de 35,2% en 2010 pasó a 38,7% en 2012). El análisis según sexo y edad mostró que las mujeres y las personas mayores de 60 años tienden a confiar más en las tres instituciones analizadas que los varones y los jóvenes. Asimismo, se observó que en la medida que asciende el nivel socioeconómico, educativo y residencial, aumenta la confianza en las ONGs/Cáritas en los tres años analizados; y lo inverso ocurre con la Iglesia y los medios de comunicación, ya que es la población más vulnerable la que obtiene mayores niveles de credibilidad en estas instituciones.

Durante el trienio estudiado, los datos revelan que los niveles de participación política no superan el 6% y

los de participación social, el 16%. Dentro de las organizaciones políticas, fueron los sindicatos los que registraron mayores niveles de participación; y dentro de las organizaciones sociales y solidarias, los grupos sociales. Es importante destacar que a diferencia de lo que ocurre con la participación política, se produce un aumento año tras año en los tres tipos de participación social y solidaria analizados. En general, tienden a participar más en todas las actividades quienes terminaron el secundario, quienes pertenecen al 25% superior de la escala socioeconómica y los habitantes de zonas con trazado urbano de NSE medio. Asimismo, fueron los varones y los jóvenes de entre 18 y 35 años quienes presentaron mayores niveles de participación política partidaria y sindical, en movimientos de protesta y en grupos sociales, mientras que las mujeres y las personas mayores de 60 años evidenciaron mayor participación en actividades solidarias y parroquiales.

Por último, los datos relevados demuestran que el problema de la inseguridad viene agravándose año tras año independientemente del contexto político, social o económico en el que se enmarque el análisis. El indicador de inseguridad efectiva subió de 28,4% en 2010 a 30,3% en 2012; y en los mismo años, el de sentimiento de inseguridad, de 83,2% a 85,5%. Pese a que el miedo al delito afecta a toda la población analizada, sin diferencias relevantes según las características personales y los niveles socioeducativos y residenciales, las mujeres y los entrevistados de entre 18 y 59 años registraron mayor condición de riesgo frente al delito que los varones y los adultos mayores de 60 años. Asimismo, estos resultados dan cuenta de un crecimiento de la inseguridad a medida que se escala en los niveles socioeconómicos y residenciales de la población entrevistada.

Si se analiza la venta o tráfico de drogas como un agravamiento más al problema del delito, se observa que –al igual que con la inseguridad y el miedo– el mismo sufre un aumento de 6,3 p.p. durante todo el período de estudio. Tres de cada diez entrevistados declararon percibir venta, intercambio o tráfico de drogas y/o estupefacientes en la cercanía de su hogar en el año 2012. Esta problemática afecta a toda la población, independientemente del sexo y la edad, pero en mayor medida a los entrevistados con condiciones socioeducativas y residenciales más vulnerables. Las diferencias se acentúan al comparar la situación entre las villas (58,0% de afectados) y las zonas con trazado urbano de NSE medio (20,6%).

CAPÍTULO 1

CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA DE LOS HOGARES

JULIETA VERA, BIANCA MUSANTE
Y ALEJANDRO MENDOZA JARAMILLO

Luego del período recesivo con estancamiento en el crecimiento económico entre 2008 y 2009 –en parte como consecuencia del fuerte aumento de la inflación–, siguieron dos años de expansión económica. En 2010 y 2011 se recuperó el consumo interno y la demanda de empleo, al tiempo que se amplió la cobertura de la asistencia social a los sectores más vulnerables. Sin embargo, durante el pasado año y hasta la actualidad, la economía del país viene experimentando una fuerte desaceleración, con estancamiento en la generación de empleos genuinos y elevada tasa de inflación. En este marco, la pregunta central que organiza el presente capítulo es: ¿en qué medida, durante el período 2010-2012, se evidencia una transformación o persistencia de los niveles de exclusión social y desigualdades existentes en la capacidad económica de los hogares, para satisfacer las necesidades básicas que aseguren su subsistencia?

Detrás de esta pregunta se supone una eventual persistencia de problemas sociales estructurales en materia de inseguridad alimentaria, necesidades básicas insatisfechas y percepción de recursos monetarios suficientes para garantizar un adecuado funcionamiento social (línea de indigencia y línea de pobreza). Al indagar por la capacidad de autonomía económica de los hogares, es válido además reflexionar por los beneficiarios de los programas de transferencias de ingresos, como indicador de una situación estructural de exclusión a los sistemas formales de la seguridad social.

En caso de que esto no ocurra, es decir, frente a una disminución de los riesgos sociales, cabe inferir una mejora cualitativa en el nivel de vida de los sectores más vulnerables; lo cual –cabe destacarlo– puede o no estar asociado a una mayor equidad distributiva. Por el contrario, en el caso de que tales indicadores no experimenten mejoras, volvería a ratificarse la existencia de un núcleo duro de marginalidad económica muy poco sensible a los ciclos económicos.

Este capítulo se apoya en el paradigma del desarrollo humano, asumiendo que su significado incluye la idea de que la ausencia de recursos de subsistencia no solo supone un riesgo para el sostenimiento y el desarrollo de la vida, sino también una privación absoluta a las capacidades de progreso humano e integración social (Salvia y Tami, 2004). Desde esta perspectiva, el propósito del análisis es ofrecer evidencias de las capacidades de subsistencia económica de los hogares a partir de examinar una serie de déficits en materia de capacidades de consumo, acceso a recursos monetarios y satisfacción efectiva de condiciones de bienestar económico.

¿En qué medida entre 2010-2012 mejoraron o empeoraron las capacidades estructurales de alimentación e inclusión social de los hogares urbanos? ¿Cuáles fueron los efectos de la dinámica económica sobre los ingresos familiares y los niveles de indigencia y de pobreza de la población? ¿Lograron los programas sociales de transferencias de ingresos aliviar los proble-

mas de exclusión social de los sectores más pobres? En fin, ¿cuál es el balance que cabe hacer en materia de riesgos, inseguridades y desigualdades económicas a tres años de iniciado el Bicentenario? Con el objeto de dar respuesta a estas preguntas, se abordan a continuación un conjunto de indicadores que permiten evaluar las capacidades y niveles de subsistencia económica de los hogares y la población urbana. El análisis parte de una serie de criterios fundamentales fundados en una perspectiva de derechos, por lo cual se retoman los trabajos anteriores realizados desde este mismo enfoque (Salvia et al, 2012).⁸

En esta línea, es relevante evaluar el acceso a una serie de recursos y capacidades básicas para la subsistencia a través de dos indicadores directos del nivel de vida y bienestar social: la Inseguridad Alimentaria (IA) y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los cuales miden la incidencia y evolución en el tiempo de situaciones relacionadas una pobreza estructural. Por otro lado, a los fines propuestos, cabe examinar no solo los niveles de ingresos y las respectivas tasas de indigencia/pobreza, sino también incorporar al análisis las propias evaluaciones que hacen los hogares con respecto a su capacidad de consumo y de ahorro. Adicionalmente, resulta pertinente indagar la intensidad con la cual la intervención estatal -a través de los programas sociales de empleo y transferencias de ingresos- mejora, transforma o reproduce rasgos estructurales de la estratificación social.

En los cuatro apartados del capítulo se examina cada uno de estos aspectos a través de una serie de indicadores cuyas definiciones conceptuales y operacionales se muestran en la figura 1.1. El primer apartado está referido a la medición de la situación de pobreza de los hogares/personas a través de un método directo, tomando como referencia algunas condiciones estructurales consideradas altamente relevantes (IA y NBI). El segundo apartado evalúa los ingresos monetarios de los hogares (ingreso total familiar e ingreso per cápita familiar), así como también las tasas de indigencia y pobreza medidas a través de los ingresos.⁹ El tercer

apartado incorpora la percepción subjetiva de las capacidades de consumo y de ahorro monetario que declaran los hogares/personas, destacando la relevancia de incorporar la apreciación subjetiva de los actores involucrados. Por último, el cuarto apartado reseña la percepción de programas sociales de transferencias de ingresos en el total de hogares urbanos y, adicionalmente, la relevancia que presentan dichos programas entre los hogares en situación de pobreza por ingresos. Por último, se presenta un resumen con los principales resultados generados por estos análisis.

En todos los casos, además de presentar el nivel general de déficit o logro asociado a cada indicador, se utilizan seis variables de corte que permiten realizar una mejor caracterización del objeto de estudio: (a) sexo del jefe del hogar, (b) calidad de inserción en el empleo del jefe, (c) presencia de niños y adolescentes, (d) estrato socioeconómico, (e) condición residencial o tipo de barrio de residencia, y (f) aglomerado urbano. La figura 1.1 presenta un esquema detallado de las dimensiones, variables e indicadores que son objeto de análisis en este capítulo.

Los datos y su desarrollo surgen de los resultados obtenidos en los años 2010, 2011 y 2012 de la Encuesta de la Deuda Social Argentina-Bicentenario (2010-2016), llevada adelante por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. La encuesta consiste en un estudio longitudinal de tipo panel que, utilizando una muestra probabilística, multietápica (con probabilidades no proporcionales) de hogares y personas, indaga en diferentes dimensiones el desarrollo humano y social en la Argentina del Bicentenario.

El análisis se desarrolla presentando incidencias porcentuales, medias de ingreso y variaciones absolutas interanuales medidas en puntos porcentuales (p.p.) tanto a nivel del total urbano como según las características sociodemográficas, económicas y residenciales consideradas relevantes. Cada apartado ofrece un ejercicio, complementario al análisis descriptivo, en el que se realizan una serie de modelos multivariados de regresión logística en función de evaluar los principales factores sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que influyen en el incremento o en la disminución de los diferentes déficits apreciados. Asimismo, al final del capítulo se desarrolla una nota de investigación que estima el impacto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las pensiones para Madres con siete Hijos (M7H)

⁸ Para más detalles acerca de la perspectiva teórica incorporada en el presente análisis, véase el informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario, Año II.

⁹ Para conocer otras especificidades sobre las ventajas y desventajas que presenta el enfoque de los ingresos a fin de evaluar las condiciones materiales de vida, véase el informe citado en la nota anterior.

sobre los ingresos familiares, la indigencia y la pobreza urbana en la Argentina del Bicentenario.

Por último, corresponde informar que los datos estadísticos completos empleados para la elaboración del capítulo se encuentran disponibles en el do-

cumento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual se puede descargar o consultar desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

FIGURA 1.1 : ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA DE LOS HOGARES

1.1 INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS		
INSEGURIDAD ALIMENTARIA	Expresa la reducción involuntaria de la porción de comida y/o la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses.	Porcentaje de hogares que expresaron tener inseguridad alimentaria severa, moderada y total.
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS	Método directo de identificación de carencias y privaciones. Los hogares con NBI presentan al menos una de las siguientes situaciones: 1- más de tres personas por cuarto habitable; 2- habitar una vivienda de tipo inconveniente (pieza en inquilinato, vivienda precaria); 3- hogares sin ningún tipo de retrete; 4- hogares con algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; 5- hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera como máximo hasta primaria completa.	Porcentaje de hogares que presenta al menos una de estas situaciones.
1.2 LOS INGRESOS MONETARIOS Y LA CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA		
INGRESO TOTAL FAMILIAR	Expresa el monto promedio del total de los ingresos reales (laborales y no laborales) percibidos por los hogares.	Media del ingreso real de bolsillo recibido por el hogar el mes anterior al relevamiento, originado dentro y fuera del mercado laboral, en pesos de diciembre de 2012.
INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR	Expresa el monto promedio de los ingresos reales (laborales y no laborales) normalizados por el tamaño del hogar.	Media del ingreso real total del hogar dividido la cantidad de miembros, expresado en pesos de diciembre de 2012.
INDIGENCIA Y POBREZA	Se considera indigente a aquellos hogares/personas cuyos ingresos no les permiten adquirir el valor de la Canasta Básica Alimentaria. La misma incorpora una serie de productos requeridos para la cobertura de un umbral mínimo de necesidades alimenticias (energéticas y proteicas).	Porcentaje de hogares en situación de indigencia. Porcentaje de personas que habitan hogares en situación de indigencia.

INDIGENCIA Y POBREZA	Se considera pobre a aquellos hogares/personas cuyos ingresos no superen el umbral del ingreso monetario necesario para adquirir en el mercado el valor de una canasta de bienes y servicios básicos (Canasta Básica Total - CBT).	Porcentaje de hogares en situación de pobreza. Porcentaje de personas que habitan hogares en situación de pobreza.
1.3 CAPACIDADES DE CONSUMO Y AHORRO MONETARIO DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA		
INGRESOS INSUFICIENTES	Percepción sobre la capacidad de los ingresos totales del hogar para cubrir consumos básicos mensuales y sostener patrones de consumo.	Porcentaje de hogares que percibe que los ingresos no le resultan suficientes para cubrir sus gastos mensuales.
CAPACIDAD DE AHORRO	Percepción sobre la capacidad de los ingresos totales del hogar para generar ahorro.	Porcentaje de hogares que percibe que los ingresos le permiten ahorrar más allá del consumo realizado.
1.4. LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SU FUNCIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS HOGARES		
PROGRAMAS SOCIALES	Asignación de ingresos a través de programas sociales de transferencias monetarias y asignaciones familiares no contributivas.	Porcentaje de hogares que recibe programas sociales o de empleo. A partir del año 2010 se incluye la AUH.
INDIGENCIA POR INGRESOS	Se considera indigentes a aquellos hogares o personas cuyos ingresos mensuales no les permiten adquirir el valor de una Canasta Básica Alimentaria (CBA). La misma incorpora una serie de productos requeridos para la cobertura de un umbral mínimo de necesidades alimenticias (energéticas y proteicas).	Porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia (CBA).* Porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia (CBA).* * Los precios de una CBA -mensual- por adulto equivalente utilizados para la estimación de la línea de indigencia en 2007, 2010 y 2011 fueron: \$178, \$309 y \$360, respectivamente.

1.1 POBREZA ESTRUCTURAL: INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Desde la perspectiva propuesta se concibe el nivel de vida en un sentido amplio, superando la con-

cepción que lo asimila únicamente a una situación de insuficiencia de ingresos para adquirir bienes y servicios en el mercado, y entendiéndoselo especialmente como la imposibilidad de acceder a niveles normativos de realización humana y de bienestar (Sen, 1992; Boltvinik, 1991; Salvia y Lépore, 2006). En este sentido, la Inseguridad Alimentaria (IA) y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

constituyen indicadores directos del nivel de vida y bienestar social del hogar en la medida que evalúan la tenencia objetiva de una serie de recursos y capacidades básicas para la subsistencia, y no indicadores indirectos, como lo es por ejemplo el ingreso monetario, que además de estar sesgado por la subdeclaración, no necesariamente expresa el resultado efectivo de la capacidad de subsistencia del hogar.

En este marco, el indicador de IA indaga sobre la capacidad económica de los hogares de afrontar gastos para proveerse de cantidad y calidad de alimentación de manera socialmente aceptable. Asimismo, el método de pobreza por NBI evalúa la tenencia de una serie de satisfactores, como cuestiones referidas al acceso a la vivienda, a servicios sanitarios, a la educación y a la capacidad económica de los hogares. Sin embargo, se destaca el hecho de que este indicador mide un umbral de bienestar muy estructural, dejando afuera situaciones de privación que también atentan contra el bienestar de la población.

En las líneas que siguen se examina la incidencia de la inseguridad alimentaria para el período 2010-2012 en el total urbano y según una serie de características seleccionadas de los hogares. Se amplía luego el análisis adoptando una estrategia metodológica que permite evaluar el efecto específico de una serie de rasgos estructurales de los hogares –aislando el peso del resto– sobre la probabilidad de tener IA. El supuesto sobre la que se sostiene este apartado es que en aquellos hogares donde se experimenta IA se revela no solo la insatisfacción de ciertas necesidades y el incumplimiento de un conjunto de derechos, sino adicionalmente la ineficacia del Estado en la compensación de este tipo de carencias por vías de la política social y de salud.

La definición operativa y la metodología de medición adoptada para la variable inseguridad alimentaria se presentan en el recuadro metodológico del apartado 1.1.1. En forma adicional, el recuadro 1.1.2 exhibe datos sobre la evolución de las necesidades básicas insatisfechas en el total de hogares urbanos y según una selección de variables para el período 2010-2012. Por último, cabe informar que los datos estadísticos completos empleados para la elaboración de este apartado se encuentran disponibles en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicente-

nario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El acceso a una alimentación adecuada ha sido reconocido como un derecho individual y de responsabilidad colectiva desde mediados de siglo XX (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1996a). En este sentido, el acceso a una alimentación de manera sostenida en cantidad y calidad es considerado uno de los derechos básicos de todo ser humano, ya que no solo garantiza el mantenimiento de la vida, sino que indica si esta es saludable o no. Consecuentemente, en la medida que exista inseguridad alimentaria se verá vulnerado el derecho primordial a un nivel de vida adecuado, afectando a su vez el desarrollo humano social e individual.

A partir de 2010, el Observatorio de la Deuda Social Argentina incorporó un módulo especial de preguntas tendientes a medir la problemática de la inseguridad alimentaria de forma cualitativa y directa. En términos generales, la inseguridad alimentaria expresa el porcentaje de hogares donde en los últimos 12 meses al menos alguno de sus miembros debió reducir la porción de alimentos y/o experimentó algún evento de hambre por razones económicas. Conforme a ello, se hace posible evaluar dos niveles de inseguridad alimentaria: la inseguridad moderada (reducción de la dieta con percepción de riesgo a experimentar hambre), y la inseguridad severa (reducción de alimentos con registro de eventos de hambre). A manera de un indicador agregado, el déficit total da cuenta de la incidencia de cualquiera de las dos situaciones para el conjunto de los hogares (Salvia, Tuñón y Musante, 2012).¹⁰

Los datos recogidos por la EDSA-Bicentenario durante 2010-2012 evidencian que la evolución de la inseguridad alimentaria total descendió de 13%

¹⁰ Para más precisiones acerca de la construcción de la variable de inseguridad alimentaria, remitirse al recuadro 1.1.1.

a 11,2% en el primer período interanual, y luego ascendió en 2012 a 11,7% de los hogares localizados en los principales centros urbanos del país. Más específicamente, se advierte que el grado severo muestra una caída en 2011, para ubicarse, el último año de análisis, en el 5% de los hogares; mientras que la incidencia del déficit moderado presenta una baja en 2011 (descendiendo a 6,6%) y se mantiene en esos niveles en 2012 (figura 1.1.1).

Como muestran las figuras 1.1.2 y 1.1.3, las diferencias son significativas en los niveles de inseguridad alimentaria según las distintas variables examinadas. Los mayores riesgos de padecer IA lo presentan los hogares cuyo principal sostén económico es una mujer, aquellos en los que el mismo se encuentra en situación de subempleo o precariedad laboral, y aquellos donde hay miembros menores de 18 años. De esta forma, mientras que la inseguridad alimentaria severa en hogares con jefes varones alcanzó a 4,4% en 2010 y descendió a 3,7% en 2012, ascendió a 6,7% y 8,2% respectivamente, en los hogares con jefatura femenina. Asimismo, el déficit moderado registró una continua baja en los hogares con jefes varones (de 7,7% a 6,2%), mientras que los hogares con jefatura femenina no presentaron cambios en el mismo período (en torno a 8%).

La probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria durante 2010 fue de 20,9% en hogares cuyo jefe se encontraba en un empleo precario o con subempleo; de 15,7% si estaba desocupado o era inactivo; y se reducía a 5,4% cuando tenía un empleo pleno. Estas brechas se mantuvieron durante todo el período de análisis, alcanzando en 2012 el 19,4% del primer grupo de hogares, el 14,5% de los desempleados o inactivos, y sólo el 4,7% de los ocupados en empleos plenos.

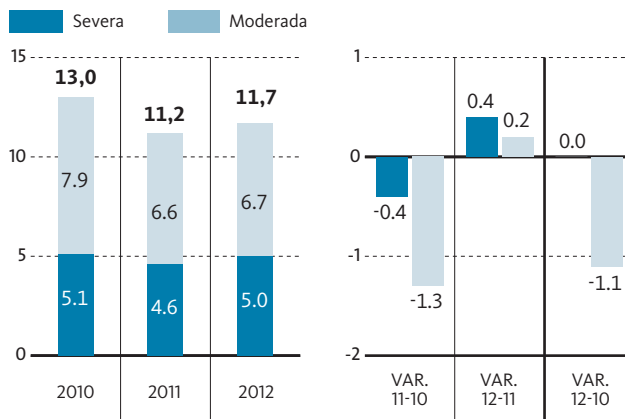
En cuanto a los hogares con niños, los datos recabados indican que los mismos han duplicado las chances de experimentar algún nivel de inseguridad alimentaria frente a los hogares con ausencia de menores de 18 años, sin mostrar cambios significativos en las brechas durante el período interanual 2010-2012. En efecto, mientras que el déficit alimentario severo afecta en 2012 a 5% de los hogares sin niños, el porcentaje asciende a 8,7% cuando en el hogar había algún niño.

Es importante advertir que la situación alimentaria de los hogares muestra una fuerte asociación con

Figura 1.1.1

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

el estrato social y la condición residencial. De hecho, entre 2010 y 2012, la inseguridad alimentaria total no superó el 2% de los hogares de estratos socioeconómicos medios, ni el 5% de los localizados en barrios de trazado formal de nivel socioeconómico medio. Por otra parte, la inseguridad alimentaria severa afectó en 2010 al 13,5% y la moderada al 16,8% de los hogares del estrato social más bajo (30,3% la total), descendiendo en 2012 a 12,2% y 15,2%, respectivamente (27,4% la inseguridad alimentaria total). En cambio, la situación alimentaria en hogares ubicados en villas o asentamientos precarios mostró una tendencia negativa entre los años de estudio, subiendo de 22,3% a 24,9%, producto principalmente del incremento del déficit severo (que ascendió de 8,1% a 10,2%).

Del análisis según grandes aglomerados se desprende que los niveles de inseguridad alimentaria son más altos en el Gran Buenos Aires que en el Resto Urbano del país; sin embargo se registra un decremento de las brechas existentes con el correr de los años de análisis. De esta manera, mientras que en 2010 la inseguridad total afectaba a 12,9% de hogares residentes en el GBA y a 8,5% del Resto Urbano, en 2012 estos porcentajes se ubicaron en 11,5% y 7,4%, respectivamente, mostrando una mayor disminución porcentual el primer aglomerado urbano (11,2% frente a 5,1%).

Figura 1.1.2

INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

2010 2011 2012



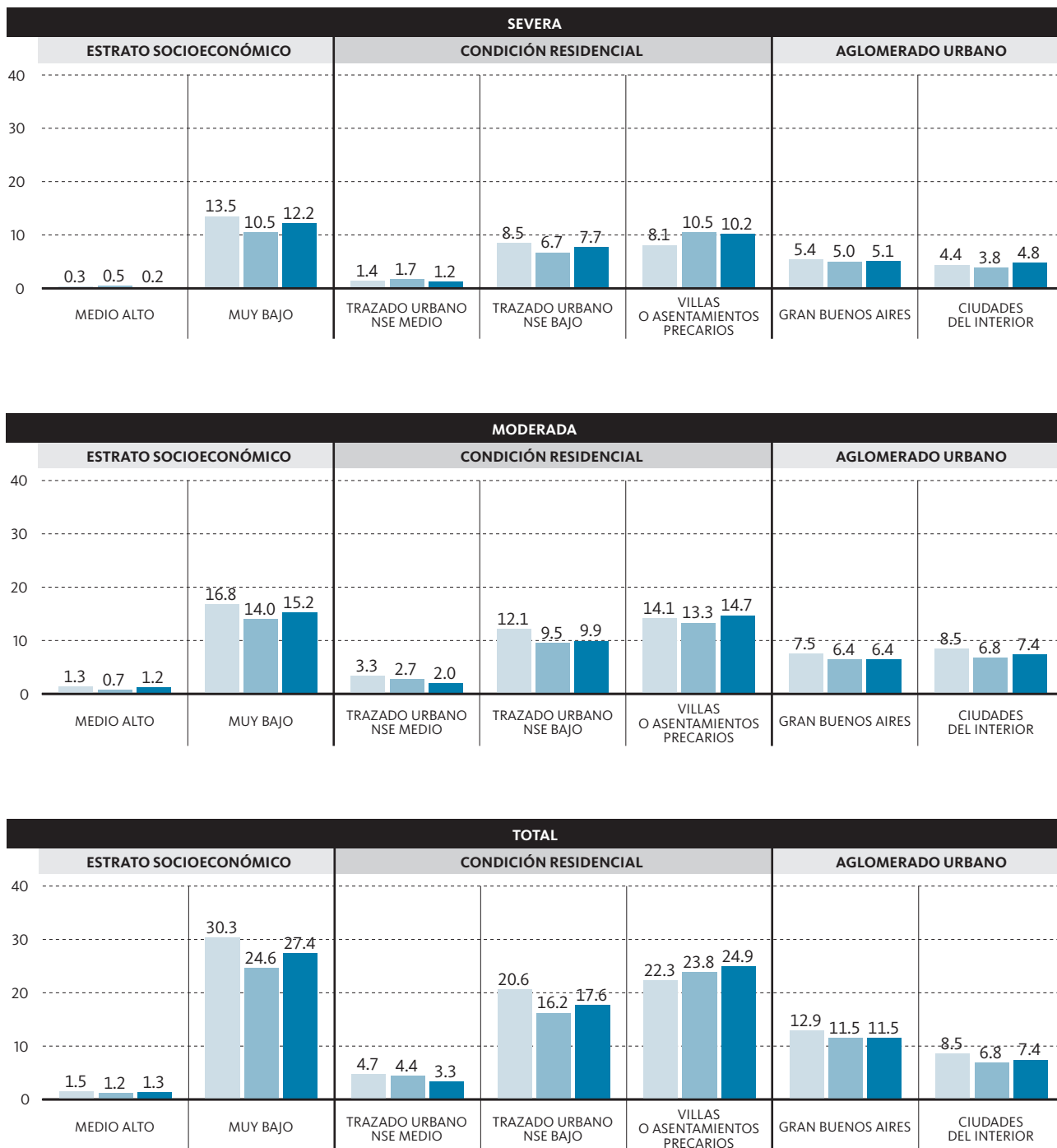
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.1.3

INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

RECUADRO 1.1.1: DEFINICIÓN OPERATIVA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA EDSA-BICENTENARIO

La EDSA-Bicentenario releva desde 2010 un conjunto de ítems destinados a obtener una medición directa y cuantitativa de la inseguridad alimentaria (IA) en los hogares urbanos de la Argentina. Se utilizan para ello cinco preguntas referidas a situaciones de insuficiencia o riesgo alimentario por causas económicas percibidas por los hogares durante los últimos 12 meses y relacionadas al momento del relevamiento.

Entre estas preguntas se incluyen dos ítems específicos destinados a medir, por una parte, la reducción involuntaria de la porción de comida en adultos durante el período de referencia, y por otra, la percepción de eventos de hambre en el hogar. Otros dos ítems están dirigidos a medir estos mismos aspectos pero entre los menores de 18 años. Un quinto ítem hace referencia a la frecuencia con que algún miembro del hogar –adulto o niño– debió reducir la cantidad de comida o sintió

hambre por razones económicas. Las preguntas aplicadas se presentan en el recuadro “Preguntas del Módulo de Inseguridad Alimentaria de la Encuesta de la Deuda Social Argentina”.

Con la finalidad de categorizar los hogares en función de su grado de inseguridad alimentaria, las respuestas a las preguntas fueron ponderadas según su grado de severidad y convertidas en un índice numérico. Este índice es una escala lineal continua que mide el grado percibido de inseguridad alimentaria en términos de un único valor, que varía entre 0 y 5 en el caso de los hogares sin niños, y entre 0 y 12 en el caso de los hogares con niños. Así, un hogar que no ha experimentado ningún problema con la disponibilidad de alimento tendrá valor 0, mientras que un hogar que ha experimentado todas estas condiciones tendrá un valor máximo determinado por el número y valor de los ítems involucrados en cada caso (5 y 12, respectivamente).

PREGUNTAS DEL MÓDULO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EDSA-BICENTENARIO	
PREGUNTAS DEL MÓDULO	RESPUESTAS PONDERADAS
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿DISMINUYERON UD. U OTROS ADULTOS EN SU HOGAR LA PORCIÓN DE SUS COMIDAS PORQUE NO HABÍA SUFICIENTE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS?	SÍ (1) NO (0)
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿TUVO UD. U OTROS ADULTOS EN SU HOGAR ALGUNA VEZ HAMBRE PORQUE NO HABÍA SUFICIENTE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS?	SÍ (2) NO (0)
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿DISMINUYÓ LA PORCIÓN DE ALGUNA DE LAS COMIDAS DE LOS NIÑOS (0 A 17 AÑOS) DE SU HOGAR PORQUE NO HABÍA SUFICIENTE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS?	SÍ (3) NO (0)
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿TUVIERON HAMBRE LOS NIÑOS (0 A 17 AÑOS) DE SU HOGAR PORQUE NO HABÍA SUFICIENTE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS?	SÍ (4) NO (0)
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿ALGUNA VEZ UD. O ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR NO TUVO QUÉ COMER O TUVO POCA CANTIDAD DE COMIDA Y SINTIÓ HAMBRE POR PROBLEMAS ECONÓMICOS?	MUCHAS VECES (2) VARIAS VECES (2) EN ALGUNA OCASIÓN (1) NUNCA (0)

EL SIGUIENTE PASO CONSISTE EN LA AGRUPACIÓN DE LOS VALORES PARA CADA TIPO DE HOGAR EN DIFERENTES RANGOS SEGÚN LA SEVERIDAD DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA:

- **Seguridad alimentaria:** los hogares que mostraron ninguna o mínima evidencia de inseguridad alimentaria en los últimos 12 meses por problemas económicos.
- **Inseguridad alimentaria moderada:** los hogares en los que se expresa haber reducido la dieta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos.
- **Inseguridad alimentaria severa:** los hogares en los que se expresa haber sentido hambre por falta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos.

HOGARES SIN NIÑOS	0 - 2	0 - 3
HOGARES SIN NIÑOS	3 - 4	4 - 7
HOGARES CON NIÑOS	5	8 -12

Fuente: EDSA-Bicentenario, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Con el objeto de reconocer los principales factores de riesgo que intervienen de manera directa sobre el problema de la alimentación, la figura 1.1.4 presenta un análisis multivariado para cada nivel de IA. El propósito de esta última sección es desarrollar un análisis causal acerca del peso que una serie de variables independientes tienen como condicionantes para que los hogares experimenten dicha afección.

A efectos de avanzar en esta dirección, se ajustaron dos modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria. Las variables seleccionadas buscan ser explicadas en términos de la fuerza con que factores sociodemográficos, económicos y temporales inciden en pasar de una situación de no déficit (0) a una de déficit (1).

El Modelo I se refiere a experimentar inseguridad alimentaria severa, y su capacidad de predicción logró el 95,1% para el total de hogares residentes en los grandes centros urbanos. En esta instancia, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se

destaca que tanto el estrato socioeconómico, como el sexo e inserción laboral del jefe son muy significativos ($p < 0,01$), en tanto que la condición residencial, el aglomerado y los períodos anuales son menos significativos ($p < 0,05$) como factores explicativos de la inseguridad alimentaria severa.

En lo que respecta a la propensión de los hogares de los principales centros urbanos del país a experimentar dicha problemática según características seleccionadas del hogar, se observa que los hogares con jefa mujer cuentan con un 81% más de chances de padecer inseguridad alimentaria severa que los de jefe varón. Asimismo, los hogares cuyo jefe tiene un empleo precario o está subempleado presentan el doble de chances de encontrarse en esta situación alimentaria que aquellos cuyo principal sostén tiene un empleo pleno. De manera análoga, los hogares con niños triplican las posibilidades de experimentar inseguridad alimentaria respecto de aquellos constituidos solo por adultos.

Cuando se examinan los efectos de la situación del hogar sobre la posibilidad de experimentar la situación alimentaria más severa –manteniendo constantes los demás factores considerados–, se destaca el fuerte impacto que tiene la situación económica. De hecho, la razón de probabilidades aumenta 21 veces en hogares de estratos muy bajos, 10 en estratos bajos

y 3 en los estratos medios, en comparación con los hogares de estratos medios y altos. Asimismo, las urbanizaciones formales de estrato socioeconómico bajo tienen 54% más de probabilidades de padecer riesgo alimentario que los residentes en barrios formales de estratos medios. El déficit alimentario severo es 32% mayor en hogares del Conurbano Bonaerense que en los de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, cabe observar que las variables educación del jefe, tipo de aglomerado urbano, villas o asentamientos precarios y cambios económicos ocurridos durante esos años no resultan significativas en la determinación de la inseguridad alimentaria severa, debido al peso de otros factores que resultan lo suficientemente robustos como para explicar el fenómeno en cuestión.

Por su parte, el Modelo II presenta los resultados de este mismo análisis pero aplicado al indicador de inseguridad alimentaria total, es decir, agregando a los hogares en situación severa aquellos que debieron reducir su dieta a riesgo de experimentar hambre. En este caso, el modelo generado alcanzó una capacidad de predicción del 88,0%.

La diferencia principal con respecto al modelo anterior se advierte en el menor peso de los factores seleccionados en la explicación de dicha afección. En efecto, en comparación con el cociente de probabilidades de los jefes varones, la jefatura femenina incrementa las chances de experimentar inseguridad alimentaria en un 40%. En igual sentido operan las características del empleo del jefe de hogar: los empleados precarios o subempleados (95% más) o desempleado o inactivo (46% más) frente a los empleados plenos. Asimismo, los datos revelan que la inseguridad alimentaria total se incrementa al doble en los hogares con presencia de niños.

Si se estudia como referencia a los hogares del estrato medio alto se observa que aquellos del estrato medio bajo, bajo y muy bajo tienen respectivamente, más del doble de chances, 6 y 14 veces más de probabilidades de tener inseguridad alimentaria. Algo similar ocurre con la condición residencial del hogar, en la medida que los hogares ubicados en barrios de trazado urbano de NSE bajo presentan 57% más de chances de experimentar inseguridad alimentaria total que los que se localizan en zonas de nivel socioeconómico medio. En lo referente al tipo de aglomerado de residencia, los datos evidencian que el Conurbano Bonaerense y otras Grandes Áreas Urbanas presentan

Figura 1.1.4

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Total de hogares. Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II	
	INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA		INSEGURIDAD ALIMENTARIA TOTAL	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR				
SEXO DEL JEFE				
Varon (c)				
Mujer	0,593***	1,81	0,336***	1,40
EDUCACIÓN DEL JEFE				
Con secundario completo (c)				
Sin secundario completo	-0,134	0,87	-0,105	0,90
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE				
Empleo pleno (c)				
Empleo precario / subempleo	0,652***	1,92	0,669***	1,95
Desempleo / inactividad	0,445***	1,56	0,379***	1,46
NIÑOS EN EL HOGAR				
Sin niños (c)				
Con niños	1,101***	3,01	0,748***	2,11
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR				
ESTRATO SOCIOECONÓMICO				
Medio alto (c)				
Medio bajo	1,207***	3,35	0,929***	2,53
Bajo	2,305***	10,03	1,866***	6,47
Muy bajo	3,076***	21,69	2,639***	14,01
CONDICIÓN RESIDENCIAL				
Trazado urbano de NSE medio (c)				
Trazado urbano de NSE bajo	0,431***	1,54	0,449***	1,57
Villa o asentamiento precario	0,069	1,07	0,186	1,21
TIPO DE AGLOMERADO				
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)				
Conurbano Bonaerense	0,275*	1,32	0,281**	1,33
Grandes Áreas Urbanas	0,087	1,09	0,207*	1,23
Resto Urbano	-0,148	0,86	0,158	1,17
AÑO				
2010 (c)				
2011	-0,02	0,98	-0,141***	0,87
2012	0,00	1,00	-0,134***	0,87
CONSTANTE	-3,088***	0,04	-2,032***	0,13
R cuadrado de Cox y Snell	0,065		0,119	
R cuadrado de Nagelkerke	0,202		0,229	
Porcentaje global de aciertos	95,109		88,057	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

mayores probabilidades de experimentar dicha problemática que los hogares ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (33% y 23%, respectivamente).

Finalmente, al estudiar el nivel de correspondencia de la inseguridad alimentaria total con los cambios de la coyuntura económica de cada año, se observa, por un lado, que el peso de las variables estructurales se mantiene con independencia de la coyuntura socioeconómica, y por el otro, que la coyuntura económica de

los años 2011 y 2012 redujo en un 87% las chances de sufrir inseguridad alimentaria en comparación con 2010. En este sentido, los datos estarían indicando que las chances de experimentar inseguridad alimentaria

disminuyeron entre el primer período interanual de años –marcados por las mejoras en el mercado de trabajo y la implementación de la AUH– y se mantuvieron constantes entre 2011 y 2012.

RECUADRO 1.1.2: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Los hogares con NBI, según propuesta de la CEPAL para América Latina, presentan al menos una de las siguientes privaciones: a) hacinamiento (más de 3 personas por cuarto); b) vivienda de tipo inconveniente (rancho, casilla, pieza en inquilinato o pensión, vivienda en lugar de trabajo, etc.); c) ausencia de retrete; d. presencia de al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; o e) hogares con 4 o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe tuviera la primaria incompleta como máximo nivel educativo.

Los datos relevados por la EDSA-Bicentenario (2010-2016) permiten inferir que los hogares con necesidades básicas insatisfechas alcanzan en promedio al 11,5%, no experimentando cambios significativos durante los últimos tres años, con una reducción de apenas 0,3 p.p. en 2011 y 0,1 p.p. en 2012 (figura 1.1.5).

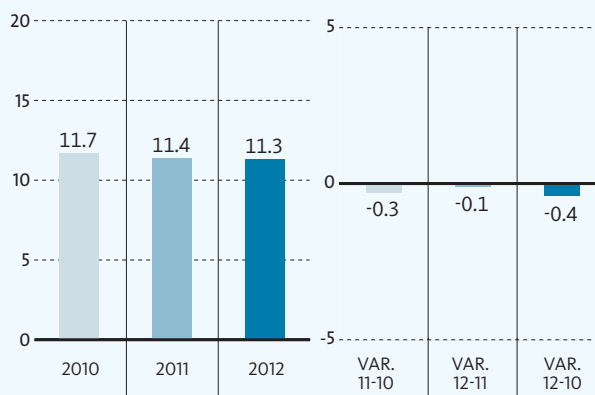
De las figuras 1.1.6 y 1.1.7 se desprende que existen diferencias significativas según las distintas variables seleccionadas, aunque sin mostrar cambios en cuanto a las brechas en el período de tiempo estudiado. Así, los hogares con jefatura a cargo de una mujer presentaron más nivel de déficit que aquellos con jefatura masculina. En igual sentido, los hogares con jefe subempleado y en empleo precario presentaron un mayor porcentaje de NBI (19% en 2010, descendiendo a 16,7% en 2012) respecto de aquellos donde el principal sostén tenía un empleo pleno (de 7,6% en 2010, pasó a 7,1% en 2012). En promedio, durante todo el período, el 19,8% de los hogares con niños registró NBI, mientras que este porcentaje se redujo a 3,7% en el caso de los hogares sin niños.

La estratificación socioeconómica y la condición residencial del hogar muestran una fuerte asociación con las NBI del mismo. Al respecto, se observó que

Figura 1.1.5

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

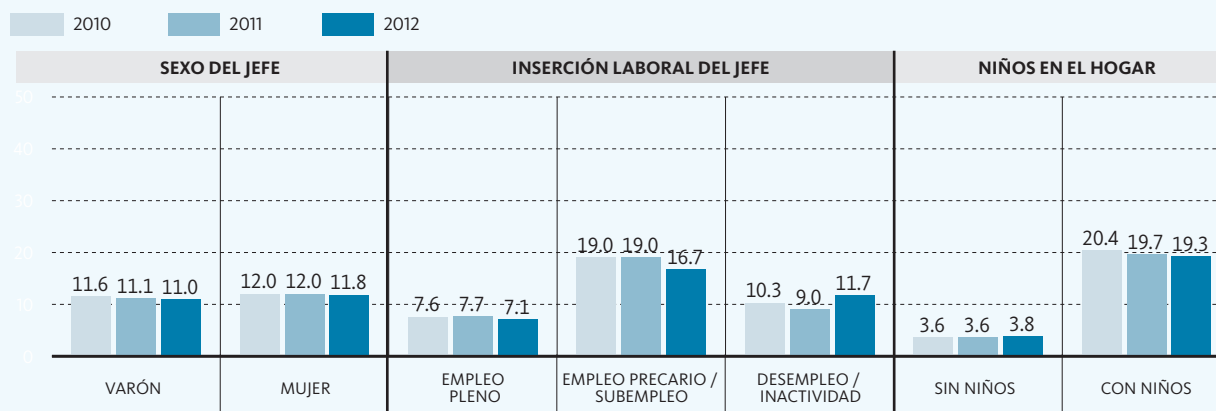
tuvieron alguna necesidad básica insatisfecha durante 2012 el 27,6% de los hogares de estratos muy bajos y el 35,5% de los ubicados en villas o asentamientos precarios, mientras que apenas el 1,1% padeció alguna NBI en estratos medios y altos; el 15,6% en barrios de trazado formal de nivel socioeconómico bajo; y solo el 2,9% en urbanizaciones formales de nivel socioeconómico medio. Estas brechas se mantenían presentes en 2010 y 2011. El análisis por aglomerados no presentó cambios significativos entre los años en estudio ni entre los hogares ubicados en el Gran Buenos Aires y Ciudades del Interior del país.

De esta manera, es evidente que la pobreza medida a través del indicador de NBI no presentó cambios significativos entre 2010 y 2012. Asimismo, las desigual-

Figura 1.1.6

NBI SEGÚN SEXO, E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

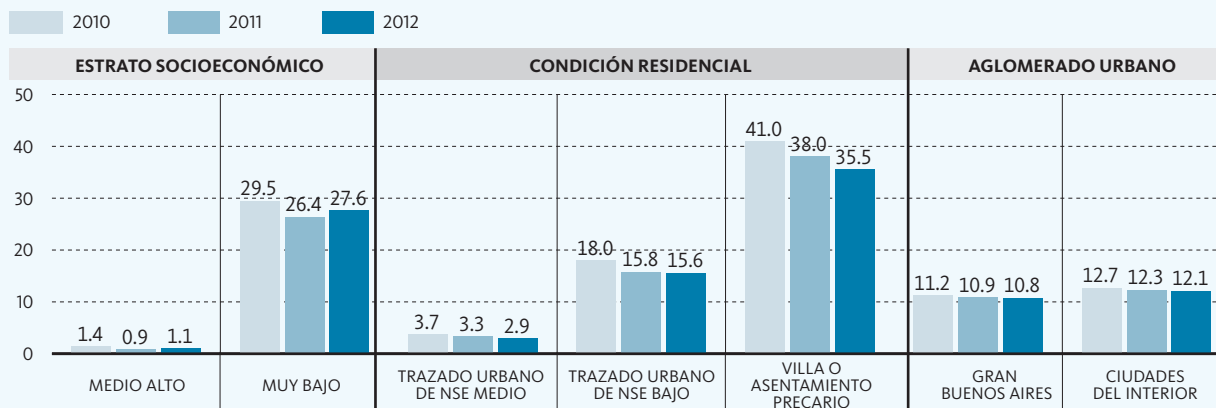


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.1.7

NBI SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

dades sociales se mantuvieron a lo largo del período, en tanto que fueron los hogares de jefes en empleos precarios o subempleados, con niños, del estrato social muy bajo y localizados en villas o asentamientos los que continúan presentando los mayores valores de déficit.

En este sentido, se puede inferir que las medidas señaladas no resultaron suficientes para revertir las condiciones de vulnerabilidad estructural en las que se encuentra al menos uno de cada diez hogares en la Argentina.

1.2 LOS INGRESOS MONETARIOS Y LA CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA

Desde la perspectiva adoptada por este trabajo, los ingresos monetarios no constituyen una medida directa del bienestar, sino que permiten aproximarse a éste de un modo indirecto, en virtud de que en una economía de mercado son dichos ingresos los que posibilitan adquirir bienes y servicios, los que funcionan como satisfactores de necesidades básicas o como potenciadores del bienestar de las personas.

El ingreso representa, en este contexto, una medida “proxy” de la capacidad de consumo de las unidades domésticas pero no indica si dicho consumo se efectivizó, así como tampoco cuáles fueron los bienes y servicios adquiridos ni si estos permitieron satisfacer las necesidades básicas del hogar. No obstante, el hecho de tratarse de un contexto capitalista, donde los satisfactores referidos (bienes y servicios) toman la forma de mercancías adquiribles en el mercado, constituye un argumento suficiente para no descartar el examen de los ingresos, siempre y cuando sean tomadas en consideración las limitaciones recientemente mencionadas.

El presente apartado expone la evolución de los ingresos reales (totales familiares y per cápita) durante 2010-2012, así como también las disparidades que presentaron los mismos según una serie de características seleccionadas del hogar.¹¹

Para su adecuada comparación, los ingresos de los años 2010 y 2011 se deflacionan a precios de diciembre de 2012, aplicando tanto el índice oficial de precios (IPC-GBA del INDEC) como un índice alternativo (IPC-7 Provincias CENDA/IPC). Se sigue esta estrategia debido al hecho conocido de la intervención política y manipulación de los índices de precios que experimentó el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) a partir de 2007 por parte de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación.¹²

11 Los datos expuestos para los tres años analizados incorporan una estimación de los ingresos no declarados debido a que el procedimiento de imputación de valores faltantes se considera más eficiente y menos sesgado que la eliminación de registros con ingresos no declarados o declaración incompleta.

12 Los modos en que se procedió a alterar las estadísticas de precios, así como a remover a los técnicos que desaprobaban tales prácticas, están documentados en la denuncia judicial realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2009.

También se analizan en este apartado las tasas de indigencia y de pobreza estimadas por el método LP –indicadores que se enmarcan dentro de los métodos indirectos de medición de la pobreza (Altimir, 1979; Boltvinik, 1991, 1992; Beccaria y Minujin, 1985)-. Este método busca medir privaciones absolutas en el nivel de vida de manera “indirecta” a través de los ingresos corrientes del hogar sin tener en cuenta si el hogar convierte efectivamente esos recursos monetarios en bienestar. El método consiste en calcular el ingreso mínimo o línea de pobreza (LP) a partir de la cual las necesidades básicas se satisfacen, e identificar los hogares cuyo ingreso se ubica por debajo de ese umbral.¹³

Tal como en los ingresos deflacionados a valores de un año determinado, la manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC tiene un impacto directo sobre la estimación de la pobreza a través del método de LP y sus posibilidades de comparación histórica. Ello responde a que cualquier alteración en la serie del IPC-GBA repercute sobre la valorización de la canasta básica alimentaria (CBA) y sobre la canasta básica total (CBT) empleadas como criterio para calcular la incidencia de la indigencia tanto como de la pobreza. En este contexto, de modo complementario al examen de los ingresos, se analizan las tasas de indigencia y de pobreza mediante el uso de valorizaciones para la CBA y la CBT alternativas a la oficial.

Por último, cabe informar que los datos estadísticos completos empleados para la elaboración de este capítulo se encuentran disponibles en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

INGRESO TOTAL FAMILIAR

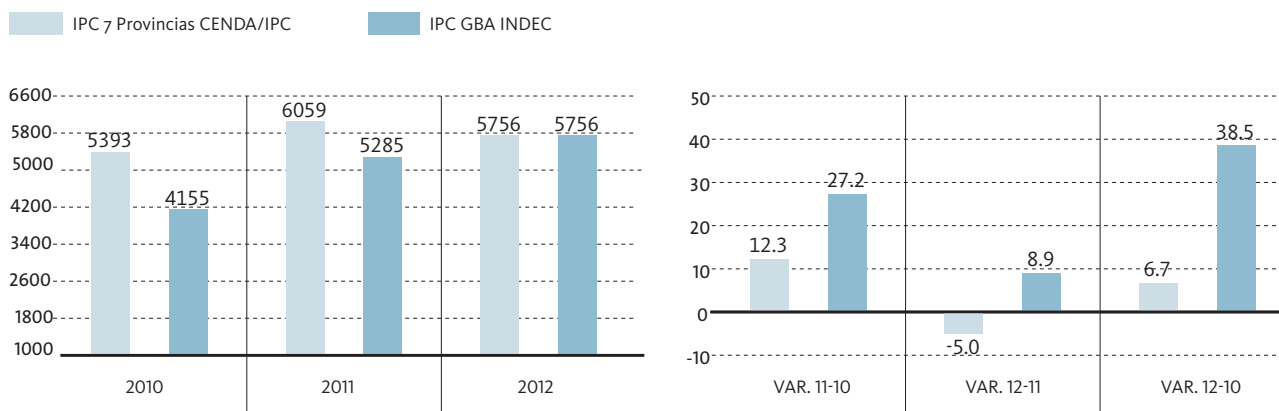
Los ingresos que se examinan a continuación están referidos a los recursos monetarios mensuales de bolsillo generados dentro y fuera del mercado de trabajo por todos los integrantes del hogar. Estos ingresos pueden ser destinados a distintos fines según las particularidades de cada unidad doméstica.

13 El método apela a la racionalidad “utilitarista” de los sujetos, por cuanto supone que habrán de utilizar los ingresos para satisfacer de manera primaria sus necesidades básicas de subsistencia.

Figura 1.2.1

INGRESO FAMILIAR

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA/IPC e IPC GBA INDEC) y variaciones relativas interanuales.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

El indicador se presenta a valores constantes del año 2012, de modo tal que los cambios de los mismos no resulten distorsionados por el proceso inflacionario que habría tenido lugar a lo largo del período bajo análisis. Tal como se señaló en los párrafos precedentes, la deflación se realizó mediante la utilización de dos índices de precios al consumidor: la información oficial (IPC-GBA INDEC) y un índice alternativo proveniente de centros y equipos de investigación (IPC-7 Provincias CENDA/IPC).

La figura 1.2.1 indica que la media de ingresos de los hogares relevados por la EDSA-Bicentenario (2010-2016) ascendía en 2012 a \$ 5.756. Se observa asimismo que los ingresos familiares evaluados a pesos constantes con el IPC-7 Provincias/IPC eran de \$ 5.393 en 2010 y de \$ 6.059 en 2011, mientras que estos valores resultaban menores si se deflacionaban empleando el IPC-GBA INDEC.

Así pues, las disímiles alternativas de deflación dan origen a distintas variaciones de los ingresos reales durante el período estudiado. Si se emplea el IPC no oficial (IPC-7 Provincias CENDA/IPC), la media de ingresos reales evidencia un incremento moderado entre los años 2010 y 2012 (6,7%), que se explica íntegramente por la suba exhibida entre 2010 y 2011 (12,3%), el cual fue seguido por un descenso en los ingresos reales durante el último año (-5%). En cambio, si se deflacionan los ingresos considerando los niveles de inflación oficial (IPC-GBA INDEC), las variaciones en los ingresos reales son significativamente disímiles y

exageradamente elevadas: el ingreso habría mejorado en un 38,5% entre 2010 y 2012, con incrementos en ambos períodos del 27,2% y 8,9%, respectivamente.

Las figuras siguientes exponen los ingresos familiares según características seleccionadas del principal sostén económico del hogar, haciendo uso, en este caso, solo del índice de deflación IPC-7 Provincias CENDA/IPC.¹⁴ La figura 1.2.2 muestra que el promedio de los ingresos familiares registra diferencias según el sexo y la inserción laboral del jefe y, adicionalmente, según la presencia o no de niños y adolescentes en el hogar. Las unidades domésticas cuyo principal sostén económico era un varón o contaba con un empleo pleno alcanzaron niveles de ingresos familiares mayores a los registrados en las unidades domésticas cuyo principal sostén era una mujer o alguien con empleo precario, desocupado o en situación de inactividad. Esta brecha de ingresos según el sexo y la inserción laboral del jefe se mantuvo con similar intensidad a lo largo del trienio.

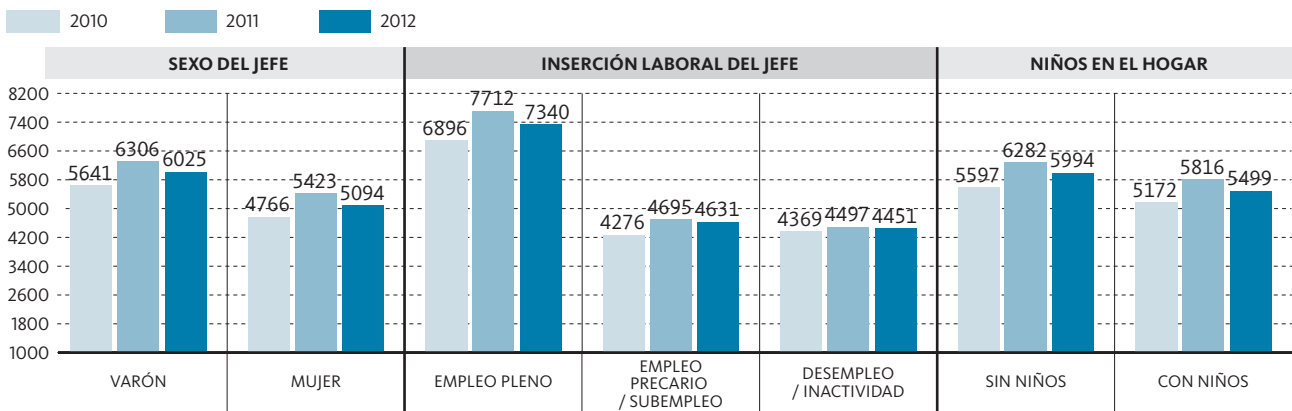
A su vez, los datos dan cuenta de una situación más favorable en términos de ingresos familiares en el con-

14 Los datos completos disponibles en el documento digital "Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística" incorporan la información correspondiente a los ingresos familiares según características seleccionadas de los hogares que usa el índice de precios oficial (IPC-GBA INDEC) para la obtención de los valores constantes al año 2012. Tal como se señaló anteriormente, estos datos pueden bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

Figura 1.2.2

INGRESO FAMILIAR SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA/IPC).

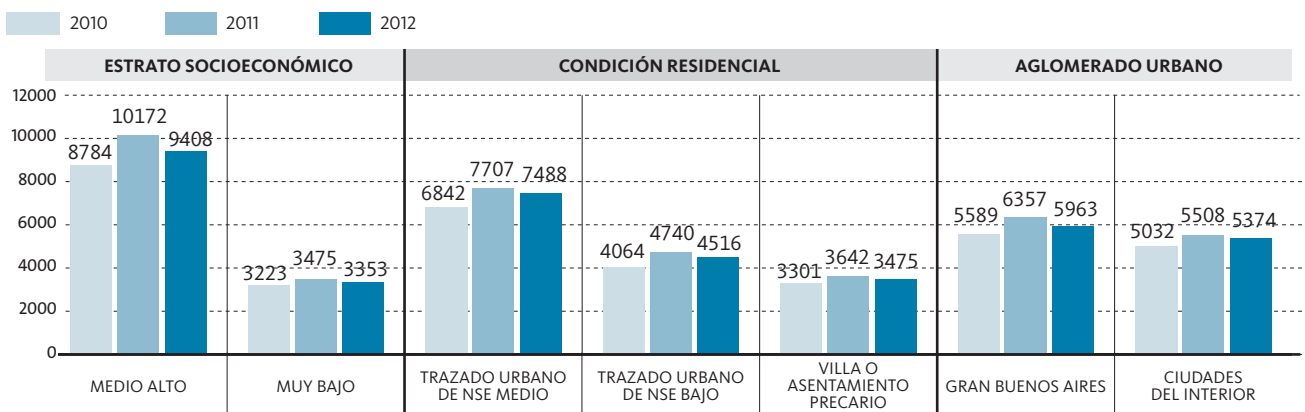


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.2.3

INGRESO FAMILIAR SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA/IPC).



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

texto de los hogares conformados solamente por adultos, en comparación con aquellos otros en los que había presencia de menores de edad. También en este caso la brecha del ingreso real promedio entre uno y otro tipo de hogar (con y sin presencia de niños) no se alteró significativamente a lo largo de los tres años estudiados.

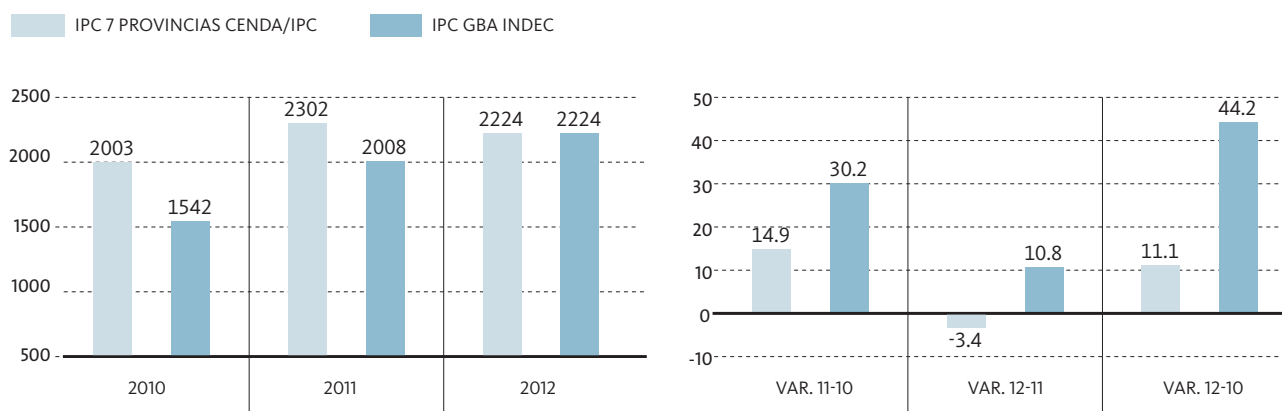
Existen otros factores que inciden de manera significativa en la desigualdad de la distribución del ingreso entre los hogares: el estrato socioeconómico de pertenencia, la condición residencial y el aglomerado urbano de residencia (figura 1.2.3). Al respecto, mientras que en 2012 el estrato medio alto (25% superior)

presentaba un ingreso familiar promedio de \$ 9.408, en el 25% inferior el indicador se ubicaba en tan solo \$ 3.353. La brecha para el último año de la serie casi no difiere de la estimada para los años previos.

La condición residencial también constituye un factor relevante en lo que concierne a la desigualdad en los ingresos de las unidades domésticas. Mientras que en 2012 el promedio en villas o asentamientos precarios y en barrios de estratos bajos dentro de la traza urbana formal fue de \$ 3.475 y \$ 4.516, respectivamente, la media ascendió a \$ 7.488 en las áreas de estratos medios.

Figura 1.2.4**INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR**

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA/IPC e IPC GBA INDEC) y variaciones relativas interanuales.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Por último, los ingresos familiares fueron mayores en el total del Gran Buenos Aires en comparación con los niveles registrados en las Ciudades del Interior del país, aunque en este caso las diferencias entre los aglomerados resultaron de menor magnitud que las consignadas al distinguir según el estrato socioeconómico y la condición residencial de los hogares. A su vez, esta ligera diferencia en las medias de ingreso entre el GBA y las Ciudades del Interior ya estaba presente en 2010 y 2011 sin evidenciarse un cambio de intensidad significativo.

INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR

El nivel de recursos monetarios que percibe el hogar, como ya se señaló, se considera como un “proxy” de su capacidad de consumo. Dado que el indicador analizado en el subapartado anterior no permite distinguir entre unidades de distinto tamaño (con diferente número de miembros), en las líneas que siguen se examina el ingreso per cápita familiar, el cual constituye una medida estandarizada, metodológicamente más sólida, para efectuar comparaciones y hacer los análisis correspondientes.¹⁵

En el último trimestre de 2012, la media del ingreso per cápita familiar en el total de aglomerados

relevados por la EDSA-Bicentenario (2010-2016) fue de \$ 2.224 (figura 1.2.4).

Si se utiliza el IPC INDEC para evaluar las alteraciones en los ingresos reales durante el período bajo análisis (a precios de 2012), se evidencia que los ingresos per cápita experimentaron mejoras significativas entre 2010 y 2012 (44,2%), fundamentalmente gracias a la suba registrada entre 2010 y 2011 (30,2%), pero también al incremento del ingreso real durante el último año (10,8%). Sin embargo, si los ingresos reales se estiman a partir del IPC-7 Provincias CENDA/IPC (teniendo así en cuenta el nivel de inflación no oficial), en 2010 y 2011 se obtienen ingresos reales superiores a los que resultan de la utilización del IPC-GBA INDEC, lo cual hace que disminuya –o a veces incluso que desaparezca– la evolución favorable entre los años seleccionados. En otras palabras, si para deflacionar se usa el IPC-7 Provincias CENDA/IPC, se obtiene un aumento de menor intensidad en los ingresos reales entre 2010 y 2012 (11,1%), el cual se explica completamente por lo ocurrido durante 2010-2011 (14,9%), registrándose en el último bienio una pérdida del ingreso promedio (-3,4%).

La figura 1.2.5 refleja la situación más favorable que caracteriza a los hogares sin niños y con jefes de hogar en empleos de calidad.¹⁶ En 2012 –de manera similar a

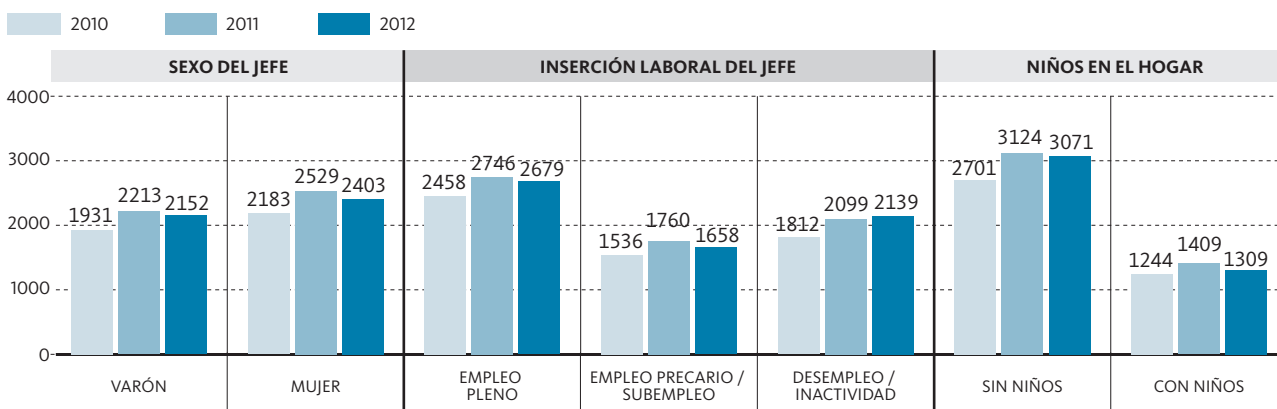
15 Las consideraciones señaladas al evaluar el ingreso total familiar –respecto a la estimación por no respuesta y los métodos de deflación empleados– son también válidas en el análisis del ingreso per cápita familiar.

16 Igual que para el ingreso total familiar, se exponen aquí los ingresos per cápita según características seleccionadas de los hogares haciendo uso únicamente del índice de deflación IPC-7 Provincias CENDA/IPC. La versión digital del Barómetro incorpora la información correspondiente al ingreso per cápita que emplea el

Figura 1.2.5

INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA/IPC).

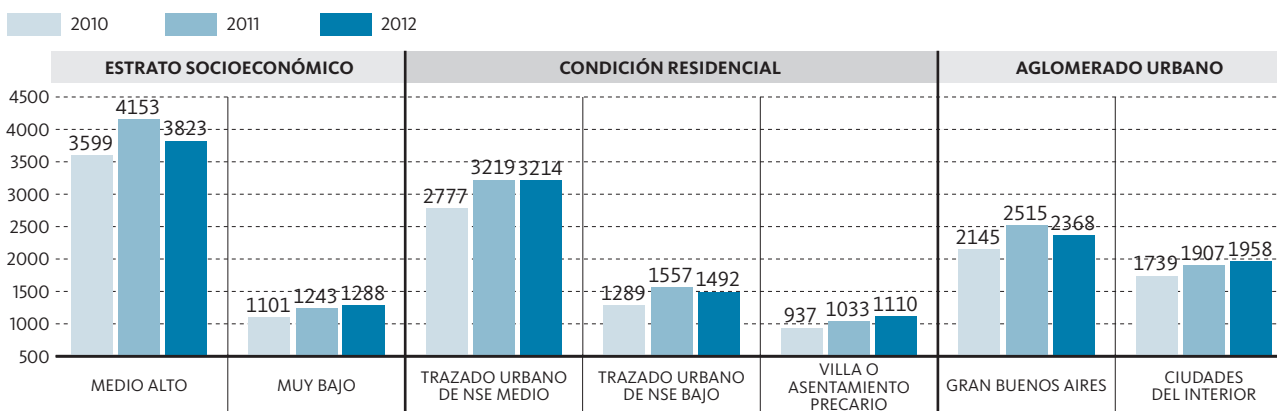


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.2.6

INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA/IPC).



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

los años previos– el nivel del ingreso per cápita familiar de los hogares conformados solo por adultos superaba el doble del valor registrado en las unidades domésticas con presencia de menores (\$ 3.071 frente a \$ 1.309). La situación más optimista de los hogares cuyo jefe cuenta con un empleo pleno se manifestó también en el hecho de que percibieron en promedio niveles de ingresos per cápita 40% más elevados que los hogares con jefe en situación de precariedad laboral o subempleo. Dicha

disparidad resultó algo menor entre los hogares con jefes en empleo pleno, desempleados o en situación de inactividad. Los hogares con jefe en empleo pleno percibieron –en promedio– ingresos 20% superiores a los obtenidos por hogares con jefe desempleado o inactivo.

A diferencia de lo señalado para el ingreso total familiar, los hogares cuyo principal sostén económico era una mujer alcanzaron ingresos per cápita ligeramente más elevados.¹⁷ La incidencia, en la distribución de los

índice de precios oficial (IPC-GBA INDEC) para la obtención de los valores constantes al año 2012.

17 La situación más favorable de los hogares con jefatura femenina, en cuanto a los ingresos per cápita (y teniendo en cuenta que este

ingresos per cápita, de la presencia de niños en el hogar, así como del sexo y la inserción laboral del jefe, no se alteró significativamente en comparación con los datos obtenidos para años anteriores.

Previsiblemente, se registraron importantes brechas en el ingreso per cápita familiar según el estrato socioeconómico de pertenencia y la condición residencial. Así, mientras que el estrato medio alto (25% superior) evidenció en 2012 un ingreso per cápita promedio de \$ 3.823, el estrato más bajo (25% inferior) alcanzó un ingreso medio de apenas \$ 1.288. La brecha entre ambos segmentos sociales se mantuvo con igual intensidad a lo largo de todo el período: en los distintos años seleccionados el ingreso per cápita de los hogares pertenecientes al estrato más bajo resultó, en promedio, un 70% inferior al de las familias del estrato superior. Por su parte, los hogares de estratos bajo y medio bajo alcanzaron ingresos –en promedio– 60% y 40% inferiores, respectivamente, a los registrados para el estrato medio alto.

Adicionalmente, los niveles de ingreso per cápita se diferenciaron ampliamente según la condición residencial de los hogares. Así, mientras que en 2012 en las villas o asentamientos precarios el indicador se ubicó en torno a \$ 1.110 y en las zonas de estratos bajos dentro de la traza urbana formal en \$1.492, la media ascendió a \$ 3.214 en los barrios más favorecidos. Esta disparidad en los ingresos según condición residencial se fue registrando a lo largo de todo el trienio sin observarse variaciones de intensidad.

Por último, tal como se indicó al evaluar los ingresos totales, los ingresos per cápita han sido aproximadamente 20% superiores en el conjunto del Gran Buenos Aires en comparación con los niveles registrados en las Ciudades del Interior del país. Es preciso subrayar que la disparidad entre los aglomerados se encuentra lejos de alcanzar la intensidad observada según el estrato socioeconómico y la condición residencial.

INDIGENCIA Y POBREZA

La estimación de la indigencia y la pobreza a través del “enfoque del ingreso” permite registrar, por

fenómeno no se evidencia al evaluar el ingreso total familiar), estaría asociada a una alta concentración –en esta categoría– de hogares monoparentales (en los que sólo se encuentra la madre) o incluso hogares unipersonales femeninos.

Figura 1.2.7

CANASTAS BÁSICAS ALIMENTARIA Y TOTAL POR ADULTO EQUIVALENTE

Años 2010-2011-2012.

CANASTA BASICA ALIMENTARIA (CBA) (EN PESOS CORRIENTES)	2010	2011	2012
Fuente INDEC			
Por equivalente adulto	188	206	231
Familia tipo	581	637	714
Fuentes NO OFICIALES* (Cota Mínima)			
Por equivalente adulto	284	355	451
Familia tipo	878	1097	1394
Fuentes NO OFICIALES* (Cota Máxima)			
Por equivalente adulto	295	369	469
Familia tipo	912	1140	1449

CANASTA BASICA TOTAL (CBT) (EN PESOS CORRIENTES)	2010	2011	2012
Fuente INDEC			
Por equivalente adulto	397	449	514
Familia tipo	1227	1387	1588
Fuentes NO OFICIALES* (Cota Mínima)			
Por equivalente adulto	590	738	940
Familia tipo	1823	2280	2905
Fuentes NO OFICIALES* (Cota Máxima)			
Por equivalente adulto	614	769	978
Familia tipo	1897	2376	3022

* Se obtiene a través de estimaciones propias realizadas en base a los precios informados -de manera discontinua aunque consistente- por una serie de oficinas de estadísticas provinciales, centros académicos y consultoras privadas. El valor de las canastas (tanto de la Fuente INDEC como Fuentes No Oficiales) se ajusta de acuerdo a los coeficientes por región de Paridad de Precios de Compra del Consumidor elaborados por el INDEC (ver informe metodológico “Paridades de Poder de Compra del Consumidor” Dirección de Índices de Precios de Consumo-INDEC).

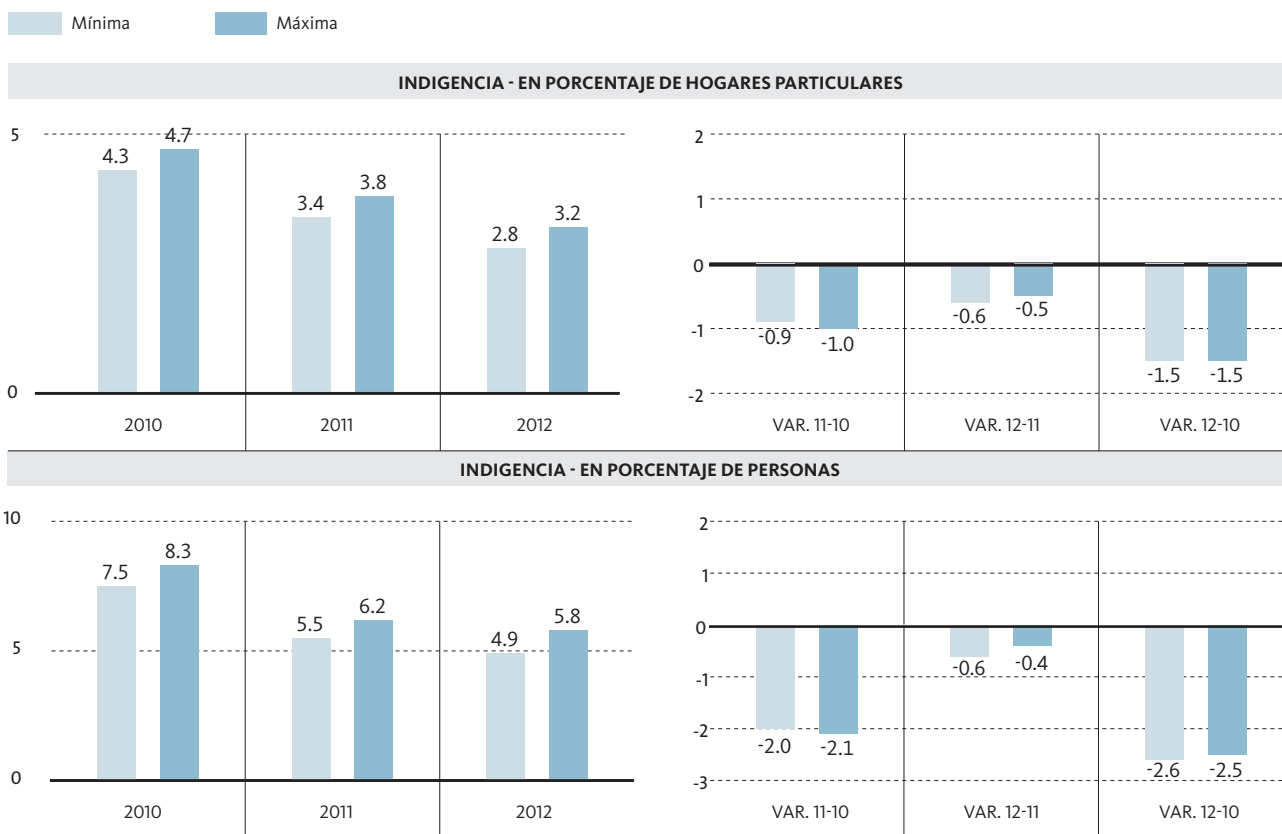
un lado, a los hogares que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica alimentaria (CBA) mensual que les asegure la satisfacción de las necesidades calóricas y proteicas mínimas (Línea de Indigencia); y por otro lado, a los hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta de bienes y servicios básicos complementarios (no solo alimentarios) o canasta básica total (CBT) capaz de garantizar un mínimo funcionamiento en un mes de referencia (Línea de Pobreza).

Siguiendo esta metodología, cuanto mayor/menor sea la inflación medida por el IPC, menor/mayor será la capacidad de compra de los ingresos y más caras/baratas (en términos relativos) serán las respectivas canastas. Consecuentemente, también más altos/bajos resultarán los niveles de indigencia y de pobreza dependiendo de los ingresos que reciban los hogares. Dada la manipulación política introducida al IPC-GBA del INDEC, los valores oficiales para ambas canastas (CBA y CBT) subestiman sistemáticamente los valores presumiblemente reales y, por lo tanto, quedan tam-

Figura 1.2.8

HOGARES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA

Actualización no oficial de la CBA. Cotas Mínima y Máxima. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares y personas, y variación en puntos porcentuales.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

bién afectados los umbrales bajo los cuales los hogares caen en situación de pobreza o de indigencia.

Por este motivo, se realizaron tres tipos de ejercicios de estimación utilizando diferentes criterios para valorizar la CBA y luego calcular a partir de ella la CBT. Los cálculos sobre indigencia y pobreza alternativos que aquí se presentan se apoyan en valorizaciones no oficiales –aunque “conservadoras”– de la CBA y la CBT. Una vez aplicados estos diferentes criterios, para la estimación de las respectivas tasas de indigencia y de pobreza correspondientes a cada período, se sigue el método estándar aplicado hasta la actualidad por el INDEC y los centros de investigación académicos del país.

Las diferentes series de tasas que se utilizan fueron estimadas siguiendo los siguientes criterios de valoración de las respectivas canastas:

1) *CBA / CBT Fuente INDEC*: se utiliza un promedio de los precios informados oficialmente por el INDEC

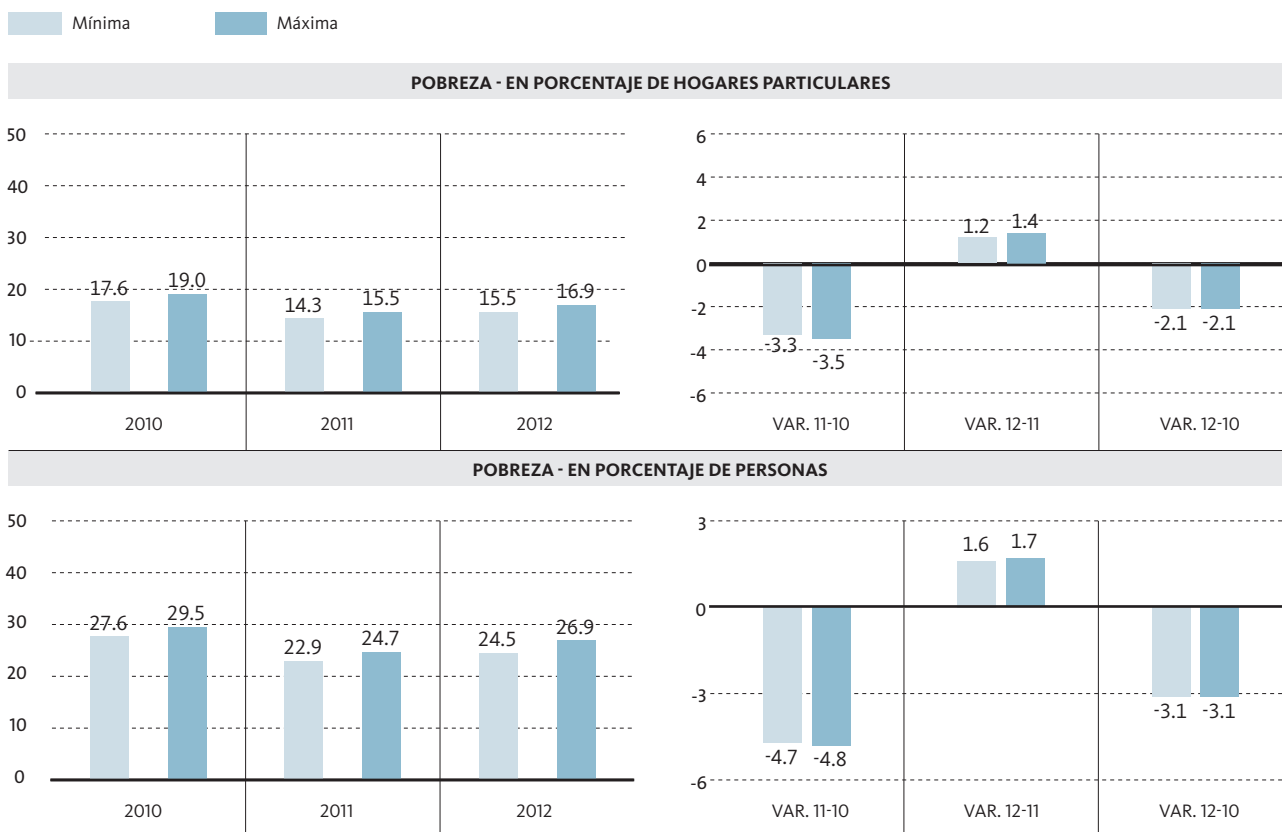
para la CBA, correspondiente a los meses comprendidos en el 4º trimestre de cada año. Tales valores surgen de una valorización de los precios comprendidos en dicha canasta a partir de la información que provee el IPC-GBA INDEC. Luego se aplica la inversa del coeficiente de Engel estimada por el INDEC para calcular los valores de la CBT en cada trimestre, la cual promedia un valor de 2,20.¹⁸

18 Para más detalles sobre la metodología aplicada por el INDEC para estimar la CBA y la CBT, véase el documento del INDEC “Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total. Historia, Forma de Cálculo e Interpretación”: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/informe_canastas_basicas.pdf. Los valores mensuales estimados para dichas canastas se pueden consultar en los respectivos informes de prensa del organismo: “Valorización Mensual de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total. Aglomerado Gran Buenos Aires”: http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=536.

Figura 1.2.9

HOGARES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Actualización no oficial de la CBT. Cotas Mínima y Máxima. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares y personas, y variación en puntos porcentuales.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

2) *CBA / CBT Fuente No Oficial (cota mínima)*: debido a la deformación que presentan los datos brindados por el IPC-GBA, se utiliza como una primera estrategia alternativa el cálculo de un valor base diferente para la CBA del 4º trimestre de 2010, asumiendo para dicha canasta, entre los valores oficiales y los estimados por fuentes no oficiales, una brecha acumulada de 50%. Con el fin de obtener los valores de la CBA correspondientes a 2011 y 2012, se aplica una tasa promedio de inflación en los productos de dicha canasta del 25% para el período 2010-2011, y del 27% para el período 2011-2012. A partir de esta información, se calcula la CBT para cada trimestre aplicando una inversa del coeficiente de Engel, menos exigente a la oficial, de 2,08.

3) *CBA / CBT Fuente No Oficial (cota máxima)*: debido a que existen diferencias en las estimaciones sobre la evolución de los precios de la CBA durante el período 2007-2010, se utiliza como una segunda estrategia alternativa

el cálculo de un valor base para la CBA del 4º trimestre de 2010, asumiendo en este caso una brecha acumulada para dicha canasta –entre los valores oficiales y los estimados por fuentes no oficiales– de 57%. Esta alternativa sería la más “generosa” con los estratos más bajos; pues al indicar la necesidad de mayores ingresos para la subsistencia, reduce el riesgo de exclusión de la población indigente y/o pobre. Como en el caso anterior, a fin de obtener los valores de la CBA correspondientes a 2011 y 2012, se aplica una tasa promedio de inflación del 25% para el período 2010-2011 y del 27% para el período 2011-2012. A partir de esta información, se calcula la CBT para cada trimestre aplicando una inversa del coeficiente de Engel, menor a la oficial, de 2,08.

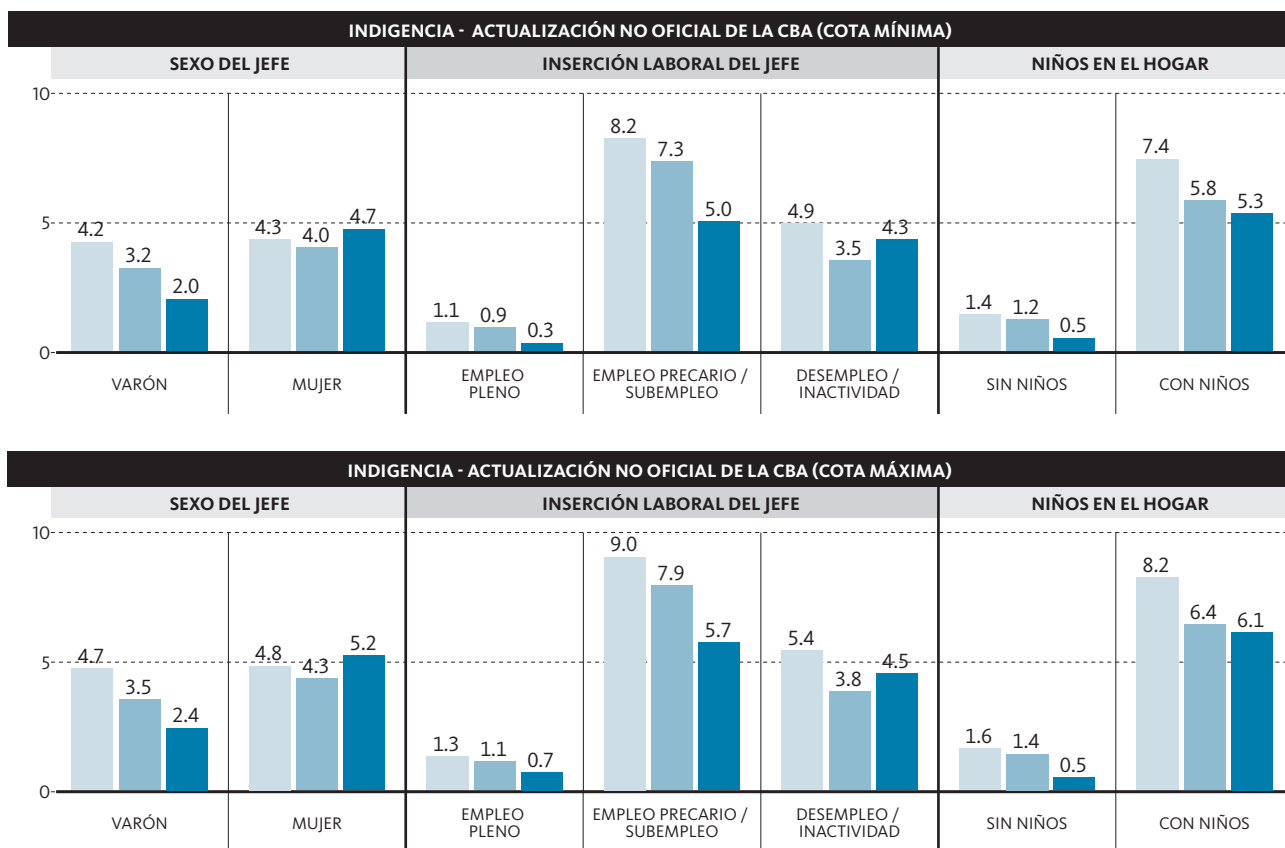
Las diferencias entre los valores de ambas canastas (CBA y CBT) considerados en este informe pueden examinarse en la figura 1.2.7. Todas las canastas se expresan para una unidad de adulto equivalente y

Figura 1.2.10

HOGARES EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

para una familia tipo compuesta por un matrimonio y dos niños.¹⁹ A su vez, las figuras 1.2.8 y 1.2.9 dan cuenta del porcentaje de hogares y personas que se encontraban bajo las líneas de indigencia y pobreza durante el período en análisis.²⁰

Entre 2010 y 2012 se experimentó una caída en el porcentaje de hogares y de personas en situación de indigencia. Esto se evidencia cualquiera sea la serie

no oficial de las canastas empleada. Tal como ya se indicó, las valorizaciones de las canastas correspondientes a la Cota Máxima, las más “generosas” con los estratos más pobres, minimizan el error de exclusión de la población indigente. Esta alternativa proporciona tasas de indigencia y pobreza levemente superiores a aquellas obtenidas a través de la alternativa 1 (más “conservadora”).

La tasa de indigencia a nivel de los hogares (con ambas alternativas de canastas) cayó entre 2010 y 2011 cerca de 1 p.p. Luego, esta tendencia a la baja continuó aunque con un menor nivel de intensidad, registrándose un descenso de solo 0,5 p.p. de la tasa de indigencia en los hogares urbanos entre 2011 y 2012. Tales evoluciones generan que, en 2012, aproximadamente el 2,8% (Cota Mínima) o 3,2% (Cota

19 La familia tipo aquí considerada está integrada por 3,09 adultos equivalentes: un matrimonio compuesto por un hombre de 35 años y una mujer 31 años, con niños de 5 y 8 años.

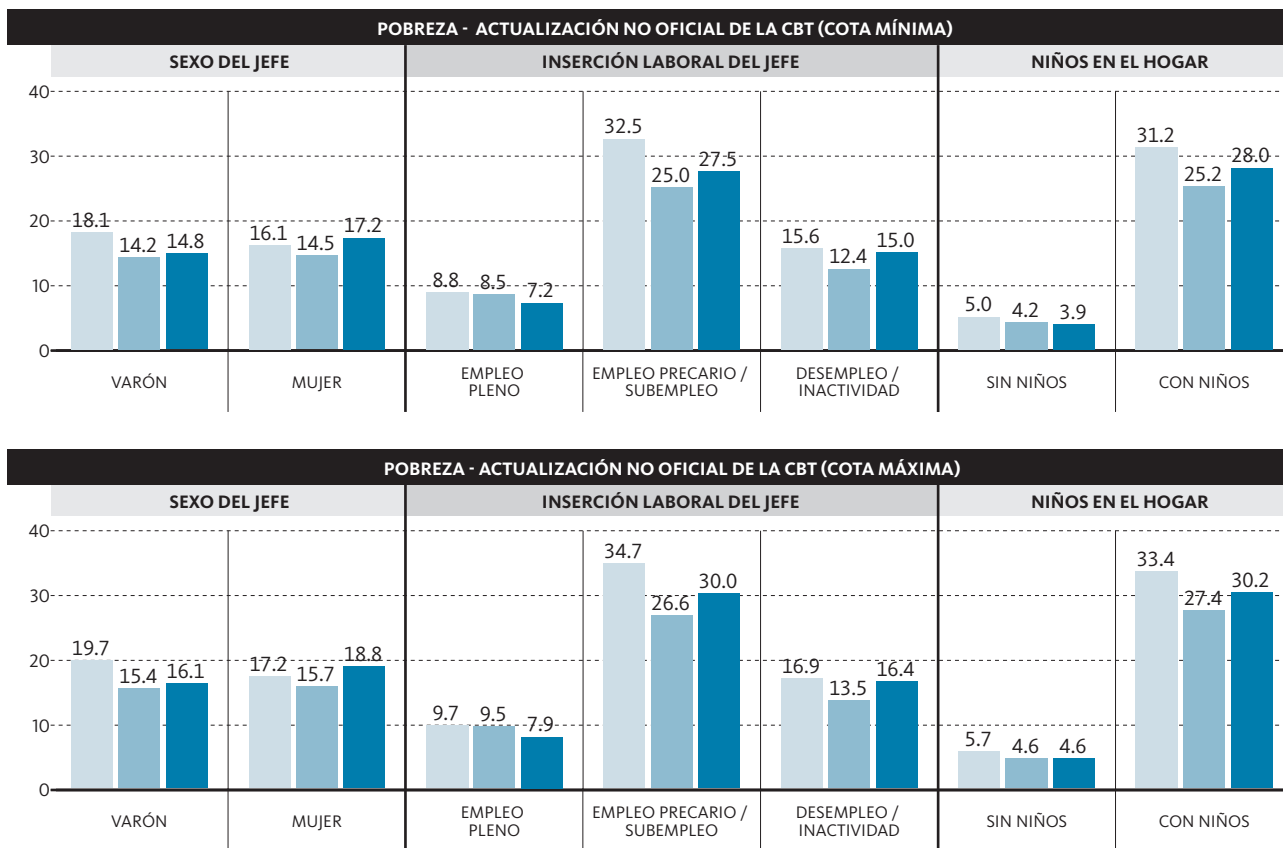
20 Los datos de indigencia y pobreza aquí presentados y analizados corresponden a los obtenidos a través de las dos alternativas de canastas no oficiales. Los datos completos de la versión digital de esta publicación incorporan las estimaciones que surgen de los ingresos según la EDSA pero empleando las canastas oficiales.

Figura 1.2.11

HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Máxima) de los hogares urbanos presenten ingresos, por equivalente adulto, por debajo de la CBA no oficial. Algo similar tuvo lugar a nivel de la población. Después de una caída de la indigencia de 2 p.p. entre 2010 y 2011 (cualquiera sea la alternativa de canastas utilizada), en 2012 la tasa descendió más levemente (figura 1.2.8)²¹. Fuera de estas tendencias, los datos

recabados revelaron que aún el 4,9% (Cota Mínima) o el 5,8% (Cota Máxima) de la población se encuentra en situación de indigencia estructural.

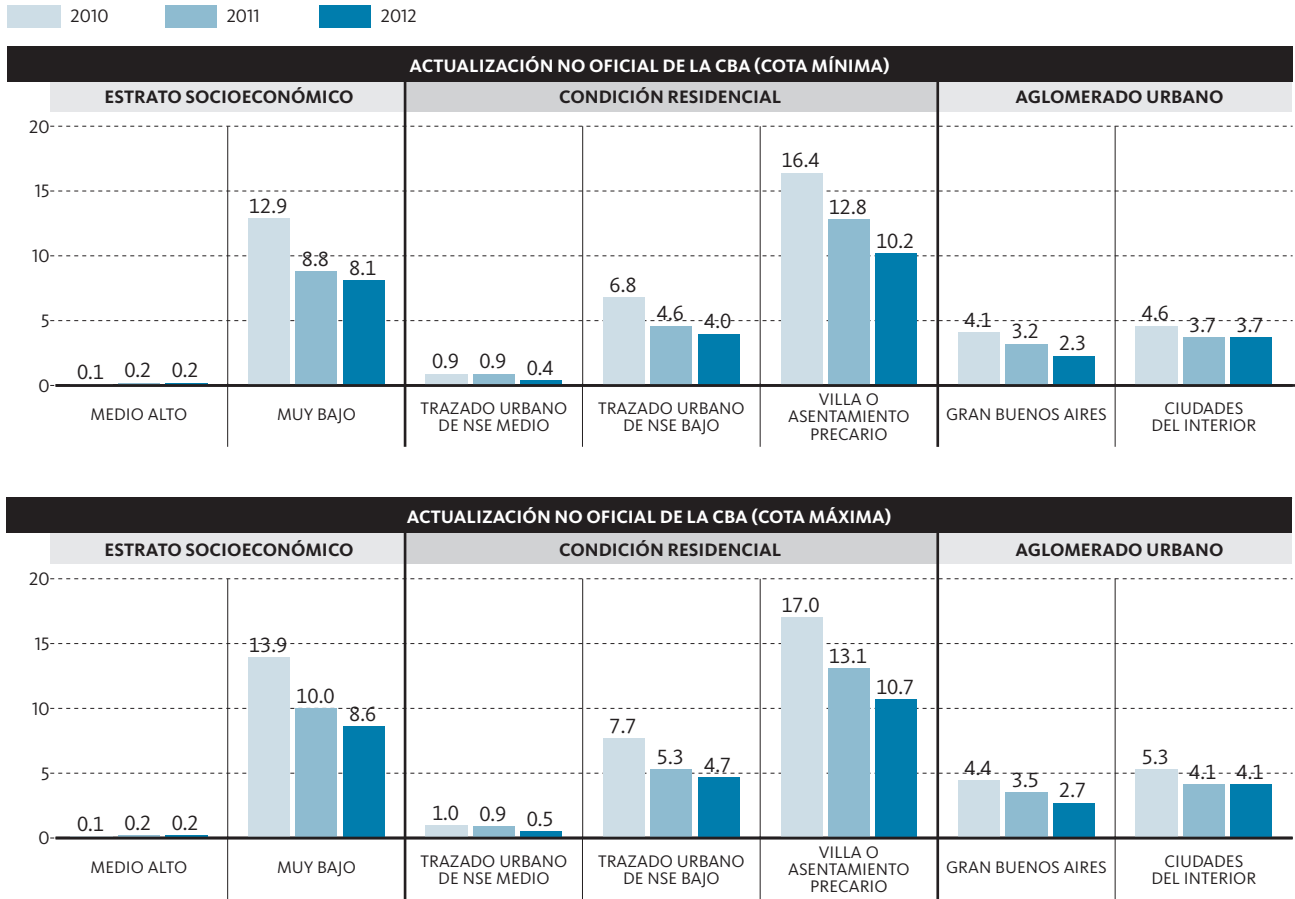
No sucede lo mismo, en términos dinámicos, con la proporción de hogares y población bajo la línea de pobreza. Si bien la tasa de pobreza en hogares y personas habría caído de manera significativa entre 2010 y 2011, en 2012 la proporción de personas pobres habría aumentado aproximadamente 1,6 p.p., alcanzando al 24,5% (Cota Mínima) o 26,9% (Cota Máxima) de la población. A nivel de hogares, la serie muestra esta misma tendencia, a saber: considerando la serie más “conservadora” de canastas, las tasas habrían alcanzado los niveles de 17,6%, 14,3% y 15,5% en los tres años analizados. Por su parte, empleando canastas que reducen el riesgo de exclu-

21 Considerando que la mayor parte del presupuesto de los hogares de más bajos ingresos está formada por la asistencia que brindan los programas sociales, podría suponerse que los efectos recesivos e inflacionarios de 2012 habrían sido compensados por los aumentos otorgados en estas ayudas económicas. Tal situación, sumada a un aumento del subempleo de subsistencia, explicaría que no se haya registrado un aumento de la indigencia. De todos modos, conviene aclarar que se trata de una población en situación de indigencia estructural.

Figura 1.2.12

HOGARES EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

sión de la población pobre, las tasas habrían llegado a 19,0%, 15,5% y 16,9%.²²

La insuficiencia de ingresos para cubrir las canastas básicas se manifiesta con desigual intensidad en los distintos conjuntos de hogares considerados (figuras 1.2.10 a 1.2.13).²³ Según la información ilustrada en la figura 1.2.10, en los tres años analizados la indigencia por ingresos fue más elevada en las unidades domésticas cuyo jefe tenía un trabajo precario o problemas de subempleo. Esta desigualdad en los porcentajes de indigencia según el tipo de inserción del jefe de hogar se evidencia más allá de la serie de canastas básicas empleada. Si se usan los valores de canastas que minimizan el error de exclusión de los pobres (Cota Máxima), el 5,7% de los hogares con jefe en empleo precario cayó en situación de indigencia en 2012, mientras que entre las unidades domésticas con jefe desocupado o inactivo el riesgo fue levemente menor (4,5%), y en aquellas con jefe en un empleo pleno, casi inexistente (0,7%).

22 La inflación mantuvo niveles muy altos durante el trienio, afectando sobre todo a los asalariados y no asalariados del sector informal, los cuales no vieron aumentado el nivel de su actividad laboral ni de sus ingresos reales.

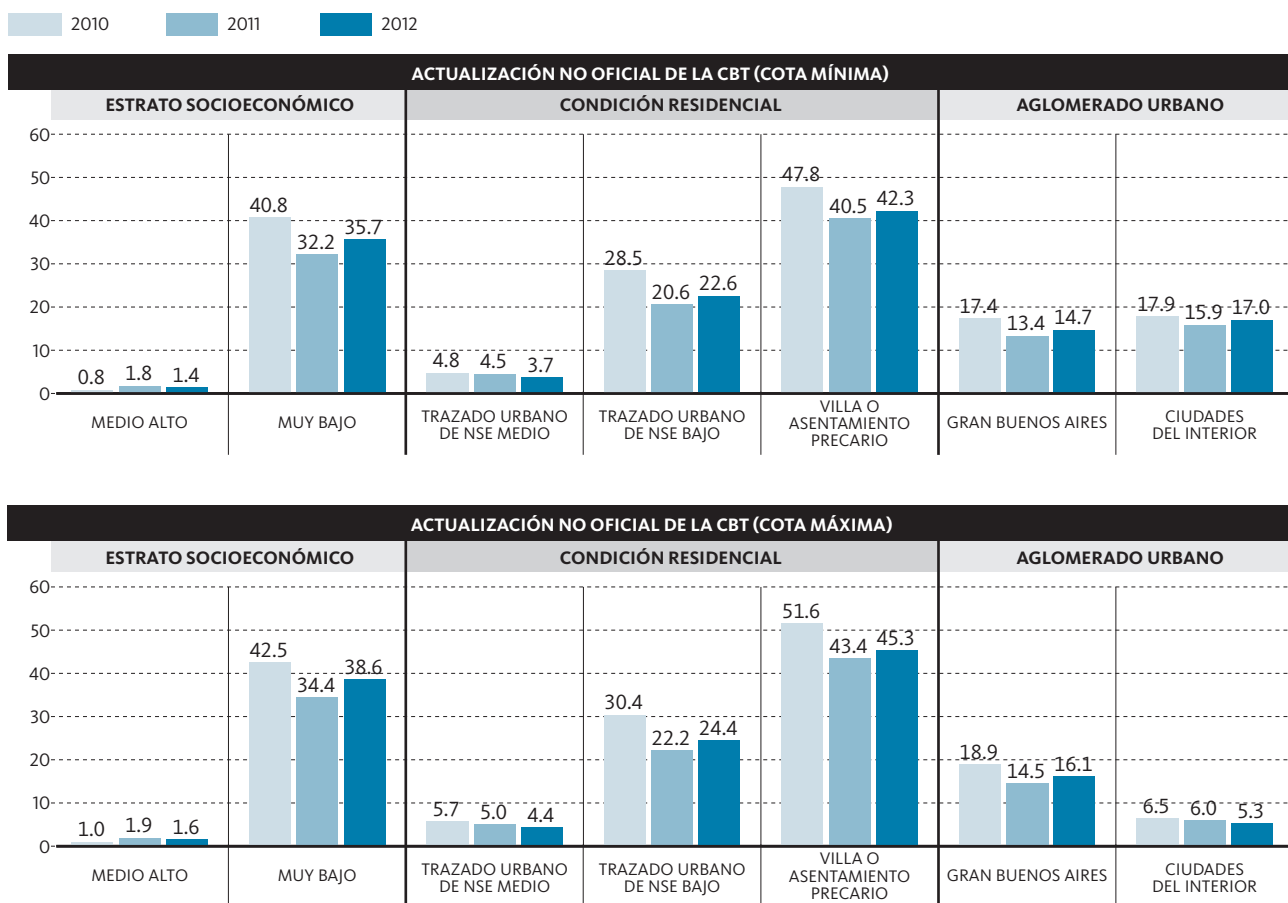
23 El siguiente análisis, el cual distingue la incapacidad para cubrir las canastas básicas según distintas variables seleccionadas, informa sobre la incidencia de la indigencia y la pobreza en hogares. Los datos correspondientes a las situaciones de indigencia y pobreza en personas, diferenciados según características consideradas, pueden encontrarse en los datos completos de la versión

digital de la publicación.

Figura 1.2.13

HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

En lo que respecta a la presencia de menores en el hogar, mientras que la indigencia afectó al 5,3% (Cota Mínima) o 6,1% (Cota Máxima) en los hogares con niños, en el caso contrario el indicador se ubicó en solo el 0,5%. La disparidad en la incidencia de la indigencia según dicho indicador aumentó en 2012 en comparación con los valores presentados en los años previos. Por otra parte, las discrepancias en las tasas de pobreza según las características seleccionadas no difieren significativamente de lo indicado respecto de la incidencia de la indigencia. En este sentido, a lo largo del trienio la pobreza afectó principalmente a los hogares con niños (entre 28% y 30,2%) y aquellos cuyo principal sostén económico desarrollaba un trabajo precario o padecía problemas de subempleo (alrededor del 30%). Esta situa-

ción aumentó levemente en 2012 en comparación con años anteriores (figura 1.2.11).

En igual sentido, el aumento de la tasa de pobreza ocurrido durante el último año (2012) se explica, en buena medida, por el incremento de esta situación en los hogares cuyo jefe se hallaba en un empleo precario o subempleado y en las unidades domésticas con niños. No sucede lo mismo al evaluar la tasa de indigencia, la cual, como ya se indicó, descendió durante el último año.

Por otra parte, las proporciones de hogares bajo las líneas de indigencia y de pobreza difirieron de manera significativa según el estrato socioeconómico y la condición residencial (figuras 1.2.12 y 1.2.13). En 2012, poco más del 8% de las familias del estrato más bajo no alcanzó a cubrir la canasta básica alimentaria,

mientras que en el estrato más favorecido resultó casi inexistente la proporción de hogares bajo la línea de indigencia (0,2%). El mayor riesgo de sufrir este tipo de problemática se concentró en las villas y asentamientos precarios (alcanzando cerca del 10% de los hogares allí localizados).

De modo análogo, al evaluar los niveles de pobreza en 2012 según las características seleccionadas, entre el estrato menos favorecido y las villas y asentamientos precarios se registró una mayor proporción de hogares bajo la línea de pobreza. En términos dinámicos, el aumento que se observa –a nivel agregado– en la incidencia de la pobreza durante el último año es particularmente intenso en los estratos socioeconómicos muy bajo y bajo. Sumado a ello, los niveles de pobreza se incrementaron también de forma significativa en las villas o asentamientos precarios y en los barrios de sectores populares dentro de la traza urbana formal.

Con relación al aglomerado urbano de residencia, los datos revelan que el área del Gran Buenos Aires se encontraba en una mejor situación en cuanto a la indigencia y la pobreza en comparación con las Ciudades del Interior del país. Esta disparidad en la incidencia de la indigencia se incrementó muy levemente en 2012 en comparación con la registrada en los años anteriores. En lo que concierne a la pobreza, el Gran Buenos Aires exhibió tasas más bajas pero el mayor incremento –entre 2011 y 2012–, retrayendo muy levemente la divergencia registrada en el año anterior.

A efectos de profundizar esta temática, a continuación se evalúa brevemente la medida en que algunos factores sociodemográficos y económicos se asocian con el riesgo de que los hogares caigan en la indigencia y en la pobreza por ingresos, controlando los factores restantes.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA INDIGENCIA Y LA POBREZA

El estudio de la evolución de las tasas de indigencia y pobreza puede ser profundizado con el propósito de distinguir los factores determinantes o asociados a este problema. Desde la perspectiva asumida en este estudio, se parte del reconocimiento de las condiciones de indigencia y pobreza en los hogares como fenómenos sometidos a múltiples determinantes, y relevantes desde el punto de vista social. Por este mo-

tivo, interesa indagar en las características sociodemográficas y socioeconómicas que incrementan o reducen las probabilidades de tener ingresos familiares insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria (CBA) o la canasta básica total (CBT).²⁴

En un contexto fuertemente inflacionario, recesivo, de aumentos del desempleo y subempleo, es menester preguntarse, en primer lugar, cuáles son los factores sociodemográficos y socioeconómicos del hogar que incrementan la probabilidad de ser indigente/pobre; y en segundo lugar, en qué medida la composición del hogar, su capital social y económica y su condición socio-residencial pueden considerarse factores subyacentes al riesgo de ser indigente/pobre.

A fin de dar rigurosidad y precisión al análisis, se ha adoptado una estrategia metodológica que permite evaluar el efecto específico de una serie de rasgos estructurales de los hogares –aislando el efecto del resto– sobre la probabilidad de ser indigentes/pobres. A tal efecto, se emplea la información relevada por la EDSA-Bicentenario (2010-2016) correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, a partir de la cual se ha buscado ajustar, a través del método de regresión logística, un modelo explicativo multivariado. En este modelo, la variable dependiente toma los valores 1 y 0, siendo 1 el correspondiente al hogar con ingresos inferiores a la línea de indigencia/pobreza y 0 los hogares con ingresos iguales o superiores a esas líneas. A su vez, si los coeficientes β_i son positivos, implica que la probabilidad de encontrarse bajo situación de indigencia/pobreza aumenta frente a la condición referenciada en la variable independiente. De manera contraria, si los coeficientes β_i son negativos, el factor bajo análisis hace descender las chances de ser indigente/pobre. Se exponen además los coeficientes R cuadrado de Cox y Snell, R cuadrado de Nagelkerke y el porcentaje global de aciertos, los cuales pretenden dar cuenta del grado de ajuste del modelo desde una perspectiva estadística.

Así, pues, se evalúa la probabilidad de los hogares de ser indigentes/pobres dependiendo de un conjunto de variables consideradas relevantes, las cuales pueden ser agrupadas en tres dimensiones de análisis: 1) características del hogar (presencia de niños en el hogar y sexo, educación y tipo de inserción laboral del jefe de

24 A los fines de este análisis se adopta como criterio de estimación de los hogares en situación de indigencia y/o de pobreza las respectivas canastas que hemos denominado de Cota Máxima.

hogar); 2) situación social del hogar (estrato socioeconómico, situación residencial y tipo de aglomerado); y 3) el año de análisis. El propósito es evaluar los factores anteriormente mencionados independientemente de la coyuntura socioeconómica (desde una perspectiva estructural) y, adicionalmente, conocer el efecto del año en las chances de caer en la indigencia/pobreza.

Es esperable que las condiciones laborales, sociales y económicas, así como las características vinculadas al área de residencia, influyan en la probabilidad de ser indigente/pobre. El siguiente análisis evaluará si esta hipótesis efectivamente se cumple, estimando el peso de cada factor en la probabilidad de ser indigente/pobre y, de este modo, analizará en qué medida las distintas características sociodemográficas y socioeconómicas del hogar contribuyen a predicar sobre la condición de indigencia y de pobreza.

En función del objetivo y los interrogantes planteados, se presentan en la figura 1.2.14 los resultados obtenidos en dos modelos multivariados de regresión logística. Tal como ya se señaló, estos tienen como finalidad estimar el efecto específico de una serie de factores sociales sobre el riesgo de caer en condición de indigencia (en el Modelo I) y en condición de pobreza (en el Modelo II). La fuerza de cada una de estas relaciones es examinada a través de las razones de probabilidades (odds ratio) que arrojan las regresiones (coeficientes “Exp B”).

En los principales centros urbanos del país, la propensión de los hogares a caer en situación de indigencia (Modelo I) según las características seleccionadas revela que aquellos con jefatura femenina tienen aproximadamente 28% más de probabilidades de caer en la indigencia que los de jefatura masculina. Asimismo, las unidades domésticas cuyo jefe se halla en empleo precario o subempleo presentan más del triple de chances que las unidades con jefe en empleo pleno de encontrarse en situación de ingresos por debajo de la línea de indigencia. Análogamente, los hogares con niños registraron 6 veces más de probabilidades de estar en la indigencia que los hogares constituidos solo por adultos.

Cuando se examinan los efectos de la situación socioeconómica del hogar sobre la posibilidad de tener ingresos por debajo de la línea de indigencia –manteniendo constantes los demás factores intervinientes– se destaca su fuerte impacto. De hecho, entre los hogares del estrato muy bajo las chances de caer en la

indigencia son 22 veces más que las registradas en el estrato medio alto. Algo similar, aunque con menor intensidad, ocurre en los estratos bajos y medio bajos, en los cuales la probabilidad de indigencia es de casi 9 y 3 veces más, respectivamente, que en los hogares del estrato medio alto. Las urbanizaciones formales de estrato socioeconómico bajo tienen 81% más de probabilidades de estar en la indigencia que los hogares radicados en barrios formales de estratos medios. Este riesgo se duplica sobradamente en las unidades domésticas de villas o asentamientos precarios en comparación con los hogares de estratos medios.

Es necesario recordar aquí que las desigualdades mencionadas según situación social y económica del hogar se encuentran presentes más allá del año de análisis considerado, pues intervienen de manera estructural, independientemente de la coyuntura socioeconómica. A su vez, tanto los resultados del año 2011 como los del 2012 evidenciaron menores chances de indigencia –controlando la evolución del resto de las variables– que los de 2010. Por último, es preciso añadir que la educación del jefe de hogar y el tipo de aglomerado de residencia no resultaron significativos como factores determinantes de la condición de indigencia. Esto se debió a que al peso de otros factores resultaron lo suficientemente robustos como para explicar el fenómeno en cuestión.

No obstante lo señalado sobre la probabilidad de los hogares de caer en la indigencia (Modelo I), corresponde también analizar si se presentan diferencias significativas en las desigualdades mencionadas al evaluar los factores que condicionan las chances de caer en situación de pobreza (Modelo II). Acerca de la incidencia de las características sociodemográficas de los hogares sobre esta situación, cabe destacar el efecto del tipo de inserción laboral del jefe y la presencia de niños en el hogar, puesto que en los hogares con jefe en empleo precario o subempleo y en aquellos con presencia de niños, las probabilidades de caer en la pobreza se duplicaron y se incrementaron en 9 veces, respectivamente.²⁵

Del mismo modo que para la situación de indigencia, debe tenerse presente el impacto significativo de la situación socioeconómica de los hogares sobre la

25 Las categorías de control siguen siendo las mismas que las empleadas en los modelos multivariados previos: en este caso, los hogares con jefe en empleo pleno y los conformados únicamente por adultos.

Figura 1.2.14

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA INDIGENCIA Y LA POBREZA

Total de hogares. Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II	
	INDIGENCIA		POBREZA	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR				
SEXO DEL JEFE				
Varon (c)				
Mujer	0,244***	1,28	0,09	1,09
EDUCACIÓN DEL JEFE				
Con secundario completo (c)				
Sin secundario completo	-0,051	0,95	0,136**	1,15
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE				
Empleo pleno (c)				
Empleo precario / subempleo	1,250***	3,49	0,840***	2,32
Desempleo / inactividad	1,119***	3,06	0,436***	1,55
NIÑOS EN EL HOGAR				
Sin niños (c)				
Con niños	1,814***	6,14	2,222***	9,23
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR				
ESTRATO SOCIOECONÓMICO				
Medio alto (c)				
Medio bajo	1,062**	2,89	1,088***	2,97
Bajo	2,189***	8,93	2,068***	7,91
Muy bajo	3,107***	22,35	2,884***	17,89
CONDICIÓN RESIDENCIAL				
Trazado urbano de NSE medio (c)				
Urbanización formal de NSE bajo	0,591***	1,81	0,516***	1,68
Villa o asentamiento precario	0,834***	2,30	0,742***	2,10
TIPO DE AGLOMERADO				
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)				
Conurbano Bonaerense	-0,134	0,87	-0,011	0,99
Grandes Areas Urbanas	0,154	1,17	0,067	1,07
Resto Urbano	0,226	1,25	0,207*	1,23
AÑO				
2010 (c)				
2011	-0,208**	0,81	-0,318***	0,73
2012	-0,477***	0,62	-0,227***	0,80
CONSTANTE	-7,918***	0,00	-5,753***	0,00
R cuadrado de Cox y Snell	0,075		0,252	
R cuadrado de Nagelkerke	0,266		0,420	
Porcentaje global de aciertos	96,1		86,5	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

probabilidad de percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza. De hecho, comparada con los hogares de estratos medios y altos, la razón de probabilidades aumenta casi 18 veces en hogares de estratos muy bajos, alrededor de 8 veces en los de estratos bajos, y 3 veces en los de estratos medios. Asimismo, los hogares situados en villas o asentamientos precarios duplican las probabilidades de ser pobres respecto de los lo-

calizados en barrios formales de estratos medios. Se evidencia así que el peso de las variables estructurales se mantiene, dando cuenta de que persisten con independencia de la coyuntura socioeconómica. Por otro lado, los resultados revelan –tal como se ha señalado al evaluar la indigencia– que tanto en 2011 como en 2012 se redujeron las probabilidades de pobreza respecto de 2010, siempre controlando el resto de los factores.

En suma, las mayores probabilidades de riesgo de indigencia y pobreza durante el trienio 2010-2012 se concentraron principalmente en los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, en hogares con niños y en aquellos con jefe en empleo precario o subempleado. Asimismo, los datos revelaron un riesgo mayor de indigencia y pobreza en los hogares localizados en villas o asentamientos precarios y, con menor intensidad, en los radicados en las urbanizaciones formales de estrato socioeconómico bajo.

1.3 CAPACIDADES DE CONSUMO Y AHORRO MONETARIO DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA

En el contexto de una economía capitalista, entre las estrategias que los hogares formulan para producir y reproducir sus condiciones materiales de vida se encuentra la disposición que hacen de sus ingresos para el consumo y el ahorro (Beccaria y Perelman, 1999; Torrado, 1998). La composición de cada uno de estos dos elementos dependerá de una diversidad de aspectos, pero fundamentalmente de los ingresos que logren reunir entre todos los miembros del hogar, ya sea que resulten del trabajo, la asistencia estatal o alguna actividad rentística. En cuanto a la estructura misma del consumo, las familias más pobres gastarán gran parte o la totalidad de sus ingresos en bienes de primera necesidad, mientras que a medida que se asciende en la estratificación social el ingreso pasará a cubrir otro tipo de adquisiciones y a generar ahorro.

Tal como se señaló en los párrafos iniciales de este capítulo, la propia evaluación de los actores sociales acerca de sus capacidades de consumo y ahorro constituye una dimensión y una vía relevante para el examen de las condiciones de vida de los hogares. En este sentido, el presente apartado aborda la percepción que los hogares tienen en torno a la insuficiencia de sus ingresos para el consumo cotidiano y sobre su ca-

pacidad de ahorro. Adicionalmente a este desarrollo, los datos estadísticos completos -los cuales pueden consultarse en la versión digital de esta publicación- ofrecen un mayor grado de detalle sobre los niveles y variaciones interanuales de cada uno de estos dos indicadores para el total urbano y según una serie de características seleccionadas de los hogares.

INGRESOS INSUFICIENTES

La insuficiencia de ingresos, la pérdida del poder adquisitivo y el sostenimiento del nivel de vida de los hogares representan aspectos heterogéneos en los distintos estratos sociales. Cuando un hogar pobre declara que el ingreso no le resulta suficiente para afrontar sus gastos corrientes, está indicando que no puede adquirir bienes fundamentales para la subsistencia y la reproducción de sus condiciones de vida (alimento, calzado, alquiler mensual, entre otros). Por el contrario, cuando una familia perteneciente al estrato medio alto es la que señala que sus ingresos corrientes no le alcanzan, está haciendo referencia a que no puede sostener el nivel de gastos en bienes y servicios que le permitan responder a sus patrones habituales de consumo o a los que desearía tener (entre los que posiblemente se encuentran bienes secundarios no esenciales para la subsistencia, servicios de esparcimiento, etcétera).

Los datos de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) permiten apreciar que aproximadamente a 3 de cada 10 hogares urbanos, durante el trienio bajo examen, el ingreso total que percibían no les resultaba suficiente para satisfacer sus necesidades y patrones habituales de consumo (figura 1.3.1). De hecho, tal y como ilustra la misma figura, el indicador de déficit retrocedió entre 2010 y 2011, incrementándose luego 3 p.p. en 2012.

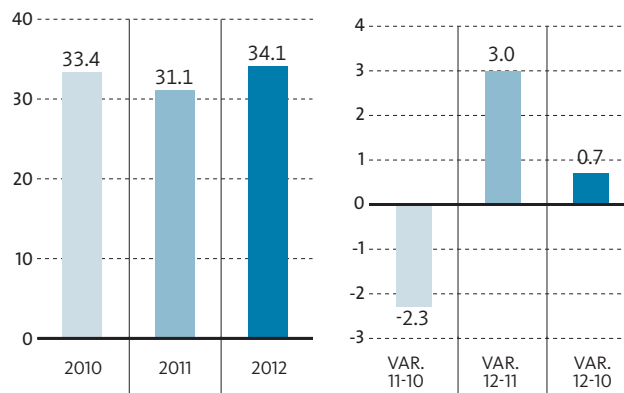
En los hogares cuyo principal sostén económico era una mujer, la insuficiencia de los ingresos resultó mayor que en aquellos otros con jefatura masculina, e incluso dicha disparidad se intensificó en el último año: la percepción de insuficiencia de ingresos en hogares con jefa creció 7 p.p. entre 2011 y 2012, mientras que, durante el mismo período, este indicador de déficit evidenció un aumento de menor intensidad (1,3 p.p.) en los hogares con un varón como jefe (figura 1.3.2).

La percepción en cuanto al nivel de ingresos está fundamentalmente vinculada con las características

Figura 1.3.1

INGRESOS INSUFICIENTES

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

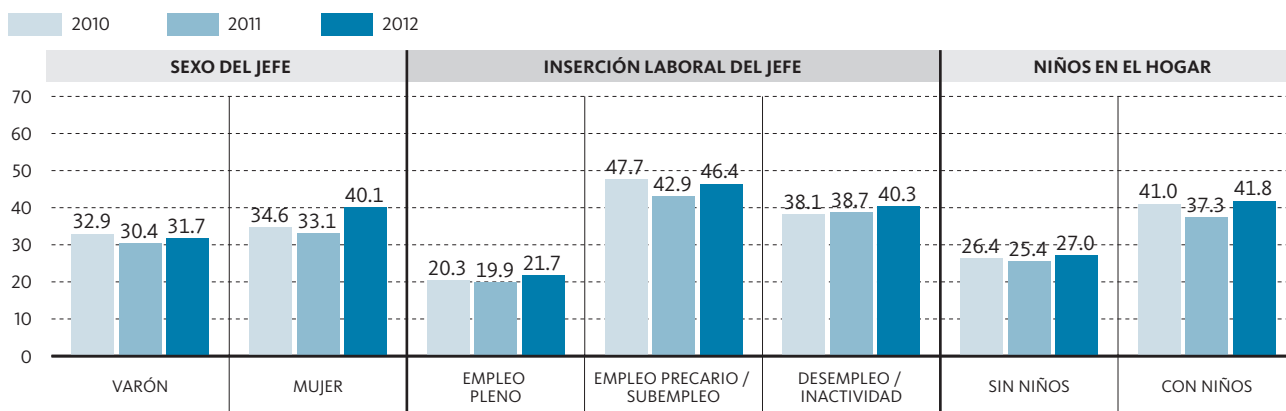
del mercado laboral y con el tipo de inserción en el mismo. Los datos revelan una marcada diferencia entre los hogares cuyo principal sostén se hallaba en situación de pleno empleo y los hogares donde apenas contaba con un trabajo precario o estaba subempleado. A lo largo de los tres años, en efecto, la insuficiencia monetaria en el segundo grupo, el más desfavorecido, duplicó la del primero. Mientras que en 2012 el 21,7% de los hogares con jefe en situación de pleno empleo consideró que el ingreso total le resultaba insuficiente para satisfacer sus necesidades y sostener sus patrones habituales de consumo, en los hogares cuyo jefe se encontraba laboralmente precarizado o subempleado, el indicador alcanzó el 46,4%. En términos dinámicos, durante el último año, el déficit aumentó más intensamente en los hogares con jefe en empleo precario (3,5 p.p.) que entre los hogares con jefe en empleo pleno (1,8 p.p.). En el caso de los hogares con jefes desempleados o inactivos, el indicador evidenció valores menores (aunque relativamente próximos) a los de las unidades domésticas con jefes en situación de precariedad laboral.

En el caso exclusivo de los hogares con niños, tras un descenso del indicador en 2011, hacia el final de la serie recobró los niveles del 2010. Algo similar en cuanto a tendencia ocurrió en las unidades domésticas sin presencia de menores de edad; aunque, desde luego, los niveles de déficit en estas son siempre mayores a los registrados en las que no viven niños. En 2012, pues,

Figura 1.3.2

INGRESOS INSUFICIENTES SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE DEL HOGAR Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

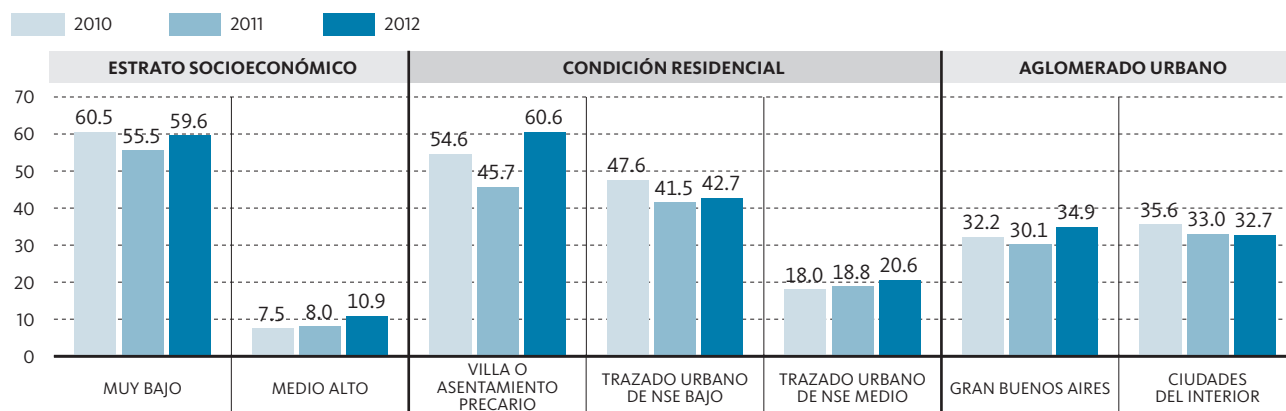


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.3.3

INGRESOS INSUFICIENTES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

mientras que el 27% de los hogares sin niños consideró insuficiente el nivel de ingreso familiar percibido, este porcentaje alcanzó al 41,8% de las familias con niños.

Habida cuenta de que la capacidad de consumo se encuentra directamente relacionada con los ingresos del hogar, y considerando que la desigualdad en este aspecto tiene un papel completamente decisivo en la estratificación socioeconómica, la figura 1.3.3 ilustra la diferencia en los valores del indicador entre el 25% más pobre de la población y el estrato medio alto.²⁶ Dicho

proporcionalmente: mientras que en 2012, 6 de cada 10 hogares del estrato muy bajo percibieron déficit en sus ingresos, solamente 1 de cada 10 del estrato medio alto consideraron insuficiente su nivel de recursos monetarios. Si bien esta brecha entre los extremos mencionados se redujo punta a punta del trienio (2010-2012), la desigualdad en la percepción subjetiva de

Argentina no releva los hogares de mayor poder adquisitivo, con lo que el parámetro de referencia y las brechas se construyen en relación con el estrato medio alto o lo que podría considerarse la clase media profesional y comercial.

26 Es importante aclarar que la Encuesta de la Deuda Social

la capacidad de consumo continúa siendo altamente significativa. Una unidad doméstica del estrato muy bajo registró entre 8,1 y 5,5 veces más chances (según el año de la serie considerado) de que sus ingresos no le permitieran satisfacer sus requerimientos de consumo, que otra perteneciente al estrato medio alto.

Según la condición residencial, entre los hogares de barrios de nivel socioeconómico medio, la insuficiencia de ingresos desde una perspectiva subjetiva ascendió en 2012 al 20,6%, mientras que dicho porcentaje alcanzó al 60,6% de los hogares de villas o asentamientos precarios. El nivel de este déficit fue también muy elevado (42,7%) para aquellos hogares emplazados en barrios de bajo nivel socioeconómico. Se puede inferir, en este sentido, que más allá de la problemática habitacional que enfrenta una porción de la población, existe una importante desigualdad entre los propios hogares de zonas formalmente urbanizadas. La comparación es elocuente: un hogar de un barrio de trazado urbano de bajo nivel socioeconómico registró aproximadamente 2 veces más de chances de que sus ingresos no le permitieran satisfacer sus requerimientos de consumo, que otro localizado en un barrio de nivel socioeconómico medio.

Con todo, la disparidad en la percepción de insuficiencia de ingresos según los aglomerados se encuentra lejos de alcanzar la intensidad observada según el estrato socioeconómico y la condición residencial. Así, y para terminar, tanto en el Gran Buenos Aires como en las Ciudades del Interior, aproximadamente 3 de cada 10 unidades domésticas declararon una disponibilidad insuficiente de sus ingresos familiares.

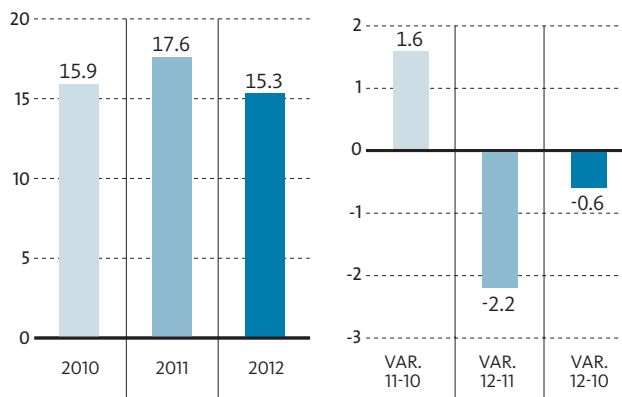
CAPACIDAD DE AHORRO

Articulada a la insuficiencia de ingresos para sostener el consumo, la capacidad de ahorro constituye otro indicador idóneo para dar cuenta de la situación económica de los hogares y su capacidad de maniobrar en el contexto de una economía capitalista. Dado que el ahorro equivale a la postergación o al diferimiento de ciertos consumos pero no los que satisfacen las necesidades básicas de subsistencia, que un hogar pueda ahorrar implica que las necesidades fundamentales se hallan en gran parte o totalmente cubiertas. En contextos inflacionarios, esto resulta particularmente cierto para los hogares de estratos medios y bajos, que

Figura 1.3.4

CAPACIDAD DE AHORRO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

no tienen capacidad de especular, hogares en los que, en muchos casos, se hace preferible adelantar consumos y no postergarlos, debido a la incertidumbre del poder adquisitivo del dinero en el futuro inmediato. En este contexto, el hecho de que un hogar reconozca que tiene capacidad de ahorro resulta indicativo de que sus necesidades de consumo primarias y secundarias quedaron efectivamente satisfechas.

Al nivel del total urbano, en el año 2012 el 15,3% de los hogares declararon haber tenido capacidad de ahorro (figura 1.3.4). Tras un fortalecimiento en 2011, dicha capacidad se redujo durante el último año analizado.

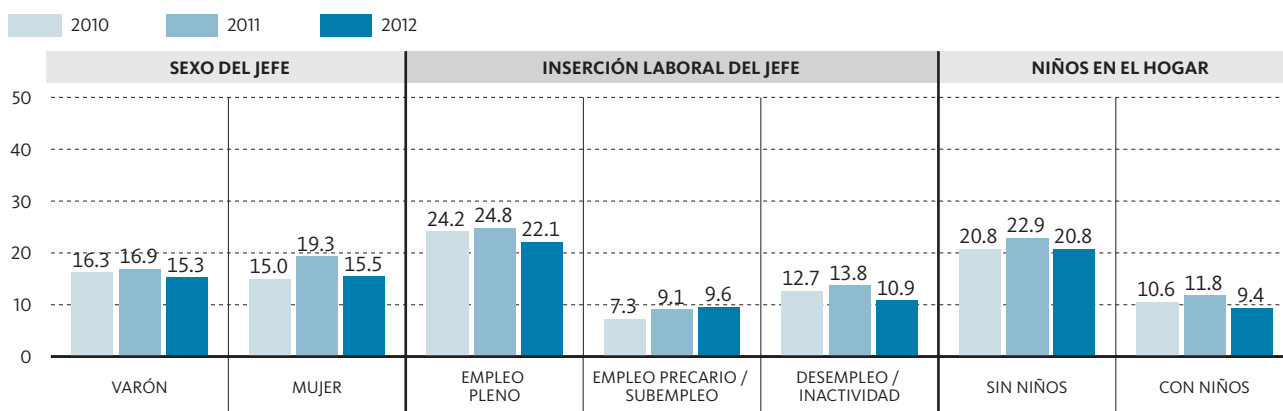
Sin embargo, la capacidad de ahorro no difiere significativamente según el sexo del jefe de hogar. Distinto es el caso al clasificar las unidades domésticas según tipo de inserción laboral del jefe. Los hogares con jefe en un empleo pleno registraron el doble de chances de poder ahorrar, que aquellos con jefe en situación de precariedad laboral o subempleo, desempleado o inactivo. Estas disparidades en la capacidad de ahorro, según el tipo de inserción laboral, no se vieron alteradas significativamente durante 2012.

En lo que respecta a la presencia de niños y adolescentes en el hogar, a lo largo de la serie, en los conformados por adultos solamente la capacidad de ahorro duplicó la existente en los hogares con niños. En 2012, mientras que el 20,8% de las familias sin niños tuvo capacidad de ahorro, en las con niños el indicador fue aproximadamente la mitad (9,4%). Esta desigualdad

Figura 1.3.5

CAPACIDAD DE AHORRO SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE DEL HOGAR Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

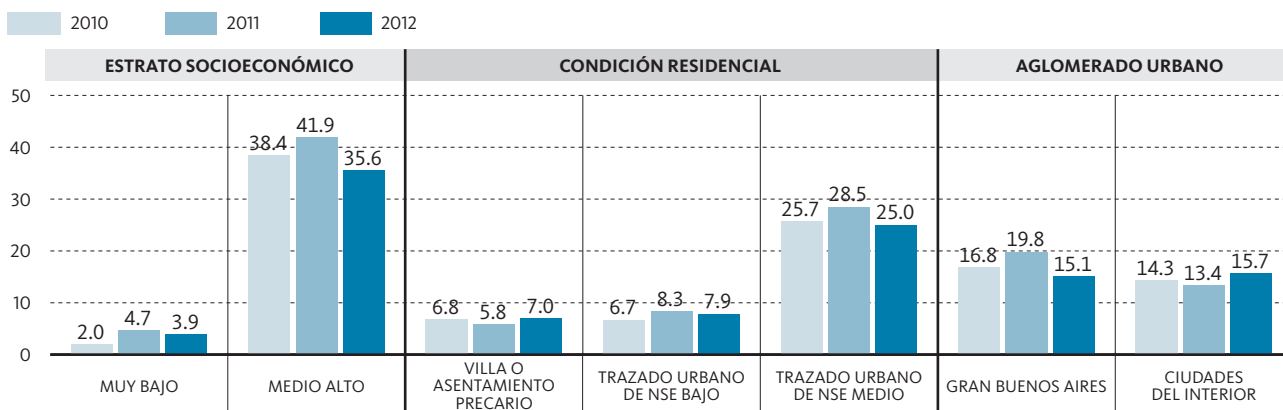


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.3.6

CAPACIDAD DE AHORRO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

en la capacidad de ahorro según tipo de hogar no se alteró significativamente a lo largo del trienio.

La ventaja de que el jefe desarrolle un empleo pleno se fortalece cuando se examina el comportamiento del indicador según el estrato socioeconómico de pertenencia (figura 1.3.6). En 2012, la capacidad de ahorro alcanzó al 35,6% de los hogares más favorecidos en la estructura social, mientras que apenas llegó al 3,9% de los del estrato muy bajo, cuyos miembros declararon no tener esa posibilidad. La información reunida revela que la desigualdad en la capacidad de ahorro según estrato de pertenencia fue significativa-

mente elevada a lo largo de todo el período. En efecto, en los tres años de la serie se observa que un hogar del 25% superior de la estratificación social tuvo aproximadamente 9 veces más de probabilidades de poder ahorrar que otro perteneciente al estrato más bajo.

Por su parte, los hogares localizados en los mejores barrios dentro de la traza urbana formal mostraron una capacidad de ahorro considerablemente mayor que los otros dos grupos. En 2012, el indicador para estos se ubicó en 17,1 p.p. por encima del valor registrado para las unidades domésticas de las zonas pobres dentro de la urbanización formal, y 18 p.p. por

sobre las de villas y asentamientos precarios. Es decir, existe una franja de hogares altamente vulnerables en cuanto a la falta de capacidad para ahorrar –y no tan distintos entre sí en este aspecto– que se ubican tanto en zonas formalmente urbanizadas como en villas y asentamientos.

Por último, similarmente a lo evaluado acerca de la insuficiencia de ingresos, en 2012 no se apreció una diferencia considerable en la capacidad de ahorro entre los hogares del Gran Buenos Aires y los de las Ciudades del Interior del país. La desigualdad en este indicador, según el aglomerado de residencia, se redujo en comparación con la brecha registrada en 2011.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA INSUFICIENCIA DE INGRESOS EVALUADA DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA

El propósito de esta sección es deducir el peso que tienen determinadas variables independientes sobre la insuficiencia de ingresos considerada desde una perspectiva subjetiva. Interesa aquí, pues, indagar las características sociodemográficas y socioeconómicas que incrementan o reducen las probabilidades de declarar insuficiencia de ingresos.

A tal efecto, se emplea la información relevada por la EDSA-Bicentenario (2010-2016) correspondiente a 2010-2012, a partir de la cual se ha buscado ajustar mediante el método de regresión logística un modelo explicativo multivariado. En este, la variable dependiente toma los valores 1 y 0, siendo 1 cuando el hogar tiene ingresos que declara como insuficientes (desde una perspectiva subjetiva). Tal como ya se indicó, si los coeficientes B_i son positivos, la probabilidad de insuficiencia de ingresos aumenta frente a la condición referenciada en la variable independiente. Por el contrario, si los coeficientes B_i son negativos, el factor bajo análisis hace descender las chances de ingresos insuficientes.

Se evalúa la probabilidad de los hogares de declarar ingresos insuficientes conforme a un conjunto de variables consideradas relevantes, las cuales se incorporan secuencialmente y pueden ser agrupadas en tres dimensiones de análisis: 1) características del hogar (presencia de niños en el mismo, sexo, nivel educativo y tipo de inserción laboral del jefe de hogar); 2) situación social del hogar (estrato socioeco-

nómico, situación residencial y tipo de aglomerado); y 3) año de análisis. Se trata de evaluar los factores anteriormente mencionados de manera independiente a la coyuntura socioeconómica y, asimismo, conocer el efecto del año en la probabilidad de insuficiencia de ingresos.

En función del objetivo propuesto, la figura 1.3.7 presenta los resultados obtenidos en tres modelos multivariados de regresión logística, ajustados en función de estimar el efecto específico de una serie de factores sociales de riesgo. En este caso, la fuerza de cada una de estas relaciones es examinada a través de las razones de probabilidades –odds ratio– que arrojan las regresiones (coeficientes “Exp B”).

La incorporación de variables se realizó en tres etapas. En la primera se incorporan como variables independientes las vinculadas a las características del hogar. Las variables seleccionadas con referencia a la situación social del hogar se incorporan en la segunda etapa (incluyendo entre estas también el tipo de aglomerado), y en la tercera, el año de relevamiento. A efectos de facilitar la comprensión, se analizan los resultados obtenidos en la última etapa (haciendo breve referencia a las etapas previas solo de ser necesario).

En cuanto a las características del hogar que inciden con significación estadística en la probabilidad de declarar insuficiencia de ingresos, en primer lugar, los hogares con jefes en empleo precario/subempleo, desempleados o inactivos registraron más probabilidades de insuficiencia de ingresos que los hogares con jefe en empleo pleno (cerca de 70% y 38%, respectivamente). La declaración de ingresos insuficientes se incrementó 76% en los hogares con presencia de niños. En la misma línea, las unidades domésticas con jefa mostraron mayores probabilidades de declarar una percepción de ingresos insuficientes.

Si bien la última etapa del modelo revela que el nivel educativo más bajo disminuye las chances de tener ingresos insuficientes (respecto de los hogares con jefe de más nivel educativo), es menester aclarar que este efecto se evidencia al incorporar al modelo las variables independientes del segundo bloque. Esto es, al no controlar los factores vinculados a la situación social del hogar, el menor nivel educativo sí incrementaba las chances de declarar insuficiencia de ingresos. Sin embargo, este efecto desaparece al incorporar las variables correspondientes a la situación socioeconómica de la unidad doméstica.

Figura 1.3.7

**CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA INSUFICIENCIA DE INGRESOS
-EVALUADA DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA-**

Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
SEXO DEL JEFE						
Varon (c)						
Mujer	0,152***	1,16	0,155***	1,17	0,155***	1,17
EDUCACIÓN DEL JEFE						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,856***	2,35	-0,250***	0,78	-0,246***	0,78
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE						
Empleo pleno (c)						
Empleo precario / subempleo	0,960***	2,61	0,535***	1,71	0,531***	1,70
Desempleo / inactividad	0,895***	2,45	0,327***	1,39	0,319***	1,38
NIÑOS EN EL HOGAR						
Sin niños (c)						
Con niños	0,718***	2,05	0,568***	1,76	0,567***	1,76
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo			1,025***	2,79	1,027***	2,79
Bajo			1,707***	5,51	1,711***	5,53
Muy bajo			2,485***	12,00	2,490***	12,06
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo			0,156***	1,17	0,151***	1,16
Villa o asentamiento precario			-0,142	0,87	-0,141	0,87
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense			0,294***	1,34	0,294***	1,34
Grandes Areas Urbanas			0,365***	1,44	0,367***	1,44
Resto Urbano			-0,022	0,98	-0,019	0,98
AÑO						
2010 (c)						
2011					-0,094**	0,91
2012					0,040	1,04
CONSTANTE	-2,152***	0,12	-2,932***	0,05	-2,913***	0,05
R cuadrado de Cox y Snell	0,114		0,178		0,179	
R cuadrado de Nagelkerke	0,159		0,248		0,249	
Porcentaje global de aciertos	70,0		72,5		72,5	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Si se toman como referencia los hogares del estrato medio alto, se observa que los del estrato medio bajo, bajo y muy bajo tienen más del doble de chances, alrededor de 5 y de 12 veces más, respectivamente, de padecer insuficiencia de ingresos. Algo similar, aunque con menor intensidad, sucede al evaluar el efecto de la situación socio-residencial. Los hogares que se localizan en zonas de nivel socioeconómico (NSE) bajo

tienen 16% más de probabilidades de insuficiencia de ingresos que los localizados en zonas de NSE medio. En lo que respecta al aglomerado de residencia, los resultados revelan que el Conurbano Bonaerense y las grandes áreas urbanas tienen, respectivamente, 34% y 44% más de chances de tener insuficiencia de ingresos (desde una perspectiva subjetiva) en comparación con lo registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

Aquí es útil recordar que las asociaciones mencionadas previamente se encuentran presentes más allá del año de análisis considerado. A su vez, los registros del año 2011 mostraron menos chances de que los hogares percibieran ingresos insuficientes, controlando la evolución del resto de las variables. El resultado obtenido para el 2012 es de signo contrario, aunque se debe destacar que no resulta significativo estadísticamente. Por último, la localización de los hogares en villas o asentamientos precarios y el Resto Urbano como área de residencia no resultó significativa en la percepción de insuficiencia de ingresos debido al peso de otros factores que resultaron más robustos para explicar el fenómeno en cuestión.

1.4 LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SU FUNCIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS HOGARES

Al estudiar la capacidad de subsistencia económica de los hogares como dimensión del desarrollo humano, es válido reflexionar por el alcance de los programas sociales de transferencias de ingresos no contributivos dirigidos a poblaciones socialmente vulnerables en sus capacidades de autonomía económica.²⁷ A diferencia de otros enfoques, se asume aquí que la condición de “beneficiario” por parte los hogares ante a tales programas no sólo constituye un indicador de acceso a un sistema público compensatorio, sino también y sobre todo, la expresión de una situación estructural e involuntaria de exclu-

27 Los programas sociales constituyen una herramienta con la cual los gobiernos intentan paliar los efectos negativos en la población que presenta dificultades económicas para su subsistencia (pobreza, indigencia, inseguridad alimentaria) derivadas de situaciones como el desempleo o la precariedad laboral. Uno de sus principales objetivos es promover el desarrollo humano a través del mejoramiento de las condiciones de vida de aquellas familias con algún grado de vulnerabilidad social. En el presente apartado se consideraron, entre los programas sociales, los dos tipos de transferencias económicas que existen actualmente en la Argentina: por un lado, aquellas ayudas que exigen ciertas condicionalidades para su efectiva recepción pero no una contraprestación laboral por parte del beneficiario (como la AUH, AUH por embarazo, jubilación no contributiva, pensión por siete hijos y otros programas estatales o de organizaciones civiles), y por otro lado, los programas de empleo que exigen contraprestar una determinada cantidad de horas semanales de trabajo (se incluyeron el Plan Argentina Trabaja, Jóvenes Más y Mejor Trabajo, Plan Jefes y Jefas y el Seguro de Capacitación y Empleo).

sión, en tanto que tales hogares serían justamente beneficiarios del mismo por carecer de autonomía económica o de una adecuada inserción en los sistemas formales de la seguridad social.

De modo tal que el incremento de la población cubierta por las transferencias económicas del Estado, un hecho que en sí mismo podría considerarse favorable, estaría revelando al mismo tiempo la existencia de una población vulnerada en cuanto al acceso a un empleo pleno de derechos y al sistema de protección correspondiente. Estos hogares, ante la insuficiencia de ingresos, estarían necesitando de la asistencia social del Estado para cumplir con sus necesidades básicas de subsistencia. En igual sentido, Rofman y Oliveri (2010) señalan que los programas sociales implementados en los países latinoamericanos no pretenden mejorar la distribución del ingreso, sino que en general buscan reemplazar ingresos laborales (mediante sistemas de jubilaciones y con seguros de desempleo), asegurar un ingreso básico (transferencias monetarias) o un consumo (entrega de bienes o servicios). Estos podrían, incluso, a juicio de los autores, incrementar el nivel de la desigualdad entre los hogares que cuentan con protección social y los que no, en la medida que sus efectos indirectos aún han sido poco estudiados.²⁸

Vale la pena mencionar que existe un extenso debate en torno a reconocer si la implementación de los programas sociales se está enfocando exclusivamente hacia una mejora en la capacidad de consumo del hogar de manera indirecta, o bien se trata de una de las políticas con que el Estado interviene en forma directa.²⁹ Por su parte, Lo Vuolo (2011) señala que

28 Estos autores sostienen que las condicionalidades exigidas por los programas sociales tienen efectos indirectos, más allá de los conocidos sobre los ingresos, que pueden ser relevantes en cuanto a su incidencia sobre el comportamiento de las personas y los hogares. Ejemplo de ello es la disminución de la oferta de empleo pleno con el consecuente aumento de la informalidad y la caída de la inscripción en los sistemas de protección social tradicional. Al respecto, Lo Vuolo (2011) señala que la fragmentación propuesta desde los programas mismos, induciría a ciertos comportamientos en el mercado laboral y en el ámbito familiar.

29 En tal sentido, mediante las transferencias de ingresos, se busca que los hogares beneficiarios puedan acceder al mercado de bienes para satisfacer sus necesidades básicas. Por su parte, Salvia y González (2011) señalan que los hogares socialmente vulnerables presentan limitaciones no solo de tipo coyuntural para satisfacer sus necesidades, sino que también existe una serie de características estructurales que ponen límites a las mejoras que

la institucionalización de ciertos programas sociales ha llevado a que la asistencia social del país muestre el incremento de las condicionalidades exigidas para convertirse en beneficiario de las mismas, y que en el caso de la AUH, por ejemplo, “se corresponde con una concepción de la política social favorable al paternalismo estatal y al control social en la orientación de las conductas privadas de las personas que están atrapadas en la necesidad de revalidar periódicamente sus credenciales de acceso” (p. 86).

Sin embargo, es también necesario reconocer el esfuerzo estatal por aumentar la cobertura de la asistencia social sobre esos mismos sectores, intentando focalizarla sobre la población más vulnerable como los hogares pobres. Aquí conviene notar además, que la reactivación económica experimentada en los últimos años no incluyó a todos los hogares por igual, de manera que quedó un amplio contingente de población sin posibilidades de insertarse en el mercado laboral e inscribirse en los sistemas de protección social, debiendo recurrir a la asistencia estatal, que en cualquier caso, quedó insuficiente para cubrir a todas las personas que requerían de la asistencia estatal para su subsistencia. De este modo, no se puede desconocer la existencia de amplios sectores vulnerados que continúan sin ningún tipo de ayuda económica.

En este marco, es relevante estudiar el grado de cobertura que actualmente presentan los programas sociales sobre los hogares con déficit de ingresos (en este caso, aquellos que se ubican por debajo de la línea de pobreza),³⁰ y poder acceder a una caracterización de aquellos que permanecen completamente desprotegidos. Para ello, los datos de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) correspondientes al cuarto trimestre de 2012 permiten medir la cobertura de los programas sociales y su incidencia sobre los hogares en condición de pobreza. El análisis propuesto sirve para evaluar en qué medida éstos han llegado o no a tales hogares; lo que al mismo tiempo permitiría caracterizar, *grosso modo*, a los que aun estando en situación de vulnerabilidad no acceden a ninguna ayuda económica.

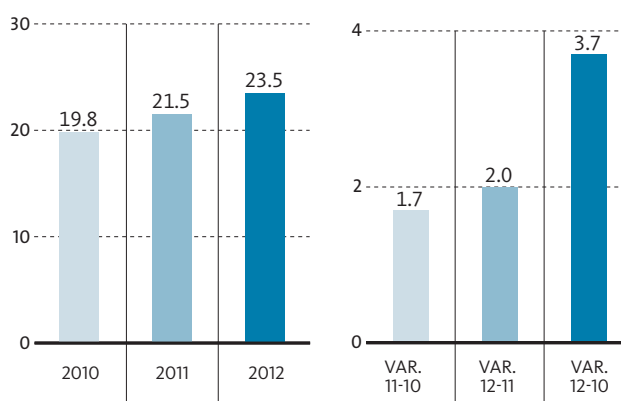
supone un incremento en los ingresos del hogar o la recepción de alguna ayuda material.

30 Para más detalles acerca de la evolución y construcción del indicador de pobreza por ingresos, véase el apartado 2.

Figura 1.4.1

RECEPCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LOS HOGARES

En el período que comprende el análisis, años 2010, 2011 y 2012, se observó un aumento leve pero sostenido en la recepción total de transferencias de ingresos a los hogares, alcanzando una variación de casi 4 p.p. Así, si en 2010 el 19,8% de los hogares urbanos declaró percibir algún programa social, en 2012 tal valor alcanzó a 23,5%. Como se observa en la figura 1.4.1, el incremento de hogares beneficiarios entre los años extremos de la serie fue de 18,3%.

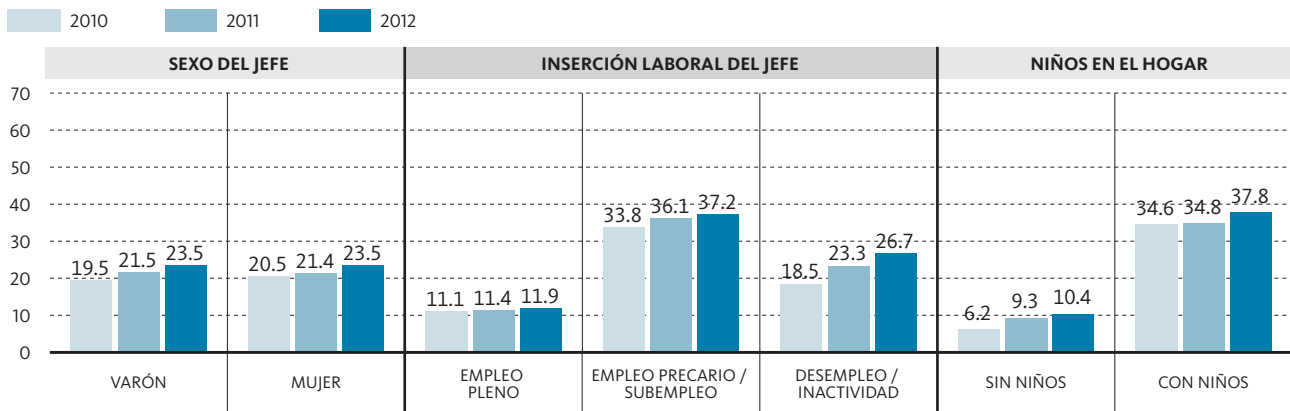
En lo que respecta a las características que definen a los hogares que reciben programas sociales, si bien aquellos con jefe en empleo precario o subempleo mostraron ser los que recibieron más transferencias de ingresos (superior a 30% a lo largo de la serie), el mayor incremento en la percepción de programas se mostró entre los hogares con jefe desocupado o inactivo, con una variación interanual de 8 p.p. entre 2010 y 2012 (al pasar de 18,5% a 26,7%). Por su parte, la cantidad de hogares con jefe en empleo pleno que recibían programas sociales se mantuvo estable durante los tres años (alrededor del 11%) (ver figura 1.4.2).

En la serie 2010-2012, los hogares con niños recibieron en promedio 4 veces más programas sociales que los hogares sin niños, alcanzando en 2012 a

Figura 1.4.2

HOGARES QUE RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

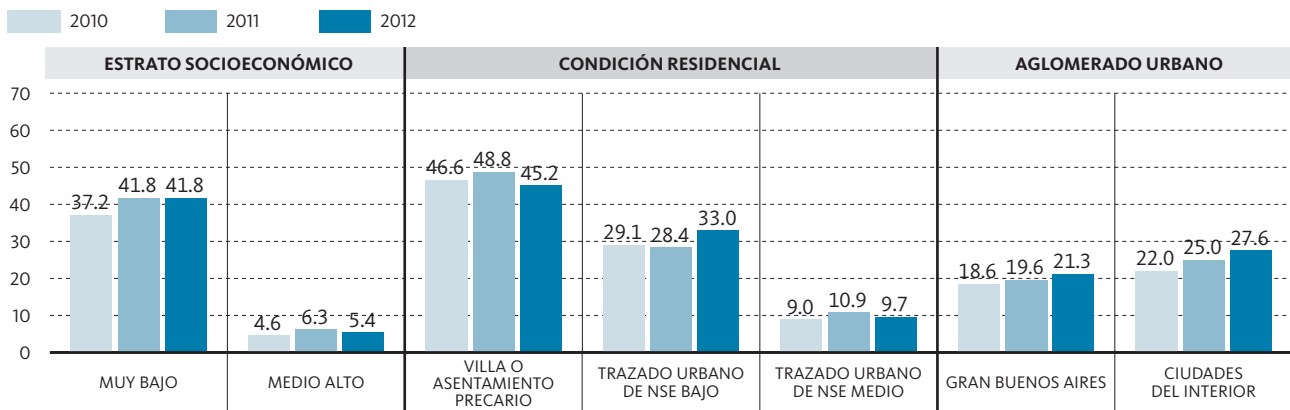


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.4.3

HOGARES QUE RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

37,8%. Esto se puede entender considerando que algunos programas sociales están focalizados especialmente en los hogares con niños, niñas y adolescentes, pues es en los que suelen presentarse los mayores niveles de vulnerabilidad social.

Según el estrato socioeconómico, los hogares pertenecientes al estrato más bajo de ingresos recibieron casi 10 veces más programas sociales que los del estrato más alto. Así, en los primeros se pasó de 37,2% en 2010 a 41,8% en 2012, mientras que los segundos variaron apenas 1 p.p. en los mismos años, llegando a 5,4% de los hogares en 2012 (ver figura 1.4.3).

En lo que atañe a la condición residencial, se aprecia que en todos los años los hogares localizados en villas o asentamientos precarios recibieron más programas sociales que aquellos de barrios con trazado urbano, tanto de nivel socioeconómico medio como bajo. Sin embargo, al revisar la serie de años propuesta para este análisis, se nota que entre 2010 y 2011 hubo una ampliación en la cantidad de hogares beneficiarios emplazados en villas (ascendió de 46,6% a 48,8%), y que posteriormente, entre 2011 y 2012, disminuyó (45,2%). Los hogares de barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo mostraron una ten-

dencia particular y contraria: descendió levemente la cantidad de hogares receptores de programas sociales en el primer subperíodo (de 29,1% a 28,4%), con un posterior mejoramiento para el año 2012 (33%). Finalmente, la recepción de programas sociales en los hogares del Gran Buenos Aires y de las Ciudades del Interior aumentó de manera considerable durante los tres años: en GBA subió de 18,6% en 2010 a 21,3% en 2012, y en el segundo aglomerado, de 22% a 27,6% en el mismo lapso.

LOS INGRESOS POR PROGRAMAS SOCIALES EN LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA

De acuerdo con los datos relevados por la EDSA-Bicentenario (2010-2016), la recepción de programas sociales en hogares en condición de pobreza aumentó en el período 2010-2012, aunque con ritmos diferenciales, pues mostró un incremento de casi 3 p.p. entre los dos primeros años, para luego subir más de 4 p.p. entre 2011 y 2012. Pasó así de 50,6% en 2010 a 57,6% en 2012 (un aumento del 13,8% entre los años extremos de la serie).

En lo referente a las características de los hogares pobres que recibían programas sociales, se evidenció un aumento tanto en los de jefatura tanto masculina como femenina, aunque en los últimos el incremento fue mayor en toda la serie (17,1 p.p.) en comparación con los primeros (2,5 p.p.). Esta característica se refleja en el aumento de la brecha existente entre los jefes y jefas que recibían programas sociales (la relación entre ambos sexos, que era de 0,9 en 2010, pasó a 1,2 en 2012).

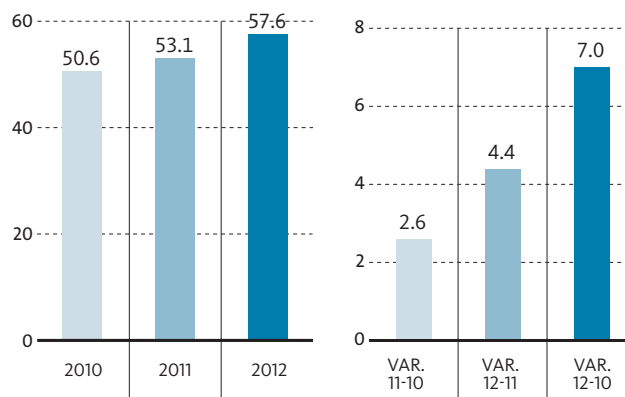
En la condición laboral del jefe de hogar aparece un aumento global de la cantidad de hogares pobres con transferencias de ingresos sin importar su situación laboral (pleno, precario o desempleado), aunque las dos últimas situaciones fueron constitutivas de los hogares a los que más llegó la asistencia estatal. La cantidad de hogares con jefe en empleo pleno aumentó de 32,4% en 2010 a 35,5% en 2012; mientras que aquellos con situación laboral precaria pasaron de 60,7% a 63,3% y, en los mismos años, los hogares con jefes desempleados o inactivos, de 45,3% a 62,9%. Como se evidencia, estos últimos experimentaron una mayor variación interanual.

La presencia de niños en el hogar ayuda a entender la fuerte diferencia que se presenta en cuanto a la recepción de programas sociales en los hogares pobres, pues

Figura 1.4.4

RECEPCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares pobres.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

aquellos con niños recibieron casi 3 veces más ayudas económicas que sus pares sin niños. Como muestra la figura 1.4.5, entre 2010 y 2012 aumentó de manera sostenida la cantidad de hogares pobres con niños que recibían ayudas económicas (pasaron de 56,6% a 62,9%), ayudas que también aumentaron en los hogares pobres sin niños (de 18,1% a 25%).

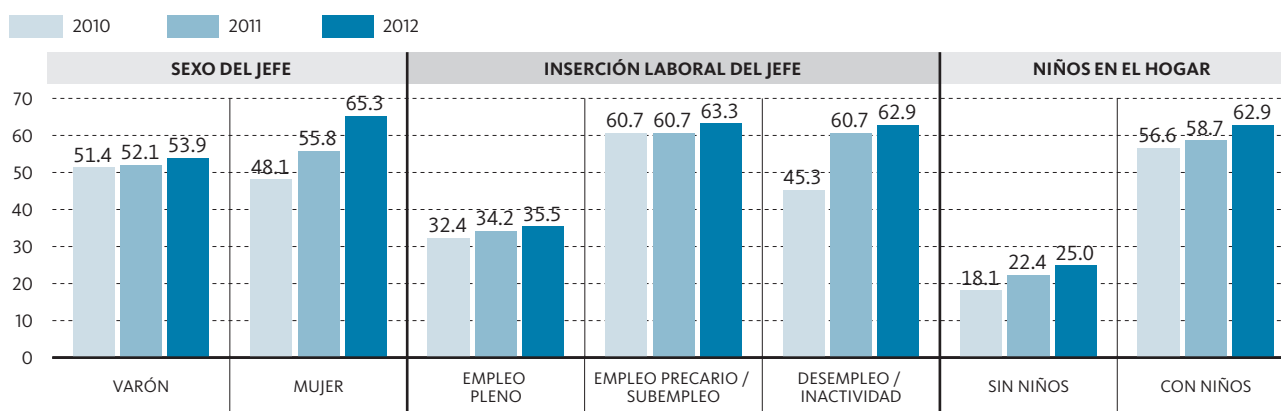
En todos los años se nota una relación inversa entre el estrato socioeconómico del hogar y la recepción de programas sociales, de manera que, previsiblemente, el estrato socioeconómico más alto presenta una recepción de programas sociales menor al estrato más bajo, que es donde se concentra buena parte de la recepción de los programas de transferencia de ingresos entre los hogares pobres. Sin embargo, aun con el incremento de hogares pobres del estrato más bajo que recibían programas sociales entre 2010 y 2012 (pasaron de 57,6% a 63,0%), las mayores variaciones interanuales se experimentaron en el estrato más alto (13,3 p.p. de aumento), lo que podría estar indicando las repercusiones que tuvo el sustancial aumento de la pobreza entre 2010 y 2012 en todos los estratos socioeconómicos.

Algo similar ocurre cuando se indaga por la condición residencial del hogar, pues si bien los situados en villas o asentamientos precarios fueron los que recibieron más programas durante el trienio estudiado, el comportamiento entre los años extremos de la serie evidencia un descenso en la cantidad de hogares pobres receptores de ayudas económicas en villas (de 63,3%

Figura 1.4.5

HOGARES POBRES QUE RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

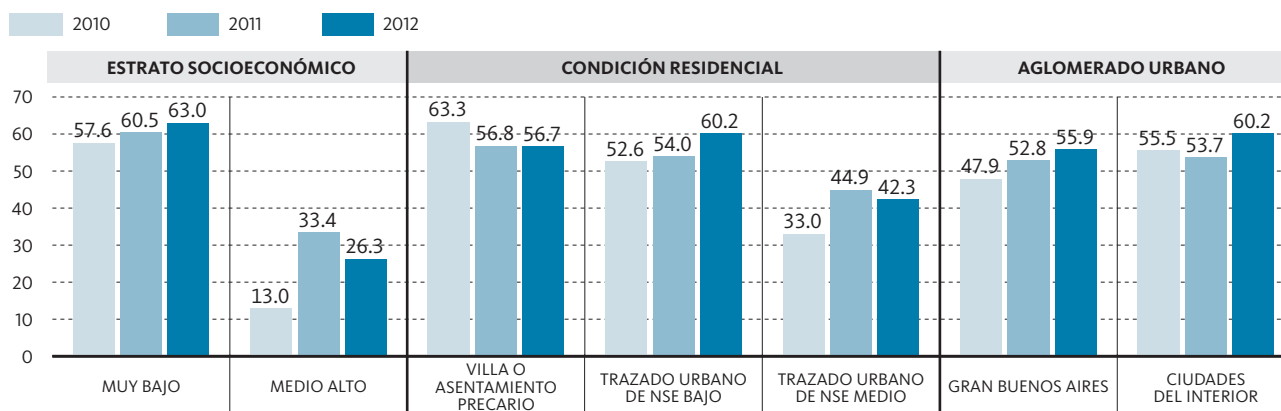


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 1.4.6

HOGARES POBRES QUE RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

en 2010 descendió a 56,7% en 2012). Entre tanto, los otros tipos de vecindario mostraron leves aumentos: las unidades domésticas de los barrios de trazado urbano de nivel socioeconómico medio tuvieron un incremento de 9,3 p.p., mientras que las de nivel bajo alcanzaron los 7,6 p.p. (ver figura 1.4.6).

Por último, la recepción de programas sociales en hogares pobres según su aglomerado de residencia evidenció un aumento paulatino en los tres años, tanto para los hogares del Gran Buenos Aires (ascendió de 47,9% en 2010 a 55,9% en 2012), como para los del Resto Urbano (de 55,5% a 60,2% en los años extremos).

COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES POBRES QUE NO RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES

Hecha la descripción de los hogares pobres receptores de alguna de las transferencias económicas del Estado, corresponde indagar la realidad de aquellos que estando en situación de pobreza no fueron beneficiarios de ningún tipo de ayuda asistencial. A efectos de avanzar en este análisis, seguidamente se hace una breve caracterización de tales hogares con la intención de ofrecer un perfil que permita

Figura 1.4.7

PERFIL DE HOGARES POBRES QUE NO RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares pobres.

				VARIACIONES ABSOLUTAS INTERANUALES (EN PP.)		
	2010	2011	2012	VAR. 11-10	VAR. 12-11	VAR. 12-10
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
SEXO DEL JEFE						
Varon (c)	73,0	73,3	73,7	0,3	0,4	0,7
Mujer	27,0	26,7	26,3	-0,3	-0,4	-0,7
EDUCACIÓN DEL JEFE						
Con secundario completo (c)	26,3	25,2	24,9	-1,2	-0,2	-1,4
Sin secundario completo	73,7	74,8	75,1	1,2	0,2	1,4
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE						
Empleo pleno (c)	29,0	30,1	30,8	1,1	0,7	1,7
Empleo precario / subempleo	41,4	44,5	47,3	3,1	2,8	5,9
Desempleo / inactividad	29,6	25,4	21,9	-4,2	-3,5	-7,6
NIÑOS EN EL HOGAR						
Sin niños (c)	25,9	25,4	24,9	-0,5	-0,5	-1,0
Con niños	74,1	74,6	75,1	0,5	0,5	1,0
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)	2,3	4,4	4,1	2,1	-0,3	1,8
Medio bajo	14,8	12,8	12,3	-2,0	-0,5	-2,5
Bajo	34,8	36,0	33,9	1,2	-2,1	-0,9
Muy bajo	48,1	46,8	49,7	-1,3	2,8	1,6
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)	18,7	17,9	15,7	-0,8	-2,2	-3,0
Urbanización formal de NSE bajo	65,4	66,0	67,8	0,6	1,9	2,4
Villa o asentamiento precario	15,9	16,1	16,5	0,2	0,3	0,6
TIPO DE AGLOMERADO						
TOTAL GRAN BUENOS AIRES						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)	8,0	7,4	7,1	-0,6	-0,3	-0,9
Conurbano Bonaerense	60,1	53,7	56,9	-6,4	3,1	-3,2
TOTAL URBANO INTERIOR						
Gran Rosario	4,7	4,4	5,1	-0,3	0,7	0,4
Gran Córdoba	4,7	7,6	8,4	2,9	0,8	3,7
Gran Mendoza	3,5	2,9	3,2	-0,6	0,2	-0,4
Gran Tucumán	5,0	6,2	4,1	1,1	-2,1	-1,0
Resto Urbano Interior	13,9	17,7	15,2	3,8	-2,5	1,3

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

entender cuáles de ellos presentan mayor grado de vulnerabilidad.

Los hogares con jefatura masculina, con secundaria incompleta y con presencia de menores de 18 años revelaron un mayor grado de vulnerabilidad, alcanzando en promedio, durante la serie, a 3 de cada 4 hogares pobres que no recibían programas sociales. Por su parte, la situación de precariedad laboral registró una incidencia mayor (1 de cada 2 hogares en promedio).

Según la situación socioeconómica de los hogares pobres que no recibieron programas sociales, se puede constatar mayor vulnerabilidad en los per-

tenecientes al estrato socioeconómico más bajo (1 de cada 2 hogares) y en los ubicados en barrios con trazado urbano de nivel bajo (1 de cada 3). Este último dato resulta de interés porque mostraría una focalización de los programas sociales hacia los hogares emplazados en villas o asentamientos precarios (figura 1.4.7).

Por último, en lo concerniente al aglomerado urbano, los datos indican que los hogares pobres que no recibieron transferencias de ingresos estaban localizados principalmente en el Gran Buenos Aires: 2 de cada 3 hogares pobres de dicho aglomerado no recibieron ayudas económicas durante el trienio.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA RECEPCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

Como complemento del análisis descriptivo basado en los datos relevados por la EDSA-Bicentenario (2010-2016), y con el objeto de reconocer los principales factores sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que intervienen sobre la recepción de programas sociales, a continuación se exponen los resultados obtenidos en dos modelos multivariados de regresión logística, ajustados en función de estimar el efecto específico de cada uno de los factores incluidos. La fuerza de estas asociaciones se examina separadamente a través de las razones de probabilidades (Odds Ratio) que arrojan las regresiones (coeficientes “Exp B”).

La figura 1.4.8 presenta el análisis multivariado para la recepción de programas sociales según características y situación social del hogar, y en los años, para el total de hogares (Modelo I) y para hogares en situación de pobreza que no reciben programas sociales (Modelo II).

El primer modelo, correspondiente a la recepción de ayudas económicas en el total de hogares, presenta un porcentaje global de aciertos del 82,5%. En este caso, de entre las características de composición demográfica del hogar, se muestra que el sexo del jefe resulta no tener significatividad estadística como factor explicativo de las mayores o menores posibilidades de percibir programas sociales. Por su parte, el grado educativo del jefe resulta determinante, siempre que se mantengan controlados el resto de factores; pues aquellas familias con jefe sin secundario completo presentaron 26% de mayores chances de ser beneficiario que sus pares con secundario completo. Esa capacidad explicativa se amplía al revisar la calidad de inserción laboral del jefe de hogar y la presencia de niños en el mismo; pues al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, ambos factores se constituyen en base explicativa de la recepción de programas sociales en los hogares: las unidades domésticas con jefe en situación de precariedad o subempleo tienen 3 veces más probabilidades de recibir programas de transferencia de ingresos que aquellas cuyo jefe cuenta con empleo pleno, en tanto que aquellas con jefe desempleado e inactivo presentan más del doble de chances que las últimas. Por su parte, los hogares con niños tienen 7 veces más oportunidades de recibir programas sociales que aquellos sin niños.

Figura 1.4.8

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA RECEPCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

En total de hogares y hogares pobres. Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II	
	TOTAL DE HOGARES		HOGARES POBRES QUE NO RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR				
SEXO DEL JEFE				
Varon (c)				
Mujer	0,004	1,00	0,023	1,02
EDUCACIÓN DEL JEFE				
Con secundario completo (c)				
Sin secundario completo	0,227***	1,26	-0,02	0,98
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE				
Empleo pleno (c)				
Empleo precario / subempleo	1,094***	2,99	0,02	1,02
Desempleo / inactividad	1,017***	2,77	-0,231***	0,79
NIÑOS EN EL HOGAR				
Sin niños (c)				
Con niños	1,948***	7,02	1,013***	2,75
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR				
ESTRATO SOCIOECONÓMICO				
Medio alto (c)				
Medio bajo	0,527***	1,69	1,168***	3,22
Bajo	0,937***	2,55	2,075***	7,97
Muy bajo	1,395***	4,03	2,395***	10,97
CONDICIÓN RESIDENCIAL				
Trazado urbano de NSE medio (c)				
Urbanización formal de NSE bajo	0,317***	1,37	0,344	1,41
Villa o asentamiento precario	0,553***	1,74	0,569	1,77
TIPO DE AGLOMERADO				
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)				
Conurbano Bonaerense	0,104	1,11	0,12	1,13
Grandes Areas Urbanas	0,329***	1,39	-0,02	0,98
Resto Urbano	0,456***	1,58	0,176*	1,19
AÑO				
2010 (c)				
2011	0,180***	1,20	-0,316***	0,73
2012	0,273***	1,31	-0,336***	0,71
CONSTANTE	-4,698***	0,01	-4,897***	0,01
R cuadrado de Cox y Snell	0,219		0,070	
R cuadrado de Nagelkerke	0,338		0,163	
Porcentaje global de aciertos	82,5		92,1	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Al analizar la situación socioeconómica del hogar, que incluye como factores el estrato y la condición residencial, se observa que tomando como referencia el estrato medio alto, hay un aumento paulatino en las probabilidades de ser beneficiario de programas sociales a medida que se desciende en el estrato socioeconómico: más de 4 veces en un hogar perteneciente al

estrato muy bajo, casi 3 veces en el estrato bajo y apenas 69% de chances para los hogares del estrato medio bajo. Algo similar ocurre con la condición residencial, pues manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, los hogares localizados en una villa o en un barrio con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo presentan más probabilidades de recibir algún programa (un 74% y 37%, respectivamente) en comparación con los hogares pertenecientes al trazado urbano de nivel socioeconómico medio.

Según el aglomerado de residencia del hogar, tomando la Ciudad de Buenos Aires como elemento de referencia, se puede ver que un hogar tanto del Conurbano Bonaerense (11%) como de las grandes áreas urbanas (39%) y el Resto Urbano (58%) presentan mayores probabilidades de recibir asistencia estatal que un hogar de la Ciudad de Buenos Aires. La baja significación estadística que presenta el Conurbano Bonaerense se podría explicar por el hecho de que el modelo desarrollado no es igualmente robusto en los distintos espacios urbanos.

Al revisar la cuestión temporal como factor explicativo, controlando los demás factores, se advierte que en la secuencia de años abordados hay un aumento en las chances de recibir un programa social tomando como referencia el año 2010: un 20% más para el 2011 y un 31% más para el 2012. Esto se podría explicar con relación al aumento sostenido que ha mostrado la cobertura de los programas de transferencia de ingresos en el corto plazo de los últimos tres años.

Con relación al Modelo II de regresión logística, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, es de notar que la capacidad predictiva mejora sustancialmente alcanzando a los 92 puntos el porcentaje global de aciertos. En este modelo, manteniendo controlados el resto de factores intervinientes, se observa que la inserción laboral del jefe, la presencia de niños, el estrato socioeconómico del hogar y el año resultan factores explicativos de las mayores chances de no recibir programas sociales en los hogares pobres. En tal sentido, la calidad de inserción del jefe de hogar disminuye las probabilidades de no recibir un programa social; teniendo controlados los demás factores intervinientes, los hogares con jefe desempleado o inactivo tienen un 30% más de chances de recibir un programa social que sus pares en situación de empleo pleno.

La presencia de niños y niñas en el hogar, por su parte, aumenta más de 2 veces las posibilidades que tienen los hogares pobres de no recibir un programa

social, al igual que al considerar el estrato socioeconómico, donde se descubre que los hogares pobres de los estratos más bajos presentan las mayores chances de no recibir ningún programa social. Cuando se controlan por el factor temporal los años analizados, controlando a la vez los demás factores intervinientes, se observa que en cada ciclo anual los hogares pobres presentaron 30% menos probabilidades de no recibir ayudas económicas en comparación con 2010, lo que estaría en línea con el incremento sostenido que presentaron las transferencias de ingresos en los tres años. Finalmente, el sexo y educación del jefe, la condición residencial del hogar y el aglomerado urbano resultaron estadísticamente no significativos; es decir, no incidieron en las mayores o menores chances que poseen los hogares pobres de recibir alguna transferencia económica de ingresos monetarios.

1.5 RESUMEN DE RESULTADOS

La evolución de la inseguridad alimentaria total descendió de 13% a 11,7% entre los años 2010 y 2012, principalmente debido a la caída de la inseguridad alimentaria moderada. Las mayores probabilidades de presentar inseguridad alimentaria durante el mismo período se concentraron tanto en los hogares con niños como en aquellos con jefes en empleos precarios o subempleados y de estrato socioeconómico muy bajo. Asimismo, se destaca el hecho de que aun cuando 2012 fue un año recesivo, la inseguridad alimentaria no se agravó, lo cual puede explicarse –entre otros factores– por la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la permanencia de otros programas sociales que actuaron como un seguro ante la posible inestabilidad en el acceso a la alimentación.

Entre los años 2010 y 2012 la pobreza medida a través del enfoque de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) no presentó cambios significativos. Simultáneamente, las desigualdades sociales se mantuvieron similares a lo largo del período, en tanto que fueron los hogares de jefes en empleos precarios o subempleados, con niños, del estrato social muy bajo y de villas o asentamientos precarios los que presentaron los valores más altos de déficit. En este sentido, se puede inferir que las medidas económicas señaladas no resultaron suficientes para revertir las condiciones de vulnerabilidad estructural en la que se encuentra al menos 1 de cada 10 hogares en la Argentina.

Entre los años 2010 y 2012 los ingresos totales familiares y per cápita a valores constantes evidenciaron un incremento moderado, el cual se explica íntegramente por la suba exhibida entre 2010 y 2011, puesto que entre 2011 y 2012, en un contexto recesivo, de elevada inflación e intensificación de la problemática laboral, los ingresos de los hogares perdieron capacidad adquisitiva. En lo que respecta a las brechas de desigualdad existentes en la distribución de los recursos monetarios, las mismas se mantuvieron aproximadamente con igual intensidad durante el período bajo análisis. Los hogares con jefe en empleo precario-subempleo, con niños, pertenecientes al estrato más bajo y localizados en villas o asentamientos continuaron presentando ingresos familiares totales y per cápita inferiores al promedio.

Cualquiera sea el valor empleado, las tasas de indigencia experimentaron una caída durante todo el período 2010-2012. Esto se explica por los aumentos de los montos que brindan los programas sociales de transferencia de ingresos (AUH principalmente), pues es válido recordar que la mayor parte del presupuesto de los hogares de más bajos ingresos está formada por este tipo de ayudas económicas. Por otro lado, el descenso de la tasa de indigencia se explicaría por el aumento del subempleo de subsistencia (una mayor auto-explotación de la fuerza de trabajo familiar). Sin embargo, es de resaltar que más allá de la mejora exhibida en este indicador, existe aún un importante porcentaje de hogares y población en situación de marginalidad económica estructural.

Las tasas de pobreza estimadas mediante el uso de canastas no oficiales habrían aumentado entre 2011 y 2012, aunque todavía alcanzando valores inferiores a los que presentaba en 2010. Así pues, tanto estos hogares como aquellos que están levemente por encima de la línea pobreza habrían experimentado una caída en sus ingresos reales debido a la retracción del mercado informal y de las remuneraciones que se estipulan en el mismo. En definitiva, los mayores riesgos de caer en situación de indigencia y pobreza continúan concentrándose en los hogares cuyo jefe tiene un trabajo precario o problemas de subempleo, en aquellos con presencia de niños y en unidades domésticas que integran el estrato más bajo (25% inferior) o se localizan en villas o asentamientos precarios.

En cuanto a la insuficiencia de ingresos evaluada desde una perspectiva subjetiva, si bien se observa un retroceso durante el período 2010-2011, se percibe un incremento entre 2011 y 2012. Del mismo modo

que lo señalado para los indicadores de ingreso promedio y tasas de indigencia/pobreza, la percepción subjetiva del nivel de ingresos se halla fuertemente vinculada a características socioeconómicas del hogar y al tipo de inserción de los individuos en el mercado laboral. En línea con estos resultados, la capacidad de ahorro de los hogares, luego de verse fortalecida en el período 2010-2011, exhibió una reducción significativa en 2012. Previsiblemente, los hogares con más posibilidades de ahorro mostraron ser aquellos cuyo principal sostén económico se encontraba desarrollando un empleo de buena calidad, las unidades domésticas integradas solamente por adultos, las familias del estrato medio alto y las que residían en los mejores barrios dentro de la traza urbana formal.

Entre los años 2010 y 2012, el porcentaje de hogares beneficiarios de programas sociales aumentó del 19,8% al 23,5%. La recepción de transferencias económicas se evidenció principalmente en los hogares con niños, con jefes en situación de precariedad laboral, pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo y los localizados en villas o asentamientos precarios de los aglomerados urbanos del interior del país. Por su parte, la asistencia social a los hogares en situación de pobreza reveló un aumento sostenido entre 2010 y 2012, pues el porcentaje de hogares con programas sociales subió del 50,6% al 57,6%. Al respecto, la recepción de ayudas se concentró principalmente en los siguientes hogares: con niños, cuyos jefes eran mujeres, en situación de precariedad laboral o desempleo, pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo y los ubicados en barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo o villas y asentamientos. Dentro de los hogares pobres, el aglomerado urbano fue un factor que no incidió en las posibilidades de recibir programas sociales.

El análisis del perfil presentado por los hogares pobres que no percibieron transferencias económicas puso de relieve la alta vulnerabilidad social que padecen los hogares con niños, en los que sus jefes no terminan la secundaria y están insertos de manera precaria en el mercado laboral. Asimismo, los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo, localizados en barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo del Gran Buenos Aires (principalmente el Conurbano Bonaerense), evidenciaron la menor recepción de asistencia social, aun cuando se los considere hogares con insuficiencia económica (por debajo de la línea de pobreza).

Estimación del impacto de la AUH y las pensiones para madres con siete hijos sobre los ingresos familiares, la indigencia y la pobreza urbana en la Argentina del bicentenario

AGUSTÍN SALVIA, BIANCA MUSANTE Y ALEJANDRO MENDOZA JARAMILLO

Después de los efectos negativos que generó la crisis internacional de 2009 sobre el nivel de actividad, el empleo y los ingresos de los hogares, el país volvió a experimentar una significativa recuperación económica durante 2010 y 2011. Esta reactivación estuvo motivada principalmente por una mayor demanda de empleo, la expansión del gasto público, el aumento del consumo interno, la recuperación parcial de la inversión y una política más distributiva en materia de gasto social. Todo lo cual generó una nueva y significativa reducción de los niveles de indigencia y pobreza.

Tras este período, durante 2012 y hasta el presente, la actividad económica y la demanda de empleo volvieron a retraerse, pero esta vez ante todo como resultado de factores internos, tales como las restricciones presupuestarias, la creciente inflación, la caída de la inversión y el deterioro del sector externo. Entre otras consecuencias, este escenario habría generado un estancamiento en la creación de empleos formales, un aumento de la subocupación y el desempleo, y una caída de los ingresos reales familiares, produciendo todo ello una retracción en las capacidades de consumo y un aumento de los hogares y de la población bajo la línea de pobreza. Aunque, al mismo tiempo, debido probablemente a la particular y creciente penetración de los programas sociales de transferencia de ingresos en los sectores económicamente más vulnerables, el porcentaje de hogares en situación de indigencia no habría experimentado cambios o incluso habría continuado disminuyendo.

En cualquier caso, pese a la retracción experimentada durante 2012, la situación en materia de ingreso per cápita familiar, indigencia y pobreza sigue siendo menos grave que la registrada a fines de 2010. Ahora bien, esta particular evolución no sólo debe comprenderse a la luz

de lo ocurrido en el mercado de trabajo durante este período, sino también tomando en cuenta el impacto que presentan los programas de transferencia de ingresos sobre el presupuesto de los hogares. En esta dirección, la pregunta central que recorre esta nota de investigación es cuál ha sido el papel desempeñado por dichos programas asistenciales durante el período 2010-2012, en particular, los dirigidos a hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años –tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones no contributivas a Madres con Siete Hijos (M7H)–, en función de reducir los riesgos económicos en materia de indigencia y de pobreza para tales hogares.

En función de este objetivo se aplicaron una serie de ejercicios de simulación estadística con el fin de estimar el peso de las transferencias monetarias en concepto de AUH-M7H sobre los ingresos de los hogares urbanos con niños y la población infantil. Se procedió, pues, a calcular de nuevo los ingresos mensuales corrientes del hogar descontando las transferencias originadas en dichos programas bajo el supuesto de que tales hogares no serían sujetos de ningún régimen de protección social³¹. De esta manera, la diferencia entre los ingresos “observados” realmente y los ingresos “simulados” aplicando dicho supuesto, así como entre las respectivas tasas de indigencia y de pobreza generadas bajo uno u otro escenario, puede considerarse una medida “proxy” del impacto que genera el actual régimen de asistencia social no contributivo sobre el bienestar de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años excluidos de los sistemas formales de la seguridad social.

Esta evaluación puede presentar importantes sesgos de sobreestimación por influencia de factores no debidamente controlados. En parte, por el hecho de que un porcentaje importante de hogares beneficiarios de la AUH lo eran anteriormente de otros programas de lucha contra la pobreza (el Programa Familia para la Inclusión Social y el Programa Jefes y Jefas Desocupados, entre otros de administración provincial y/o municipal). De tal modo que es posible suponer que de no haberse creado el sistema

³¹ En función de estimar este escenario “simulado” se procedió a descontar al ingreso familiar corriente de los hogares beneficiarios de los programas AUH y M7H, los ingresos percibidos a través de estas fuentes según los valores oficialmente asignados durante el mes anterior al relevamiento. En el caso de la AUH, los montos considerados por cada niño/a o adolescente fueron: en 2010 de \$176, en 2011 de \$216 y en 2012 de \$272; mientras que en el caso de la pensión no contributiva M7H, los montos considerados fueron de \$850, \$1200 y \$1879, respectivamente.

de AUH, tales hogares muy probablemente continuarían siendo asistidos por dichas ayudas económicas u otros similares. Este también es el caso de las pensiones no contributivas dirigidas a madres con siete hijos, las cuales existían con anterioridad a la creación de las AUH, frente a lo que cabe suponer que habrían continuado vigentes en ausencia de las reformas al sistema de protección social. De ahí que una evaluación más realista de los efectos en materia de bienestar generados por el nuevo sistema sólo debería focalizarse en el impacto de la AUH. Para ello corresponde que a una parte de los hogares beneficiarios de la misma, luego de restarles los ingresos percibidos por esta fuente a los ingresos familiares, se les sumen los ingresos que hubiesen recibido de haber continuado vigente las transferencias anteriores. Al mismo que cabe también, no descontar de los ingresos familiares las transferencias percibidas por concepto de M7H.³²

De ahí que en función de no sobreestimar los efectos de los programas de transferencia de ingresos sobre los hogares estudiados y, al mismo tiempo, poder evaluar las contribuciones específicas de estos programas, se presentan en este informe dos escenarios “simulados” alternativos al “observado”, a saber: a) uno en donde se supone la ausencia de toda asistencia económica por parte del Gobierno Nacional a los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años (a partir de lo cual es posible evaluar el impacto global de todo el sistema de protección social no contributivo); y b) otro en donde se supone

32 Para determinar este segundo escenario de “simulación” se siguió el siguiente procedimiento operativo: 1) a los ingresos totales mensuales de los hogares sujetos de protección social no contributiva se restaron exclusivamente los ingresos percibidos por AUH durante ese mes; y 2) a una selección aleatoria del 60% de los hogares beneficiarios de la AUH se les imputó un estimado teórico de los ingresos que hubiesen recibido en concepto de otros programas. La opción de seleccionar de manera aleatoria a una parte de la población de hogares beneficiarios se debió a la ausencia de información sobre su condición anterior. Ante esta situación, la determinación del porcentaje de hogares que debían ser sujetos de tal imputación se fundó en información tanto del ANSES como de la EDSA (Encuesta de la Deuda Social Argentina), a partir de las cuales se estimó que del total de hogares beneficiarios del régimen de AUH en 2010, alrededor del 60% eran beneficiarios en 2009 de otras ayudas nacionales, provinciales y/o municipales. El monto asignado a cada uno de estos hogares fue de \$150 en 2010, \$184 en 2011 y \$232 en 2012. Esto surgió de haber adoptado como supuesto adicional que en el caso de que hubiesen continuado vigentes tales transferencias, la asistencia económica hubiese sido actualizada por el Gobierno Nacional aplicando a lo largo del tiempo los mismos incrementos porcentuales que se instrumentaron para las asignaciones por AUH entre 2009 y 2012.

la no creación del programa AUH, manteniendo vigente el resto de las transferencias previas (a partir de lo cual es posible evaluar el efecto específico del programa AUH).³³

Ambas estrategias de evaluación resultan particularmente relevantes en tanto que los ingresos familiares corrientes constituyen una fuente fundamental de subsistencia para los hogares. Sin embargo, es necesario dejar claro que el acceso por parte de un grupo familiar a ingresos superiores al costo de una canasta teórica de consumo para el hogar –sea a través de la línea de indigencia o de la línea de pobreza- no implica necesariamente haber accedido a condiciones adecuadas de nutrición, hábitat, educación y/o salud ni a oportunidades reales de integración y/o participación activa en la vida social.

Acerca de los programas de transferencia de ingresos dirigidos a los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años

A fines de 2009, en un marco de crecientes demandas para la concreción de un programa de asistencia económica más universal hacia la infancia, el Gobierno Nacional tomó el desafío de ampliar el sistema de protección social a partir de la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, un nuevo y más generoso programa de transferencia condicionada de ingresos dirigido a compensar las carencias económicas de los hogares con niños/as y adolescentes en situación de pobreza, precariedad laboral y desempleo.³⁴ En lo inme-

33 Otro sesgo muy común en este tipo de evaluaciones que no es objeto de control o corrección en este trabajo, es el que surge de aceptar que en ausencia de programas de transferencia, los hogares no hubiesen accedido a ingresos adicionales a través del mercado de trabajo u otros mecanismos alternativos; algo que resulta poco verosímil a la luz de lo que se sabe sobre las estrategias de subsistencia que desarrollan los hogares de sectores populares.

34 El programa AUH fue creado por el Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1.602 del 29 de octubre de 2009, introduciendo así un esquema de carácter no contributivo en el marco de la Ley 24.714 (esta norma es la que establece el derecho a las Asignaciones Familiares para trabajadores asalariados registrados al Sistema de Seguridad Social). Según la normativa, la AUH está destinada a los niños, niñas y adolescentes argentinos o con residencia legal en el país que reúnan dos requisitos iniciales: no contar con otra asignación familiar contributiva o no contributiva prevista en dicha ley y pertenecer a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la “economía informal”. En su artículo 2, la norma establece que quedan excluidos del beneficio anterior “los trabajadores que se desempeñen en la economía informal percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y

diato era urgente paliar los efectos recesivos de la crisis de 2009 y el aumento creciente del costo de vida; esto último, como resultado del aumento constante de los precios, sobre todo a partir de 2007.

La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) se sumó al sistema no contributivo ya existente de pensiones a madres con siete o más hijos en situación de desprotección social (M7H), quedando bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De esta manera, quedó conformado un nuevo esquema más universal e integrado de asistencia económica hacia los niños/as y adolescentes excluidos del sistema contributivo de Asignaciones Familiares y de otros beneficios de la seguridad social tradicional.

La normativa del programa AUH establece una liquidación básica mensual para cada hijo menor de 18 años correspondiente al 80% del monto total de la asignación, mientras que el 20% restante es percibido de manera acumulada, una vez al año, siempre que se certifique el cumplimiento de una serie de requisitos en materia de salud y asistencia educativa. Según la reglamentación vigente, los requisitos varían conforme a la edad: asistencia a la escuela de los niños a partir de los 5 años, inscripción al Plan Nacer y cumplimiento con el plan de vacunación obligatorio en el caso de los menores de 7 años, y realización del control sanitario para los mayores de 6 años. Al momento de iniciado este nuevo régimen de transferencia de ingresos, el monto total de la asignación quedó establecido en \$ 180 por menor beneficiario; si bien ha ido incrementándose a criterio del Gobierno Nacional, buscando acompañar el aumento en el costo de vida (en septiembre la asignación total subió a \$ 220; un año más tarde ascendió a \$ 270; y el pasado 12 de septiembre de 2012 pasó a ser de \$ 340).

Entre otras medidas, la creación de la AUH estuvo acompañada por la inmediata incorporación a este régimen de los hijos menores de 18 años de hogares hasta ese momento recibían de otros programas de lucha contra la pobreza. Se estima que a través de la reestructuración del sistema, más de 2,2 millones de niños pasaron de manera

móvil vigente". A cambio, se requiere que los adultos responsables o los menores a su cargo cumplan con ciertas condiciones, entre las que sobresalen: 1) no percibir remuneración por encima del mencionado salario; 2) certificar la asistencia al sistema educativo público y al régimen obligatorio de vacunación; y 3) estar debidamente documentado, debiendo certificar tanto el titular como el niño extranjero una residencia legal en el país no inferior a tres años.

inmediata a ser beneficiarios directos del nuevo esquema. Según información oficial, a finales de 2010, la AUH asistía económicamente a 1,9 millones de hogares y brindaba asignaciones a 3,5 millones de niños (ANSES, 2011).

Este cambio en la política social introdujo un incremento inmediato en los ingresos corrientes de los hogares en situación de marginalidad, desempleo y/o precariedad laboral que carecían de asistencia del Estado o que la misma resultaba altamente insuficiente. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cuáles han sido los efectos reales en materia de bienestar generados por este nuevo régimen de protección social sobre la población infantil y sus hogares en un contexto macroeconómico crecientemente inflacionario y más recientemente recesivo? De ahí que es especialmente pertinente evaluar -para los dos tipos de escenarios de asistencia social planteados- el impacto que han tenido las transferencias económicas involucradas en términos de mejorar los ingresos reales familiares y de reducir los riesgos de caer en situación de indigencia y de pobreza de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años..

En función de atender este objetivo se analizan a continuación los resultados estadísticos que arrojaron los diferentes ejercicios de simulación arriba descritos, para lo cual se utilizaron los microdatos de la EDSA-Bicentenario/ODSA-UCA aplicada en los 4° trimestres de los años 2010, 2011 y 2012.

Evolución de las tasas de pobreza y de indigencia en los hogares con menores de 18 años y de los hogares y niños/as y adolescentes beneficiarios de la AUH-M7H

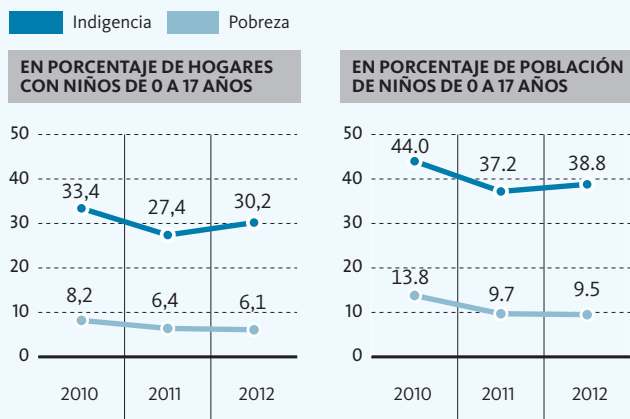
Luego de la crisis de 2009, según la EDSA, las tasas de indigencia y de pobreza en hogares con niños de 0-17 años cayeron en 2010 a 8,2% y 33,4%, respectivamente (ver figura 1.6.1). Al año siguiente, en 2011, estas tasas continuaron bajando hasta llegar a 6,4% (indigencia) y 27,4% (pobreza). En 2012, dado el contexto inflacionario y nuevamente recesivo de finales de ese año, si bien la indigencia descendió levemente a 6,1%, la pobreza se incrementó a 30,2%. De manera análoga, el porcentaje de menores de 18 años en situación de indigencia cayó entre 2010 y 2011 (de 13,8% a 9,7%), y volvió a descender en 2012 (a 9,5%). En cambio, en el caso del porcentaje de niños/as y adolescentes en situación de pobreza, si bien se reduce entre 2010 y 2011 de 44% a 37,2%, aumenta a 38,8% en 2012.

Al mismo tiempo, cabe observar que el porcentaje de hogares con menores y de población de niños/as y adoles-

Figura 1.6.1

HOGARES CON NIÑOS/AS Y POBLACIÓN DE NIÑOS/AS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA Y POBREZA

Valorización no oficial de la Canasta Básica Alimentaria y Total (alternativa máxima). Años 2010-2011-2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

centes beneficiarios de AUH-M7H experimentó un progreso constante a lo largo del período. Entre 2010 y 2011, la tasa de hogares receptores de estos programas pasa de 27,4% a 27,7%, y vuelve a subir en 2012 a 29,2%. En cuanto a los menores de 18 años cubiertos, también se registra un aumento entre 2010 y 2011 de 29,1% a 30,7%, bajando luego levemente, aunque de manera no significativa, a 29,9% en 2012.

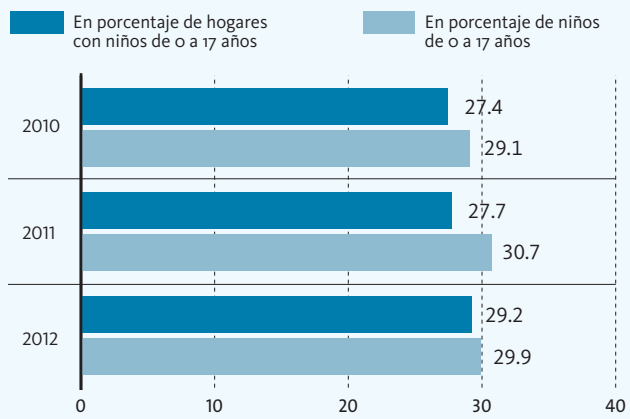
El hecho de que los hogares con niños asistidos por la AUH-M7H muestren un constante incremento y que no ocurra lo mismo con la población de niños, se explica tanto por un aumento en 2012 de hogares beneficiarios con un solo niño/a o adolescente, incluyendo el efecto que habría generado la ampliación del programa a madres embarazadas y por la posible reducción observada en el número de adolescentes receptores de la ayuda (dada la falta de cumplimiento en las condiciones estipuladas) (figura 1.6.2).

Pero ¿cuál ha sido el grado de penetración logra este régimen no contributivo de asistencia económica sobre los hogares con niños/as y adolescentes en situación de indigencia o pobreza? Según los datos que se presentan en las figuras 1.6.3 y 1.6.4 la AUH-M7H asistió durante el período a alrededor del 60% de los hogares indigentes y del 48% de los hogares en situación de pobreza. En términos de evolución, el porcentaje de hogares indigentes beneficiarios casi no cambio en el tiempo (62,6% en 2010, 60% en 2011 y 60,8% en 2012), mientras que entre los hogares pobres se registra un aumento sistemático (46,1%, 48,6% y 50,3%, respectivamente). Al considerar a la po-

Figura 1.6.2

HOGARES Y NIÑOS/AS BENEFICIARIOS DE AUH-M7H

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentajes.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

blación de menores de 18 años, este nivel de cobertura se reduce de manera importante, a la vez que su comportamiento se hace más variable. La población infantil asistida por estos programas aumenta en los hogares indigentes de 47% a 59,2% entre 2010 y 2011, así como también de 43,5% a 49,1% en los hogares pobres, pero en ambos casos estos niveles de cobertura se retraen en 2012 a 48,9% y 45% respectivamente.

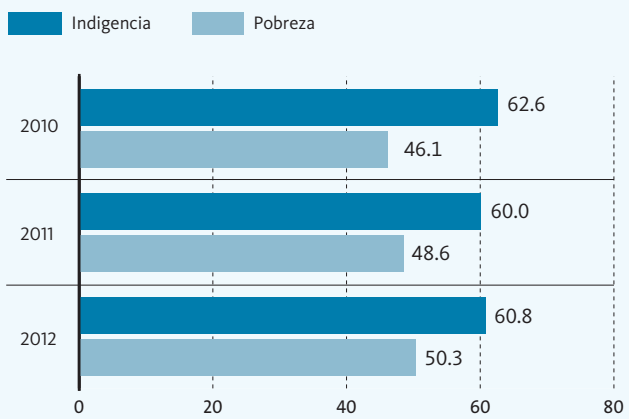
Estos cambios de cobertura a nivel de la población de niños/as y adolescentes menores de 18 años se explica por las variaciones experimentadas en las tasas de indigencia y de pobreza, las cuales afectan de manera desigual a los hogares según su tamaño y composición por edad y sexo. En cualquier caso, cabe destacar que una parte importante de la población indigente y pobre queda afuera de este régimen, lo cual no quiere decir que no esté cubierta las Asignaciones Familiares que ofrece el sistema contributivo de la seguridad social o por otros programas sociales.³⁵

35 Según datos de la EDSA-2012, para el total de hogares indigentes, además de que el 60,8% de ellos estaba asistido por la AUH-M7H, un 12,7% lo estaba por otros programas de ingresos, 7,8% por a través de la seguridad social formal y 18,7% declararon no tener ningún tipo de protección social. En el caso del de los hogares pobres, además de que el 50,3% de los mismos es asistido por el régimen de AUH-M7H, 5,9% lo estaba por otros programas, un 14,8% contaba con protección social contributiva mientras un 29,1% permanecía sin ningún programa de asistencia en 2012.

Figura 1.6.3

HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA BENEFICIARIOS DE AUH-M7H

Valorización no oficial de la Canaste Básica Alimentaria y Total (alternativa máxima). Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares con niños de 0 a 17 años.

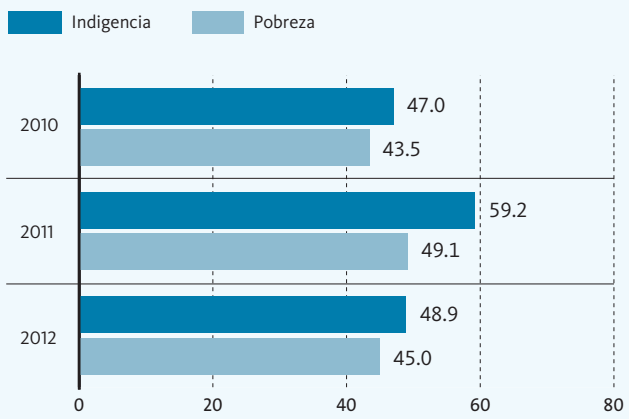


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Figura 1.6.4

NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA BENEFICIARIOS DE AUH-M7H

Valorización no oficial de la Canaste Básica Alimentaria y Total (alternativa máxima). Años 2010-2011-2012. En porcentaje de niños de 0 a 17 años.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Impacto de AUH-M7H sobre el presupuesto familiar y los ingresos per cápita de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años

Se analizan seguidamente los cambios en los ingresos familiares y per cápita familiar de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años en situación de indigencia o de pobreza como efecto de las transferencias económicas percibidas bajo el nuevo régimen de AUH-M7H. Esta evaluación se hace considerando los ingresos a precios corrientes de cada año y comparando las diferencias

que se desprenden entre los valores observados y los simulados, estimándose a partir de esta información tanto el impacto general que tiene el actual sistema de protección social –primer escenario de simulación– como el efecto neto de bienestar –segundo escenario de simulación– que habría generado específicamente la AUH (ver figuras 1.6.5 y 1.6.6).

Según los resultados que presenta las figuras 1.6.5 y 1.6.6, se advierte que en 2010 la ausencia de transferencias por AUH-M7H o por cualquier otro programa social habría reducido en 24,7% el ingreso familiar de los hogares indigentes beneficiarios de estos sistemas; y hasta de 20,5% de no haber existido la AUH. En el caso de los hogares pobres beneficiarios de AUH-M7H, la ausencia de estas u otras ayudas económicas hubiesen hecho caer los ingresos familiares en 11,2% bajo el primer escenario y en 9,1% bajo el segundo. Pero si además se examina el beneficio que esto implicó a nivel per cápita familiar (es decir, considerando el tamaño del hogar), el impacto es similar, aunque algo más favorable cuando no se considera ningún tipo de ayuda y menor cuando sólo se evalúa el impacto de la AUH. En tal sentido, se observan caídas de 25,8% y 21,2%, respectivamente, en términos de ingresos per cápita, entre los hogares por debajo de la línea de indigencia; y de 10,6% y 8,5%, también respectivamente, en hogares por debajo de la línea de pobreza. En cualquier caso, aquí queda claramente evidenciado el específico y fuerte impacto de la AUH en los ingresos familiares totales y per cápita.

Este comportamiento de 2010 parece repetirse en el resto de los años evaluados, aunque con algunas diferencias. En efecto, en 2011, en ausencia de todo programa de protección social a la infancia, el promedio de ingresos de hogares beneficiarios de AUH-M7H en situación de indigencia hubiera caído a 28,7%; a la vez que habría caído a 23,6% debido a la ausencia exclusiva de la AUH. En el caso de los hogares pobres con AUH-M7H, la ausencia de asistencia económica –de uno u otro tipo– habría reducido el ingreso familiar en 12,2% y 9,9%, respectivamente. En términos de ingresos per cápita, la caída hubiera también sido similar (de 27,9% y de 22,1% en hogares indigentes, y de 11,4% y de 8,9% en hogares pobres). En cualquier caso, el impacto positivo de las transferencias económicas, sobre todo debido al particular efecto de la AUH, habría sido mayor este año que en 2010, lo cual explica la salida de una parte importante de hogares en situación tanto de indigencia como de pobreza durante el año 2011.

Por último, en 2012, se mantienen de manera general estas tendencias, aunque con algunas diferencias relevantes. Por un lado, en los hogares indigentes la ausencia

Figura 1.6.5**ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS POR AUH-M7H SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LOS HOGARES INDIGENTES Y POBRES**

En hogares con niños y niñas de 0 a 17 años. Años 2010-2011-2012.

	2010	2011	2012
INDIGENCIA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	1146,5	1287,0	1677,7
Otras asistencias sin AUH (2)	911,2	983,2	1349,8
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	862,8	917,5	1258,1
Dif. % (2)-(1)	-20,5	-23,6	-19,5
Dif. % (3)-(1)	-24,7	-28,7	-25
POBREZA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	1851,3	2382,8	2910
Otras asistencias sin AUH (2)	1682,0	2147,2	2551,4
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	1643,4	2091,0	2540,1
Dif. % (2)-(1)	-9,1	-9,9	-12,3
Dif. % (3)-(1)	-11,2	-12,2	-12,7

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 1.6.6**ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS POR AUH-M7H SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTES PER CÁPITA DE LOS HOGARES INDIGENTES Y POBRES**

En hogares con niños y niñas de 0 a 17 años. Años 2010-2011-2012.

	2010	2011	2012
INDIGENCIA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	166,8	201,9	256,7
Otras asistencias sin AUH (2)	131,5	157,3	205,2
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	123,7	145,6	187,7
Dif. % (2)-(1)	-21,2	-22,1	-20,1
Dif. % (3)-(1)	-25,8	-27,9	-26,9
POBREZA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	324,7	407,6	546
Otras asistencias sin AUH (2)	297,2	371,4	488
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	290,1	361,0	457,6
Dif. % (2)-(1)	-8,5	-8,9	-10,6
Dif. % (3)-(1)	-10,6	-11,4	-16,2

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

de programas sociales hubiera hecho caer los ingresos familiares en 25% y 19,5%; mientras que en los pobres la caída hubiese sido de 12,7% y 12,3%, respectivamente. Es decir, en comparación con otros años, la AUH habría tenido un efecto relativamente menor sobre los ingresos de los hogares indigentes y mayor en el caso de los hogares pobres. En cuanto a los ingresos per cápita, los efectos positivos van en igual sentido, pero con diferencias todavía más marcadas. Al respecto, se observan caídas de 26,9% y 20,1% en hogares indigentes, y de 16,2% y 10,6% en hogares pobres, dependiendo si se reduce toda transferencia o sólo los beneficios por AUH. En líneas generales, el impacto de la AUH-M7H parece haber sido menor 2012 en los hogares indigentes, a la vez que mayor en los hogares pobres, sobre todo en términos de ingresos per cápita.

Impacto de la AUH-M7H sobre las tasas de indigencia y de pobreza en hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años

Una vez estimado el efecto positivo que habrían tenido las transferencias en concepto de AUH-M7H sobre los ingresos y el bienestar de los hogares beneficiarios, corresponde estimar el impacto que hubiese tenido sobre las cantidades de hogares y de niños/as tanto en situación de indigencia como de pobreza. Para ello, se comparan las poblaciones proyectadas y las tasas de pobreza e indigencia observadas en cada año, elaboradas con los valores estimados de los dos escenarios propuestos, tanto bajo el supuesto de que los hogares protegidos por el nuevo esquema no hubiesen sido beneficiarios de ningún programa de transferencia de ingresos, y bajo el supuesto de que la AUH no hubiese existido.

Esta información se presenta primero a nivel del total de hogares con niños/as menores de 18 años (figura 1.6.7) y luego para el total de niños/as y adolescentes de iguales edades (figura 1.6.8). Estos resultados permiten estimar cuáles habrían sido los valores alcanzados por las tasas de indigencia y de pobreza bajo los dos escenarios planteados y sus respectivas diferencias con respecto a los niveles "reales" observados en cada año.

Siguiendo esta estrategia, tenemos que en 2010, simulando la ausencia de todo sistema de transferencia de ingresos, la tasa de indigencia en hogares con presencia de niños hubiera pasado de 8,2% a 12,6%, y de 33,4% a 38,7% en el caso de la tasa de pobreza (las variaciones de tasas son del 53,7% y 15,9%, respectivamente). En cuanto a los niños/as y/o adolescentes afectados por ambas situaciones, el incremento habría sido del 52,3% y 11,8%, respectivamente. Ahora bien, si se evalúa sólo la ausencia de transferencias por AUH, los incrementos en las tasas de indigencia en hogares y niños/as o adolescentes habría sido menor aunque igualmente importante: 40,9% y 42,8% respectivamente; mientras que este incremento habría sido de apenas 5,4% en la cantidad de hogares y de 6,6% en niños en situación de pobreza. Bajo este escenario, el valor de ambas tasas habría sido respectivamente de 11,6% y 38,7%, en vez de 8,2% y 33,4%, tal como surge de considerar los ingresos familiares por AUH-M7H.

Al año siguiente, en 2011, bajo el supuesto de carencia de todo sistema de protección social no contributivo a los hogares con menores de 18 años, se hubieran incrementado las tasas un 50% en la cantidad de hogares indigentes (56,3% en niños) y un 20,8% en la de hogares pobres (13,7% en niños). Tal escenario habría elevado las co-

Figura 1.6.7**ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS POR AUH-M7H SOBRE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA**

En porcentaje de hogares con niños y niñas de 0 a 17 años. Años 2010-2011-2012.

	2010	2011	2012
INDIGENCIA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	8,2	6,4	6,1
Otras asistencias sin AUH (2)	11,6	8,7	9,6
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	12,6	9,6	10,2
Dif. % (2)-(1)	40,9	35,4	56,9
Dif. % (3)-(1)	53,7	50,0	67,2
POBREZA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	33,4	27,4	30,2
Otras asistencias sin AUH (2)	35,2	29,1	32,4
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	38,7	33,1	35,4
Dif. % (2)-(1)	5,4	6,4	7,3
Dif. % (3)-(1)	15,9	20,8	17,2

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 1.6.8**ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS POR AUH-M7H SOBRE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA**

En porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años. Años 2010-2011-2012.

	2010	2011	2012
INDIGENCIA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	13,8	9,7	9,5
Otras asistencias sin AUH (2)	19,7	14,1	14,9
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	21,0	15,2	15,9
Dif. % (2)-(1)	42,8	45,4	56,8
Dif. % (3)-(1)	52,3	56,3	67
POBREZA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	44,0	37,2	38,8
Otras asistencias sin AUH (2)	46,9	40,2	40,4
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	49,2	42,3	42,9
Dif. % (2)-(1)	6,6	8,0	4,1
Dif. % (3)-(1)	11,8	13,7	10,7

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

respondientes tasas de indigencia y de pobreza a 9,6% y 33,1%, respectivamente. Bajo el segundo escenario social propuesto –sólo considerando el impacto de la AUH-, el aumento habría sido bastante menor pero de todas maneras significativo: el nivel de indigencia a nivel de hogares habría aumentado en 35,4% (45,4% en cantidad de niños), mientras que la cantidad de hogares pobres se incrementaría un 6,4% (8% en cantidad de niños). Este contexto simulado habría elevando las tasas de indigencia y de pobreza a 9,6% y 33,1%, contra el 6,4% y el 27,4% realmente observado.

Por último, en 2012, bajo un contexto cargado de mayores dificultades económicas, la situación simulada de ausencia de todo programa de transferencia de ingresos

habría aumentado la incidencia de hogares por debajo de la línea de indigencia un 67,2% (67% en niños) y un 17,2% en hogares pobres (10,7% en niños); lo cual implica que las transferencias por AUH-M7H habrían brindado, con respecto a los años anteriores, mayor protección hacia los hogares con riesgo de caer bajo la línea de indigencia que hacia la pobreza. Las tasas a nivel de hogares estimadas bajo dicho escenario habrían sido de 10,2% y 35,4%, respectivamente. En tanto que si se considera sólo la inexistencia de AUH, el impacto sobre las tasas de indigencia seguiría siendo elevado (56,9% de aumento). Al mismo tiempo, el impacto sobre la pobreza se habría reducido –al igual que en los otros años- en forma significativa: sólo 7,3% de aumento, mientras que el impacto sobre la cantidad de niños habría seguido la misma tendencia: 56,8% y 4,1%, respectivamente. Este escenario habría llevado las tasas de indigencia y de pobreza a 9,6% y a 32,4%, contra el 6,1% y el 30,2% efectivamente observados.

Impacto de la AUH-M7H sobre la evolución de las tasas de indigencia y de pobreza en hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años

Habiendo evaluado el impacto sincrónico de la AUH-M7H sobre las tasas de indigencia y de pobreza, también se hace factible estimar las variaciones interanuales de estas tasas para los diferentes escenarios estudiados con el objetivo de evaluar su evolución en el tiempo. Este análisis se presenta a nivel de hogares en la figura 1.6.9 y para la población de menores de 18 años en la figura 1.6.10.

En el escenario real (ingresos que contabilizan AUH-M7H) la tasa de hogares con niños por debajo de la línea de indigencia descendió de 8,2% en 2010 a 6,4% en 2011 – con una variación porcentual de 22,0%- y alcanzando un 6,1% en 2012 – lo que equivale a un descenso de apenas un 4,7%. De tal manera, la caída total de la tasa de indigencia entre los años extremos fue de 25,6%. La evolución de la tasa de pobreza según este mismo escenario muestra un descenso de 18% entre los primeros años (pasando de 33,4% a 27,4%) y un posterior aumento porcentual de 10,2% (llegando en 2012 a 30,2%). En términos de la población de niños y adolescentes se observa una disminución total entre los años 2010-2012 de 31,2% en la tasa de indigencia y de 11,8% en la tasa de pobreza.

Partiendo del supuesto de que no hubiese existido ningún programa social dirigido a la infancia, la reducción entre 2010 y 2012 en las tasas de indigencia y de pobreza habría sido mucho menor, sobre todo en el caso de la in-

Figura 1.6.9**DIFERENCIAS INTERANUALES DE LA ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS POR AUH-M7H SOBRE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA**

En porcentaje de hogares con niños de 0 a 17 años. Años 2010-2011-2012.

	VAR. % 2010-2011	VAR. % 2011-2012	VAR. % 2010-2012
INDIGENCIA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	-22,0	-4,7	-25,6
Otras asistencias sin AUH (2)	-25,0	10,3	-17,2
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	-23,8	6,3	-19,0
POBREZA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	-18,0	10,2	-9,6
Otras asistencias sin AUH (2)	-17,3	11,3	-8,0
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	-14,5	6,9	-8,5

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 1.6.10**DIFERENCIAS INTERANUALES DE LA ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS POR AUH-M7H SOBRE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA**

En porcentaje de niños de 0 a 17 años. Años 2010-2011-2012.

	VAR. % 2010-2011	VAR. % 2011-2012	VAR. % 2010-2012
INDIGENCIA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	-29,7	-2,1	-31,2
Otras asistencias sin AUH (2)	-28,4	5,7	-24,4
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	-27,6	4,6	-24,3
POBREZA			
Con asistencia AUH y M7H (1)	-15,5	4,3	-11,8
Otras asistencias sin AUH (2)	-14,3	0,5	-13,9
Sin asistencia AUH ni M7H (3)	-14,0	1,4	-12,8

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

digencia. La caídas hubiesen sido de 19% y 8,5%, respectivamente, contra variaciones observadas del 25,6% y 9,6%. En el escenario donde sólo no hubiese existido la AUH, durante igual período, la caída en las tasas hubiese sido de 17,2%, en indigencia, y de 8%, en pobreza. Ahora bien, este período muestra claramente dos momentos distintos: de una parte, entre 2010 y 2011, en donde tanto las tasas de indigencia como de pobreza habrían caído en cualquiera de los escenarios considerados; aunque obviamente con menor intensidad en ausencia de toda transferencia social, y de otra, entre 2011 y 2012, en donde si bien la pobreza tiende a aumentar en cualquiera de los escenarios, la tasa de indigencia disminuye en el escenario real mientras aumentan un 10,7% sin la AUH y un 6,3% sin ningún programa (casi 5% en la tasa real). Es decir, en ausencia de estos programas, la recesión 2011-2012 también habría implicado un aumento de la tasas de indigencia, tanto a nivel de hogares como de población infantil, lo cual no llegó a ocurrir en los hechos.

Algunas enseñanzas relevantes que deja este ejercicio de evaluación del impacto económico de la AUH-M7H sobre las capacidades de subsistencia de los hogares indigentes y pobres con niños/as y adolescentes menores de 18 años

De los resultados analizados pueden desprenderse algunos hallazgos relevantes en función de una evaluación de la política social durante el período 2010-2012 en la Argentina:

(1) En primer lugar, previsiblemente, el incremento de los ingresos familiares generado por las transferencias económicas a través de la AUH-M7H habría implicado una mejora significativa en la capacidad de consumo –medida por ingresos corrientes– de los hogares y de la población de niños/as y adolescentes beneficiarios de estos sistemas de protección; pero este efecto habría sido variable según la coyuntura económica y el nivel de carencias de los hogares: a) el impacto pro-bienestar habría sido mayor en los hogares indigentes sin otras fuentes alternativas de ingresos; y b) el impacto habría sido menor en los hogares pobres incluso en un contexto económico más favorable.

(2) De los resultados expuestos se desprende que en el contexto de crecimiento económico 2010-2011, cualquiera hubiese sido el escenario de protección, las tasas de indigencia y de pobreza tanto en hogares como en niños de 0 a 17 años hayan disminuido de manera significativa (la reducción habría sido del orden del 25% en la indigencia y del 15% en la pobreza). Aunque evidentemente, cada escenario habría generado magnitudes distintas, de manera que la mayor incidencia negativa sobre la subsistencia familiar habría ocurrido en el caso de no existir ningún programa de transferencia de ingresos de este tipo (escenario 3), y en menor medida, bajo el supuesto de no haberse implementado la AUH (escenario 2).

(3) En un contexto de mayor recesión económica, como fue el período 2011-2012, las tendencias de las respectivas tasas de indigencia y pobreza registran una dinámica diferente: mientras que la tasa de indigencia considerando los ingresos por AUH-M7H cayó tanto en hogares como en la población de niños (4,7% y 2,1%, respectivamente), en los escenarios alternativos la indigencia habría aumentado en ambos casos, sobre todo en ausencia de la AUH (10,3% en hogares y 5,7% en infancia respectivamente). Por su parte, las tasas de pobreza se incrementaron, a igual de lo ocurrido a nivel real, en cualquiera de los escenarios planteados.

(4) Más allá de la evolución de las tasas, la ausencia del actual régimen de asistencia no contributivo, dirigido a los hogares con niños excluidos de la seguridad social

formal, hubiese generado un fuerte incremento en la cantidad de hogares y población infantil en situación de indigencia. En términos generales, sin el actual sistema de protección, la cantidad/tasa de hogares indigentes habría aumentado en 53,7%-50%-67,2% -según el año que se considere. Por otra parte, la AUH habría evitado por sí sola incrementos en la cantidad de hogares indigentes del 40,9%-35,4%-56,9% -en cada año-. Es decir, la tasa de indigencia de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años representa actualmente un tercio menor a lo que hubiese sido sin este sistema de protección social; sobre todo, gracias al impacto directo que generan las transferencias por concepto de AUH.

(5) Algo similar ocurre en el caso de la pobreza, aunque el impacto es significativamente menor. En ausencia de toda asistencia de este tipo hacia los sectores excluidos de la seguridad social formal, la cantidad/tasa de hogares pobres habría aumentado en 15,9%-20,8%-17,2% -según el año que se considere. En este marco, la AUH habría tenido mucho menor impacto sobre la reducción de las tasas de pobreza que a nivel de la indigencia: 5,4%-6,4%-7,3% -también según el año-. En este caso, la tasa de pobreza de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años representa apenas un 10% menor a lo que hubiese sido sin el actual sistema de transferencias por AUH. Un sistema de seguridad social con mayor capacidad para asistir a los sectores pobres requeriría incluir a los grupos que todavía se mantienen fuera del mismo, así como introducir aumentos reales en las transferencias de ingresos por encima de los aumentos que experimenta el costo de vida diario de los sectores más vulnerables.

CAPÍTULO 2

HÁBITAT, DESARROLLO URBANO Y DERECHO A LA CIUDAD EN LA ARGENTINA DEL BICENTENARIO

DAN ADASZKO

Habiendo transitado la Argentina un proceso de urbanización temprana, los datos censales muestran que en el año 2010 el 92% de la población se encontraba habitando en contextos urbanos. En este sentido, la ciudad no es simplemente un espacio contenedor en el que reside una población y acontecen determinadas relaciones sociales, sino que son estas últimas las que moldean y dan vida a dicha urbe. Esta muta y se transforma permanentemente de acuerdo a las relaciones de fuerza entre los actores que en ella residen, al orden social en el que se encuentra inscripta y a las orientaciones ideológicas, políticas y económicas de quienes se hallan en posiciones de poder.

La ciudad es un producto y, en este marco, la desigualdad que caracteriza al sistema capitalista encuentra un correlato espacial en la urbanización que dicho orden social genera y en la forma en que en tal dispositivo socioespacial se distribuyen los recursos. La paradoja reside, entonces, en que el acceso al suelo, la vivienda, los servicios, la infraestructura, el equipamiento y los demás bienes fundamentales de la ciudad resulta desigual entre ciudadanos que jurídicamente son concebidos como iguales.

Es en este punto que se torna pertinente convocar al “derecho a la ciudad”, entendiéndolo como aquel que, en condiciones de igualdad y de equidad, tiene todo ciudadano o residente de una urbe de usufructuar y gozar de los recursos y bienes urbanos, incluyendo el suelo, la vivienda, los espacios públicos y la infraestructura,

así como de participar democráticamente en la toma de decisiones acerca de la producción y desarrollo de esa ciudad, en el marco de los derechos humanos y de la sustentabilidad ambiental –Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Foro Mundial Urbano, Quito, 2004; Foro Social Mundial, Barcelona, 2004; Revisión previa a Barcelona, Porto Alegre, 2005).

Sin embargo, de un primer examen de la realidad urbana surgen contrastes que se distancian notoriamente de un ideario que contemple entre sus principios la equidad en el derecho a la ciudad: barrios con un desarrollo urbanístico y una calidad de vida similar al de algunas naciones desarrolladas junto a otros que acumulan privaciones y necesidades básicas insatisfechas; municipios y departamentos en los que se expanden urbanizaciones informales –como villas y asentamientos– con un alto nivel de precariedad habitacional y urbana, no muy distantes a barrios cerrados y verdaderas ciudades privadas en las que se paga por el derecho de admisión y de exclusión de terceros; vecindarios contiguos con y sin acceso a servicios de red, infraestructura básica, equipamiento colectivo y condiciones ambientales saludables; provincias y municipios que, por falta de oportunidades, expulsan población y otros que la atraen, pero sin poder dar respuesta a los desequilibrios que este movimiento genera en materia habitacional, laboral, cultural, entre otros.

En este orden, el presente capítulo evalúa la situación del hábitat en los principales aglomerados de la

Argentina del Bicentenario, haciendo foco en el nivel de acceso por parte de los hogares a cuatro tipos de bienes urbanos fundamentales que satisfacen necesidades humanas básicas, mejoran la calidad de vida de la población y se encuentran contemplados en el derecho a la ciudad (Adaszko, 2011a, 2012), a saber: viviendas dignas con mínimos estándares de habitabilidad, servicios domiciliarios de red, infraestructura urbana básica y condiciones ambientales saludables. El capítulo se divide en cuatro apartados en los que se examina cada una de estas dimensiones a través de una serie de variables e indicadores cuyas definiciones conceptuales y operacionales se aprecian en la figura 2.1.³⁶

El capítulo se focaliza en el período 2010-2012, el que comenzó con un bienio caracterizado, entre otras cosas, por un fuerte crecimiento económico, una importante expansión del consumo, de la obra pública y de las transferencias monetarias del Estado hacia los distintos sectores de la sociedad; proceso que acompañó la reelección de la actual administración gubernamental. A su vez, el período del que se ocupan estas páginas concluye en 2012, año en el que el país experimentó una brusca desaceleración económica y un fuerte deterioro de una serie de indicadores sociales, lo que se vio agravado por la aceleración del ritmo inflacionario y el estancamiento en la generación de empleos plenos, que afectó principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad (ver capítulos 1 y 3 de esta publicación).

En este marco, la pregunta central del presente análisis es: ¿en qué medida durante el período 2010-2012 se produjo una modificación en el acceso por parte de los hogares a los distintos componentes del hábitat, fundamentalmente en lo que concierne a la reducción de los déficit de acceso a cada uno de los recursos y a la disminución de la desigualdad en su distribución?

Se hace preciso señalar en este apartado introductorio que el fenómeno que se aborda en el capítulo tiene un carácter estructural. Esto es, a diferencia de otras dimensiones del desarrollo humano y social, las modificaciones en el tiempo en materia de hábitat son lentas y, por tanto, no se espera que en un plazo tan corto como el de tres años se produzcan variaciones bruscas en los niveles de acceso a una vivienda

digna, a servicios domiciliarios de red, a infraestructura urbana básica y a condiciones ambientales saludables. No obstante –y más allá de la crisis que el país atravesó en 2012–, es de esperar que en un contexto más amplio de recuperación y crecimiento del país, inaugurado tras la crisis que tuvo lugar en 2001-2002, la población argentina atraviese un continuo proceso de reducción de los diferentes déficits aquí indagados.

Tomando como universo a describir a los hogares que durante el trienio analizado residían en los grandes aglomerados urbanos del país, en todos los casos, además de presentar el nivel general de déficit de acceso a cada uno de los recursos, se utilizan seis variables de corte que permiten realizar una mejor caracterización del objeto del capítulo, indagando en las brechas de desigualdad entre distintos tipos de hogar: a) sexo del jefe del hogar; b) calidad de inserción en el empleo del jefe; c) presencia de niños y adolescentes; d) estrato socioeconómico; e) condición residencial o tipo de barrio de residencia; y f) aglomerado urbano.

Por su parte, al final de cada uno de los cuatro apartados se presenta un índice sintético de cada dimensión y se desarrolla un análisis multivariado a través de una regresión lineal múltiple, cuyo objetivo es mensurar en qué medida cada una de las variables independientes o descriptoras influye en la probabilidad de que los hogares habiten vecindarios o barrios con diferente nivel de acceso a cada uno de los recursos. A su vez, en el apartado 2.5 se presenta un resumen de resultados con los principales hallazgos del capítulo. Por último, se desarrolla una nota de investigación (2.6) que aborda una de las manifestaciones más relevantes de la desigualdad urbana en las ciudades capitalistas: la segregación residencial socioeconómica. Utilizando el ingreso per cápita familiar y una serie de índices de segregación, se examina la relevancia de la localización intraurbana de los hogares en su diferenciación socioeconómica durante 2010-2012.

Los datos que se presentan en el capítulo y a partir de los que se desarrollan los diferentes análisis surgen de las ondas 2010, 2011 y 2012 de la Encuesta de la Deuda Social Argentina llevada adelante por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina, estudio longitudinal de tipo panel que, utilizando una muestra probabilística, multietápica (con probabilidades no proporcionales) de hogares y

36 Para precisiones conceptuales acerca de cada aspecto indagado y referencias bibliográficas especializadas en cada uno de ellos, véase Adaszko (2011a, 2012).

personas, indaga en diferentes dimensiones del desarrollo humano y social en la Argentina del Bicentenario.³⁷

37 La EDSA-Bicentenario (2010-2016) se apoya en un diseño muestral probabilístico polietápico con estratificación no proporcional y selección sistemática de viviendas y hogares en cada punto muestra. La encuesta se aplicó durante los cuartos trimestres de cada año a una muestra de hogares (5.682 en 2010, 5.712 en 2011 y 5.766 en 2012) ubicados en 17 aglomerados urbanos del país: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano Bonaerense), Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Salta, Gran Tucumán y Taffi Viejo, San Rafael, Mar del Plata, Gran Paraná, Gran San Juan, Gran

Por último, cabe informar que los datos estadísticos completos empleados para la elaboración de este capítulo se encuentran disponibles en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

Resistencia, Neuquén-Plottier, Zárate, Goya, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande. Para más información, ver anexo metodológico de esta publicación.

FIGURA 2.1: ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL HÁBITAT URBANO

2.1. ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA		
TENENCIA IRREGULAR DE LA VIVIENDA	Modalidad de posesión jurídica de la vivienda en la que el hogar no es ni propietario ni inquilino. Generalmente se corresponde con el préstamo por parte de terceros o con la ocupación de hecho.	Porcentaje de hogares que no son propietarios ni inquilinos de la vivienda que habitan.
TEMOR A PERDER LA VIVIENDA	Expresa una medida subjetiva del temor a la pérdida de uno de los elementos que permiten la estabilidad y la proyección a largo plazo de las personas y de sus familias en un espacio propio.	Porcentaje de hogares que expresan temor a perder su vivienda.
VIVIENDA PRECARIA	Viviendas que por su estructura o materiales de construcción no cumplen con las funciones básicas de aislamiento hidrófugo, resistencia, delimitación de los espacios, aislación térmica, acústica y protección superior contra las condiciones atmosféricas.	Porcentaje de hogares habitando casillas, ranchos o viviendas sin revoque en sus paredes.
DÉFICIT DE SERVICIO SANITARIO	Situación en la que una vivienda no cuenta con baño, retrete, o en caso de tenerlo carece de descarga mecánica o arrastre de agua.	Porcentaje de hogares sin baño, retrete o descarga mecánica o arrastre de agua.
HACINAMIENTO	Número elevado de personas por cuarto habitable, lo que afecta la salubridad y la privacidad de las personas.	Porcentaje de hogares en cuyas viviendas conviven tres o más personas por cuarto habitable.

2.2. ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED		
PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Carencia o deficiencia en la conexión a la red de energía eléctrica, lo que afecta la calidad de vida de la población.	Porcentaje de hogares cuyas viviendas carecen de conexión a la red de energía eléctrica domiciliaria o padecen de cortes reiterados del suministro o bajas frecuentes de tensión.
DÉFICIT DE CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA DE AGUA CORRIENTE	Carencia de conexión a la red pública de agua corriente, lo que constituye un factor de riesgo sanitario para la transmisión de patologías infecto contagiosas.	Porcentaje de hogares cuyas viviendas no se encuentran conectadas a la red pública de agua corriente.
DÉFICIT DE CONEXIÓN A LA RED CLOACAL	Carencia de conexión a la red de cloacas, lo que constituye un problema con consecuencias sanitarias de fuerte impacto epidemiológico.	Porcentaje de hogares habitando viviendas sin conexión a la red cloacal.
DÉFICIT DE CONEXIÓN A LA RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO	Carencia de conexión a la red de gas natural domiciliario, problema que tiene consecuencias sobre la seguridad de quienes utilizan garrafas, a la vez que consecuencias socioeconómicamente regresivas.	Porcentaje de hogares cuyas viviendas carecen de conexión a la red de gas natural domiciliario.
2.3 ACCESO A INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA		
DÉFICIT DE CALLES PAVIMENTADAS	Carencia de infraestructura vial que facilita el transporte y la movilidad urbana.	Porcentaje de hogares en viviendas sin pavimento en las calles perimetrales.
DÉFICIT DE DESAGÜES PLUVIALES	Carencia de desagües pluviales en la cuadra de la vivienda, lo que constituye un potencial foco para la propagación de epidemias y plagas urbanas.	Porcentaje de hogares en viviendas sin desagües pluviales en las inmediaciones.
PRESENCIA DE TERRENOS Y CALLES INUNDADAS	Presencia en las inmediaciones del hogar de terrenos y calles inundadas, lo que por un lado representa un indicador indirecto del déficit de infraestructura urbana y, por otro, constituye un potencial foco para la transmisión de vectores contaminantes.	Porcentaje de hogares con presencia de terrenos y calles inundadas en las inmediaciones de las viviendas.

2.4. ACCESO A CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES

PREVALENCIA DE BASURALES	Presencia en las inmediaciones del hogar de basurales, lo que afecta la salubridad pública.	Porcentaje de hogares con presencia de basurales en las inmediaciones de sus viviendas.
PRESENCIA DE FÁBRICAS E INDUSTRIAS CONTAMINANTES	Presencia en las inmediaciones del hogar de fábricas e industrias contaminantes, lo que afecta la salubridad pública y el cuidado del medioambiente.	Porcentaje de hogares con presencia de fábricas e industrias contaminantes en las inmediaciones de sus viviendas.
PREVALENCIA DE PLAGAS URBANAS	Presencia en las inmediaciones del hogar de plagas urbanas que afectan la salubridad pública.	Porcentaje de hogares con presencia de plagas urbanas en las inmediaciones de sus viviendas.
CERCANÍA A ESPEJOS Y FUENTES DE AGUA CONTAMINADA	Presencia en las inmediaciones del hogar de espejos y fuentes de agua contaminada, ya sea a nivel de la superficie o en las napas freáticas, lo que constituye un problema para la salubridad pública, la aparición de diferentes enfermedades y la propagación de plagas urbanas.	Porcentaje de hogares con presencia de espejos y fuentes de agua en las inmediaciones de sus viviendas.

2.1 ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

La vivienda representa, por un lado, un bien primario que posibilita la satisfacción de una serie de necesidades elementales de todo ser humano, y por otro, es condición necesaria, mas no suficiente, para acceder a otros bienes y servicios que ofrece el contexto urbano (Adaszko, 2012).

En lo relativo al primer aspecto, la vivienda es el espacio de residencia de una persona o grupo donde se llevan a cabo las actividades cotidianas fundamentales para la reproducción biológica y social: alimento, descanso, higiene personal, evacuación de excretas, socialización primaria e interacción con los semejantes; aspectos que, en su conjunto, conforman el valor de uso de esa unidad habitacional (Yujnovsky, 1984). Para que esto sea factible, la vivienda debe cumplimentar una serie de requisitos cualitativos que, si bien se encuentran presentes en gran parte de las unidades residenciales, no siempre lo hacen en las mismas condiciones, resultando de ello calidades habitacionales sumamente heterogéneas.

En la Argentina, el acceso a una vivienda digna constituye una problemática estructural que durante las últimas décadas no ha recibido una solución efectiva. Dos de las consecuencias inmediatamente observables del estancamiento en la posibilidad de acceder a una vivienda digna han sido la casi inmovilidad de las tasas de propiedad, alquiler y tenencia irregular durante las últimas cuatro décadas (INDEC), y el crecimiento y expansión de las urbanizaciones informales como villas y asentamientos precarios, donde actualmente –utilizando distintas fuentes censales y bibliográficas– habita cerca del 5% de la población del país (Cravino, 2009; Cravino, del Rio y Duarte, 2008).

Entre otros factores, los mencionados explican la dificultad para modificar este escenario estructural: el atraso en la edificación de viviendas sociales; la inaccesibilidad al crédito hipotecario, que lleva a los estratos medios a saturar el mercado del alquiler; la falta de inversión y de planificación pública de la expansión de la mancha urbana, principalmente en las zonas donde habita la población más pobre; y los grandes desequilibrios regionales, que conllevan el problema de que algunas ciudades y provincias expulsen población y

otras las atraigan sin posibilidad de dar respuesta urbana y habitacional a los nuevos habitantes.

En este apartado se examina la evolución en el lapso 2010-2012 de cinco indicadores que dan cuenta del déficit de acceso por parte de los hogares urbanos a una vivienda digna: a) tenencia irregular; b) precariedad material; c) ausencia de baño o inodoro, o presencia de retrete sin descarga mecánica de agua; d) hacinamiento medio; y e) temor a perder la vivienda. Si bien estos cinco indicadores no agotan la totalidad de los aspectos constitutivos del acceso a una vivienda digna, ofrecen una buena aproximación a la realidad que en esta materia prevalece en el país a comienzos del Bicentenario, a la vez que se encuentran estrechamente correlacionados con otras variables que no se examinan en este documento.

El anexo estadístico AE.2.1 de este capítulo que se presenta en formato digital en la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio), expone tablas de datos con un mayor nivel de desagregación para cada uno de los indicadores examinados, según una serie más amplia de variables seleccionadas.

TENENCIA IRREGULAR DE LA VIVIENDA

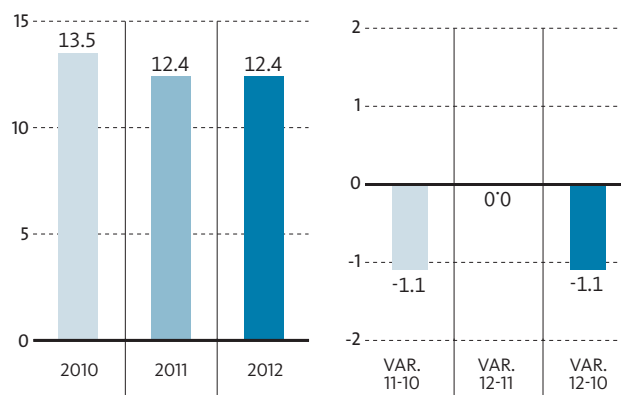
Una de las aristas de la problemática habitacional del país que ha mostrado persistencia a lo largo de las últimas décadas es la dificultad por parte de las personas y de sus familias para acceder a una vivienda propia. Además de los múltiples factores ya mencionados que explican este rasgo estructural, hay que tener presente que la propiedad sobre la vivienda incide en una diversidad de aspectos decisivos para la calidad de vida, entre los que se destacan factores psico-emocionales: por ejemplo la seguridad y la posibilidad de proyectarse a largo plazo en un hábitat y en un espacio propio. En esta línea, los cuidados del entorno vital inmediato no serán los mismos por parte de quienes cuenten con la seguridad jurídica en la tenencia, en comparación con aquellos otros que habiten una vivienda temporalmente o bajo el riesgo permanente de un desalojo.

El indicador aquí empleado para dar cuenta de la problemática del acceso a una vivienda digna es su tenencia irregular, entendida como la situación en la que sus habitantes no son ni propietarios ni inquilinos del inmueble. La bibliografía especializada y los registros estadísticos

Figura 2.1.1

TENENCIA IRREGULAR DE LA VIVIENDA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

indican que gran parte de este problema habitacional se debe a dos razones fundamentales: la ocupación ilegal de facto y el préstamo por parte de terceros. Si bien ambas situaciones son cualitativamente heterogéneas –en aspectos tales como el estatus legal y la legitimidad social–, captan en gran medida la imposibilidad de acceder a una vivienda propia o de ingresar al mercado formal del alquiler, circunstancias que exigen el cumplimiento de una serie de requisitos a los que no todos los hogares están en condiciones de responder –estabilidad o formalidad en el empleo, garantías de terceros propietarios, un ingreso que permita costear las comisiones de la inmobiliaria y el depósito, entre otros.³⁸

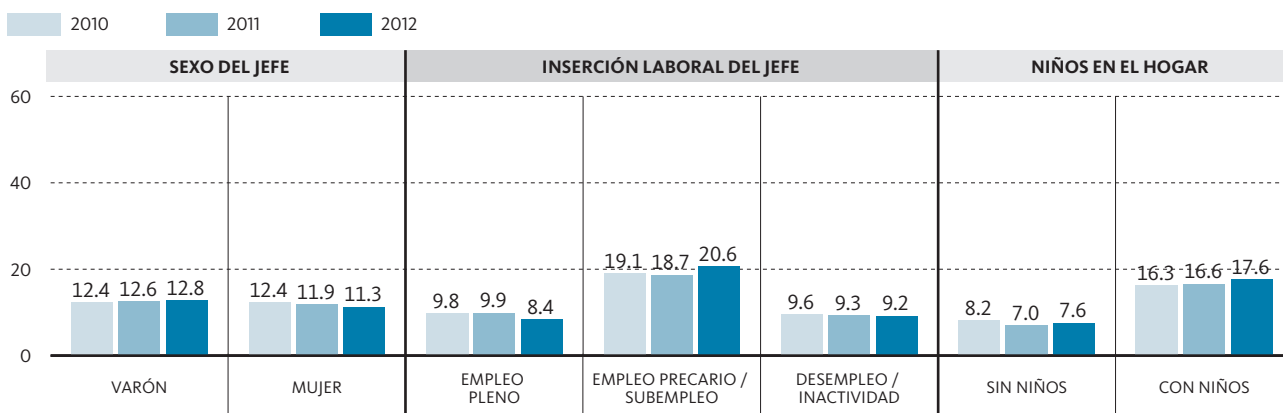
Los datos relevados por la EDSA-Bicentenario (2010-2016) permiten deducir que a lo largo de los tres años bajo análisis se produjo una leve reducción de la tenencia irregular de la vivienda: 13,5% de los hogares en 2010 a 12,4% en 2012 (figura 2.1.1). En términos de población, esto equivale a que en el último año de la serie el 14,2% de los habitantes de los

³⁸ Es más probable que un hogar perteneciente a los estratos socioeconómicos bajos se encuentre ocupando de facto una vivienda que no es propia, y que otro ubicado en los segmentos socioeconómicos medio altos que no sea propietario pueda acceder temporalmente a una unidad habitacional prestada o cedida por un tercero (generalmente un familiar). No obstante, ambas son situaciones “testigo” de la imposibilidad, por distintas razones, de acceder a un “techo propio”, y tienen además en común la ausencia de un marco y una seguridad jurídica en la tenencia.

Figura 2.1.2

TENENCIA IRREGULAR DE LA VIVIENDA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

grandes centros urbanos del país no era ni propietario ni inquilino de la vivienda en la que vivía.

Cuando se compara el porcentaje de hogares con tenencia irregular en diferentes grupos según una serie de variables seleccionadas, se aprecia que en todos los casos los niveles se mantuvieron relativamente estables, con algunas variaciones menores a lo largo del trienio (figura 2.1.2). Más allá de la estabilidad referida, el ritmo de reducción del indicador fue algo más pronunciado en el caso de los hogares donde el principal sostén económico era una mujer, que en su contraparte masculina (11,3% y 12,8%, respectivamente, en 2012). En los hogares con jefe varón se produjo un ligero incremento, aunque estadísticamente no significativo.

Al examinar la situación según la calidad de inserción en el empleo del principal sostén económico del hogar, el mayor valor del indicador se computó para aquellas unidades domésticas con jefes en situación de empleo precario o subempleo (20,6% en 2012), lo que duplicó el guarismo de los otros dos tipos de hogar (con jefes en empleo pleno o en situación de desempleo o inactividad). En esta dirección, si bien las variaciones son muy acotadas, la brecha entre los hogares con jefe en empleo precario o subempleado y los otros dos grupos pareciera haberse ampliado ligeramente durante el trienio. Por ejemplo, entre 2010 y 2012 la brecha entre los hogares cuyo principal sostén económico se encontraba en situación de precariedad laboral y aquellos otros que contaban con empleo pleno pasó de 1,9 a 2,4.

En lo que respecta a los hogares con o sin niños, mientras que el saldo neto de los tres años fue una ligera reducción (de 8,2% a 7,6%) de la tenencia irregular en los hogares sin niños, en aquellos en los que había menores de edad el indicador experimentó un aumento (16,3% a 17,6%), con lo que, también en este caso, la brecha entre ambos tipos de hogar sufrió una ligera ampliación.

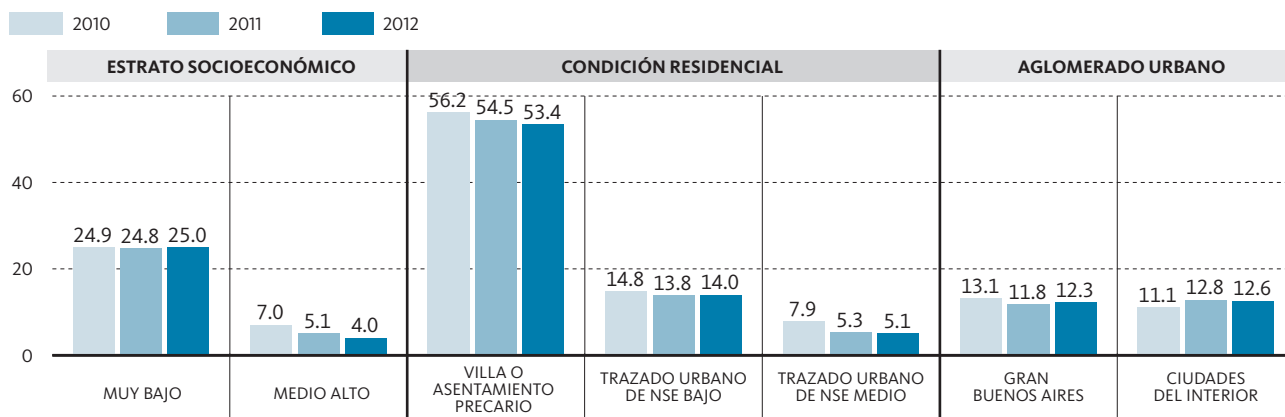
La variación del porcentaje de hogares en situación de tenencia irregular según el estrato social mostró que mientras que a lo largo de los tres años un cuarto de las familias más pobres no era ni propietario ni inquilino de la vivienda que habitaba, en el estrato medio alto –que corresponde a la clase media profesional y comercial de la ciudad– se produjo una reducción estadísticamente significativa, con un descenso del 7% al 4% (figura 2.1.3). Este fenómeno probablemente se vincule a la posibilidad de que algunas capas medias no propietarias hayan logrado pasar de la situación de préstamo a la formalización de un alquiler o, incluso, a la adquisición de una vivienda propia, mediante recursos propios o a través de un crédito hipotecario.

En lo que respecta a la condición residencial o al tipo de barrio en el que se encuentra emplazada la vivienda, entre 2010 y 2012 se produjo una reducción de la tenencia irregular en las villas y asentamientos precarios (del 56,2% de los hogares al 53,4%); pero este mismo nivel de reducción se registró en los barrios con trazado urbano formal de nivel socioeconómico medio. Sin embargo, esto no ocurrió del mismo

Figura 2.1.3

TENENCIA IRREGULAR DE LA VIVIENDA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

modo en aquellos otros barrios en los que, encontrándose dentro de la urbanización formal, predominan estratos de nivel socioeconómico bajo (los habitualmente considerados barrios pobres de la ciudad). Mientras que en el primero de estos dos grupos la variación podría haber respondido a los mismos factores anotados en el párrafo anterior para el estrato socioeconómico medio alto, en el caso de las villas o asentamientos la ligera reducción podría estar vinculada con la regularización dominial de algunas viviendas y terrenos, o bien con la menor presión estatal en materia de erradicación, relocalización o desalojo.

Por último, en el Área Metropolitana de Buenos Aires –que incluye la ciudad capital del país y el Conurbano Bonaerense– se registró un ligero descenso entre los dos años extremos de la serie (de 13,1% a 12,3%), mientras que en el Resto Urbano Interior se produjo un leve incremento (de 11,1% en 2010 a 12,6% en 2012).

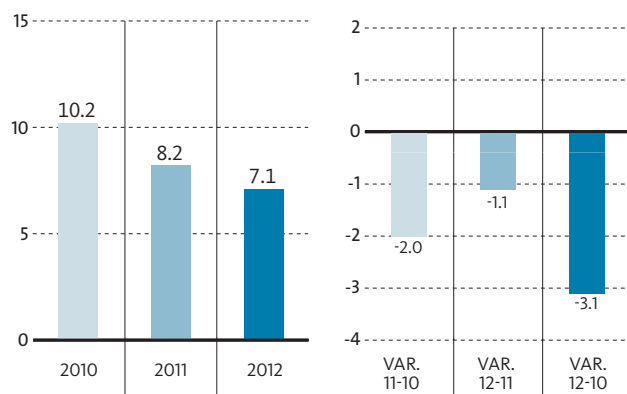
TEMOR A PERDER LA VIVIENDA

Como el temor a perder la vivienda es una variable perceptual, si bien se encuentra estrechamente vinculada con el indicador referido en las líneas precedentes, se halla asimismo sujeta a una serie de factores coyunturales asociados con las expectativas de la población, aspecto que le da a esta variable una mayor volatilidad en comparación con otros indicadores habitacionales.

Figura 2.1.4

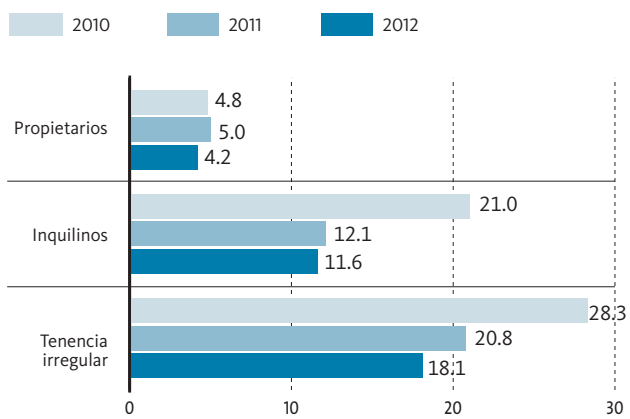
TEMOR A PERDER LA VIVIENDA

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Entre los múltiples factores que pueden incidir en el incremento o la reducción del temor a perder la vivienda, por un lado se destacan los de orden directo, relacionados con la política habitacional de los gobiernos (regularización dominial, edificación de viviendas sociales, legislación en torno a los alquileres, entre otros), y por otro lado, los factores macroeconómicos que exceden a la órbita habitacional propiamente dicha (inflación, sostenimiento de la capacidad adquisitiva del dinero, nivel de empleo).

Figura 2.1.5**TEMOR A PERDER LA VIVIENDA
SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA**Años 2010-2011-2012.
En porcentaje de hogares particulares.

FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Unos y otros factores influyen fundamentalmente en las expectativas de quienes no son propietarios. La inflación, por ejemplo, afecta la percepción en torno a la capacidad de seguir sosteniendo un alquiler o una cuota hipotecaria por parte de quienes se encuentran en cada una de esas situaciones, a la vez que también influye sobre las expectativas de quienes cuentan con una tenencia irregular de la vivienda (por préstamo o por ocupación) en cuanto a la posibilidad futura de acceder a una unidad habitacional propia. En el caso de las intervenciones directas del Estado en materia de política habitacional, el temor a perder la vivienda puede incrementarse en períodos en los que aumentan los desalojos o las prácticas de erradicación o relocalización de villas; pero se reduce cuando sucede lo contrario o se avanza con incentivos a la regularización dominial, ampliación del crédito hipotecario, entre otros.

De los datos ilustrados en la figura 2.1.4 se desprende que entre 2010 y 2012 el temor a perder la vivienda se redujo alrededor de 3 p.p. (de 10,2% a 7,1%), lo que en el último año de la serie equivale al 6,7% de la población urbana adulta.

Cuando se examina el temor a perder la vivienda según el régimen de tenencia de la misma, resulta por demás interesante la reducción experimentada por el grupo conformado por aquellos que alquilaban y por los que contaban con una tenencia irregular (figura 2.1.5). Obsérvese que mientras que en el grupo de propietarios el temor se mantuvo en un nivel muy

bajo a lo largo del trienio, e incluso registró una leve reducción hacia el final de la serie, en el grupo de inquilinos retrocedió casi 10 p.p. (de 21% en 2010 a 11,6% en 2012). También entre quienes se encontraban ocupando de hecho o habitaban viviendas pres-tadas o cedidas (tenencia irregular) se verificó un descenso del temor a perder la vivienda (del 28,3% de los hogares en 2010 al 18,1% en 2012). En este sentido, podría plantearse la hipótesis de que no se trata únicamente de una importante reducción del indicador en ambos grupos, sino que en 2010 (primer año de esta serie) el temor a perder la vivienda se encontraba en un nivel muy elevado.

Cuando a partir de los datos ilustrados en la figura 2.1.6 se examina el indicador según las distintas variables de corte, tanto en los hogares donde el principal sostén económico era un varón como en aquellos otros en los que dicha función era ocupada por una mujer, se registra un descenso del temor a perder la vivienda, aunque en 2012 el valor del indicador en el segundo tipo de hogar seguía siendo más alto que en el primero (8% y 6,8%, respectivamente). La disminución también se registró en las tres categorías en las que se clasifican los hogares según la calidad de inserción laboral del principal sostén económico; si bien la mayor tasa de descenso se produjo entre quienes contaban con un empleo precario o eran subempleados (pasando de 15,6% en 2010 a 10,1% en 2012). En este orden, mientras que las brechas se mantuvieron relativamente constantes entre quienes contaban con un empleo pleno y quienes eran inactivos o estaban desempleados, sí se produjo una reducción de la brecha entre esos dos grupos con respecto a los hogares donde el principal sostén se hallaba en situación de precariedad laboral, unidades domésticas en las que el temor a perder la vivienda ascendía en 2012 a 10,1%.

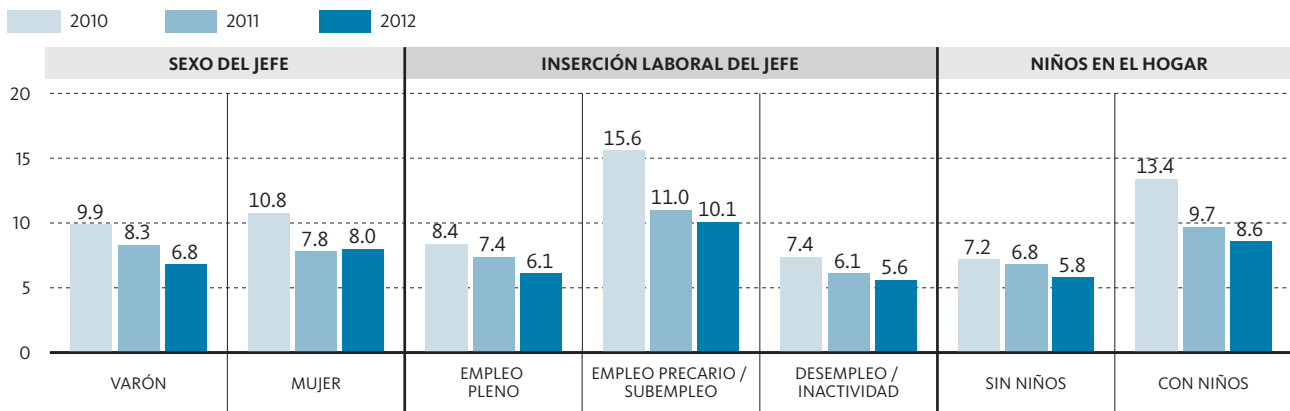
La presencia o ausencia de niños y adolescentes en el hogar arrojó los siguientes resultados: en las unidades domésticas sin menores de edad se produjo una ligera reducción (al pasar de 7,2% a 5,8%), mientras que la mayor caída del indicador se operó en las familias con presencia de menores (13,4% en 2010 a 8,6% en 2012).

El indicador según el estrato socioeconómico de pertenencia muestra que en el 25% de los hogares más pobres, el temor a perder la vivienda se contrajo de 14,6% a 10,2% entre los años extremos de la serie, en tanto que en el estrato medio alto la reducción fue algo más acotada: pasó de 6,7% a 4% (figura 2.1.7).

Figura 2.1.6

TEMOR A PERDER LA VIVIENDA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

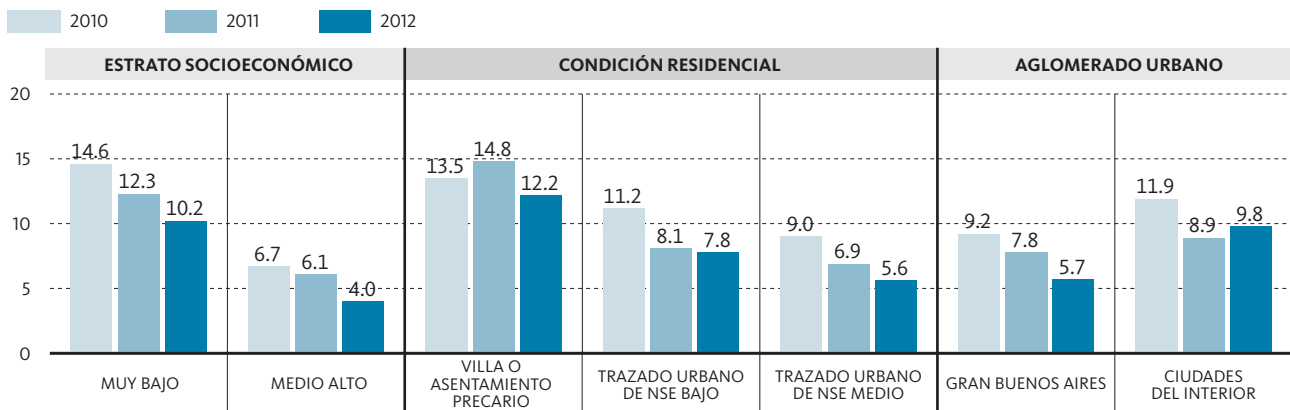


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.1.7

TEMOR A PERDER LA VIVIENDA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Más llamativa resulta la evolución del indicador según la condición residencial o el tipo de barrio donde se emplazaban los hogares estudiados. Si bien en el contexto de las villas o asentamientos precarios entre 2010 y 2011 se registró un leve incremento del temor a perder la vivienda, el saldo total entre ambos extremos de la serie fue una reducción de 1,3 p.p. (alcanzando al 12,2% de los hogares que habitaban en ese tipo de urbanización informal). Nótese que este valor resulta apenas 1 p.p. más alto que el nivel que ese mismo indicador alcanzó en 2010 en las unidades domésticas asentadas en los barrios dentro de la traza urbana for-

mal de nivel socioeconómico bajo, tipo de hogar donde esta problemática se ubicó en 7,8% en el último año de la serie (sin una variación significativa en el bienio 2011-2012). Por su parte, el temor a perder la vivienda prevaleció solo en el 5,6% de los hogares asentados en los mejores barrios de la urbanización.

Por último, la evolución de este indicador según el aglomerado urbano, tanto en el Gran Buenos Aires como en el Resto Urbano Interior evidenció un descenso, aunque el retroceso más significativo se computa para el primer aglomerado, donde el temor a perder la vivienda pasó del 9,2% de los hogares

en 2010 al 5,7% en 2012. En el Resto Urbano Interior pudo apreciarse un leve incremento en el bienio 2011-2012, pero se trata de una variación estadísticamente no significativa, y hacia el final de la serie el valor seguía siendo inferior al de 2010.

VIVIENDA PRECARIA

Si bien la vivienda está constituida por un amplio conjunto de elementos (materiales y no materiales) que la tornan habitable, sus componentes físicos fundamentales están conformados por las partes estructurales (cimientos, columnas, vigas y losas), el piso, las paredes³⁹ y el techo. Estos últimos tres componentes precisan de un elemento resistente, un aislante y una terminación. La función principal del piso es el aislamiento hidrófugo, que además tiene consecuencias sobre la higiene de la unidad habitacional. Las paredes deben cumplir las funciones de resistencia y delimitación de espacios, facilitándoles la privacidad a los ocupantes. En las paredes externas se suma la función de aislación térmica, acústica y la protección hidrófuga, atributos para los que se precisa una terminación mediante revoque. El techo tiene como principal finalidad la protección superior contra las condiciones atmosféricas, con lo que también debe ser resistente, aislante e hidrófugo.

Teniendo en cuenta que en la urbanización argentina se ha llegado a un nivel de desarrollo que posibilita la edificación de unidades residenciales con mínimos estándares de calidad material (es decir que cumplan las funciones básicas referidas al comienzo del apartado 2.1), a renglón seguido se analiza la incidencia de la precariedad material de la vivienda, comprendida como la de aquella que cumple con al menos una de las dos siguientes condiciones: a) ser casilla, rancho o similar, o una edificación no construida para vivienda; o b) ser casa o departamento con estructura sólida pero que no cuenta con las terminaciones en las paredes o en los pisos.⁴⁰

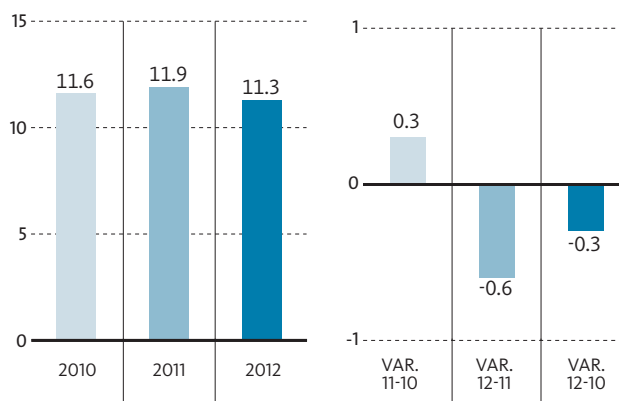
39 Las paredes también pueden cumplir funciones estructurales si son portantes.

40 Así, por ejemplo, una casilla de chapa o material sin revocar se entiende como precaria aun en la situación en que cuente con algunos servicios públicos básicos, como agua corriente, cloacas o electricidad, e incluso ubicándose dentro de la traza urbana formal y no en una villa o asentamiento precario. En el mismo escenario

Figura 2.1.8

VIVIENDAS PRECARIAS

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Los datos relevados por la EDSA-Bicentenario demuestran que durante los tres años analizados el porcentaje de hogares que habitaba en viviendas con precariedad material prácticamente no se vio modificado, alcanzando a algo más del 11%, lo que en términos de personas equivale a cerca del 13% de la población urbana (figura 2.1.8).

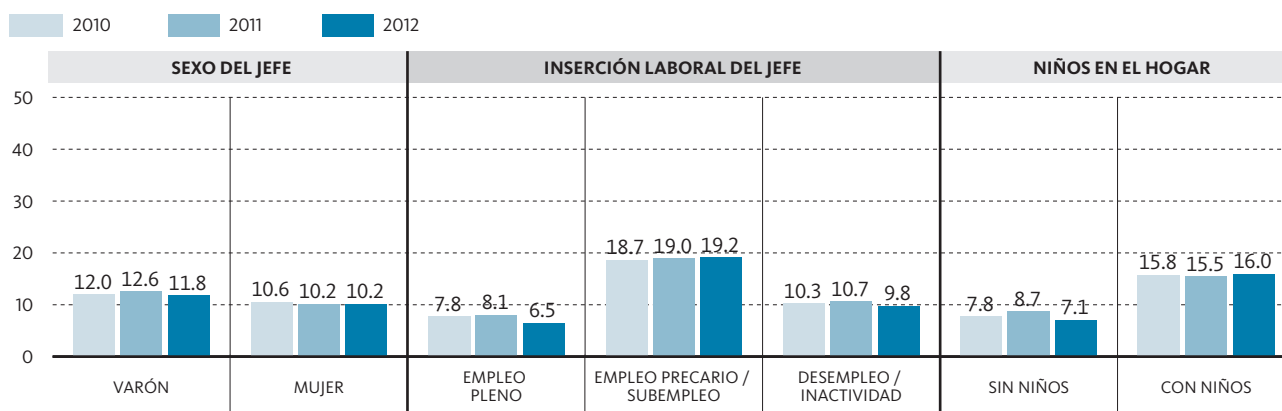
La ligera reducción del porcentaje de hogares habitando viviendas precarias se repitió en los hogares con jefatura masculina y femenina: 11,8% y 10,2%, respectivamente, en 2012 (figura 2.1.9). A su vez, el comportamiento del indicador según la calidad de inserción en el empleo del principal sostén económico del hogar registró la reducción más significativa entre los encuestados que contaban con un empleo pleno, alcanzando al 6,5% de los hogares en 2012, frente al 19,2% de los hogares cuyo jefe se hallaba en situación de precariedad laboral o subocupación.

deficitario se encuentra una casa o departamento con estructuras sólidas (cimientos, columnas, paredes y losa) pero con sus muros laterales de ladrillos sin revocar (en su parte interior o exterior) en virtud de que no cumple por completo con las funciones de aislación y protección referidas. Por el contrario, una casa al interior de una villa que cuente con una estructura sólida, materiales de construcción apropiados, paredes resistentes, piso y techo con terminaciones adecuadas, se considerará sin déficit en cuanto a precariedad material, aun cuando no tenga acceso a servicios domiciliarios básicos (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), aunque el déficit habitacional y urbano para estos hogares es captado por otras variables como el acceso a servicios y a infraestructura básica.

Figura 2.1.9

VIVIENDAS PRECARIAS SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

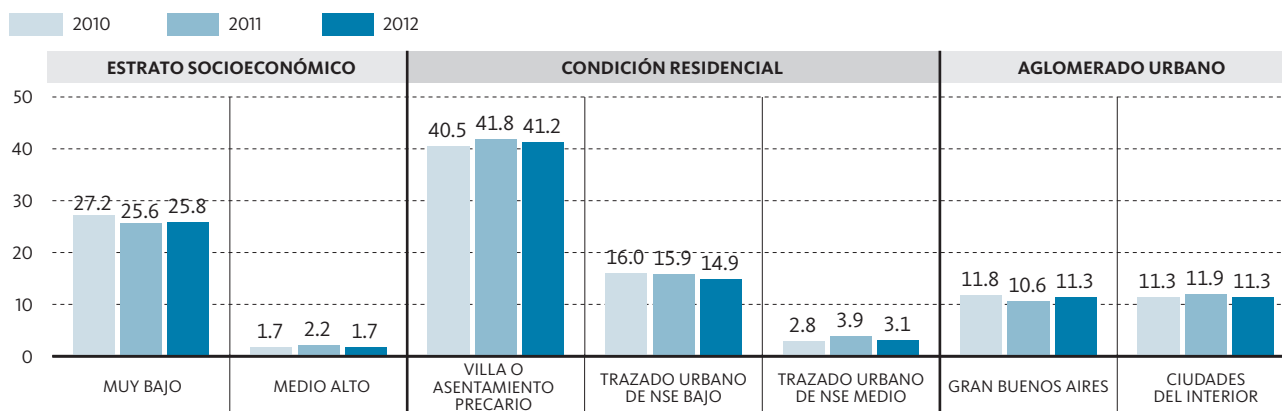


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.1.10

VIVIENDAS PRECARIAS SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Los hogares sin niños experimentaron una sutil reducción de esta problemática entre ambos años extremos de la serie, en tanto que en el grupo de hogares con presencia de menores el indicador registró un incremento estadísticamente no significativo. En este último tipo de hogar, el 16% habitaba en viviendas precarias, frente a tan solo el 7,1% de los hogares sin niños. Esto se vincula, por supuesto, a la mayor pobreza entre este segundo tipo de hogares.

El nivel de viviendas precarias también se mantuvo relativamente estable en los diferentes estratos socioeconómicos, excepto en el muy bajo, donde se re-

dujo 1,5 p.p. entre ambos extremos de la serie (figura 2.1.10). No obstante, como se indicó más arriba, las variaciones no resultan estadísticamente significativas para estos grupos, con lo que podría concluirse que las diferencias y las brechas se han mantenido estables. Así, en 2012, aproximadamente 1 de cada 4 hogares del estrato socioeconómico muy bajo habitaba en una vivienda precaria, frente a tan solo el 1,7% del estrato medio alto.

En lo que respecta a la condición residencial o el tipo de barrio de residencia, en 2012 el 41,2% de los hogares asentados en villas o asentamientos pre-

rios habitaba en viviendas precarias, con un ligero incremento desde 2010 (que no resulta estadísticamente significativo). En la misma situación de déficit se encontró el 14,9% de quienes vivían en barrios de trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo, y tan solo el 3,1% de los hogares radicados en zonas formalmente urbanizadas típicamente de clase media. Por último, se produjo una reducción menor en el Gran Buenos Aires y una ausencia de variación en el Resto Urbano Interior; en ambos casos, en 2012 el 11,3% de los hogares habitaba viviendas precarias.

DÉFICIT DE SERVICIO SANITARIO

La ausencia de baño, retrete o descarga mecánica de agua constituye un indicador relevante cuando se trata de examinar el acceso por parte de la población a una vivienda digna. Este tipo de recurso no solamente da respuesta a una necesidad humana elemental, como es la evacuación de excretas, sino que a su vez tiene efectos sanitarios muy importantes, habida cuenta de que su presencia previene la transmisión de una serie de enfermedades infectocontagiosas, con consecuencias directas sobre los grupos más vulnerables (lactantes, niños, ancianos o inmunodeprimidos).

La ausencia de baño, retrete o descarga mecánica de agua afecta principalmente a los sectores que no han podido consolidar una vivienda con mínimos estándares de habitabilidad y, a su vez, se asocia a la precariedad material y constructiva de la unidad habitacional y a la carencia de conexión a la red cloacal, entre otros aspectos.

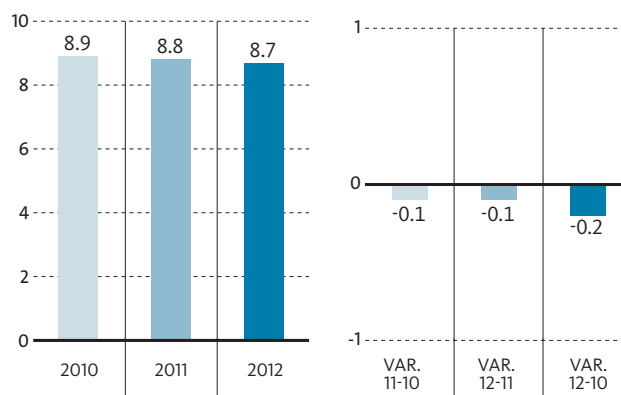
A lo largo del período analizado, cerca del 9% de los hogares radicados en los grandes centros urbanos del país no contaba con baño, retrete o, en caso de contar con el mismo, no tenía arrastre o descarga mecánica de agua. Como puede apreciarse en la figura 2.1.11, el indicador se mantuvo estable a lo largo del trienio, alcanzando en 2012 al 8,7% de las familias y al 9,3% de la población.

Si bien las variaciones interanuales en los distintos grupos de comparación resultan menores –y se encuentran dentro de lo que técnicamente se entiende como error muestral– se observa que en 2012 el nivel de déficit prácticamente se equiparó entre los hogares con jefatura masculina y aquellos donde el principal sostén era una mujer (figura 2.1.12). Por su parte, se apreció una

Figura 2.1.11

SIN BAÑO, RETRETE O SIN DESCARGA MECÁNICA DE AGUA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

ligera reducción en las unidades domésticas con jefes en situación de precariedad laboral, desempleo o inactividad, a la vez que se verificó un leve aumento en las que contaban con jefe en empleo pleno. No obstante, los niveles resultaron estables a lo largo de los tres años.⁴¹ Específicamente, en 2012 no contaba con baño, retrete o descarga mecánica de agua el 17,3% de los hogares con jefe en situación de precariedad laboral o subempleo, frente a solo el 2,5% de aquellos otros en los que el principal sostén económico contaba con un empleo pleno.

En cuanto a la presencia o ausencia de menores, la brecha se mantuvo constante entre ambos años extremos de la serie: el 12,5% de los hogares con niños no contaba con este recurso sanitario, lo que implica que tenía 2,4 veces más chances de experimentar este problema que otro hogar en el que no vivieran menores de edad.

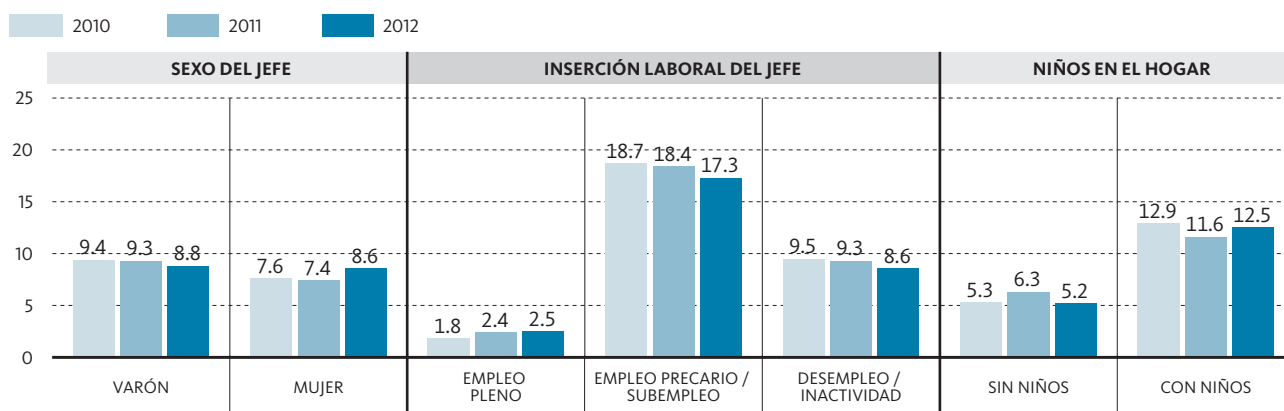
Previsiblemente, dado que el indicador sanitario se encuentra estrechamente relacionado con la posición de los hogares en la estratificación social, el déficit se localizó fundamentalmente en el 25% más pobre, en las villas y asentamientos precarios y en las zonas más carenciadas de las ciudades (figura 2.1.13). En el primer caso se produjo una variación muy escasa a lo largo de los tres años, afectando en 2012 al 23,2% de los hogares del estrato inferior; mientras que la principal reducción

41 Y las variaciones se encuentran dentro de los márgenes de error muestral.

Figura 2.1.12

SIN BAÑO, RETRETE O SIN DESCARGA MECÁNICA DE AGUA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

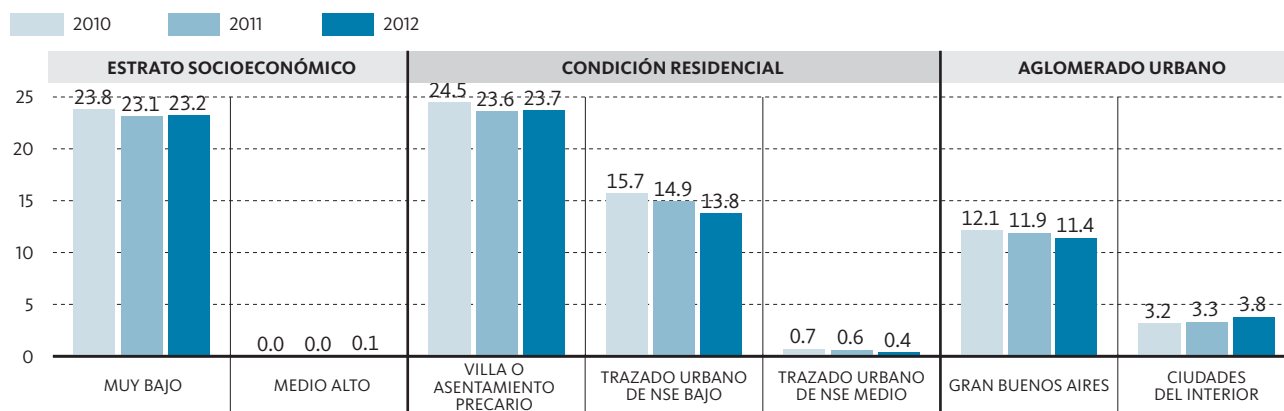


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.1.13

SIN BAÑO, RETRETE O SIN DESCARGA MECÁNICA DE AGUA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

se experimentó entre las unidades domésticas de los barrios de trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo, donde el indicador se retrajo 1,9 p.p. entre ambos años extremos de la serie, reducción que no se verificó en el caso de las villas y asentamientos precarios. Aun así, en 2012, esta problemática habitacional y sanitaria afectó al 13,8% de las familias asentadas en las zonas más pobres dentro de la urbanización formal.

Por último, si bien el Gran Buenos Aires registró un ligero retroceso del valor de este indicador de déficit, y lo opuesto sucedió con el Resto Urbano Interior, en 2012 este último conjunto seguía aventajando al pri-

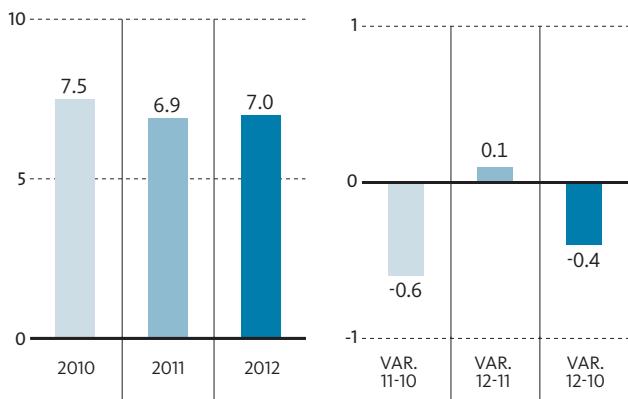
mero, en el sentido de que un hogar ubicado en el Gran Buenos Aires tenía 3 veces más probabilidades de no contar con baño, retrete o descarga mecánica de agua, que otro asentado en el resto de los aglomerados urbanos que conforman el dominio de este estudio.

HACINAMIENTO

En el conjunto de los aspectos relativos a las condiciones de habitabilidad de una vivienda, la suficiencia del espacio constituye uno de los elementos más im-

Figura 2.1.14**HACINAMIENTO MEDIO**

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

portantes para el pleno bienestar de las personas y del conjunto del hogar, en virtud de que la vivienda no solo debe proveer protección y abrigo a sus ocupantes, sino también brindar condiciones básicas para el desarrollo de la intimidad y de una vida saludable. En este sentido, la literatura especializada señala que la problemática del hacinamiento constituye una de las aristas centrales que componen el “déficit habitacional cualitativo”, entendiendo que la mera carencia de una vivienda no es el único aspecto que debe ser tomado en cuenta a la hora de analizar los problemas habitacionales de un país (Arriagada Luco, 2003).

Entre las múltiples consecuencias del hacinamiento se cuentan las vinculadas con las alteraciones a la privacidad y la intimidad de las personas, así como con una mayor propensión a la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Asimismo, el hacinamiento constituye uno de los factores decisivos para que los niños y adolescentes prefieran pasar más tiempo en la calle, por fuera del acompañamiento de los adultos, lo que en algunos casos los expone a una serie de riesgos, principalmente en contextos sociales de alta marginalidad.

Se expone aquí el indicador de hacinamiento medio, entendido como aquella situación en la que en una misma vivienda habitan 3 o más personas por cuarto (excluyendo la cocina, los baños, los patios y el garaje). Se utiliza este indicador y no el de hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto habita-

ble) habida cuenta de que, por el nivel de desarrollo que ha alcanzado la Argentina y las condiciones de vida de los estratos sociales medios, se evalúa que están dadas las condiciones para satisfacer el requerimiento de un máximo de 2 personas por cuarto.

Los datos relevados por la EDSA-Bicentenario indican que entre 2010 y 2012 se produjo una ligera reducción del hacinamiento: del 7,5% al 7% de los hogares, lo que en el último año de la serie implicaba al 11,3% de la población urbana (figura 2.1.14).

Esta ligera reducción del hacinamiento fue experimentada tanto por los hogares con jefatura masculina como por aquellos con jefatura femenina, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de hogar en 2012 (figura 2.1.15). En cuanto a la situación laboral del principal sostén económico, aunque con un nivel muy acotado, la mayor variación se registró en los hogares donde el jefe contaba con un empleo precario o era subempleado. Hacia el último año bajo análisis se hallaba hacinado el 11,7% de este último tipo de hogar, frente al 5,3% de aquellos cuyo jefe contaba con un empleo pleno, y el 4,6% de aquellos otros cuyo jefe se hallaba desempleado o inactivo.

Dado que el hacinamiento se encuentra estrechamente relacionado con la presencia o ausencia de niños y adolescentes en el hogar, interesa fundamentalmente la evolución de las unidades domésticas donde sí viven menores. En este sentido, entre 2010 y 2012 se registró una leve reducción del hacinamiento (de 14,6% a 13,7%).

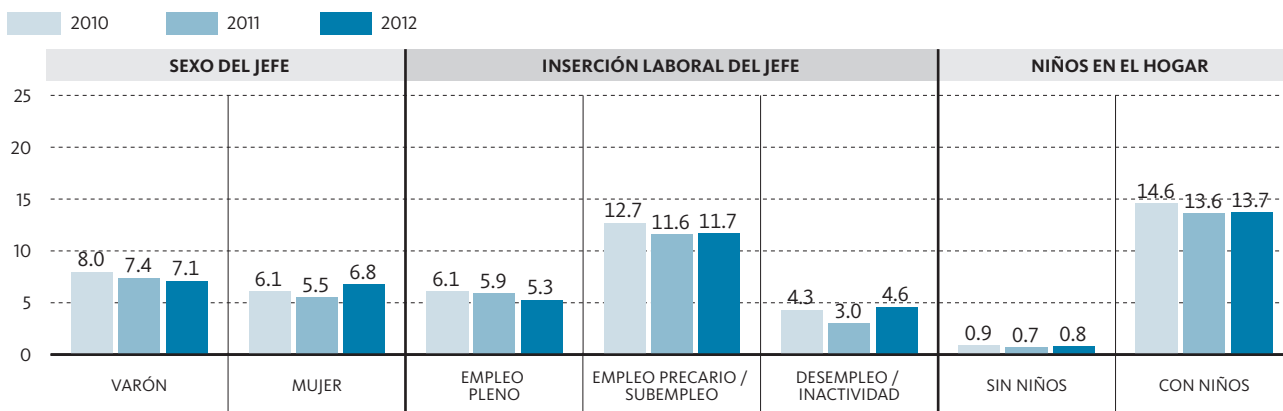
Como muestra la figura 2.1.16, la mejora en la reducción del hacinamiento fue experimentada fundamentalmente por los hogares del estrato muy bajo (pasando de 18% a 15% entre los dos años extremos de la serie) y por una parte de los localizados en villas o asentamientos precarios (con una reducción de 2,3 p.p.). No obstante, en 2012, un hogar emplazado en este tipo de urbanización tenía 10,5 veces más chances de enfrentar esta problemática habitacional que otro ubicado dentro de la traza urbana formal de nivel socioeconómico medio (donde el indicador se ubicó en apenas el 1,9%).

La evolución del indicador según el aglomerado urbano computó la mayor reducción para el Gran Buenos Aires, donde el hacinamiento pasó de 7,4% a 6,5%, mientras que en el Resto Urbano Interior experimentó un ligero incremento, de 7,6% a 8,1%, con lo que la distancia entre ambos se vio ampliada.

Figura 2.1.15

HACINAMIENTO MEDIO SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

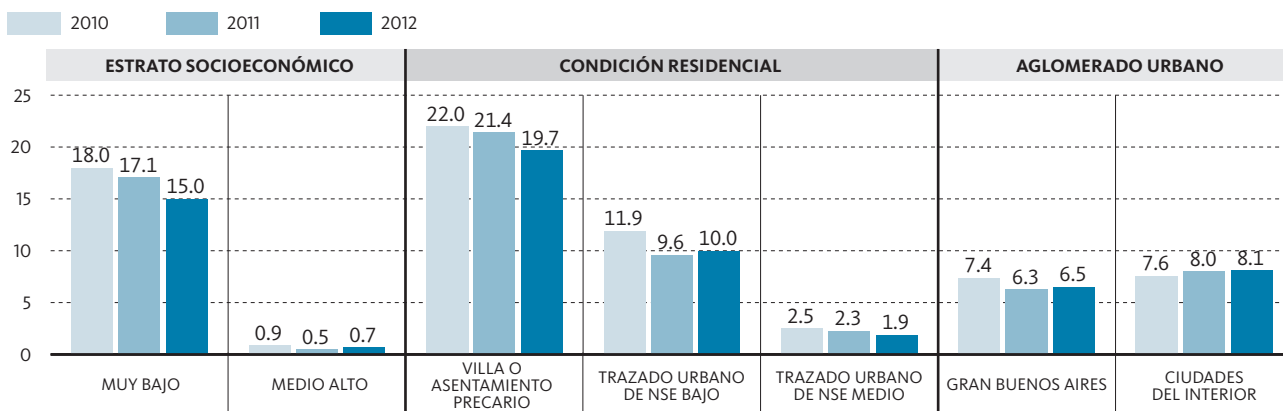


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.1.16

HACINAMIENTO MEDIO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

CONDICIONANTES DEL ACCESO A UN VECINDARIO CON VIVIENDAS DIGNAS

El propósito de estas últimas líneas del apartado 2.1 es desarrollar un análisis inferencial, a través de un modelo de regresión lineal múltiple, acerca del peso que una serie de variables independientes tienen como condicionantes para que los hogares accedan a vecindarios o barrios con viviendas con mínimos estándares de habitabilidad, tal como se

definió esta noción al comienzo del presente apartado.⁴²

42 En este capítulo se entiende al vecindario como una unidad socioespacial reducida que reúne a un conjunto contiguo de viviendas y hogares –no importa la modalidad de urbanización que tengan– y que, pudiendo abarcar a una o más manzanas, en ella habita una población que reconoce ese espacio como su ámbito cotidiano de residencia. Operativamente, el vecindario representa una porción reducida y aleatoria dentro de un radio censal; un punto muestral que constituyó la unidad de selección de la tercera etapa del muestreo, antes de llegar a los hogares (unidades elementales).

La propuesta del análisis parte de un supuesto fundamental, a saber: en los grandes centros urbanos del país, los hogares no se encuentran asentados aleatoriamente en las distintas áreas, barrios o vecindarios de la ciudad, sino que tienden a localizarse próximos a otros hogares con similares características en determinados atributos (económicos, culturales, educativos, étnicos, etcétera). Este fenómeno –que es definido con mayor precisión conceptual en la nota de investigación 2.6– se conoce con el nombre de “segregación residencial” y caracteriza, aunque con diversa intensidad, a gran parte de las ciudades. El hecho de que tal fenómeno efectivamente se produzca posibilita clasificar los hogares ya no solo según su acceso individual a determinadas condiciones de hábitat (por ejemplo la vivienda), sino por el grado de acceso que prevalezca en su vecindario de residencia. Con esto, interesa investigar el peso que diferentes atributos de los hogares tienen en la posibilidad de que se encuentren asentados en vecindarios donde predomina cierto nivel de acceso a viviendas con mínimos estándares de habitabilidad.

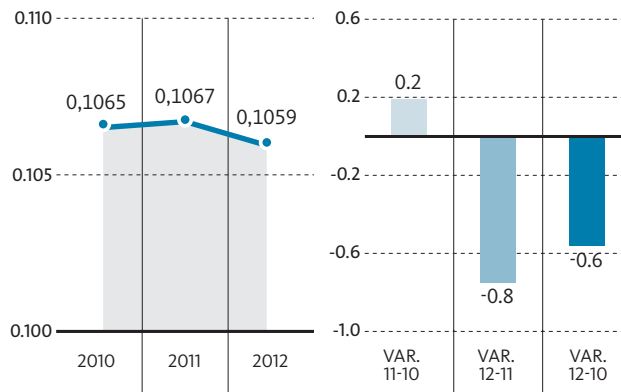
Para realizar este análisis se construyó un índice sintético a través de un análisis factorial por el método de componentes principales categóricos (CAPTCA), utilizando como variables basales los cuatro indicadores objetivos presentados en este apartado (tenencia irregular, vivienda precaria, servicio sanitario y hacinamiento) y dejando de lado el temor a perder la vivienda, que constituye un indicador perceptual y subjetivo, que tiene un carácter menos estructural y, por tanto, es más volátil a la coyuntura. El índice de déficit de acceso a una vivienda digna le asigna un puntaje o *score* a cada hogar y se encuentra estandarizado en un rango que va de 0 (ausencia de déficit) a 1 (déficit completo). Seguidamente, y a los efectos de incorporar en el análisis la dimensión de la segregación residencial, se computó la media de dicho índice para cada uno de los vecindarios en los que se encuentran emplazados los hogares de la muestra.

A partir de ello, se aplicó un análisis de regresión lineal múltiple en cinco fases, de lo que surgen cinco modelos en los que secuencialmente se van incorporando las siguientes variables independientes: el sexo del jefe de hogar, su nivel educativo, su calidad de inserción en el empleo, la presencia de niños y adolescentes en la vivienda, el estrato socioeconómico de pertenencia, la condición residencial, el aglomera-

Figura 2.1.17

DÉFICIT DE ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA POR VECINDARIO

Media del índice por vecindario y variaciones relativas porcentuales interanuales. Años 2010-2011-2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

rado urbano de residencia y el año del relevamiento. Este último factor posibilita, controlando las demás variables, averiguar hasta qué punto la variación interanual del índice fue significativa y aporta a la descripción de la variable dependiente.

La figura 2.1.17 presenta la media del índice de déficit de acceso a una vivienda digna por vecindario y las variaciones relativas interanuales. Como puede apreciarse, el índice de déficit se mantuvo relativamente estable, aunque con una ligera reducción entre ambos extremos de la serie. A su vez, la figura 2.1.18 expone los resultados del análisis de regresión, con los valores B tipificados que permiten evaluar el aporte predictivo de cada una de las variables independientes, los coeficientes de determinación del modelo (R cuadrado) y los valores de las pruebas F, que dan cuenta del grado de ajuste del modelo desde una perspectiva estadística.

En lo que respecta al análisis de regresión propiamente dicho, como es de esperar, a medida que se incorporan nuevas variables independientes se incrementa la capacidad explicativa, pasando de un R cuadrado de 0,179 en el modelo I, que sólo toma en cuenta variables sociodemográficas básicas, a 0,451 en el modelo V, en el que entra en juego todo el conjunto de las variables. Sin embargo, obsérvese que entre el cuarto y el quinto modelo, el aumento del coeficiente de determinación que da cuenta del porcentaje de varianza explicada prácticamente no se modifica. Esto quiere decir que si bien los

Figura 2.1.18

**ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE EN CINCO FASES.
VARIABLE DEPENDIENTE: MEDIA DEL ÍNDICE DE DÉFICIT DE ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA POR VECINDARIO
COEFICIENTES B TIPIFICADOS Y NIVELES DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA.**

Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I	MODELO II	MODELO III	MODELO IV	MODELO V
	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO
SEXO DEL JEFE					
Varon (c)					
Mujer	-0,044***	-0,055***	-0,026***	-0,025***	-0,025***
EDUCACIÓN DEL JEFE					
Con secundario completo (c)					
Sin secundario completo	0,305***	0,026***	0,028***	0,024***	0,024***
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE					
Empleo pleno (c)					
Empleo precario / subempleo	0,160***	0,061***	0,054***	0,051***	0,051***
Desempleo / inactividad	0,045***	-0,094***	-0,042***	-0,036***	-0,039***
NIÑOS EN EL HOGAR					
Sin niños (c)					
Con niños	0,160***	0,123***	0,081***	0,081***	0,081***
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR					
ESTRATO SOCIOECONÓMICO					
Medio alto (c)					
Medio bajo		0,086***	0	0,2	0,01
Bajo		0,245***	0,074***	0,075***	0,075***
Muy bajo		0,543***	0,202***	0,005***	0,199***
CONDICIÓN RESIDENCIAL					
Trazado urbano de NSE medio (c)					
Urbanización formal de NSE bajo			0,298***	0,291***	0,293***
Villa o asentamiento precario			0,458***	0,452***	0,456***
TIPO DE AGLOMERADO					
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)					
Conurbano Bonaerense				0,056***	0,055***
Otras Grandes Áreas Urbanas				-0,035***	-0,035***
Resto Urbano Interior				-0,061***	-0,061***
AÑO					
2010					
2011					-0,031***
2012					-0,040***
CONSTANTE					
	0,029***	0,024***	0,016***	0,016***	0,023***
R cuadrado	0,179***	0,288***	0,439***	0,450***	0,451***
F	739,183***	858,966***	1328,351***	1070,047***	932,115***

(c) Categoría de referencia.

* Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,1).

** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,05).

*** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value <0,01).

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

coeficientes B tipificados que dan cuenta de la influencia de los años 2011 y 2012, en comparación con 2010, resultan estadísticamente significativos, por su bajo valor absoluto no realizan un gran aporte a la explicación de la variación del déficit de acceso a un vecindario con viviendas dignas, lo que también resulta consistente con lo ilustrado en la figura 2.1.17, donde apenas se registra una disminución del déficit entre 2010 y 2012.

En lo que respecta al modelo I, la variable con la mayor capacidad explicativa es el nivel educativo del principal sostén económico del hogar, en el sentido de que aquellos que no han finalizado el nivel de enseñanza media aumentan considerablemente el valor del índice de déficit de acceso a vecindarios donde predominan viviendas dignas. Sin embargo, dado que el nivel educativo es una variable “proxy” del nivel

socioeconómico, la cual se incorpora en la siguiente fase, en el modelo III se produce una drástica reducción del coeficiente B tipificado del bajo nivel educativo (que desciende de 0,305 a 0,026) en favor del estrato socioeconómico muy bajo (0,543), el que pasa a constituirse en un factor clave en la explicación de la posibilidad de habitar un vecindario donde predominan viviendas dignas.

En la misma línea, los mayores incrementos en el R cuadrado se computan cuando se pasa del modelo I al II, en el que se incorpora el estrato socioeconómico, pero principalmente entre este último y el modelo III, cuando se integra la condición residencial. En otros términos, mientras que bajo el modelo II el estrato socioeconómico de pertenencia de los hogares (principalmente el muy bajo) explicaba una parte sustancial del déficit de acceso a un vecindario con viviendas dignas, cuando en el modelo III se incorpora la condición residencial, las coeficientes B tipificados anteriores descienden abruptamente y quedan subsumidos en la nueva variable, lo que es por completo coherente con la teoría de la segregación residencial socioeconómica –abordada con más detalle en la nota de investigación 2.6–. Así, ya no importa únicamente cuánta desigualdad exista entre los hogares en materia de acceso a una vivienda digna, sino en qué vecindarios se encuentran residiendo.

Luego, los coeficientes B tipificados de esta variable aumentan en la categoría villas y asentamientos precarios. La importancia de esta variable también se aprecia en el hecho de que los coeficientes referidos de las dos categorías que dan cuenta de la condición residencial prácticamente no varían en los modelos III, IV y V. En los dos últimos se incorporan al análisis el aglomerado urbano de residencia y el año del relevamiento. Nótese que en lo que respecta al aglomerado, residir en el Conurbano Bonaerense, en las otras áreas metropolitanas o en el Resto Urbano incrementa ligeramente la posibilidad de habitar un vecindario con déficit de viviendas dignas. Por el contrario, los valores negativos de los dos coeficientes referidos a los años 2011 y 2012 señalan que, en comparación con 2010, se produjo una leve mejoría en términos de una reducción del déficit, aunque en niveles muy acotados.

Como conclusión del análisis de regresión puede extraerse que el estrato socioeconómico y la condición residencial constituyen las dos variables fundamentales para explicar el acceso o no a vecindarios

con viviendas con mínimos estándares de habitabilidad. Pero dado que la población se halla asentada de acuerdo a un patrón de segregación residencial socioeconómica, la estratificación social queda subsumida en el tipo de vecindario de residencia.

2.2 ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED

Los servicios urbanos son actividades que, llevadas a cabo por empresas privadas, el Estado u organizaciones sociales, unifican sistémicamente los distintos componentes físicos y relacionales del espacio urbano. Son, en definitiva, actividades que permiten que la ciudad funcione (Pérez, 2009).

En este apartado se examina la evolución del acceso por parte de los hogares a un conjunto particular de estos recursos: los servicios domiciliarios de red. Estos, conectando las unidades residenciales con los nodos de provisión y distribución de la ciudad, por un lado incrementan el valor de uso de la vivienda –mejorando la calidad de vida de quienes la habitan– y, por otro, aumentan su valor de mercado.

La posibilidad de acceder a un servicio domiciliario de red depende de tres factores primordiales: a) contar con una vivienda –recurso que en el marco de la ciudad capitalista se distribuye de manera por demás desigual y se halla sujeto a procesos de valorización inmobiliaria que exceden el presente análisis–; b) contar con el soporte físico o la infraestructura desplegada en el suelo urbano; y c) tener capacidad económica para costear la conexión y la provisión del servicio (Adaszko, 2011a, 2012).

Suponiendo que se hubiera accedido a una vivienda por alguna vía, la segunda condición implica la existencia de una infraestructura que atraviese la ciudad y conecte las viviendas con los nodos centrales de la red. Dependiendo de si la prestación del servicio es efectuada por una empresa, por el Estado o por la propia comunidad, las decisiones en torno a la inversión y a la extensión del soporte físico serán muy diferentes, así como también sus consecuencias en materia de cobertura, equidad y eficiencia, entre otras.

La tercera condición que posibilita la conexión a los servicios domiciliarios de red es que, tanto si la provisión es llevada adelante por una empresa privada o por el Estado, para la conexión de un inmueble

y para el sostenimiento en el tiempo del suministro resulta necesario que las unidades domésticas realicen dos tipos de erogaciones monetarias: el “derecho de conexión”, que se produce una única vez; y el pago periódico de la tarifa, la que funciona como llave para la inclusión o la exclusión.

Si la provisión del servicio se encuentra mercantilizada y si la política pública no interviene en el sentido contrario, en algunas situaciones, a la erogación monetaria ordinaria se le agrega una adicional e incluso más onerosa. Así pues, cuando la infraestructura no atraviesa algún territorio ni tampoco está planificado que lo haga en lo inmediato, si la población residente quisiera contar con el recurso deberá costear la extensión de la red por fuera del pago de la conexión y del posterior suministro. En otros términos, el potencial usuario o frentista se tendrá que hacer cargo del financiamiento de la inversión y no así la empresa prestataria, a menos que el Estado se lo imponga.^{43,44}

El examen del déficit en materia de acceso a una serie de servicios domiciliarios de red se realizó a través de cuatro indicadores: a) calidad del suministro de energía eléctrica; b) conexión a la red pública de agua corriente; c) conexión a la red cloacal; y d) conexión a la red de gas natural domiciliario.

Para un mayor nivel de detalle sobre los indicadores presentados en este apartado según una serie de variables seleccionadas, las variaciones interanuales y las brechas de desigualdad, ver el anexo estadístico AE.2.2 que se presenta en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

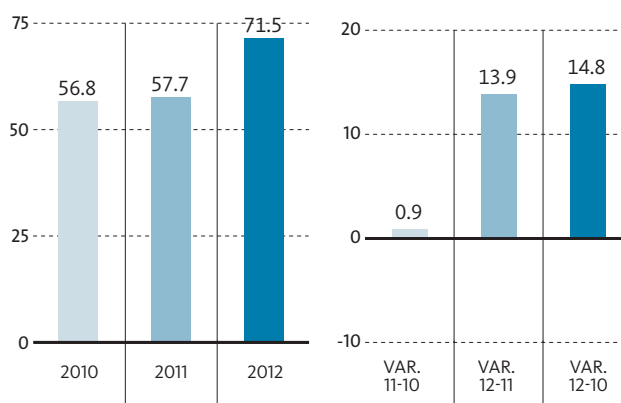
43 El único servicio domiciliario de red por el que no se paga la utilización es el sistema cloacal.

44 Esto se complejiza más cuando se toma en cuenta que el monto a pagar por parte de las unidades domésticas se encuentra en función directa con la distancia, los materiales y el volumen de la obra necesarios para que se produzca la conexión. Generalmente la única alternativa que tiene un hogar que no cuenta con conexión a un servicio de red es que el soporte físico –por ejemplo un caño maestro– efectivamente atraviese su entorno. Si esto no sucede, le resultará prácticamente imposible costear la conexión, a menos que pertenezca a un segmento socioeconómico alto o con una fuerza de negociación que le permita lograr algún tipo de acuerdo conveniente con la empresa proveedora.

Figura 2.2.1

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O SIN SUMINISTRO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dado que desde hace décadas la cobertura eléctrica resulta casi total en las áreas urbanizadas del país, y que incluso las zonas más periféricas y retrasadas de la ciudad cuentan con tendido eléctrico, la ausencia de conexión a este servicio por parte de los hogares pierde relevancia y, en su lugar, se hace más pertinente el examen de la calidad del servicio que efectivamente reciben las viviendas.

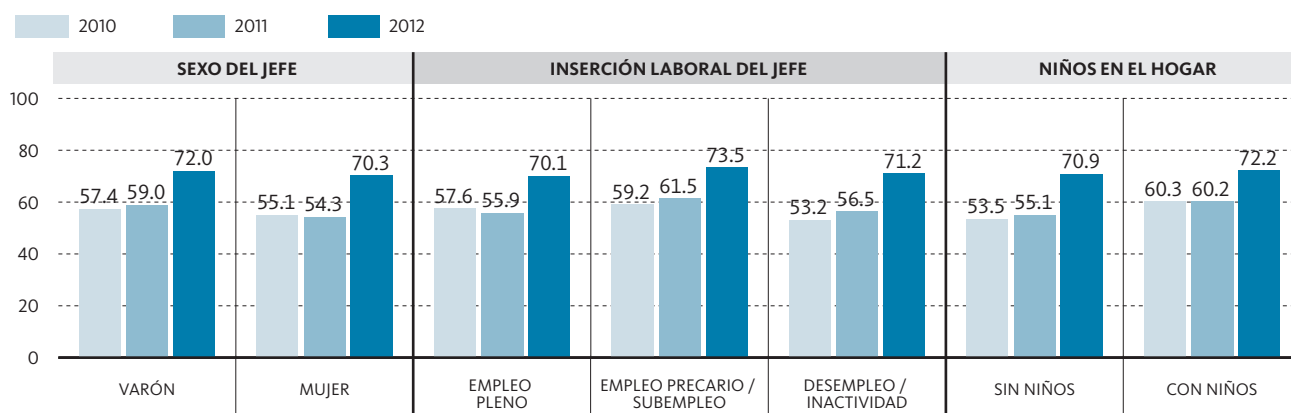
Para ello, se presenta un indicador que revela el porcentaje de hogares que no cuentan con el servicio en absoluto (porcentaje que –como se indicó– es muy bajo) o bien el que reciben presenta deficiencias en la calidad, expresándose estas en cortes reiterados del suministro o bajas frecuentes de tensión durante los 12 meses previos a la encuesta. La importancia del examen de este indicador se inscribe en el marco de la discusión en torno a la efectividad de la política energética de la última década, en la que el incremento de la inversión en infraestructura no acompañó de manera acorde la formidable expansión de la demanda tras la recuperación de la crisis 2001-2002.

A lo largo de los tres años bajo análisis se produjo un deterioro muy significativo de la calidad del suministro eléctrico (figura 2.2.1). Mientras que en 2010 el 56,8% de los hogares reportó que durante los 12

Figura 2.2.2

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O SIN SUMINISTRO SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

meses anteriores había experimentado cortes o bajas frecuentes de tensión, en 2012 el indicador alcanzó al 71,5%, lo que equivale a una tasa de incremento en la incidencia de esta problemática del 26% entre ambos años. En términos de personas –y ya no de hogares–, en 2012 sufrió cortes o bajas frecuentes de tensión el 71,7% de la población.

Cuando se analiza la incidencia de este indicador según las distintas variables de corte, en todos los casos se registra un importante aumento de los problemas con el suministro eléctrico (figura 2.2.2). Tanto los hogares donde el principal sostén económico era un varón como aquellos donde era una mujer vieron aumentado el déficit, aunque en 2012 el indicador resultó ligeramente superior en el caso de las unidades domésticas con jefatura masculina.

En contraste con el comportamiento de otros indicadores de hábitat, las diferencias según la inserción laboral del jefe de hogar resultaron menores. Por ejemplo, en 2012 los cortes y bajas reiteradas de tensión afectaron al 70,1% de los hogares que contaban con un jefe en empleo pleno; al 73,5% de aquellos con jefe en situación de precariedad laboral; y al 71,2% de aquellos otros con jefe desempleado o inactivo. Esto implica que la problemática de la calidad del suministro eléctrico es generalizada. En el caso de la presencia o ausencia de menores de edad en las familias, la diferencia resultó menor, con una ligera ventaja para los hogares sin niños (70,9% y 72,2%, respectivamente).

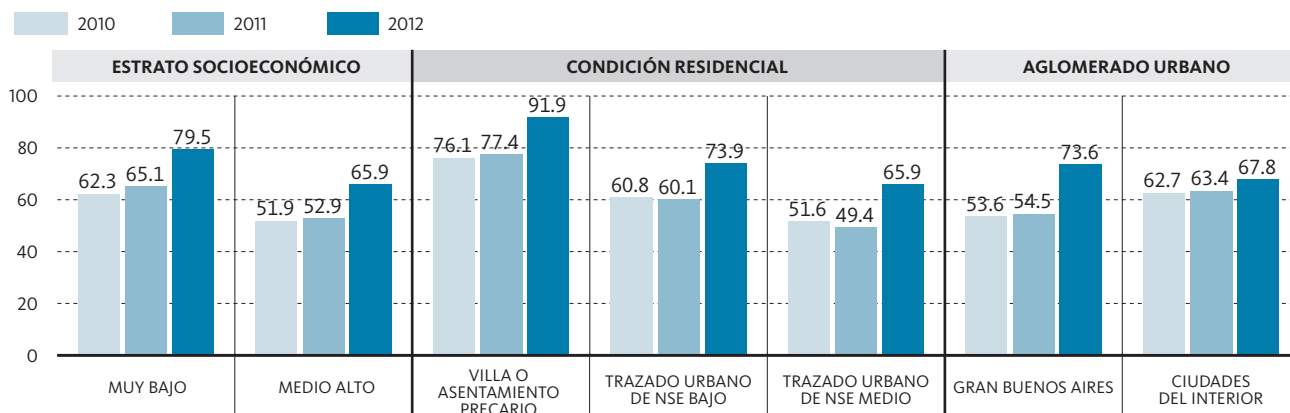
En oposición a lo anterior, se verifican diferencias según las tres variables que se presentan en la figura 2.2.3, cada una de las cuales recoge, de un modo más acabado, la dimensión espacial en lo concerniente al patrón de asentamiento de la población en el territorio y, con ello, su acceso diferencial a los recursos de la ciudad. En cuanto a los estratos sociales y a la condición residencial, ambos factores incorporan el fenómeno de la segregación residencial socioeconómica; esto es, la población no se asienta aleatoriamente en las distintas porciones de la ciudad, como ya se dijo, sino que se encuentra emplazada en áreas (barrios, vecindarios, etcétera) con una relativa homogeneidad socioeconómica interna y una cierta heterogeneidad entre sí.

La prevalencia de cortes de energía o bajas frecuentes de tensión se incrementó tanto en el estrato social muy bajo como en el medio alto; pero en todos los casos este segundo grupo experimentó un menor nivel (65,9% en 2012) que el 25% más pobre de los hogares (79,5% en el mismo año). Cuando se analiza el indicador según la condición residencial o el tipo de barrio, en 2012 la problemática afectó al 91,9% de los hogares radicados en villas o asentamientos precarios; al 73,9% de los localizados en barrios dentro de la urbanización formal de nivel socioeconómico bajo; y al 65,9% de los ubicados en las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico medio. Las cifras indican que un hogar asentado en una urbanización informal en 2012 tenía 1,4 veces

Figura 2.2.3

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O SIN SUMINISTRO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

más chances de padecer cortes y bajas de tensión que uno ubicado en las zonas más aventajadas de la ciudad.

En cuanto al aglomerado urbano, se apreció una importante diferencia entre el Gran Buenos Aires y el Resto Urbano Interior. Obsérvese que hasta 2011, en este último conjunto, el indicador superaba los valores del Gran Buenos Aires. Sin embargo, en 2012 el Gran Buenos Aires experimentó un incremento sustancial de esta problemática, lo que modificó el patrón que prevalecía con anterioridad. Así, en el último año de la serie se vio afectado por cortes de energía y bajas de tensión el 73,6% de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires y el 67,8% del Resto Urbano Interior.

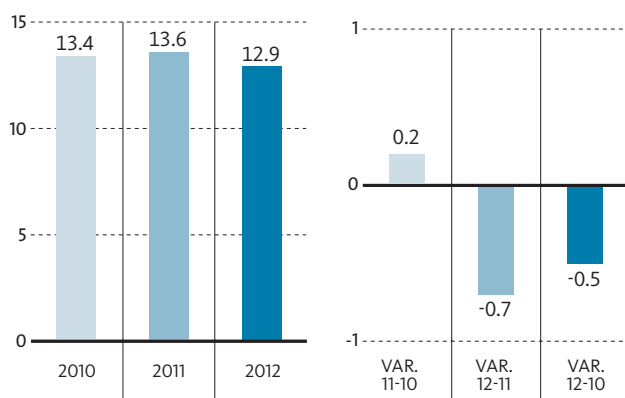
DÉFICIT DE CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA DE AGUA CORRIENTE

El servicio de red de agua corriente incide directamente sobre la calidad de vida de la población. Junto al desarrollo de una infraestructura de saneamiento urbano básico, la buena provisión de agua tiene un efecto muy importante en lo que concierne a la reducción de las tasas de morbi-mortalidad de la población en general y de grupos específicos en particular (lactantes, niños, ancianos e inmunodeprimidos) (OMS/UNICEF, 2000; OMS, 2006). En este sentido, la cuestión del acceso al agua corriente impacta de modos muy diversos en los distintos segmentos so-

Figura 2.2.4

SIN SUMINISTRO DE AGUA DE RED

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

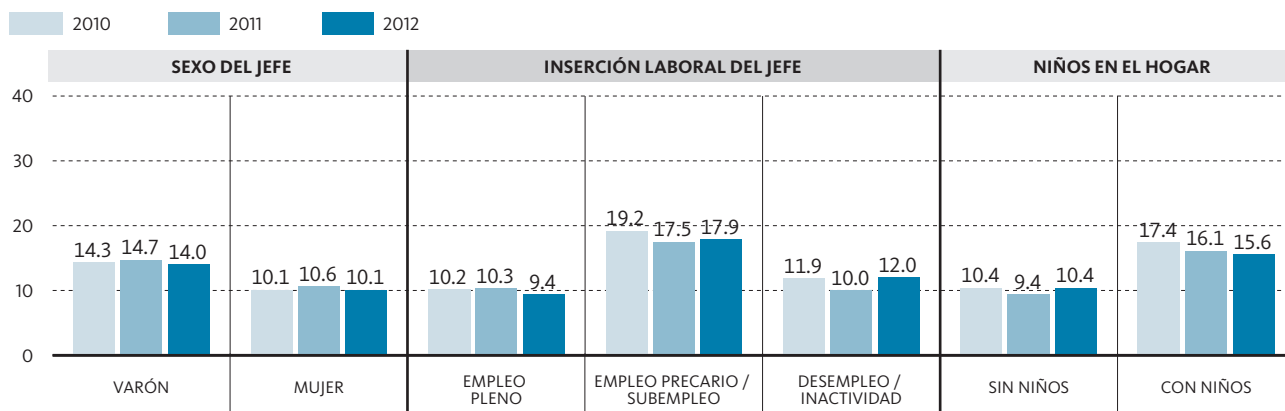
ciales, siendo las subpoblaciones en situación de vulnerabilidad las más afectadas, dado que aun cuando en muchos casos cuentan con conexión a la red, la calidad del recurso que reciben no se encuentra en óptimas condiciones (Gentes, 2006). Como señala Pérez (2000), “en una ciudad latinoamericana típica, nadie bebe la misma agua” (p. 70).

La Argentina cuenta con grandes ventajas comparativas con respecto a otros países, por contener enormes reservorios de agua potable, tanto a nivel subte-

Figura 2.2.5

SIN SUMINISTRO DE AGUA DE RED SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

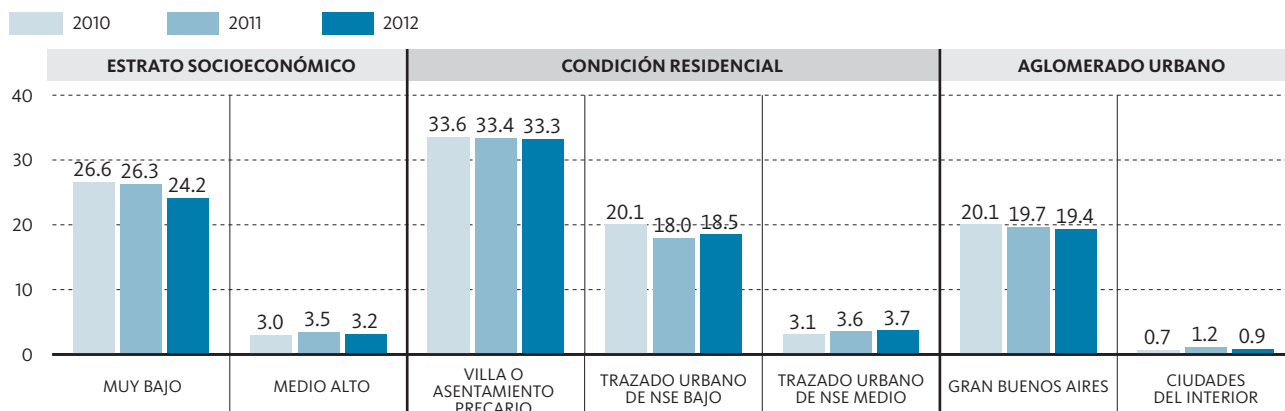


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.2.6

SIN SUMINISTRO DE AGUA DE RED SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

ráneo como de sus fuentes hídricas, a punto tal que a comienzos del nuevo milenio el país se ubicaba en una posición privilegiada a nivel internacional (Banco Mundial, 2005). Sin embargo, en la actualidad existen diferencias cualitativas entre el agua potable extraída mediante bombas para el consumo directo desde las napas freáticas y el agua que, proviniendo del subsuelo o de fuentes fluviales, es tratada mediante plantas potabilizadoras y a la que se accede a través de la red pública. Mientras que la primera se encuentra fuerte-

mente expuesta a agentes contaminantes (orgánicos e inorgánicos), la segunda cuenta –cuando los controles y regulaciones se hacen efectivos– con una calidad considerablemente superior para el consumo humano.

Tal situación obliga a examinar la evolución del indicador del porcentaje de hogares sin conexión al agua corriente de red, presentada en la figura 2.2.4. Entre 2010 y 2012 se produjo un ligero retroceso del déficit al pasar del 13,4% al 12,9% de los hogares urbanos, abarcando en el último año de la serie al 13,4% de la población.

Durante el trienio, los hogares con jefatura masculina presentaron un nivel de déficit superior al de otros donde ese rol estaba a cargo de una mujer (figura 2.2.5). Así, en 2012 no contaba con conexión a la red de agua corriente el 14% de los primeros y el 10,1% de los segundos.

Según la calidad de inserción en el empleo del principal sostén económico del hogar, el mismo indicador muestra que la reducción más importante se produjo entre aquellos con jefe en un empleo precario o subempleado. Sin embargo, aun así, en el último año de la serie el 17,9% de estos hogares no tenía agua de red, frente al 9,4% de aquellos cuyo jefe contaba con un empleo pleno y al 12% de los cuales el jefe se hallaba desempleado o era inactivo. Con esto, en líneas generales las brechas de desigualdad se mantuvieron prácticamente invariantes entre ambos extremos de la serie.

En lo que concierne a la presencia o no de niños en el hogar, la principal reducción fue experimentada por aquellos donde había presencia de menores, pasando de 17,4% en 2010 a 15,6% en 2012. En cambio, entre ambos años no se verificó una variación estadísticamente significativa en los hogares sin niños.

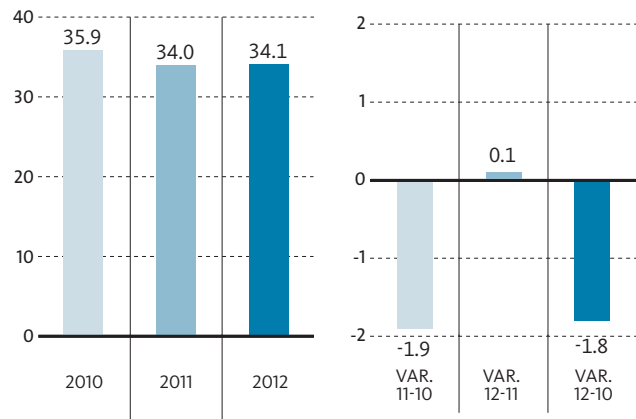
En consonancia, la mejora más importante en materia de reducción del indicador se produjo entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, pasando de 26,6% a 24,2% entre los dos años extremos de la serie, lo que implicó una reducción del déficit de 2,4 p.p. Asimismo, se produjo un ligero incremento del indicador en el cuartil superior, que más allá de encontrarse dentro de los límites del error muestral –lo que tornaría la variación estadísticamente no significativa– se vincula con que no todos los hogares de estratos altos se localizan en zonas completamente urbanizadas en materia de suministro de servicios domiciliarios e infraestructura (2.2.6). En otras palabras, esos hogares cuentan con ingresos para abonar la conexión y el suministro, pero no se encuentran próximos a la infraestructura necesaria para efectivizarlos.

Esto también se ve reflejado en la variación del déficit según la condición residencial o el tipo de barrio de emplazamiento. Los hogares más beneficiados fueron los de la traza urbana formal de nivel socioeconómico bajo. En estos, en 2012 el déficit alcanzaba al 18,5%, frente al 33,3% de los ubicados en las villas o asentamientos precarios, y tan solo el 3,7% en las zonas con trazado urbano formal de nivel socioeconómico medio. En 2012, las brechas con respecto a los barrios

Figura 2.2.7

SIN CONEXIÓN A LA RED CLOACAL

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

mejor ubicados en términos urbanísticos y socioeconómicos seguían siendo considerablemente elevadas: el hogar de una villa o asentamiento registraba 8,9 veces más chances de no contar con una conexión a la red de agua corriente; mientras que la brecha entre los hogares ubicados en la traza urbana formal de nivel socioeconómico bajo era de 4,9 veces con respecto a las mejores zonas.

En el Resto Urbano Interior el indicador se mantuvo estable a lo largo del trienio; experimentó una leve reducción en el Gran Buenos Aires, aglomerado que concentra casi la totalidad del déficit, tal como se aprecia en la figura 2.2.6. Así, un hogar ubicado en el Gran Buenos Aires tenía 22,1 veces más chances de no encontrarse conectado al agua de red que otro localizado en el resto de los aglomerados del interior. Como se ha indicado en anteriores publicaciones, esto tiene que ver con el enorme retraso en materia de urbanización del conurbano bonaerense.

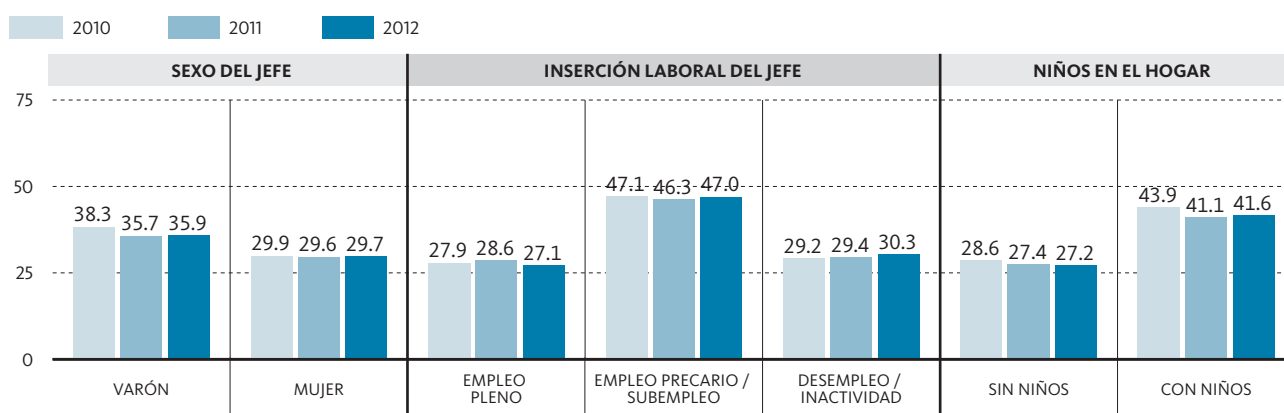
SIN CONEXIÓN A LA RED CLOACAL

Uno de los déficit estructurales del acceso a los servicios urbanos de la Argentina ha sido el lento desarrollo de la red de desagües cloacales y la carencia de conexión domiciliaria. En el país, la ausencia de este recurso es suplida generalmente por el uso de cámaras sépticas, en el mejor de los casos, o de pozos

Figura 2.2.8

SIN CONEXIÓN A LA RED CLOACAL SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

ciegos en otros, aunque ninguno de estos dos sistemas alternativos tiene el impacto sanitario de la red cloacal. Se trata, pues, de un servicio urbano de vital importancia por las consecuencias sanitarias que conlleva, en virtud de que, como especifica la OMS (OMS/UNICEF, 2000), “interrumpe la transmisión de gran parte de las enfermedades fecales-orales en su origen principal, al prevenir la contaminación del agua por heces humanas” (p. 3).

El sistema cloacal ha constituido uno de los pilares fundamentales del ordenamiento urbano por parte de las políticas sanitaristas del siglo XIX. No obstante, pese a que la Argentina lleva más de un siglo de urbanización, el rezago en la materia resulta por demás alarmante, incluso contabilizando las conexiones clandestinas mediante “pinchaduras” a los caños maestros.

El bajo nivel de desarrollo general de la red pone al descubierto las falencias en materia de planificación urbana, donde se facilitó el acceso a la tierra mediante el asentamiento de poblaciones en espacios sin urbanización previa –por ejemplo a través de lo que en el Conurbano Bonaerense fue el “loteo popular” implementado a partir de la Ley N° 14.005 de 1950-, estrategia de poblamiento y de migración interna que, si bien fue la “puerta de acceso” para que muchos sectores accedieran a suelo barato y a una vivienda propia, no fue acompañada por un concordante desarrollo de la infraestructura de bienes y servicios.

Los datos de la EDSA-Bicentenario muestran una paulatina disminución del déficit entre 2010 y 2012,

pasando del 35,9% al 34,1% de los hogares urbanos, lo que equivale a que durante el último año de la serie no contaba con conexión a la red cloacal el 37,3% de la población que habitaba en los grandes aglomerados del país (figura 2.2.7).

La evolución del indicador según el conjunto de variables seleccionadas para el análisis demuestra que, aun manteniéndose estable el déficit en los hogares con jefatura femenina, en 2012 estos seguían aventajando a los hogares donde el principal sostén económico era un varón (29,7% y 35,9%, respectivamente) (figura 2.2.8). Si se comparan los dos años extremos de la serie, la brecha entre ambos tipos de hogar se mantiene invariante.

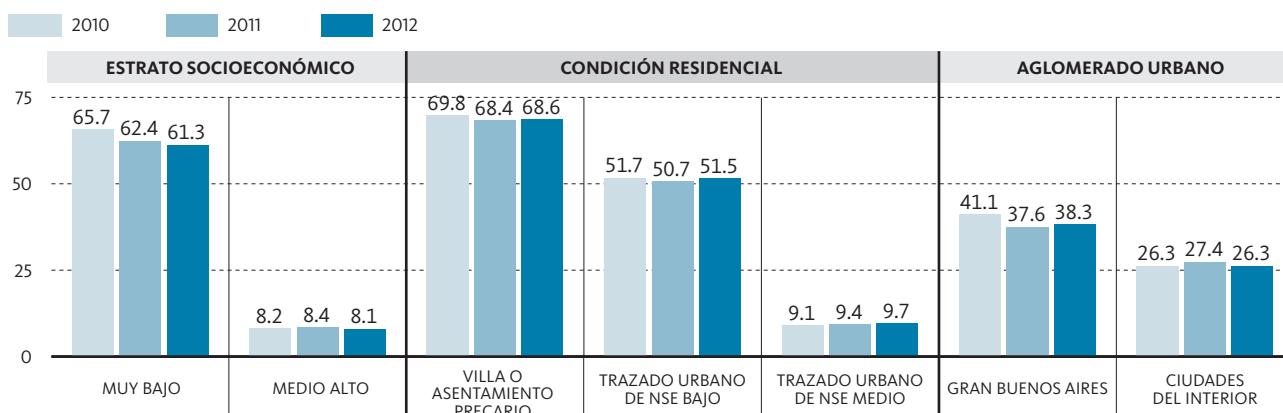
Por su parte, el déficit de conexión a la red cloacal se redujo ligeramente en los hogares con jefe en situación de pleno empleo, a la vez que aumentó algo menos de 1 p.p. en los otros dos tipos de hogar. En 2012, los valores para cada una de las tres categorías de hogar fueron, respectivamente, 27,1%, 47% y 30,3%. En líneas generales, las brechas de desigualdad se mantuvieron invariantes entre ambos años extremos de la serie, lo que constituye un avance por los motivos apuntados previamente.

Una leve reducción del porcentaje de hogares sin conexión a la red cloacal se observó entre los que no contaban con niños o adolescentes (de 28,6% en 2010 a 27,2% en 2012). No obstante, para los mismos años, la mayor reducción se computó en los hogares con niños (de 43,9% a 41,6%).

Figura 2.2.9

SIN CONEXIÓN A LA RED CLOACAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

El comportamiento del indicador según el estrato socioeconómico indica que la mayor reducción fue experimentada por los hogares más pobres, pasando del 65,7% al 61,3% de un extremo al otro de la serie (figura 2.2.9). Un hogar del 25% inferior de la estratificación socioeconómica registra, en 2012, 7,6 veces más chances de no tener conexión a la red cloacal que otro del cuartil superior.

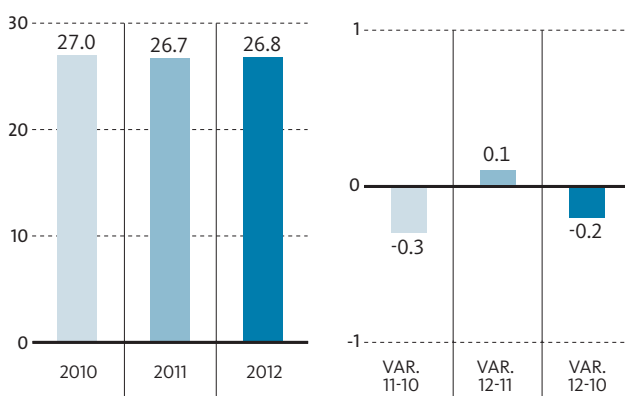
Por otro lado, si bien los hogares ubicados en villas y asentamientos precarios mostraron una mejora entre ambos años extremos de la serie (de 69,8% a 68,6%), la desigualdad con respecto a los localizados en zonas urbanizadas de nivel socioeconómico medio es considerable, habida cuenta de que en 2012 solo el 9,7% de estos últimos enfrenta esta problemática habitacional. Asimismo, en cuanto a la incidencia de este indicador a lo largo de toda la serie, las unidades domésticas asentadas en barrios dentro de la traza urbana formal de nivel socioeconómico bajo se hallan más próximas a las villas y asentamientos que a los barrios de nivel socioeconómico medio. Esto da cuenta de cuán extendido se encuentra el problema del acceso a las cloacas en la Argentina del Bicentenario.

Respecto de la diferencia según el aglomerado urbano, la reducción del déficit en el Gran Buenos Aires (que pasó de 41,1% a 38,3%) y el sostenimiento del nivel general del Resto Urbano estrecharon ligeramente la brecha entre ambos tipos de aglomerados entre 2010 y 2012.

Figura 2.2.10

SIN CONEXIÓN A LA RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

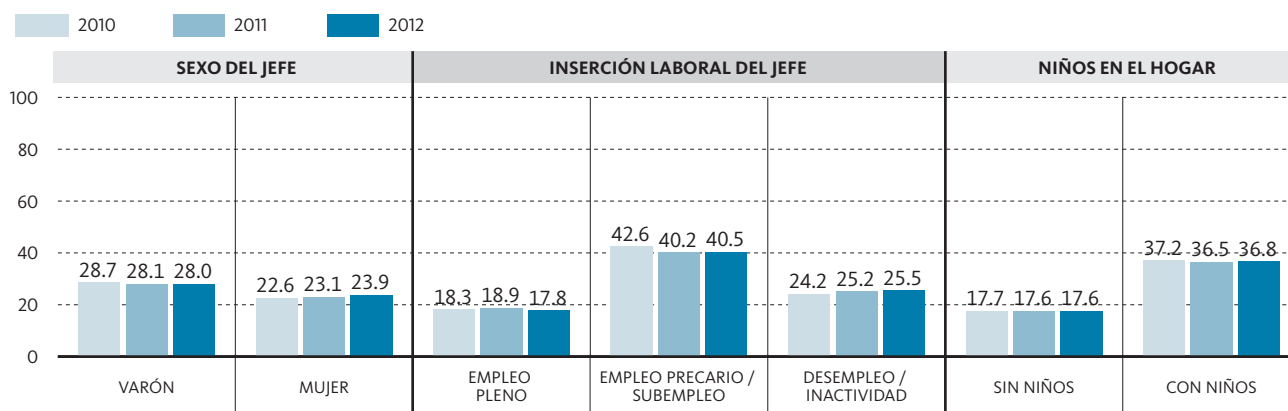
SIN CONEXIÓN A LA RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO

Más allá de la importancia del gas dentro del sistema productivo, ya sea para su uso directo o para la generación eléctrica, en la Argentina este recurso sigue constituyendo la principal fuente energética para la calefacción y la cocina de las viviendas. Sin embargo, a lo largo de la historia urbana del país, dentro del conjunto

Figura 2.2.11

SIN CONEXIÓN A LA RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

de los servicios domiciliarios de red, este ha sido uno de los menos extendidos y con la menor tasa de cobertura, por lo cual los hogares sin acceso a él se han visto compelidos a abastecerse del hidrocarburo a través de otros medios como las garrafas, balones o tanques con gas comprimido (Arza, 2002; Banco Mundial, 2000).

El uso de garrafas en lugar del gas natural de la red para la calefacción y la cocina de las viviendas particulares tiene consecuencias en la seguridad del propio hogar –en aquellos casos en los que no se produzca un uso correcto–, a la vez que impacta negativamente en el presupuesto familiar. En el primer aspecto, mientras que los sectores más vulnerables utilizan las garrafas en condiciones poco seguras –en muchos casos en el interior de las propias viviendas–, los sectores socioeconómicos medios y altos que no acceden a la red generalmente no utilizan garrafas, sino tubos y tanques en condiciones mucho más propicias –los contenedores se encuentran ubicados en el exterior del inmueble, las conexiones siguen estrictas normas de seguridad y por lo general el mantenimiento está a cargo de empresas especializadas.

En cuanto al impacto económico en el presupuesto del hogar, la modalidad de acceso al gas es uno de los indicadores que ejemplifican con mayor crudeza la inequidad en la distribución de este recurso. El precio para el consumidor final del gas por red ha sido subsidiado por años, pero no ha ocurrido lo mismo con el producto envasado, utilizado fundamentalmente por los estratos socioeconómicos más pobres. A su

vez, al precio del producto –envasado o por red– se le suma el hecho de que para la conexión domiciliar se requiere de un importante nivel de gasto previo que corre exclusivamente por cuenta de los usuarios.⁴⁵

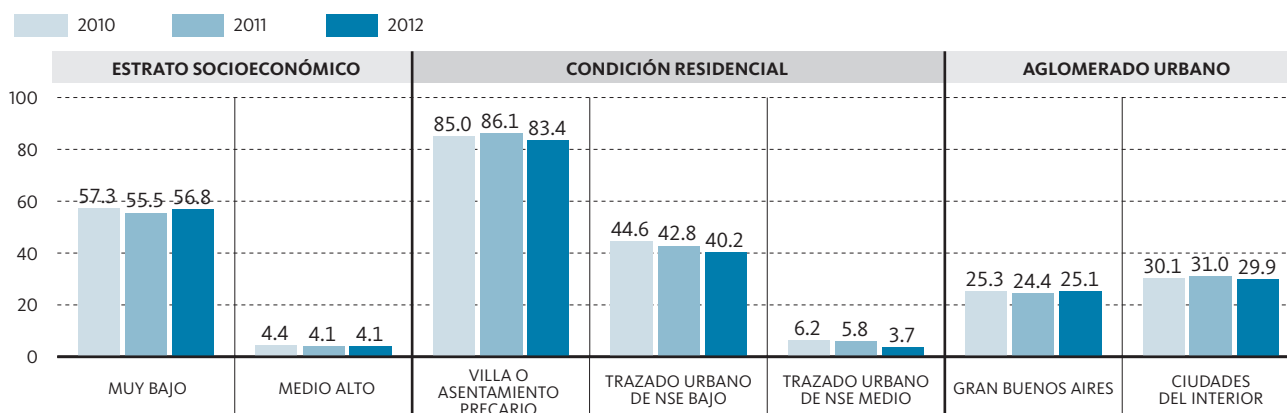
La relevancia del estudio del déficit de conexión a la red de gas se vincula estrechamente con lo expuesto en torno a la calidad del suministro de energía eléctrica,

45 En primer lugar, mientras que las empresas proveedoras de agua de red pueden extender una boca desde un caño maestro con el solo pago del “derecho de conexión”, en el caso del gas natural domiciliario se requiere de la existencia de un inmueble con instalaciones adecuadas y debidamente habilitadas mediante planos firmados por profesionales matriculados. Esto es, para que un hogar comience a recibir el suministro por parte de la empresa proveedora, es indispensable que previamente realice toda la instalación de gas –que por lo general dista de ser económica– y de los elementos de seguridad necesarios (rejillas, aireación, etc.), lo que implica un importante nivel de erogación monetaria que estará en relación directa con el volumen de la obra requerida. Ello constituye un impedimento legal y de base para que gran parte de las viviendas con precariedad material, problemas edilicios o de infraestructura se conecten a la red. En lo que respecta a la existencia de la infraestructura física, el costo de la extensión del caño maestro hasta el frente de una vivienda resulta considerablemente más oneroso que en el caso del agua o de las cloacas, debido a las particularidades técnicas, materiales y de seguridad que implica el transporte del gas. Por consiguiente, a diferencia de otros servicios de red, la conexión clandestina desde un gasoducto es prácticamente irrealizable. Como se comprenderá, nuevamente para los hogares más pobres la inexistencia física del recurso se articula con la insuficiencia monetaria, dificultándoles el acceso a la red, a excepción de que exista una activa intervención del Estado en la materia, ya sea directa o generando condiciones y compromisos por parte de las empresas para llevar adelante las inversiones necesarias.

Figura 2.2.12

SIN CONEXIÓN A LA RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

por cuanto ambos temas se inscriben en el debate sobre el estancamiento del desarrollo de la infraestructura energética del país durante la última década y sobre la efectividad de la política de subsidios.

A lo largo de los tres años bajo análisis se produjo un ligero descenso del porcentaje de hogares sin conexión a la red, reducción que no implicó una variación estadísticamente significativa (figura 2.2.10). Así, en 2012, esta problemática afectó al 26,8% de los hogares urbanos y al 30,8% de la población.⁴⁶

El comportamiento del indicador según las distintas variables de análisis ha mostrado que, salvo algunas variaciones menores, el déficit de conexión a la red de gas natural domiciliario se mantuvo estable a lo largo del trienio (figura 2.2.11). En los hogares cuyo principal sostén económico era un varón, se produjo una leve reducción del déficit al pasar del 28,7% al 28% –variación poco significativa–, mientras que en los hogares con jefatura femenina el déficit experimentó un ligero incremento.

En lo tocante a la situación laboral del principal sostén económico del hogar, se registró un retroceso (de 42,6% a 40,5%) del déficit, de 2,1 p.p. entre aquellos en los que el jefe contaba con un empleo precario o estaba subempleado, a la vez que se produjo un au-

mento del déficit de 1.3 p.p. entre los hogares con jefe desempleado o inactivo. De todos modos, en 2012 no contaba con conexión a la red de gas natural domiciliario el 17,8% de los hogares con jefe en situación de pleno empleo; el 40,5% de aquellos con jefe en empleo precario; y el 25,5% de los hogares con jefe desempleado o inactivo. Por otra parte, los valores según la presencia o ausencia de niños y adolescentes en el hogar se mantuvieron prácticamente sin cambios a lo largo de todo el período analizado.

La figura 2.2.12 muestra que el nivel de déficit de conexión a la red de gas natural domiciliario no varió de manera significativa en los distintos estratos sociales. En 2012, no cuenta con el recurso el 56,8% de los hogares más pobres, frente a solo el 4,1% de aquellos que forman parte del estrato medio alto. Esto implica que un hogar perteneciente al primer grupo tiene 13,7 veces más chances de no contar con el recurso en comparación con otro del cuartil superior. Por su parte, el indicador se redujo en los tres tipos de barrio, con un retroceso mayor en el caso de las zonas con trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo. No obstante estas mejoras, hacia 2012 la brecha entre las villas y asentamientos y las zonas con trazado urbano formal de nivel socioeconómico medio se amplía de 13,7 a 22,8 veces. De este modo, hacia el último año de la serie no cuentan con gas por red el 83,4% de los hogares radicados en villas y asentamientos precarios; el 40,2% de los ubicados en las

46 La diferencia entre ambos porcentajes se debe a que la problemática se encuentra fuertemente focalizada en los sectores más pobres, cuyos hogares cuentan con un mayor número de miembros en comparación con los estratos mejor posicionados en términos socioeconómicos.

zonas con trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo; y apenas el 3,7% de los situados en los barrios de la ciudad más favorecidos en términos urbanísticos y socioeconómicos.

Cuando se analiza el indicador según el aglomerado, se observa que tanto en el Gran Buenos Aires como en el Resto Urbano Interior se produjo un muy leve retroceso del déficit. En 2012 no cuenta con conexión a la red de gas el 25,1% de las unidades domésticas del Gran Buenos Aires y el 29,9% de las localizadas en el resto de los grandes aglomerados urbanos del país.

CONDICIONANTES DEL ACCESO A UN VECINDARIO CON SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED

En esta última parte del apartado 2.2 se desarrolla un análisis multivariado análogo al expuesto para el acceso a una vivienda digna (apartado 2.1). Esto es, dado que no todos los barrios o áreas de la ciudad cuentan con el mismo nivel de acceso a agua de red, cloacas, gas y calidad de suministro eléctrico, y que tampoco la población se localiza aleatoriamente en las distintas porciones de la ciudad, interesa desarrollar un análisis de regresión que identifique cuáles son los factores que ejercen más influencia sobre la posibilidad de acceder a un vecindario con mayor o menor nivel de déficit en este tipo de recurso.

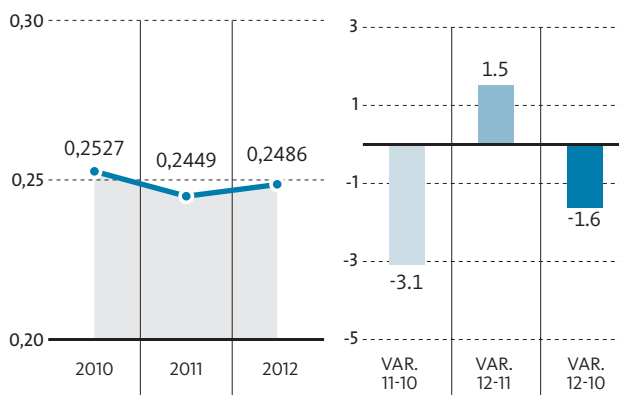
La figura 2.2.13 presenta la media del índice de déficit de acceso a servicios domiciliarios de red por vecindario en cada uno de los tres años bajo análisis, de lo que se desprende que la principal reducción se produjo entre 2010 y 2011 (-3,09%) con un ligero incremento posterior, debido probablemente al gran aumento sufrido en los problemas vinculados con el suministro eléctrico. En este sentido, por más que los datos hayan mostrado una leve reducción del déficit de conexión al agua de red, a las cloacas y al gas natural domiciliario, esas reducciones no lograron opacar en el último año el profundo deterioro del sistema de distribución eléctrica.

La figura 2.2.14 exhibe los resultados del análisis de regresión, utilizando como variable dependiente la media del déficit de acceso a servicios domiciliarios de red por vecindario. Tal como en el caso de la vivienda, en el modelo I la variable con mayor capacidad explicativa es el nivel educativo del jefe. En este sentido, los hogares cuyo principal sostén económico tenía la enseñanza me-

Figura 2.1.13

DÉFICIT DE ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED POR VECINDARIO

Media del índice por vecindario y variaciones relativas porcentuales interanuales. Años 2010-2011-2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

dia incompleta vieron incrementado su índice de déficit, a la vez que la influencia de esta variable resultó mayor a la de cualquier otra incorporada en ese modelo. No obstante, como se puede apreciar en la parte inferior de la figura, la capacidad explicativa de ese primer modelo resulta muy pobre, con un R cuadrado de apenas 0,181.

En la fase 2 del análisis, el segundo modelo coloca en primer lugar el estrato socioeconómico como factor condicionante del acceso a un vecindario con una fuerte presencia de servicios domiciliarios de red. Claramente se aprecia que a medida que se desciende en la estratificación socioeconómica, aumenta el coeficiente B tipificado, con lo que, comparado con el estrato medio alto (que es el que se utiliza como categoría de comparación) no hay ninguna otra variable o categoría bajo análisis en ese segundo modelo que tenga tanta capacidad explicativa.

Cuando el tercer modelo incorpora la condición residencial, aumenta considerablemente el R cuadrado, pero se produce una diferencia importante en comparación con lo apuntado previamente para el acceso a una vivienda digna. En este caso, el mayor coeficiente B tipificado se computó para los barrios dentro de la traza urbana formal de nivel socioeconómico bajo y no para las villas o asentamientos precarios, y este mayor valor se registró también para los modelos IV y V. Esto probablemente se deba al gran contraste que se produce al interior de la propia traza urbana formal entre los barrios de estratos medios y los de estratos bajos. Es decir, en el acceso promedio a los servicios domiciliarios de red, los

barrios de estratos bajos presentan una mayor distancia, respecto de los de estratos medios, que cuando se los compara con los barrios informales.

El examen integral de los coeficientes en el tercer modelo muestra que tienen serios problemas para acceder a vecindarios con servicios domiciliarios de red de calidad los del estrato muy bajo y, en combinación, quienes formando parte de ese estrato habitan en las dos categorías menos aventajadas de la variable condición residencial. En paralelo, a medida que se avanza en la incorporación de estas variables, el peso del nivel educativo (principal variable en el modelo I) prácticamente desaparece en comparación con la fuerza que ejercen el estrato socioeconómico y la condición residencial.

El cuarto modelo denota que la influencia de las dos categorías que dan cuenta del tipo de vecindario de residencia se mantiene casi invariante, pero asume un lugar protagónico el Conurbano Bonaerense, con un coeficiente que, en comparación con las otras áreas metropolitanas y el Resto Urbano Interior, claramente indica que habitar en dicho aglomerado tiene un efecto decisivo (empeorándolo) sobre la probabilidad de habitar un vecindario con mayor o menor acceso a servicios domiciliarios de red.

Por último, el quinto modelo, que incorpora el año de relevamiento, prácticamente no modifica el R cuadrado, lo que a su vez se constata en los bajos valores absolutos de los coeficientes B tipificados de las dos categorías. En otros términos, en comparación con las restantes variables bajo análisis, la variación interanual aporta muy poco a la capacidad explicativa del modelo. Simplemente el hecho de que sus respectivos coeficientes asuman valores negativos indica que, conforme avanzan los años, y manteniendo constante el resto de las variables, se produce una ligera reducción del déficit.

En este análisis de regresión sobre los factores con más peso a la hora de explicar la posibilidad de vivir en un vecindario con un alto o bajo índice de déficit de acceso a servicios domiciliarios de red, una conclusión general es, nuevamente, que el estrato socioeconómico y la condición residencial ocupan un lugar central. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con la vivienda, quienes habitan en el Conurbano Bonaerense tienen muchas más chances de carecer de este tipo de servicios (en comparación con el distrito mejor posicionado en este aspecto, la Ciudad de Buenos Aires) que aquellos que residen en las demás áreas metropolitanas y en el Resto Urbano Interior.

2.3 ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA

Acceder a una ciudad no solamente implica contar con una viviendas dignas y con servicios, sino también con otros recursos y, entre ellos, la infraestructura urbana básica. En esta dirección, el término infraestructura urbana es sumamente amplio y por momentos se confunde con los servicios que aquella posibilita. Es por ello que se hace preciso distinguir la actividad para la satisfacción de una necesidad (servicio) del soporte físico desplegado en el territorio que permite que dicha actividad sea llevada a cabo (infraestructura). La infraestructura constituye un componente fundamental de la urbanización, por cuanto no solo posibilita la realización de actividades al nivel de la vida cotidiana de los hogares, sino que también potencia el desarrollo económico de la ciudad y del país (Rozas y Sánchez, 2004).

Entre los distintos elementos que componen la infraestructura básica de una ciudad, puede reconocerse un tipo particular que reúne dos atributos fundamentales: por un lado es pública y por otro, excepto en casos particulares, para su utilización no se paga una tarifa. En lo que respecta a su carácter público, este se encuentra dado por cuatro aspectos principales: *a)* responde a lo que en la literatura especializada se denomina bien público;⁴⁷ *b)* se encuentra ubicada en el espacio público y de ningún modo dentro de los límites territoriales de algún tipo de urbanización privada; *c)* derivado de los dos atributos anteriores, jurídicamente se encuentra bajo la órbita del derecho público; y *d)* su utilización es universal y no de un grupo social acotado que paga por ella. En segundo lugar, excepto por condiciones particulares, donde el volumen de la obra requerida sea muy acotado –y, por tanto, pueda ser llevada adelante a través de la auto construcción del hábitat–, la potestad en lo que hace a su producción, regulación y control, queda en manos del Estado, más allá de que este pueda contratar a una empresa privada para determinadas etapas.

Por otro lado, y en paralelo a su carácter público, el segundo atributo de este tipo de infraestructura urbana es que –a diferencia de los servicios domiciliarios de red descriptos en el apartado anterior– para su

47 Es indivisible, su consumo por un individuo no excluye o reduce el de otro [no rivalidad], no tiene mercado y no se encuentra sujeta al derecho de propiedad) (Samuelson, 1954; Barrantes, 1993).

Figura 2.2.14

**ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE EN CINCO FASES.
VARIABLE DEPENDIENTE: MEDIA DEL ÍNDICE DE DÉFICIT DE ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED
POR VECINDARIO DE RESIDENCIA. COEFICIENTES B TIPIFICADOS Y NIVELES DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA.**

Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I	MODELO II	MODELO III	MODELO IV	MODELO V
	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO
SEXO DEL JEFE					
Varon (c)					
Mujer	-0,064***	-0,072***	-0,044***	-0,037***	-0,036***
EDUCACIÓN DEL JEFE					
Con secundario completo (c)					
Sin secundario completo	0,335***	0,080***	0,046***	0,025***	0,025***
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE					
Empleo pleno (c)					
Empleo precario / subempleo	0,123***	0,028***	0,019**	0,012**	0,011*
Desempleo / inactividad	0,029***	-0,100***	-0,063***	-0,039***	-0,041***
NIÑOS EN EL HOGAR					
Sin niños (c)					
Con niños	0,139***	0,102***	0,059***	0,054***	0,053***
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR					
ESTRATO SOCIOECONÓMICO					
Medio alto (c)					
Medio bajo		0,137***	0,04	0,19	0,03
Bajo		0,284***	0,097***	0,083***	0,083***
Muy bajo		0,497***	0,212***	0,029***	0,191***
CONDICIÓN RESIDENCIAL					
Trazado urbano de NSE medio (c)					
Urbanización formal de NSE bajo			0,385***	0,329***	0,331***
Villa o asentamiento precario			0,270***	0,248***	0,251***
TIPO DE AGLOMERADO					
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)					
Conurbano Bonaerense				0,300***	0,299***
Otras Grandes Áreas Urbanas				0,050***	0,050***
Resto Urbano Interior				-0,022***	-0,022***
AÑO					
2010					
2011					-0,029***
2012					-0,030***
CONSTANTE					
R cuadrado de Cox y Snell	0,096***	0,068***	0,048***	-0,010**	0
R cuadrado	0,181***	0,261***	0,359***	0,436***	0,437***
F	749,566***	748,333***	952,417***	1009,730***	878,109***

(c) Categoría de referencia.

* Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,1).

** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,05).

*** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value <0,01).

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

acceso y uso no resulta necesario el pago de una tarifa, sino que su producción y mantenimiento se financian mediante recursos fiscales. Por último, a partir de los dos atributos de este tipo de infraestructura urbana (pública y no sujeta a tarifas), los usuarios no son ni identificables ni pueden ser concebidos como clientes.

A partir de esto, en este apartado se examina la evolución de tres indicadores que dan cuenta de la situación de la infraestructura urbana básica en los grandes aglomera-

dos urbanos del país: dos directos (pavimento y desagües pluviales) y uno indirecto (terrenos y calles inundables).

En el anexo estadístico AE.2.3 que se publica en formato digital en la página web previamente referida, se expone tablas con los valores porcentuales, las variaciones interanuales y los riesgos relativos para cada uno de los indicadores examinados en el apartado, según una serie más amplia de categorías sociales y de variables seleccionadas.

DÉFICIT DE CALLES PAVIMENTADAS

La inversión en caminos y vialidades en el contexto de una sociedad urbanizada tiene múltiples implicancias y potencia la utilización de la ciudad, conectando físicamente sus distintos componentes: por un lado, reduce y optimiza los tiempos de transporte y traslado de personas y bienes entre distintos puntos de la urbanización; por otro, al funcionar estructurando la morfología de la ciudad, la existencia de calles tiene consecuencias sobre las redes de sociabilidad de una comunidad.

La falta de mantenimiento de vías pavimentadas o directamente su inexistencia impactan en una abanico de aspectos, desde el nivel micro de la vida cotidiana (anegamiento de calles cuando se producen precipitaciones, problemas de higiene, dificultades para que los trabajadores se trasladen a sus empleos, entre otros), hasta aspectos que involucran la propia planificación urbana (como la dificultad o imposibilidad de extender ciertos tipos de redes, por ejemplo la de desagües pluviales, que requiere de un suelo previamente “trabajado”), así como perjuicios económicos, habida cuenta de que diversos trabajos muestran que un país sin una buena infraestructura vial ve acrecentados sus costos de producción y comercialización de mercancías, lo que tiene efectos negativos sobre su competitividad a nivel internacional (Rozas y Sánchez, 2004).

En el contexto de las ciudades modernas, la pavimentación y el mantenimiento de las calles y las avenidas constituye un indicador nada menor en lo que concierne al nivel de inversión en infraestructura urbana básica por parte del Estado. La pavimentación no debe reducirse al mero vertido de asfalto sobre un camino “virgen”, sino a su completa conversión en una calle, avenida o ruta, mediante una construcción racionalmente planificada a través de la ingeniería civil, con los estándares mínimos de calidad y con los recursos tecnológicos acordes a una urbanización moderna.

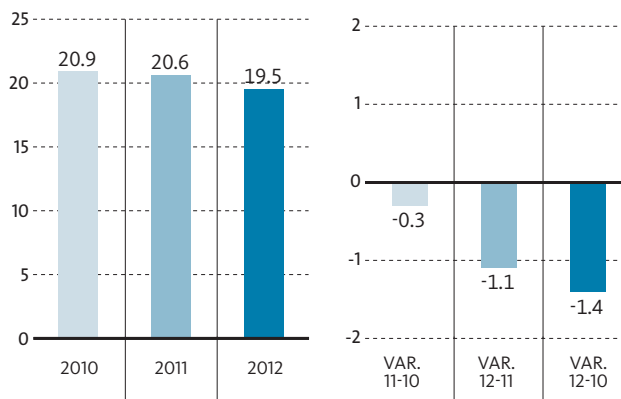
Los datos de la EDSA-Bicentenario revelan que entre 2010 y 2012 se produjo una reducción (de 20,9% a 19,5%) del porcentaje de hogares urbanos sin pavimento al frente de sus viviendas, lo que en el último año de la serie implicaba al 21,8% de la población (figura 2.3.1).

En los hogares en los que el principal sostén económico era una mujer, se produjo un leve incremento de 1 p.p. en la ausencia de pavimento respecto de aquellos otros donde el jefe era un varón, grupo que

Figura 2.3.1

SIN PAVIMENTO EN LA CUADRA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

registró una reducción de 1,5 p.p. entre 2010 y 2012 (figura 2.3.2). No obstante, en el último año de la serie este segundo grupo seguía presentando una mayor incidencia de la problemática que los hogares con jefatura femenina (20,9% y 15,9%, respectivamente).

Respecto de la inserción laboral del jefe, los hogares con jefe en empleo pleno de derechos o desempleado registraron una reducción del déficit y lo contrario sucede con aquellos en los que el jefe se hallaba en situación de precariedad laboral o subempleo. En el último año de la serie, el 28,2% de los hogares en esta última condición no tenía pavimento en su cuadra, frente al 14,3% de aquellos en los que el principal sostén económico se encontraba en la mejor situación laboral.

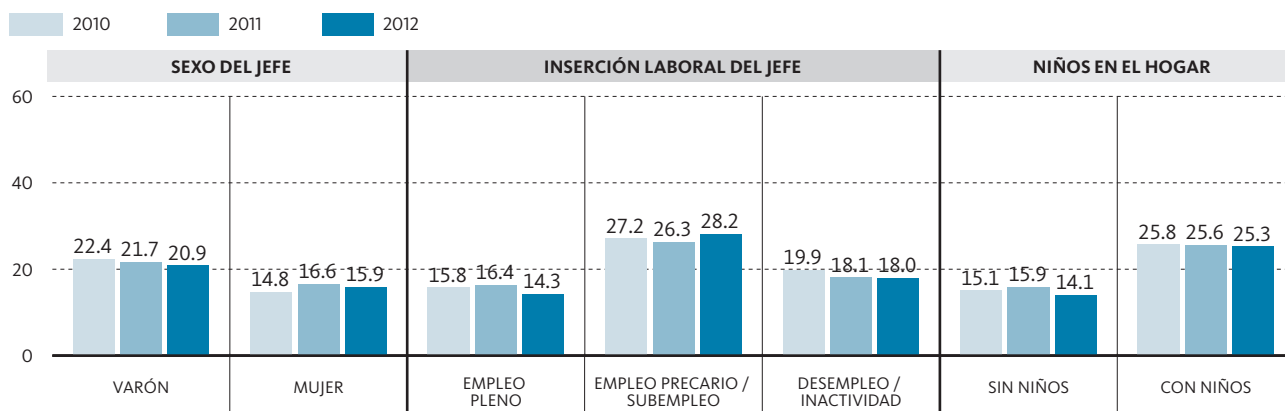
Si bien en los hogares con niños y sin ellos se produjo una reducción del déficit, los segundos registraron la baja más significativa, pasando del 15,1% al 14,1% entre los dos años extremos de la serie. Por el contrario, en las familias con menores de edad, el indicador de déficit se ubicó en el 25,3%, apenas 0,5 p.p. menos que en 2010.

Los datos ilustrados en la figura 2.3.3 permiten observar que los sectores más pobres que experimentaron una reducción de la ausencia de pavimento al frente de su vivienda fueron, no los que habitaban en villas o asentamientos precarios, sino aquellos otros que vivían en barrios de estratos bajos dentro de la traza urbana formal. En este sentido, puede apreciarse que en el 25% más bajo de la estratificación

Figura 2.3.2

SIN PAVIMENTO EN LA CUADRA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

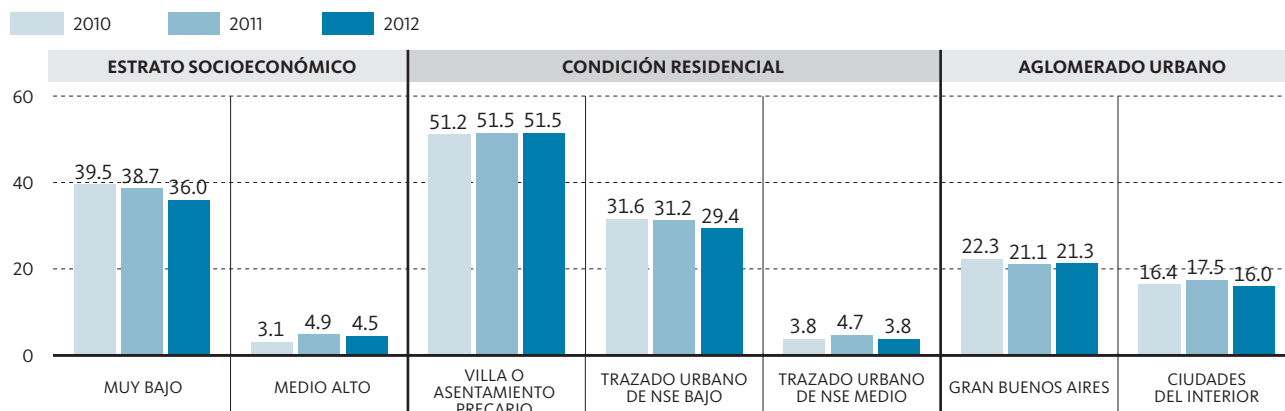


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.3.3

SIN PAVIMENTO EN LA CUADRA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

socioeconómica el déficit se redujo del 39,5% al 36% de los hogares, a la vez que la variación alcista del estrato superior no resultó estadísticamente significativa. Esto implica que hacia el último año de la serie un hogar del estrato más pobre cuenta con 8,1 veces más chances de no tener pavimento en su cuadra que otro del estrato medio alto.

Obsérvese que en los barrios con trazado urbano formal de nivel socioeconómico medio el indicador oscila ligeramente a lo largo de los tres años, en tanto

que durante el mismo período se redujo 2,2 p.p. en las zonas con trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo, pasando del 31,6% en 2010 al 29,4% en 2012. Paralelamente, en las villas y asentamientos el porcentaje de hogares sin algún tipo de pavimentación en su cuadra se mantuvo invariante, en torno al 51%.

Respecto de la evolución según el aglomerado urbano, si bien el indicador se mantuvo relativamente estable, la mejora más evidente se produjo en el Gran Buenos Aires, donde pasó de 22,3% a 21,3% entre los

años extremos de la serie. Aun así, en 2012 el déficit en este aglomerado seguía superando al que se registraba en el resto de los aglomerados del interior, donde el indicador se ubicó en torno al 16% de los hogares.

DÉFICIT DE DESAGÜES PLUVIALES

Complementarios a la red cloacal, los desagües pluviales constituyen el segundo componente del sistema de saneamiento básico y drenaje urbano, en este caso referido a las aguas no servidas. Por ser un sistema sumamente integrado, y debido a que los sumideros y alcantarillas son elementos indispensables para la red y resultan directamente observables para la población, su presencia o ausencia constituye un buen indicador del nivel de cobertura del sistema de desagües pluviales de una ciudad.

La ausencia de este recurso incide en aspectos tales como la presencia de aguas estancadas en la superficie, con los efectos epidemiológicos negativos que ello implica, por ejemplo la prevalencia de diversas plagas urbanas (BID, 2009; OMS, 2006). Más allá del saneamiento propiamente dicho, la ausencia de sumideros, alcantarillado, etcétera, conlleva una serie de perjuicios para la vida cotidiana de los hogares, por ejemplo, problemas en la movilidad los días de lluvia, el anegamiento de calles y terrenos, y en algunos casos la pérdida material y económica por el ingreso de agua en las viviendas o en los locales, lo que podría evitarse de existir un buen sistema de drenaje pluvial.

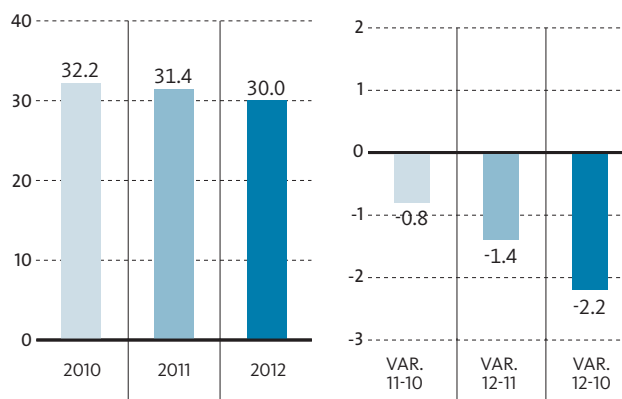
A lo largo del período bajo análisis, al nivel del total urbano, el porcentaje de hogares sin desagües pluviales al frente de su vivienda se redujo de 32,2% a 30%, lo que equivale a que en 2012 no contaba con este recurso el 33,5% de la población urbana (figura 2.3.4).

Si bien la reducción del déficit fue experimentada por las distintas categorías sociales, la estructura de desigualdad se mantuvo relativamente estable (figura 2.3.5). Esto es, tanto al principio como al final de la serie el valor del indicador de déficit para los hogares cuyo principal sostén económico es varón era más alto que el de las unidades domésticas con jefatura femenina (31,4% y 26,4%, respectivamente para 2012). A su vez, las unidades domésticas con jefe en situación de pleno empleo se vieron más favorecidas por la reducción del indicador, que bajó de

Figura 2.3.4

SIN DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUADRA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

24,6% a 22,1% entre ambos años extremos de la serie. A su vez, si bien los hogares con jefe en situación de precariedad laboral también experimentaron una mejora, en 2012 seguían casi duplicando al grupo previamente referido.

Por otro lado, tanto los hogares con o sin niños redujeron el porcentaje de aquellos que no contaban con desagües pluviales en su cuadra, mas a lo largo de la serie la brecha entre ambos tipos de hogar se mantuvo constante, beneficiando siempre a aquellos en los que no había presencia de menores. Así, en el último año analizado la incidencia de esta problemática afectaba al 23,7% de estos últimos, frente al 36,8% de quienes contaban con niños y adolescentes en el hogar.

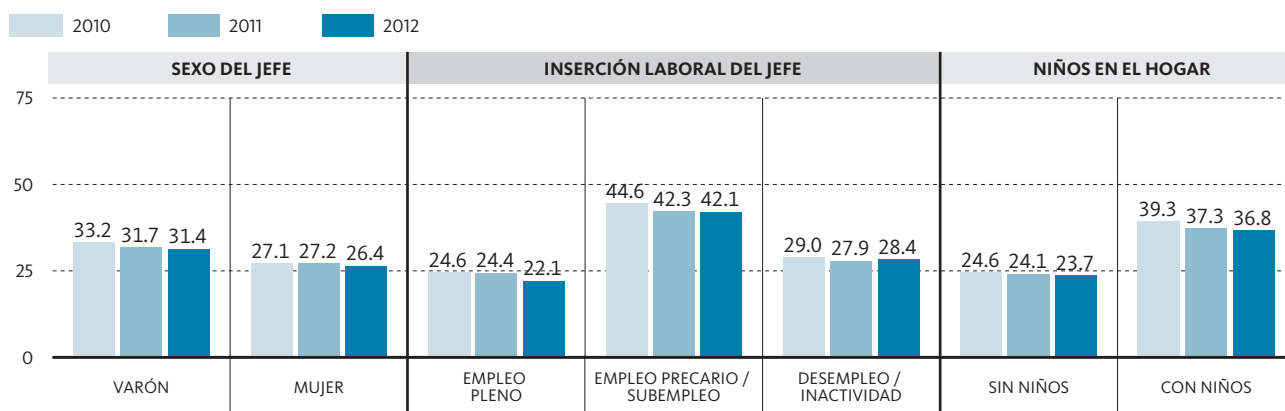
El examen de la evolución del indicador según la estratificación socioeconómica muestra que, por un lado, la mayor reducción absoluta del déficit se registró en el estrato muy bajo; pero aun así, la brecha con respecto al 25% superior en la estratificación seguía siendo considerable (figura 2.3.6). En 2012 no cuenta con desagües pluviales el 53,8% de los hogares más pobres, frente a solo el 7,5% de los ubicados en el extremo opuesto de la estratificación socioeconómica. Esto implica que los primeros tienen 7,2 veces más chances de no contar con el recurso que los hogares más aventajados en términos socioeconómicos.

Una evolución similar se aprecia cuando se indaga el comportamiento del indicador de déficit según la condición residencial o el tipo de barrio de residencia.

Figura 2.3.5

SIN DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUADRA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

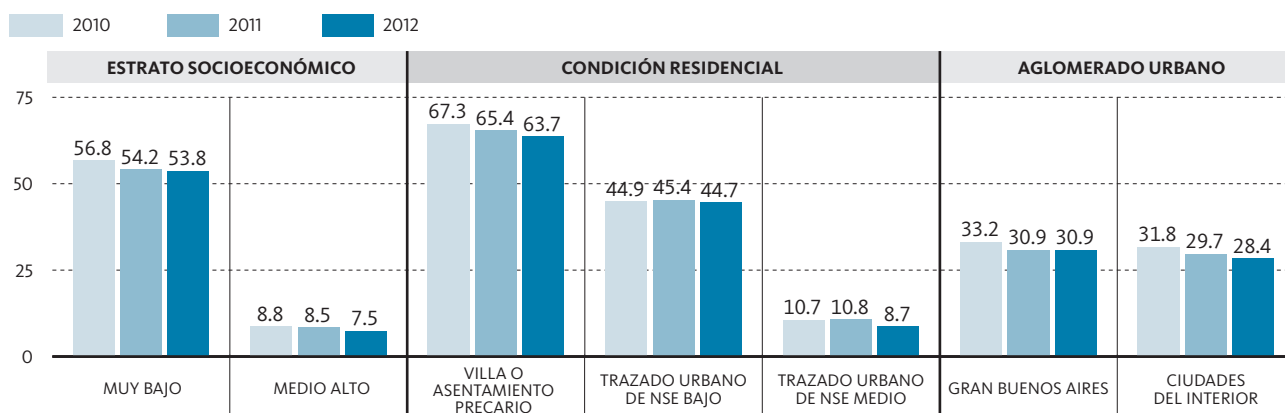


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.3.6

SIN DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUADRA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Las villas y los asentamientos precarios experimentaron una mayor reducción porcentual absoluta entre los dos extremos de la serie, pero la distancia con respecto a los barrios dentro de la traza urbana formal de nivel socioeconómico medio siguió siendo muy importante (63,7% y 8,7%, en 2012). Obsérvese, en este mismo sentido, que el nivel de déficit de las unidades domésticas ubicadas en las zonas de trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo se encuentra más próximo al de las villas y asentamientos que al de los barrios

donde predomina la clase media, algo que también se verificó en el caso de las cloacas (apartado 2.2).

Por último, tanto en el Gran Buenos Aires como en el Resto Urbano Interior se produjo una reducción de la ausencia de desagües pluviales en la cuadra, aunque la brecha entre ambas áreas se mantuvo constante. Así, un hogar asentado en el aglomerado con la mayor concentración poblacional del país tenía 1,1 veces más chances de contar con el recurso, que otro ubicado en el conjunto del resto de los aglomerados del país.

PRESENCIA DE TERRENOS Y CALLES INUNDABLES

La presencia de terrenos y calles inundables se articula con los dos indicadores anteriores, pues un buen sistema de alcantarillado y drenaje pluvial, así como el adecuado mantenimiento de las calles, coadyuvan a reducir la incidencia de esta problemática. En el espacio urbano y en la calidad de vida de la población, la presencia de terrenos y calles inundables tiene consecuencias diversas: sanitarias y epidemiológicas, económicas, en la movilidad, entre otras.

Sin embargo, los dos aspectos antes indagados –ausencia de pavimento y de desagües pluviales– representan indicadores directos del déficit de infraestructura y se vinculan con la producción material directa de la ciudad –ya sea a través de las intervenciones del Estado, las empresas contratistas o la auto producción del hábitat por parte de la población residente–. Por el contrario, la presencia de terrenos y calles inundables constituye un indicador indirecto de esas intervenciones, por cuanto se encuentra sujeta a otros factores de carácter externo, por ejemplo el caudal anual de precipitaciones. En otras palabras, la presencia de terrenos y calles inundables da cuenta de las falencias en materia de inversión pública en infraestructura urbana básica, la que también depende de otros factores. El incremento en un año puntual, por ejemplo, del porcentaje de hogares afectados por este tipo de problemática no implica necesariamente una baja en la inversión en construcción o mantenimiento urbano; pues conservando esta variable constante, podría deberse al aumento de las precipitaciones. Sin embargo, más allá de las variaciones coyunturales, el nivel promedio general del indicador constituye un buen registro de la presencia o el déficit de inversión estatal en infraestructura urbana básica.

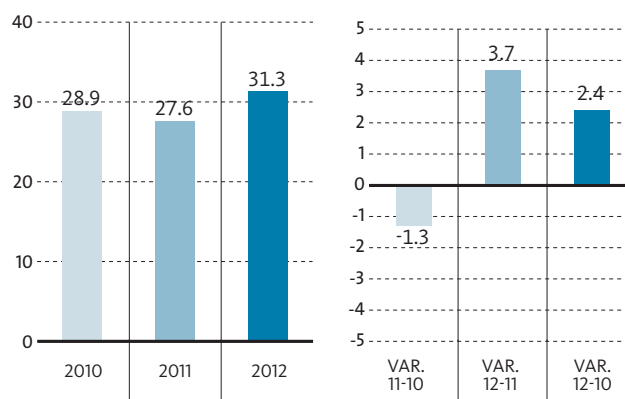
Los datos del estudio ponen de manifiesto que entre 2010 y 2012 se produjo un incremento de la incidencia de terrenos y calles inundables en las inmediaciones de las viviendas, al pasar del 28,9% al 31,3% de los hogares, lo que en 2012 afectaba al 32,4% de la población urbana (figura 2.3.7).

Dado que los dos indicadores anteriores –pavimento y desagües pluviales– muestran un paulatino pero constante avance en la reducción de los déficits, el incremento en 2012 de la presencia de terrenos y calles

Figura 2.3.7

TERRENOS Y CALLES INUNDABLES

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

inundables parece deberse fundamentalmente al aumento del caudal de precipitaciones durante el último año analizado. Esto se corrobora más adelante por el incremento del déficit producido en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, aglomerado urbano que experimentó lluvias muy intensas durante 2012.

Si bien los hogares cuyo principal sostén económico era un varón registraron el mayor aumento absoluto a lo largo de los tres años bajo análisis, la brecha con respecto a las unidades domésticas con jefatura femenina se mantuvo relativamente constante (figura 2.3.8). En 2012 fue afectado por esta problemática el 31,8% de los primeros hogares mencionados y el 30,2% de los segundos, con lo que la diferencia entre ambos resulta menor.

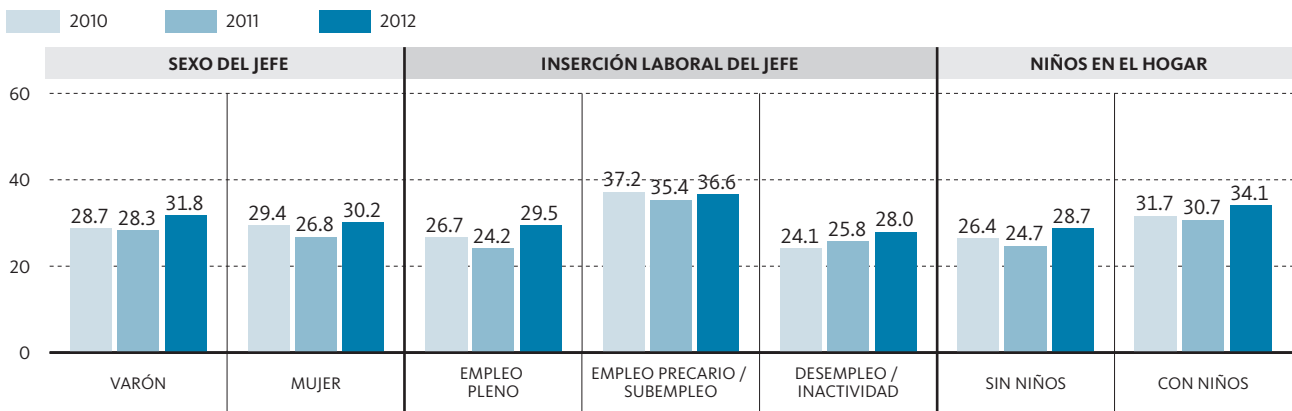
En cuanto a la inserción laboral del jefe, a lo largo de los tres años analizados se produjo un fuerte incremento principalmente en aquellos hogares donde ese rol lo desempeñaba alguien con empleo pleno o bien alguien desocupado o inactivo (29,5% y 28%, respectivamente para 2012). Por el contrario, en el caso de los hogares con jefes en situación de precariedad laboral o subempleo, el indicador se mantuvo relativamente estable a lo largo del trienio examinado.

Particular referencia merece la comparación entre los hogares con o sin niños. En ambos casos se produjo un incremento del porcentaje de los que se encontraban próximos a terrenos y calles inundables, con aumentos porcentuales y brechas también constantes. En este sentido, en 2012 un hogar con menores de edad presenta

Figura 2.3.8

TERRENOS Y CALLES INUNDABLES SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

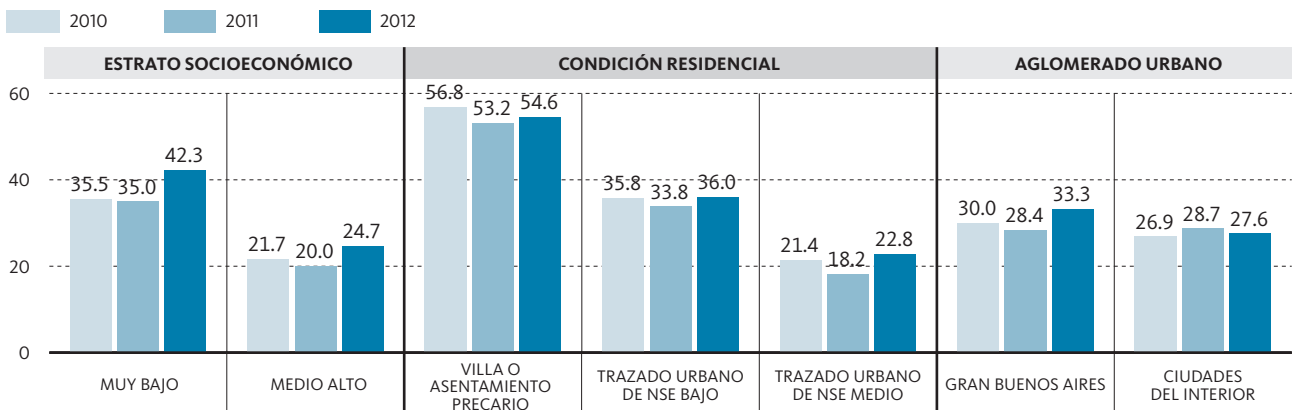


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.3.9

TERRENOS Y CALLES INUNDABLES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

1,2 veces más chances de enfrentar esta problemática urbana que otro donde no hay niños o adolescentes.

El análisis de la evolución del indicador según el estrato social y la condición residencial o tipo de barrio donde se emplazan los hogares es consistente con lo apuntado previamente. Obsérvese (figura 2.3.9) que en el estrato socioeconómico muy bajo se produjo un incremento mayor que el registrado para las villas y asentamientos precarios. Tal como se vio en los dos subapartados anteriores, fue en este último segmento de hogares donde se registró la mayor reducción del

déficit de pavimento y desagües pluviales en comparación con los otros dos tipos de barrio. Esto explica por qué, a pesar de haber aumentado la presencia de terrenos y calles inundables en el contexto urbano más vulnerable, la misma no igualó a la experimentada por el estrato socioeconómico muy bajo, que también se localiza en áreas con trazado urbano formal.

Examinando el indicador según cada una de las variables de corte, se aprecia que en 2012 la problemática afecta al 42,3% de los hogares más pobres, frente al 24,7% de los pertenecientes al estrato medio alto. A su

vez, si bien las brechas según el tipo de barrio que se habite al interior de la ciudad se redujeron ligeramente entre 2010 y 2012, aun así seguían siendo considerables. Un hogar emplazado en una villa o en un asentamiento precario tiene 2,4 veces más chances de encontrarse próximo a terrenos y calles inundables que otro localizado en las zonas más favorecidas de la ciudad (54,6% y 22,8%, respectivamente). En tanto, los hogares que habitaban barrios de trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo se ubicaban en una posición intermedia entre los otros dos grupos (36% en 2012).

El análisis según el tipo de aglomerado corrobora la idea expuesta en torno a la incidencia geográfica de las precipitaciones y su efecto sobre la presencia de terrenos y calles inundables. Aun cuando a lo largo de toda la serie el gran Buenos Aires registró un mayor nivel para este indicador, un importante incremento del valor se produjo en 2012, lo que amplió considerablemente la brecha entre ambos tipos de aglomeración. De este modo, mientras que en el Resto Urbano Interior la problemática se incrementa sólo 0,7 p.p., en el Gran Buenos Aires esta variación absoluta se ubica en el orden de los 3,3 p.p.

CONDICIONANTES DEL ACCESO A UN VECINDARIO CON INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA

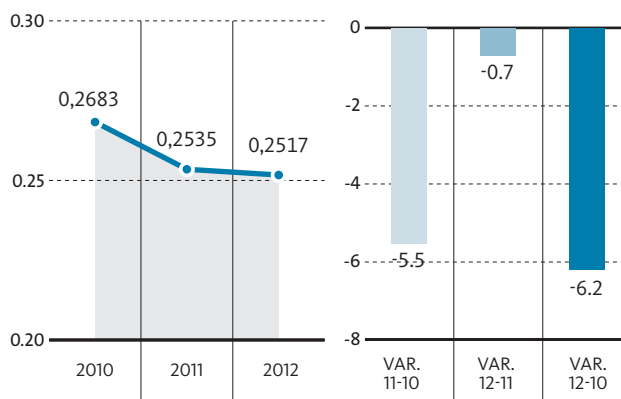
Hasta aquí se ha examinado el acceso de los hogares a la infraestructura urbana básica según una serie de variables seleccionadas, utilizando dos indicadores directos (pavimento y desagües pluviales) y uno indirecto (terrenos y calles inundables). Estas últimas líneas del presente apartado (2.3) se proponen integrar los distintos indicadores en un único índice sintético que dé cuenta del déficit de acceso a este tipo de recurso, pero, tal como en los dos apartados anteriores, al nivel del vecindario y ya no de cada unidad doméstica tomada individualmente.

Para ello se examina brevemente los valores y las variaciones interanuales que asume el índice sintético a lo largo de la serie temporal bajo análisis (figura 2.3.10) y se desarrolla un análisis de regresión lineal múltiple en cinco fases, a efectos de identificar un modelo que permita explicar la mayor cantidad de varianza posible y los factores que tengan mayor peso en lo que hace a la explicación de la posibilidad de

Figura 2.3.10

DÉFICIT DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA POR VECINDARIO

Media del índice por vecindario y variaciones relativas porcentuales interanuales. Años 2010-2011-2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

abitar un vecindario con diferente nivel de presencia de infraestructura urbana básica (figura 2.3.11).

Como puede apreciarse en el primer gráfico, a lo largo de los tres años analizados la media del índice de déficit de acceso a infraestructura urbana básica por vecindario experimenta una paulatina reducción, fundamentalmente en el bienio 2010-2011, cuando se contrae un 5,52%, a la vez que se mantiene prácticamente estable entre 2011 y 2012.

Cuando se ingresa en el análisis de regresión, como en los dos apartados anteriores, en el primer modelo el factor educativo es el que mayor peso tiene para explicar la variable dependiente: un hogar con jefe sin el secundario concluido incrementa las chances de habitar un vecindario con déficit de infraestructura urbana básica. En el mismo modelo, a este factor siguen aquellos que cuentan con un empleo precario y las familias con presencia de menores. Por el contrario, si bien con un coeficiente B tipificado muy bajo, las unidades domésticas con jefatura femenina reducen la probabilidad de habitar un barrio con este tipo de problemática.

En la segunda fase del análisis de regresión, todos los anteriores factores pierden potencial explicativo en comparación con el estrato socioeconómico de pertenencia: cuanto más se desciende en esta escala, más se incrementa (considerablemente) el coeficiente B tipificado, en una magnitud tal que el estrato muy bajo registra el mayor valor para este coeficiente en comparación con cualquier otra categoría de esa

Figura 2.3.11

**ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE EN CINCO FASES.
VARIABLE DEPENDIENTE: MEDIA DEL ÍNDICE DE DÉFICIT DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA
POR VECINDARIO. COEFICIENTES B TIPIFICADOS Y NIVELES DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA.**

Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I	MODELO II	MODELO III	MODELO IV	MODELO V
	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO
SEXO DEL JEFE					
Varon (c)					
Mujer	-0,062***	-0,069***	-0,043***	-0,036***	-0,036***
EDUCACIÓN DEL JEFE					
Con secundario completo (c)					
Sin secundario completo	0,295***	0,050***	0,01	0	-0,01
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE					
Empleo pleno (c)					
Empleo precario / subempleo	0,135***	0,044***	0,035***	0,032***	0,031***
Desempleo / inactividad	0,033***	-0,089***	-0,057***	-0,039***	-0,042***
NIÑOS EN EL HOGAR					
Sin niños (c)					
Con niños	0,128***	0,093***	0,052***	0,047***	0,046***
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR					
ESTRATO SOCIOECONÓMICO					
Medio alto (c)					
Medio bajo		0,133***	0,04	0,19	0,03
Bajo		0,282***	0,106***	0,089***	0,089***
Muy bajo		0,471***	0,212***	0,025***	0,192***
CONDICIÓN RESIDENCIAL					
Trazado urbano de NSE medio (c)					
Urbanización formal de NSE bajo			0,371***	0,318***	0,320***
Villa o asentamiento precario			0,229***	0,211***	0,215***
TIPO DE AGLOMERADO					
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)					
Conurbano Bonaerense				0,254***	0,254***
Otras Grandes Áreas Urbanas				0,066***	0,066***
Resto Urbano Interior				0,092***	0,092***
AÑO					
2010					
2011					-0,036***
2012					-0,046***
CONSTANTE	0,105***	0,074***	0,053***	-0,014**	0,01
R cuadrado	0,152***	0,223***	0,309***	0,345***	0,346***
F	608,897***	610,942***	761,427***	686,863***	599,884***

(c) Categoría de referencia.

* Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,1).

** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,05).

*** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value <0,01).

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

misma tabla. Esto indica que más allá de que se agreguen variables en modelos sucesivos, y que también aumente la capacidad explicativa de estos últimos, el segundo modelo es el que permite captar de un modo más acabado la fuerza del estrato muy bajo como condicionante para el acceso a un vecindario con infraestructura urbana básica.

El tercer modelo, que incorpora la condición residencial aumenta su R cuadrado (capacidad explicativa), pero como sucediera con los servicios domiciliarios de

red, habitar una villa o asentamiento precario no aumenta tanto las chances de no contar con infraestructura en comparación con los vecindarios de estratos bajos dentro de la traza urbana formal. En otras palabras, el contraste al interior de la propia urbanización formal es tan grande entre los barrios de clase media y los de estratos bajos, que residir en uno de estos últimos se constituye en un mejor predictor del déficit que vivir en una villa o asentamiento. Esto no implica que este último tipo de barrio tenga un mayor acceso a

esos recursos, sino que en un modelo predictivo como el que se está formulando, tienen un menor potencial explicativo que los barrios de estratos bajos dentro de la traza urbana formal. En paralelo, en este tercer modelo, la diferencia entre el estrato socioeconómico medio bajo y el medio alto se reduce significativamente en comparación con el modelo II.

Por otro lado al incorporar en el cuarto modelo a la variable aglomerado urbano, la condición residencial no modifica su influencia sobre el índice, pero se reduce considerablemente el coeficiente B tipificado del estrato socioeconómico muy bajo, a la par que se incrementa el peso de residir en el Conurbano Bonaerense Aires. En otros términos, un hogar que se ubica en este aglomerado tiene muchas más probabilidades de habitar un vecindario con déficit de infraestructura urbana básica que otro que resida en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien con coeficientes B tipificados estadísticamente significativos, los años de relevamiento incorporados en el modelo V aportan menos en la determinación del índice de déficit por vecindario que otros factores como la condición residencial y el estrato socioeconómico. Esto implica que aun cuando el índice se reduce conforme avanzan los tres años de la serie temporal bajo análisis, las otras dos variables son mucho más determinantes en la materia que se está indagando.

Finalmente, si se compara con los dos componentes urbanos examinados en los apartados anteriores (vivienda digna y servicios domiciliarios de red), los modelos examinados en estas líneas y que remiten a la infraestructura urbana básica por vecindario tienen un menor potencial explicativo que los anteriores, lo que queda reflejado con claridad en los valores de los R cuadrados.

2.4 ACCESO A CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES

En la ciudad no solo se distribuye de manera más o menos equitativa suelo, vivienda, servicios, infraestructura y equipamiento, sino también condiciones ambientales, las que representan una dimensión sumamente relevante para el análisis de la situación del hábitat en la Argentina urbana del Bicentenario.

Se indagan aquí empíricamente una serie de condiciones ambientales que resultan de prácticas humanas degradantes del medio ambiente: presencia de ba-

surales, industrias y fábricas contaminantes, plagas urbanas y fuentes y espejos de agua contaminada en napas o en superficie. En esta línea, se entiende por degradación ambiental al conjunto de mecanismos que, en forma directa o indirecta, deterioran o transforman negativamente el hábitat humano, comprometiendo el desarrollo de la vida presente o futura.

Si bien la contaminación (emanación de gases, vertido de líquidos o eliminación de sólidos que dañan al medio ambiente de forma inmediata o acumulativa, transitoria o definitiva) constituye uno de los componentes fundamentales de la degradación, no la agota en absoluto. Así, la presencia de una plaga, la tala indiscriminada de árboles, la radicación de una planta industrial en un barrio residencial, entre otros ejemplos, no constituyen hechos de contaminación propiamente dicha, pero aun así conllevan efectos nocivos sobre el ambiente, afectando la calidad de vida de la población residente.

Aunque los distintos actores sociales son responsables de la producción del escenario ambiental en que se desenvuelven, al Estado le cabe un rol fundamental en esta materia, por cuanto sobre este recae la responsabilidad de instrumentar políticas públicas capaces de controlar y desalentar las prácticas degradantes. Los modos en que puede intervenir el Estado en este sentido resultan muy variados, y algunos ejemplos son el control sobre el vertido de sustancias por parte de los hogares y de las empresas; la supervisión de la emanación de gases de parte de las fábricas y los vehículos; el control de plagas o de las prácticas sociales que pudieran atraerlas; la promulgación de leyes que protejan el ambiente; la aplicación de multas; la educación de la ciudadanía para incentivar prácticas de cuidado y desalentar las de degradación; entre otros (Adaszko, 2011a, 2012).

En el extremo opuesto, la inacción u omisión del Estado no tiene consecuencias neutras en materia ambiental, y en muchos casos es esta misma institución la que actúa nocivamente, ya sea en forma directa –por ejemplo cuando su amplia red de instituciones no descarta el material residual de manera adecuada o no lo dispone en los lugares apropiados– o en forma indirecta –por ejemplo cuando autoriza la radicación de plantas industriales o basurales en las proximidades de los asentamientos humanos, cuando hace caso omiso a las advertencias de los organismos internacionales acerca de la necesidad de encarar pro-

gramas de sustentabilidad ambiental o cuando debilita las barreras regulatorias sobre los efectos dañinos derivados de la actividad productiva con el propósito de fomentar inversiones.

Interesa indagar aquí en los niveles que cada una de las cuatro problemáticas enumeradas al comienzo del apartado asume en la Argentina del Bicentenario, así como la desigualdad entre distintas categorías sociales. A su vez, el anexo estadístico AE.2.4 que se presenta en formato digital en www.uca.edu.ar/observatorio, expone tablas de datos con un mayor nivel de desagregación para cada uno de los indicadores examinados, brechas relativas y variaciones interanuales según una serie más amplia de variables seleccionadas.

PREVALENCIA DE BASURALES EN LAS INMEDIACIONES DE LAS VIVIENDAS

Uno de los factores estrechamente relacionados con el equilibrio ambiental de una ciudad es la capacidad que esta tenga de gestionar y controlar los residuos sólidos que produce. La prevalencia de basurales⁴⁸ en las inmediaciones de las viviendas conlleva consecuencias epidemiológicas que afectan gravemente las posibilidades de desarrollo de una vida larga y saludable por parte de la población, incrementa los riesgos de exposición a plagas urbanas y aumenta las posibilidades de contaminación del suelo y el consiguiente drenado a otras capas de la tierra.

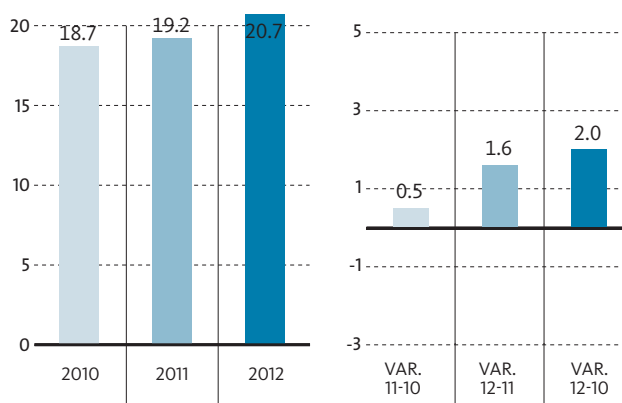
Sobre la posibilidad de controlar la proliferación de basurales, convergen diferentes actores sociales y aspectos tales como la regularidad en la recolección y el tratamiento de los desechos sólidos, la disposición de contenedores en las áreas en las que sean necesarios, la educación y las prácticas de cuidado ambiental por parte de la población, la regulación y el control estatal de basurales y rellenos sanitarios, entre otros. Al respecto, una correcta política en la materia debe tener

48 En las líneas que siguen se entiende por basural a toda acumulación de residuos sólidos a cielo abierto que, estando o no embolsados, cumpla simultáneamente con los tres siguientes criterios: *a*) es adoptada por los diferentes actores sociales (ya sean hogares, instituciones públicas, empresas, etcétera) como un espacio cotidiano de descarte de basura por fuera del circuito formal de recolección y disposición; *b*) permanece en ese estatus por el término mínimo de una semana; y *c*) incumple la normativa urbana de disposición de residuos sólidos.

Figura 2.4.1

BASURALES EN LAS INMEDIACIONES DE LA VIVIENDA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

entre sus objetivos fundamentales la reducción y eliminación de basurales en toda la ciudad, sin importar las características de la población residente.

Los datos relevados por esta investigación muestran que entre 2010 y 2012 se incrementó el porcentaje de hogares próximos a basurales de 18,7% a 20,7%, lo que en el último año de la serie equivale al 22,1% de la población (figura 2.4.1).

El aumento de este problema ambiental fue experimentado tanto para los hogares cuyo principal sostén económico era un varón como en el caso en que dicho rol estuviera ocupado por una mujer (figura 2.4.2). Así, en 2012, la presencia de basurales en las inmediaciones de las viviendas afecta al 21,6% de los primeros hogares y al 18,5% de los segundos, con un mayor incremento absoluto en este último grupo (2,3 p.p.).

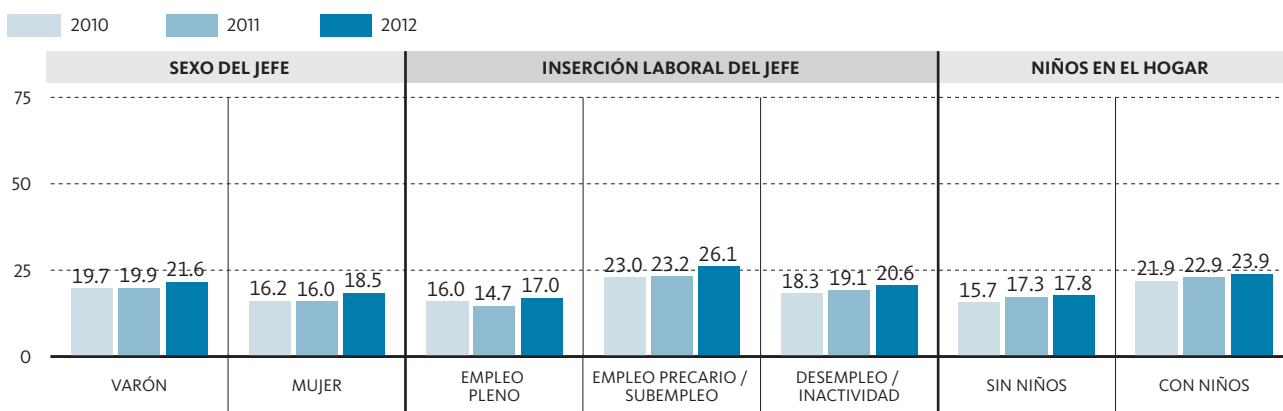
En cuanto a la calidad de inserción laboral del jefe de hogar, a lo largo de la serie, las unidades domésticas cuyo principal sostén económico se halla en un empleo pleno registran un menor déficit que los otros dos tipos de hogar, pasando de 16% a 17% entre ambos años extremos de la serie. La categoría con el porcentaje más alto de hogares próximos a basurales es la conformada por jefes en situación de precariedad laboral, o subempleados, que asciende 3,1 p.p. entre 2010 y 2012, situándose en el 26,1% en ese último año.

Tanto los hogares con niños como aquellos donde no los había experimentaron un incremento de la presencia de basurales en sus inmediaciones a lo largo

Figura 2.4.2

BASURALES EN LAS INMEDIACIONES DE LA VIVIENDA SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

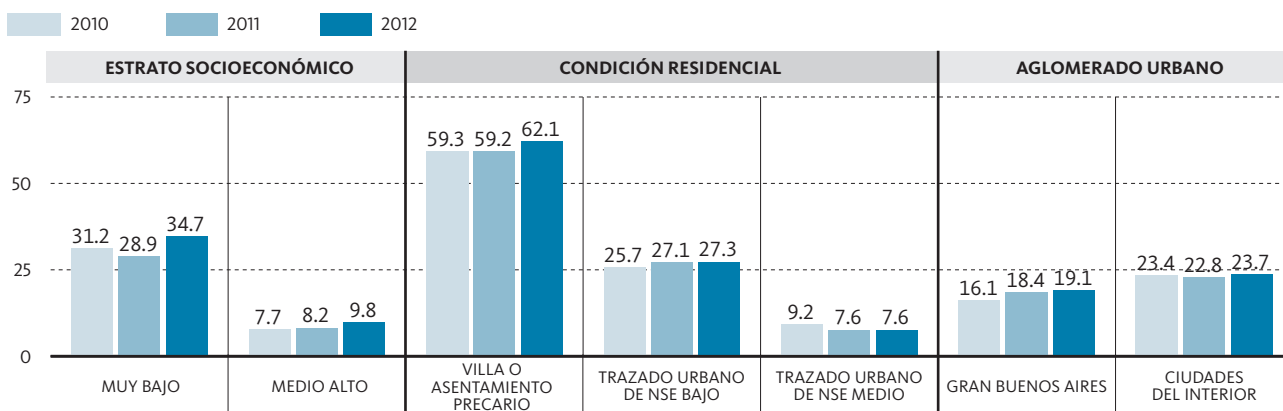


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.4.3

BASURALES EN LAS INMEDIACIONES DE LA VIVIENDA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

del período bajo análisis. En todo caso, siempre los hogares sin niños registran un menor nivel de déficit que su contraparte, ubicándose sus respectivos indicadores en 2012 en 17,8% y 23,9%.

La evolución del indicador según el estrato socioeconómico evidencia que el mayor incremento del déficit se registra en el 25% más pobre de los hogares, pasando del 31,2% al 34,7% (figura 2.4.3). Así, la brecha con respecto a los hogares del cuartil superior es muy significativa, conjunto en el cual el indicador pasó de 7,7% a 9,8% entre los dos años extremos de la

serie. Con esto, en 2012 los hogares pobres presentan 3,6 veces más chances de encontrarse próximos a un basural que los pertenecientes al estrato medio alto.

Algo similar, aunque con brechas considerablemente mayores, se aprecia según el tipo de barrio donde se emplazan los hogares. En las villas y asentamientos precarios la presencia de basurales en las inmediaciones de las viviendas se incrementó de 59,3% a 62,1%, mientras que en los barrios más acomodados dentro de la traza urbana formal, el déficit marcó un leve retroceso (9,2% al 7,6% de los hogares). Esto produce, a

lo largo de los tres años, un incremento de la brecha relativa entre ambos tipos de hogar (del 6,4 al 8,2).

Según el aglomerado urbano de residencia, el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires experimentó un importante acrecentamiento de la presencia de basurales al ascender del 16,1% al 19,1%, mientras que el Resto Urbano Interior se mantuvo relativamente estable.

PRESENCIA DE FÁBRICAS E INDUSTRIAS CONTAMINANTES

Dentro de los procesos de degradación y daño ambiental que han acompañado la urbanización y consolidación de las ciudades, la presencia de fábricas e industrias contaminantes es cardinal. En este sentido, si bien no toda planta industrial contamina, en el caso de hacerlo las consecuencias sobre el medio ambiente y la salud de la población resultan inmediatas y duraderas.

Entre las prácticas degradantes llevadas a cabo por este tipo de industrias se cuenta el vertido de residuos derivados del proceso productivo: sólidos (basura y desperdicios), líquidos (agentes químicos en el suelo o en el agua) y gaseosos (humo o gases tóxicos en el aire).

La función del Estado en materia de control y disuasión de este tipo de prácticas es indelegable. En todo el país se registra una gran disparidad en este respecto, apreciable especialmente en los hogares más expuestos a este tipo de problemática ambiental, que son los pertenecientes a los segmentos más vulnerables.

Al nivel del total urbano, entre 2010 y 2012 se produjo una ligera disminución del porcentaje de hogares próximos a fábricas e industrias contaminantes; pero dado que la diferencia no resulta estadísticamente significativa, puede concluirse que a nivel general el indicador se ha mantenido estable, en torno al 12% de los hogares y al 12,9% de la población (figura 2.4.4).

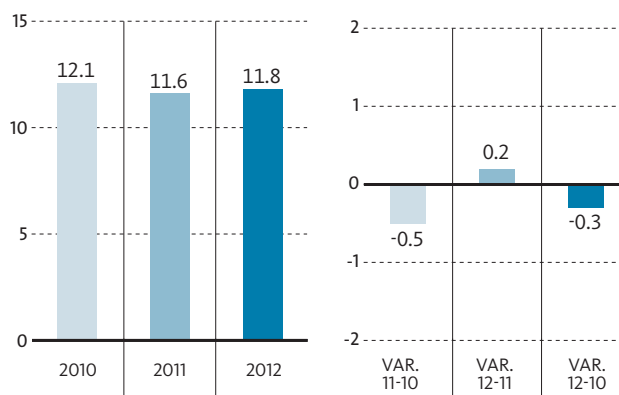
Cuando se examina la evolución de este indicador según las distintas variables de corte, se aprecia que se mantuvo estable para los hogares cuyo principal sostén económico era un varón, a la vez que experimentó algunas variaciones en aquellos otros con jefatura a cargo de una mujer (figura 2.4.5). En 2012 se encontraban próximos a fábricas e industrias contaminantes el 12,3% de los primeros hogares y el 10,3% de los segundos.

También se registraron algunas variaciones según la calidad de inserción en el empleo del principal sostén económico del hogar. En los que su jefe contaba con un

Figura 2.4.4

FÁBRICAS O INDUSTRIAS CONTAMINANTES

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

empleo precario o se hallaba subempleado, a lo largo de los tres años se registraron los mayores valores para este indicador, con un ligero incremento en 2011 y una disminución en 2012, cuando la problemática afectaba al 13,5% de estos hogares. En cambio, se vieron menos expuestos a la proximidad a fábricas e industrias contaminantes los hogares con jefes inactivos o desocupados (9,8% en el último año de la serie).

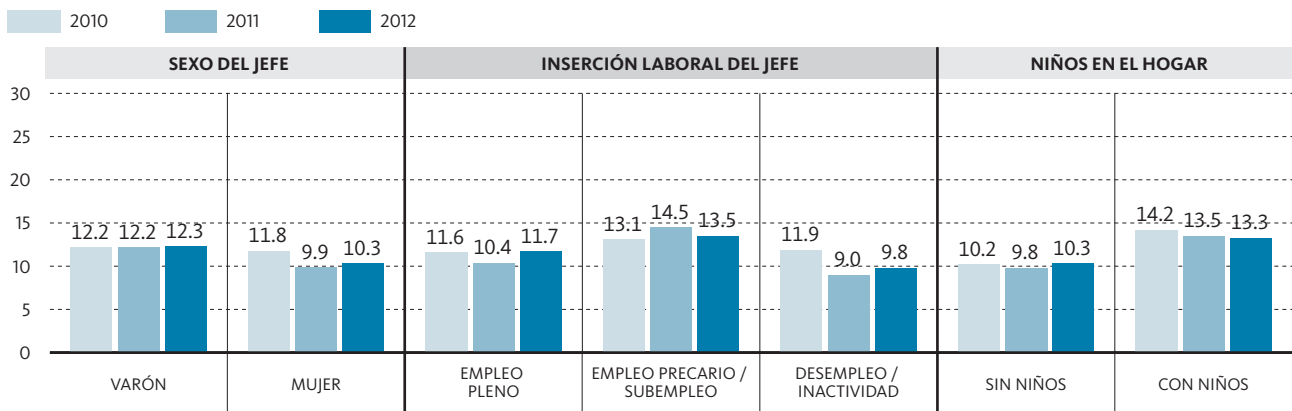
Por su parte, a lo largo del período analizado, los hogares con niños reflejaron valores más elevados en comparación con aquellos en los que no había presencia de menores (13,3% y 10,3%, respectivamente, en 2012). No obstante, como se desprende de la figura, en el caso de las familias con niños se experimenta una leve reducción entre ambos años extremos de la serie.

La brecha entre los hogares del estrato muy bajo y el medio alto se mantiene relativamente constante a lo largo de la serie (figura 2.4.6). Así, en 2012 fue afectado por esta problemática ambiental el 15,6% de los primeros frente al 8% de los segundos. En lo que respecta a la condición residencial, el principal decremento se registra en los hogares localizados en barrios dentro de la traza formal de nivel socioeconómico bajo, con un descenso entre los dos años extremos de la serie de 1,3 p.p. Por lo demás, se encontraba próximo a fábricas e industrias contaminantes el 25% de los hogares de villas y asentamientos precarios, frente a solo el 6,9% de aquellos otros ubicados en las mejores zonas de la ciudad. Con esto,

Figura 2.4.5

FÁBRICAS O INDUSTRIAS CONTAMINANTES SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

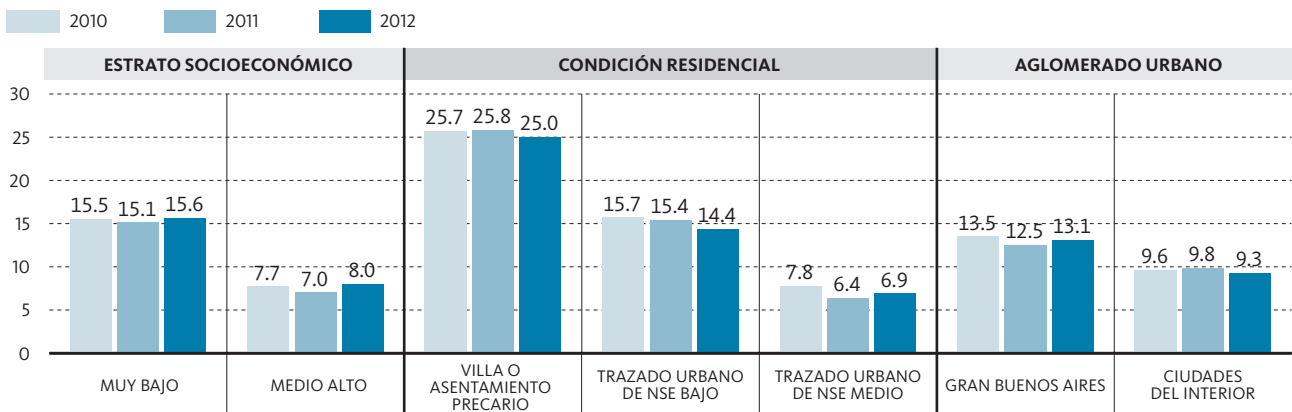


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.4.6

FÁBRICAS O INDUSTRIAS CONTAMINANTES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

un hogar radicado en una urbanización informal registra 3,6 veces más chances de ser afectado por este problema que otro situado en un barrio de clase media profesional o comercial.

También se aprecian diferencias a lo largo de los tres años analizados según el tipo de aglomerado de residencia, siendo más afectado el Gran Buenos Aires, que experimentó una ligera reducción en sus hogares (del 13,5% al 13,1%), mientras que, por el contrario, los del Resto Urbano Interior pasaron de 9,6% en 2010 a 9,3% en 2012.

PREVALENCIA DE PLAGAS URBANAS

El resultado de la insuficiencia de inversión en aspectos tales como los desagües pluviales y las redes cloacales, la ausencia de un sistema de gestión integral de los residuos sólidos, la falta o discontinuidad en la fumigación, la debilidad en el control público sobre los basurales a cielo abierto o en sitios inapropiados, las prácticas poco cuidadosas de los ciudadanos en el cuidado y sostenimiento del

medio ambiente y la presencia de fuentes o espejos de agua contaminada son algunos de los factores que conllevan la proliferación de plagas urbanas en distintas zonas de las ciudades. La relevancia de esta problemática ambiental se vincula con el hecho de que las plagas incrementan los riesgos sobre la salud de la población y traen aparejada una diversidad de daños económicos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud define las plagas urbanas como aquellas especies implicadas en la transmisión de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y el bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados normales.

Independientemente de lo más o lo menos cuidadosas que sean las prácticas con relación al medio ambiente por parte de los distintos actores sociales, compete al Estado tomar todas las acciones necesarias para su control mediante una adecuada política que reduzca la presencia de plagas urbanas en el conjunto del territorio.

Del examen de los datos relevados, se desprende que al nivel del total urbano, entre 2010 y 2012 se registra un ligero incremento de esta problemática, pasando a afectar del 25,7% al 26,8% de los hogares, y en el último año de la serie, alcanzando al 28,7% de la población (figura 2.4.7).

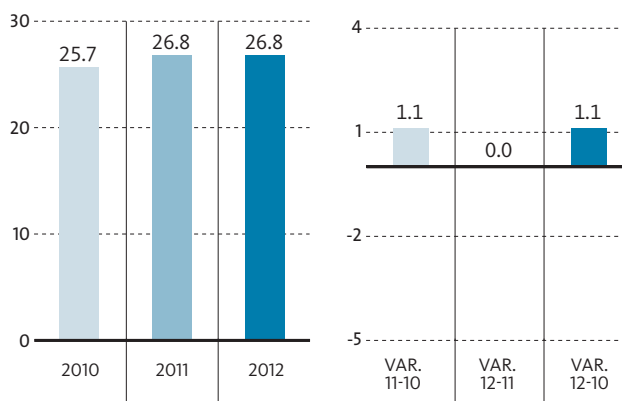
Conforme a la evolución del indicador según las distintas variables seleccionadas, los hogares con jefatura femenina prácticamente no vieron modificado el nivel de exposición a plagas urbanas a lo largo del trienio (25,3% en promedio) (figura 2.4.8). Por el contrario, en los hogares cuyo principal sostén económico era un varón sí se produjo un aumento, pasando del 25,8% en 2010 al 27,2% en 2012.

A su vez, mientras que los hogares cuyo jefe se halla en una situación de precariedad laboral o subempleo presentan, a lo largo de los tres años, niveles de incidencia superiores a los de los otros dos tipos de hogar, son asimismo los que experimentan el mayor incremento absoluto del déficit (1,8 p.p.). Así, en 2012, la presencia de plagas urbanas en el entorno de la vivienda afectaba al 34% de los hogares con jefe en situación de precariedad laboral o subempleo; al 27,1% de aquellos con jefes inactivos o desempleados; y al 21,4% de aquellos otros en los que el principal sostén económico contaba con un empleo pleno. Este último

Figura 2.4.7

PLAGAS URBANAS EN LAS INMEDIACIONES

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

grupo prácticamente no vio modificada su situación a lo largo del período estudiado.

Por su parte, en el trienio 2010-2012, las familias con niños y adolescentes registraron los valores más altos del indicador, en comparación con aquellas otras donde no había menores de edad (30,8% y 23%, respectivamente, en 2012).

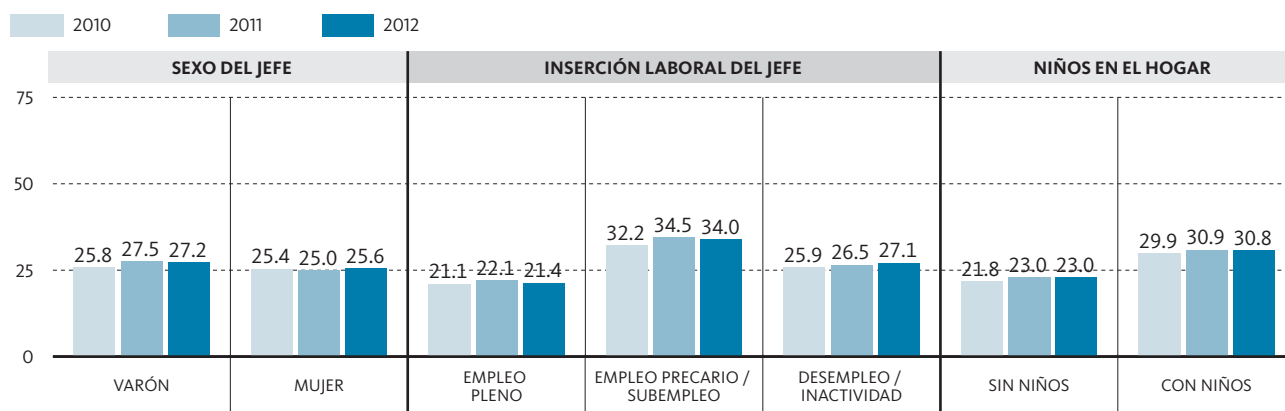
Las brechas de desigualdad que marcan los valores del indicador según la estratificación socioeconómica resultan considerables (figura 2.4.9). Excepto por el estrato medio alto, donde se produce una muy ligera reducción del déficit (14,8% a 14,3%), en los hogares más pobres la incidencia de la presencia de plagas urbanas aumenta 1,5 p.p.: del 39,5% de estos hogares en 2010, asciende al 41% en 2012. En este último año, un hogar pobre muestra 2,9 veces más chances de encontrarse expuesto a esta problemática que otro del cuartil superior.

Las diferencias resultan más elevadas cuando se comparan los hogares según el tipo de barrio de residencia. En las villas y asentamientos, el valor del indicador se mantiene prácticamente invariante entre ambos años extremos de la serie, pero en 2012 se encuentra expuesto a plagas urbanas el 62,7% de los hogares que habitan en estas urbanizaciones informales, frente a tan solo el 16,5% de los localizados en las mejores zonas de la ciudad. Los hogares situados en los barrios de trazado urbano formal de nivel socioeconómico bajo, por su

Figura 2.4.8

PLAGAS URBANAS EN LAS INMEDIACIONES SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

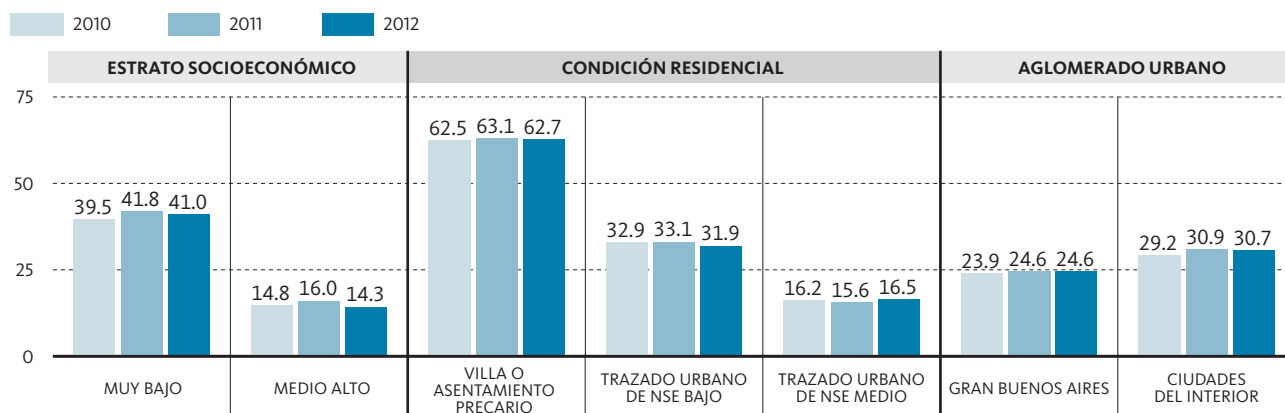


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.4.9

PLAGAS URBANAS EN LAS INMEDIACIONES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

parte, ocupan una posición intermedia entre los otros dos grupos (31,9% en 2012).

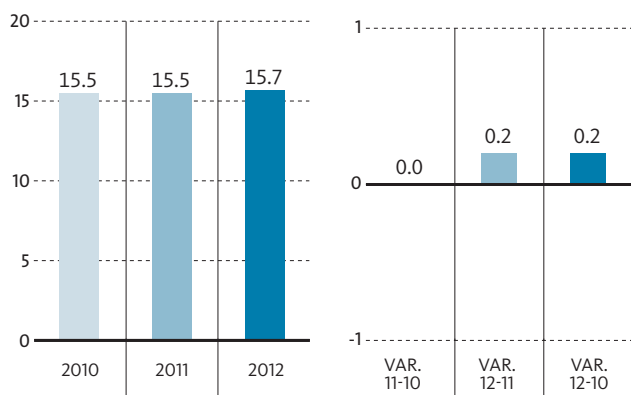
Por último, tanto en el Gran Buenos Aires como en el Resto Urbano Interior se produce un incremento del indicador, pero es en este último conjunto de aglomerados donde a lo largo del trienio la presencia de plagas urbanas resulta más elevada, a la vez que también es el que registra el mayor aumento interanual absoluto. Así, en 2012 se vio afectado por esta problemática ambiental el 24,6% de los hogares del Gran Buenos Aires, frente al 30,7% del Resto Urbano Interior.

CERCANÍA A FUENTES Y ESPEJOS DE AGUA CONTAMINADA EN NAPAS O EN SUPERFICIE

Aun cuando el agua es un recurso indispensable para la vida, su contaminación constituye un serio problema ambiental que degrada el ecosistema y, por tanto, conlleva efectos negativos para la salud. La contaminación del agua es, en definitiva, todo proceso que opera nocivamente sobre sus cualidades naturales, tornándola no apta para su utilización y

Figura 2.4.10**FUENTES O ESPEJOS DE AGUA CONTAMINADA EN NAPAS O EN SUPERFICIE**

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

consumo por parte de las especies animales, entre ellas la humana.

La contaminación del agua es uno de los principales problemas ambientales del país (SIDS, 2009); fundamentalmente es el resultado del vertido de las aguas residuales domésticas y de productos químicos a los ríos y lagos por parte de las industrias, así como del traspaso de excretas desde los pozos ciegos y los sistemas cloacales deteriorados a las napas de agua subterránea. El uso indiscriminado y no controlado de plaguicidas y fertilizantes, el vertido de sustancias tóxicas por parte de las industrias o de detergentes en el caso de los hogares y el tratamiento inadecuado de los desechos sólidos o líquidos son algunos ejemplos de las acciones degradantes de la naturaleza llevadas a cabo por la propia población, prácticas que han conducido a que en determinadas áreas –en muchos casos en las inmediaciones de los asentamientos humanos– se concentre agua contaminada no apta para la vida (Adaszko, 2011a, 2012).

Siendo la contaminación del agua uno de los resultados de las acciones degradantes del medio ambiente por parte de los distintos actores sociales, compete al Estado un rol fundamental a la hora de prevenir, disuadir o erradicar esas prácticas, por cuanto es aquel quien tiene la potestad de regularlas, controlarlas y aplicar las sanciones que se requieran.

Los datos presentados en la figura 2.4.10 muestran que entre 2010 y 2012, al nivel del total urbano, la pre-

sencia de fuentes o espejos de agua contaminada en napas o en superficie se mantiene constante, sin una variación estadísticamente significativa. Así, en el último año de la serie, esta problemática afecta al 15,7% de los hogares urbanos y al 17,3% de las personas.

Más allá de las variaciones coyunturales producidas en cada uno de los tres años, en 2012 los hogares cuyo principal sostén económico es un varón se encuentran afectados en mayor grado (17,2%) que aquellos otros con jefatura femenina (12%) (figura 2.4.11). Por su parte, los datos revelan que se produjo un tenue retroceso del indicador en los hogares cuyo principal sostén económico cuenta con un empleo estable (de 13,7% pasó a 11,6%), mas no fue así en los otros dos grupos, que registran un ligero incremento del porcentaje de aquellas unidades domésticas cuyas viviendas se hallan próximas a fuentes y espejos de agua contaminada. El resultado de esta variación fue un aumento de las brechas de desigualdad entre los hogares con jefes en situación de precariedad laboral, subempleo, desempleo o inactividad, con respecto a aquellos otros con un jefe en situación de pleno empleo.

Por otro lado, el indicador relativo a la presencia o ausencia de niños en el hogar se mantiene relativamente estable, aunque con un ligero incremento (estadísticamente no significativo) en los hogares sin menores de edad. Aun así, en 2012, un hogar con niños tenía 1,6 veces más chances de encontrarse próximo a una fuente o espejo de agua contaminada (19,6%) que un hogar sin menores de edad (12,1%).

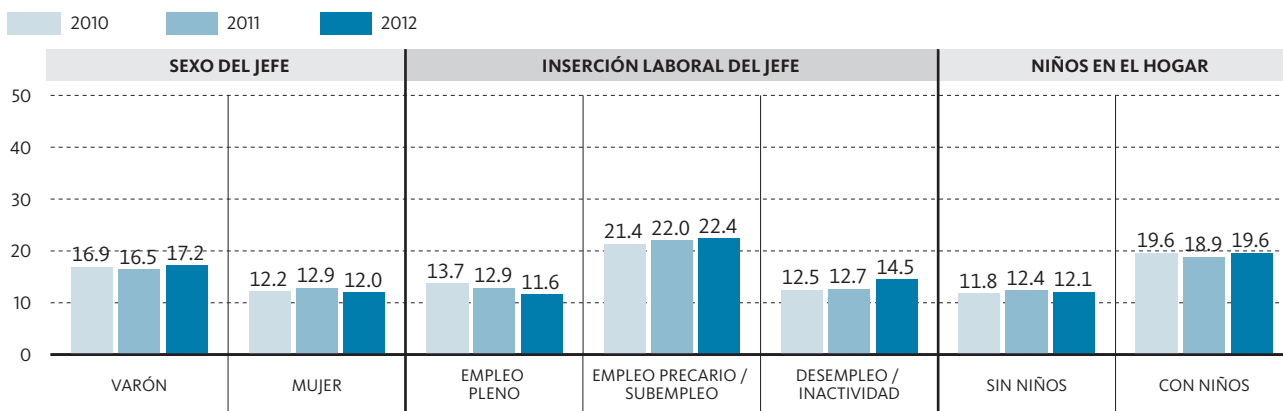
El indicador según el estrato social muestra un incremento del porcentaje de hogares expuestos a esta problemática ambiental en el grupo más pobre, que pasó del 23,4% al 25,5% a lo largo de los tres años examinados, mientras que en el estrato superior el indicador se mantuvo relativamente estable, ubicándose en el 5,6% en 2012 (figura 2.4.12). Esta variación tuvo como consecuencia el incremento de la brecha relativa entre ambos grupos (3,8 en 2010 y 4,5 en 2012).

En 2011 el estudio evidencia un ligero retroceso del indicador en las villas y asentamientos precarios. Hacia el último año de análisis, sin embargo, terminó 1,1 p.p. por encima del dato de origen. Paralelamente, se redujo la presencia de fuentes y espejos de agua contaminada en las proximidades de los hogares ubicados en los barrios dentro de la traza urbana formal de nivel socioeconómico medio (del 6,2% bajó al 5,3%). Por su parte, las unidades domésticas emplazadas en las zonas de tra-

Figura 2.4.11

FUENTES O ESPEJOS DE AGUA CONTAMINADA EN NAPAS O EN SUPERFICIE SEGÚN SEXO E INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE Y NIÑOS EN EL HOGAR

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.

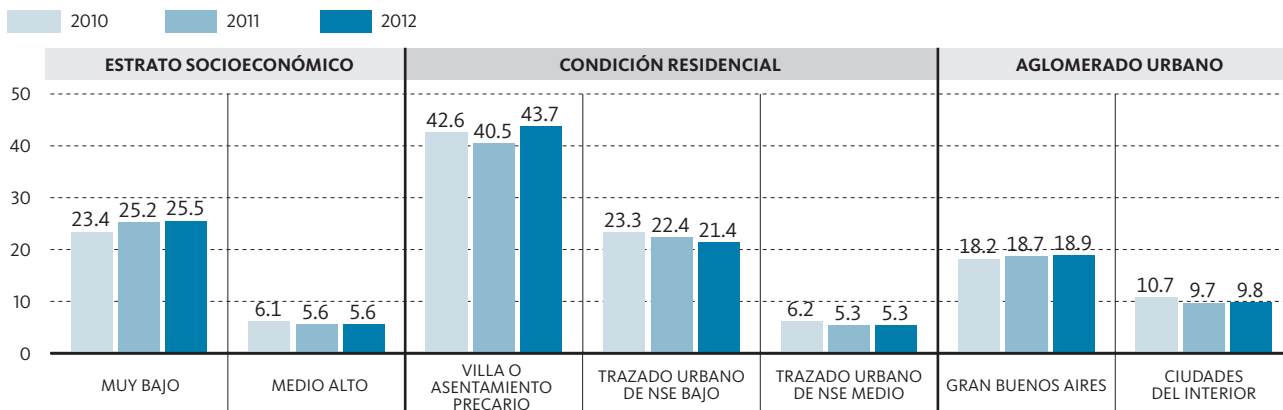


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 2.4.12

FUENTES O ESPEJOS DE AGUA CONTAMINADA EN NAPAS O EN SUPERFICIE SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de hogares particulares.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

zado urbano formal de nivel socioeconómico medio asumen valores intermedios entre los dos grupos extremos.

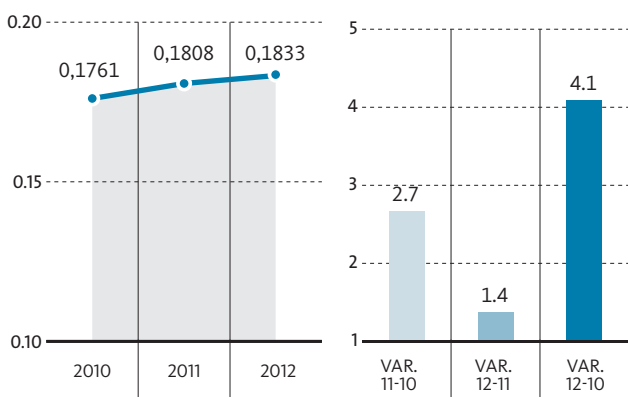
Al cabo, mientras que en el ámbito del Gran Buenos Aires se computa un leve incremento de esta problemática ambiental (de 18,2% pasó a 18,9%), en el Resto Urbano Interior desciende levemente (del 10,7% al 9,8%). De ahí que durante 2012 un hogar asentado en el Gran Buenos Aires tuviera 1,9 veces más chances de encontrarse próximo a una fuente o espejo de agua contaminada que un hogar emplazado en el Resto Urbano Interior.

CONDICIONANTES DEL ACCESO A UN VECINDARIO CON UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

El último análisis de regresión que se desarrolla en este capítulo tiene como propósito central identificar los factores con más peso explicativo en la determinación de la posibilidad de habitar un vecindario con mayores o menores problemas ambientales.

Figura 2.4.13**DÉFICIT DE ACCESO A CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES POR VECINDARIO**

Media del índice por vecindario y variaciones relativas porcentuales interanuales. Años 2010-2011-2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

En este caso, la variable dependiente en el modelo es la media por vecindario del índice de déficit de acceso a condiciones ambientales saludables, también producida a través de un análisis de componentes principales categóricos (CAPTCA), el cual utiliza como variables basales los cuatro indicadores expuestos a lo largo de este apartado (presencia de basurales, industrias contaminantes, plagas urbanas y fuentes y espejos de agua contaminada). El razonamiento analítico descriptivo de los hallazgos es análogo al de los tres análisis de regresión desarrollados en los apartados precedentes, por lo que en estas líneas no se dan mayores precisiones metodológicas al respecto.

Como se aprecia en la figura 2.4.13, a diferencia de los tres índices anteriores, en este caso el déficit medio por vecindario aumenta a lo largo del trienio, alcanzando una variación relativa porcentual de 4,09% entre 2010 y 2012.

El análisis de regresión lineal múltiple, en cada una de sus cinco fases, le da a cada factor un peso explicativo relativamente similar al que tuvo en los tres índices anteriores. Sin embargo, en este caso, como se desprende de los R cuadrado en la parte inferior de la figura 2.4.14, la capacidad explicativa de los modelos que utilizan esas variables independientes es menor. De hecho, los modelos IV y V presentan un R cuadrado idéntico y, a lo sumo, se logra explicar el 23,8% de la varianza total.

En el modelo I, que toma en cuenta únicamente las variables sociodemográficas básicas, el factor

con la mayor capacidad explicativa –controlando los restantes– es el nivel educativo del principal sostén económico del hogar, a partir de lo cual los jefes de hogar con secundario incompleto aumentan el valor del índice de déficit de acceso a un vecindario con condiciones ambientales saludables. A su vez, los hogares con niños también incrementan el valor de esa variable dependiente en comparación con aquellos otros en los que no había menores de edad. Por su parte, con un coeficiente tipificado relativamente bajo, las familias con jefatura femenina presentan menos chances de padecer esta problemática ambiental que las unidades domésticas cuyo principal sostén económico es un varón. No obstante, como se desprende del R cuadrado en la parte inferior de la tabla, este primer modelo de regresión tiene una escasa capacidad explicativa.

En la segunda fase del análisis de regresión, es notorio el peso del estrato socioeconómico de pertenencia de los hogares, en el sentido de que cuanto más pobre es el hogar, más se incrementa la media por vecindario de residencia, controlando el resto de los factores. Se ve asimismo reducido el valor del coeficiente B tipificado de las unidades domésticas con jefes sin secundario completo, al punto que pierden toda significancia estadística, lo que deriva del hecho de que este atributo está fuertemente correlacionado con el nivel socioeconómico del hogar. En otros términos, incorporando en el análisis al estrato socioeconómico, se hace posible prescindir de la primera variable, más allá de que su aporte siga resultando estadísticamente significativo.

En el modelo III, que incluye la condición residencial, gran parte del peso que anteriormente tenía el estrato socioeconómico se pierde y es recogido por esta nueva variable, lo que nuevamente resulta consistente con el fenómeno de la segregación residencial socioeconómica. Es más, algunos de los atributos sociodemográficos perdieron significancia estadística y el resto de los coeficientes B tipificados se reducen considerablemente. En el modelo III, además, el R cuadrado experimenta un incremento porcentual del 69% con respecto al modelo II, un nivel de aumento que ya no se verifica en las dos siguientes fases del análisis.

Cuando en el modelo IV se incorpora el aglomerado urbano, las dos categorías que hacen referencia a la condición residencial prácticamente no ven modificados sus coeficientes B tipificados, y solo en el caso

Figura 2.4.14

**ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE EN CINCO FASES.
VARIABLE DEPENDIENTE: MEDIA DEL ÍNDICE DE DÉFICIT DE ACCESO A CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES
POR VECINDARIO. COEFICIENTES B TIPIFICADOS Y NIVELES DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA.**

Años 2010-2011-2012.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I	MODELO II	MODELO III	MODELO IV	MODELO V
	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO	B TIPIFICADO
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR					
SEXO DEL JEFE					
Varon (c)					
Mujer	-0,041***	-0,046***	-0,021***	-0,017***	-0,017**
EDUCACIÓN DEL JEFE					
Con secundario completo (c)					
Sin secundario completo	0,212***	0,01	0	-0,01	-0,01
INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE					
Empleo pleno (c)					
Empleo precario / subempleo	0,101***	0,026***	0,020**	0,019**	0,018**
Desempleo / inactividad	0,023***	-0,078***	-0,037***	-0,027***	-0,028***
NIÑOS EN EL HOGAR					
Sin niños (c)					
Con niños	0,116***	0,087***	0,049***	0,045***	0,044***
SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR					
ESTRATO SOCIOECONÓMICO					
Medio alto (c)					
Medio bajo		0,118***	0,04	0,1	0,03
Bajo		0,225***	0,069***	0,059***	0,059***
Muy bajo		0,389***	0,108***	0,030***	0,096***
CONDICIÓN RESIDENCIAL					
Trazado urbano de NSE medio (c)					
Urbanización formal de NSE bajo			0,291***	0,261***	0,262***
Villa o asentamiento precario			0,339***	0,330***	0,331***
TIPO DE AGLOMERADO					
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)					
Conurbano Bonaerense				0,141***	0,141***
Otras Grandes Áreas Urbanas				0,087***	0,087***
Resto Urbano Interior				0,017**	0,017**
AÑO					
2010					
2011					-0,01
2012					-0,01
CONSTANTE	0,102***	0,084***	0,073***	0,047***	0,050***
R cuadrado	0,085***	0,134***	0,226***	0,238***	0,238***
F	317,746***	327,369***	496,724***	407,879***	353,703***

(c) Categoría de referencia.

* Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,1).

** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value<0,05).

*** Coeficiente B tipificado estadísticamente significativo (p-value <0,01).

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

del Conurbano Bonaerense se computa un valor que altera el índice de acceso a un vecindario con condiciones ambientales saludables. En comparación con la Ciudad de Buenos Aires, y dejando constante el resto de las variables, un hogar del Conurbano Bonaerense incrementa sus chances de habitar en un vecindario afectado por problemáticas ambientales.

Por último, en el modelo V se aprecia con claridad que los años no tienen efecto alguno en la variación

del índice, constatándose esto en la no significancia estadística de los dos coeficientes B tipificados.

En suma, el análisis de regresión muestra que los principales aspectos que determinan que un hogar incremente o reduzca sus chances de habitar un vecindario con problemas ambientales son el nivel socioeconómico y la condición residencial, siendo los más afectados las villas y asentamientos precarios y los barrios de estratos bajos dentro de la traza urbana formal.

2.5 RESUMEN DE RESULTADOS

La situación de acceso a una vivienda digna registró una ligera mejora entre los años 2010 y 2012, experimentando cada indicador una evolución particular. A lo largo de los tres años bajo análisis se produjo una leve reducción de la tenencia irregular de la vivienda: del 13,5% de los hogares en 2010, pasó al 12,4% en 2012, alcanzando en este último año de la serie al 14,2% de la población residente en los grandes centros urbanos del país. A su vez, en la totalidad del período analizado, los hogares con niños duplicaron la tenencia irregular en comparación con aquellos otros donde no había presencia de menores (17,6% y 7,6%, respectivamente, en 2012). No se apreciaron variaciones significativas en el estrato más pobre de los hogares (alrededor del 25% a lo largo del período); y particularmente en 2012, más de la mitad de los habitantes de hogares ubicados en villas y asentamientos precarios reconocían no ser propietarios ni inquilinos de la vivienda donde residían, frente a tan solo el 5,1% de aquellos otros situados en los mejores barrios.

Entre 2010 y 2012 se produjo un descenso de 3,1 puntos porcentuales (p.p.) en los hogares cuyos habitantes manifestaban temor a perder la vivienda, pasando del 10,2% al 7,1% (equivalente en el último año de la serie al 6,7% de la población urbana adulta). Como es de esperar, tal temor se registró mayormente en los hogares que alquilaban (en 2012, el 11,6%) o que se hallaban bajo una modalidad irregular de tenencia (en 2012, el 18,1%). No obstante, a lo largo de la serie en ambos grupos se apreció una reducción considerable de este indicador.

La problemática de las viviendas precarias, que resulta persistente en el tiempo, casi no experimentó modificaciones sustantivas entre 2010 y 2012, alcanzando hacia el final del período a poco más del 11% de los hogares urbanos, lo que en términos de personas equivalía a cerca del 13% de la población. En 2012 habitaba en viviendas precarias el 19,2% de los hogares cuyo jefe se hallaba en situación de precariedad laboral, frente a tan solo el 6,5% de aquellos donde el principal sostén económico contaba con un empleo pleno. Por su parte, durante los tres años analizados, el valor del indicador que da cuenta de la precariedad material de la vivienda doblaba en los hogares con niños al de aquellos sin presencia de menores (16% y 7,1%, respectiva-

mente, en 2012). En cuanto al estrato socioeconómico, mientras en el segmento más aventajado de la sociedad el indicador no superó el 2% a lo largo de la serie, en el estrato inferior experimentó una ligera reducción, si bien en 2012 seguía habitando viviendas precarias el 25,8% de estos hogares y el 42,1% de las familias alojadas en villas y asentamientos precarios.

A similares conclusiones se arriba cuando se examina el porcentaje de hogares sin baño, retrete o sin descarga mecánica de agua. Entre 2010 y 2012 este indicador se mantuvo constante, alcanzando al 8,7% de las familias y al 9,3% de la población en el último año analizado. A su vez, también en 2012, la ausencia de este tipo de recurso llegó al 12,5% de los hogares con niños y adolescentes, al 24% de aquellos pertenecientes al estrato socioeconómico más pobre o localizados en villas y asentamientos precarios. En todos los casos, las variaciones entre ambos años extremos de la serie resultaron por demás acotadas.

Entre 2010 y 2012 se produjo una ligera reducción del hacinamiento medio (3 o más personas por cuarto habitable) al pasar del 7,5% al 7% de los hogares, registro que en el último año de la serie implicaba al 11,3% de la población urbana. Dado que se trata de un indicador estrechamente vinculado con la presencia de menores en la vivienda, donde no los había prácticamente no se registró hacinamiento alguno, mientras que en aquellos hogares en los que sí vivían niños y adolescentes se produjo una leve retracción, ubicándose en el 13,7% en 2012. En el mismo año esta problemática trepó al 15% de los hogares del estrato más pobre de la sociedad y al 19,7% de los ubicados en villas y asentamientos precarios.

En líneas generales, los datos relevados por la EDSA (Encuesta sobre la Deuda Social Argentina)-Bicentenario (2010-2016) permiten apreciar una leve mejora en materia de reducción del déficit de acceso a servicios domiciliarios de red, excepto por el de suministro eléctrico, lo que no implicó una disminución de la tasa de conexión, sino, fundamentalmente, un considerable empeoramiento en la calidad del servicio. En este sentido, mientras que en 2010 el 56,8% de los hogares reportó que durante los 12 meses previos había experimentado cortes o bajas frecuentes de tensión, en 2012 el indicador alcanzó al 71,5% de los hogares urbanos, lo que equivale a una tasa de incremento en la incidencia de esta problemática del 26% entre ambos años extremos de la serie. En términos de personas –ya no de hoga-

res-, en el último año padecía cortes o bajas frecuentes de tensión eléctrica el 71,7% de la población. El principal deterioro de la calidad del suministro se produjo entre 2011 y 2012 y afectó fuertemente a los hogares con niños y adolescentes. No obstante, la problemática resulta tan generalizada, que las brechas con respecto a los demás tipos de hogar son mucho más acotadas que en otros indicadores de hábitat. Por ejemplo, mientras que en 2012 el 79,5% de los hogares más pobres sufrió cortes reiterados o bajas frecuentes de tensión, en el estrato medio alto el indicador alcanzó al 65,9%. Esta problemática también se registró en el 91,9% de quienes habitaban villas o asentamientos precarios, frente al 65,9% de aquellos otros que residían en los mejores barrios de la ciudad. Por último, el principal deterioro a lo largo de los tres años examinados se produjo en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, pasando del 53,6% de los hogares en 2010 al 73,6% en 2012.

La conexión a la red de agua corriente constituye un indicador sanitario de primer orden. Según los datos del presente estudio, entre 2010 y 2012 se evidenció un ligero retroceso del déficit, del 13,4% de los hogares urbanos al 12,9%, situación que en el último año de la serie abarcó al 13,4% de la población. Específicamente, en 2012 carecía de agua de red pública el 15,6% de los hogares con niños, el 61,3% de los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico más pobre de la sociedad y el 68,6% de los situados en villas y asentamientos precarios. Por último, a lo largo del período bajo análisis, la falta de conexión a la red era mayor en el Gran Buenos Aires que en el resto del país; la principal reducción del déficit se produjo en el aglomerado más populoso, afectando en 2012 al 38,3% de sus unidades domésticas.

No obstante el indiscutible impacto sanitario de la red cloacal, así como también el atraso que en la Argentina tiene el desarrollo de este servicio urbano esencial, los datos relevados por la EDSA-Bicentenario muestran una paulatina disminución del déficit entre los años 2010 y 2012, pasando del 35,9% al 34,1% de los hogares urbanos, lo cual equivale a que durante el último año de la serie no contaba con este recurso el 37,3% de la población. En 2012 se vieron afectados por este problema el 41,6% de las familias con niños, el 61,3% de los hogares más pobres y el 68,6% de los localizados en villas o asentamientos precarios. Por otro lado, mientras que en el Resto Urbano Interior no se produjo modificación alguna entre los dos años extremos de la serie (26,3%), en

el Gran Buenos Aires se computó una ligera reducción, pasando del 41,1% al 38,3% de los hogares.

La falta de inversión en materia de infraestructura energética del país, reflejada en un deterioro de la calidad del suministro eléctrico, se tradujo en el caso del gas natural domiciliario en que a lo largo de los tres años analizados prácticamente no varió el porcentaje de hogares sin conexión a este servicio esencial. Así, en 2012, esta problemática afectó al 26,8% de los hogares urbanos y al 30,8% de la población. Como en el resto de los servicios domiciliarios de red, este déficit impactó más sobre los hogares con niños (36,8%), duplicando el valor de los hogares sin presencia de menores. Las brechas según el estrato socioeconómico y la condición residencial no se vieron alteradas a lo largo de la serie. Particularmente en 2012 no contaba con conexión a la red de gas natural domiciliario el 56,8% de las unidades domésticas más pobres, frente a tan solo el 4,1% de aquellas que forman parte del estrato más alto; en tanto que el valor para las villas y asentamientos alcanzó al 83,4% en comparación con el 3,1% de las unidades domésticas emplazadas en los mejores barrios de la ciudad. Tampoco se modificó la brecha entre el Gran Buenos Aires y el Resto Urbano Interior, siendo afectado en el último año de la serie el 25,1% de los hogares del aglomerado más grande del país y el 29,9% de los localizados en el Resto Urbano.

En lo que respecta a la infraestructura urbana básica de la ciudad, los datos relevados muestran que entre 2010 y 2012 se produjo una muy leve reducción del porcentaje de hogares sin pavimento al frente de sus viviendas, cuando del 20,9% pasó al 19,5%, si bien en el último año de la serie implicó al 21,8% de la población. Concretamente, en 2012 este déficit alcanzó al 25,3% de las familias con niños, al 36% de los hogares más pobres y a más de la mitad de quienes habitaban en villas y asentamientos precarios, en comparación con apenas el 3,8% de los hogares emplazados en los barrios más urbanizados y con mayor poder adquisitivo de la ciudad. Por último, tanto en el Gran Buenos Aires como en el Resto Urbano Interior se evidenció una ligera disminución del déficit, pero en 2012 seguía sin pavimento al frente de su vivienda el 21,3% de los hogares del Gran Buenos Aires, frente al 16% de los situados en otras áreas urbanas del país.

La ausencia de alcantarillado y desagües pluviales, así como de un sistema integral de drenaje urbano, tiene múltiples consecuencias sanitarias y económicas que impactan en la vida cotidiana de los habitantes. Los

datos arrojados por el presente estudio revelan que en el período bajo análisis, al nivel del total urbano, el porcentaje de hogares sin desagües pluviales al frente de sus viviendas se redujo del 32,2% al 30%. En 2012, no contaba con este recurso el 33,5% de la población; y específicamente en el caso de los hogares con niños y adolescentes, el indicador se ubicó en el 36,8%. Con relación a la estratificación socioeconómica, si bien las unidades domésticas más pobres y las localizadas en villas y asentamientos registraron una ligera reducción de sus niveles de déficit en este punto, las brechas con respecto a los hogares en mejor situación se incrementaron ligeramente, en razón de que también las unidades domésticas del estrato medio alto y de los mejores barrios de la urbanización experimentaron una mejora en materia de provisión de desagües pluviales. Aun así, durante 2012, el 53,8% de las familias más pobres y el 63,7% de las residentes en villas y asentamientos precarios no contaban con este importante recurso.

La presencia de terrenos y calles inundables, como se sabe, constituye un indicador indirecto del nivel de mantenimiento, mejora o deterioro de la infraestructura urbana básica. Pues bien, entre 2010 y 2012 se produjo un incremento de la incidencia de terrenos y calles inundables en las inmediaciones de las viviendas, pasando del 28,9% al 31,3% de los hogares, y afectando en el último año al 32,4% de la población urbana. Dado que durante el período analizado se produjo una disminución del déficit de pavimento y desagües pluviales, como ya se ha dicho, parte del incremento de la presencia de terrenos y calles inundables se debió al aumento del caudal de precipitaciones experimentado fundamentalmente en 2012. Por lo general, las brechas entre las distintas categorías sociales examinadas se mantuvieron constantes en todas las variables de corte, si bien es de remarcar que en el último año la problemática afectó al 42,3% de los hogares del estrato más pobre y al 54,6% de los emplazados en villas y asentamientos precarios.

En la ciudad no se distribuyen únicamente recursos tales como viviendas, servicios, infraestructura o equipamiento, sino también condiciones ambientales. En este sentido, hay zonas y barrios que acceden a un medio ambiente más saludable, mientras que otros se encuentran afectados por problemas de contaminación y degradación ambiental. En líneas generales, los datos de la EDSA-Bicentenario revelan que mientras en el período 2010-2012 se produjo una ligera mejora en materia de acceso a una vivienda digna, así como a

servicios domiciliarios de red y a infraestructura urbana básica, en el caso de las condiciones ambientales sucedió precisamente lo contrario.

Un serio problema, fundamentalmente de las grandes áreas metropolitanas, es la gestión de los residuos sólidos. Los datos reunidos en esta investigación muestran que entre 2010 y 2012 el porcentaje de hogares próximos a basurales ascendió del 18,7% al 20,7%, lo que en el último año de la serie equivalía al 22,1% de la población. En el caso de los hogares con niños, este indicador se incrementó también en dos puntos al pasar de 21,9% a 23,9% entre los años extremos de la serie. Por su parte, si bien la brecha entre el estrato medio alto y el muy bajo experimentó una ligera reducción, no fue así en cuanto a la condición residencial, pues en 2012 esta problemática ambiental afectó al 34,7% de las familias más pobres y al 62,1% de las que viven en villas y asentamientos precarios. Por último, la diferencia entre el Gran Buenos Aires y el Resto Urbano Interior prácticamente no se vio alterada (19,1% y 23,7%, respectivamente, en 2012).

Aun cuando la prevalencia de basurales se incrementó entre 2010 y 2012, los datos del presente estudio indican que a lo largo del trienio examinado se produjo una ligera disminución del porcentaje de hogares próximos a fábricas e industrias contaminantes. No obstante, dado que la diferencia no resulta estadísticamente significativa, puede concluirse que, a grandes rasgos, el indicador se ha mantenido estable, en torno al 12% de los hogares y al 12,9% de la población urbana. Durante toda la serie, las categorías más afectadas fueron los hogares con niños y adolescentes (13,3%) y los pertenecientes al estrato más pobre (15,6%); en tanto que la brecha experimentó una ligera ampliación entre las unidades domésticas ubicadas en los mejores barrios de la ciudad (6,9% en 2012) y en las villas o asentamientos precarios (25%). En lo que respecta al aglomerado urbano, la diferencia también se mantuvo invariante, afectando en mayor grado a los hogares del Gran Buenos Aires (13,1%) en comparación con los del Resto Urbano Interior (9,3%).

De forma concordante con el incremento de basurales en las proximidades de las viviendas, también se produjo un aumento de la prevalencia de plagas urbanas. Al nivel del total urbano, entre 2010 y 2012 se registró un ligero incremento de los hogares afectados por esta problemática ambiental, pasando del 25,7% al 26,8% y alcanzando, en el último año de la serie, al

28,7% de la población. Los grupos sociales ya afectados por este tipo de problema fueron los que más lo sufrieron: el 30,8% de los hogares con niños, el 41% de los correspondientes al estrato muy bajo y el 62,7% de los localizados en villas y asentamientos. Por último, en lo tocante al aglomerado urbano, no solo el Resto Urbano Interior mostró niveles más elevados de déficit a lo largo de todo el período, sino que también experimentó el mayor incremento entre ambos años extremos de la serie. Así, en 2012 fue afectado por plagas urbanas el 30,7% de estos hogares, frente al 24,6% de los ubicados en el Gran Buenos Aires.

En el mismo período de análisis, al nivel del total urbano, la presencia de fuentes o espejos de agua contaminada en napas o en la superficie se mantuvo constante, sin una variación estadísticamente significativa. De este modo, en 2012 tal problemática afectó al 15,7% de los hogares urbanos y al 17,3% de las personas. Los grupos más vulnerables fueron los mismos que resultaron afectados por los indicadores precedentes: las familias con niños y adolescentes (19,6%), los hogares más pobres (25,5%, frente a tan solo el 5,6% de los del estrato socioeconómico medio alto) y los emplazados en villas y asentamientos precarios (43,7%, frente a solo el 5,3% de las familias residentes en los barrios más pudientes de la ciudad). En 2012, el porcentaje de hogares del Gran Buenos Aires afectados por este problema de contaminación (18,9%) casi duplicó a los del Resto Urbano Interior (9,8%).

Entre los factores condicionantes del acceso a barrios o vecindarios con distinto grado de presencia de viviendas dignas, servicios domiciliarios de red, infraestructura urbana básica y condiciones ambientales saludables, más allá de las variables sociodemográficas –como el sexo o la educación del jefe de hogar– u otros atributos –la presencia o no de niños, por ejemplo–, en todos los casos se detectaron dos factores decisivos: uno, el lugar que los hogares ocupan en la estratificación socioeconómica; y dos, la distribución intraurbana que esta variable asume de acuerdo con el fenómeno de la segregación residencial socioeconómica. Esto último se traduce en el hecho de que, utilizando distintos modelos predictivos, en todos los casos el peso de las variables demográficas básicas y el propio nivel socioeconómico se reducen cuando se incorpora al análisis la condición residencial. Dicho en otros términos, el área o barrio de residencia determina en el hogar el acceso a

mejores o peores condiciones de vivienda, servicios, infraestructura y atributos ambientales. A su vez, el Conurbano Bonaerense acumula un nivel de atraso en materia de urbanización que claramente condiciona las posibilidades de acceso a servicios domiciliarios de red e infraestructura urbana básica de calidad. Por último, dado que se trata de indicadores de carácter estructural cuya modificación en el tiempo resulta lenta, el peso que en el análisis de regresión asume la variable que remite al año del relevamiento es menor.

La nota de investigación 2.6 muestra que en las grandes áreas metropolitanas de la Argentina los hogares se asientan según un patrón de segregación residencial socioeconómica claramente identificable y mensurable. Esto es, más allá de que pudiera prevalecer un mayor o menor grado de desigualdad socioeconómica entre los hogares, estos no se encuentran mezclados en la ciudad, sino que tienden a asentarse próximos a otros con similares características socioeconómicas. Los aglomerados con mayores niveles de segregación residencial son el Gran Buenos Aires y el Gran Rosario, siendo este último donde el fenómeno en cuestión asume su menor intensidad.

Segregación residencial socioeconómica en cinco áreas metropolitanas de la Argentina

DAN ADASZKO

La presente nota de investigación se propone mostrar cómo en la Argentina urbana del Bicentenario no solo prevalecen importantes niveles de desigualdad económica entre los hogares localizados en diferentes aglomerados urbanos y dentro de cada uno de ellos, sino que esa desigualdad también asume una expresión espacial en la ciudad, manifestándose esto en el fenómeno de la segregación residencial socioeconómica (SRS).

A nivel general, la segregación residencial, cualquiera sea su tipo, puede definirse como un patrón de asentamiento y localización de la población en espacios diferenciados dentro de la ciudad (manzanas, vecindarios, barrios, áreas, etcétera), de acuerdo con determinados atributos de esa población (étnicos, culturales, económicos, religiosos, entre otros). El resultado de este proceso es la conformación de una ciudad segmentada espacialmente en clusters socioespaciales de población, con cierta homogeneidad interna y un mayor grado de heterogeneidad entre sí en cuanto al atributo que se esté considerando (Duncan y Duncan, 1955a, 1955b; Jarzowsky, 1995; Taeuber y Taeuber, 2009).

La segregación residencial atenta directamente contra la integración social entre los distintos segmentos, habida cuenta de que “una de sus consecuencias más negativas [...] es que sitúa a los estratos sociales en un contexto de socialización e interacción uniforme que propicia la naturalización de las diferencias en la estructura social” (Suárez *et al.*, 2009, p. 432). En esta dirección, el tipo de segregación predominante en la urbanización argentina ha sido de índole socioeconómico; y diversas investigaciones han mostrado que mediante el uso de diferentes metodologías es posible mensurar dicho fenómeno y comparar su intensidad en los distintos aglomerados del país (Bayon, 2005; Rodríguez, 2007; Groisman y Suárez, 2005, 2006, 2009; Groisman, 2008; Suárez *et al.*, 2009; Rodríguez Mérfel, 2011; Adaszko y Musante, 2011).

En las líneas que siguen se presentan los resultados de un estudio llevado a cabo durante los años 2010, 2011 y 2012, a una muestra probabilística de 12.692 hogares ubicados en 730 radios censales de 5 grandes aglomerados

del país: Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran Tucumán, utilizando como variable dependiente el ingreso per cápita familiar (IPCF) a precios constantes de 2012).⁴⁹ La nota de investigación muestra cómo una parte de la desigualdad socioeconómica entre los hogares queda subsumida en la localización intraurbana y puede ser explicada por la desigualdad entre los vecindarios de residencia.

Siendo que el fenómeno de la segregación residencial tiene un carácter estructural y se mantiene relativamente estable en el tiempo, y dado que el estudio es de tipo panel, es posible utilizar de manera conjunta las muestras de los tres años consecutivos sin necesidad de diferenciar entre ellos. A su vez, como el estudio de la SRS puede ser abordado desde múltiples aristas, en esta nota de investigación se adopta la de la homogeneidad/heterogeneidad, utilizando como subunidad socioespacial de agrupamiento de los hogares a los vecindarios⁵⁰ de residencia.⁵¹

En el marco de esta nota de investigación, para el análisis de la SRS se aplican dos procedimientos sucesivos. En primer lugar, utilizando como variable a describir el ingreso per cápita familiar (IPCF), se hace uso del Índice de segregación desarrollado por Rodríguez Vignoli (2001), que permite medir, en este caso, el porcentaje de la variabilidad total del ingreso per cápita familiar entre los hogares explicado por sus localizaciones en diferentes vecindarios.⁵² Cuanto más alto resulta dicho porcentaje, más relevancia tendrá la diferenciación socioeconómica por vecindario al interior de cada tipo de área en comparación con las restantes. Por el contrario, cuando dicho cociente (expresado en porcentaje) se aproxima a, se estará indicando que, más allá de que prevalezca una mayor o menor desigualdad socioeconómica entre los hogares, esta no se expresará en una diferenciación espacial en la ciudad. Dicho en otros términos: hogares ricos y pobres

49 Los ingresos fueron deflacionados con el IPC BS AS C (ver capítulo 1).

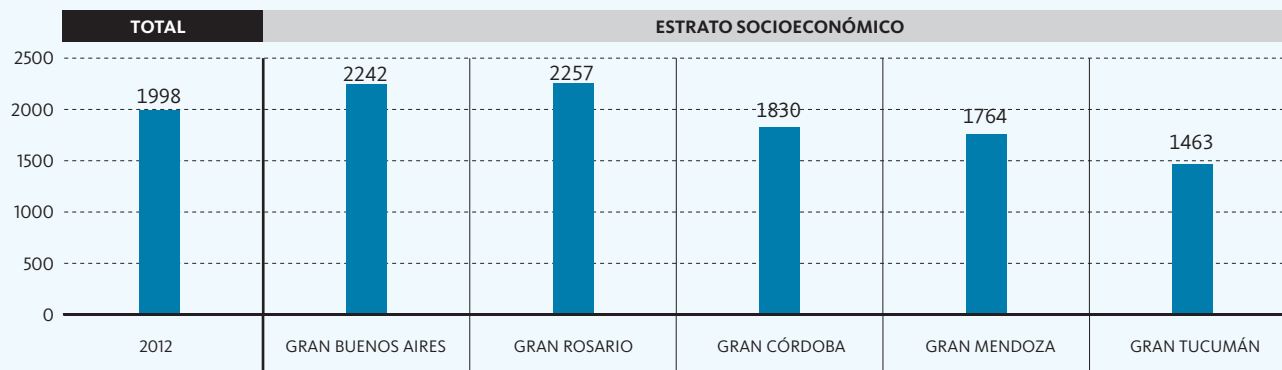
50 En nota al pie 39 se definió qué se entiende en este capítulo por el término “vecindario”.

51 Estas líneas no pretenden agotar la temática de la segregación residencial –lo que requeriría un desarrollo superior al que permite esta nota–, pero sí realizar, dentro del marco del Barómetro de la Deuda Social Argentina, una primera aproximación al tema, que puede ser profundizado en otros estudios e investigaciones como los citados unas líneas más arriba.

52 El índice de Rodríguez Vignoli es una extensión del índice de Jarzowsky (1996), pero tiene la ventaja de expresar la intensidad de la segregación en términos de porcentaje de varianza explicada.

Figura 2.6.1**INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR SEGÚN ÁREA METROPOLITANA**

Años 2010-2011-2012. Promedio anual en \$ constantes de 2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

pueden diferir mucho en cuanto a su ingreso pero, no obstante, encontrarse espacialmente mezclados.

En segundo lugar, se procede a una caracterización más profunda de la segregación. Para ello se divide al conjunto de los vecindarios de cada área metropolitana en cinco grupos de igual tamaño conforme a su ingreso per cápita familiar promedio y se comparan los coeficientes de variación al interior de cada quintil, tomando dos unidades de análisis diferentes: los hogares y los vecindarios. El cociente entre ambos coeficientes de variación (expresado en porcentaje) da cuenta ya no sólo de la intensidad de la segregación general –como se muestra a partir del primer procedimiento– sino al interior de cada quintil de vecindarios. En otras palabras, se busca conocer si los vecindarios más pobres o más ricos presentan una mayor/menor homogeneidad/heterogeneidad y segregación que los restantes quintiles de vecindarios.⁵³

Los datos de los que se sirve este estudio provienen de las ondas 2010, 2011 y 2012 de la Encuesta de la Deuda Social Argentina llevada adelante por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuyos detalles técnicos se han presentado al comienzo de este capítulo.

Como punto de partida, la figura 2.6.1 ilustra el ingreso per cápita familiar, durante 2010, 2011 y 2012, de los hogares ubicados en las cinco grandes áreas metropolitanas

bajo análisis, sin tomar en cuenta su diferenciación espacial dentro de la ciudad. Como puede apreciarse, el Gran Rosario y el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires presentaron los mayores promedios, mientras que el indicador en el Gran Tucumán resultó 35% inferior (en promedio) al de los otros dos aglomerados, y 11% inferior al del conjunto de las cinco áreas metropolitanas.⁵⁴

Recurriendo al primer procedimiento para el estudio de la segregación desde la perspectiva de la homogeneidad/heterogeneidad, los datos que presenta la figura 2.6.2 indican que en todos los casos se produce una ganancia importante al examinar la variabilidad socioeconómica entre los hogares según su localización en vecindarios separados, lo cual se registra, con intensidades diversas, en las cinco áreas metropolitanas analizadas.

Al nivel del conjunto, el 31,4% de la varianza socioeconómica entre los hogares se explica por su localización en vecindarios diferenciados. Esto implica que, prevalezca una mayor o menor desigualdad entre los hogares en cada dominio socioespacial, en todos los casos estos no se encuentran por completo mezclados, sino que tienden a aglutinarse en zonas donde habitan vecinos con similares características socioeconómicas. Este porcentaje es muy similar al del Gran Rosario, pero considerablemente

53 Dentro de los estudios sobre SRS, la utilización de coeficientes de variación es propuesta por Arriagada Luco y Rodríguez Vignoli (2003) como forma de estandarización y a efectos de tornar más comparables diferentes áreas ante la diferencia de tamaños muestrales y rangos heterogéneos de la variable dependiente.

54 Debe tomarse en consideración que el valor del Gran Buenos Aires es un promedio ponderado de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense, dos subáreas con realidades muy heterogéneas. En el distrito capital del país el IPCF es de \$ 3.332 y en el Conurbano Bonaerense, de \$ 1.884.

Figura 2.6.2**VARIANZAS DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR ENTRE HOGARES Y ENTRE VECINDARIOS E ÍNDICE DE SEGREGACIÓN DE RODRÍGUEZ VIGNOLI SEGÚN ÁREA METROPOLITANA**

	VARIANZA		ÍNDICE DE RODRÍGUEZ VIGNOLI
	ENTRE HOGARES	ENTRE VECINDARIOS	
TOTAL ÁREAS METROPOLITANAS	4.338.329	1.362.975	31,4
Gran Buenos Aires	4.905.702	1.514.295	30,9
Gran Rosario	2.801.437	869.382	31
Gran Córdoba	2.071.787	587.383	28,4
Gran Mendoza	2.349.042	479.074	20,4
Gran Tucumán	1.742.067	429.495	24,7

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

más elevado que el registrado en Gran Tucumán y en Gran Mendoza. Por su parte, en este último caso se alcanza el menor nivel de diferenciación socioeconómica por vecindario, con un índice 34,2% más bajo que el del área más afectada (Gran Rosario).⁵⁵

Como ya se indicó, el segundo paso para examinar la segregación residencial socioeconómica desde el punto de vista de la homogeneidad/heterogeneidad implica clasificar los hogares conforme al nivel socioeconómico promedio de su vecindario de residencia y comparar los coeficientes de variación del IPCF dentro de cada quintil, según dos unidades de análisis diferentes: los hogares y los vecindarios. El cociente (expresado en porcentaje) entre ambas medidas constituye un indicador del grado de segregación que impera en cada quintil de vecindario. Un cociente elevado implica que la desigualdad socioeconómica entre los hogares es capturada también por su ubicación en vecindarios diferenciados, y lo opuesto sucede cuando el cociente resulta bajo.

La primera columna de datos de la figura 2.6.3 da cuenta de la heterogeneidad socioeconómica entre los hogares y entre los vecindarios sin tomar en cuenta ninguna clasificación de estos últimos en quintiles. Como es de esperar, las conclusiones y el orden en materia de segregación son análogos a los expuestos a partir de la figura 2.6.2. Gran Rosario y Gran Buenos Aires registran los mayores cocientes, mientras que lo opuesto ocurre con Gran Mendoza y, en segundo lugar, con Gran Tucumán. Mientras que en las primeras dos áreas metropolitanas prevalece una importante diferenciación socioeconómica entre vecindarios, este fenómeno se da con menor intensidad en

⁵⁵ Se hace importante aclarar que el valor del índice del total de las cinco áreas metropolitanas no es un promedio ponderado de sus áreas componentes.

el caso del aglomerado cuyano y del Gran Tucumán. Es más, si bien Gran Córdoba registra el menor coeficiente de variación entre hogares, para Gran Mendoza se computa el menor coeficiente entre sus propios vecindarios, lo que precisamente lo ubica como el dominio con la menor segregación residencial socioeconómica.

Cuando se examina, no ya el nivel del total de cada área metropolitana, sino lo que sucede al interior de cada uno de sus quintiles de vecindarios, pueden extraerse conclusiones por demás interesantes. En primer lugar, de las cinco áreas metropolitanas, en el Gran Buenos Aires se computa el menor cociente entre los coeficientes de variación en el quintil de vecindarios más pobres. Dicho en otros términos, los vecindarios más pobres del Gran Buenos Aires registraron el menor nivel de segregación, comparados con análogo tipo de vecindarios en las cuatro áreas restantes. A su vez, para el mismo tipo de quintil, el mayor nivel de segregación se verifica en Gran Córdoba, fundamentalmente por su significativa heterogeneidad socioeconómica entre vecindarios al interior del quintil más pobre de estos.

En el extremo opuesto, Gran Rosario representa el área metropolitana con el mayor nivel de segregación en su quintil superior; esto es, sus vecindarios más aventajados en términos socioeconómicos resultan más heterogéneos entre sí con relación a la desigualdad prevaleciente entre sus hogares componentes, en comparación con lo registrado en otras áreas. Esto no implica que en el aglomerado santafesino exista una mayor desigualdad socioeconómica entre los hogares, pero sí que esa desigualdad queda en mayor grado subsumida en la diferenciación entre vecindarios respecto de los otros dominios bajo análisis.

Por otra parte, obsérvese que en Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Tucumán los menores cocientes entre coeficientes de variación se alcanzan en los respectivos terceros quintiles, y en Gran Mendoza sucede lo propio en el quintil IV, en todos los casos, vecindarios que corresponden a sectores típicos de clase media. En este sentido, en esos quintiles, más allá de que pudiera prevalecer una mayor o menor desigualdad socioeconómica entre los hogares, se verifica una muy baja heterogeneidad entre los vecindarios, lo que denota un menor grado de segregación socioespacial.

Esta nota de investigación se propuso realizar una primera aproximación, en el marco del Barómetro de la Deuda Social Argentina, a un fenómeno que es propio de toda ciudad y que ha sido producto de la urbanización capitalista, como es el caso de los grandes aglomerados ur-

Figura 2.6.3

COEFICIENTES DE VARIACIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR ENTRE HOGARES Y ENTRE VECINDARIOS SEGÚN QUINTILES Y ÁREA METROPOLITANA

Años 2010-2011-2012.

ÁREA METROPOLITANA	INDICADOR	QUINTILES DE VECINDARIOS					
		TOTAL	I	II	III	IV	V
Total áreas Metropolitanas	CV entre hogares	0,942	0,616	0,634	0,673	0,684	0,783
	CV entre vecindarios	0,531	0,146	0,107	0,136	0,170	0,251
	Cociente (en %)	56,4	23,7	16,8	20,2	24,9	32,1
Gran Buenos Aires	CV entre hogares	0,946	0,596	0,640	0,669	0,666	0,773
	CV entre vecindarios	0,529	0,109	0,082	0,100	0,086	0,209
	Cociente (en %)	55,9	18,4	12,9	15,0	12,9	27,0
Gran Rosario	CV entre hogares	0,811	0,713	0,552	0,583	0,570	0,683
	CV entre vecindarios	0,453	0,146	0,077	0,038	0,085	0,217
	Cociente (en %)	55,8	20,4	14,0	6,5	14,9	31,8
Gran Córdoba	CV entre hogares	0,798	0,645	0,634	0,617	0,581	0,665
	CV entre vecindarios	0,429	0,216	0,081	0,048	0,070	0,179
	Cociente (en %)	53,7	33,4	12,7	7,7	12,0	26,9
Gran Mendoza	CV entre hogares	0,876	0,601	0,523	0,686	0,735	0,807
	CV entre vecindarios	0,399	0,177	0,062	0,065	0,060	0,177
	Cociente (en %)	45,5	29,4	11,8	9,4	8,2	21,9
Gran Tucumán	CV entre hogares	0,947	0,640	0,662	0,710	0,686	0,828
	CV entre vecindarios	0,470	0,144	0,065	0,055	0,124	0,190
	Cociente (en %)	49,7	22,5	9,8	7,8	18,1	22,9

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

banos del país. Sin pretensión de exhaustividad y apoyándose solamente en una de las dimensiones de la segregación, se mostró que los hogares no se encuentran localizados de manera aleatoria al interior de la ciudad, sino que tienden a agruparse próximos a otros con similares características. Las razones para que esto ocurra no son el objeto de discusión de esta nota, la que tiene, antes bien, un carácter exploratorio y descriptivo.⁵⁶

56 Las teorías que explican la segregación residencial socioeconómica son varias y se apoyan en perspectivas tan diversas como la teoría de la renta urbana, de tradición clásica y marxista (Jaramillo, 2010; Topalov, 1984), hasta la teoría de las externalidades urbanísticas, de raigambre neoclásica (Richardson, 1977; Roca Cladera, 1981; Pérez Forniés, 1997) o sus reformulaciones

Se mostró que efectivamente esa diferenciación socioeconómica en la localización intraurbana constituye un fenómeno relevante y se produce en todas y en cada una de las cinco áreas metropolitanas examinadas. A su vez, que cada una de ellas también puede ser subdividida en diferentes tipos de vecindarios donde reside población con distinto nivel socioeconómico promedio, a la vez que esos mismos agrupamientos experimentan sus propios procesos de segregación socioespacial.

contemporáneas (de Mattos, 2006; Duhau y Giglia, 2004; Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Abramo, 2003, 2008), entre otras.

CAPÍTULO 3

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDUARDO DONZA

En la Argentina del Bicentenario, pese a las mejoras observadas desde la eclosión de la crisis del modelo neoliberal en 2001, la situación del escenario laboral y el cumplimiento de las leyes relacionadas con la seguridad social aún no alcanzan niveles aceptables desde la perspectiva de los derechos.

Con el fin de verificar esta situación, este capítulo evaluará la incidencia y los cambios de diversos indicadores que dan cuenta del estado del mercado laboral y de la seguridad social en el período 2010-2012. Además, se evidenciará la persistencia de la desigualdad vinculada al ámbito laboral.

Como punto de partida, se considera que el trabajo constituye algo más que un medio para satisfacer las necesidades materiales de la población: como actividad exclusivamente humana, es también un factor de desarrollo personal, socialización, reconocimiento familiar y social, participación en la generación de un producto social y constitución de identidad colectiva (Antoncich, 1993; OIT, 2004). Consecuentemente, la imposibilidad de acceder a un trabajo o hacerlo en condiciones desfavorables y no contar con protección social constituyen hechos que alteran la dignidad de las personas, que pueden afectar su salud psicofísica y que violan derechos reconocidos en instancias internacionales y nacionales.⁵⁷

⁵⁷ Para una ampliación del marco teórico y un detalle de los hechos fundantes que han fortalecido los derechos laborales, véase

Es reconocido por los investigadores, estudiosos e instituciones dedicadas a la temática laboral que aun con el significativo incremento del producto bruto interno y la elevada tasa de creación de puestos de trabajo que han tenido lugar desde 2003, la calidad del empleo ha continuado siendo una problemática ampliamente extendida con mejoras relativas cada vez menores. En este contexto, el aumento de la inflación y la desaceleración sufrida por el crecimiento económico a partir de 2007,⁵⁸ como consecuencia de la crisis interna en el sector agropecuario y el posterior impacto de la crisis económica de los países centrales, habrían acentuado esta tendencia. Más recientemente, en el bienio 2010-2011, no obstante la desaceleración en los indicadores económicos de Brasil, se observó una reactivación en la creación de empleo que estuvo acompañada por una reactivación del consumo y de la demanda interna. Posteriormente, durante 2012, la persistencia de la crisis en los países centrales afectó en parte el nivel de las exportaciones argentinas. Además de este efecto internacional, influyeron en dispar medida múltiples factores locales (incremento de precios, decremento de la inversión,

el capítulo 3 de las publicaciones de 2011 y 2012 del Barómetro de la Deuda Social (Donza, 2011 y 2012).

⁵⁸ La tasa anual acumulativa de crecimiento del producto interno bruto a precios constantes en 2003-2007 fue de 8,8%, mientras que en 2007-2010 se redujo a 5,5% (CIFRA, 2012a).

relativa pérdida de competitividad internacional, desequilibrios macroeconómicos, necesidad de disminución del gasto público, limitaciones en la importación de insumos industriales, incremento del peso de los subsidios en las cuentas fiscales, agotamiento de un proceso de utilización de capacidad ociosa sin un correlato de inversión, etcétera). Como consecuencia de ambos efectos, pero en menor medida que en la crisis 2008-2009, se observa un estancamiento de la generación de empleo⁵⁹ y de los indicadores de bienestar del mercado de trabajo (Barrera, Fernández y Manzanelli, 2013; CIFRA, 2012b; Donza, 2011; MTEySS, 2013; OIT, 2013a; OIT, 2013b; Salvia, Adaszko, Donza *et al.*, 2011a; entre otros).

Ahora bien, ¿cuál fue el impacto real de las crisis y del reajuste de la estructura productiva? ¿En qué medida esta coyuntura limita realmente las alternativas en materia de efectiva inclusión laboral y social?

Sin duda, la coyuntura económica actual plantea desafíos en el escenario laboral.⁶⁰ Desde el punto de vista estructural, aún persisten elevadas tasas de no registro en los asalariados, alto nivel de subempleo entre los cuentapropistas, un bajo nivel de retribuciones en una parte importante de los trabajadores y alta rotación entre situaciones de ocupación y desocupación. Estos son solo algunos de los indicadores que expresan la fragmentación del escenario laboral y la exclusión que padecen parte de los trabajadores sin la posibilidad de acceder a un empleo de calidad. Pese al crecimiento económico observado desde hace una década, las evidencias indican la continuidad de un sector económico informal de características estructurales que genera segmentación en el mercado de trabajo. Independientemente de la profundización de las políticas anticíclicas que intentan generar y sostener el empleo, el impacto reciente de la crisis internacional y los factores autóctonos parecen tender a consolidar esta desigualdad estructural.

Al menos una parte importante de este sector no forma parte de la economía moderna globalizada, sino de un mercado interno pobre, conformado por estratos bajos y medio bajos de la sociedad. Su principal

59 El ritmo de creación de puestos de trabajo disminuyó marcadamente en la última década. En el período 2003-2004 se crearon 1.130.000; en 2005-2006, 982.000; en 2007-2008, 390.000; en 2009-2010, 257.000; y en 2011-2012, 46.000 (Lindenboim, 2013).

60 Pueden verse en detalle los factores económicos que complejizan el desarrollo de la estructura productiva argentina en CENDA (2011) y CIFRA (2012a).

rasgo característico es el bajo nivel de productividad y de retribuciones.⁶¹ Por lo general, los trabajadores de este sector están ocupados en actividades precarias o inestables, entre cuyos efectos inmediatos cabe mencionar las deficitarias condiciones de trabajo, los bajos ingresos, la falta de protecciones sociales y las limitaciones para ejercer los derechos laborales. A futuro, en el mediano plazo, una consecuencia ineludible deviene de la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. Y en el largo plazo, en la etapa de adultos mayores, se impone el abandono económico, la imposibilidad de acceder a una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en situaciones de marginalidad social.

Con estos antecedentes, el presente capítulo analiza una serie de indicadores que examinan el acceso de la población urbana a estos derechos laborales. En particular, se evalúan los cambios ocurridos en la calidad del empleo, el estado de la situación laboral, el acceso a la seguridad social, la participación gremial y los ingresos de los trabajadores en el marco de los derechos que los asisten. De forma complementaria y por medio de técnicas de análisis multivariado, se estudian los condicionantes que estructuran y limitan las posibilidades de acceso pleno a algunos de los derechos laborales y de la seguridad social.

El análisis se apoya en los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina-Bicentenario (2010-2016),⁶² centrándose en la evolución 2010-2012. En este marco, se aborda el modo en que las características sociodemográficas, socioeconómicas y residencia-

61 Para más detalles sobre los efectos asociados al proceso histórico reciente, véanse los balances de las publicaciones de 2010 del Barómetro de la Deuda Social Argentina (Salvia, Adaszko, Donza *et al.*, 2011a; 2011b).

62 La EDSA- Bicentenario (2010-2016) se apoya en un diseño muestral probabilístico polietápico con estratificación no proporcional y selección sistemática de viviendas y hogares en cada punto muestra. La encuesta se aplicó durante los cuartos trimestres de cada año a una muestra de hogares (5.682 en 2010, 5.712 en 2011 y 5.766 en 2012) ubicados en 17 aglomerados urbanos del país: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano Bonaerense), Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Salta, Gran Tucumán y Tafí Viejo, San Rafael, Mar del Plata, Gran Paraná, Gran San Juan, Gran Resistencia, Neuquén-Plottier, Zárate, Goya, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande. Para más información, véase el anexo metodológico de esta publicación.

les de la población entrevistada afectan la situación y los derechos laborales de la población adulta de áreas urbanas de la Argentina. En todos los casos, este análisis se realiza examinando incidencias porcentuales y variaciones interanuales medidas en puntos porcentuales o promedios y variaciones relativas interanuales en porcentaje. Además, se utilizan procedimientos inferenciales multivariados para determinar los factores socioeconómicos que poseen mayor incidencia y la significancia de los cambios observados a través

del tiempo. Cabe informar que los datos estadísticos completos empleados para la elaboración de este capítulo se encuentran disponibles en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio). Por último, la siguiente figura exhibe un esquema detallado de las dimensiones, variables e indicadores objeto de análisis del presente capítulo.

FIGURA 3.1: ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

3.1 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL		
TASA DE ACTIVIDAD	Propensión de la población a participar del mercado de trabajo.	Porcentaje de personas económicamente activas respecto del total de personas.
TASA DE EMPLEO	Capacidad de la estructura productiva y del Estado para generar puestos de trabajo.	Porcentaje de personas ocupadas respecto del total de personas.
3.2 CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO		
EMPLEO PLENO DE DERECHOS	Incidencia de las relaciones laborales de calidad en el total de la población económicamente activa, considerando la realización de aportes previsionales y la continuidad laboral.	Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran que se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas profesionales y no profesionales con continuidad laboral que realizan aportes al Sistema de Seguridad Social; y patrones o empleadores con continuidad laboral que también realizan aportes a dicho sistema, respecto del total de personas activas.
EMPLEO PRECARIO	Incidencia de las relaciones laborales precarias en el total de los activos, considerando la no realización de aportes previsionales y la ausencia de continuidad laboral.	Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran que no se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas no profesionales que no realizan aportes al Sistema de Seguridad Social y/o sin continuidad laboral; y patrones o empleadores que no realizan aportes a este sistema y/o sin continuidad laboral, respecto del total de personas activas.

SUBEMPLEO INESTABLE	Incidencia de las relaciones laborales de subempleo inestable en el total de los activos, considerando la no realización de aportes previsionales, la ausencia de continuidad laboral, la baja remuneración y/o los beneficiarios de programas de empleo.	Porcentaje de personas ocupadas en trabajos temporarios de baja remuneración o changas, trabajadores sin salario y beneficiarios de planes de empleo con contraprestación laboral, respecto del total de personas activas.
DESEMPLEO ABIERTO	Incidencia de la situación de desocupación (búsqueda activa) en la población económicamente activa.	Porcentaje de personas que no trabajan pero que en el momento del relevamiento buscan activamente trabajo y están en disponibilidad de trabajar, respecto del total de personas activas.
DESEMPLEO EN PERÍODO AMPLIADO / RIESGO DE DESEMPLEO	Riesgo a la desocupación, expresado por la intensidad de la desocupación en el último año en la población económicamente activa.	Porcentaje de personas que se encontraron desocupadas, por lo menos una vez durante los últimos 12 meses, por razones ajenas a la propia voluntad, respecto del total de personas activas.
DEMANDA DE MÁS HORAS DE TRABAJO	Incidencia de la demanda de mayor carga horaria de trabajo que realizan los trabajadores.	Porcentaje de trabajadores que expresan que desean trabajar más horas respecto del total de trabajadores.
DESEO DE CAMBIAR DE TRABAJO	Medida subjetiva de la percepción de insatisfacción con el empleo.	Porcentaje de trabajadores que expresan que desean cambiar de trabajo respecto del total de trabajadores con empleo pleno o precario.
3.3 PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL		
TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	Incidencia de las situaciones laborales no registradas en el total de los ocupados, considerando la realización o no de aportes previsionales.	Porcentaje de trabajadores en relación de dependencia a los que no se les realizan los aportes jubilatorios y trabajadores cuentapropistas, patronos o empleadores que no realizan los pagos al Sistema de Seguridad Social, respecto del total de trabajadores en relación de dependencia, cuentapropistas, patronos y empleadores.
ASALARIADO SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	Incidencia de las relaciones laborales no registradas en el total de los asalariados, considerando la realización o no de aportes previsionales.	Porcentaje de trabajadores en relación de dependencia a los que no se les realizan los aportes jubilatorios, respecto del total de trabajadores en relación de dependencia.
NO ASALARIADO SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	Incidencia de las situaciones laborales no registradas en el total de los no asalariados, considerando la realización o no de aportes previsionales.	Porcentaje de trabajadores cuentapropistas, patronos o empleadores que no realizan los pagos al Sistema de Seguridad Social, respecto del total de trabajadores cuentapropistas, patronos y empleadores.

TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD	Incidencia de la falta de cobertura de salud nominativa en el total de los ocupados, considerando si poseen o no obra social, mutual o prepaga.	Porcentaje de trabajadores que no cuentan con cobertura de obra social, mutual o prepaga, respecto del total de trabajadores.
ASALARIADOS SIN AFILIACIÓN SINDICAL	Incidencia de la falta de participación activa de los asalariados en organizaciones que los representan, considerando si se encuentran o no afiliados a sindicatos.	Porcentaje de asalariados que no se encuentran afiliados a sindicatos, respecto del total de asalariados.
3.4 INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO		
INGRESOS LABORALES MENSUALES	Total de ingreso laboral corriente percibido durante el último mes por la población económicamente activa ocupada.	Media de ingreso laboral mensual* correspondiente a todos los trabajos del último mes, en pesos de diciembre de 2012**. * Se estimaron ingresos laborales totales cuando los mismos no fueron declarados. ** Los ingresos se deflacionaron a través de dos índices: IPC-GBA INDEC e IPC-7 Provincias CENDA/IPC.
REMUNERACIÓN LABORAL HORARIA	Total de ingreso laboral por hora percibido durante el último mes por la población económicamente activa ocupada (normalizado por la cantidad de horas trabajadas durante el mes de referencia).	Media de ingreso laboral horario* correspondiente a todos los trabajos del último mes, en pesos de diciembre de 2012**. * Se estimaron las horas trabajadas durante el último mes cuando las mismas no fueron declaradas. ** Los ingresos se deflacionaron a través de dos índices: IPC- GBA INDEC e IPC-7 Provincias CENDA/IPC.

3.1 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL

En este apartado se analiza la evolución de la participación de la población en el mercado de trabajo y el nivel de éxito en lograr una inserción laboral. Además, se determinan, por medio de un modelo de regresión logística,⁶³ las categorías sociales que incidieron en que

63 Se considera adecuada la aplicación de la técnica de regresión logística por cuanto en la misma los modelos teóricos considerados están compuestos por una variable dependiente dicotómica y en variables independientes, pudiendo estar definidas en escala métrica, ordinal o nominal (Aldrich y Forrest, 1984). La opción

la población urbana de 18 años y más, en el trienio 2010-2012, participara del mercado de trabajo.

De los datos de la EDSA-Bicentenario se desprende que entre 2010 y 2012 la proporción de población urbana de 18 años y más que constituye población económicamente activa (PEA) fue estable. En 2012 representó a 66,1% de la población. En el mismo período, la proporción de ocupados se incrementó levemente al pasar de 58,8% a 60% de la población relevada.

La propensión a participar del mercado laboral no depende de cuestiones azarosas, sino de múltiples as-

utilizada es la de presentación de un modelo definido (Method: Enter), es decir que no fue solicitado el agregado o desagregado de variables con un criterio estadístico determinado.

pectos individuales y contextuales. Bajo esta premisa, y con el fin de determinar el peso que una serie de factores tienen en la determinación de la participación en actividades económicas, se aplicó un modelo de regresión logística.

La realización de este análisis inferencial permite identificar y poner de manifiesto el carácter multidimensional de la participación en el mercado de trabajo, así como también evidenciar desigualdades estructurales y si los cambios observados en el período 2010-2012 son significativos.

Para esto se construyó una variable dependiente que busca ser explicada por medio de determinados factores que generan en la población de 18 años y más el paso de una situación de inactividad económica (0) a una de actividad económica (1).

A partir de esto, se aplicó un análisis de regresión logística que posee las siguientes variables independientes: características del individuo (sexo, grupo de edad, nivel educativo y posición en el hogar); características del hogar (estrato socioeconómico y condición residencial); el aglomerado urbano de residencia y el año del relevamiento. En la figura 3.1.2 se presentan los principales resultados alcanzados por el modelo.

La calidad de predicción lograda por los modelos se mide por medio del porcentaje de coincidencia entre el valor observado y el valor esperado por la predicción. El potencial de determinación se evalúa por medio de los R cuadrados de Cox y Snell, y de Nagelkerke. La determinación de las categorías sociales que tienen más relevancia se realiza utilizando el coeficiente B y su significancia. Por último, la chance de poseer uno u otro atributo al interior de las categorías sociales se efectúa por medio de la razón de momio o “Exp (B)” (razón de probabilidades u odds ratio), que expresa la desigualdad relativa cuando hay un cambio unitario en el valor de una variable independiente manteniendo constante el efecto de las restantes.⁶⁴

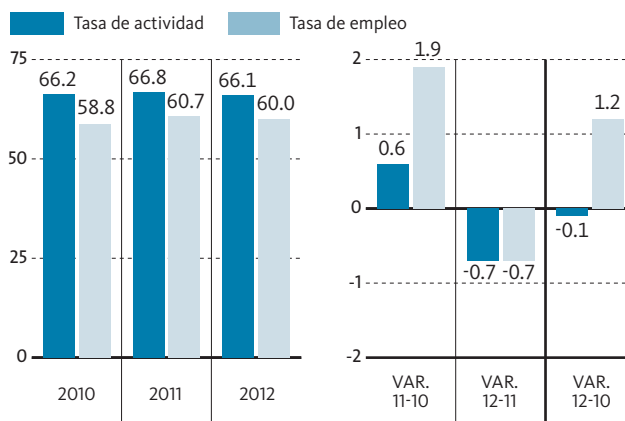
El modelo analizado alcanzó una buena capacidad de predicción (75,2%). En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se destaca el

64 En las variables de nivel de medición métrico, el Exp (B) expresa cuánto aumenta la razón de probabilidad de cambiar de categoría en la variable dependiente cuando se le agrega una unidad en la variable independiente. En forma similar, para las variables no métricas expresa la misma probabilidad pero con respecto al paso del atributo de comparación al atributo estudiado. Los atributos de comparación utilizados se identifican en las figuras correspondientes.

Figura 3.1.1

NIVEL DE ACTIVIDAD Y POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

hecho de que manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, la edad, el sexo, la posición en el hogar y el estrato socioeconómico son los principales factores explicativos de la participación de la población en el mercado de trabajo. En mucha menor medida inciden el aglomerado de residencia y el nivel educativo, resultando la condición residencial y el año factores estadísticamente no significativos en presencia de las otras variables. Esto último confirma la estabilidad de la tasa de actividad en el trienio 2010-2012.

En comparación con los adultos, los jóvenes presentaron 4% menos de probabilidades de encontrarse económicamente activos; mientras que, por el contrario, los adultos mayores registraron 92% de menores chances de hacerlo que los adultos. Esta brecha expresa claramente la amplia extensión de los derechos de jubilación y pensión contributivas en la población de 65 años y más.

Del mismo modo, en comparación con el cociente de probabilidades de los varones, tal como era de prever por la distribución de roles socialmente aceptada, ser mujer redujo (en 72%) las chances de participar en el mercado de trabajo. En igual sentido operan características como no ser jefe de hogar (71%) o el estrato socioeconómico del hogar de residencia. La propensión a encontrarse activos se ve disminuida conforme se desciende en la estratificación social. Así, en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los de estrato socioeconómico medio bajo registran 50% menos de posibilidad; los de estrato bajo,

Figura 3.1.2

RAZONES DE PROBABILIDAD DE SER ACTIVO

Años 2010-2011-2012. Población de 18 años y más.
Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B))

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I	
	ACTIVO	
	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO		
SEXO		
Varón (c)		
Mujer	-1,282***	0,28
GRUPOS DE EDAD		
18 a 34 años	-0,043	0,96
35 a 59 años (c)		
60 y más	-2,589***	0,08
NIVEL EDUCATIVO		
Con secundario completo (c)		
Sin secundario completo	-0,173***	0,84
JEFATURA DEL HOGAR		
Jefe (c)		
No jefe	-1,227***	0,29
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR		
ESTRATO SOCIOECONÓMICO		
Medio alto (c)		
Medio bajo	-0,688***	0,50
Bajo	-1,019***	0,36
Muy bajo	-1,400***	0,25
CONDICIÓN RESIDENCIAL		
Trazado urbano de NSE medio (c)		
Trazado urbano de NSE bajo	-0,021	0,98
Villa o asentamiento precario	0,015	1,01
TIPO DE AGLOMERADO		
CABA (c)		
Conurbano Bonaerense	0,221***	1,25
Otras grandes áreas Metropolitanas	-0,173**	0,84
Resto urbano	-0,059	0,94
AÑO		
2010 (c)		
2011	0,069	1,07
2012	0,030	1,03
Constante	3,586***	36,07
R cuadrado de Cox y Snell	0,292	
R cuadrado de Nagelkerke	0,405	
Porcentaje global de aciertos	75,2	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

64% menos; y los de estrato muy bajo, 75% menos. En todos los casos, se trata de factores que intervienen de manera significativa incluso controlando el fuerte efecto que presenta la edad.

Por último, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de encontrarse económicamente activo aumentan 25% para los habitantes del Conurbano Bonaerense, disminuyendo 16%

entre los que viven en otras grandes áreas metropolitanas. En igual sentido, no poseer el secundario completo, a la vez que se mantiene constante el resto de los factores, disminuye 16% las chances de participar en el mercado laboral en comparación con las personas de 18 años y más que completaron el secundario.

3.2 CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

A partir de 2010 se estabilizaron las profundas mejoras observadas en la situación del mercado de trabajo luego del sostenido crecimiento económico del período 2003-2007. En 2012, el ritmo de crecimiento de la Argentina, recuperado en 2010 y 2011, con posterioridad a la crisis financiera internacional de 2009, descendió abruptamente.⁶⁵

Como es sabido, las características del ciclo económico (expansión o retracción) inciden marcadamente en el “éxito” de las estrategias familiares relativas al ámbito laboral. De modo que, en períodos sin hechos excepcionales y relativamente cortos, en los cuales las variaciones demográficas son muy acotadas, los principales cambios en el mercado de trabajo se originan por cuestiones más estructurales o pertenecientes al desarrollo de las políticas públicas (Beccaria y López, 1996; Cortés y Marshall, 1999; Marshall, 1996; OIT, 2013 b; Salvia y Donza, 2001; Salvia, Donza, Philipp *et al.*, 2008).

A partir de este marco de análisis, y considerando los derechos relativos al trabajo, es posible identificar las distintas partes de la población que realizan sus actividades en empleos plenos de derechos (donde se observa un cumplimiento de la normativa vigente), en empleos precarios (en los que no se cumple la normativa pero se posee cierta continuidad), en subempleos inestables (de escasa remuneración y/o alta inestabilidad) o, directamente, con imposibilidad de conseguir un trabajo. Utilizando esta clasificación se analizan las condiciones del mercado de trabajo entre los años 2010 y 2012 del área urbana relevada por la EDSA-Bicentenario.

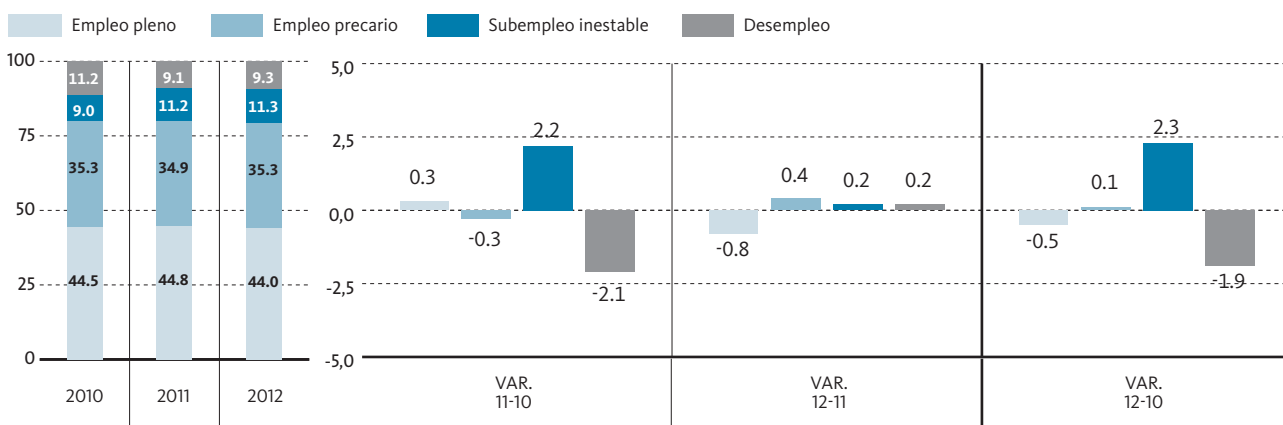
En la totalidad del período, se puede definir el bienio 2010-2011 como primera etapa, en la cual la calidad

65 En OIT (2013b) se marca el abrupto descenso del ritmo de crecimiento de la Argentina: de 9,2% en 2010, pasó de “8,9% en 2011 a casi el 2% en 2012”, medido en variaciones porcentuales anuales del PIB.

Figura 3.2.1

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

de las oportunidades laborales mejoraron muy levemente: el porcentaje de trabajadores desocupados pasó de 11,2% a 9,1% del total de activos; no obstante, el porcentaje de trabajadores en subempleos inestables se incrementó de 9% a 11,2% (figura 3.2.1). Esto ocurrió como consecuencia de la desaceleración en el ritmo de la creación de empleo de calidad asociada a la desaceleración del crecimiento económico. Posteriormente, la persistencia de las medidas contracíclicas implementadas por el Gobierno Nacional y las relativas mejoras en la economía solo pudieron mantener estables las condiciones del escenario laboral. En 2012, 9,3% de los activos no consiguieron trabajo, el empleo de calidad fue de 44% del total de activos y la proporción de empleos precarios e inestables, 51,5% del total de ocupados. En definitiva, la mejora observada en 2010-2012 parece haberse debido exclusivamente a una generación de empleo de baja calidad (figura 3.2.1).

EMPLEO PLENO DE DERECHOS

Existen diversas desigualdades y persistentes inequidades al observar la evolución específica del empleo pleno de derechos según diferentes atributos. Al respecto, en el año 2012 solo 36,1% de las mujeres activas pudieron obtener un empleo pleno, mientras que sí lo obtuvieron 49,8% de los varones activos. Con respecto a la edad, en el mismo año, las posibilidades de acceder

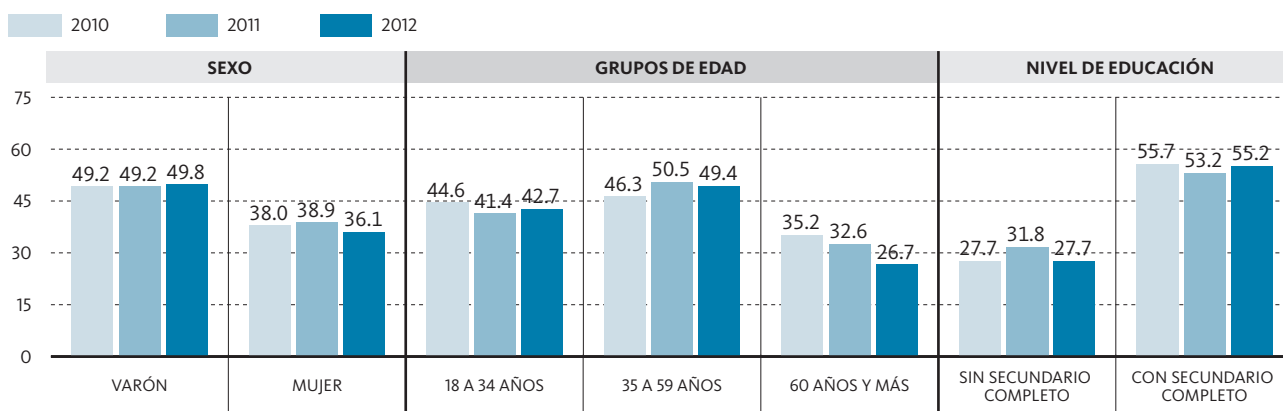
a un empleo pleno fueron menores para los jóvenes que para los adultos: 42,7% de los jóvenes activos y 49,4% de los adultos activos presentan empleo pleno, mientras apenas 26,7% de los adultos mayores activos acceden a empleos de calidad. Además, en 2012 siguieron verificándose las diferencias de acceso al empleo pleno según el nivel educativo alcanzado: solo 27,7% de los activos con estudios secundarios incompletos alcanzan este empleo de calidad, en tanto que lo consigue el 55,2% de aquellos con secundario completo (figura 3.2.2).

En 2012, las inequidades más marcadas se observan entre los integrantes de los diversos estratos socioeconómicos: apenas el 12,4% de los activos del estrato social muy bajo (25% inferior) pudo obtener un empleo pleno, mientras que lo obtuvo el 71,8% de los pertenecientes al estrato medio alto (25% superior). Para el mismo año, la incidencia del empleo de calidad es diferencial según la condición residencial. Solo el 20,6% de los activos residentes en villas o asentamientos precarios alcanza un empleo pleno de derechos, mientras que lo consigue el 32,8% de los activos de las zonas con trazado urbano de nivel social bajo y el 59,1% de aquellos residentes en el trazado urbano de nivel social medio. Por su parte, el aglomerado urbano de residencia no genera diferencias importantes. En 2012, en el Gran Buenos Aires, 43,1% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno, mientras que en el resto del área urbana relevada por la EDSA esta incidencia es de 45,6% (figura 3.2.3).

Figura 3.2.2

EMPLEO PLENO DE DERECHOS SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.

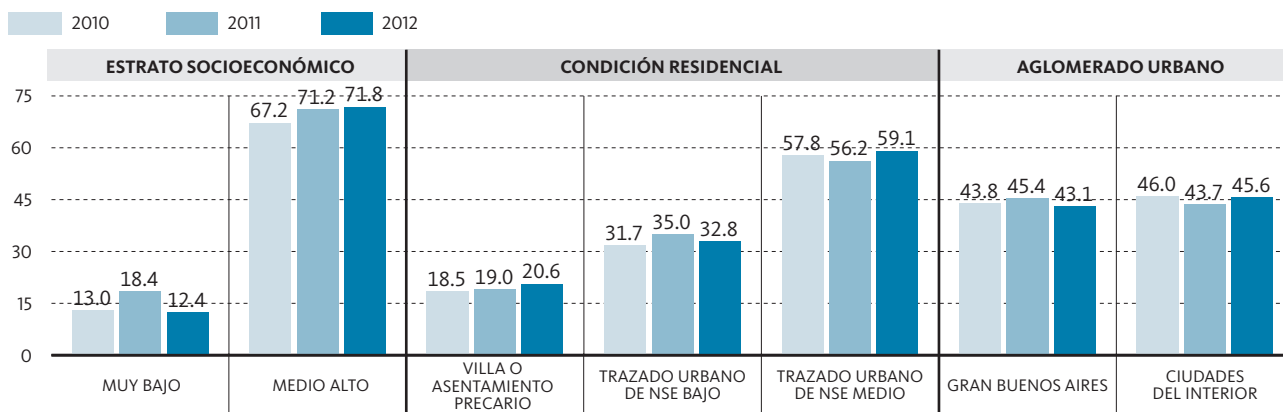


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.2.3

EMPLEO PLENO DE DERECHOS SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

EMPLEO PRECARIO

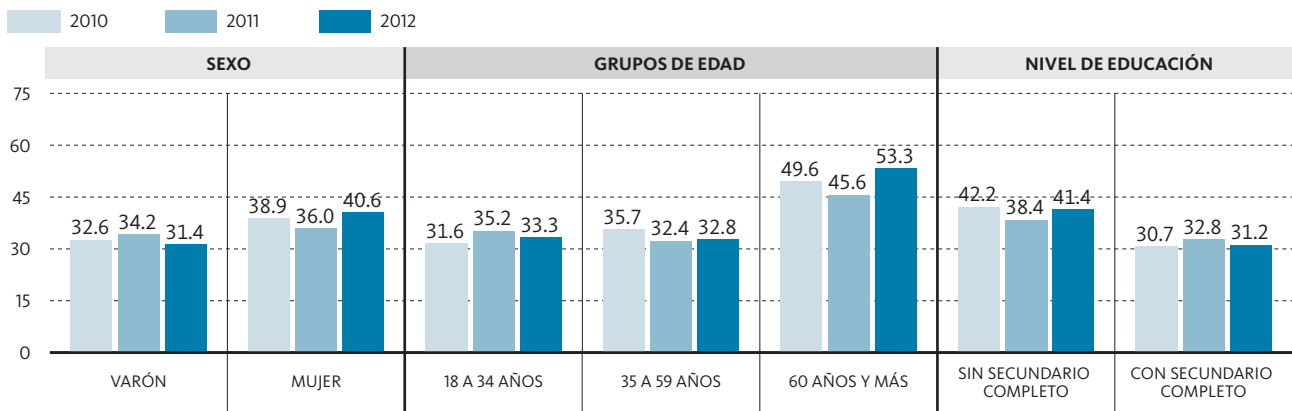
El empleo precario (que incluye a ocupados que desarrollan actividades con continuidad laboral, tienen niveles de ingresos superiores a los de subsistencia pero no participan en el Sistema de Seguridad Social) se mantuvo relativamente constante en el período 2010-2012, representando en el último año al 35,3% de la PEA (figura 3.2.1). En 2012, su incidencia entre activos de diferente sexo es dispar y adversa para las mujeres: 40,6% de las mujeres activas poseían empleo precario,

mientras que el porcentaje para los varones activos fue de 31,4%. Con respecto a la edad, en el último año del trienio analizado, la posibilidad de acceder a un empleo precario fue relativamente similar para los jóvenes (33,3% de los activos) que para los adultos (32,8% de los activos), en tanto que el 53,3% de los adultos mayores activos accedió a empleos precarios. Además, aunque en todo el período bajo análisis se observa una leve tendencia a la disminución, específicamente en 2012 aún persisten diferencias de la incidencia del empleo precario según el nivel educativo alcanzado: 41,4% de los activos que no llegan a culminar los estudios secun-

Figura 3.2.4

EMPLEO PRECARIO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.

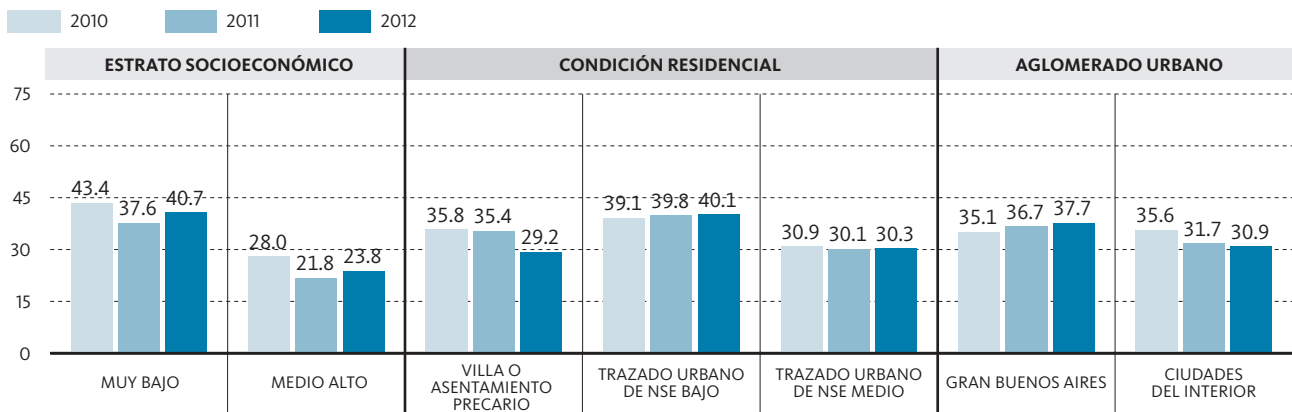


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.2.3

EMPLEO PRECARIO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

darios presentaron este tipo de empleo, mientras que solo lo tenía el 31,2% de los que alcanzaron a completar el secundario (figura 3.2.4).

Las heterogeneidades observadas según el estrato socioeconómico se reflejaron así: el 40,7% de los activos del estrato socioeconómico muy bajo sólo consiguió trabajos precarios, mientras que este valor se redujo al 23,8% de los activos del estrato medio alto. Para el mismo año, la incidencia del empleo precario es dispar según la condición residencial: se ocupó en un empleo de este tipo el 29,2% de los activos residentes en villas

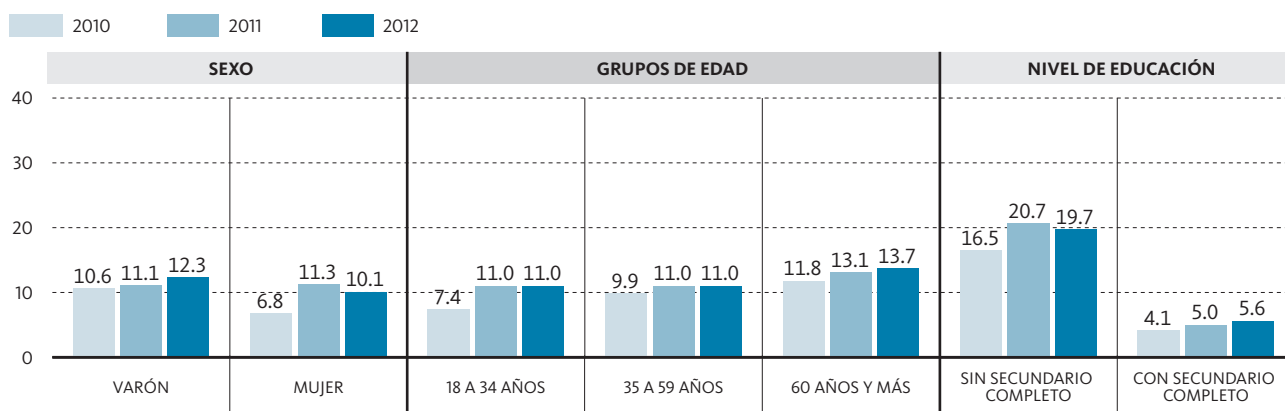
o asentamientos precarios; el 40,1% de los activos de las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo; y el 30,3% de los de nivel socioeconómico medio. Por otra parte, el aglomerado urbano de residencia muestra diferencias leves. En 2012, en el Gran Buenos Aires, el 37,7% de la población económicamente activa tenía un empleo precario, mientras que en el resto del área urbana lo tenía el 30,9% (figura 3.2.5).

Considerando el período 2010-2012, entre los activos del estrato socioeconómico muy bajo se observa una leve disminución del empleo precario (43,4% a 40,7%),

Figura 3.2.6

SUBEMPLEO INESTABLE SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

aunque esta variación se ve compensada por un incremento relativo del subempleo inestable. Ambos hechos evidencian la implementación de políticas públicas contracíclicas que sostuvieron el nivel de ocupación a expensas de la calidad del empleo. En el mismo período se registra una disminución del peso relativo del empleo precario entre los integrantes del estrato medio alto (28% a 23,8%). En este grupo, la baja del empleo precario se compensa con el incremento relativo del empleo pleno de derechos (figuras 3.2.3 y 3.5.5).

SUBEMPLEO INESTABLE

La población económicamente activa en situación de subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o bien siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación) se incrementó levemente por la desaceleración de la creación de empleo de calidad. Entre 2010 y 2012, pasó de 9% a 11,3% de la PEA; se acentuó en 2011 como consecuencia de las políticas anticíclicas que convirtieron a desocupados en beneficiarios de planes de empleo, alcanzando el 11,2% de la PEA (figura 3.2.1). Este indicador, para 2012, presenta diferencia según el sexo: 10,1% de las mujeres activas y 12,3% de los varones activos desarrollaban actividades en subempleos inestables. Con respecto a la edad en el mismo año, las posibilidades de poseer un subempleo inestable son similares para los jóvenes que para los adultos: 11% de

los jóvenes activos y 11% de los adultos activos, mientras el 13,7% de los adultos mayores activos se ocupó en un subempleo inestable. Además, en 2012 siguieron observándose amplias diferencias en la incidencia del subempleo inestable según el nivel educativo alcanzado: el 19,7% de los activos con estudios secundarios incompletos alcanzó ocupaciones de baja calidad, mientras que solo se tuvo que resignar a ellas el 5,6% de los que tenían el secundario completo (figura 3.2.6).

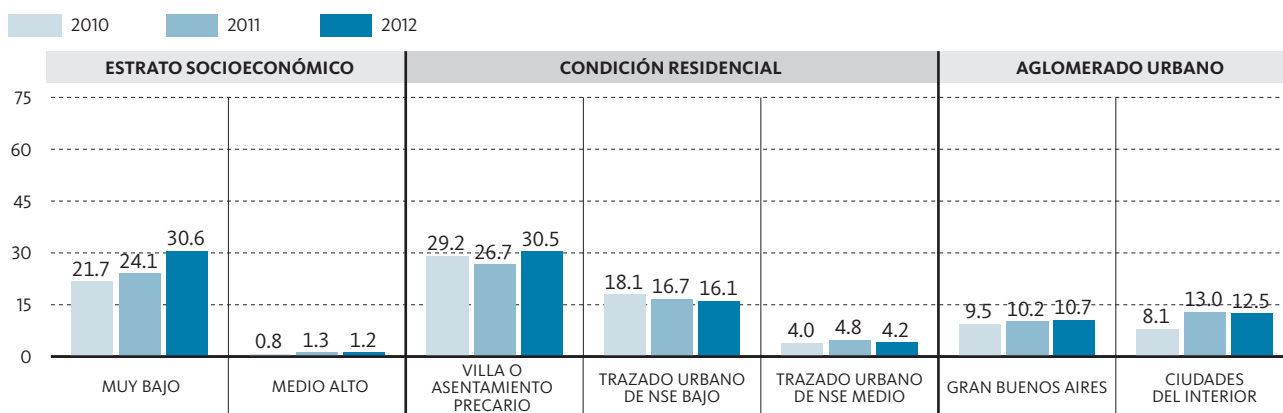
Considerando el período 2010-2012, la incidencia del subempleo inestable se incrementó entre las mujeres (6,8% a 10,1%), los jóvenes (7,4% a 11%) y los trabajadores sin secundario completo (16,5% a 19,7%). Se puede suponer que gran parte de estas variaciones son consecuencia de la pérdida de la calidad del empleo evidenciada (figura 3.2.6).

Asimismo, en 2012, las inequidades más marcadas respecto el subempleo inestable se observan entre los integrantes de los diversos estratos socioeconómicos. Así, entre los activos del estrato socioeconómico muy bajo, el 30,6% se hallaba en un subempleo inestable, mientras que sólo se tuvo que resignar a esta baja calidad de empleo el 1,2% de los activos del estrato medio alto. Para el mismo año, la incidencia del subempleo inestable es diferencial según la condición residencial: 30,5% de los activos residentes en villas o asentamientos precarios; 16,1% de los activos de las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo; y sólo 4,2% de los de nivel socioeconómico medio se ocuparon en subempleos inestables. Por otra parte, el aglomerado urbano de residen-

Figura 3.2.7

SUBEMPLEO INESTABLE SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

cia no representa diferencias importantes. En 2012, el 10,7% de la población económicamente activa del Gran Buenos Aires tenía subempleo inestable, mientras que en el resto de las áreas urbanas relevadas por la EDSA esta incidencia bajó a 12,5% (figura 3.2.7).

Durante el trienio 2010-2012, el subempleo inestable crece entre los activos del estrato socioeconómico muy bajo (21,7% a 30,6%). Este incremento se equilibra con el decremento relativo del empleo precario y genera una nueva distribución de la calidad del empleo en este grupo poblacional. De este modo se consolida la fuerte presencia de actividades de baja calidad y de beneficiarios de programas sociales en este estrato socioeconómico (figuras 3.2.5 y 3.2.7).

DESEMPLEO ABIERTO

A pesar de la crisis internacional, la desaceleración del crecimiento económico y la disminución del ritmo de generación de empleos, los esfuerzos para sostener puestos de trabajo y las políticas activas de empleo generaron un decremento de la tasa de desocupación. Entre 2010 y 2012, el porcentaje de activos en esta situación pasó de 11,2% a 9,3% (figura 3.2.1). La incidencia de la desocupación resulta dispar según el sexo: el 13,2% de las mujeres activas se encontró desocupada en 2012, mientras que solo se identificó en esta situación el 6,5% de los varones activos. En el mismo año,

los jóvenes registran –al igual que en la mayoría de los escenarios laborales mundiales– tendencia a una mayor desocupación que los adultos: 13% y 6,7%, respectivamente. Es posible que la relativamente baja desocupación de los adultos mayores (6,4%) se haya debido a que la gran mayoría poseía protección del Sistema de Seguridad Social y algunos buscaron trabajo sólo si consideraron que tenían posibilidades de conseguirlo. Además, en 2012 se observan limitadas diferencias de la incidencia de la desocupación según el nivel educativo alcanzado, hallándose desocupado el 11,2% de los activos que no llegaron a culminar los estudios secundarios y el 8% de los que sí los habían culminado. Esto corrobora que las inequidades respecto los niveles educativos se dan en la calidad del trabajo y no en el “tener o no tener trabajo” (figura 3.2.8).

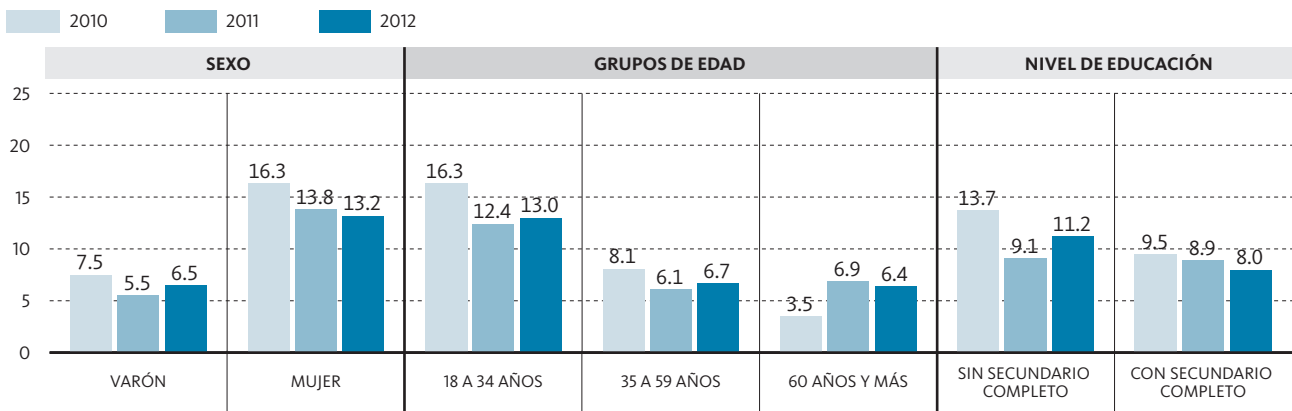
Considerando el período 2010-2012, se observa una leve disminución de la desocupación de los jóvenes (16,3% a 13%). Esta variación se acompaña con un incremento del porcentaje de jóvenes con subempleo inestable (que incluye beneficiarios de políticas públicas). Ambos efectos pueden haberse debido a la implementación de políticas de empleo focalizadas que facilitan la inserción laboral, así como también a la realización de prácticas de búsqueda de trabajo, la terminalidad educativa y la formación profesional (figura 3.2.6 y 3.2.8).⁶⁶

66 Una de las principales políticas de empleo juveniles desarrolladas a nivel nacional es el Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Este

Figura 3.2.8

DESEMPLEO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.

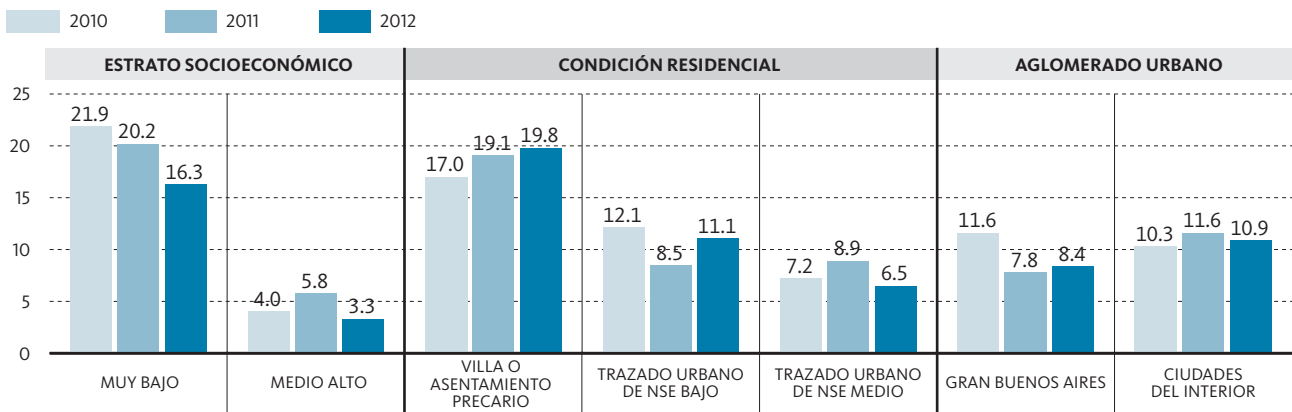


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.2.9

DESEMPLEO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Por otro lado, en 2012 continuaron observándose heterogeneidades según el estrato socioeconómico: el 16,3% de los activos del estrato muy bajo se encontraba desocupado, mientras que este valor se redujo a

3,3% en el caso de los pertenecientes al estrato medio alto. He aquí el modo en que se expresaron las diversas posibilidades de acceso a los medios que permiten obtener un mayor nivel de empleabilidad y las disímiles eficiencias de las redes sociales para obtener un trabajo. Para el mismo año, la incidencia de la desocupación es muy marcada entre los activos residentes en villas o asentamientos precarios (19,8%), mientras que entre los activos de las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico medio solo es de 11,1% y 6,5%, respectivamente. Se evidencia así

programa focaliza sus acciones en jóvenes de 18 a 24 años de edad, con residencia permanente en el país, que no hayan completado el nivel primario y/o secundario de escolaridad y se encuentren desempleados. Es importante tener presente que los jóvenes que superan el límite máximo de edad durante su participación en el programa pueden continuar realizando actividades hasta un plazo de 24 meses contados desde el momento de su incorporación.

la segregación residencial que sufren los habitantes de las zonas más carenciadas, a quienes en muchos casos se los descalifica para un empleo por declarar su domicilio en una villa o asentamiento precario. Asimismo, en 2012, el 8,4% de la población económicamente activa del Gran Buenos Aires se encontraba desocupada, en tanto que en el resto de las áreas urbanas relevadas este valor fue de 10,9% (figura 3.2.9).

A lo largo del trienio se advierte una mengua de la desocupación entre los integrantes del estrato socioeconómico muy bajo (21,9% a 16,3%), probablemente producto de la efectividad de las políticas de empleo que, a pesar de incrementar la incidencia del subempleo inestable, protegen a la población del estrato muy bajo de la ausencia total de trabajo e ingresos (figura 3.2.7 y 3.2.9).

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL EMPLEO PLENO Y EN LA DESOCUPACIÓN

Ante la desigualdad e inequidad observadas en diversos indicadores del mercado de trabajo, corresponde preguntarse cuáles son los condicionantes sociodemográficos y socioeconómicos que inciden en que algunos trabajadores puedan acceder a empleos plenos y otros no puedan acceder a un empleo. Con este fin, se ajustaron dos modelos multivariados de regresión logística que permiten, en primer lugar, identificar y poner de manifiesto el carácter multidimensional de las posibilidades tanto de acceder a un empleo de calidad como de obtener un trabajo, y en segundo lugar, evidenciar desigualdades estructurales y si los cambios observados en el trienio bajo análisis son significativos.

En el primero de los modelos considerados se estudia la probabilidad de tener un empleo con acceso a los derechos laborales; y en el segundo, la de estar desocupado. Los indicadores constituyen la variable dependiente que busca ser explicada mediante determinados factores que generarían el paso de una situación (0) a otra (1).

Luego, se aplicó un análisis de regresión logística con las siguientes variables independientes: características del individuo (sexo, grupo de edad, nivel educativo y posición en el hogar); características del hogar (estrato socioeconómico y condición residencial); el aglomera-

Figura 3.2.10

RAZONES DE PROBABILIDAD DE OCUPARSE EN UN EMPLEO PLENO O SER DESOCUPADO SEGÚN CATEGORÍAS SOCIALES SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. Población económicamente activa de 18 años y más. Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B))

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II	
	EMPLEO PLENO		DESOCUPADO	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO				
SEXO				
Varón (c)				
Mujer	-0,520***	0,59	0,582***	1,79
GRUPOS DE EDAD				
18 a 34 años	-0,089*	0,91	0,448***	1,57
35 a 59 años (c)				
60 y más	-0,974***	0,38	0,024	1,02
NIVEL EDUCATIVO				
Con secundario completo (c)				
Sin secundario completo	-0,085	0,92	-0,141*	0,87
JEFATURA DEL HOGAR				
Jefe (c)				
No jefe	-0,512***	0,60	1,150***	3,16
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR				
ESTRATO SOCIOECONÓMICO				
Medio alto (c)				
Medio bajo	-1,010***	0,36	1,096***	2,99
Bajo	-1,740***	0,18	1,517***	4,56
Muy bajo	-2,733***	0,06	2,014***	7,49
CONDICIÓN RESIDENCIAL				
Trazado urbano de NSE medio (c)				
Urbanización formal de NSE bajo	-0,091	0,91	-0,073	0,93
Villa o asentamiento precario	0,241	1,27	0,168	1,18
TIPO DE AGLOMERADO				
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)				
Conurbano Bonaerense	0,165**	1,18	-0,709***	0,49
Grandes Áreas Urbanas	0,164**	1,18	-0,429***	0,65
Resto Urbano	0,279***	1,32	-0,432***	0,65
AÑO				
2010 (c)				
2011	0,055	1,06	-0,325***	0,72
2012	0,050	1,05	-0,273***	0,76
CONSTANTE				
	1,347***	3,85	-3,771***	0,02
R cuadrado de Cox y Snell				
	0,199		0,078	
R cuadrado de Nagelkerke				
	0,267		0,164	
Porcentaje global de aciertos				
	69,6		70,1	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

rado urbano de residencia y el año del relevamiento. La figura 3.2.10 presenta los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

El modelo I (referido al empleo pleno) alcanzó una buena capacidad de predicción (69,6%). En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, sobresale el hecho de que, manteniendo controla-

dos el resto de los factores intervinientes, el estrato socioeconómico, la edad, el sexo y la posición en el hogar son los principales factores explicativos de la participación de la población en el mercado de trabajo. En mucha menor medida inciden el aglomerado de residencia y la condición residencial, en tanto que el nivel educativo y el año resultan factores estadísticamente no significativos en presencia de las otras variables. Esto último confirma las limitaciones de la estructura productiva para generar empleo de calidad en el período 2010-2012.

En la población económicamente activa, la propensión a encontrarse en un empleo pleno disminuye marcadamente conforme se desciende en la estratificación social: en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los integrantes del estrato socioeconómico muy bajo registran 94% menos de posibilidades de hallarse en dicho empleo; los del estrato bajo, 82% menos; y los del medio bajo, 64% menos. Los jóvenes resultan con 9% menos de probabilidades que los adultos de encontrarse ocupados en un empleo con plenos derechos; mientras que los adultos mayores registran 62% de menores chances que los adultos.

Del mismo modo, respecto del cociente de probabilidades de los varones, ser mujer reduce las chances de obtener un empleo pleno en un 41%. En igual sentido y valor operan características como no ser jefe de hogar (40% menos). En todos los casos, se trata de factores que intervienen de manera significativa incluso controlando el fuerte efecto que presenta la edad.

Por último, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de insertarse en un empleo pleno aumentan un 18% para los habitantes del Conurbano Bonaerense y de otras grandes áreas metropolitanas, y se incrementan un 32% entre los residentes del Resto Urbano del país, siempre controlando el efecto de los otros atributos.

El modelo II, que analiza la incidencia de las categorías sociales en la imposibilidad de lograr una inserción laboral, también alcanzó una buena capacidad de predicción (70,1%). En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se observa que, manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, la posición en el hogar, el estrato socioeconómico y el sexo son los principales factores explicativos de la imposibilidad de inserción de los trabajadores en un empleo.

En mucha menor medida inciden la edad y el aglomerado de residencia, en tanto que la condición residencial y el nivel educativo resultan factores estadísticamente no significativos en presencia de las otras variables. La aparición del año de referencia como factor significativo indica la variación, en este caso a la baja, de la desocupación en el período 2010-2012.

Comparados con los jefes de hogar, los integrantes no jefes del mismo presentaron 216% mayores probabilidades de encontrarse desocupados. Esta brecha expresa claramente la necesidad de ingresos de los hogares y cómo los jefes de hogar deben insertarse casi obligatoriamente en alguna actividad laboral rentada, más allá de la calidad del empleo o de las preferencias personales.

En la población económicamente activa, los datos evidencian que la propensión a encontrarse desocupado aumenta intensamente conforme se desciende en la estratificación social. Así, respecto de quienes forman parte del estrato medio alto, quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo registran 7,5 veces más posibilidades de hallarse sin trabajo; los del estrato bajo, 4,6 veces más; y los del estrato medio bajo, el triple. Por su parte, las mujeres presentan 79% más probabilidades que los varones de encontrarse desocupadas.

Del mismo modo, en comparación con el cociente de probabilidades de los ocupados adultos, ser joven aumenta las chances de hallarse desocupado en el 57%, en tanto que los adultos mayores registran un nivel similar al de los adultos (de solo 3% más).

Por último, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, controlando el efecto de los otros atributos, las probabilidades de estar desocupado disminuyeron 51% para los habitantes del Conurbano Bonaerense y 35% para los residentes en otras grandes áreas metropolitanas o en el Resto Urbano.

DESEMPLEO EN PERÍODO AMPLIADO

Como se sabe, la alta rotación de los trabajadores entre períodos de ocupación y desocupación es una particularidad de los mercados de trabajo precarizados. Esto genera entradas y salidas de los empleos, lo cual implica una disminución de los ingresos anuales, una falta de consolidación de la relación laboral, una ruptura del ciclo de capacitación, la pérdida de la

antigüedad laboral y, de existir, la discontinuidad de aportes al Sistema de Seguridad Social.

Las altas tasas de rotación se presentan generalmente en las ocupaciones precarias y en los subempleos inestables, donde los niveles de especialización de mano de obra son menores, las relaciones laborales son más vulnerables y los costos de salida para el empleador son inferiores o nulos. Debido a estas particularidades, los trabajadores más expuestos a elevadas tasas de rotación son los de los estratos sociales más bajos, configurándose un círculo vicioso que dificulta la salida de su situación, tanto particular como familiar.

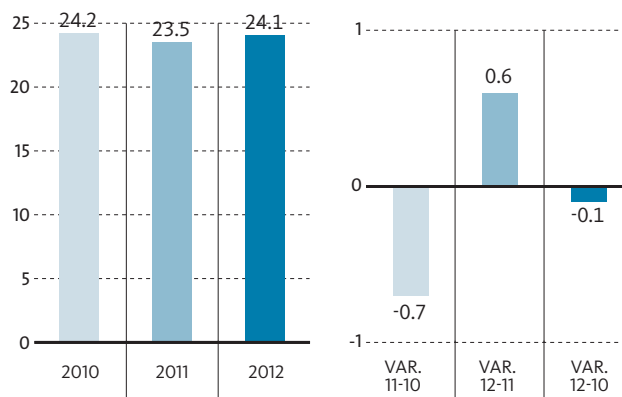
Un indicador de estas situaciones de alta rotación laboral fue el porcentaje de personas activas que se encontraron desocupadas por lo menos una vez en el último año (ampliando el período de referencia usualmente utilizado de una semana o de un mes). A este respecto, se observa que en el lapso comprendido entre los años 2010 y 2011 disminuye levemente el desempleo en período ampliado: la proporción de activos que estuvieron por lo menos una vez desocupados en estos años pasó de 24,2% a 23,5%. Posteriormente, en 2012, efecto tanto de la crisis internacional como de la desaceleración en el crecimiento y la menor generación de empleo, este indicador se ubica en el 24,1% de la población económicamente activa, confirmando que el ritmo de creación de puestos de trabajo y el tiempo promedio de duración de las relaciones laborales aún no alcanzó un nivel aceptable de calidad del empleo (figura 3.2.11).

En 2012 se observa una igualdad en el desempleo en período ampliado según el sexo de los trabajadores: el 24,1% de las mujeres activas tanto como de los varones activos estuvieron desocupados por lo menos una vez en el último año. Con respecto a la edad, en el mismo año, las posibilidades de presentar desempleo en período ampliado son mayores para los jóvenes que para los adultos: el 30,1% de los jóvenes activos y el 20,8% de los adultos activos se hallaban en esta situación, mientras que solo el 16,3% de los adultos mayores activos presentó alta rotación. Además, en 2012 siguieron observándose amplias diferencias en el nivel de rotación laboral según el nivel educativo alcanzado: el 31,3% de los activos que no llegó a culminar los estudios secundarios y el 19,2% de los que tenían el secundario completo se declararon como desocupados por lo menos una vez en el último año (figura 3.2.12).

Figura 3.2.11

DESEMPLEO EN PERÍODO AMPLIADO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012.
En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



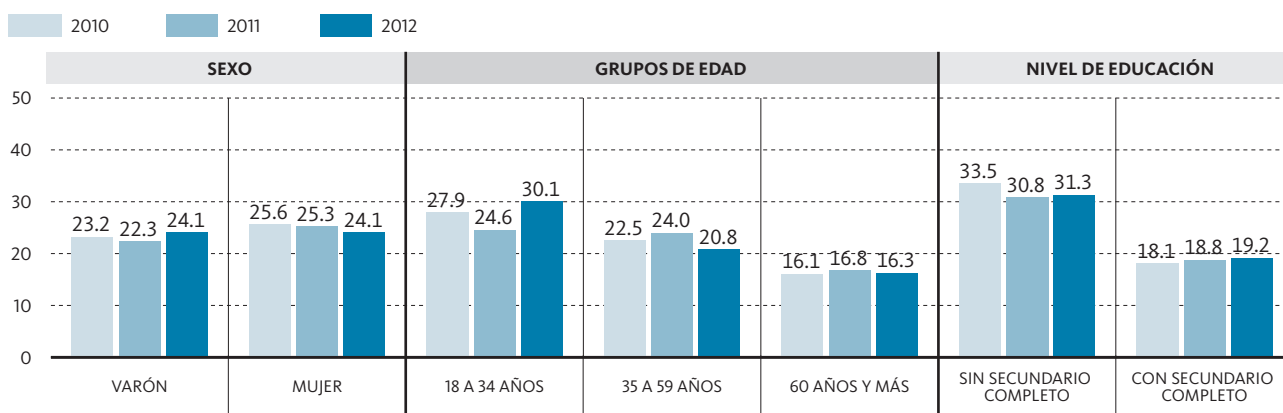
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Asimismo, en 2012 las inequidades más marcadas respecto el desempleo en período ampliado se observan entre los integrantes de los diversos estratos sociales: el 37,7% de los activos del estrato socioeconómico muy bajo estuvo desocupado por lo menos una vez en el último año, mientras que solo estuvo en esta situación laboral el 11,1% de los pertenecientes al estrato medio alto. Para el mismo año, el indicador de la inestabilidad laboral es diferencial según la condición residencial: se encontraron por lo menos una vez desocupados en el último año el 32,3% de los activos residentes en villas o asentamientos precarios; el 30% de los activos de las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo; y solo el 16,6% de los de trazado urbano de nivel socioeconómico medio. Por otra parte, el aglomerado urbano de residencia generó las siguientes diferencias en 2012: en tanto en el Gran Buenos Aires el 21,8% de la población económicamente activa fue identificada como desempleada en período ampliado, en el resto de las áreas urbanas relevadas por la EDSA lo fue el 28,4%. En todo el trienio, por lo demás, disminuyó el porcentaje de activos residentes en villas o asentamientos precarios (42,5% a 32,3%), así como el de personas del estrato socioeconómico muy bajo que experimentaron episodios de desempleo en el último año (43,3% a 37,7%), posiblemente a consecuencia del aumento de las políticas de empleo que generaron y sostuvieron programas de empleo directos (figura 3.2.13).

Figura 3.2.12

DESEMPLEO EN PERÍODO AMPLIADO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.

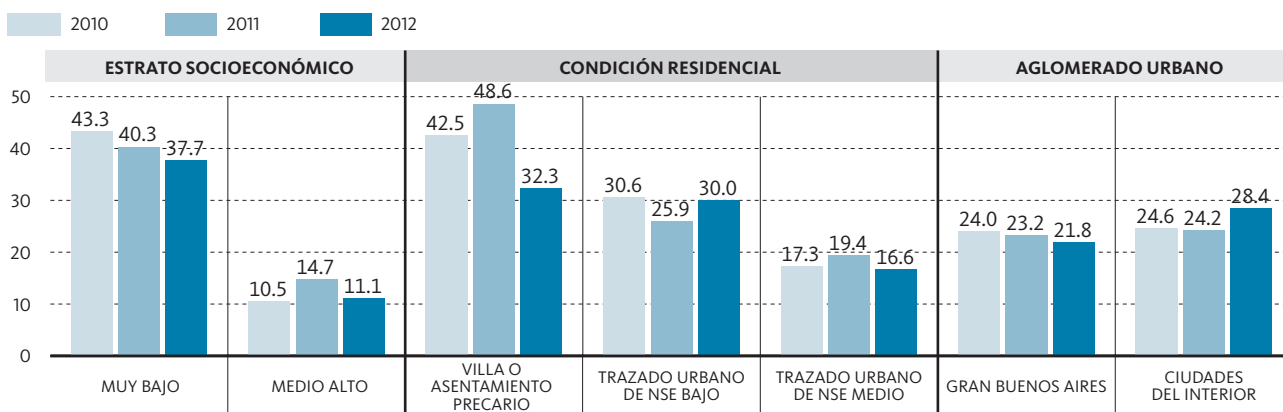


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.2.13

DESEMPLEO EN PERÍODO AMPLIADO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

DEMANDA DE MÁS HORAS DE TRABAJO

En las sociedades modernas e industriales, la cantidad de horas trabajadas por los ocupados es otro de los indicadores de la calidad del mercado de trabajo. En líneas generales, se supone virtuoso que las tareas laborales insuman entre 35 y 45 horas semanales, definido esto a partir de una jornada socialmente aceptable. Respecto del exceso de horas trabajadas, más de 45 horas semanales se considera sobreempleo

horario, y expresa la necesidad del trabajador de aumentar sus ingresos, las obligaciones de cumplir con cierto nivel de producción independientemente del nivel de remuneración o, directamente, la autoexplotación de los trabajadores cuentapropistas con retribuciones inferiores a los niveles de subsistencia. De forma complementaria, los subocupados horarios que trabajan menos de 35 horas semanales pueden tener intenciones de trabajar más horas para incrementar su ingreso mensual; y debido a ello se constituyen en trabajadores demandantes de más horas de actividad.

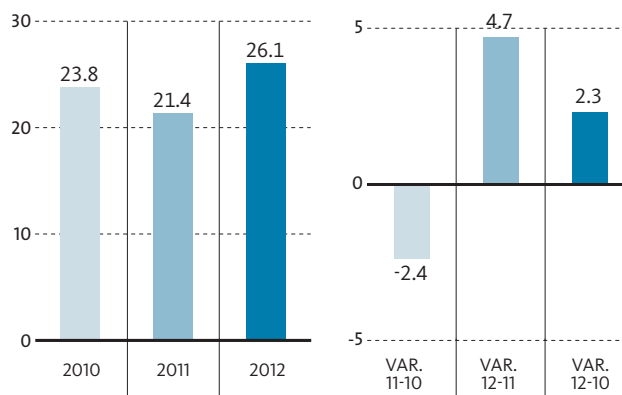
Con estos antecedentes, e independientemente de las horas trabajadas, la EDSA-Bicentenario consultó a los trabajadores ocupados sobre el deseo de trabajar más horas. Se observa así que entre 2010 y 2011 disminuye levemente el porcentaje de trabajadores que demandaron trabajar más horas, el cual pasó de 23,8% a 21,4%, en consonancia con otras mejoras del mercado de trabajo. En 2012, posiblemente a causa de la disminución de horas trabajadas, del incremento de precios y de otros factores que condicionaron el empleo y el ingreso laboral, ese porcentaje se incrementa hasta alcanzar el 26,1% del total de ocupados (figura 3.2.14).

Con respecto a este indicador, también se observa una mayor precarización del escenario laboral femenino. En 2012, el 27,9% de las mujeres ocupadas demandó trabajar más horas, mientras que solo lo hizo el 24,9% de los varones ocupados. En el mismo año, los jóvenes encuestados presentaron un mayor nivel de demanda de trabajar más horas que los adultos: 32,9% y 24,3%, respectivamente; indicador que en los adultos mayores se redujo a 10,6%. La limitación en la demanda de horas laborales puede deberse a que gran parte de los activos de 60 años y más poseen ingresos por jubilación o pensión. Por fin, el 31,8% de los ocupados con estudios secundarios incompletos deseó trabajar más horas en el año 2012, mientras que entre los que completaron el secundario, esta demanda registró el 22,4% en el mismo año (figura 3.2.15).

Figura 3.2.14

TRABAJADORES QUE DEMANDAN TRABAJAR MÁS HORAS

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.



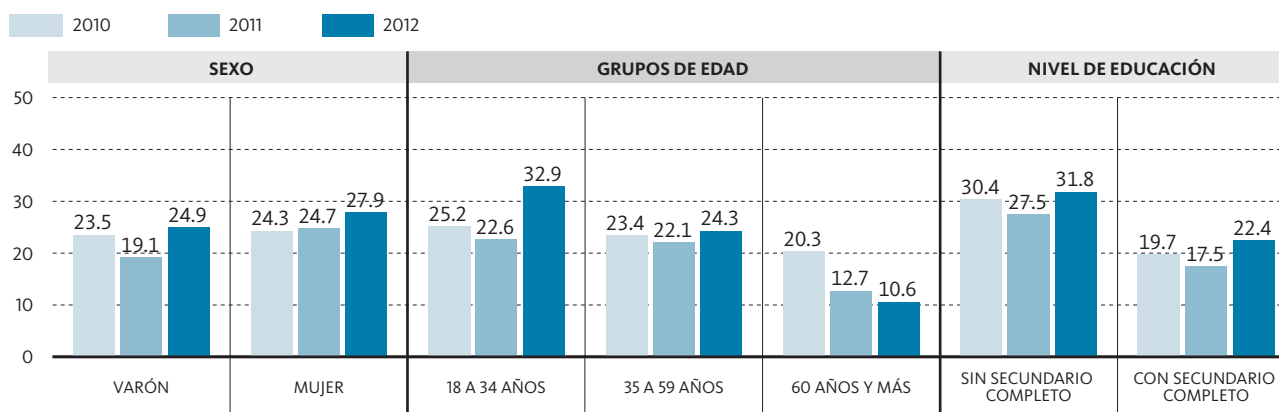
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Respecto de las heterogeneidades que se observan según el estrato socioeconómico, en tanto que el 38,1% de los ocupados del estrato muy bajo demandó más horas de trabajo, este valor se redujo a 20,8% entre los ocupados del estrato medio alto. Para el mismo año, similar diferencia se puede apreciar según la condición residencial. Así, el 27,6% de los ocupados residentes en villas o asentamientos precarios deseó trabajar más horas, mientras que entre los activos de las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico

Figura 3.2.15

TRABAJADORES QUE DEMANDAN TRABAJAR MÁS HORAS SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.

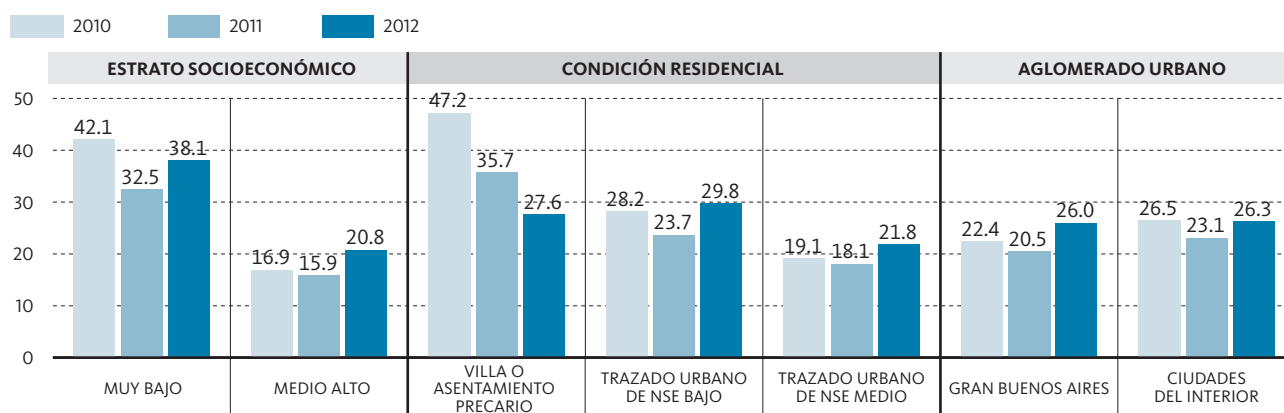


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.2.16

TRABAJADORES QUE DEMANDAN TRABAJAR MÁS HORAS SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

bajo y medio reconocieron tal demanda en un 29,8% y un 21,8%, respectivamente. El análisis del aglomerado urbano de residencia no genera diferencias. Así, en 2012, mientras que el 26% de los ocupados del Gran Buenos Aires demandó más horas de trabajo, en el resto de las áreas urbanas relevadas por la EDSA lo hizo el 26,3% (figura 3.2.16).

Considerando el período 2010-2012, se observa un decremento en la demanda de más horas de trabajo entre los ocupados del estrato socioeconómico muy bajo (42,1% a 38,1%) y entre los residentes en villas o asentamientos precarios (47,2% a 27,6%), posiblemente a raíz de los programas estatales de transferencias de recursos, generadores de un ingreso periódico que puede llegar a limitar la búsqueda de un incremento de horas de trabajo (figura 3.2.16).

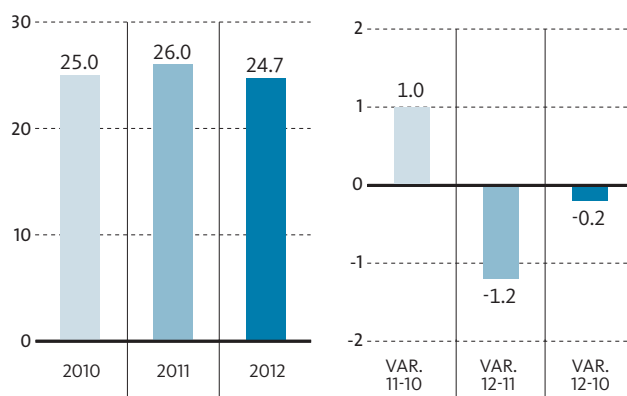
DESEO DE CAMBIAR DE TRABAJO

En un contexto laboral donde el trabajador percibe que sus capacidades y habilidades no están siendo suficientemente reconocidas, desarrolladas o valoradas por su empleador o ambiente económico, puede surgir la falta de satisfacción con el trabajo. Esta situación genera efectos tanto de orden productivo como social. No solo se ve afectada la actividad laboral, sino que también se deterioran la calidad de vida y las relaciones con el entorno de quienes pade-

Figura 3.2.17

TRABAJADORES QUE DESEAN CAMBIAR DE TRABAJO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores con empleo pleno o precario de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

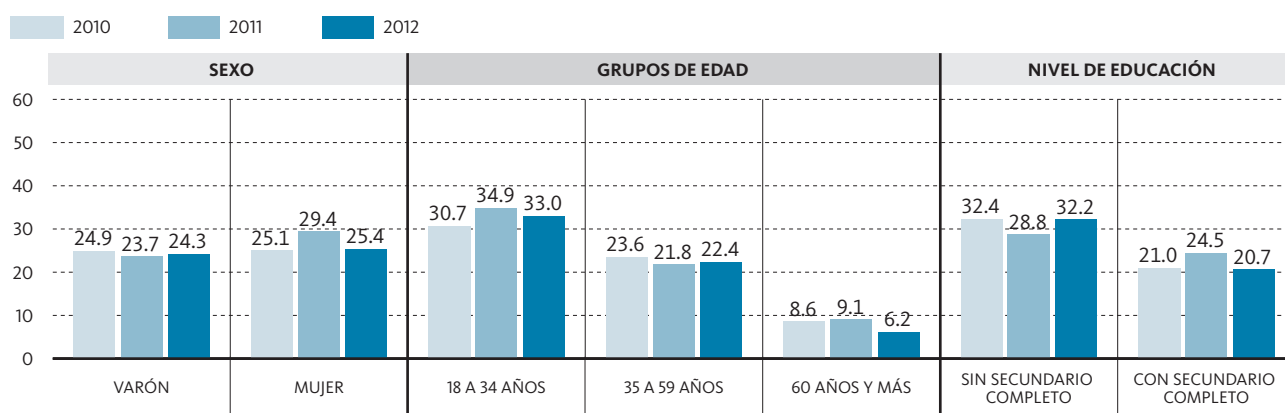
cen el problema. Por otra parte, se sabe que un factor generador de esta situación son las propias condiciones económicas e institucionales de contexto.

Ahora bien, medir el problema no es sencillo. De ahí que el deseo expreso de cambiar de trabajo constituya un modo fiable de aproximarse a una de las consecuencias asociadas a la situación de insatisfacción. De este modo, se resumen instancias como la disconformidad con la calidad y el medio ambiente de trabajo; la insatisfacción por la retribución; la falta de

Figura 3.2.18

TRABAJADORES QUE DESEAN CAMBIAR DE TRABAJO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores con empleo pleno o precario de 18 años y más.

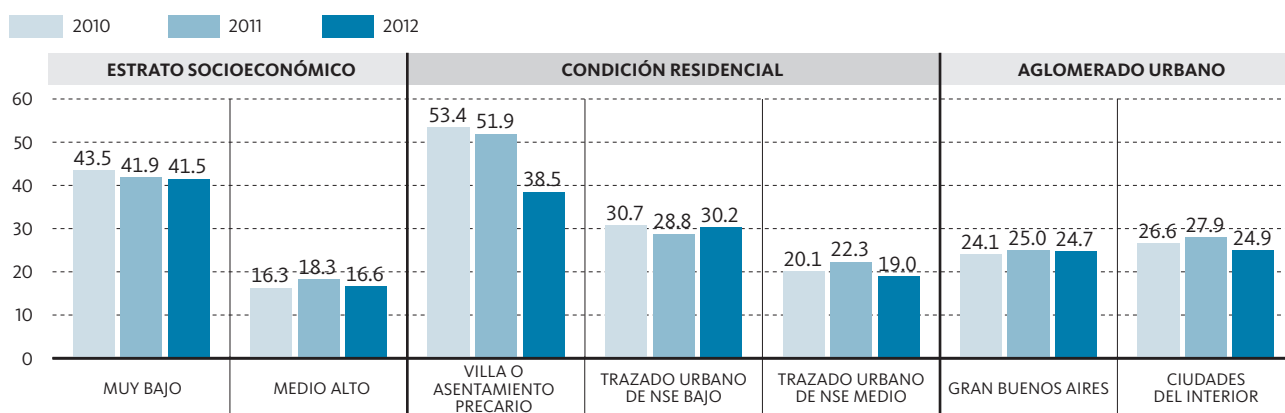


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.2.19

TRABAJADORES QUE DESEAN CAMBIAR DE TRABAJO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores con empleo pleno o precario de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

interés por la actividad realizada; la relación con los superiores, pares y/o subordinados; las posibilidades de ascenso y capacitaciones; entre otras cuestiones propias del ámbito laboral.

Al respecto, en el período 2010-2012 se observan valores similares en el porcentaje de trabajadores que desean cambiar de trabajo. A lo largo del bienio 2010-2011, este deseo de cambio se incrementa de 25% a 26%, y en 2012 disminuye levemente a 24,7%. El deseo sostenido de cambiar de trabajo expresa que, pese al incremento del empleo, los puestos de trabajo de calidad

generados no son suficientes y que los trabajadores se ven obligados a aceptar empleos precarios que posteriormente quieren abandonar (figura 3.2.17).

En 2012 se puede apreciar una leve desigualdad en la intención de cambiar de trabajo según el sexo de los trabajadores: el 25,4% de las mujeres ocupadas en empleos plenos o precarios expresó este deseo, mientras que solo tuvo esta intención el 24,3% de los varones ocupados en empleos de esa calidad. Para el mismo año, dicho anhelo disminuye al aumentar la edad de los trabajadores con empleo pleno

o precario, expresando tal deseo el 33% de los jóvenes, el 22,4% de los adultos y el 6,2% de los adultos mayores. Además, en 2012 se verifican diferencias en la intención de cambiar de trabajo según el nivel educativo alcanzado, manifestándose positivamente en tal sentido, entre los ocupados en empleos plenos o precarios, el 32,2% de los que no llegaron a culminar los estudios secundarios y el 20,7% de los que sí los completaron (figura 3.2.18).

También en 2012, el 41,5% de los ocupados en empleos plenos o precarios del estrato socioeconómico muy bajo expresó su intención de cambiar de trabajo, mientras que solo tuvo este deseo el 16,6% de los trabajadores pertenecientes al estrato medio alto. Para el mismo año, se observa una diferencia en esta intención según la zona de residencia. Así, manifestó querer cambiar de trabajo el 38,5% de los ocupados en empleos plenos o precarios residentes en villas o asentamientos precarios, el 30,2% de aquellos que residían en las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo, y el 19% de los de nivel socioeconómico medio. Por otra parte, el aglomerado urbano de residencia no genera diferencias importantes al analizar la encuesta: en 2012, en el Gran Buenos Aires expresó este deseo de cambio el 24,7% de los ocupados en empleos plenos o precarios y el 24,9% de los mismos pero residentes en el resto de las áreas urbanas (figura 3.2.19).

3.3 PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Son derechos reconocidos, a nivel internacional y nacional, la participación de los trabajadores en el Sistema de Seguridad Social y la libertad de afiliación y de participación en organizaciones sindicales y gremiales.⁶⁷ En la Argentina, a excepción de los

67 A nivel internacional pueden citarse como fuentes de estos derechos dos de los ocho convenios fundamentales de la OIT: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), así como el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Y a nivel nacional, la Constitución Argentina de 1994 (artículo 14 bis), la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 25.877 de 2004 (referida al Régimen Laboral) y, recientemente, la Ley 26.678 de 2011 (ratificación del convenio 102 de la OIT, relativo a la Norma mínima de la Seguridad Social).

cambios generados recientemente por la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la expansión de las pensiones no contributivas, gran parte del Sistema de Seguridad Social posee un esquema contributivo y, por lo tanto, se ejecuta por medio de la actividad de los trabajadores en el mercado de trabajo registrado.

Debido a esto, es importante evaluar la evolución del porcentaje de trabajadores sin aportes al Sistema de Seguridad Social desde la perspectiva de la integralidad de los derechos fundamentales que son vulnerados al no contar el trabajador con la registración correspondiente. En caso de que estos trabajadores sean asalariados, la responsabilidad de la registración corresponde al empleador. La existencia de relaciones laborales no registradas convierte al empleador en un evasor de las contribuciones patronales y genera en el trabajador una pérdida de los derechos de obra social, cobertura ante accidentes, asignaciones familiares y futura jubilación. Por otro lado, la no declaración de las actividades de los trabajadores cuentapropistas y el no pago de las obligaciones genera una evasión impositiva, la pérdida de la cobertura de obra social y la falta de aportes solidarios para una jubilación futura.

APORTES AL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

La participación de los trabajadores asalariados en el Sistema de Seguridad Social les asegura obra social, ingreso por jubilación en la etapa pasiva, posibilidad de cobro del salario familiar contributivo según el nivel de ingresos, prestaciones por desempleo, indemnización por invalidez o muerte, cobertura automática ante las consecuencias de riesgos laborales, entre otros beneficios. Además, la seguridad social promueve la igualdad por medio de la adopción de medidas tales como garantizar que todas las mujeres que tienen hijos gocen de los mismos derechos en el mercado de trabajo.

En el caso de los trabajadores cuentapropistas y patrones o empleadores, la participación en la seguridad social también conlleva ventajas que trascienden el cumplimiento de obligaciones contributivas. No participar los excluye de la asistencia de una obra social y de una futura jubilación.

TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

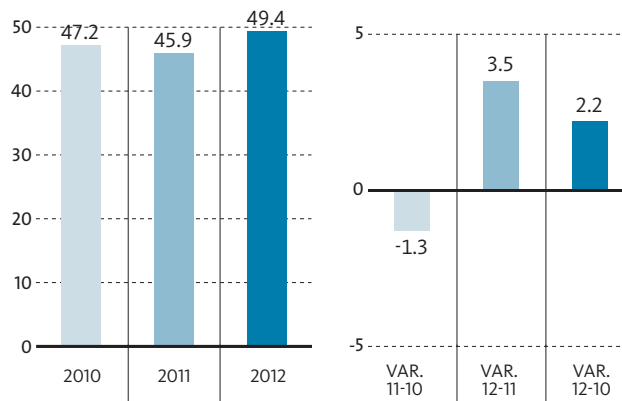
Entre los años 2010 y 2011, el porcentaje de trabajadores (incluyendo tanto asalariados como cuentapropistas, patrones o empleadores) a los que no se les realizaron o no realizaron aportes al Sistema de Seguridad Social, disminuye de 47,2% a 45,9% del total de ocupados. En 2012, la desaceleración en la creación de empleo, principalmente de empleo de calidad, produce un incremento de este indicador, el cual alcanza el 49,4% (figura 3.3.1).

Con respecto a la participación en el Sistema de Seguridad Social, también se observa una mayor precarización del escenario laboral femenino. En 2012, el 56,1% de las mujeres ocupadas no contaba con aportes, mientras que solo estaba en esta situación el 44,8% de los varones. En el mismo año, los jóvenes presentan un nivel mayor (49%) de no participación en el sistema que los adultos (45,7%), mientras que el 65,9% de los adultos mayores ocupados no participa del Sistema de Seguridad Social. Además, en 2012, el 67,6% de los ocupados que no llegaron a culminar los estudios secundarios no contaba con aportes al Sistema de Seguridad Social, en tanto que solo el 37,3% de los que sí habían completado el secundario se hallaron en esa situación adversa (figura 3.3.2).

Figura 3.3.1

TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.



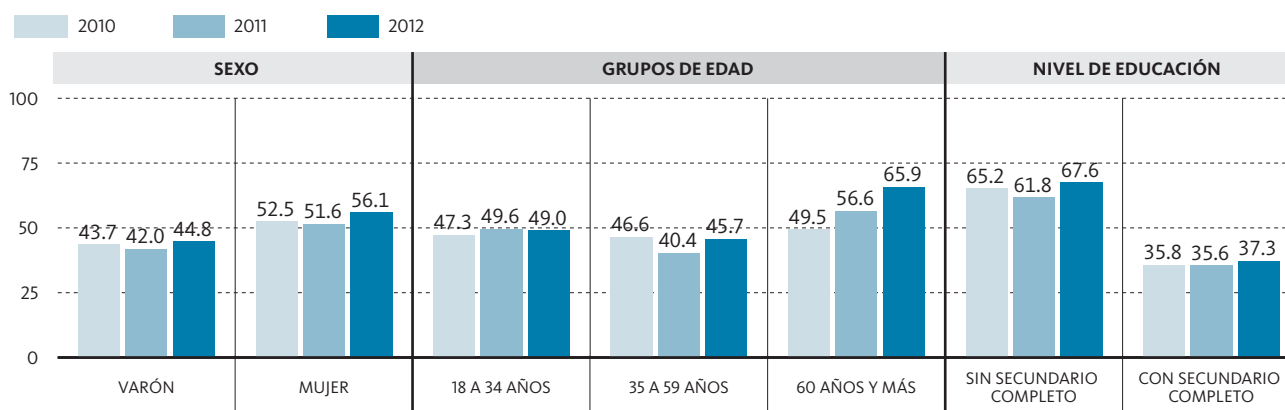
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

En lo que respecta a las heterogeneidades en los aportes a la seguridad social según el estrato socioeconómico, se advierte que el 83,7% de los ocupados del estrato socioeconómico muy bajo no cuenta con aportes, mientras que este valor se reduce a 24,2% entre los ocupados del estrato medio alto. Para el mismo año, similar diferencia se observa según la condición residencial. De los ocupados que residían en villas o asentamientos precarios, el 75,2% no aportaba al Sistema de Seguridad Social, mientras que entre los ocupados

Figura 3.3.2

TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.

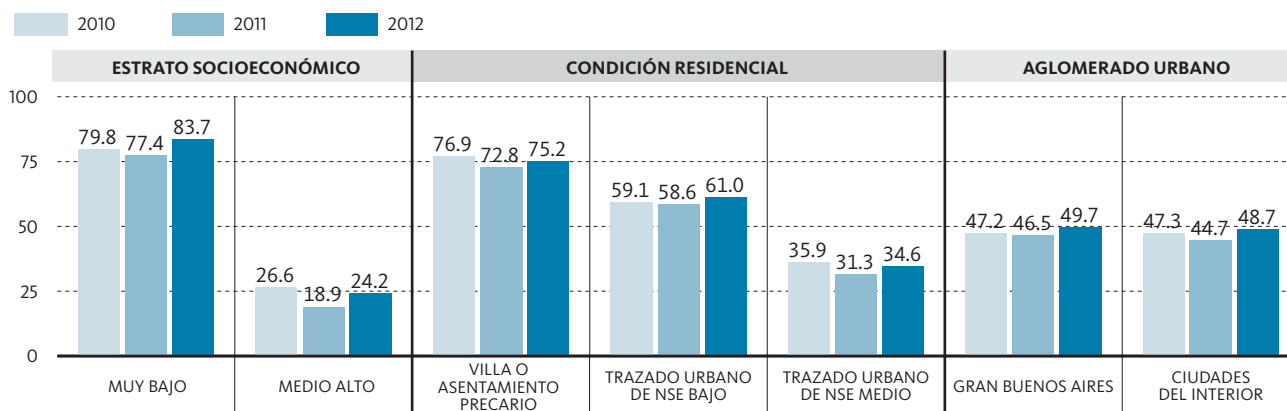


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.3.3

TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

de las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico medio no lo hacía el 61% y 34,6%, respectivamente. Por su parte, surgen leves diferencias en cuanto al aglomerado urbano donde se reside. En tal sentido, en 2012, mientras en el Gran Buenos Aires el 49,7% de los ocupados no aportaba al sistema, en el resto de las áreas urbanas relevadas por la EDSA lo hacía el 48,7% (figura 3.3.3).

Al analizar el período 2011-2012, se distingue un leve incremento en el porcentaje de trabajadores sin aportes al Sistema de Seguridad Social, tanto en los integrantes del estrato socioeconómico muy bajo (entre los cuales el aumento fue de 77,4% a 83,7%), como en los integrantes del estrato medio alto (18,9% a 24,2%). Estos resultados ponen de relieve que la desaceleración de la creación de empleos de calidad ocurrida en 2012 afectó a gran parte de los trabajadores, independientemente de su nivel socioeconómico (figura 3.3.3).

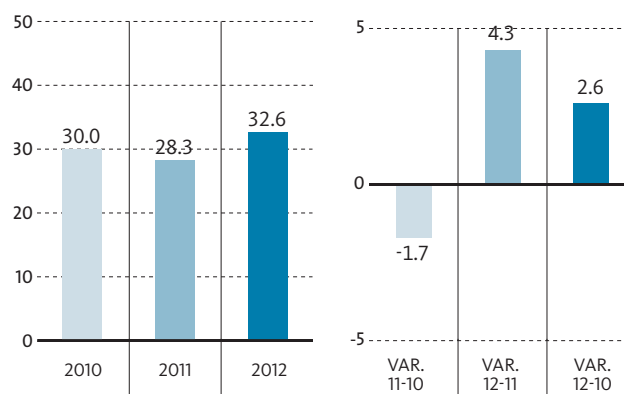
ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entre los factores que pueden incidir en el nivel de asalariados sin aportes jubilatorios se hallan: la generación de puestos de trabajo de calidad, las mayores ganancias empresariales, una mayor actividad de fiscalización laboral, la promoción de políticas de blanqueo y las moratorias contributivas. En el trienio 2010-2012, si bien

Figura 3.3.4

ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores asalariados de 18 años y más.



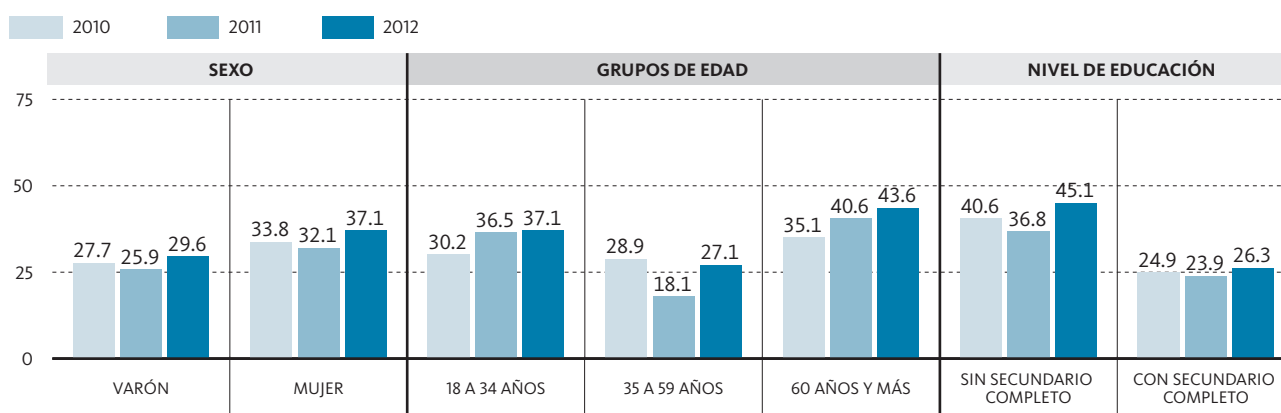
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

el porcentaje de asalariados a los cuales los empleadores no les realizaban los aportes al Sistema de Seguridad Social fluctuó, siempre se ubicó en valores cercanos al 30%. A pesar del contexto de crisis internacional, en el bienio 2010-2011 el no registro de asalariados disminuye de 30% a 28,3%, en tanto que entre 2011 y 2012 aumenta a 32,6%. Esto confirma la persistencia de una heterogeneidad en la estructura productiva, la cual genera un límite en la mejora del escenario laboral y la creación de empleos de calidad. A este efecto estructural se suma, en

Figura 3.3.5

ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores asalariados de 18 años y más.

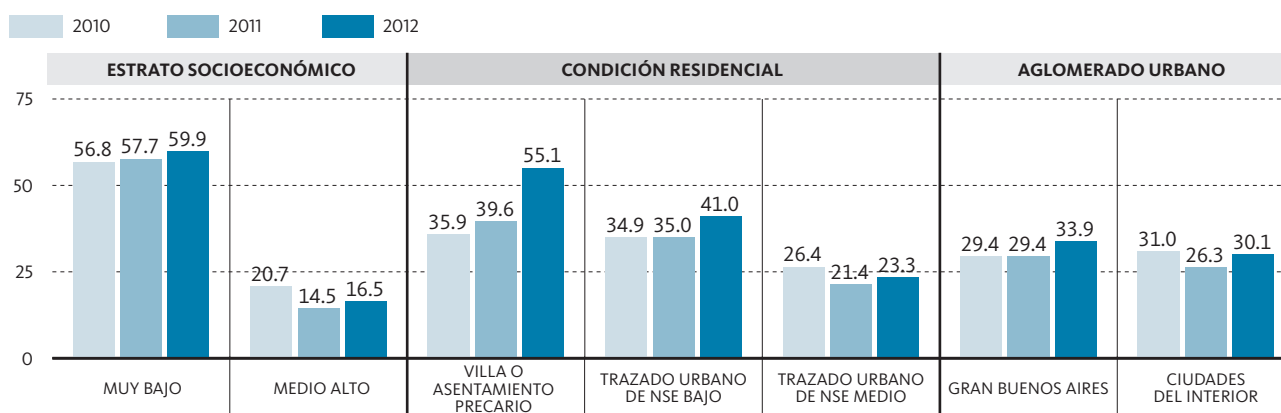


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.3.6

ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores asalariados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

este período, la desaceleración de la creación de puestos de trabajo como consecuencia de un menor crecimiento económico (figura 3.3.4).

En 2012, la tasa de no registro de las personas asalariadas presenta diferencias según el sexo. El 37,1% de las mujeres expresó que su empleador no le realizaba los aportes a la seguridad social, mientras que solo se encontró en una situación similar el 29,6% de los varones. En el mismo año, se distingue una relación entre la ausencia de aportes y la edad de los asalariados: el 37,1% de los jóvenes, el 27,1% de los adultos y el 43,6%

de los adultos mayores expresaron que no les realizaban los aportes jubilatorios. Además, en 2012 se verifican diferencias en el nivel de aportes según el nivel educativo alcanzado: el 45,1% de los asalariados que no terminaron los estudios secundarios y el 26,3% de los que tenían el secundario completo declararon que no les realizaban los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social (figura 3.3.5).

Asimismo, en 2012, el 59,9% de los asalariados del estrato socioeconómico muy bajo expresó que no les realizaban los aportes jubilatorios, mientras que

solo se encontró en tal situación el 16,5% de los asalariados del estrato medio alto. Para el mismo año, se observa una importante diferencia en el nivel de registración laboral de los asalariados según la zona de residencia. Concretamente, no se les realizaban los descuentos jubilatorios al 55,1% de los asalariados residentes en villas o asentamientos precarios, y entre los residentes en zonas con trazado urbano, al 41% de los pertenecientes a zonas de nivel socioeconómico bajo y al 23,3% de los de nivel socioeconómico medio. Por otra parte, el aglomerado urbano de residencia no genera diferencias importantes. En 2012, en el Gran Buenos Aires el 33,9% de los asalariados expresó que no le realizaban descuentos, mientras que en el resto de las áreas urbanas relevadas se encontró en esta situación el 30,1% de los asalariados (figura 3.3.6).

NO ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

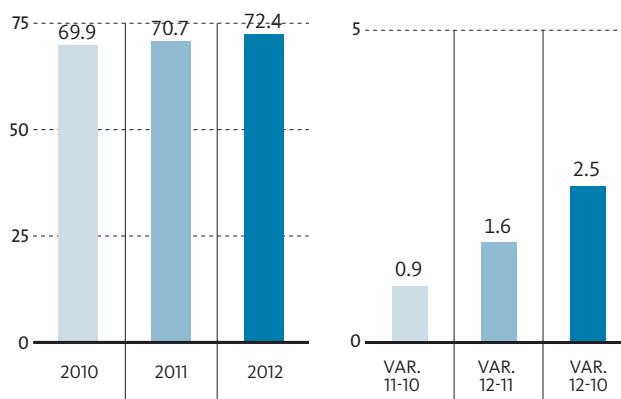
Los trabajadores no asalariados son los que presentan un menor nivel de aportes al Sistema de Seguridad Social. Estos componen un grupo heterogéneo que incluye patrones o empleadores, profesionales independientes, trabajadores por cuenta propia con alta especialización y cuentapropistas con bajo nivel de remuneraciones. En muchos casos, la ausencia de participación en el sistema se debe a los escasos ingresos obtenidos, por debajo de las necesidades de reproducción del grupo familiar; en otros casos, se limita a cuestiones culturales basadas en las estrategias de evasión de contribuciones e impuestos. Pero la participación también conlleva ventajas que trascienden el cumplimiento de obligaciones contributivas. La no realización de aportes los excluye de obra social y de una futura jubilación.

Si se analiza el extenso período 2007-2011, se observa que la evolución del nivel de participación en el Sistema de Seguridad Social fue dispar entre los trabajadores asalariados y los no asalariados (Donza, 2012). En dicho período, entre los primeros disminuyó la no declaración como consecuencia de campañas de difusión, de acciones de fiscalización y de la creación de empleos de calidad. Entre los no asalariados, en cambio, aumentó la no participación en el sistema como consecuencia del incremento de los trabajos por cuenta propia en niveles de subsistencia. Por consiguiente, entre 2010 y 2012 se incrementó el

Figura 3.3.7

NO ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores no asalariados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

porcentaje de no asalariados que no realizaban aportes al Sistema de Seguridad Social, pasando de 69,9% a 72,4% (figura 3.3.7).

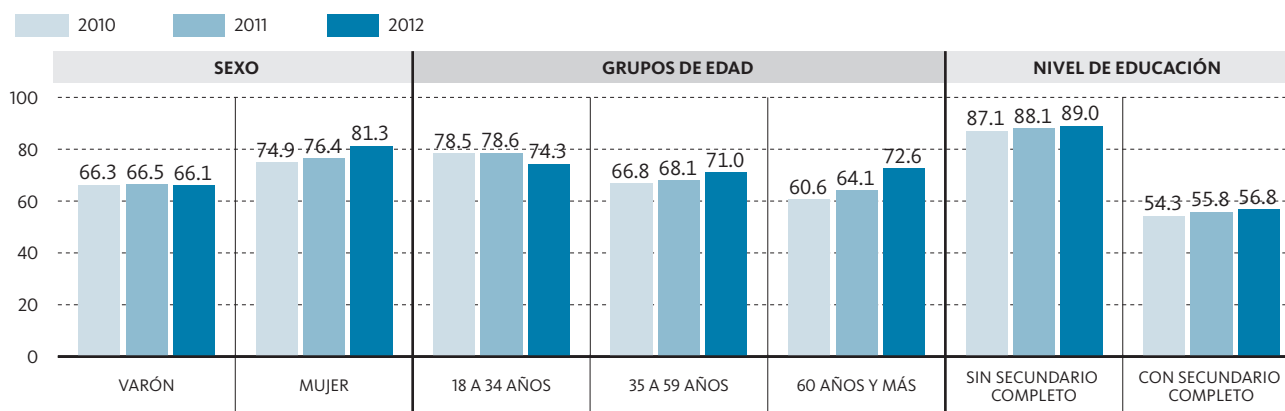
Con respecto a la realización de pagos al Sistema de Seguridad Social de los no asalariados, también se observa una mayor precarización en el escenario laboral femenino. En 2012, el 81,3% de las mujeres no asalariadas no realizó aportes, mientras que no lo realizó el 66,1% de los varones no asalariados. En el mismo año, los jóvenes no asalariados presentan un nivel mayor de no participación en el sistema que los adultos: 74,3% y 71%, respectivamente; mientras que el 72,6% de los adultos mayores no asalariados no aportaba al sistema. Aparte, en 2012, el 89% de los no asalariados que no llegaron a culminar los estudios secundarios no contaba con aportes al Sistema de Seguridad Social, mientras que se hallaba en esa situación el 56,8% de los que completaron el secundario (figura 3.3.8).

En todo el trienio, la falta de realización de aportes al Sistema de Seguridad Social se incrementa en los no asalariados de casi todas las características socio-demográficas analizadas. Este aumento es mayor en los no asalariados adultos mayores (creció de 60,6% a 72,6%) y en las no asalariadas (74,9% a 81,3%). Además, el alto y sostenido nivel de no participación de los no asalariados sin secundario completo (entre 87,1% y 89%) representa la consolidación de actividades por cuenta propia de baja remuneración en este grupo de trabajadores (figura 3.3.8).

Figura 3.3.8

NO ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores no asalariados de 18 años y más.

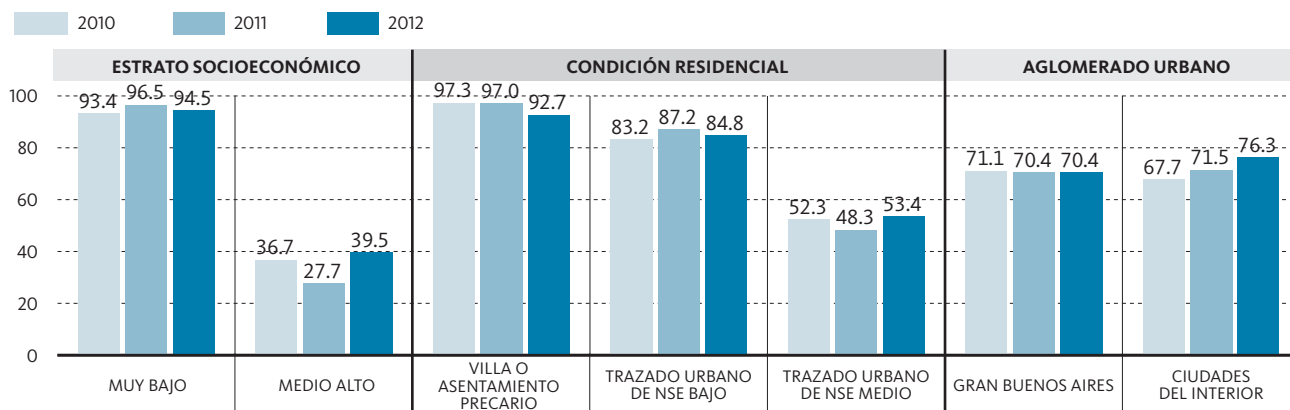


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.3.9

NO ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores no asalariados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Por otra parte, en 2012 se verifican heterogeneidades en los aportes a la seguridad social de los no asalariados según el estrato socioeconómico: el 94,5% de los del estrato socioeconómico muy bajo no realizaron aportes, mientras que este valor se reduce a 39,5% en el caso de los no asalariados del estrato medio alto. Para el mismo año, también se observa diferencia según la condición residencial. Así, de los no asalariados residentes en villas o asentamientos precarios, el 92,7% no aportaba al Sistema de Seguridad Social; entre los de las zonas

con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo, no aportaba el 84,8%; y solamente no aportaba el 53,4% de los no asalariados residentes en zonas con trazado urbano de nivel medio. El aglomerado urbano de residencia también enseña diferencias. En 2012, en el Gran Buenos Aires, el 70,4% de los no asalariados no aportaba al sistema, mientras que en el resto de las áreas urbanas relevadas por la EDSA no lo hacía el 76,3% (figura 3.3.9).

Considerando el período 2010-2012, se observa la estabilización en altos valores de no participación en

el Sistema de Seguridad Social de no asalariados del estrato socioeconómico muy bajo (93,4% a 94,5%), de los residentes en villas o asentamientos precarios (97,3% a 92,7%) y de los que viven en zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo (83,2% a 84,8%). Se confirma de este modo la persistencia y consolidación de actividades por cuenta propia de baja remuneración en estos trabajadores (figura 3.3.9).

TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD

Se puede definir como cobertura de salud al conjunto de actividades integradas orientadas a la promoción, protección, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que se desarrollan bajo la responsabilidad y financiamiento de una institución, la cual se vincula con las personas en forma genérica o nominativa (Marracino, s/f).

Por un lado, la asistencia genérica no nominativa es financiada por rentas generales a cargo del sector público y, en la Argentina, cubre a todas las personas que se encuentren en una determinada jurisdicción o región del país. Por otro lado, existen las coberturas específicas nominativas, dentro de las cuales se pueden identificar dos tipos: las financiadas por aportes y contribuciones obligatorias (sobre el salario de los trabajadores) y por los pagos de cuentapropistas, que trasladan la cobertura al grupo familiar, y las financiadas con aportes voluntarios individuales administrados por instituciones con o sin fines de lucro (prepagas, mutuales, etcétera).

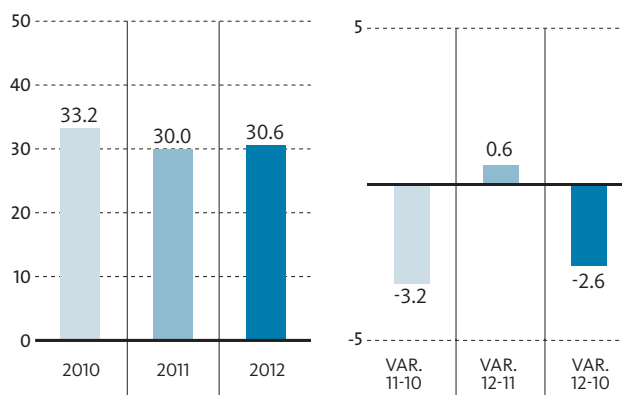
Es decir que algunos trabajadores pueden tener cobertura de salud nominativa independientemente de ser trabajadores registrados o no registrados. Ello puede ocurrir tanto por extensión del derecho de un trabajo registrado integrante del grupo familiar, como por el pago específico a una mutual o prepaga. Debido a esto, y para tener un mayor acercamiento a la situación de cobertura de los trabajadores, se les consulta en la encuesta si poseen cobertura, indistintamente de si el origen es propio o familiar, o si es por derecho laboral o por prepago.

Considerando estas definiciones, los datos revelan que la falta de cobertura de salud para los trabajadores disminuye levemente en el período considerado. En 2010, el 33,2% de los trabajadores no cuenta con cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga;

Figura 3.3.10

TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012.
En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

mientras que contemplando el bienio 2010-2011 este valor disminuye a 30% el primer año y 30,6%, el segundo (figura 3.3.10).

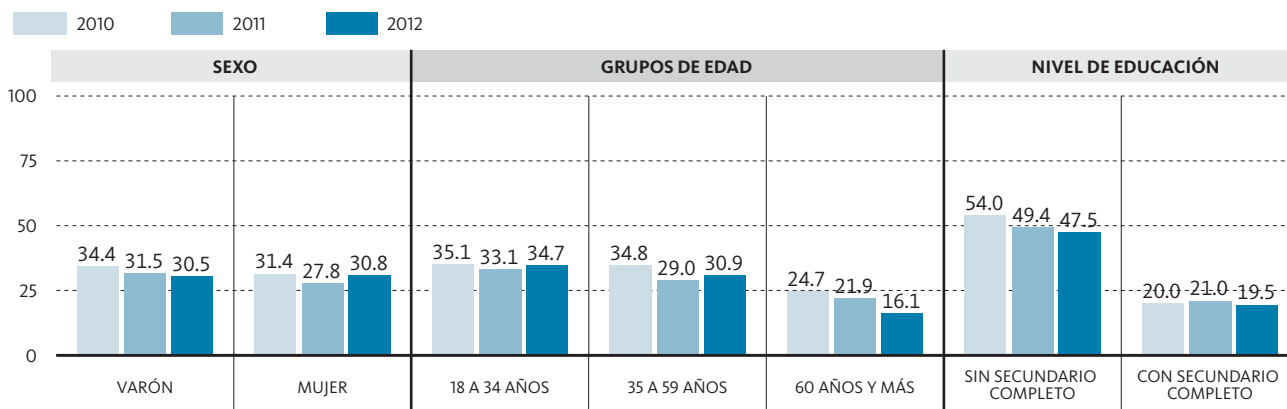
En 2012, el 30,5% de los trabajadores varones no contaba con cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga, en tanto que permanecía en una situación similar el 30,8% de las trabajadoras. Para el mismo año, se observa una leve tendencia de aumento de cobertura a medida que se avanza en la edad del trabajador. Así, entre los trabajadores, expresaron no contar con cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga el 34,7% de los jóvenes, el 30,9% de los adultos y el 16,1% de los adultos mayores. Paralelamente, en 2012 siguieron verificándose diferencias importantes según el nivel educativo alcanzado. En tal sentido, la encuesta indica que no contaban con cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga el 47,5% de los asalariados con estudios secundarios incompletos y el 19,5% de los que tenían el secundario completo (figura 3.3.11).

Asimismo, en 2012, un 62,9% de los trabajadores del estrato social muy bajo expresó no poseer cobertura de obra social, mutual o prepaga, mientras que solo se halló en esa situación el 5,3% de los trabajadores del nivel medio alto. Para el mismo año, una importante diferencia se corrobora en el nivel de cobertura de salud según la zona de residencia. Concretamente, el 63,8% de los trabajadores residentes en villas o asentamientos precarios no contaba con co-

Figura 3.3.11

TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.

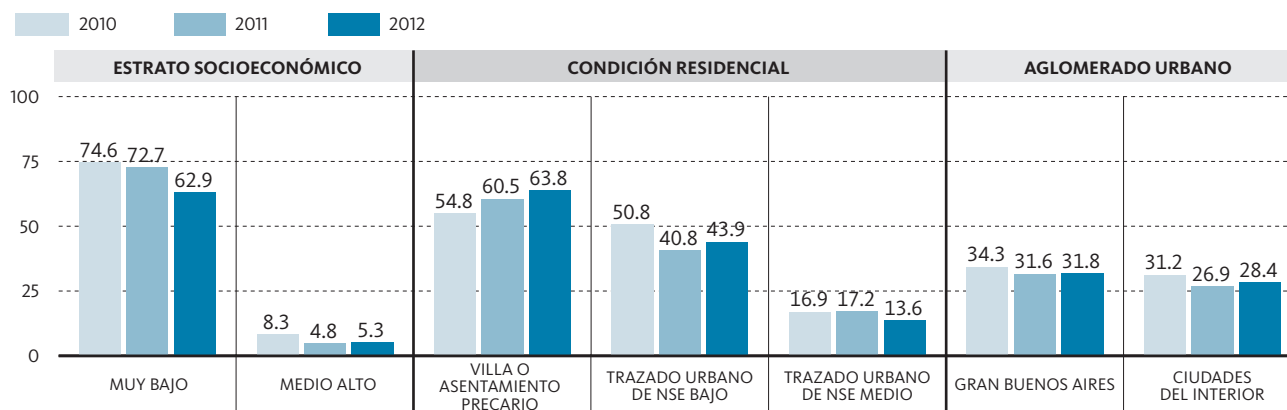


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.3.12

TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores ocupados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

bertura de salud proveniente de obra social, mutual o prepaga; tampoco el 43,9% de aquellos residentes en las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo y el 13,6% de los radicados en zonas de trazado urbano de nivel medio. Por otra parte, el aglomerado urbano de residencia no exhibe diferencias importantes. En 2012, en el Gran Buenos Aires expresó que no poseía cobertura el 31,8% de los trabajadores, mientras que en el resto de las áreas urbanas relevadas, los trabajadores que se encontraban en la misma situación eran el 28,4% (figura 3.3.12).

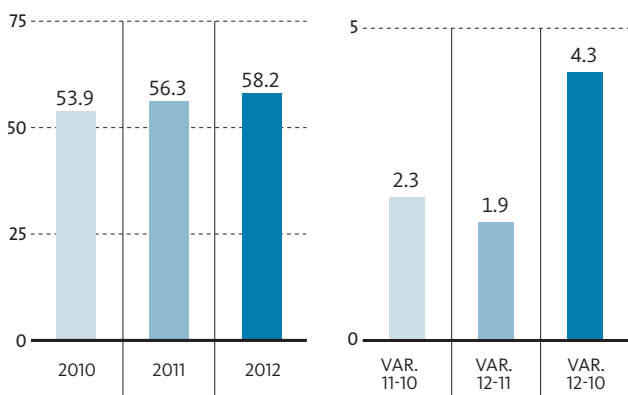
ASALARIADOS SIN AFILIACIÓN SINDICAL

La participación activa de los trabajadores en sindicatos o gremios constituye no solo un medio para plasmar la reivindicación de los derechos básicos del trabajador o del sector; además permite canalizar actividades de capacitación, formación profesional, concientización sobre derechos, transmitir prácticas referidas a la seguridad e higiene en el trabajo y otros aspectos propios de cada actividad. Es por eso que

Figura 3.3.13

ASALARIADOS SIN AFILIACIÓN SINDICAL

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores asalariados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

resulta de interés conocer el nivel de participación de los trabajadores en las organizaciones de base que los representan.

En el caso de los asalariados, el porcentaje de afiliación gremial es usualmente utilizado como indicador de la densidad sindical de una sociedad. En ellos, el hecho de estar participando activamente de la actividad gremial representa, entre otras cosas, la presencia de delegados, la existencia de instancias de debates y canalizaciones de demandas en forma no

personalizada, una mayor protección ante el despido injustificado, etcétera (Trajtemberg, Senén González y Medwid; 2008). En el transcurso del tiempo, el incremento de la sindicalización puede deberse a un aumento del empleo registrado, a una mayor movilización social que favorezca la participación, a la necesidad ejercer la defensa de derechos, entre otros factores.

Entre 2010 y 2012, según los datos relevados por la EDSA-Bicentenario, aumentó paulatinamente el porcentaje de trabajadores asalariados sin afiliación sindical. En 2010 representaban al 53,9% de los asalariados, cifra que se incrementó a 56,3% y llegó a 58,2% en 2012 (figura 3.3.13).⁶⁸

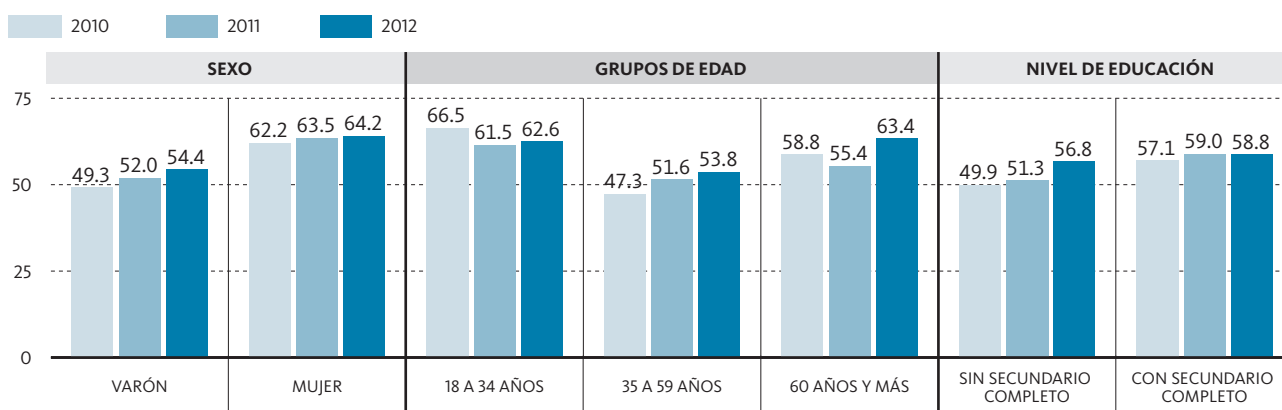
En 2012, las mujeres registran un menor nivel de sindicalización que los varones entre las personas asalariadas: el 64,2% de ellas no está afiliada ese año, mientras que en tal situación se halla el 54,4% de los varones asalariados. Para el mismo año, el nivel de sindicalización de los jóvenes resulta menor que el

68 Si bien los desocupados o asalariados no registrados tienen la posibilidad de afiliarse a asociación gremial alternativa, el primer requerimiento para realizar la afiliación sindical es que el asalariado se encuentre registrado. Es por esto que la proporción de asalariados afiliados puede verse indirectamente afectada por el nivel de empleo no registrado. Otro factor de posible incidencia es el porcentaje de asalariados que se encuentran fuera de convenio y sin representación gremial (en general son los que prestan servicios en cargos de jefatura o dirección).

Figura 3.3.14

ASALARIADOS SIN AFILIACIÓN SINDICAL SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores asalariados de 18 años y más.

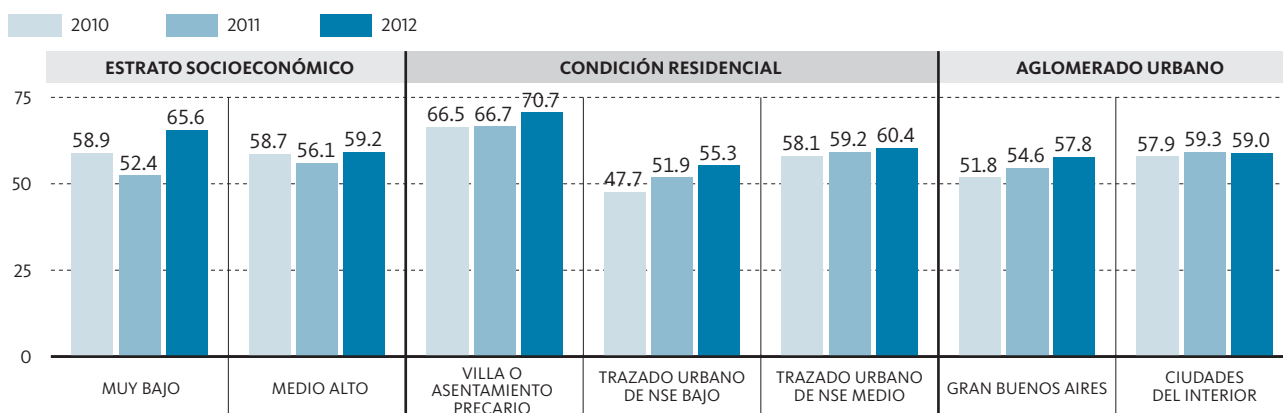


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.3.15

ASALARIADOS SIN AFILIACIÓN SINDICAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de trabajadores asalariados de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

de los mayores: el 62,6% de los asalariados jóvenes no se encontraba afiliado, mientras que lo estaba el 53,8% de los asalariados adultos y el 63,4% de los asalariados adultos mayores. Además, en 2012, el porcentaje de sindicalización fue levemente diferente según el nivel educativo alcanzado: afirmaron no encontrarse afiliados al sindicato el 56,8% de los asalariados que no llegaron a culminar los estudios secundarios y el 58,8% de los que tenían el secundario completo (figura 3.3.14).

Asimismo, en 2012, el 65,6% de los asalariados del estrato socioeconómico muy bajo expresa no poseer afiliación sindical, mientras que se halla en esa situación el 59,2% de los asalariados del nivel medio alto. Para el mismo año, la diferencia en el nivel de sindicalización según la zona de residencia de los asalariados se refleja en los siguientes porcentajes: el 70,7% de los que residen en villas o asentamientos precarios no cuenta con afiliación a sindicatos, situación que registra el 55,3% de los asalariados con domicilio en las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo y el 60,4% de los residentes en las zonas con trazado de nivel socioeconómico medio. Por fin, el aglomerado urbano de residencia no genera diferencias relevantes. En 2012, en el Gran Buenos Aires, un 57,8% de los asalariados expresa que no posee afiliación sindical, mientras que en el resto de las áreas urbanas se halla en la misma situación un 59,0% de los asalariados (figura 3.3.15).

CONDICIONANTES DE LA AUSENCIA DE APORTES DE LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE COBERTURA DE SALUD

El propósito de esta última sección es desarrollar un análisis inferencial acerca del peso que una serie de factores tienen como condicionantes para que los trabajadores posean, en un caso, participación en el Sistema de Seguridad Social, y en otro caso, cobertura de salud, tal y como fueron definidos anteriormente estos conceptos.

El análisis propuesto permite identificar y poner de manifiesto el carácter multidimensional de la participación en la seguridad social y de la cobertura de salud, a fin de evidenciar desigualdades estructurales y evaluar si los cambios observados en el período 2010-2012 son significativos.

En el primero de los modelos considerados, la no realización de aportes al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores (en el caso de los asalariados, el no pago de aportes por el empleador, y en el caso de los no asalariados, el propio no pago) y, en el segundo de los modelos, la situación de no contar con algún tipo de cobertura de salud (indistintamente de si el origen es propio o familiar, si es por derecho laboral o por prepago) constituyen la variable dependiente que busca ser explicada por medio de determinados factores que generan el paso de una situación de no déficit (0) a una de déficit (1).

Figura 3.3.16

RAZONES DE PROBABILIDAD DE NO PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE COBERTURA DE SALUD SEGÚN CATEGORÍAS SOCIALES SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. Población ocupada de 18 años y más.
Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B))

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II	
	TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO				
SEXO				
Varón (c)				
Mujer	0,532***	1,70	0,033	1,03
GRUPOS DE EDAD				
18 a 34 años	0,112**	1,12	0,110*	1,12
35 a 59 años (c)				
60 y más	0,743***	2,10	-0,865***	0,42
NIVEL EDUCATIVO				
Con secundario completo (c)				
Sin secundario completo	0,208***	1,23	0,012	1,01
JEFATURA DEL HOGAR				
Jefe (c)				
No jefe	0,377***	1,46	0,094	1,10
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR				
ESTRATO SOCIOECONÓMICO				
Medio alto (c)				
Medio bajo	0,893***	2,44	1,445***	4,24
Bajo	1,603***	4,97	2,377***	10,78
Muy bajo	2,513***	12,34	3,198***	24,49
CONDICIÓN RESIDENCIAL				
Trazado urbano de NSE medio (c)				
Urbanización formal de NSE bajo	0,091	1,10	0,093	1,10
Villa o asentamiento precario	-0,192	0,83	-0,121	0,89
TIPO DE AGLOMERADO				
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)				
Conurbano Bonaerense	0,081	1,08	0,706***	2,03
Grandes Areas Urbanas	0,063	1,07	0,317**	1,37
Resto Urbano	-0,092	0,91	0,383***	1,47
AÑO				
2010 (c)				
2011	-0,161***	0,85	-0,315***	0,73
2012	0,003	1,00	-0,264***	0,77
CONSTANTE	-1,742***	0,18	-2,935***	0,05
R cuadrado de Cox y Snell	0,194		0,232	
R cuadrado de Nagelkerke	0,259		0,326	
Porcentaje global de aciertos	68,9		71,6	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

A partir de lo expuesto, se aplicó un análisis de regresión logística que posee como variables independientes: características del individuo (sexo, grupo de edad, nivel educativo y posición en el hogar); características del hogar (estrato socioeconómico y condición residencial); el aglomerado urbano de residencia y el año del relevamiento. En la figura 3.3.16 se pre-

sentan los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

El modelo I (no participación en el Sistema de Seguridad Social) alcanzó una buena capacidad de predicción: 68,9%. En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se destaca el hecho de que, manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, el estrato socioeconómico, el sexo y la edad son los principales factores explicativos de la ausencia de participación en el Sistema de Seguridad Social. En una medida bastante menor tienen incidencia la posición en el hogar y el nivel educativo, resultando el aglomerado de residencia y la condición residencial factores estadísticamente no significativos en presencia de las otras variables. La significancia estadística obtenida por la variable que expresa el año de relevamiento se debe a la disminución, observada entre 2010 y 2011, del indicador de no participación.

En la población ocupada, la propensión a no participar del Sistema de Seguridad Social aumenta marcadamente conforme se desciende en la estratificación social. Así, respecto de quienes forman parte del estrato medio alto, los sujetos del estrato socioeconómico muy bajo muestran 12 veces más posibilidades de no participar; los de estrato bajo, 5 veces más; y los del estrato medio bajo, 2,4 veces más. Entre los ocupados, las mujeres presentan 70% más de probabilidades que los varones de encontrarse sin participación en el sistema. Por su parte, en comparación con los adultos, los jóvenes ocupados registran 12% más probabilidades de encontrarse sin participar en la seguridad social; en tanto que los adultos mayores tienen 110% de mayores chances de estar en esa situación.

Del mismo modo, con respecto al cociente de probabilidades de los jefes de hogar, no ser jefe aumenta las chances de estar fuera del Sistema de Seguridad Social en un 46%. En igual sentido operan características como no haber completado el secundario (23% más). En todos los casos, se trata de factores que intervienen de manera significativa incluso controlando el potente efecto del estrato socioeconómico.

Una buena capacidad de predicción (71,6%) alcanzó el modelo II, basado en el análisis de los factores que determinan la carencia de cobertura de salud. En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se puede notar que, manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, el estrato socioeconómico es el principal determinante.

En menor medida inciden la edad y el aglomerado de residencia. La aparición del año de referencia como un factor significativo indica la variación, en este caso a la baja, de la proporción de ocupados sin cobertura de salud en el período 2010-2012.

En la población ocupada, se observa que la propensión a no contar con cobertura de salud aumenta visiblemente conforme se desciende en la estratificación social: en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los integrantes de estrato socioeconómico muy bajo registran 24 veces más posibilidades de no tener cobertura; los de estrato bajo, 11 veces más; y los de estrato medio bajo, 4,2 veces más.

Analizando el cociente de probabilidades de los ocupados adultos, se corrobora que ser joven aumenta las chances de encontrarse sin cobertura de salud en un 12%, mientras que en el caso de los adultos mayores disminuye un 58%. En estos últimos, la amplia cobertura se debe básicamente a la amplia extensión de las jubilaciones y las pensiones con el derecho que esto genera a la participación en el sistema de salud previsional.

El aglomerado de residencia incide en menor medida en la falta de cobertura de salud. En comparación con los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ocupados residentes en el Conurbano Bonaerense exhiben el doble de probabilidades de no tener esta cobertura; los que residen en otras grandes áreas metropolitanas, un 37% más; y los del resto del área urbana, un 47% más (figura 3.3.16).

3.4 INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO

Desde el punto de vista normativo, tanto los derechos nacionales como internacionales expresan la necesidad de que el trabajo se retribuya en forma justa y con igual remuneración ante igual tarea.⁶⁹ Independientemente de estos preceptos, en realidad, la variación en los niveles de ingreso de los trabajadores se debe, entre otras cuestiones, a la evolución general de la economía, diferenciales de productividad del trabajo, atributos personales, escalafones laborales, capacidad de negociación

69 Respecto a estos derechos, puede verse la Constitución de la OIT en la Declaración de Filadelfia (1944) (OIT, 2010), el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina y la institución del Salario Mínimo Vital y Móvil (Art. 116 de la Ley 20.744).

colectiva, oferta y demanda de prestaciones, discriminaciones de género o de otro tipo, etcétera.

Los ingresos provenientes del trabajo representan una parte fundamental del total de ingresos familiares. De ahí que tengan efectos directos sobre la situación económica y la calidad de vida de la mayoría de los hogares, así como sobre la desigualdad al interior de la estructura social. Por estas razones, se presenta en este apartado la evolución de los valores medios de los ingresos laborales mensuales y de los ingresos horarios relevados por la EDSA-Bicentenario.

Ahora bien, debido al aumento del costo de vida evidenciado desde 2007 y la importante incidencia que esto ha tenido en el poder de compra de las retribuciones de los trabajadores, se deflataron los ingresos monetarios a valores constantes de diciembre de 2012. Sin embargo, dadas las controversias existentes sobre la confiabilidad del índice de precios al consumidor generado por el INDEC para el GBA (IPC-GBA INDEC) en el período analizado, se sigue el procedimiento de utilizar dos deflatores alternativos para dejar al lector la capacidad de comparar uno u otro método de actualización.⁷⁰ De este modo, se presentan en este apartado las evoluciones de la media de ingresos laborales mensuales y de la media de ingreso horario de los trabajadores según ambos ajustes.

MEDIA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES

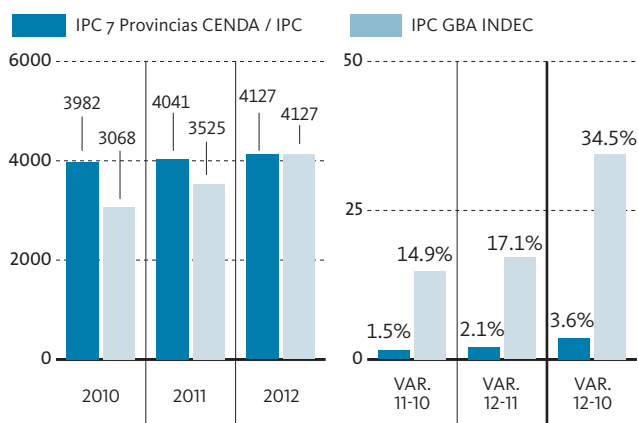
En primera instancia, entre 2010 y 2012 se observa un comportamiento diferencial de las retribuciones medias al trabajo según el índice utilizado para actualizar los valores. Esto se debe al fuerte efecto del aumento de costo de vida que no contempla el IPC-GBA del INDEC. En caso de considerar este deflactor, el incremento real durante el período habría sido de 34,5% (\$ 3.068 a \$ 4.127 en pesos de diciembre de 2012).⁷¹ Comparativa-

70 El deflactor alternativo utilizado entre 2007 y 2010 es el IPC-7 Provincias, generado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) a partir de la información oficial de las Direcciones Provinciales de Estadística de Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta (CENDA, 2011). Entre 2010 y 2012, por no contarse con el IPC-7 Provincias construido por CENDA, se utilizó un segundo IPC alternativo.

71 Salvo indicación en contrario, siempre que se haga referencia a pesos corresponde a pesos constantes de diciembre de 2012.

Figura 3.4.1**MEDIA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES**

Total y variaciones relativas interanuales (en %). Años 2010-2011-2012. En pesos de diciembre de 2012 según IPC 7 Provincias CENDA / IPC e IPC GBA INDEC



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

mente, si se actualizan los valores por el IPC-7 Provincias CENDA/IPC, el incremento real es significativamente menor: de 3,6% (\$ 3.982 a \$ 4.127) (figura 3.4.1).

Una evolución de este tipo convalida la utilización del índice de costo de vida alternativo. Porque resulta por lo menos llamativo que en el contexto 2010-2012, signado por una desaceleración de la economía y la generación de empleo, los ingresos laborales reales (en forma mayoritaria como consecuencia de la negociación colectiva, la negociación individual y la capacidad de ajuste de retribuciones de los trabajadores cuentapropistas) hayan superado en más de un 30% el aumento del costo de vida. Desagregando por años también resulta más consistente la información que surge al ajustar por el índice alternativo; así: entre 2010 y 2011 la media de ingresos laborales se incrementa 1,5%, y entre 2011 y 2012 aumenta 2,1% (figura 3.4.1). Debido a esto, a excepción de las medias generales, el resto de los ingresos promedios analizados se actualizan por el índice alternativo.⁷²

Específicamente en 2012, como consecuencia de la menor cantidad de horas mensuales trabajadas, la media de ingreso laboral de las mujeres resulta inferior a

⁷² Los valores deflacionados por el IPC-GBA INDEC para todas las variables de corte presentadas se encuentran disponibles en el documento digital "Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística", el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

la de los varones. En promedio, el ingreso mensual de ellas fue de \$ 3.717, mientras que el de ellos fue de \$ 4.406. En el mismo año, los jóvenes presentan ingresos laborales mensuales inferiores a los de las personas adultas: \$ 3.511 y \$ 4.436, respectivamente, en tanto que el promedio de ingresos por trabajo de los adultos mayores fue de \$ 4.944. Por lo demás, en 2012 se verifica que los ingresos son diferenciales según el nivel educativo alcanzado. Los trabajadores que no llegaron a culminar los estudios secundarios obtienen un promedio de ingresos de \$ 3.002, mientras que los que sí completaron el secundario, de \$ 4.871 (figura 3.4.2).

Analizando el período 2010-2012, no se observan importantes variaciones en la media de ingresos laborales según las características sociodemográficas analizadas, a excepción de los trabajadores adultos mayores. Para estos, el promedio de ingresos laborales mensuales se incrementó un 29,1%, subiendo de \$ 3.829 a \$ 4.944 (figura 3.4.2).

Por otra parte, en 2012 se verifica la heterogeneidad de ingresos laborales mensuales según el estrato socioeconómico: la media de ingresos fue de \$ 2.172 para los trabajadores del estrato socioeconómico muy bajo, valor que asciende a \$ 6.133 en los del estrato medio alto. Para el mismo año, también se observa diferencia según la condición residencial. Las personas trabajadoras que residían en villas o asentamientos precarios obtuvieron un promedio de ingreso laboral de \$ 2.075; los habitantes de las zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo, \$ 3.155; y los residentes en zonas con trazado urbano de nivel medio, \$ 5.355. El aglomerado urbano de residencia genera leves diferencias en los ingresos de los trabajadores: en 2012, aquellos que habitaban en el Gran Buenos Aires obtuvieron un ingreso mensual medio de \$ 4.226 y los que vivían en el resto de las áreas urbanas relevadas, de \$ 3.938 (figura 3.4.3).

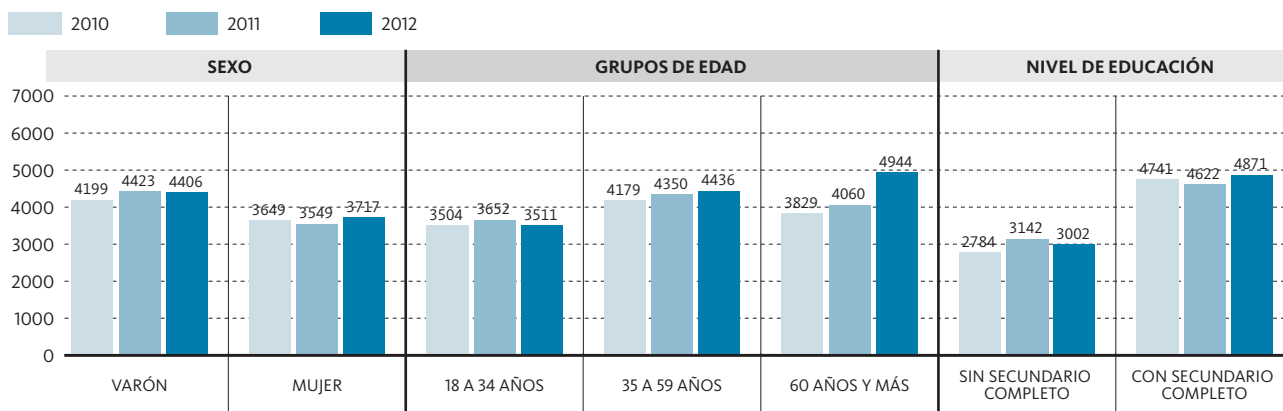
Considerando el período 2010-2012, se observa un incremento de 5,5% en la media de ingresos laborales de los trabajadores pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo (\$ 2.058 a \$ 2.172) y una disminución (de 6,2%) entre los trabajadores residentes en villas y asentamientos precarios (\$ 2.213 a \$ 2.075). La magnitud de estas variaciones depende tanto de la cantidad de horas trabajadas como de la retribución horaria obtenida por el trabajo (figura 3.4.3).

Ahora bien, los niveles de retribuciones presentan comportamientos muy distintos según la calidad del

Figura 3.4.2

MEDIA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA / IPC).

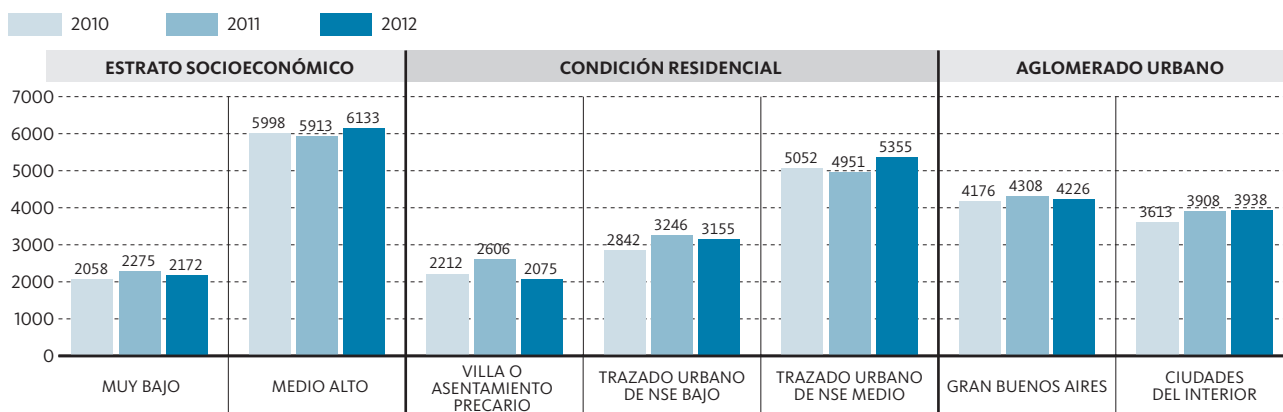


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.4.3

MEDIA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA / IPC).



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

empleo y el sector de actividad. En 2012, el ingreso medio mensual de los ocupados en empleo pleno fue de \$ 5.215; el de los trabajadores con empleo precario, de \$ 3.533; y el de los de subempleo inestable, de \$ 1.757. Para el mismo año, el promedio de ingresos mensuales de los trabajadores fue de \$ 5.340 para los del sector privado formal; de \$ 4.888 para los del sector público; y de \$ 3.120 para los del sector privado informal (figura 3.4.4).

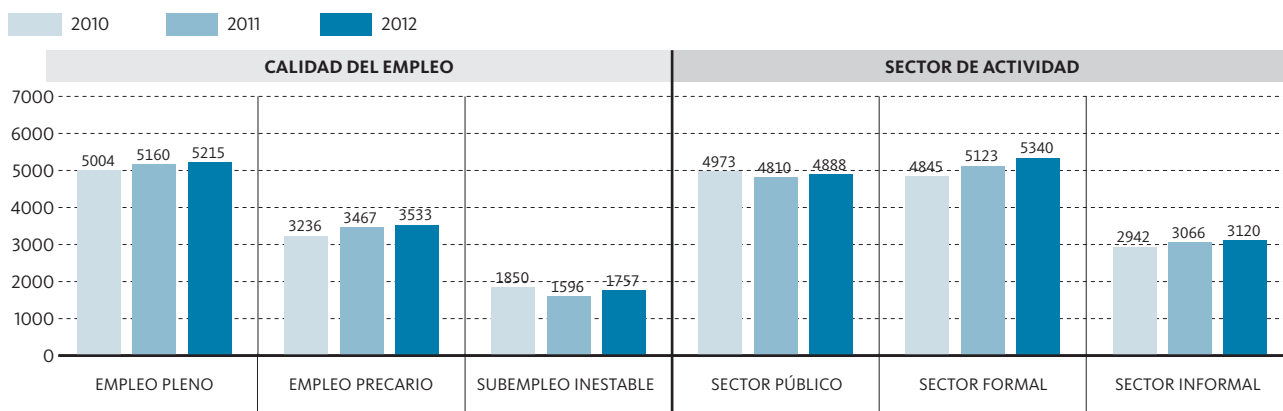
El análisis del trienio 2010-2012 permite deducir una dispar evolución según la calidad del empleo y el sector de actividad. Por un lado, la media de ingresos laborales mensuales se incrementa en 4,2% para los

trabajadores con empleo pleno (\$ 5.004 a \$ 5.215) y un 9,2% para los trabajadores con empleo precario (\$ 3.236 a \$ 3.533), en tanto que disminuye un 5% entre los trabajadores con subempleo inestable (\$ 1.850 a \$ 1.757). Por otro lado, la media de ingresos laborales mensuales sufre un decremento de 1,7% entre los trabajadores del sector público (\$ 4.973 a \$ 4.888), mientras que entre los del sector privado se ve incrementada con esta doble modalidad: 10,2% entre los del sector formal (\$ 4.845 a \$ 5.340) y 6% entre los del sector informal (\$ 2.942 a \$ 3.120). La disminución del ingreso mensual de los trabajadores con subempleo inestable responde

Figura 3.4.4

MEDIA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES SEGÚN CALIDAD DEL EMPLEO Y SECTOR DE ACTIVIDAD

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA / IPC).



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

principalmente a la baja de los ingresos horarios que debieron soportar los cuentapropistas y asalariados en niveles de subsistencia. El contexto de crisis tendió a la baja de sus retribuciones, el sostenimiento del empleo se realizó a partir de bajos salarios y la carencia de negociación colectiva les impidió defender el poder adquisitivo de sus remuneraciones. Desde el punto de vista de los sectores de actividad, se presume que la causa de la disminución del promedio de ingresos de los trabajadores del sector público se debe a que aumentó la cantidad de beneficiarios de políticas activas (especialmente Argentina Trabaja) que se identifican como trabajadores del sector público y poseen ingresos inferiores a la media del sector, generando de este modo una baja del promedio (figuras 3.4.4 y 3.4.8).

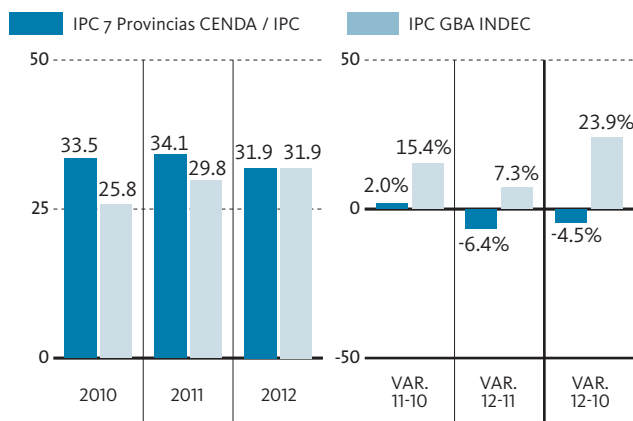
MEDIA DE INGRESO HORARIO

Si bien la consideración de la media de ingresos laborales mensuales permite realizar una aproximación a la disponibilidad de recursos monetarios con que cuentan los trabajadores, no contempla la cantidad de horas trabajadas y es limitadamente representativa de la productividad generada por cada puesto de trabajo. Analizando la evolución de la media de ingreso horario de la totalidad de los trabajadores, se vuelve a verificar el diferencial efecto que generan los diversos índices de actualización por el costo de vida. Si se usa el IPC-GBA del INDEC, el incremento real durante el período 2010-

Figura 3.4.5

MEDIA DE INGRESO HORARIO

Total y variaciones relativas interanuales (en %). Años 2010-2011-2012. En pesos de diciembre de 2012 según IPC 7 Provincias CENDA / IPC e IPC GBA INDEC



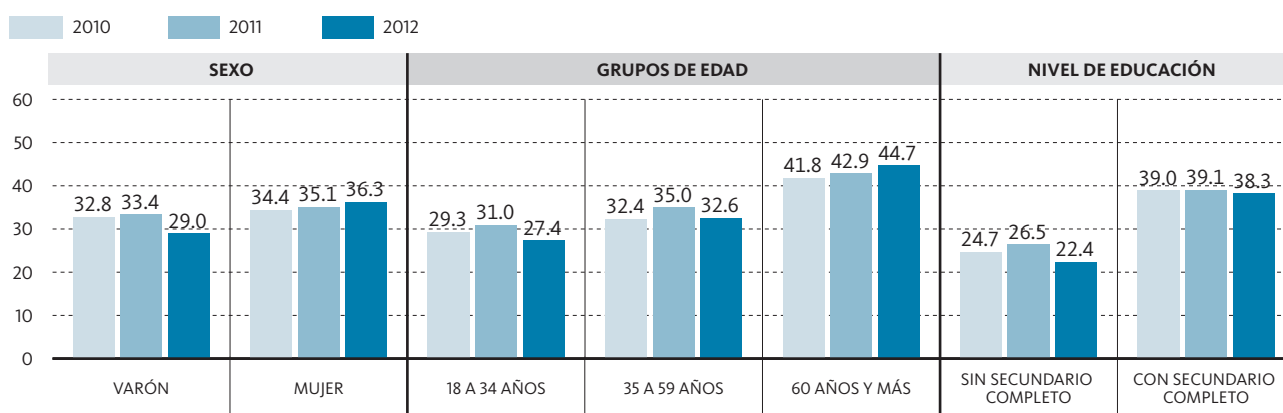
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

2012 da 23,9% (\$ 25,8 a \$ 31,9), pero si se usa el IPC-7 Provincias CENDA/IPC, se observa una disminución de 4,5% (\$ 33,5 a \$ 31,9). Debido a que estas variaciones son inferiores a las de las medias de ingresos laborales mensuales expresadas en el apartado anterior (34,5% según el deflactor del INDEC y 3,6% según el alternativo), se puede determinar que entre 2010 y 2012 los trabajadores del área relevada por la EDSA-Bicentenario se vieron obligados a trabajar más horas mensuales para poder sostener, o evitar la caída, de su nivel real de ingresos (figuras 3.4.1 y 3.4.5).

Figura 3.4.6

MEDIA DE INGRESO HORARIO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA / IPC).

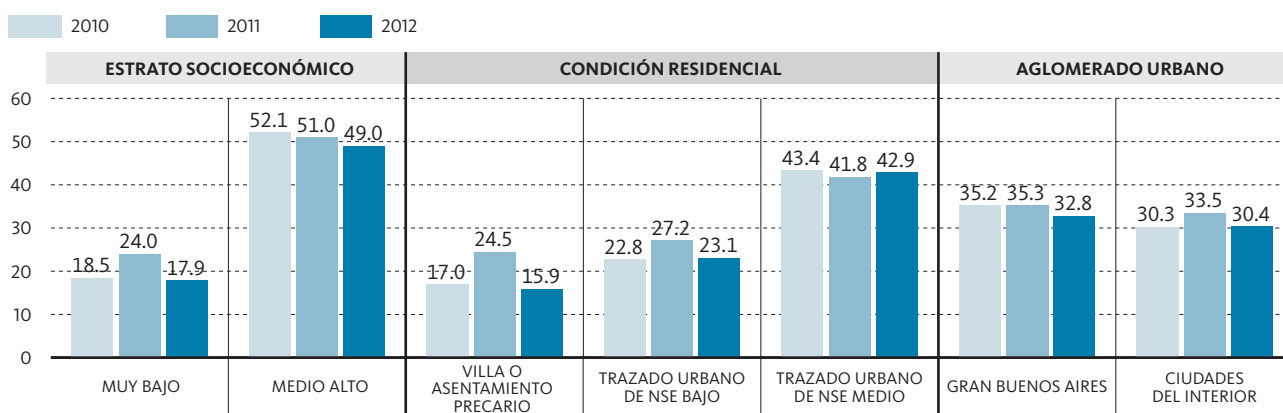


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 3.4.7

MEDIA DE INGRESO HORARIO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA / IPC).



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Nuevamente, resulta por lo menos llamativo que en el contexto 2010-2011, de desaceleración económica y generación de empleo, los ingresos horarios reales (en su mayoría consecuencia de la negociación colectiva, la negociación individual y la capacidad de ajuste de retribuciones de los trabajadores cuentapropistas) hayan superado en más de un 23,9% el aumento del costo de vida. Desagregando por años también resulta más consistente la información que surge al ajustar por el índice alternativo: entre 2010 y 2011, la media de ingreso horario se incrementó un 2%, y entre 2011 y 2012, en

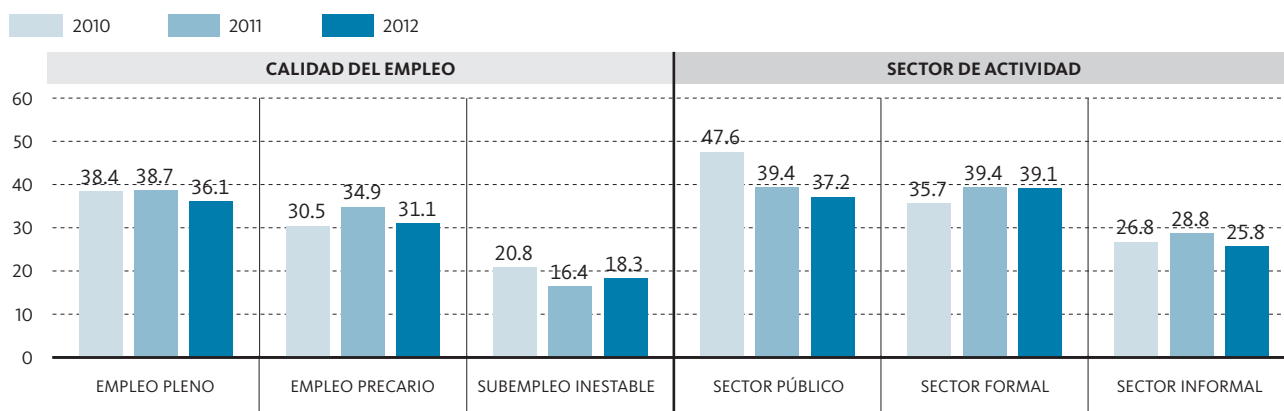
un contexto de desaceleración de la creación de empleo, disminuyó 6,4% (figura 3.4.5). Por esto, a excepción de las medias generales, el resto de los ingresos promedios analizados se actualizan por el índice alternativo.⁷³

⁷³ Los valores deflacionados por el IPC-GBA INDEC para todas las variables de corte presentadas se encuentran disponibles en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

Figura 3.4.8

MEDIA DE INGRESO HORARIO SEGÚN CALIDAD DEL EMPLEO Y SECTOR DE ACTIVIDAD

Años 2010-2011-2012. En pesos constantes de diciembre de 2012 (IPC 7 Provincias CENDA / IPC).



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

En 2012, la retribución horaria de las mujeres es levemente superior a la obtenida por los varones. En promedio, el ingreso por hora de las trabajadoras fue de \$ 36,3 y el de los varones, de \$ 29. En el mismo año, los jóvenes presentaron ingresos horarios inferiores en comparación con los adultos: \$ 27,4 y \$ 32,6, respectivamente, mientras que en los adultos mayores fue de \$ 44,7. Asimismo, en 2012 se verifican ingresos horarios diferenciales según el nivel educativo: quienes no llegaron a culminar los estudios secundarios obtuvieron un promedio de ingresos horarios de \$ 22,4 y los que sí completaron el secundario, de \$ 38,3 (figura 3.4.6).

El trienio 2010-2012 mostró una evolución dispar y limitada del ingreso horario real de los trabajadores según las características sociodemográficas analizadas. Entre los grupos poblacionales que presentaron un mayor aumento, se identifica a las mujeres con 5,5% (\$ 34,4 a \$ 36,3) y a los adultos mayores con 7% (\$ 41,8 a \$ 44,7) (figura 3.4.6).

Por otra parte, en 2012 los ingresos horarios son sumamente diferentes según el estrato socioeconómico de pertenencia. En efecto, la media de ingresos fue de \$ 17,9 para los trabajadores del estrato socioeconómico muy bajo, mientras que este valor asciende a \$ 49 entre los trabajadores del estrato medio alto. Para el mismo año, también se observa diferencia según la condición residencial. Los trabajadores residentes en villas o asentamientos precarios obtuvieron un promedio de ingreso horario de \$ 15,9; los de las zonas

con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo, de \$ 23,1; y los que residían en zonas con trazado urbano de nivel medio, de \$ 42,9. El aglomerado urbano de residencia generó leves diferencias en los ingresos horarios de los trabajadores; así, en 2012, los que habitaban en el Gran Buenos Aires obtuvieron un ingreso horario medio de \$ 32,8, mientras que los radicados en el resto de las áreas urbanas percibieron uno de \$ 30,4 (figura 3.4.7).

Analizando el período 2010-2012 se observa una estabilidad del ingreso horario en la mayoría de las categorías socio-residenciales y un leve descenso en otras. En el caso de los ocupados del estrato socioeconómico muy bajo, el ingreso horario real disminuye 3,3% (\$ 18,5 a \$ 17,9); y entre los residentes en villas o asentamientos precarios, 6,5% (\$ 17 a \$ 15,9). En el caso de los trabajadores del estrato medio alto, la capacidad de compra del ingreso horario medio se reduce en un 5,9% (\$ 52,1 a \$ 49) (figura 3.4.7).

En el último año analizado, el ingreso horario medio de los ocupados en empleo pleno fue de \$ 36,1; el de los trabajadores con empleo precario, de \$ 31,1; y el de los de subempleo inestable, de \$ 18,3. Para el mismo año, en el ámbito de los sectores de actividad, se identifica una media de ingresos horarios de los trabajadores del sector público relativamente similar a la del sector privado formal, y que las retribuciones del sector privado informal fueron marcadamente inferiores a ambas. El promedio de ingresos horarios de los trabajadores fue de \$ 37,2 para los del sector público, de \$ 39,1 para los

del sector privado formal, y de \$ 25,8 para los del sector privado informal (figura 3.4.8).

Según la calidad del empleo, los niveles de retribuciones horarias presentan un comportamiento similar al observado en los ingresos mensuales. Entre 2010 y 2012, disminuyen un 5,9% los ingresos horarios reales de los trabajadores con empleo pleno (\$ 38,4 a \$ 36,1); se incrementan un 2,1% los de aquellos trabajadores con empleo precario (\$ 30,5 a \$ 31,1); y disminuye 12% la media de ingreso horario de los que tienen subempleo inestable (\$ 20,8 a \$ 18,3). En estos últimos, la intensificación de la jornada de trabajo amortigua la caída de los ingresos mensuales. En el mismo período es importante destacar la tendencia a la baja relativa del ingreso horario de los trabajadores del sector público en relación con los del sector privado. Entre los trabajadores del sector privado formal, la media de ingreso horario aumentó 9,6% (\$ 35,7 a \$ 39,1); en los del sector privado informal, disminuyó 3,8% (\$ 26,8 a \$ 25,8); y en los del sector público, disminuyó 22% (\$ 47,6 a \$ 37,2). Esto se debe, presumiblemente, al aumento de la proporción de beneficiarios de políticas activas que se identifican como trabajadores del Estado y declaran un ingreso relativamente bajo para el sector público (figura 3.4.8).

3.5 RESUMEN DE RESULTADOS

Entre 2010 y 2012, el porcentaje de población económicamente activa con empleo pleno de derechos descendió muy poco: de 44,5% a 44%; la desocupación, de 11,2% a 9,3%; mientras que el empleo precario se mantuvo en 35,3% y el subempleo inestable ascendió de 9% a 11,3%. Se evidenciaron en este aspecto la persistencia de un sector informal (que en 2012 alcanzó al 48,2% de los ocupados), la heterogeneidad de la estructura productiva y las limitadas posibilidades de acceso a un trabajo decente. En el marco de un mercado de trabajo segmentado, para el conjunto de los ocupados la marginalidad laboral afectó principalmente a los integrantes del hogar que no son jefes, a los jóvenes y a los adultos mayores, así como a los habitantes de villas o asentamientos precarios, a los residentes en el Gran Buenos Aires y a los que no culminaron los estudios secundarios.

La alta rotación entre períodos de empleo y desocupación continúa siendo preocupante. Entre 2010

y 2012, el porcentaje de activos que no tuvo continuidad laboral en el último año se mantuvo en valores cercanos al 24%, mientras que entre los ocupados se sostuvo la tendencia a demandar más horas de trabajo. Como posible consecuencia de los bajos ingresos horarios y de trabajos a tiempo parcial involuntarios, en todo el período analizado el porcentaje de ocupados que expresaron su necesidad de trabajar más horas aumentó de 23,8% a 26,1%, en tanto las condiciones laborales insatisfactorias determinaron que el porcentaje de ocupados con deseo de cambiar de trabajo se estabilizase en valores cercanos al 25%.

A pesar de las campañas para promover la registración laboral, entre 2010 y 2012 el porcentaje de ocupados sin realización de aportes al Sistema de Seguridad Social se incrementó de 47,2% a 49,4%. Dentro del grupo de asalariados, en el mismo lapso, la falta de registro laboral se estabilizó en valores cercanos al 30%, es decir que perduran en forma elevada las contrataciones laborales no declaradas. Por otro lado, las inserciones de baja calidad en las actividades por cuenta propia determinaron que el 72,4% de estos trabajadores no realizara sus aportes jubilatorios. La falta de participación en el Sistema de Seguridad Social, que se encontró ampliamente extendida, se presentó además asociada a un factor estructural como es la inserción sectorial, siendo esto independiente de las características sociodemográficas, educativas e incluso socioeconómicas de los trabajadores.

La falta de participación en el Sistema de Seguridad Social condicionó el acceso a la cobertura de salud y limitó la asistencia médica de algunos trabajadores a los servicios brindados por el sistema público. Entre 2010 y 2012, sin embargo, disminuyó de 33,2% a 30,6% el porcentaje de ocupados carentes de cobertura de salud proveniente de obra social, mutual o prepaga (independientemente de si esta cobertura se originaba en forma personal o familiar). Por otra parte, la falta de afiliación sindical de los asalariados sigue siendo relativamente elevada. En 2012, un 58,2% los asalariados declararon no poseer afiliación a sindicatos. La determinación de las afiliaciones parece deberse a cuestiones estructurales y organizativas de las unidades de producción, así como a la historia laboral de los trabajadores adultos y la precariedad laboral.

Las dispares evoluciones de los ingresos laborales reales, según la fuente de origen del índice de actualización aplicado, evidencian la necesidad de

seleccionar deflatores confiables para un análisis consistente de las retribuciones al trabajo. Con esta premisa, entre 2010 y 2012 la media de ingresos laborales mensuales registró un incremento de 3,6% (pasó de \$ 3.982 a \$ 4.127). En el mismo período se observa una importante disparidad en la evolución de los ingresos según la calidad del empleo: el promedio de ingresos mensuales de los trabajadores con empleo pleno de derechos aumentó el 4,2% (\$ 5.004 a \$ 5.215); el promedio de los de empleo precario, el 9,2% (pasó de \$ 3.236 a \$ 3.533); mientras que el de los ocupados en subempleos inestables disminuyó el 5% (\$ 1.850 a \$ 1.757).

Entre 2010 y 2012, los ingresos horarios mostraron una disminución real de 4,5% (pasando de \$ 33,5 a \$ 31,9), en tanto que las variaciones fueron dispares según la calidad del empleo: la media de ingreso horario de los trabajadores con empleo pleno de derechos disminuyó 5,9% (de \$ 38,4 a \$ 36,1); para los

precarios, aumentó 2,1% (de \$ 30,5 a \$ 31,1); y para los trabajadores con subempleo inestable disminuyó 12% (de \$ 20,8 a \$ 18,3).

Por medio de los indicadores utilizados, en los tres años sometidos a análisis se verificó la hipótesis de la existencia de condiciones de heterogeneidad en la estructura productiva y del funcionamiento segmentado del mercado de trabajo, dos componentes generadores de desigualdad e inequidad. En líneas generales, dicha realidad fue en desmedro de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los trabajadores sin secundario completo, los pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos y los residentes en villas o asentamientos precarios, así como en desmedro de los ocupados en el sector informal de la economía. Estos son los grupos sobre los que deben concentrarse las políticas públicas para lograr saldar las injusticias económicas y sociales con el propósito de evitar la cristalización de las inequidades.

3.6 NOTA DE INVESTIGACIÓN:

Los jóvenes y el empleo

EDUARDO DONZA

La situación laboral de los jóvenes presenta, en comparación con los adultos, mayores desventajas e incumplimientos de derechos. Esta es una particularidad de la mayoría de los mercados de trabajo, por lo cual la problemática del desempleo y la precariedad laboral juvenil es una preocupación constante de los organismos internacionales, gobiernos y estudiosos del tema. Habitualmente, en los períodos de crisis los jóvenes son los primeros en perder sus puestos de trabajo y los últimos en reinsertarse durante los períodos de expansión económica. Los factores que influyen en su dispar situación son múltiples: la nula o escasa experiencia laboral; el perfil precario de los puestos de trabajo que se les suele ofrecer; el menor costo relativo de salida, asociado a la menor antigüedad; la escasa adquisición de competencias laborales en el puesto de trabajo; la preferencia social de preservar en los puestos a los trabajadores con familiares a cargo. He aquí algunos de los determinantes de la desocupación o del empleo de baja calidad de los jóvenes (Jacinto y Chitarroni, 2010; Lépre y Schleser, 2005; OIT, 2011; Salvia, 2008; Vezza y Bertranou, 2011).

En la Argentina, en el área urbana relevada por la EDSA-Bicentenario, en 2012 la tasa de desocupación de los jóvenes entre 18 y 24 años fue de 21,9, la cual triplicó la de la población de 25 años y más, que fue de 7,3 (figura 3.6.1).

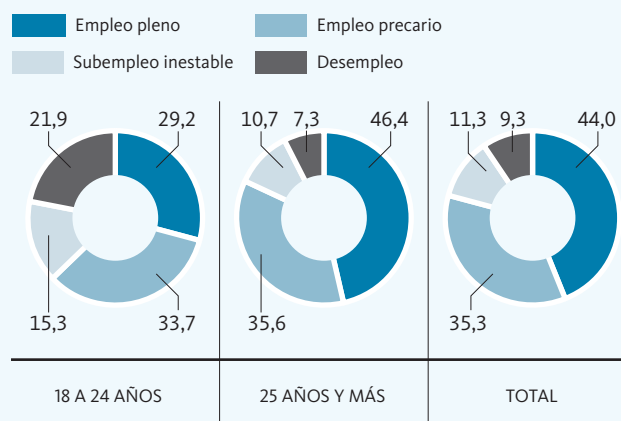
Para ambos grupos de edad, la desocupación registró gran disparidad según el sexo, siempre en amplio desmedro de las mujeres. Concretamente, las mujeres de entre 18 y 24 años presentaron una tasa de desocupación de 31,6, mientras que para los varones de ese tramo de edad fue de 16,3. Considerando a los mayores de 24 años, esta diferencia se mantuvo: para las mujeres la desocupación fue de 10,6 y para los varones de 4,8. Las altas tasas de desocupación femenina se dan pese a que las mujeres participan del mercado de trabajo en menor medida que los varones: la tasa de actividad de las mujeres entre 18 y 24 años fue de 49,6, en tanto que la de los varones de ese tramo de edad fue de 72,2. Con similar disparidad, la tasa de actividad de los mayores de 24 años fue de 52,6 para las mujeres y de 84,3 para los varones.

Los jóvenes no sólo mostraron poseer menores posibilidades de inserción laboral, sino también que el empleo que consiguen resulta, en promedio, de menor calidad. De

Figura 3.6.1

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN EDAD

Años 2012. En porcentaje de población económicamente activa de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

la población económicamente activa, solo el 29,2% de los jóvenes logró insertarse en un empleo de calidad, mientras que lo logró el 46,4% de los adultos (figura 3.6.1)⁷⁴. Considerando a los ocupados, solamente el 37% de los jóvenes logró insertarse en un empleo pleno de derechos, mientras que lo hizo el 50% de los adultos.

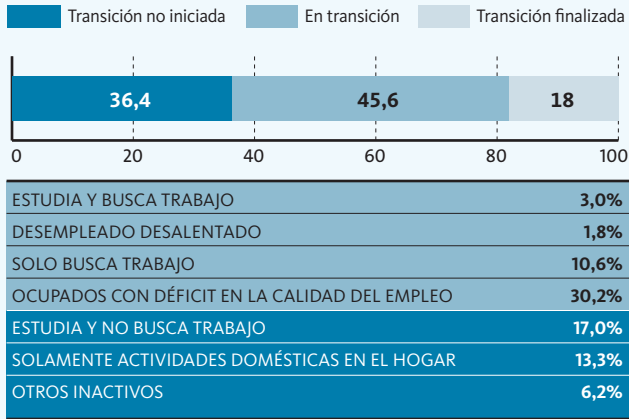
Desde un punto de vista teórico pueden identificarse “distintos estadios del vínculo de los jóvenes con el mercado de trabajo, según el grado y perfil de participación” (Vezza y Bertranou, 2011). Bajo la premisa de la necesidad del cumplimiento de los derechos laborales, se puede identificar un primer conjunto de jóvenes que constituyen un “grupo de transición” al empleo pleno de derechos y que poseen problemas en el mercado de trabajo (ya sea por su carencia o déficit de calidad). Un segundo grupo con una “transición no iniciada” que no participa del mercado de trabajo por dedicarse exclusivamente al estudio, a las tareas del hogar o a alguna otra fuente de inactividad. Y por último, un grupo de jóvenes con una “transición finalizada” hacia el empleo pleno. A partir de esta clasificación, en el área urbana relevada por

⁷⁴ Los elevados niveles de no registro que presentan los jóvenes han significado una menor protección de la seguridad social contributiva. Es importante advertir, además, la elasticidad que se observa entre los niveles de registro de los jóvenes y los ciclos económicos: las cotizaciones de jóvenes hasta 24 años al Sistema Integrado Previsional Argentino “alcanzaron un máximo de unos 925.000 jóvenes a fines de 2007, descendiendo paulatinamente durante 2008 hasta registrar 770.000 jóvenes en septiembre de 2009. En diciembre de 2010, 790.000 jóvenes realizaron sus aportes al sistema de seguridad social” (Vezza y Bertranou, 2011, p. 34).

Figura 3.6.2

DISTRIBUCIÓN DE LOS JÓVENES SEGÚN SU VÍNCULO CON EL EMPLEO

Año 2012. En porcentaje de población entre 18 y 24 años



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

la EDSA-Bicentenario, en 2012 el 36,4% del total de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad no participaba del mercado de trabajo; un 45,6% estaba ocupado pero no en un empleo de calidad; y apenas el 18% había finalizado la transición a un empleo pleno de derechos (figura 3.6.2).

Una de las causas principales de la no participación de los jóvenes en el mercado de trabajo es que se encuentran en un trayecto de formación por medio de la culminación de los estudios formales (17% del total). Estos jóvenes, al terminar sus estudios, verán ampliadas las posibilidades de obtener un trabajo de calidad. Para completar las causas de no participación, conviene añadir que, según la encuesta, el 13,3% de los jóvenes realiza solamente actividades en el hogar, y el 6,2% presenta otras causas de inactividad (figura 3.6.2).

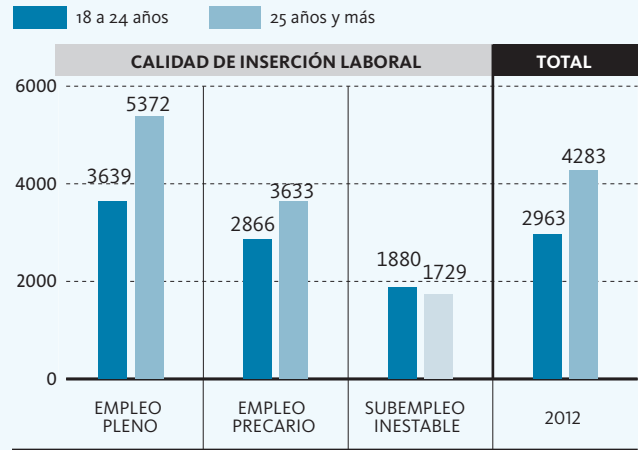
El grupo de jóvenes que se encuentra “en transición”, es decir, movilizado para lograr un empleo pleno de derechos, está constituido en mayor parte por los ocupados en empleos precarios o subempleos inestables, que representan un 30,2% del total de jóvenes. Completan este grupo los que solo buscan trabajo (10,6% del total), los que estudian y buscan trabajo (3%) y los desalentados en la búsqueda de trabajo (1,8% del total de jóvenes) (figura 3.6.2).

Los salarios de los jóvenes son a menudo más bajos que los que perciben los adultos. En 2012 el promedio de ingresos laborales mensuales de los jóvenes es 30,8% menor que el de los adultos (\$ 2.963 y \$ 4.283, respectivamente). Las diferencias se originan por diversos factores, tales como la capacitación laboral, la experiencia, la antigüedad en el empleo, los niveles de educación formal y formación profesional. Una

Figura 3.6.3

MEDIA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES SEGÚN EDAD

En pesos de diciembre de 2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

disminución de la brecha de la media de ingresos laborales entre jóvenes y adultos se observa al disminuir la calidad del empleo: los jóvenes con empleo pleno ganaban 32,3% menos que los adultos con igual calidad de empleo (\$ 3.639 y \$ 5.372). Esta brecha disminuye a 21,1% en el caso de los jóvenes con empleo precario (\$ 2.866 y \$ 3.633). Por el contrario, los jóvenes con subempleo inestable tuvieron un promedio de ingresos laborales mensuales 8,7% más elevado que los adultos con la misma categoría (\$ 1.880 y \$ 1.729) (figura 3.6.3).

Igualmente, el ingreso horario medio de los jóvenes (\$ 29,8) resultó 7,6% inferior al de los adultos (\$ 32,2). En cuanto a la brecha de ingresos horarios, esta se evidencia dispar según la calidad del empleo: los jóvenes con empleo pleno ganan 38,2% menos que los adultos con igual calidad de empleo (\$ 23,1 y \$ 37,4). Contrariamente, los jóvenes con empleo precario presentan un ingreso horario medio 26,8% mayor que para los adultos (\$ 38,1 y \$ 30,1); y en el caso de los jóvenes con subempleo inestable, esta brecha se amplía a 40,7% respecto de los adultos en la misma condición laboral (\$ 24 y \$ 17,1) (figura 3.6.4). Una de las interpretaciones posibles de esto es que en gran parte de los puestos precarios o de subempleo inestable la retribución horaria está asociada a la productividad: los jóvenes pueden desarrollar una actividad laboral más intensa que aumenta el nivel de retribución horaria del trabajo a destajo (figura 3.6.4).

Lo expuesto anteriormente evidencia que la situación laboral de los jóvenes está signada por las dificultades de acceso al trabajo, y especialmente a un empleo de calidad. Los antecedentes sobre el tema indican que esta si-

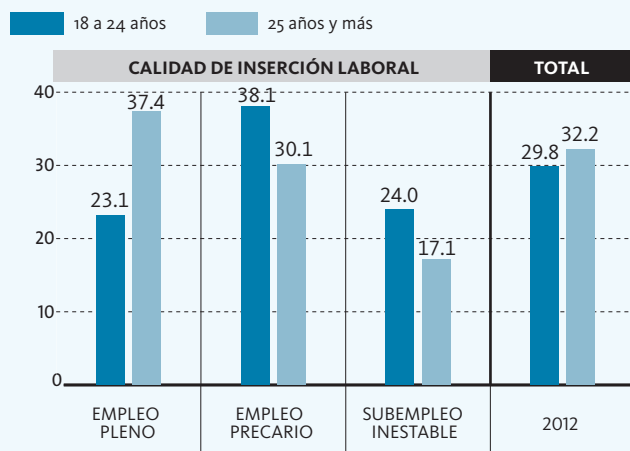
tuación se agrava en los períodos de menor crecimiento económico y/o de pérdida de puestos de trabajo que impactan en mayor medida en los jóvenes.

Contemplando la situación actual, se observa que las políticas públicas focalizadas en los jóvenes o que pueden incluirlos resultan importantes pero aún no del todo eficientes. Entre las mismas sobresalen los programas que combinan una mejora de la empleabilidad con transferencia de recursos (como el Programa de empleo Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el plan Argentina Trabaja), y los orientados al fortalecimiento de la empleabilidad (respecto de la educación formal, la formación profesional y la promoción de una cultura emprendedora y autoempleo) y el desarrollo de las actividades de la Red de Oficinas de Empleo Municipales. No obstante, estas medidas tomadas deben ser fortalecidas por un esquema general de prácticas laborales que faciliten la inserción de los jóvenes en el escenario laboral, ámbito que muchas veces sienten como ajeno.

Figura 3.6.4

MEDIA DE INGRESO HORARIO SEGÚN EDAD

En pesos de diciembre de 2012.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

CAPÍTULO 4

ESTADO Y ATENCIÓN DE LA SALUD, RECURSOS PSICOLÓGICOS Y CAPACIDADES SOCIALES

SOLANGE RODRÍGUEZ ESPÍNOLA

CON LA PARTICIPACIÓN DE: GUIDO SIMONELLI, DANIEL PÉREZ CHADA, DANIEL P. CARDINALI Y DANIEL E. VIGO

Según la perspectiva del Desarrollo Humano, la desigualdad en el acceso a la estructura de oportunidades afectaría no solo los logros materiales, sino también las características psicológicas relacionadas con la capacidad de agencia y el bienestar personal (al respecto, puede consultarse el Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie Bicentenario, Años I y II).

La noción de “agencia” es definida como una capacidad de las personas para lograr las metas de desarrollo que se proponen, consistentes con las propias elecciones y decisiones (Sen, 2000). Además, la capacidad de agencia no es concebida en términos individualistas, por cuanto sus componentes esenciales lo constituyen las relaciones sociales y familiares con las que una persona cuenta (Doyal y Gough, 1994).

Los problemas de salud, tanto física como mental, dificultan la toma de decisiones y reducen la posibilidad de cambio de las personas. La salud puede entenderse como un estado integral de bienestar –físico y mental– en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La Primera Conferencia Mundial de Promoción de Salud en Ottawa, que tuvo lugar en 1986, propone una combinación de estrategias específicas referidas a la salud: acciones del Estado (políticas pú-

blicas saludables), de la comunidad (acción comunitaria), de los individuos (desarrollo de hábitos y capacidades personales) y acciones del sistema de salud (reorientación de servicios de salud).

Por otra parte, al estudiar el Desarrollo Humano es importante notar la influencia de los diferentes determinantes de la salud, en particular los de carácter socioeconómico, psicosocial y ambiental. El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las que todos puedan vivir lo más saludablemente posible. En este marco, está ampliamente aceptado que el bienestar subjetivo constituye un derecho social fundamental de las personas (ver más información al respecto en las publicaciones del Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie Bicentenario, Años I y II). De ahí el creciente interés hacia los recursos derivados de los vínculos sociales y hacia la integración entre las relaciones interpersonales y la salud.

Sobre la base de los antecedentes referidos, y sin pretensión de exhaustividad en los postulados, consideramos que una adecuada asistencia, prevención y percepción de salud, así como la posibilidad de plantearse proyectos personales; la percepción de control sobre la propia vida; tener juicios positivos acerca de las propias capacidades para afrontarla; el sentimiento de felicidad; la ausencia de soledad; la percepción de paz espiritual y la percepción de apoyo

social son todos componentes de relevancia para estudiar la agencia y el bienestar de las personas. Sin embargo, el desarrollo de estas características o atributos psicosociológicos puede verse obstaculizado por un contexto desfavorable, pues muchos de ellos se modelan socialmente (Bandura, 1986). En tal sentido, es esperable que las situaciones sostenidas de vulnerabilidad social obstaculicen los logros personales y afecten la salud y el bienestar personal.

Siguiendo estos postulados, en el estudio de los problemas que afectan el desarrollo humano y social en el caso argentino es más que pertinente preguntarse en qué medida nuestra sociedad genera, permite y potencia el desarrollo de una adecuada salud, dotada de los recursos psicológicos personales necesarios para el bienestar humano y la integración social. En este marco, el interrogante que se abre es: ¿en qué forma las desigualdades sociales atraviesan los recursos, capacidades de agencia y condiciones de salud de las personas, generando como rasgo estructural una serie de brechas psicosociales que tienden a reproducirse entre los distintos períodos generacionales?

El presente capítulo evalúa el modo en que influyeron los cambios ocurridos a partir del inicio del Bicentenario y los años subsiguientes. Se analizan los períodos 2010, 2011 y 2012 sobre los atributos mencionados, considerando que en el primer bienio la posición relativamente más favorable del país en materia sociodemográfica y económica mejoró la situación dadas las condiciones macroeconómicas, la asistencia pública y las mayores regulaciones introducidas, concluyendo en un modelo político cuyos líderes fueron reelegidos. Sin embargo, se vuelve en el año 2012 a un clima de incertidumbre social por el descenso en el desarrollo de la economía y la progresiva suba de precios, demostrando una conducta inflacionaria que repercutió en el consumo y la adquisición de bienes y servicios, y que afligió sobre todo a los sectores sociales más débiles.

El análisis de estas cuestiones se apoya en los resultados brindados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina del Bicentenario 2010-2016 administrada en personas mayores de 18 años, a partir de los cuales se hace un análisis comparado, en 2010, 2011 y 2012, de la atención, el cuidado y la percepción de la salud, la falta de competencias cognitivas, los sentimientos de soledad, la falta de paz e infelicidad, así como de la ausencia de contención social. De manera integrada, también se examinan una serie de características individuales referidas al género, la edad, las condiciones socioeducativas, sociodemográficas y socioeconómicas y las del entorno residencial, en procura de identificar dispositivos que, como factores sociales de riesgo, potencian el deterioro de los mencionados indicadores.

Se presentan en la figura 4.1, a modo de cuadro esquemático, las dimensiones, variables e indicadores de la salud, los recursos psicológicos y la vida social analizados a lo largo de este capítulo.

En líneas generales, se brinda un análisis descriptivo de la evolución interanual, examinando en todos los casos las incidencias porcentuales y las variaciones interanuales expresadas en puntos porcentuales (p.p.) para cada dimensión e indicador. Además, se hace un estudio de tipo explicativo, utilizando modelos de regresión logística para inferir las posibles predicciones de variables estructurales bajo las cuales se reproduce la deuda social en la Argentina. La exposición se completa con una nota de investigación (4.5) que trata de manera novedosa cuestiones referidas a la calidad del sueño y el impacto en la salud según aspectos sociodemográficos.

Por último, cabe informar que los datos estadísticos completos empleados para la elaboración de este capítulo se encuentran disponibles en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina (www.uca.edu.ar/observatorio).

FIGURA 4.1: ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE SALUD, RECURSOS PSICOLÓGICOS Y VIDA SOCIAL

4.1 ESTADO, ATENCIÓN Y HÁBITOS DE SALUD		
DÉFICIT DE ESTADO DE SALUD PERCIBIDO	Estado general de salud percibido por las personas desde una noción que integra las dimensiones física, biológica y psicológica.	Porcentaje de personas que dice tener problemas de salud o padecer enfermedades crónicas.
MALESTAR PSICOLÓGICO	Mide el déficit de las capacidades emocionales de las personas que permiten responder a las demandas ordinarias de la vida cotidiana, desenvolverse socialmente y tener relaciones satisfactorias con los otros.	Porcentaje de personas que obtuvo puntuaciones que indican riesgo moderado o alto de malestar psicológico en la escala KPDS-10.
NO REALIZAR UNA CONSULTA MÉDICA	Mide la falta de asistencia a una visita profesional médica para realizar control, prevención o tratamiento.	Porcentaje de personas que afirma no haber realizado una consulta médica durante el último año.
ÚLTIMA ATENCIÓN MÉDICA EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO	Información en la que se discrimina si el entrevistado dijo haber utilizado un sistema de atención médica público en su última consulta.	Porcentaje de personas que acudió a efectores públicos de salud en la última consulta médica durante el último año.
HÁBITO DE FUMAR	Práctica donde una sustancia es quemada y luego inhalada por medio de la combustión que desprenden las sustancias activas como la nicotina y es absorbida por el cuerpo a través de los pulmones.	Porcentaje de personas mayores de 18 años que dijo fumar algunos cigarrillos (manufacturados o armados) por semana o todos los días.
DÉFICIT EN LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO	Se considera ejercicio físico el conjunto de acciones motoras musculares y esqueléticas. Habitualmente se asocia a cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar del individuo.	Porcentaje de personas mayores de 18 años que afirmó no realizar ejercicio físico por lo menos una vez por semana.
4.2 RECURSOS PSICOLÓGICOS PARA EL BIENESTAR SUBJETIVO		
AFRONTAMIENTO NEGATIVO	Afrontamiento evitativo o pasivo, en el que predominan conductas destinadas a evadir pensar en la situación problemática, sin realizar intentos activos por afrontar o tratar de resolver la situación.	Porcentaje de población de 18 años y más que presenta un predominio de estrategias de afrontamiento evitativo o pasivo.

CREENCIA DE CONTROL EXTERNO	Creencia acerca del grado en que la propia conducta es o no eficaz para modificar positivamente el entorno. Expresan creencias de control externo quienes se sienten a merced del destino y consideran que sus conductas están exteriormente dirigidas.	Porcentaje de población de 18 años y más que presenta un predominio de creencia de control externo.
DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES	Percepción de incompetencia para proponerse metas y objetivos en procura de su bienestar personal.	Porcentaje de población de 18 años y más que indicó no poder proponerse proyectos personales.
SENTIRSE NADA O POCO FELIZ	Percepción negativa del estado de ánimo que produce en la persona una sensación de insatisfacción y tristeza en su vida.	Porcentaje de población de 18 años y más que dice sentirse poco o nada feliz en su vida.
SENTIRSE SOLO	Percepción de soledad, de sentir que no se tiene a nadie a quien acudir.	Porcentaje de población de 18 años y más que dijo sentirse solo “todo el tiempo” o “muchas veces”.
NO SENTIR PAZ	Percepción de no encontrar paz espiritual en su interior.	Porcentaje de población de 18 años y más que afirma no sentir paz espiritual en su interior.

4.3 CAPACIDADES SOCIALES DE AGENCIA

NO TENER AMIGOS	Percepción de no tener amigos al preguntar la cantidad de amigos íntimos que la persona cree tener.	Porcentaje de población de 18 años y más que afirma no tener amigos.
SENTIRSE DISCRIMINADO	Percepción de ser segregado, menospreciado o tratado de manera distinta impidiendo o anulando el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad.	Porcentaje de población de 18 años y más que dijo sentirse discriminado por otros.
NO CONTAR CON GENTE QUE LO AYUDE ANTE UN PROBLEMA	Percepción de no contar con otras personas para hablar de los problemas, recibir ayuda en momentos de dificultad y no tener a quien recurrir.	Porcentaje de población de 18 años y más que indicó contar “pocas veces” o “nunca” con gente que lo ayude a resolver problemas.

4.1 ESTADO, ATENCIÓN Y HÁBITOS DE SALUD

Uno de los principales aspectos en los que se ocupa el desarrollo de las capacidades humanas, en un contexto de integración social, es el estado de salud de la población (véanse, para ampliar este tópico, los in-

formes del Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie Bicentenario, Años I y II). En este marco, tanto el estado de la salud como la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad a los servicios de salud públicos son signos de importancia ya que repercuten en una mejor calidad de vida de la población.

Desde una mirada amplia en la concepción de la salud, se describen dos aspectos fundamentales refe-

ridos a la percepción del individuo sobre la presencia de algún padecimiento físico, así como también sobre la identificación de síntomas de depresión y ansiedad. La salud percibida por el individuo permite evaluar la representación que se enclava al aproximarse al estado funcional de la propia persona, incluyendo aspectos no solo físicos sino también emocionales y sociales que se asocian con características sociodemográficas (Robine *et al.*, 2003). Así, entender la salud desde una visión interna del individuo propone una evolución al estimar dicho constructo por aspectos vinculados a la forma de considerar y darle relevancia a la enfermedad desde la posición particular y subjetiva de cada persona, integrando la noción de la salud física y psicológica.

El modelo actual de salud acepta que los factores psicosociales afectan los sistemas corporales, lo cual altera la vulnerabilidad del individuo ante procesos patológicos. En este contexto, el paradigma actual en el área de la salud señala que la calidad del bienestar psicológico y físico depende principalmente de nuestros hábitos de vida. De esta manera, las creencias y actitudes observadas en los hábitos cotidianos constituyen aspectos centrales en el problema de la salud humana.

Ahora bien, es elemental conocer en qué medida la población utiliza los servicios sanitarios y mediante qué tipos de sistemas de atención médica lo hace, dado que dichas características ponen en evidencia las desigualdades y diferencias en el estado y atención de la salud de distintos grupos sociales, a su vez que ofrecen elementos de análisis que orientan la toma de decisiones para la planificación sanitaria, los programas de salud y el gerenciamiento de servicios sanitarios.

Los indicadores de salud representan medidas resúmenes que logran obtener información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud, información que intenta reflejar la situación sanitaria de una población y sirve para tenerla en observación. Estudiar cómo han evolucionado las percepciones de la población sobre el déficit en el estado de salud y malestar referido a síntomas psicológicos, así como la falta de atención médica y los hábitos que inciden en la salud, permite dar cuenta de las desigualdades referidas a la estratificación y a las diferencias sociales y condiciones que se circunscriben al entorno de los individuos.

ESTADO DE LA SALUD

DÉFICIT DE ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

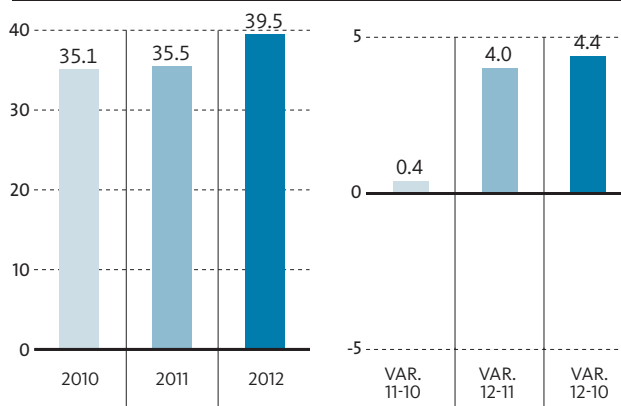
A continuación se presentan los datos que aportan evidencia sobre la distribución diferencial de la salud en los distintos segmentos poblacionales seleccionados. El indicador que indaga el estado de salud construido por la apreciación, percepción o autovaloración que la persona dijo tener de su salud sirve para obtener una aproximación a la creencia que cada individuo tiene de su situación frente a la salud-enfermedad, incluyendo aspectos tanto físicos como psicológicos. De esta manera, las respuestas de los encuestados a la pregunta de cómo consideran su estado de salud sirve para distinguir a aquellos que dijeron tener problemas de salud graves o crónicos, considerándolo como un déficit en el estado de salud.

A lo largo de la serie, los datos evidencian que 3 de cada 10 personas padecen algún tipo de problema de salud grave o enfermedad crónica. En el conjunto de la población urbana, el indicador sufrió un incremento en el año 2012, cuando se reporta mayor déficit (39,5%) en comparación con el bienio 2010-2011, donde los valores se mantiene casi semejantes (35%). La mayor diferencia de variación del estado de salud percibido de los encuestados se observa entre 2010 y 2012, con 4,4 p.p., como puede verse en la figura 4.1.1.

Figura 4.1.1

DÉFICIT DE ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

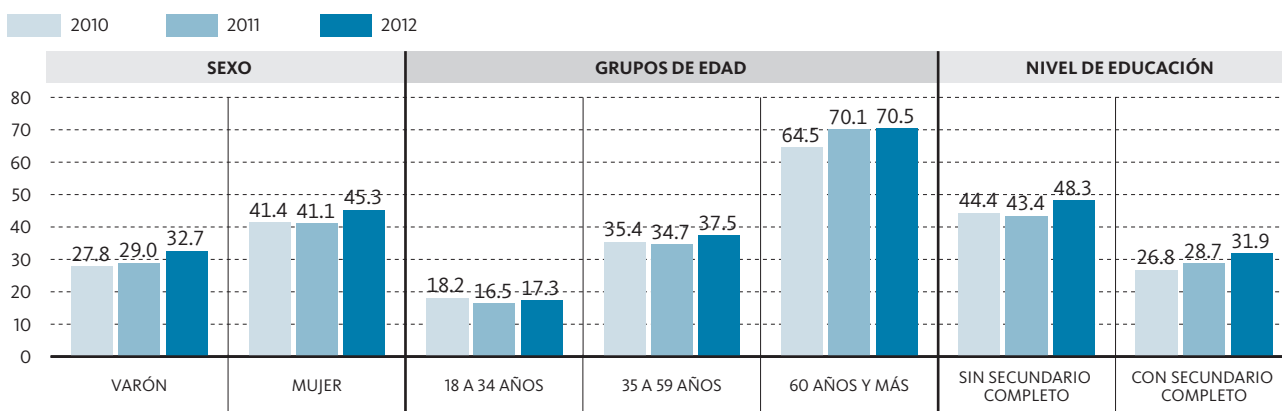


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Figura 4.1.2

DÉFICIT DE ESTADO DE SALUD PERCIBIDO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Al analizar las diferencias de la percepción negativa de salud según las características individuales de los entrevistados (figura 4.1.2), las brechas son más notorias. A lo largo de toda la serie, y respecto de los varones, las mujeres demostraron mayor déficit en su salud: 41% en 2010 y 2011, llegando a 45,3% en 2012. En los varones, la referencia a padecer una enfermedad grave o crónica se incrementó en la serie de manera escalonada: 27,8% en 2010, 29% en 2011 y 32,7% en 2012.

La declaración de un estado de salud deficitario se eleva a medida que aumenta la edad del encuestado, lo cual es previsible. El grupo de 18 a 34 años revela menor déficit en su salud, con valores casi estables a lo largo de los tres años (18,2%, 16,5% y 17,3%, respectivamente). El segundo grupo, de 35 a 59 años, en 2010 y 2011 muestra un comportamiento similar, aunque con porcentajes más elevados (35%) y un incremento leve en 2012 (37,5%). No sucede lo mismo con las personas de 60 años y más, ya que el porcentaje es menor en 2010 (64,5%); pero luego se eleva y permanece aproximadamente en 70% durante el último bienio. Así, las diferencias generacionales de los grupos marcan un déficit en su estado de salud que se presenta en 2 de cada 10 personas jóvenes y en 4 de cada 10 adultos de 35 a 59 años, llegando a incrementarse a 7 de cada 10 adultos de 60 años o más.

Los individuos con secundario completo reportaron menores porcentajes de padecimiento de enfermedades graves o crónicas que los de nivel secundario incompleto. En 2010 se observan los valores

más bajos en ambos grupos (26,8% y 44,4%, respectivamente), mientras que se incrementan a 31,9% y 48,3% en 2012. Si bien los datos indican en la serie un aumento del déficit de salud en los encuestados con secundario completo (5,1 p.p.), los sectores con menor nivel educativo reflejan mayor déficit entre 2010 y 2012, con un incremento de 3,9 p.p.

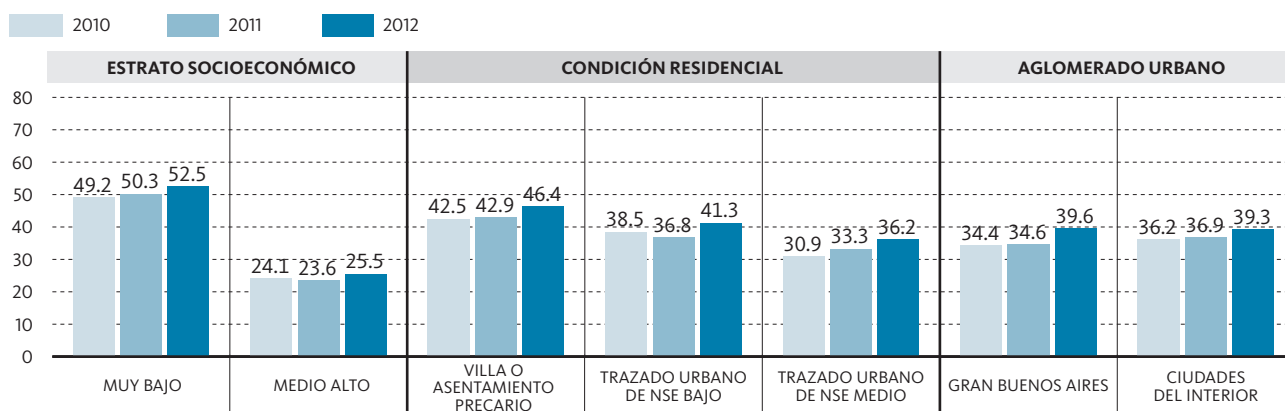
Cuando se examinan los niveles y la evolución de la percepción del estado de salud según el estrato social al que pertenecen los individuos, se aprecia un incremento del déficit en 3,3 p.p., de 2010 a 2012, entre los segmentos más pobres, teniendo el doble de malestar en su salud (cercano al 50% en los tres períodos) que el estrato medio alto (24% aproximadamente).

Los datos ilustrados en la figura 4.1.3 confirman cómo los individuos, comparados según la condición residencial, tienen diferentes percepciones de su salud. Los encuestados de una villa o asentamiento precario evidenciaron más déficit en su estado de salud que los que viven en barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo, e incluso más déficit que los residentes en barrios con trazado urbano de NSE medio. El mayor valor se registra en el año 2012 para los residentes en villas o asentamientos (46,4%, si bien durante los períodos anteriores el déficit de estado de salud se había mantenido en 42%). Los sujetos que viven en barrios con trazado urbano de NSE bajo, en 2010 registran un déficit de salud de 38,5%, el cual disminuye levemente en 2011 (36,8%) para alcanzar el mayor índice en 2012

Figura 4.1.3

DÉFICIT DE ESTADO DE SALUD PERCIBIDO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

(41,3%). Los residentes en barrios con NSE medio incrementan anualmente su déficit en el estado de salud percibido a lo largo del trienio, reportando el mayor valor en el último año analizado (30,9%, 33,3% y 36,2%, respectivamente). Comparar el Gran Buenos Aires con las Ciudades del Interior del país revela similitudes en los déficits en el estado de la salud durante 2010 y 2011 (34% y 36%, respectivamente), pero el porcentaje se eleva en 2012 (39%).

MALESTAR PSICOLÓGICO

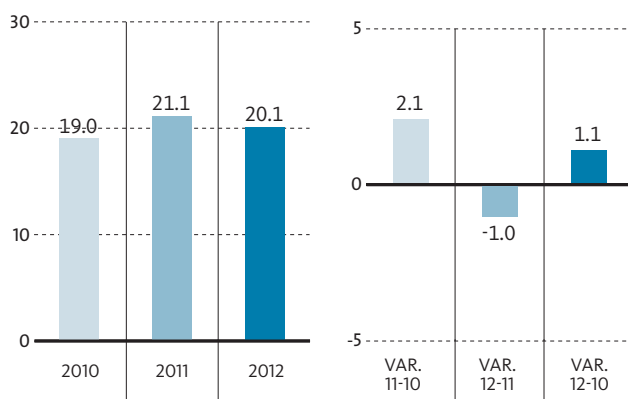
En sentido amplio, el concepto de malestar psicológico se entiende como un déficit en los recursos emocionales y cognitivos de las personas, carencia que afecta las capacidades para responder a las demandas ordinarias de la vida cotidiana, para desenvolverse socialmente y para tener relaciones satisfactorias con los otros, concluyendo en la disminución de la capacidad de salud.

A efectos de estimar el malestar psicológico, en el marco de este estudio, los participantes responden una escala, que evalúa el estado de salud mental general e inespecífico, conocida como KPDS-10 (en inglés: Kessler Psychological Distress Scale). Esta escala, que constituye una medida dimensional del malestar psicológico, indaga un conjunto de síntomas vinculados a la depresión y la ansiedad, tales como inquietud, agitación, desesperanza, tristeza, cansancio y nerviosismo (Brenlla y Aranguren, 2010). Sus resultados indican la probabilidad de ma-

Figura 4.1.4

MALESTAR PSICOLÓGICO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

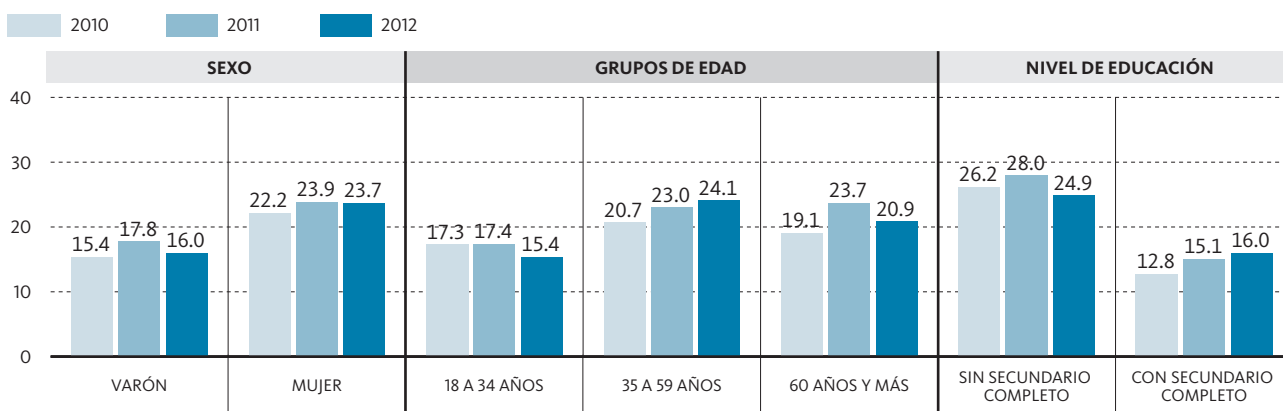
lestar psicológico pero no determinan si se presenta un trastorno depresivo o ansioso.⁷⁵

75 La KPDS-10 es una versión abreviada que cuenta con diez ítems y mide un conjunto de síntomas relacionados con depresión y ansiedad. Se responde teniendo en cuenta cómo se sintió el entrevistado en el último mes, en una escala tipo Likert de cinco puntos (todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, a veces, pocas veces y nunca). Según el puntaje total obtenido, podemos clasificar la sintomatología del individuo en riesgo moderado o alto de padecer malestar psicológico, considerando una puntuación de 24 como punto de corte para la variable.

Figura 4.1.5

MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

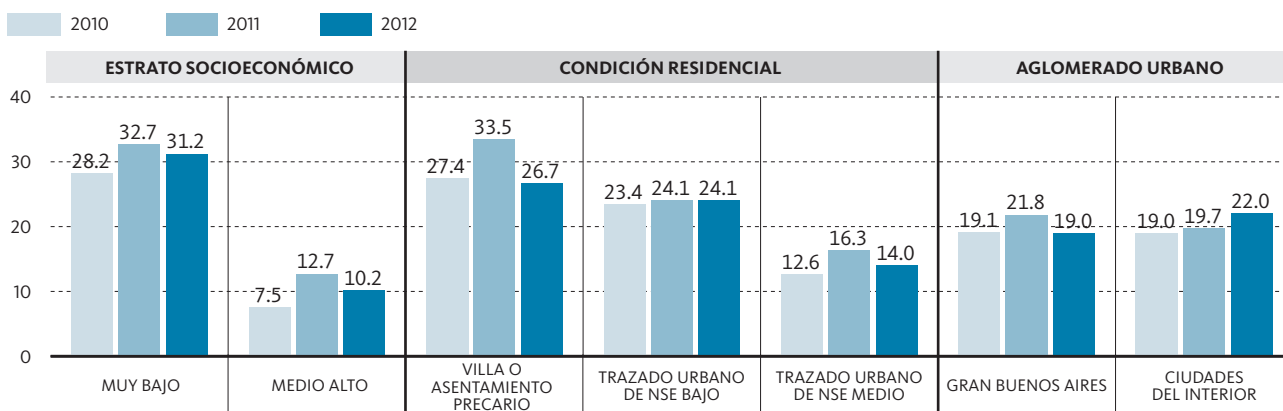


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.1.6

MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

En la figura 4.1.4 se puede observar el malestar psicológico analizado según la evolución de los años 2010, 2011 y 2012. Si bien 2 de cada 10 personas refirieron un déficit en su salud por presentar sintomatología ansiosa y depresiva, las diferencias entre el primer año (19%) y el segundo (21,1%) revelaron un incremento de 2,1 p.p., mientras que en el último año ese déficit disminuye tenuemente (20,1%).

Analizando las características sociodemográficas de la población a lo largo del trienio, se observa que existen diferencias por género en el malestar psicológico.

Así, las mujeres informan un déficit de 22,2% en 2010, cifra que se eleva a 24% en 2011 y conserva casi el mismo valor en 2012, presentando mayor malestar psicológico que los varones: 15,4%, 17,8% y 16% (en los años respectivos). La sintomatología ansiosa y depresiva, según los distintos grupos de edad, se muestra estable en los más jóvenes durante los dos primeros años (17%) y disminuye en 2 p.p. en el último año (15,4%). En el grupo de los adultos de 35 a 59 años, este déficit se incrementa comparativamente con el grupo anterior y año a año (obteniendo 3,4 p.p. de

distancia entre 2010 y 2012). La figura 4.1.5 registra las diferencias porcentuales del malestar psicológico en los adultos de mayor edad entre los distintos períodos, logrando el valor más alto de la serie en 2011 (23,7%) para caer en 2,8 p.p. en 2012 (20,9%).

Las condiciones educativas, socioeconómicas y residenciales de los individuos, que se describen en la figura 4.1.6 y en AE 4.1.2, ponen de relieve que quienes cuentan con estudios secundarios completos y con condiciones socioeconómicas y residenciales más elevadas tienden a presentar menor malestar psicológico que aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeducativa y residencial, resultado que ha sido persistente a lo largo de la serie. Las diferencias más manifiestas se observan al reportar 1 de cada 10 entrevistados: inquietud, agitación, desesperanza, tristeza, cansancio y nerviosismo entre los pertenecientes al estrato socioeconómico medio alto: 7,5%, 12,7% y 10,2% para cada año de la serie; y entre los que viven en un barrio con trazado urbano de NSE medio: 12,6%, 16,3% y 14%, respectivamente. El malestar psicológico se triplicó entre los adultos residentes en una villa (27,4% en 2010, 33,5% en 2011 y 26,7% en 2012) o que pertenecen a un estrato socioeconómico muy bajo (28,2%, 32,7% y 31,2%, respectivamente).

Los resultados obtenidos según la distinta región del aglomerado urbano en general no arrojan diferencias notorias, pero las desigualdades interanuales marcan mayor malestar psicológico en el año 2011 (21,8%) para los habitantes del Gran Buenos Aires, volviendo en 2012 a los valores encontrados en 2010 (19%); en cambio, en las Ciudades del Interior se observa un leve incremento interanual desde 2010 hasta el último año (19%, 19,7% y 22%, respectivamente).

ATENCIÓN DE LA SALUD

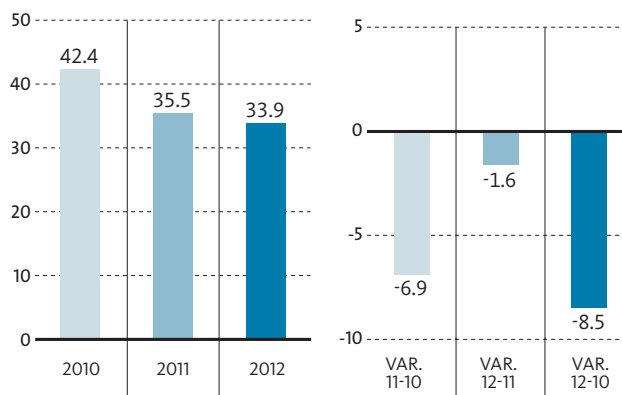
NO REALIZAR UNA CONSULTA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

La visita a un profesional médico, ya sea por control, prevención o tratamiento, suele ser un indicador de cuidado sobre la propia salud. La finalidad de una evaluación médica periódica se basa en la detección precoz, la evaluación de los factores de riesgo, la prevención, el tratamiento y el consecuente alcance de niveles de vida satisfactorios. En definitiva, un chequeo

Figura 4.1.7

NO REALIZÓ UNA CONSULTA MÉDICA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

consiste en un examen integral e individualizado del estado de salud que incluye aspectos físicos y psíquicos.

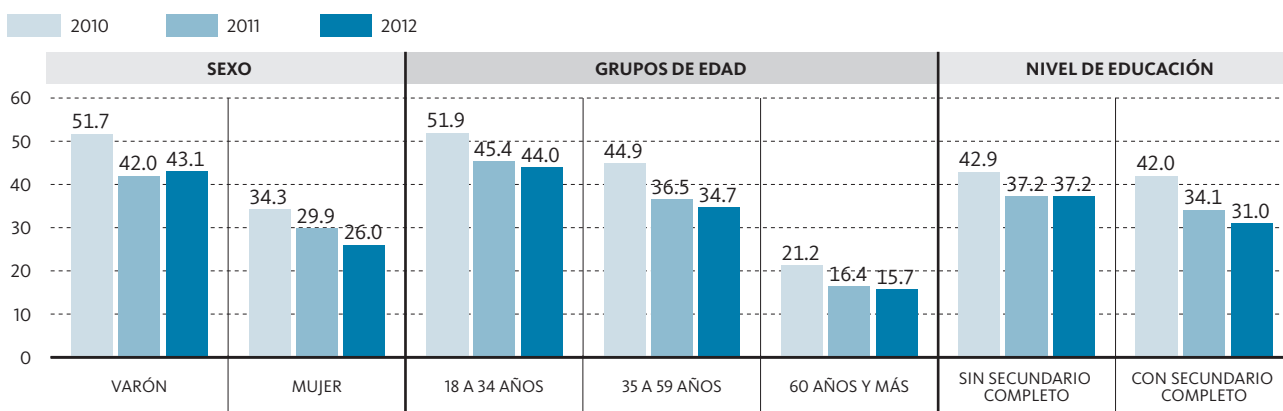
El principal beneficio que aportan estos exámenes médicos reside en que permiten diagnosticar enfermedades en fases iniciales, cuando todavía no se han manifestado síntomas, como es el caso de algunas patologías cardiovasculares, degenerativas o tumorales. Por este motivo, la diversidad de personas para las que estaría indicada una consulta médica incluye desde aquellas que no presentan síntomas, hasta las que manifiestan determinadas molestias o enfermedades ya diagnosticadas. Una actitud positiva respecto de la salud indica que siempre es mejor prevenir las causas de las dolencias que solucionar sus consecuencias cuando la enfermedad ya es un hecho. Por lo tanto, se considera un déficit en el cuidado y la atención de la salud no realizar como mínimo una consulta médica anual, aun cuando no haya problemas evidentes o percibidos de salud, puesto que es una necesidad sanitaria primordial que incide en el desarrollo humano.

De los datos ilustrados en la figura 4.1.7 se desprende que la falta de una visita médica anual sufrió un decremento en la serie histórica analizada. Mientras que el 42,4 % de los encuestados en 2010 dijo no haber asistido a una consulta médica, en 2011 se mejora este déficit (35,5%) y vuelve a disminuir en 2012 (33,9%), demostrando un notorio cambio en la concurrencia al chequeo médico (-8,5 p.p. entre 2010 y 2012).

Figura 4.1.8

NO REALIZÓ UNA CONSULTA MÉDICA SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

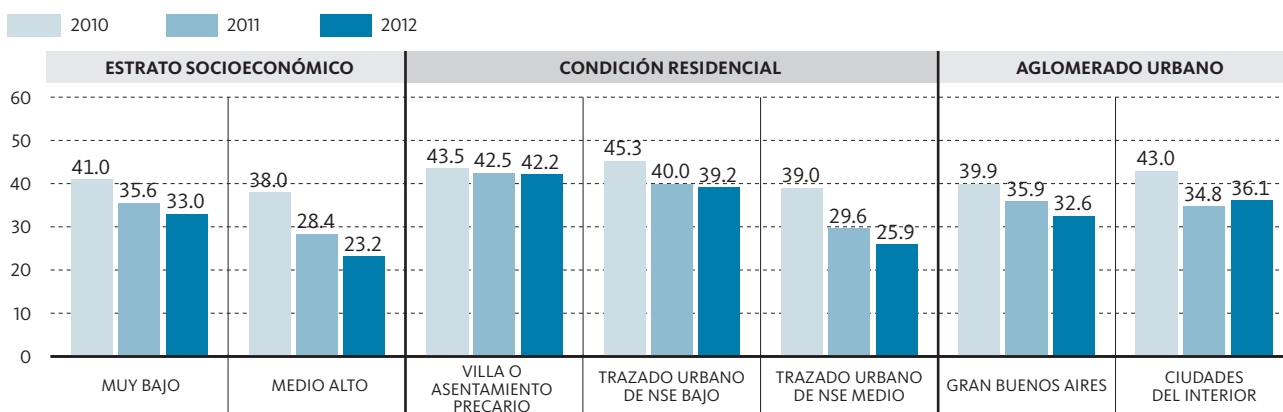


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.1.9

NO REALIZÓ UNA CONSULTA MÉDICA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

En lo que respecta a la distribución según el género del encuestado, la no asistencia a la consulta se ve incrementada en 2010, registrándose en 5 de cada 10 varones (51,7%), sobre todo en comparación con los años subsiguientes (cerca del 40% en 2011 y 2012); en tanto que en las mujeres el déficit se presenta en 3 de cada 10, disminuyendo gradualmente (34,3%, 29,9% y 26%) en cada año respectivo de la serie.

Las diferencias según los grupos de edad son las esperables, manifestando ir habitualmente a la consulta médica las personas de mayor edad (21,2% en 2010,

16,4% en 2011 y 15,7% en 2012) y llegando a presentar un déficit de visita médica anual la mitad del total de los encuestados más jóvenes (51,9%, 45,4% y 44%, respectivamente). Como puede apreciarse en la figura 4.1.8, la mayor diferencia interanual se da en los adultos de 35 a 59 años, que descienden 10,2 p.p. su déficit de 2010 a 2012.

Además, en los años estudiados se siguieron observando diferencias según el nivel educativo alcanzado. En 2010 ambos grupos presentan un déficit cercano al 42%; sin embargo, en los encuestados que no lle-

garon a culminar la enseñanza secundaria, la falta de atención médica en los años siguientes persiste (37,2%), mientras que en el grupo de los que completaron el secundario el déficit en el indicador decrece en ambos años posteriores (34,1% y 31%, respectivamente), mostrando una diferencia de -11 p.p.

Analizando el período 2010-2012, se advierte un decrecimiento generalizado en la falta de atención médica anual según aspectos socioeconómicos y la condición de residencia. Como permite apreciar la figura 4.1.9, los adultos agrupados en el estrato muy bajo reducen el déficit en el indicador al pasar de 41% en 2010 a 33% en 2012. Pero el grupo del estrato medio alto, sin bien presenta valores menores de déficit, demuestra una notable disminución en la falta de consulta médica de -14,8 p.p. en los años extremos de la serie (38% y 23,2% respectivamente). Ahora bien, 4 de cada 10 entrevistados residentes en una villa o asentamiento precario mantienen la conducta de no asistir a una consulta, resultado casi sin diferencias interanuales; en tanto que los residentes en barrios de trazado urbano de NSE medio muestran una marcada disminución del déficit: de 39% en 2010, pasan a 29,6% en 2011 y 25,9% en 2012, obteniendo -13,1 p.p. de diferencia entre el primer y el último año. Por su parte, el aglomerado urbano de residencia muestra una diferencia entre 2011 y 2012 en las Ciudades del Interior relevadas, cuyos entrevistados incrementan en 1,3 p.p. la no asistencia a la consulta médica. Por último, los residentes del área urbana comprendida por el Gran Buenos Aires logran disminuir el déficit año a año: 39,9% en 2010, 35,9% en 2011 y 32,6% en 2012.

CONDICIONANTES DEL ESTADO Y LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Las diferencias y desigualdades en la salud, observadas en numerosos indicadores, por ejemplo el de déficits en el estado físico y psicológico de la salud o la falta de atención médica, llevan lógicamente a preguntarse cuáles son los condicionantes multidimensionales que inciden en las desigualdades estructurales para que algunas personas puedan disfrutar de una calidad de vida saludable y otras no. Por otro lado, es preciso verificar si los cambios producidos entre 2010 y 2012 han sido significativos a la hora de pretender mayores y mejores condiciones en la salud.

El déficit del estado de salud percibido, el malestar psicológico y la falta de atención médica durante el último año de la serie son las variables dependientes que buscan ser explicadas en términos de la fuerza con que factores sociodemográficos, socioeconómicos y temporales inciden en pasar de una situación de déficit o falencia (1) a una de no déficit (2). Con este fin se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de presentar problemas graves o crónicos de salud, síntomas de ansiedad y depresión, o de no asistir por lo menos a una consulta médica durante el último año. La calidad de predicción lograda por cada uno de los modelos se mide por medio del porcentaje de coincidencia entre el valor observado y el valor esperado por la predicción. El potencial de determinación se evalúa por medio de los R cuadrados de Cox y Snell, y de Nagelkerke. La determinación de las categorías sociales con más relevancia se realiza utilizando el coeficiente *B* y su significancia; y la chance de poseer uno u otro atributo al interior de las categorías sociales, por medio de la razón de momios o “Exp (B)” (razón de probabilidades u odds ratio) que expresa la desigualdad relativa cuando hay un cambio unitario en el valor de una variable independiente manteniendo constante el efecto de las restantes.

La figura 4.1.10 presenta los principales resultados de las regresiones, con los coeficientes *B*, el exponente de *B* y la significancia, que permiten evaluar el aporte predictivo de cada una de las variables independientes, los coeficientes del déficit del estado de salud percibido, el malestar psicológico y la falta de atención médica, dando cuenta del grado de ajuste del modelo desde una perspectiva estadística.

El modelo I, que analiza al déficit del estado de salud percibido, alcanzó una buena capacidad de predicción (70,9% del total de la población de 18 años y más). En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, se reconoce que el estrato socioeconómico, el tipo de aglomerado, la edad, el sexo, el nivel educativo y los años bajo análisis son los principales factores explicativos del estado de salud de la población adulta urbana, siendo la condición residencial y la jefatura de hogar factores estadísticamente no significativos en presencia de las otras variables.

Figura 4.1.10

RAZONES DE PROBABILIDAD DE DÉFICIT DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO, MALESTAR PSICOLÓGICO O NO REALIZAR UNA CONSULTA MÉDICA SEGÚN CATEGORÍAS SOCIALES SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. Población de 18 años y más. Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B)).

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	DÉFICIT DEL ESTADO DE SALUD		MALESTAR PSICOLÓGICO		NO CONSULTA MÉDICA	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	0,564 ***	1,76	0,552 ***	1,74	-0,634 ***	0,53
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-1,112 ***	0,33	-0,255 ***	0,78	0,397 ***	1,49
35 a 59 años (c)						
60 y más	1,127 ***	3,09	-0,348 ***	0,71	-1,060 ***	0,35
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,229 ***	1,26	0,192 ***	1,21	-0,036	0,96
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	-0,054	0,95	-0,322 ***	0,72	-0,136 ***	0,87
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,291 ***	1,34	0,423 ***	1,53	0,194 ***	1,21
Bajo	0,389 ***	1,48	0,750 ***	2,12	0,438 ***	1,55
Muy bajo	0,787 ***	2,20	1,078 ***	2,94	0,319 ***	1,38
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	-0,022	0,98	0,045	1,05	0,005	1,00
Villa o asentamiento precario	-0,083	0,92	0,017	1,02	0,059	1,06
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	0,254 ***	1,29	0,379 ***	1,46	-1,138 ***	0,32
Grandes Areas Urbanas	-0,168 ***	0,85	0,360 ***	1,43	-0,108 ***	0,9
Resto Urbano	0,160 ***	1,17	0,284 ***	1,33	-0,503 ***	0,6
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,251 ***	1,29	0,143 ***	1,15	-0,334 ***	0,72
2012	0,447 ***	1,56	0,071	1,07	-0,406 ***	0,67
CONSTANTE	-1,525 ***	0,22	-2,520 ***	0,08	0,226 ***	1,25
R cuadrado de Cox y Snell	0,052		0,052		0,117	
R cuadrado de Nagelkerke	0,261		0,082		0,159	
Porcentaje global de aciertos	70,9		60,0		64,1	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

En comparación con los adultos de 35 a 59 años, los jóvenes presentan 67,1% menos probabilidades de encontrarse enfermos, mientras que los adultos mayores triplican las chances de tener problemas de salud. Del mismo modo, en comparación con el cociente de probabilidades de los varones, ser mujer eleva considerablemente las chances de padecer una enfermedad (75,8%).

La propensión a presentar déficit en su estado de salud disminuye marcadamente en la población conforme

se desciende en la estratificación social: comparados con los individuos que forman parte del estrato medio alto, los del estrato socioeconómico muy bajo poseen más del doble de chances de tener problemas de salud; los de estrato bajo aumentan a 47,5%; en tanto que los de estrato medio bajo tienen 33,8% más posibilidades. Además, los que tienen menos nivel educativo llegan a 25,7% más chances de déficits en su salud que quienes completaron los estudios secundarios. En todos los casos se trata de

factores que intervienen de manera significativa incluso controlando el fuerte efecto que presenta la edad.

Por último, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de tener problemas graves o crónicos de salud aumentan un 17,4% para los habitantes del Resto Urbano y un 29% para los encuestados del Conurbano Bonaerense, mientras que disminuyen un 15,5% en otras grandes áreas metropolitanas.

Observando el trienio en cuestión y tomando como referencia el año 2010, los análisis de regresión revelan diferencias significativas en las probabilidades del déficit del estado de salud. Según la información disponible, mientras que en 2011 aumentan en 29% las chances de tener problemas de salud graves o crónicos, en 2012 la posibilidad se da en un 56%.

El modelo II (malestar psicológico) alcanzó una capacidad de predicción del 60% en los encuestados. En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, resalta el hecho de que, manteniendo controlados los otros factores intervinientes, los referidos a las características de los individuos, el estrato socioeconómico y el tipo de aglomerado continúan siendo los principales factores explicativos de la percepción del malestar psicológico, siendo la condición residencial del individuo y el período anual de 2012 los factores estadísticamente no significativos en presencia de las otras variables.

En lo que respecta a las diferencias de probabilidad de padecer síntomas de ansiedad y depresión según el género y el nivel educativo, se evidencia que las mujeres (en un 73,7%) y quienes no completaron el secundario (en un 21%) tienen más chances de presentar malestar psicológico. Luego, en comparación con el cociente de probabilidades de los adultos cuya franja etaria va de 35 a 59 años, tanto ser joven como ser adulto mayor reducen las chances de tener déficits en la salud mental (22% y 29%, respectivamente). En igual sentido operan características como no ser jefe de hogar (28%).

La posibilidad de presentar malestar psicológico aumenta de manera considerable a medida que se asciende en la estratificación social de los encuestados. En comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, las personas del estrato socioeconómico muy bajo poseen casi el triple de chances de tener malestar emocional; si bien en el caso de los integrantes del estrato bajo este padecimiento se duplica y los del estrato medio bajo aparecen con 52,8% más probabilidades de padecer síntomas ansiosos y depresivos. En todos los casos, se trata de factores que intervienen

de manera altamente significativa, aún controlando el efecto que demuestran las características individuales del encuestado.

Por último, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, ser residente del Conurbano Bonaerense o de otras Ciudades del Interior (a la vez que se mantiene constante el resto de los factores) aumenta en más de 40% las chances de sufrir malestar psicológico.

La probabilidad de cambios con respecto al año de inicio de la serie se observa solamente en 2011, cuando las chances de padecer malestar psicológico suben un 15,3%.

En cuanto al interés en la atención de la salud que reflejan los entrevistados, el modelo III, aunque con una capacidad predictiva del 64,1%, es robusto para evaluar los factores asociados a la falta de asistencia a la consulta médica periódica. Al respecto, también en este caso se destaca el hecho de que ser mujer y no tener la función de jefe de hogar disminuye las chances de no realizar una consulta médica anual (46,9% y 12,7%, respectivamente). En cuanto a las brechas por edad, como cabía esperar, los adultos mayores de 60 años reducen en un 65,4% las probabilidades de no concurrir a una consulta, mientras que los jóvenes aumentan sus chances en un 48,8% en comparación con los adultos de 35 a 59 años de edad.

Al examinar el resto de los factores evaluados por este modelo, también es ostensible una reducción en los riesgos negativos de no concurrir a una consulta médica anual si el individuo habita en el Conurbano Bonaerense (68%) o en el Resto Urbano Interior (39,5%); aunque también pertenecer a las otras grandes áreas metropolitanas predice en un 10,2% pero con menor fuerza ($p < 0,05$).

En cambio, la incidencia de no asistir a la consulta médica en los estratos socioeconómicos más bajos aumenta en comparación con los de mayor nivel adquisitivo y educativo. Así pues, en tanto para los más pobres la probabilidad de no asistencia se eleva en un 37,6%, en el estrato bajo alcanza un 55%, mientras que entre los encuestados del estrato medio bajo tal probabilidad (no concurrir a una consulta de salud en el último año) alcanza al 21,4%.

También pueden verse diferencias interanuales con respecto a la falta de asistencia a la consulta. En tal sentido, en 2011 se reduce la chance del déficit en un 28,4%, si bien en 2012 se observa una disminución de la probabilidad mayor con respecto a 2010 (33,3%).

ÚLTIMA ATENCIÓN MÉDICA EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO

Reconocer si la última atención médica se realizó en un sistema público o privado permite obtener un perfil de los consumidores de cada subsistema, a la vez que se identifican grupos poblacionales que reciben una calidad de atención desigual. Conviene aclarar aquí que la cobertura de salud que ostenta el hogar, o incluso el individuo, no coincide necesariamente con el sistema utilizado al momento de asistir a la última consulta médica. De ahí que el sistema de salud que se emplee y la calidad diferencial en la atención no puedan evaluarse independientemente del uso que el individuo realiza del mismo.

Como se observa en la figura 4.1.11, durante el período 2010-2012 apelaron a la atención médica en un sistema de salud público 3 de cada 10 personas encuestadas, mostrando valores relativamente estables (27,7% en 2010, 30,2% en 2011 y 28,6% en 2012).

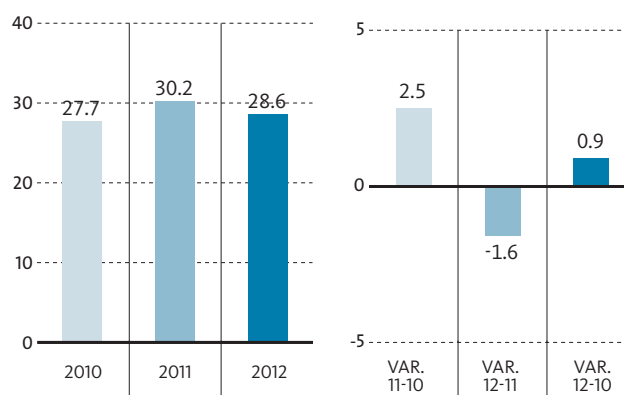
Las mujeres usan más que los varones un sistema público; incluso durante la evolución estudiada puede observarse que incrementaron sus valores (29,2% en 2010, 31,4% en 2011 y 32,2% en 2012). Por el contrario, la población masculina disminuye en 3,6 p.p. del año 2010 al 2012 (26,7% y 23,1%, respectivamente). Asimismo, la atención médica en una entidad de salud pública se diferencia en los grupos de edad, siendo aproximadamente 4 de cada 10 adultos jóvenes los que utilizan este servicio en 2011 y 2012 (37%), disminuyendo levemente entre los de 35 a 59 años (35,8% en 2011 y 31,9% en 2012) y decreciendo a un 14% entre los de 60 años o mayores. El nivel educativo alcanzado también marca una diferencia en el uso de un sistema público de salud. Concretamente, quienes tienen nivel secundario incompleto demuestran haber asistido el doble de veces a un hospital o unidad sanitaria pública que quienes han completado dicho nivel de enseñanza. Por lo demás, según muestra la figura 4.1.12, la utilización de la prestación pública en el análisis evolutivo decreció entre los de mayor nivel de estudios (18% en 2010 a 17,3% en 2012) y aumentó en los encuestados de menor capital educativo (38,7% y 43%, respectivamente para los mismos años).

De la figura 4.1.13 se desprende que la brecha entre las personas pertenecientes a los dos estratos socioeconómicos extremos resulta considerable. En 2010, el 46,3% de los entrevistados del estrato muy

Figura 4.1.11

ÚLTIMA ATENCIÓN MÉDICA EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

bajo concurría a un efector de salud público, frente a tan solo el 6,6% de los pertenecientes al estrato medio alto. Estos valores se elevan y persisten en los más pobres durante 2011 y 2012 (50%) y decrecen en los adultos de mayor poder adquisitivo (5%).

Por otro lado, se observa una tendencia en descenso del uso de un sistema de atención médico público a medida que se avanza en las características socio-residenciales del hogar de los entrevistados. En el ámbito de las villas y asentamientos precarios, esta asistencia médica se vio acrecentada en el análisis evolutivo en 5,4 p.p. entre 2010 (53%) y 2012 (58,4%), de manera opuesta a lo registrado en las zonas residenciales de NSE medio, donde el uso de este sistema de salud disminuye en -1,5 p.p. (pasa de 14,6% en 2010 a 11,9% en 2012).

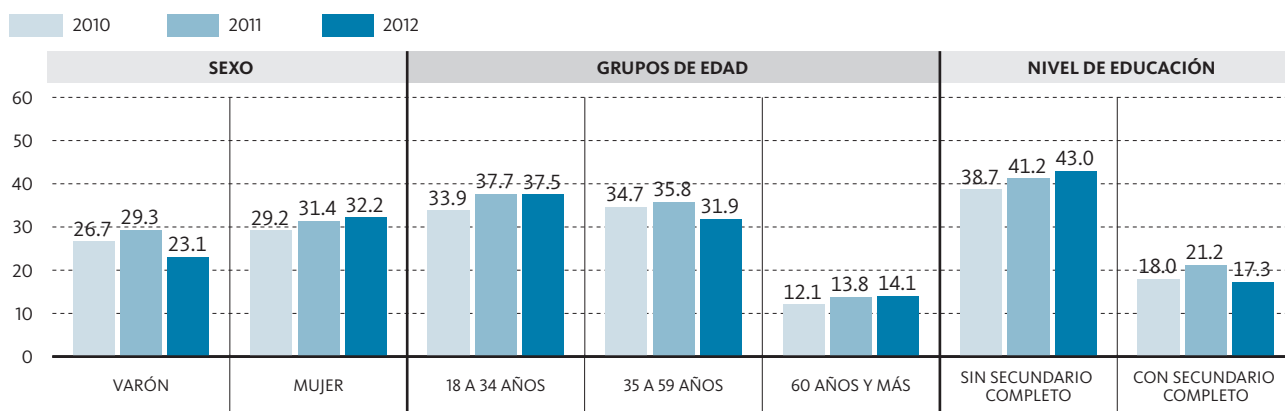
Por último, el análisis según los distintos aglomerados urbanos a lo largo de todo el período revela niveles semejantes de utilización de un sistema público de salud en la última atención recibida. En 2011, los entrevistados pertenecientes al Gran Buenos Aires reconocieron utilizar más unidades sanitarias y hospitales públicos (29,8%) que en 2010 y 2012, cuyo valor se acerca al 28%. Como se puede constatar en la figura 4.1.13, en las Ciudades del Interior consideradas, la atención pública se incrementó anualmente (25,8% en 2010, 28,7% en 2011 y 29,3% en 2012).

Otro indicador que da cuenta de la calidad de la atención en salud es la espera para ser atendido por

Figura 4.1.12

ÚLTIMA ATENCIÓN MÉDICA EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

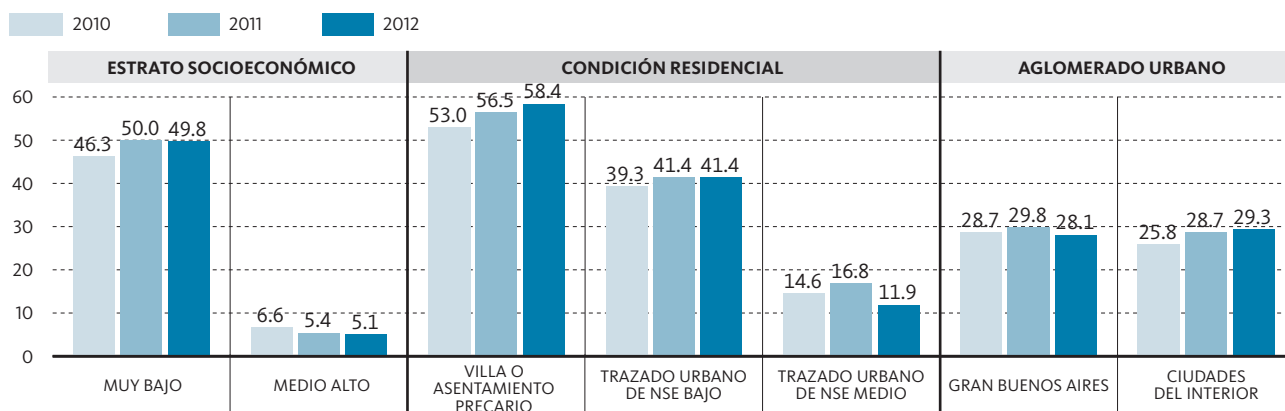


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.1.13

ÚLTIMA ATENCIÓN MÉDICA EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

un profesional médico durante una consulta. Los resultados indican que 4 de cada 10 encuestados dijo esperar más de una hora para ser atendido, reportando 40% en 2010 y 43,5% en 2011, llegando a un máximo valor de la serie analizada en 2012 (44,8%).

Las diferencias más notorias en la espera mayor a una hora para ser atendido por un profesional de la salud se observan según el nivel educativo, el estrato socioeconómico y la condición residencial.

En el anexo estadístico (AE.4.1.7) pueden observarse los detalles según las características individuales, socioeconómicas y residenciales.

HÁBITOS DE SALUD

FUMAR

En la actualidad, el consumo de cigarrillos es un problema de salud pública y la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como “enfermedad”, considerando que ha perjudicado a millones de personas en el mundo, pues el hábito de fumar se ha extendido y afecta a propios y extraños, dejando de ser un problema de salud particular.

El tabaquismo resulta de la acción crónica del consumo de tabaco, incluyendo dependencia física y psicológica, asociado a múltiples consecuencias perjudiciales para la salud. Pero este mal hábito no deriva únicamente en el incremento de la tasa de mortalidad, sino que también tiene consecuencias económicas, afectando el crecimiento y el propio desarrollo de los Estados que lo padecen.

Se incluyó en la EDSA-Bicentenario, en los años analizados para el presente informe, una pregunta en la que el encuestado se describe como fumador y la frecuencia de su práctica. En función de las respuestas brindadas, se pudo discriminar a aquellos que respondieron afirmativamente al consumo de tabaco, ya sea en la forma de cigarrillos manufacturados o armados.

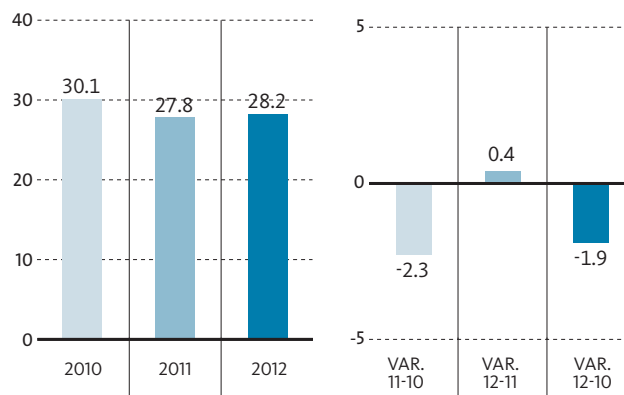
Los resultados obtenidos indican que 3 de cada 10 adultos mayores de 18 años fuman, aunque se observa un decrecimiento mínimo del hábito en los dos últimos años (aproximadamente 28%) con respecto a 2010, que marcó el mayor valor (30,1%). La figura 4.1.14 presenta las variaciones absolutas interanuales al respecto.

Sin embargo, los perfiles de consumo de cigarrillos según las características individuales de los entrevistados son mucho más interesantes. Así pues, el análisis por género y por edad muestra diferencias en el hábito de fumar, siendo las mujeres (aproximadamente en un 24%) y los adultos de 60 años y más (cercano al 16%) los que declararon menos consumo. Sin embargo, la figura 4.1.15 reporta en el último año de estudio que los encuestados masculinos fumaron

Figura 4.1.14

HÁBITO DE FUMAR

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

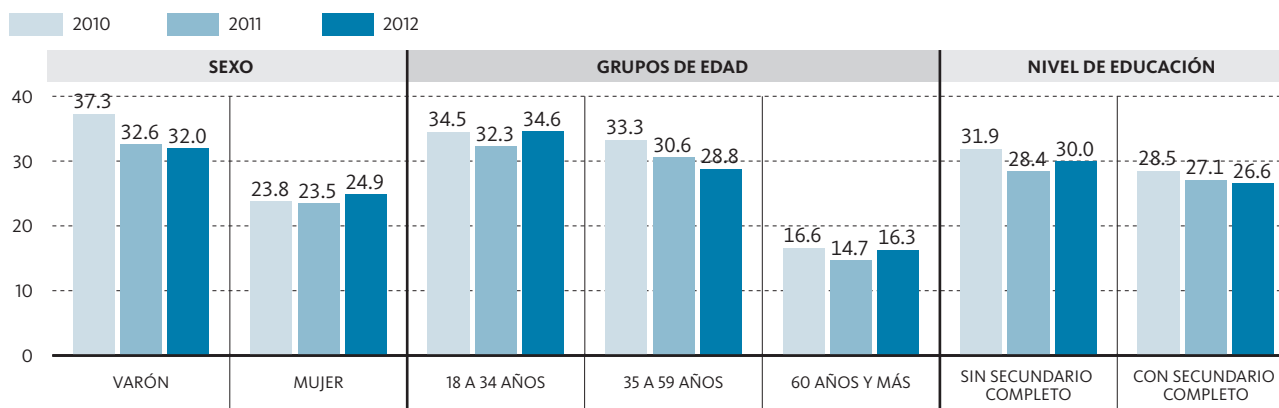
5,3 p.p. menos que en 2010 (32% y 37,3%), mientras que paralelamente las mujeres aumentaron en forma leve su consumo (23,8% y 24,9%). Las diferencias interanuales por edad no son significativas entre los más jóvenes y los mayores; sin embargo, en el grupo integrado por adultos de 35 a 59 años se observa una tendencia decreciente en el hábito de fumar (33,3% en 2010, 30,6% en 2011 y 28,8% en 2012).

En cuanto a las diferencias según educación, estrato socioeconómico, condición residencial y aglomerado urbano, como puede verse en las figuras 4.1.15 y 4.1.16, no

Figura 4.1.15

HÁBITO DE FUMAR SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

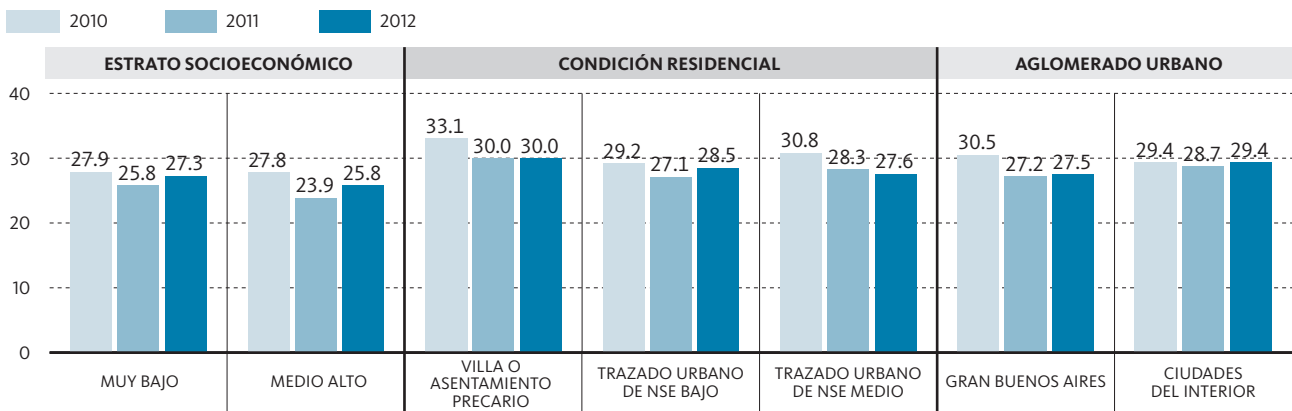


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.1.16

HÁBITO DE FUMAR SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

se evidencian diferencias significativas entre los grupos comparados. Por lo demás, Los detalles de los valores porcentuales obtenidos y las diferencias interanuales se expresan en el anexo estadístico (AE.4.1.5).

DÉFICIT EN LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO

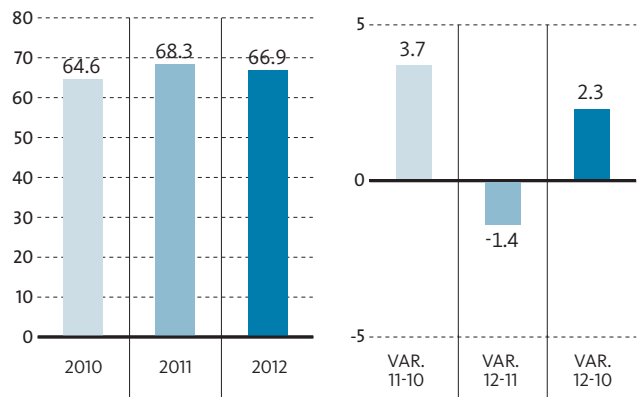
Existen conductas en la rutina diaria de cada individuo que favorecen el desarrollo saludable; el ejercicio físico es una de ellas. Se considera ejercicio físico al conjunto de acciones motoras musculares y esqueléticas –es decir, cualquier actividad física– que mejoran y mantienen la mejor aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. Las razones por las que se puede realizar ejercicio físico son diversas: lograr un fortalecimiento muscular, mejorar el sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, entre otras como realizar prácticas deportivas, reducir la grasa, mantenerse en forma o por simple actividad recreativa.

El ejercicio físico practicado de forma regular y frecuente mejora y fortalece el sistema inmune y osteomuscular, contribuyendo al aumento de la calidad de vida a la vez que prolonga el tiempo socialmente útil de la persona. Además, al mejorar su capacidad física, cardiovascular, ósea y muscular, eleva sus niveles productivos, por lo que retarda los cambios propios de la vejez, mejora el aspecto físico y brinda mayor calidad del sueño. En el área anímica y afectiva, el ejercicio físico promueve el bienestar psicológico, mejorando el estado de ánimo, el concepto de uno mismo, la au-

Figura 4.1.17

DÉFICIT EN LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

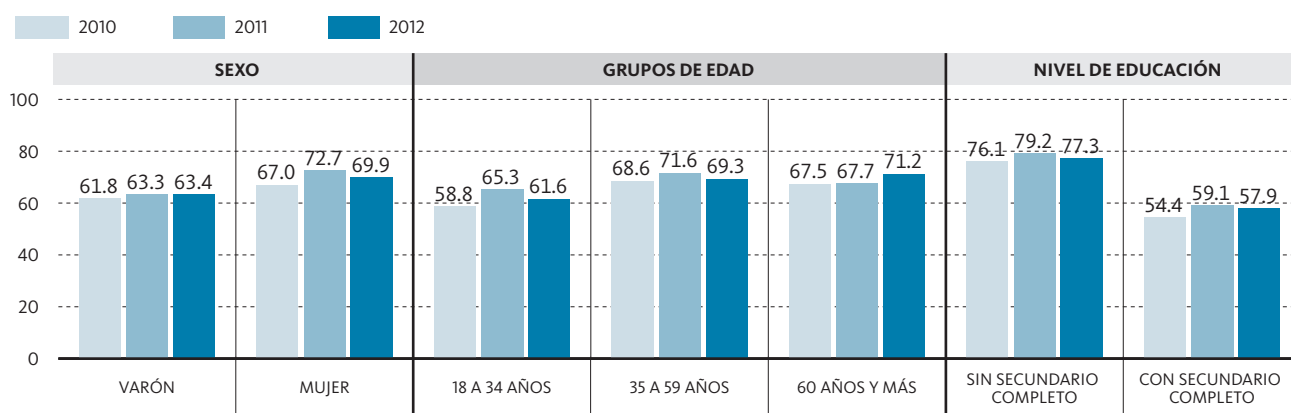
toestima y las habilidades sociales, además de potenciar el funcionamiento cognitivo, aumentar la libido y optimizar la imagen corporal.

En la EDSA-Bicentenario se indagó sobre la frecuencia en la realización de ejercicio físico y los encuestados respondieron en forma de escala si “nunca”, “algunas veces al mes” o “por lo menos una vez a la semana” practicaban deportes, caminatas, gimnasia, etcétera. Por todo lo antedicho, se consideró déficit en el indicador a aquellas respuestas que negaron realizar ejercicio semanalmente, a fin de distinguir a los entrevistados

Figura 4.1.18

DÉFICIT EN LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

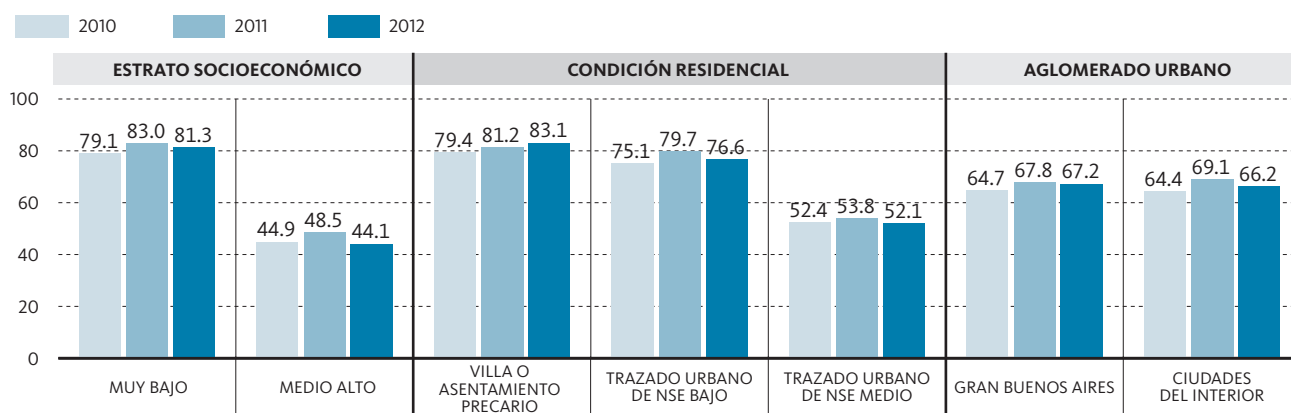


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.1.19

DÉFICIT EN LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

que adhieren a rutinas que previenen, promueven y aportan a una mejor salud, de aquellos que no lo hacen.

Durante todo el trienio, los niveles de déficit en la práctica de ejercicio físico en general son elevados (64,6% en 2010, 68,3% en 2011 y 66,9% en 2012), y si bien el déficit aumenta en el último año, la mayor variación interanual se observa entre 2010 y 2011, con 3,7 p.p. (figura 4.1.17).

Las diferencias en la práctica de ejercicio físico se observan según el género y la edad. Así, 7 de cada 10 mujeres y adultos mayores de 35 años niegan reali-

zar dicho hábito saludable, mientras que aproximadamente 6 de cada 10 encuestados masculinos o de entre 18 y 34 años dijo no realizar actividad física semanalmente. En los varones, el déficit es casi estable a lo largo de la serie; sin embargo, en las mujeres se advierte, con respecto a 2010 (67%), un incremento en 2011 (72,7%), el cual vuelve a descender en 2012 (69,9%). La ausencia de práctica física semanal en los adultos mayores es semejante en el bienio 2010-2011 (67,5%), pero se eleva en 3,7 p.p. en 2012 (71,2%). En la figura 4.1.18 se pueden observar los detalles de los

valores comparativos interanuales de los porcentajes según el género y la edad de la población estudiada.

Sin duda, las mayores brechas por la falta del hábito de ejercitarse físicamente al menos una vez por semana se observaron en las condiciones referidas a aspectos socioeducativos, económicos y residenciales. Las diferencias interanuales marcan una tendencia similar en el año 2011, pero manteniendo un incremento más elevado que en 2010 en el último año analizado. La falta de ejercicio se incrementa a lo largo de la serie en aproximadamente 20 p.p. entre quienes no tiene el secundario completo (76,1%, 79,2% y 77,3%) comparados con los que finalizaron tal nivel de educativo (54,4%, 59,1% y 57,9%).

El déficit de ejercicio físico alcanzó a 8 de cada 10 encuestados que habitaban en una villa o asentamiento precario, o que pertenecían al estrato socioeconómico muy bajo, y a casi la mitad de la población de estrato socioeconómico medio alto o de un barrio con trazado urbano de NSE medio. No se evidencian contrastes significativos en los distintos grupos del aglomerado urbano (la figura 4.1.19 y el AE 4.1.6 exhiben los detalles de las diferencias interanuales para las variables descriptas).

CONDICIONANTES DE ATENCIÓN MÉDICA EN UN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO Y DE LOS HÁBITOS DE FUMAR Y NO PRACTICAR EJERCICIO FÍSICO

Los análisis descriptivos antes analizados nuevamente ponen en evidencia desigualdades en el ámbito de la salud, planteando la necesidad de conocer los factores que potencian o disminuyen las diferencias estructurales e individuales. Se trata de saber, en suma, qué variables inciden en las prácticas que desfavorecen la salud, en la costumbre de asistir a un sistema público mientras que otros concurren a sistemas de salud privados y logran tener hábitos saludables. En este marco, se analizan los cambios producidos entre 2010 y 2012, a fin de conocer si fueron significativos a la hora de pretender una mejor calidad y condición de la salud.

Como en el apartado anterior, se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de fumar,

de no realizar ejercicio físico semanalmente y de utilizar un hospital o servicio de salud público en la última consulta médica. Las variables seleccionadas buscan ser explicadas en términos de la fuerza con que factores sociodemográficos, económicos y temporales inciden en pasar de una situación de falencia a una de no déficit.

El modelo I, que analiza el hábito de fumar, tuvo una capacidad de predicción de 58,4% para el total de la población de 18 años y más. Se verificó que todas las variables utilizadas fueron condicionantes altamente significativos a la hora de analizar la práctica de fumar. Además, en comparación con los adultos de entre 35 y 59 años, los jóvenes elevaron la probabilidad de fumar en un 29%, en tanto que disminuyeron tales chances los adultos mayores (62,7%), las mujeres (28,3%) y no ser jefe de hogar (27,4%).

La posibilidad de fumar se presenta con mayor énfasis en los niveles socioeconómicos inferiores. En comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los incluidos en el estrato socioeconómico muy bajo registran 22,6% de chances de pitar cigarrillos, mientras que en los del estrato bajo las posibilidades ascienden a 32% y entre las personas del estrato medio bajo solo fumaría el 13% ($p < 0,05$). Según la condición residencial, al comparar los barrios por NSE medio y bajo se observa que estos últimos disminuyen en la probabilidad de fumar (18,5%). Si bien, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de tener el hábito de fumar en el Resto Urbano y en el Conurbano Bonaerense se elevan en aproximadamente un 20%.

Al analizar la serie tomando como referencia el año 2010, las regresiones exhiben diferencias significativas en las probabilidades de fumar en 2011 y 2012, decreciendo en torno a un 10%.

El modelo II (no realizar ejercicio físico) alcanzó una capacidad de predicción del 67,1% en los encuestados. Con respecto al año de inicio de la serie, la probabilidad de cambios en el déficit de ejercicio se incrementa un 20,7% en 2011, si bien en 2012 también aumenta la probabilidad en un 10% a un nivel de significación de $p < 0,05$.

En lo que respecta a las diferencias de probabilidad de no tener el hábito de ejercitarse semanalmente, se advierte que los individuos de sexo femenino y los de menor nivel educativo tienen más chances (46,7% y 17%), en tanto disminuyen las probabilidades del déficit de ejercicio físico si no se posee la función de

Figura 4.1.20

RAZONES DE PROBABILIDAD DE DÉFICIT DE FUMAR, NO REALIZAR EJERCICIO FÍSICO O REALIZAR UNA CONSULTA MÉDICA EN UN SISTEMA PÚBLICO SEGÚN CATEGORÍAS SOCIALES SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. Población de 18 años y más. Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B)).

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	FUMAR		NO REALIZAR EJERCICIO		CONSULTA MÉDICA PÚBLICA	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	-0,333 ***	0,72	0,383 ***	1,47	-0,129 **	0,88
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	0,254 ***	1,29	-0,345 ***	0,71	0,224 ***	1,25
35 a 59 años (c)						
60 y más	-0,985 ***	0,37	-0,123 ***	0,88	-1,955 ***	0,14
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,278 ***	1,32	0,157 ***	1,17	0,119 *	1,13
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	-0,320 ***	0,73	-0,123 ***	0,88	0,143 **	1,15
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,123 **	1,13	0,366 ***	1,44	1,392 ***	4,02
Bajo	0,278 ***	1,32	0,666 ***	1,95	2,491 ***	12,08
Muy bajo	0,204 ***	1,23	0,873 ***	2,39	3,116 ***	22,55
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	-0,204 ***	0,82	0,324 ***	1,38	0,175 ***	1,19
Villa o asentamiento precario	-0,144	0,87	0,139 ***	1,15	0,125	1,13
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	0,214 ***	1,24	-0,899 **	0,41	-0,476 ***	0,62
Grandes Areas Urbanas	0,062	1,06	0,234	1,26	0,136 *	1,15
Resto Urbano	0,195 ***	1,22	-0,183	0,83	-0,202 **	0,82
AÑO						
2010 (c)						
2011	-0,111 ***	0,89	0,188 **	1,21	0,174 ***	1,19
2012	-0,075 *	0,93	0,096	1,10	0,103	1,11
CONSTANTE	-0,736 ***	0,48	0,027 ***	1,03	-2,693 ***	0,07
R cuadrado de Cox y Snell	0,045		0,123		0,255	
R cuadrado de Nagelkerke	0,065		0,170		0,364	
Porcentaje global de aciertos	58,4		67,1		75,9	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

jefatura de hogar (11,6%) o si no se pertenece a la franja etaria de 35 a 59 años (29,2% en los jóvenes y 11,5% en los adultos mayores).

La posibilidad del déficit de ejercicio físico aumenta considerablemente en los encuestados a medida que se desciende en la estratificación social. En comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los integrantes de estrato socioeconómico muy bajo duplican las chances de no ejercitarse (Exp (B)= 2,39), si bien en

los sujetos del estrato bajo se elevan considerablemente (94%) y en los del estrato medio bajo aumentan en un 44,2%. Además, vivir en un barrio de NSE bajo, comparado con residir en uno con características de NSE medio, disminuye el déficit del hábito en 38,2%.

El tipo de aglomerado también resulta relevante al tomar como referencia a los encuestados que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, demostrando que los que residen en grandes áreas metropolitanas

umentan en 26,3% sus chances de no practicar ejercicio físico semanalmente, en tanto que disminuyen las probabilidades entre los que viven en el Resto Urbano del país (16,7%), si bien en el Conurbano Bonaerense decrecen notoriamente (59,3%).

El modelo III presenta una alta capacidad predictiva (75,9%) para evaluar los factores asociados a la asistencia a la consulta médica a través de un sistema público de salud. Al respecto, el análisis por género revela que ser mujer disminuye las chances de utilizar un sistema público médico (12%), en tanto que quienes no son jefes de hogar y los que tienen hasta nivel secundario incompleto elevan las chances en aproximadamente 15%.

En cuanto a las diferencias por edad, en los adultos mayores de 60 años disminuyen un 85,8% las probabilidades de usar un sistema de atención de salud público, en tanto que los jóvenes de 18 a 34 años aumentan sus chances en un 25,4%, en comparación con los adultos de 35 a 59 años de edad. Cabe aclarar aquí que la baja incidencia de los adultos mayores en la utilización de un sistema público se debería a que poseen una alta cobertura del servicio social de jubilados y pensionados (PAMI).

Es notorio cómo la propensión en el uso de sistemas públicos médicos en los estratos socioeconómicos más bajos se eleva de manera exponencial en comparación con los de mayor nivel adquisitivo y educativo. En tanto que para los más pobres la probabilidad de usar un sistema público aumenta 22,5 veces más, en el estrato bajo también se incrementa significativamente en 12 chances más, mientras que las personas pertenecientes al nivel medio bajo cuadruplican las posibilidades de atenderse en organismos públicos de salud. De esta manera, como se observa en la figura 4.1.20, las probabilidades de acudir a un hospital o unidad de salud estatal muestran de manera evidente las brechas socioeconómicas en la utilización de políticas y sistemas públicos de salud.

Si se compara con la Ciudad de Buenos Aires, se destaca también una reducción en el uso de sistemas públicos de salud cuando el individuo habita en el Conurbano Bonaerense (38%) o en ciudades del Resto Urbano (18,3%, $p < 0,05$), en tanto que en otras grandes áreas metropolitanas aumenta la predicción pero con menor fuerza (14,5%, $p < 0,1$).

Por último, se destacan diferencias interanuales con respecto a la probabilidad de que la última consulta médica se haya realizado en un sistema público de salud. Así, en 2011 se reduce la chance del indicador en un 19% con respecto a 2010 (figura 4.1.20).

4.2 RECURSOS PSICOLÓGICOS PARA EL BIENESTAR SUBJETIVO

El enfoque del desarrollo humano define el progreso como un proceso donde el principal objetivo es potenciar de forma integral las “capacidades humanas”. Así, el propósito principal del desarrollo es ampliar las opciones de vida de las personas y crear un entorno que les permita gozar de una vida larga, saludable y creativa. Un conjunto de dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y psicológicas modelan el bienestar tanto social como personal; a la vez que tanto la dimensión objetiva como la subjetiva del desarrollo humano son cada vez más necesarias para hacer una evaluación integrada del progreso social y del estado en que se encuentra el bienestar subjetivo de las personas (Rodríguez Espínola y Salvia, 2011).

En este apartado se describen los recursos psicológicos que, expresados a través de percepciones, capacidades y creencias, los individuos poseen para hacer frente a las dificultades. Los resultados remiten a variables que denotan características de personalidad representadas en el locus de control del entorno, las capacidades de afrontamiento y la capacidad de tener proyectos personales. Además, se analizan percepciones que en sus estados óptimos generan emociones positivas placenteras, pero en sus déficits o ausencias producen malestar y deterioro psicológico, por ejemplo no sentir paz interior, el sentimiento de infelicidad y la percepción de soledad.

Desde la perspectiva aplicada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el estilo de afrontamiento constituye el tipo de comportamiento percibido que siguen las personas ante la diversidad de situaciones problemáticas que deben resolver de manera cotidiana, independientemente de la importancia o significación que tenga o pueda darle sujeto a dichas situaciones. Esto implica esperar una cierta consistencia a lo largo del tiempo en el modo en que las personas enfrentan las dificultades.

Otra de las variables consideradas en el análisis es la creencia de control externo, referida a la convicción acerca del grado en que la propia conducta es o no eficaz para modificar positivamente el entorno. Los individuos con creencias de control externo se caracterizan por desestimar la eficacia del propio accionar para cambiar el entorno, ser más influenciados a la

coerción social, tener escasa motivación al logro y bajas expectativas hacia el futuro. Por lo tanto, el locus de control externo se constituye en un factor estratégico clave que incide sobre la capacidad de agencia y el bienestar subjetivo de las personas.

Ahora bien, las personas que se apoyan en la confianza sobre la posibilidad de vencer la adversidad, construyen un afán de logro de objetivos y metas que conducen al progreso personal. Muchas veces se postulan metas que suelen ser inalcanzables, atrayendo la duda en las propias capacidades o incluso abandonando el objetivo propuesto. De este modo, la consecución de un mayor bienestar subjetivo y una mayor capacidad de agencia requieren poder percibir, elaborar, estructurar y dar significado a los proyectos personales (Pervin, 1989).

Alcanzar sentimientos que profundizan en la felicidad, en sentirse en paz consigo mismo y la percepción de no sentir soledad son emociones personales que indagan aspectos subjetivos del desarrollo humano. Estos estados no son características individuales de quienes los experimentan, sino que participan de un proceso dinámico y complejo que va más allá del ámbito privado, convirtiéndose en un problema psicosocial cuando tales percepciones se ven obstaculizadas o disminuidas por un contexto desfavorable. En tal sentido, es esperable que las situaciones constantes de vulnerabilidad social sean un impedimento para alcanzar el bienestar personal. Por lo antes mencionado, cada uno de los indicadores seleccionados constituye una expresión reconocida y elocuente de situaciones de deuda en el campo del bienestar psicológico.

ESTRATEGIAS NEGATIVAS DE AFRONTAMIENTO, INCAPACIDAD DE TENER PROYECTOS PERSONALES Y LOCUS DE CONTROL EXTERNO

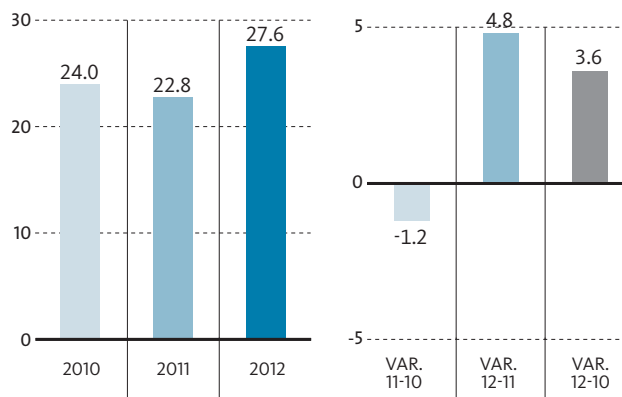
AFRONTAMIENTO NEGATIVO

Las estrategias de afrontamiento constituyen los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que realizan las personas para manejar la tensión psicológica y hacer frente a las situaciones adversas (Lazarus y Folkman, 1986). Los términos, estilos y estrategias de afrontamiento especifican conductas ante procesos de

Figura 4.2.1

AFRONTAMIENTO NEGATIVO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

estrés. En este marco, es posible diferenciar dos tipos fundamentales de afrontamiento: el activo (estrategias orientadas a la solución del problema) y el pasivo- evitativo (afrontamiento negativo). Ambos tipos de estrategias cuentan con dimensiones cognitivas, conductuales y emocionales, pero las negativas se relacionan con el predominio de conductas destinadas a distraer y evitar pensar en la situación problemática, sin realizar intentos activos por tratar de resolver la situación. Este estilo de afrontamiento se caracteriza por la tendencia a minimizar la situación de estrés, ya sea ignorando su existencia, escapando de la misma o evitando tomar la responsabilidad de resolverla.

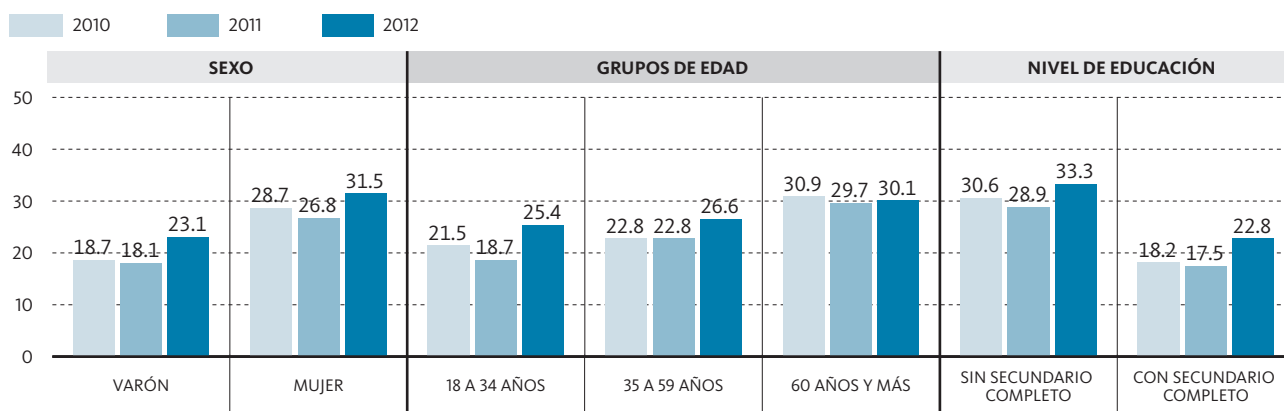
Para el estudio del afrontamiento, la EDSA-Bicentenario incluyó una serie de preguntas sobre el modo conductual percibido que tienen las personas para enfrentar dificultades cotidianas. En este caso, se aborda específicamente el estudio del afrontamiento negativo o evitativo-pasivo, dadas sus consecuencias perjudiciales sobre el desarrollo humano y las capacidades de integración social de las personas. De igual forma que en los indicadores anteriores, resulta relevante evaluar el modo en que los condicionamientos sociodemográficos, socioeconómicos y residenciales predisponen o afectan las capacidades percibidas de afrontamiento al problema de la población adulta objeto de estudio.

El análisis de los resultados totales muestra un incremento del afrontamiento negativo en la po-

Figura 4.2.2

AFRONTAMIENTO NEGATIVO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

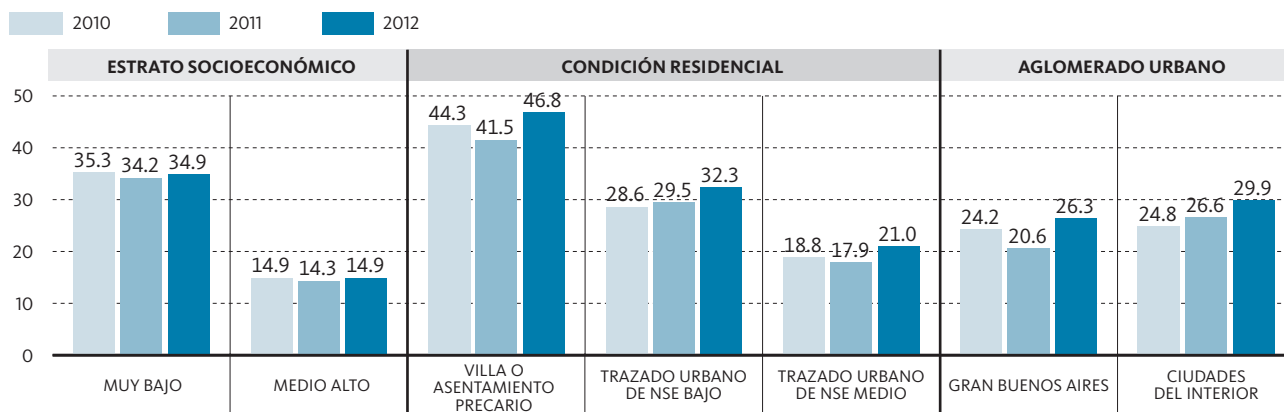


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.2.3

AFRONTAMIENTO NEGATIVO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

blación durante los tres años estudiados; si bien en 2010 se obtiene un 24%, en 2011 desciende en -1,2 p.p. (22,8%), y alcanza en 2012 el mayor valor de la serie con 27,6%. Como se aprecia en la figura 4.2.1, la diferencia en puntos porcentuales fue de 3,6 entre 2010 y 2012.

Sin embargo, el estilo negativo de afrontar la adversidad se eleva en casi todos los grupos sociodemográficos. Las mujeres y las personas de menor nivel educativo mantienen una distancia de casi 10 p.p. en sus perfiles, comparados con los varones o con quienes completaron el secundario. No obstante, el mayor

incremento lo presentan estos últimos, con más de 4 p.p. de distancia entre 2010 y 2012 (18% y 23%). Sin embargo, aunque 3 de cada 10 adultos mayores registraron un estilo de afrontamiento negativo —indicador estable a lo largo de la serie—, en los adultos jóvenes y en los de mediana edad los valores se vieron incrementados en 4 p.p. entre el año de inicio y el final. En la figura 4.2.2 se pueden revisar los porcentajes de las características analizadas.

En materia de afrontamiento por estrato socioeconómico, las brechas psicológicas tampoco experimentaron alteraciones interanuales significati-

vas, aunque la frecuencia de este afrontamiento se eleva en los más pobres (35%) con respecto a los de mayor capacidad socioeconómica (15%). Afrontar la adversidad con estrategias evitativas se observa en casi la mitad de los encuestados que viven en una villa o asentamiento precario, mientras que solo se informa en 2 de cada 10 residentes de barrios con trazado urbano de NSE medio, observándose un incremento mayor a 2 p.p. entre los años extremos de la serie para cada grupo residencial (44,3% versus 18,8% en 2010 y 46,8% versus 21% en 2012). Tal como demuestra la figura 4.2.3, los aglomerados urbanos no mantuvieron distancias porcentuales significativas, pero en las Ciudades del Interior el incremento interanual fue constante (24,8%, 26,6% y 29,9%, respectivamente), mientras que en el Gran Buenos Aires desciende el indicador en 2011 (20,6%) y vuelve a elevarse en 2012 (26,3%) con respecto a 2010 (24,2%). Este análisis se amplía con detalles en AE 4.2.1.

DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES

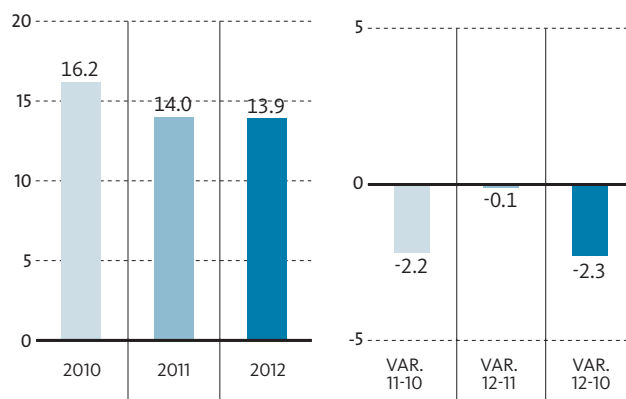
En consonancia con el enfoque del desarrollo humano, se pretende “construir” capacidades que permitan a los individuos ser agentes de sus vidas. Así pues, las capacidades son socialmente construidas pero individualmente apropiadas, además de ser derechos reales que poseen las personas para definir y realizar sus proyectos de vida deseados. Los proyectos de vida involucran el proceso mental mediante el cual las personas sienten que pueden alcanzar las metas que se proponen y, en consecuencia, lograr una mayor percepción de bienestar.

Algunos autores (Pychyl y Little, 1998) enfatizan que los individuos evalúan su situación personal con relación a su nivel de aspiraciones, formado por sus deseos y expectativas. Particularmente, las aspiraciones son una categoría muy abarcadora para comprender cómo las personas integran diferentes fuentes de influencia (biológicas, ambientales, sociales y culturales) a fin de dar coherencia y balance a la propia vida. El bienestar se logra cuando las personas pueden percibir, estructurar y dar un significado a los proyectos personales, lo cual aumenta las probabilidades de su realización y, consecuentemente, deviene en una percepción de satisfacción con la propia vida. Por el contrario, la baja satisfac-

Figura 4.2.4

DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

ción está relacionada con proyectos personales no significativos y desorganizados.⁷⁶

Los datos de la encuesta muestran en la figura 4.2.4 que el déficit de proyectos personales disminuyó y se mantuvo estable en un 14% en 2011 y 2012 con respecto a 2010 (16,2%).

Aun cuando en 2010 y 2011 las mujeres muestran déficits mayores que los varones en proyectos personales, esta diferencia desaparece en 2012. Además, como se observa en la figura 4.2.5, el déficit se incrementa progresivamente de forma considerable según la edad del entrevistado. En la serie, este comportamiento arroja un valor estable de 9% en los más jóvenes, mientras que disminuye en aproximadamente 4 p.p. desde 2010 a 2012 en los adultos de 35 a 59 años (16,4% y 13,1%) y en los de 60 años y más (28,5% y 23,6%).

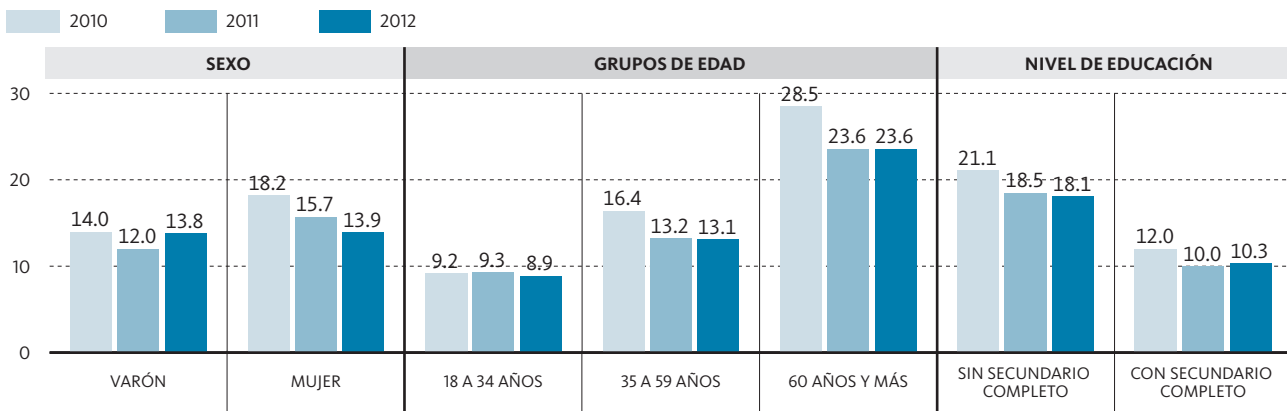
Según características socioeducativas, también pueden verse déficits diferentes en proyectos de vida, demostrando una vez más las deudas estructurales en las capacidades de los individuos de nuestra sociedad. Si bien en los más pobres el déficit disminuyó levemente en el trienio (24,7% en 2010, 23,8% en 2011 y 23,1% en 2012), la distancia de 4 veces más ausencia de proyectos personales entre los encuestados de mayor ni-

⁷⁶ En la EDSA-Bicentenario se incluye una pregunta que indaga la percepción de poder plantearse proyectos personales a futuro. Los entrevistados indicaron, en un formato de respuesta dicotómico, si dicha frase les resultaba verdadera o falsa.

Figura 4.2.5

DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

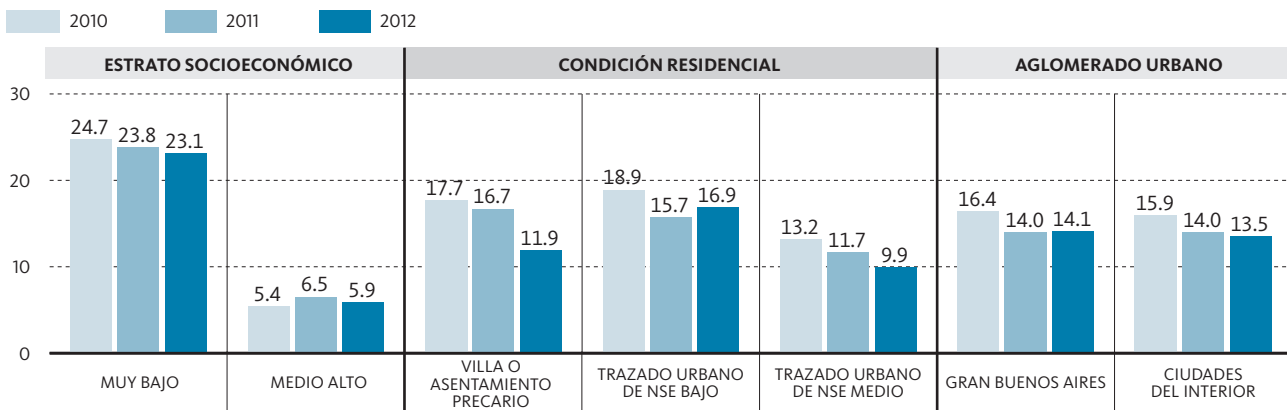


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.2.6

DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

vel socioeducativo es notoria (cerca al 6% en los tres años). Así, a lo largo de la serie, un individuo residente en una villa o asentamiento precario, o en un barrio con trazado urbano de NSE bajo, obtuvo más déficit de proyectos personales en su vida que otro individuo residente en un barrio de clase media profesional (11,9% y 16,9% versus 9,9%, en 2012). Como muestra la figura 4.2.6, según el aglomerado urbano no se observaron diferencias en los grupos comparados: el déficit de proyectos personales disminuye en aproximadamente -2 p.p. de 2010 a 2012 en ambos aglomerados.

CREENCIA DE CONTROL EXTERNO

El desarrollo de las creencias de control está asociado con el tipo de conductas que recibieron refuerzos positivos, con los recursos y estilos familiares, y con la consistencia de patrones culturales. El mecanismo psicológico que gobierna este tipo de reacciones consiste en reforzar las creencias de que lo que ocurre es resultado del azar, el destino o la influencia de otros con mayor poder, en lugar de creer que es producto del propio comportamiento. Por ende, se

percibe que los eventos no pueden ser controlados y se instala una falta de valoración del esfuerzo y de la dedicación personal. En términos generales, los individuos con creencias de control externo se caracterizan por desestimar la eficacia del propio accionar para cambiar el entorno, ser más influenciados a la coerción social, tener escasa motivación al logro y bajas expectativas hacia el futuro (Lefcourt, 1984; Lachman y Weaver, 1998). Por otro lado, los entornos que enfatizan el esfuerzo personal, la educación, la responsabilidad y el conocimiento como recursos eficientes para promover cambios positivos en la propia vida promueven el modelamiento de creencias de control interno.

En la encuesta aplicada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (EDSA-Bicentenario) se incluyó un test breve de creencias de control que se compone de seis ítems inspirados en los de la Escala de *Locus de Control* de Rotter (1966).⁷⁷ A pesar de ser una medida breve, cuenta con evidencias aceptables de fiabilidad y validez (Rodríguez Espínola, en prensa) y permite evaluar, aun con limitaciones, el grado en que las creencias son de tipo externo.⁷⁸

Según los datos relevados por la EDSA-Bicentenario, las creencias de control externo tuvieron un comportamiento ascendente, pasando de 12,8% en 2010 a 13,7% en 2011, para situarse de forma llamativa en un 17% en 2012, lo cual corresponde a una variación, del primero al último año, de 4,2 p.p. (ver figura 4.2.7 y AE 4.2.3).

El análisis de las creencias de control externo, conforme a las características personales de los adultos entrevistados, no arroja diferencias significativas en función del género y la edad; sin embargo, en el grupo

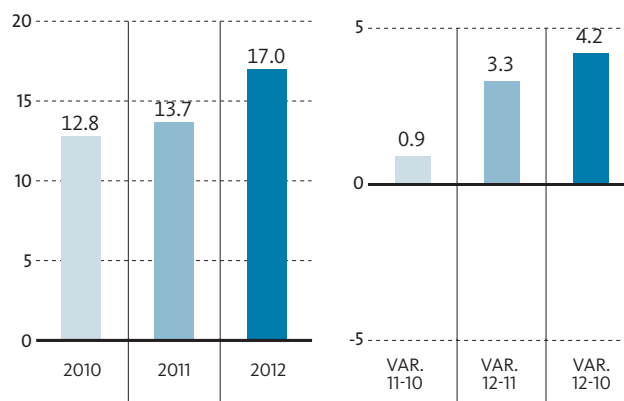
77 El formato de respuesta es dicotómico, con una posición afirmativa o negativa según la opinión del entrevistado frente a la frase propuesta. El informe analizado utiliza como punto de corte, para establecer el criterio inclusión en la creencia de control externo, la respuesta en forma afirmativa a tres frases.

78 En una muestra aleatoria de 1.637 individuos de más de 18 años y de ambos sexos, se calculó el índice de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin que arrojó un coeficiente de .77, indicando que la matriz de datos es adecuada para aplicación del análisis factorial. Se realizó un análisis de componentes principales sometido a rotación Varimax, el cual indicó un factor principal que explica el 38,76% de la varianza. Los datos de confiabilidad muestran un coeficiente alfa de Cronbach de .67, señalando que la consistencia interna del cuestionario posee índices de fiabilidad aceptables. Para más detalles de aspectos metodológicos, véase Peña (2002).

Figura 4.2.7

CREENCIA DE CONTROL EXTERNO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

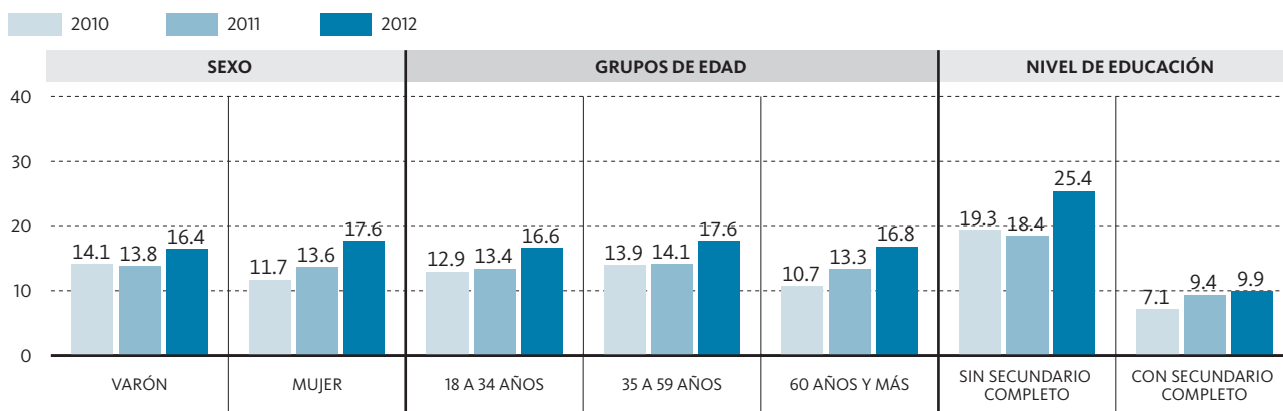
de más edad y en el grupo de las mujeres, el incremento registrado es de 6 p.p. de 2010 a 2012. Estos valores porcentuales aparecen detallados en la figura 4.2.8.

Los antecedentes indican que el desarrollo de creencias de control externo está típicamente asociado a niveles socioeconómicos desfavorecidos, ya que la pobreza se comparece con la percepción, muchas veces realista, de un menor control sobre la propia vida (al respecto, es útil consultar el Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie Bicentenario, Años I y II). Consecuentes con estos postulados, los datos analizados revelan que en menores condiciones socioeducativas y económicas los individuos triplican las creencias de control externo en comparación con los de estrato medio alto. Los porcentajes obtenidos en el indicador de quienes alcanzaron un nivel educativo medio fue de 7,1 en el primer año y de 9,9 en el último (2,8 p.p.), mientras que quienes no llegaron a completar el secundario declararon tener un locus de control con mayor externalidad en un 19,3% en 2010 y un 25,4% en 2012 (6,1 p.p.). La diferencia, previsiblemente, se sigue manteniendo al analizar el estrato socioeconómico: los sujetos más pobres elevan las creencias de estar sometidos al destino, a las circunstancias externas o a otras personas en casi 4 p.p. (25,8%) en 2012 con respecto al bienio 2010-2011, mientras que los sujetos de mejor condición económica casi no modifican sus valores (7,4% en el 2012).

Figura 4.2.8

CREENCIA DE CONTROL EXTERNO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

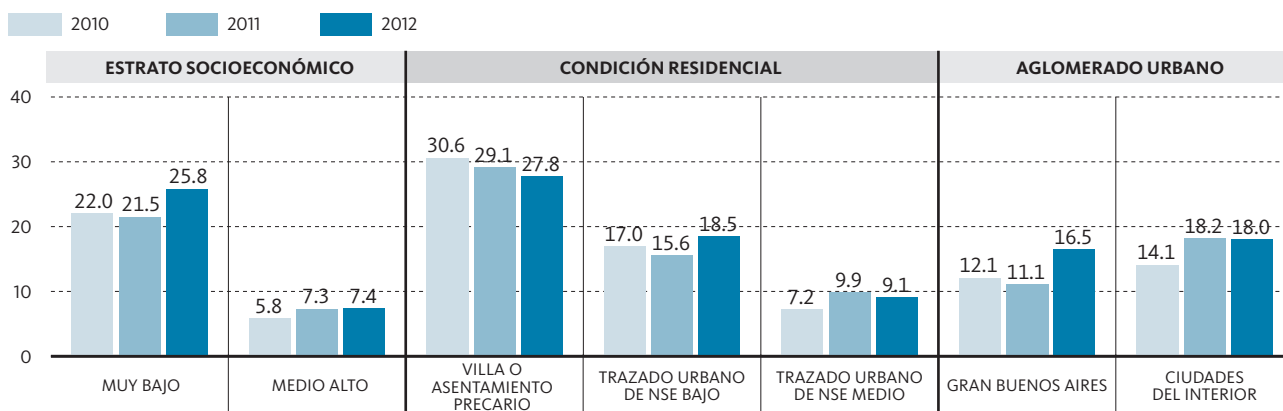


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.2.9

CREENCIA DE CONTROL EXTERNO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Las proporciones de creencias de control externo también difieren de manera significativa según la condición residencial (figura 4.2.9 y AE 4.2.3). En 2012, los encuestados que viven en una villa o asentamiento precario registran un 27,8% de creencias de control externo, aunque el porcentaje decrece levemente en la serie, mientras solo el 9,1% de los que viven en una zona residencial de clase media exhibió estas creencias. Respecto del aglomerado urbano, si bien en 2012 el área del Gran Buenos Aires sube 4,4 p.p., los allí residentes muestran menor propensión al locus de control externo que las Ciudades del Interior del país (16,5% contra 18%).

CONDICIONANTES DEL AFRONTAMIENTO NEGATIVO, EL DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES Y LAS CREENCIAS DE CONTROL EXTERNO

Las inequidades y desigualdades observadas en las estrategias negativas de afrontamiento, la incapacidad de tener proyectos personales y el locus de control externo conducen a explorar cuáles son los condicionantes multidimensionales que inciden en las diferencias estructurales para que algunas perso-

nas puedan tener mayores recursos psicológicos que otras. Además, resulta interesante y necesario analizar los cambios producidos entre 2010 y 2012 con el propósito de saber si son significativos a la hora de pretender mejores recursos psicológicos y fortaleza interna para hacer frente a las situaciones vitales.

Con este fin se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con que tales condicionantes inciden en la probabilidad de presentar un estilo de afrontamiento caracterizado por la tendencia a minimizar la situación de estrés, de no tener proyectos personales en la vida y de identificarse con un locus de control externo.

El modelo I, que alcanzó una buena capacidad de predicción para el total de la población de 18 años y más (59,7%), analiza el estilo de afrontamiento negativo, caracterizado por la tendencia a minimizar la situación de estrés, ya sea ignorándola o escapando de ella para no tomar la responsabilidad de resolverla. En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, es evidente que son el estrato socioeconómico, el tipo de aglomerado, la edad, el sexo, el nivel educativo, la jefatura de hogar y los años estudiados los factores explicativos del afrontamiento negativo de la población adulta urbana. La condición residencial es el único factor estadísticamente no significativo en presencia de las otras variables.

En comparación con los adultos de 35 a 59 años, los jóvenes presentan 9,1% (a un nivel de significación de $p < 0,05$) menos probabilidad de ser evasivos y evitativos frente al estrés, mientras que los adultos mayores aumentan las chances 25,6% más que los adultos de 35 a 59 años. Por otra parte, en comparación con el cociente de probabilidades de los varones, ser mujer eleva las chances de poseer un afrontamiento negativo en un 53,8%, mientras que no ser jefe de hogar también aumenta tales posibilidades (11%, $p < 0,05$).

A nivel de la población, la propensión al afrontamiento evasivo aumenta rotundamente conforme se desciende en la estratificación social. En esta dirección, comparados con quienes forman parte del estrato medio alto, los integrantes del estrato socioeconómico muy bajo duplican las chances de ser negativos en la manera de afrontar el estrés, en tanto que los sujetos del estrato bajo aumentan 62,5%, y los pertenecientes al medio bajo muestran un 34,9%. De forma similar, se observa que quienes menos ni-

vel educativo alcanzan registran 19,4% más chances de padecer esta clase o estilo de afrontamiento que quienes completaron el nivel secundario. Por último, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, la probabilidad de tener un afrontamiento negativo desciende en un 20,3% para los habitantes del Resto Urbano y un 59,8% para los encuestados del Conurbano Bonaerense, en tanto que también disminuye (31,2%) en otras grandes áreas metropolitanas.

Observando la totalidad del trienio y tomando como referencia el año 2010, los análisis de regresión demuestran diferencias significativas en las probabilidades de afrontamiento negativo. Según la información disponible, respecto de 2010, en 2011 decrecieron las posibilidades en un 13,4% de tener un perfil negativo de enfrentar la adversidad.

El modelo II (déficit de proyectos personales) alcanzó una capacidad de predicción del 61,4% en los encuestados. Al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se advierte que manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, los referidos al sexo, la edad, el estrato socioeconómico, la condición residencial, el tipo de aglomerado y los años en estudio son los principales factores explicativos de la ausencia de proyectos personales, siendo en este caso el nivel educativo y la jefatura de hogar los factores estadísticamente no significativos en presencia de las otras variables.

En lo que respecta a las diferencias de probabilidad de hallarse falto de proyectos según el género, se evidencia (con una significatividad de $p < 0,05$) que las mujeres tienen más chances de exhibir dicho déficit (11%). Del mismo modo, en comparación con el cociente de probabilidades de los adultos cuya franja etaria va de 35 a 59 años, ser joven redujo el déficit de proyectos en un 40,6%, en tanto que ser adulto mayor elevó las chances un 55,4%.

La posibilidad de ausencia de metas y objetivos personales en la vida aumenta considerablemente conforme se asciende en la estratificación social de los entrevistados. Así, en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los del estrato socioeconómico muy bajo quintuplican las chances de tener déficit de proyectos ($\text{Exp (B)} = 5,50$), si bien en los integrantes del estrato bajo se triplican ($\text{Exp (B)} = 3,71$) y en los del estrato medio bajo alcanzan el doble de probabilidades ($\text{Exp (B)} = 2,49$) de carecer de un proyecto de vida. En todos los casos, se trata de un factor que interviene de manera altamente significa-

Figura 4.2.10

RAZONES DE PROBABILIDAD DE AFRONTAMIENTO NEGATIVO, DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES Y CREENCIAS DE CONTROL EXTERNO SEGÚN CATEGORÍAS SOCIALES SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. Población de 18 años y más. Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B)).

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	AFRONTAMIENTO NEGATIVO		DÉFICIT DE PROYECTOS		CONTROL EXTERNO	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	0,430 ***	1,54	0,107**	1,11	-0,026	0,97
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,096 **	0,91	-0,522 ***	0,59	-0,056	0,95
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,228 ***	1,26	0,441 ***	1,55	-0,231 ***	0,79
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,178 ***	1,19	-0,034	0,97	0,542 ***	1,72
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	0,104 **	1,11	0,006	1,01	-0,019	0,98
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,299 ***	1,35	0,912 ***	2,49	0,218 ***	1,24
Bajo	0,486 ***	1,63	1,310 ***	3,71	0,441 ***	1,55
Muy bajo	0,709 ***	2,03	1,704 ***	5,50	0,699 ***	2,01
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	0,018	1,02	-0,064	0,94	0,041 ***	1,04
Villa o asentamiento precario	0,121	1,13	-0,469 ***	0,63	0,160	1,17
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-0,916 ***	0,402	0,312 ***	1,37	-0,695 ***	0,50
Grandes Areas Urbanas	-0,374 ***	0,688	-0,024	0,98	-0,39 ***	0,67
Resto Urbano	-0,226 ***	0,797	0,022	1,02	-0,075	0,93
AÑO						
2010 (c)						
2011	-0,144 ***	0,87	-0,180 ***	0,84	-0,085 *	0,92
2012	0,123 ***	1,13	-0,190 ***	0,83	-0,011	0,99
CONSTANTE	-1,554 ***	0,21	-2,738 ***	0,07	-1,219 ***	0,30
R cuadrado de Cox y Snell	0,053		0,056		0,058	
R cuadrado de Nagelkerke	0,078		0,098		0,084	
Porcentaje global de aciertos	59,7		61,4		60,5	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

tiva, incluso controlando el efecto que presentan las características individuales del encuestado.

Por su parte, ser residente del Conurbano Bonaerense –siempre manteniendo constante el resto de los factores–, aumenta 36,6% las chances de presentar déficit de proyectos personales en comparación con los residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

La probabilidad de cambios con respecto al año de inicio de la serie analizada se observa en 2011 y

2012, disminuyendo considerablemente las chances de déficit de proyectos personales en 83,5% y 82,7%, respectivamente.

La creencia personal de control externo en los entrevistados, consignada en el modelo III, presenta una capacidad predictiva del 60,5% para evaluar los factores asociados. De las características señaladas en el orden de lo individual, es de observar que los adultos mayores registran menores chances (21%) de exhibir la externa-

lidad en las causas, que los entrevistados de entre 35 y 59 años; a la vez que no haber completado el nivel secundario eleva la probabilidad en el indicador un 71,9%.

Examinando el resto de los factores evaluados por este modelo, se destaca también una reducción en las creencias de control externo en las personas residentes en el Conurbano Bonaerense (50%) o en otras grandes áreas metropolitanas (32,6%) en comparación con la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, las chances de tener un locus de control con mayor externalidad aumentan en los estratos socioeconómicos más bajos en comparación con los de mayor nivel adquisitivo y educativo. Para los encuestados del estrato muy bajo, la probabilidad de control externo se duplica, mientras que en el estrato bajo alcanza un 55,4%. Asimismo, las personas del estrato medio bajo tienen una probabilidad de 24,3% de pensar que están sometidas al destino, a circunstancias externas o a otras personas.

Por último, las diferencias interanuales con respecto a la predictividad de creencias de control externo ponen de manifiesto que en 2011 se reduce la chance del déficit en 8,1% (a un nivel de significación de $p < 0,1$) con respecto a 2010.

En la figura 4.2.10 se presentan los principales resultados de las regresiones, con los coeficientes B , el exponente de B y la significancia, que permiten evaluar el aporte predictivo de cada una de las variables independientes, los coeficientes del afrontamiento negativo, de no tener proyectos personales y de las creencias de control externo, las que dan cuenta del grado de ajuste del modelo desde una perspectiva estadística.

SENTIMIENTOS DE INFELICIDAD, SOLEDAD Y FALTA DE PAZ ESPIRITUAL

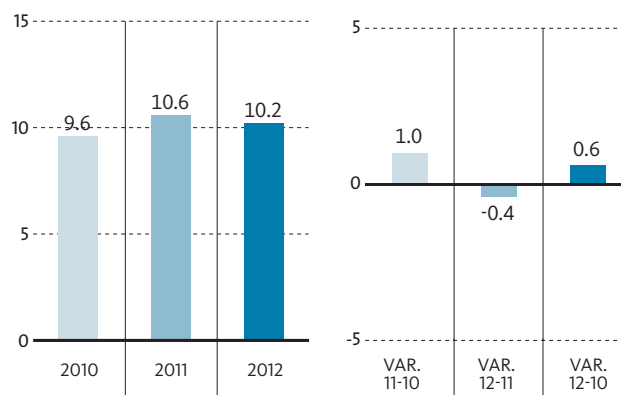
SENTIRSE POCO O NADA FELIZ

La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó incorporar la búsqueda de la felicidad como parte relevante de una visión “holística del desarrollo” (IDH, 2012). Así, se podría decir que la felicidad se relaciona con la medición de aspectos como la calidad de vida, el bienestar subjetivo, la satisfacción vital y el bienestar social, entre otros. Existe actualmente un consenso en cuanto a que el bienestar tendría una dimensión básica y general de tipo subjetivo, al tiempo

Figura 4.2.11

SENTIRSE POCO O NADA FELIZ

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

que estaría compuesto por dos facetas básicas: una centrada en los aspectos afectivo-emocionales (estados de ánimo del sujeto), y otra centrada en los aspectos cognitivo-valorativos, referidos a la evaluación de satisfacción que hace el sujeto de su propia vida.

Basados en el paradigma cognitivista según el cual, más que a la realidad objetiva, los humanos reaccionan a la percepción que de ella tienen, se considera que las razones que las personas señalan como necesarias para ser felices reflejan sus aspiraciones, y que muy probablemente estas se hallen modeladas no solo por las características individuales, sino también por los hábitos y características de la clase social en la que desarrollan sus vidas.

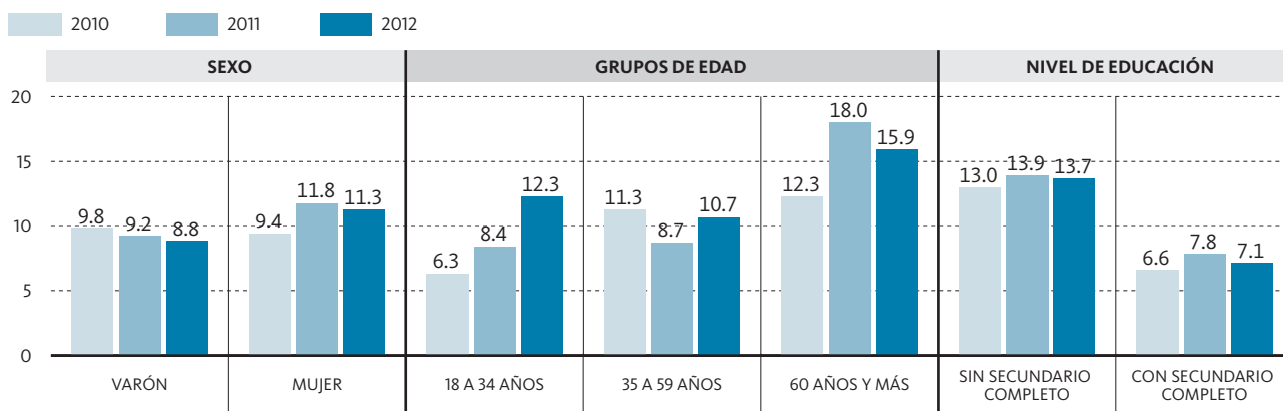
Con el fin de evaluar y analizar la percepción de felicidad de los encuestados, se realizó una pregunta en la EDSA-Bicentenario que proporciona la información requerida en forma de escala: “muy feliz”, “feliz”, “poco feliz” y “nada feliz”. En función de las respuestas brindadas, se analizan a continuación los valores totales y variaciones interanuales de los años 2010, 2011 y 2012, junto con las características individuales socioeducativas, económicas y residenciales de los encuestados que se autoperceben poco o nada felices.

En la figura 4.2.11 puede observarse la estabilidad en la baja percepción de infelicidad a lo largo de la serie en estudio: 1 de cada 10 adultos mayores de 18 años residentes de zonas urbanas de la Argentina manifestó sentirse poco o nada feliz.

Figura 4.2.12

SENTIRSE POCO O NADA FELIZ SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

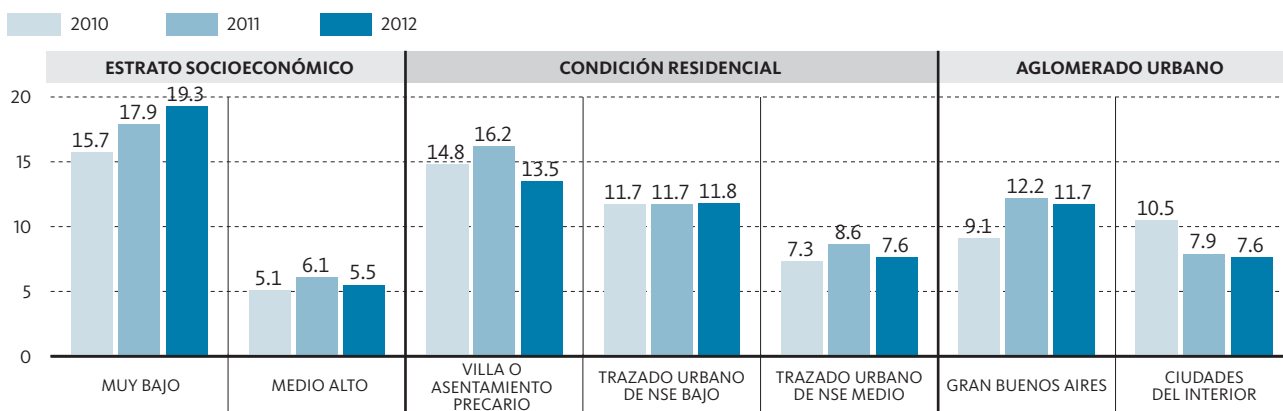


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.2.13

SENTIRSE POCO O NADA FELIZ SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Analizando la evolución de la infelicidad según diferentes atributos, se ve claramente la diversidad y persistencia en las desigualdades que caracterizan el bienestar subjetivo de los individuos. En 2012, el 11% de las mujeres se sentía poco o nada feliz, mientras que los varones confirmaron mayor felicidad al revelar solo el 8,8% en el indicador en cuestión. Los entrevistados más jóvenes marcan un ascendente nivel de infelicidad en la serie (6,3% en 2010, 8,4% en 2011 y 12,3% en 2012), pero se mantienen con valores menores que los adultos de 60 años (12,3%, 18% y 15,9%, para los mismos años). Más detalles

al respecto pueden consultarse en la figura 4.2.12 y el AE 4.2.4.

Los condicionantes educativos y socioeconómicos son elementos cruciales al analizar la percepción de felicidad. Los que no alcanzaron un nivel secundario completo (14%) tienen el doble de infelicidad que los que poseen estudios secundarios completos (7%). En la figura 4.2.13 se puede observar cómo la percepción de menor felicidad se eleva de forma escalonada año a año (15,7%, 17,9% y 19,3%, respectivamente) llegando a sentirse poco o nada feliz, en 2012, 1 de cada 5 entrevistados del estrato socioeconómico

muy bajo. Por el contrario, los que pertenecen a un nivel medio alto ostentan los valores más bajos de todas las variables analizadas (5,5%). No obstante, las diferencias según la condición residencial en el indicador se presentan relacionadas de manera inversa, es decir que cuanto menor es la infraestructura económica, mayor es la percepción de infelicidad; si bien en las villas o asentamientos precarios dijeron sentirse en el último año menos infelices que en los anteriores (13,5% en 2012, 16,2% en 2011 y 14,8% en 2010). Por último, el porcentaje de individuos que se perciben poco o nada felices en el Gran Buenos Aires aumenta en el último bienio (9% en 2010 a 12% en 2011-2012) y, además, es mayor que en las Ciudades del Interior, cuyo déficit en felicidad disminuye en el mismo período en cuestión (10,5% en 2010 a 8% en 2011-2012).

SENTIRSE SOLO

La soledad es un estado emocional que sobreviene cuando la persona no ha logrado las relaciones interpersonales íntimas o estrechas que desea. Si bien en general la soledad ha sido considerada como la ausencia de compañía (*soledad social*), algunos autores han hecho uso del término para referirse a una experiencia subjetiva mucho más compleja, que tiene su origen en el modo en que el individuo percibe la calidad de sus relaciones (*soledad emocional*) (Russell, 1982; Weiss, 1973). Así, sentirse solo alude a un estado en que la persona puede sentir soledad aunque esté rodeada de semejantes que le brindan afecto. Este déficit afectivo se asocia a percepciones sociales deterioradas, a su vez que empeora notablemente la calidad de vida y el pronóstico vital global de los individuos, además de provocar un aumento en la demanda de los servicios sanitarios y sociales.

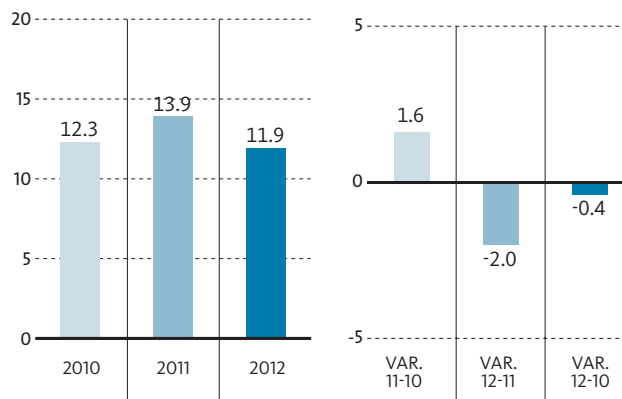
Por lo antes mencionado, este componente afectivo vinculado con el apego y la percepción de aislamiento constituye una condición que menosprecia la posibilidad de lograr el óptimo bienestar subjetivo, indispensable en una perspectiva de desarrollo humano.

Como se puede ver en la figura 4.2.14, los adultos que viven en zonas urbanas pocas veces o nunca se sienten solos. En los años extremos de la serie, aproximadamente el 12% de la población se percibe en soledad y aislamiento, si bien en 2011 hubo un incremento que llegó casi al 14%.⁷⁹

Figura 4.2.14

SENTIRSE SOLO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

En cuanto a las características sociodemográficas de la población analizada, se observa en la figura 4.2.15 que las mujeres se sienten más solas que los varones, si bien en 2012 reportan menos soledad (12,6%) que en 2010 (14,2%) y 2011 (15,9%). Los entrevistados de 35 o más años dijeron sentirse más solos que los más jóvenes (9,7% versus 13% en 2012).

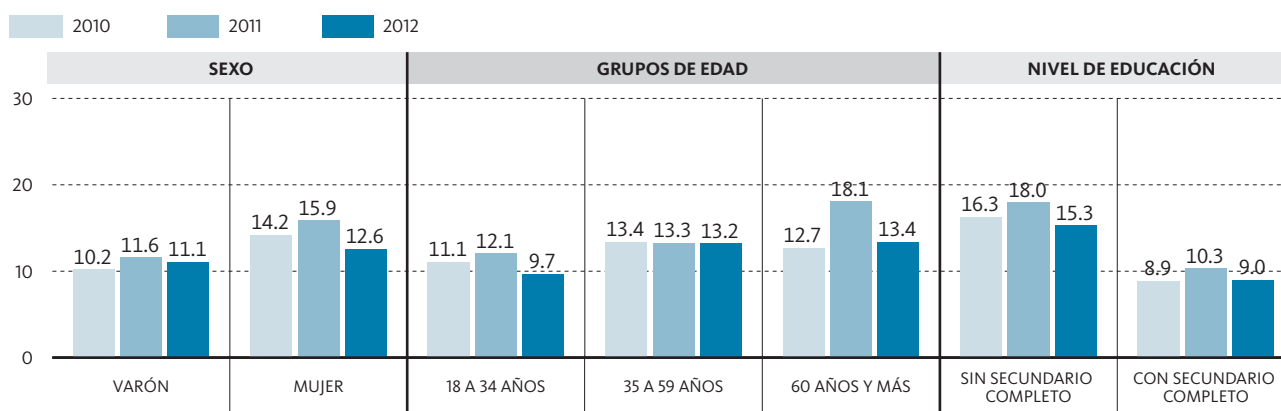
No obstante, las diferencias según condiciones educativas, socioeconómicas y residenciales son más notorias. Así, las figuras 4.2.15 y 4.2.16 revelan que quienes cuentan con estudios secundarios completos y con circunstancias socioeconómicas y residenciales más acomodadas tienden a percibirse con menor soledad y aislamiento en comparación con los que se hallan en condiciones de mayor vulnerabilidad del entorno en el que habitan y menor nivel educativo. Los que pertenecen al estrato medio bajo cuadruplican el sentimiento de soledad, reportando valores por encima del 20% en la serie; mientras que los del estrato socioeconómico medio alto no llegan al 6%. Sucede algo similar con los adultos que habitan en villas o asentamientos precarios (20,2% en 2010, 21,4% en 2011 y 16,9% en 2012), quienes dicen sentirse solos muchas veces o

⁷⁹ La encuesta pregunta: "Durante el último tiempo, ¿con qué frecuencia usted se sintió solo y no tuvo a nadie a quién acudir?". Se responde en una escala de cuatro opciones (todo el tiempo, muchas veces, pocas veces, nunca) y se define como déficit las primeras dos opciones.

Figura 4.2.15

SENTIRSE SOLO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

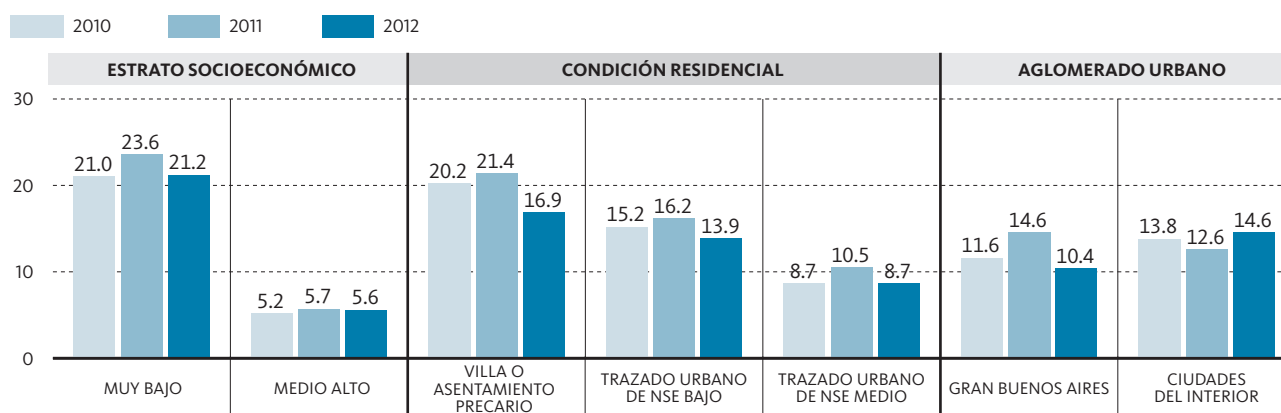


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.2.16

SENTIRSE SOLO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

todo el tiempo en mayor medida que los que viven en barrios con trazado urbano de NSE bajo (15,2% en 2010, 16,2% en 2011 y 13,9% en 2012), y más si se los compara con los que viven en barrios de NSE medio (8,7% en 2010 y 2012). Los aglomerados urbanos, por otra parte, no parecen marcar una diferencia significativa, aunque se manifiesta una leve tendencia de mayor soledad en las Ciudades del Interior de la Argentina en comparación con el Gran Buenos Aires, sobre todo en el último año (14,6% versus 10,4%).

NO SENTIR PAZ ESPIRITUAL

Los individuos tienen la habilidad de utilizar los recursos espirituales que permiten afrontar las dificultades de la vida desde un sentido existencial, para obtener una mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos psicológicos y personales. Sin embargo, la mayoría de las personas afirma encontrar paz espiritual en su interior independientemente de sus problemas, e incluso albergan apreciaciones positivas sobre su espiritualidad in-

dependientemente de las condiciones sociales en que se hallen inmersas.⁸⁰

De cada 10 personas encuestadas, 2 afirman no encontrar paz espiritual en su interior independientemente de sus problemas. El análisis por años, reflejado en la figura 4.2.17, muestra un descenso levemente sostenido de esta percepción en el bienio 2010-2011 (-1,1 p.p.), para volver a valores cercanos al 22% en el último período.

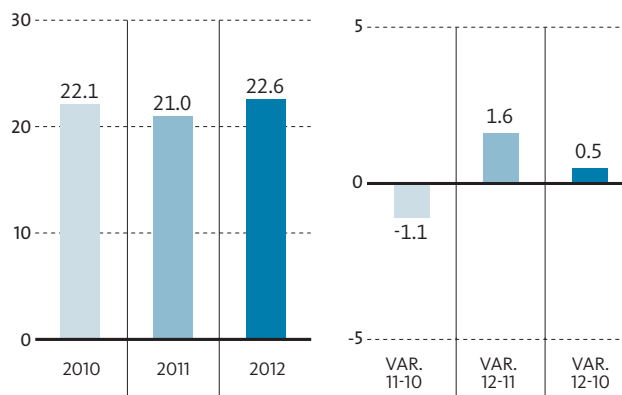
Los varones tienen menos percepción de paz que las mujeres (28,1% durante 2010, manteniéndose en aproximadamente 24% en los dos últimos años). Las mujeres dijeron no sentir paz durante 2012 en mayor proporción (21,3%) que en los años anteriores (18%). Asimismo, los adultos de 60 años o más se percibieron con un nivel mayor de paz interior que los adultos de más de 35 años y todavía superaron el nivel de paz interior de los jóvenes. En cuanto al nivel educativo alcanzado, en 2010 los encuestados con educación secundaria concluida no se diferencian en el sentimiento de paz espiritual de los que no completaron ese ciclo de enseñanza; pero en 2011-2012 en el primer grupo hay un incremento de 2,6 p.p., mientras que en el segundo

80 La EDSA-Bicentenario cuantifica la percepción del individuo de sentir paz en su interior por medio de la frase: *Aun cuando tiene problemas, ¿puede encontrar paz espiritual dentro suyo?* Las respuestas negativas al ítem fueron consideradas para consecuentemente cotejarlas según las distintas variables de corte.

Figura 4.2.17

NO SENTIR PAZ

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

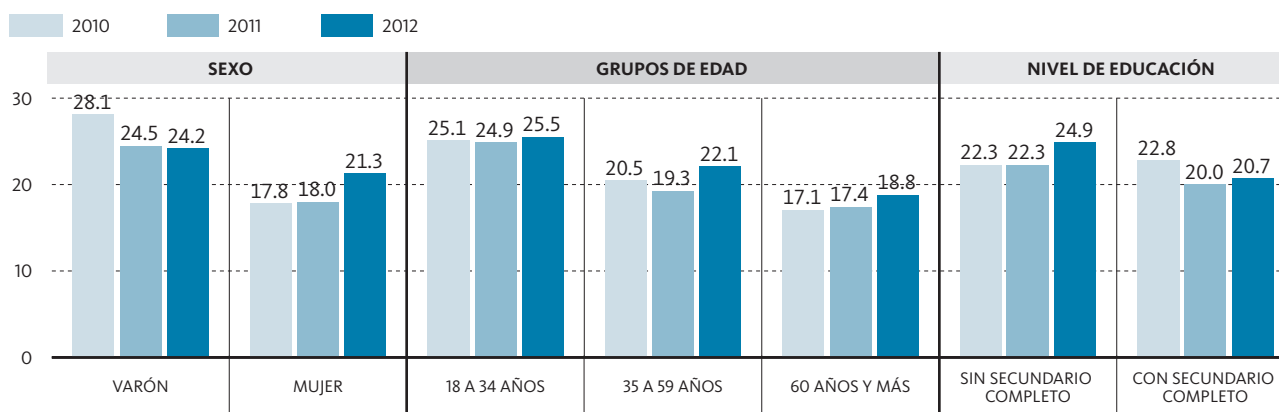
grupo decrece el indicador en -2,1 p.p., tal como muestran la figura 4.2.18 y el anexo AE 4.2.6.

El análisis según la estratificación socioeconómica indica que las cifras de déficit de paz son mayores entre los que menos tienen y se elevan en el último período (de 23,5% en 2010-2011 a 27,2% en 2012), mientras que entre los del estrato medio alto son comparativamente menores y decrecen año a año (22,3%, 17,9% y 17,1%, respectivamente). A su vez, los que viven en asentamientos precarios o villas dicen no sentir paz en

Figura 4.2.18

NO SENTIR PAZ SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

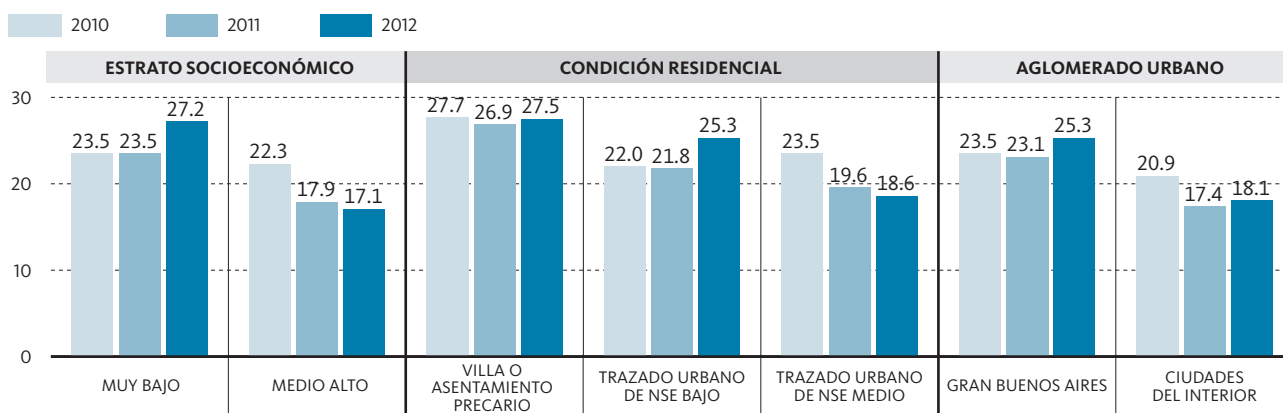


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.2.19

NO SENTIR PAZ SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

mayor medida, pero estable en un 27% en el trienio, en comparación con los que residen en barrios con trazado urbano de NSE medio que reportan cifras menores de déficit y a la vez ostentan una serie decreciente (23,5% en 2010, 19,6% en 2011 y 18,6% en 2012). Respecto de la falta de paz espiritual, la figura 4.2.19 asigna a los entrevistados del Gran Buenos Aires una leve incidencia superior a la revelada por los sujetos de las Ciudades del Interior que integran el aglomerado urbano, sobre todo en el último período analizado (25,3% versus 18,1%).

CONDICIONANTES DE SENTIMIENTOS DE INFELICIDAD, SOLEDAD Y NO TENER PAZ ESPIRITUAL

Los análisis descriptivos previos ponen en evidencia nuevamente desigualdades en el ámbito de las emociones y los sentimientos, planteando la necesidad de conocer cuáles son los factores que potencian o disminuyen las diferencias estructurales. Se propone, pues, saber qué variables inciden en la capacidad de las personas para tener mejores estados emocionales-afectivos o carecer de las emociones placenteras y positivas necesarias para lograr un bienestar pleno. En este marco, se investigan los cambios producidos entre 2010 y 2012, con el fin de establecer si fueron significativos como aporte de mayores capacidades emocionales satisfactorias en pos de un bienestar subjetivo que colabore en el desarrollo humano.

Como en apartados anteriores, se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de tener sentimientos de infelicidad, soledad y no lograr alcanzar la paz espiritual. Las variables seleccionadas buscan ser explicadas en términos de la fuerza con que factores sociodemográficos, económicos y temporales inciden en pasar de una situación de déficit o falencia (1) a una de no déficit (2).

El modelo I se refiere al sentimiento de ser poco o nada feliz, y su capacidad de predicción fue del 67,2% para el total de la población de 18 años y más. En esta instancia, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se destaca que tanto el estrato socioeconómico, como el tipo de aglomerado y la edad son muy significativos ($p < 0,01$), en tanto que el sexo, la jefatura de hogar y los períodos anuales son menos significativos ($p < 0,05$) como factores explicativos de la infelicidad.

Los jóvenes presentan 29% menos probabilidad de sentirse poco o nada felices, igual que las personas que no cumplen el rol de jefe de hogar (12%), en tanto que los adultos mayores y las mujeres aumentan las chances (19% y 16%).

La posibilidad de experimentar emociones negativas por sentirse poco o nada feliz se acentúa conforme se desciende en los niveles socioeconómicos. En comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los del muy bajo alcanzan más del triple de oportunidades de sentirse infelices, y los de estrato

Figura 4.2.20

RAZONES DE PROBABILIDAD DE SENTIR INFELICIDAD, SOLEDAD Y FALTA DE PAZ ESPIRITUAL SEGÚN CATEGORÍAS SOCIALES SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. Población de 18 años y más. Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B)).

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	INFELICIDAD		SOLEDAD		FALTA DE PAZ	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	0,145 **	1,16	0,425 ***	1,51	-0,310 ***	0,73
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,347 ***	0,71	-0,077	0,93	0,430 ***	1,54
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,170 ***	1,19	-0,224 ***	0,80	-0,390 ***	0,68
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,110 ***	1,12	-0,034	0,97	-0,007	0,99
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	-0,128 **	0,88	-0,448 ***	0,64	-0,160 ***	0,85
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,360 ***	1,43	0,672 ***	1,96	0,192 ***	1,21
Bajo	0,700 ***	2,01	0,969 ***	2,63	0,244 ***	1,28
Muy bajo	1,283 ***	3,61	1,626 ***	5,08	0,523 ***	1,69
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	-0,005	0,99	-0,117 *	0,89	0,167 ***	1,77
Villa o asentamiento precario	-0,207	0,81	-0,245 *	0,78	0,260 **	1,85
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-0,323 ***	0,72	-0,349 ***	0,71	-0,170 **	0,84
Grandes Areas Urbanas	-0,560 ***	0,57	-0,056	0,95	0,175 ***	1,19
Resto Urbano	-0,471 ***	0,62	0,045	1,05	-0,416 ***	0,66
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,141 **	1,15	0,163 ***	1,18	-0,080 *	0,92
2012	0,077	1,08	-0,029	0,97	0,026	1,03
CONSTANTE	-2,602 ***	0,07	-2,722 ***	0,07	-1,240	0,29
R cuadrado de Cox y Snell	0,031		0,039		0,030	
R cuadrado de Nagelkerke	0,064		0,073		0,047	
Porcentaje global de aciertos	67,2		62,6		57,9	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

bajo llegan al doble, en tanto que las personas del estrato medio bajo tienen 42,9% más posibilidades de sentirse poco o nada felices. Por fin, respecto de los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades del sentimiento de infelicidad descendieron en otras grandes áreas metropolitanas (43%), en el Resto Urbano (38%) y en el Conurbano Bonaerense (28%).

Al considerar la serie y tomando como referencia el año 2010, los análisis de regresión presentan diferencias

significativas en 2011, año en el que decrecieron las probabilidades del sentimiento de infelicidad en un 14,7%.

El modelo II (sentirse solo), logra una capacidad de predicción del 62,6% en los encuestados. Aparte, con respecto al año de inicio de la serie, la probabilidad de cambios en la percepción de infelicidad se incrementa un 18% en 2011.

Las diferencias registradas en la probabilidad de que el individuo se sienta solo evidencian que las mu-

jeros tienen más chances (53%), en tanto que tienen menos los mayores de 59 años (20%) y quienes no desempeñan el rol de jefe de hogar (36%).

La posibilidad de sentirse poco o nada feliz aumenta considerablemente a medida que se desciende en la estratificación social. Así, en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los encuestados del estrato socioeconómico muy bajo quintuplican las chances de sentirse infelices (Exp (B) = 5,08), si bien los del estrato bajo alcanzan más del doble de posibilidades (Exp (B) = 2,63) y los del estrato medio bajo las aumentan en un 96%. Por lo demás, vivir en un barrio de NSE bajo o en un entorno habitacional precario, comparado con residir en un barrio con características de NSE medio, disminuye la percepción de soledad (11% y 22%, $p < 0,1$).

También resulta relevante que entre los encuestados que viven en el Conurbano Bonaerense, a la vez que se mantiene constante el resto de los factores, la probabilidad de sentirse solos decrece 29% respecto de los que viven en la Ciudad de Buenos Aires.

El modelo multivariado ajustado III, que analiza la falta de paz espiritual, presenta una capacidad predictiva del 57,9% para evaluar los factores asociados. De las características señaladas en el orden de lo individual, se destaca el hecho de que los adultos mayores tienen menos chances (32,3%) de déficit de paz que los adultos de 35 a 59 años, mientras que las personas más jóvenes aumentan en un 56% sus chances. Asimismo, decrece la probabilidad de no sentir paz interior en el caso de las mujeres (26,7%) y de los que no son jefes de hogar (14,6%).

Al cotejar los datos obtenidos en el resto de los factores evaluados por este modelo, se advierte que la falta de paz espiritual es un sentimiento menos probable en el Conurbano Bonaerense (15,6%) y en el Resto Urbano del país (34%) que en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que es más probable en otras grandes áreas metropolitanas (19,2%).

Se nota asimismo un aumento en las chances del déficit de paz en los estratos socioeconómicos más bajos en comparación con los de mayor nivel adquisitivo y educativo, tal como puede observarse en la figura 4.2.20. Para las personas muy pobres, la probabilidad de no sentir paz alcanza el 69%; en el estrato bajo se eleva a un 27,6% de chances; mientras que las personas pertenecientes al nivel medio bajo indican una probabilidad del 22%. Según la condición de residen-

cia, quienes viven en situación más precaria registran significativamente más probabilidades de padecer falta de paz (85% en villas y asentamientos y 77% en barrios de NSE bajo) que los residentes en barrios con más urbanización y mejores aspectos edilicios del hogar.

Por último, las diferencias interanuales no resultaron estadísticamente significativas, aunque la predictividad de no sentir paz en 2011 disminuyó 7,7% (a un nivel de significación de $p < 0,1$) con respecto a 2010.

4.3 CAPACIDADES SOCIALES DE AGENCIA

El ser humano necesita de la sociedad para la formación y desarrollo de sus capacidades humanas, así las relaciones sociales componen un motivo irremplazable de bienestar para las personas. Los vínculos establecidos como relaciones de apoyo mutuo brindan importantes recursos para la salud y el bienestar personal, no solo en situación de crisis sino en la cotidianidad de la vida. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todo soporte social efectivamente proporcionado puede ser percibido como suficiente para el sujeto. Son varios los autores que incorporan la sociabilidad desde la perspectiva de las capacidades y necesidades humanas, y han sido mencionados en informes anteriores del Barómetro de la Deuda Social Argentina; a ellos se remite aquí para una visión más amplia de los antecedentes que fundamentan su consideración.⁸¹

Ante todo, es preciso reconocer que las habilidades sociales de ayuda representan mucho más que un aspecto valioso del bienestar subjetivo, puesto que las mismas constituyen un indicador robusto sobre las condiciones de cohesión, solidaridad e integración que ofrece la sociedad a sus miembros.

De acuerdo con el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1987), el apoyo social serviría como un soporte facilitador por redefinir la situación estresante como menos dañina o amenazante. Disponer de los recursos aportados por las redes interpersonales tiene efectos favorables sobre la salud mental y desarrolla la percepción de los individuos acerca de su

81 Para un desarrollo pormenorizado de este punto, pueden consultarse: Sen (2000); Nussbaum (1998); Max-Neef (1987); Mallmann (1984) y Maslow (1970), entre otros. Y para el enfoque teórico en particular, los informes del Barómetro de la Deuda Social Argentina (ODSA, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012).

capacidad de resolución de los problemas. Tales lazos brindan a las personas un sentimiento de seguridad a la vez que generan compromiso por su bienestar (Gottlieb, 1983; Lin *et al.*, 1986).

El desafío de integrar las capacidades relacionales en el complejo constructo del desarrollo humano es producir cambios culturales que transformen las sociedades, con vistas a que la no discriminación, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo de la afectividad y la adhesión a los valores universales que dignifican la condición humana sean los fundamentos presentes en cada reciprocidad social.

En este marco, el presente apartado inspecciona las relaciones interpersonales en las que el individuo mantiene un vínculo particular y estrecho con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera, examinando las características del déficit del apoyo estructural por no tener amigos personales, por la percepción de sentirse discriminado y por la interpretación subjetiva de sentir que no cuenta con gente que lo ayude ante un problema.

NO TENER AMIGOS PERSONALES

Los vínculos afectivos de amistad brindan al individuo un sentimiento de seguridad, al tiempo que inciden de manera determinante sobre su bienestar. Así, percibirse sin lazos de amistad engloba también la ausencia de recibir apoyo y contención. Es probable que la percepción psicológica de no tener amigos exprese este debilitamiento de los vínculos en nuestra sociedad actual, cuyos valores se apoyan en aspectos individualistas, egocéntricos y competitivos.

Como puede verse en la figura 4.3.1, el 16,6% de los adultos mayores de 18 años de zonas urbanas manifestó no tener ningún amigo durante 2010, disminuyendo este valor en -2,4 p.p. en 2011 y reportando el 15,3% en el último año de la serie.

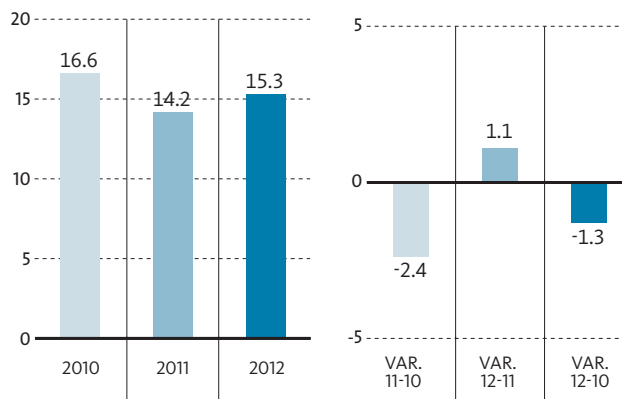
En el parangón por años según las características del individuo, se aprecia una tendencia de mayor déficit de amigos en las mujeres, demostrando una distancia de valores en toda la serie cercanos a 5 p.p. con respecto a los varones (17% y 13%, respectivamente, en 2012).

Las distintas etapas del ciclo vital evidencian desiguales valores en la percepción de no tener amigos. Dicho déficit exhibe una tendencia ascendente en los encuestados de mayor edad, duplicando los valores en el grupo de adultos mayores de 60 años con respecto a los más jóve-

Figura 4.3.1

NO TENER AMIGOS

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

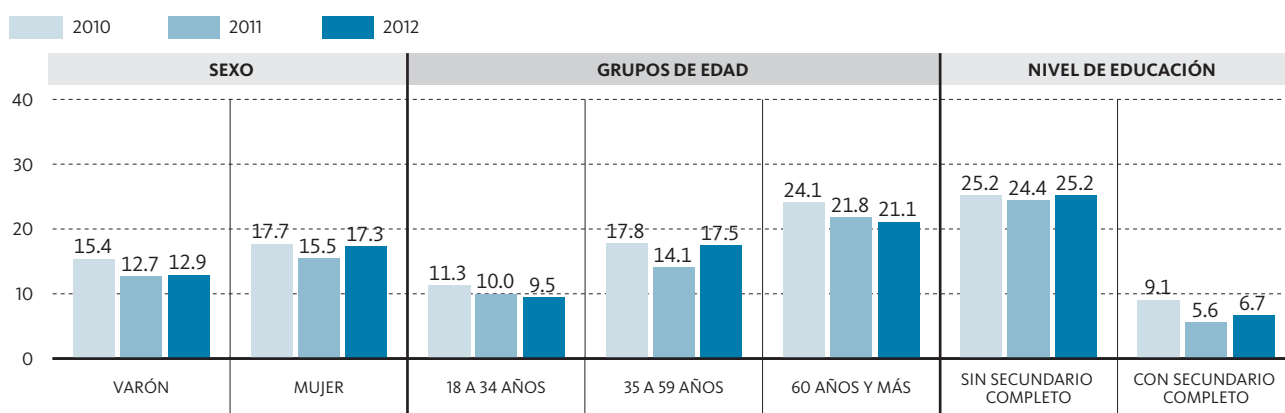
nes; aunque según los años analizados la percepción de falta de red social disminuye progresivamente (24,1%, 21,8% y 21,1% versus 11,3%, 10% y 9,5%, en 2010, 2011 y 2012, respectivamente). Pero es notorio cómo el déficit social ostenta, según el nivel educativo de la población, porcentajes considerablemente bajos y decrecientes en las personas con nivel secundario completo o más (9,1% en el 2010 y 6,7% en el 2012), mientras que en aquellos con secundaria incompleta la proporción se quintuplica (aproximadamente 25%) y permanece estable en los tres años en cuestión. La figura 4.3.2 y el anexo AE 4.3.1 brindan los detalles de los valores porcentuales obtenidos en los grupos analizados.

Los contrastes se exhiben también al evaluar el comportamiento de falta de amigos según el estrato socioeconómico y la condición residencial. Tal como se observa en la figura 4.3.3, la falta de vínculos de amistad alcanza a 3 de cada 10 encuestados del estrato socioeconómico muy bajo, y casi no se percibe en el estrato medio alto. Esta tendencia se manifiesta en mayor oposición en el año 2012, alcanzando un 32% en los más pobres contra solo 3,2% en los individuos con mejores condiciones sociales y económicas. En cuanto a los distintos aglomerados urbanos, la percepción de falta de amigos aparece con mayor intensidad en las Ciudades del Interior, déficit que registra un leve incremento entre 2010 (17,3%) y 2012 (18,5%); no obstante las personas que residen en el Gran Buenos Aires disminuyeron su falta de amigos en el último bienio.

Figura 4.3.2

NO TENER AMIGOS SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

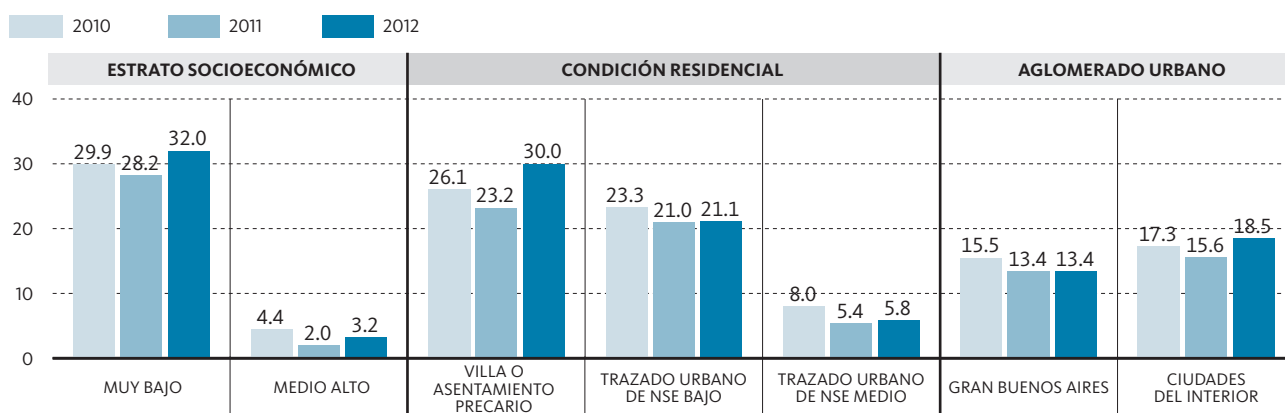


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.3.3

NO TENER AMIGOS SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN

Se entiende por discriminación todas aquellas situaciones en las que se da un trato de inferioridad a una persona, grupo o colectividad por motivos raciales, religiosos, de nacionalidad, de género, de nivel socioeconómico, por su ocupación y/o por el lugar donde habitan, entre varios de los motivos posibles. Al fundamentarse en prejuicios de esta índole, discriminar es un acto que atenta contra la igualdad de oportunidades y derechos, y que como tal es sancionado en todas sus formas. Las diferentes maneras de discriminación fre-

cuentemente tienen como consecuencia la exclusión social o la marginación, conceptos relacionados que aluden a todos aquellos enunciados donde las personas entrevistadas hacen referencia a situaciones en las que se pone o se deja a una persona, grupo o colectividad en condiciones sociales, legales, políticas, laborales y/o habitacionales de inferioridad (Amigo y Piccini, 2010).

En la encuesta aplicada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (EDSA-Bicentenario) sobre una población mayor e igual a 18 años, se indagó en la autopercepción de discriminación que decía tener la persona. Los resultados revelan, como muestra la

figura 4.3.4, que 1 de cada 10 personas se siente discriminada por diversos motivos. Analizando los años en consideración, se exhibe un indicador relativamente estable, reflejando un valor aproximado al 12% entre 2010 y 2012.

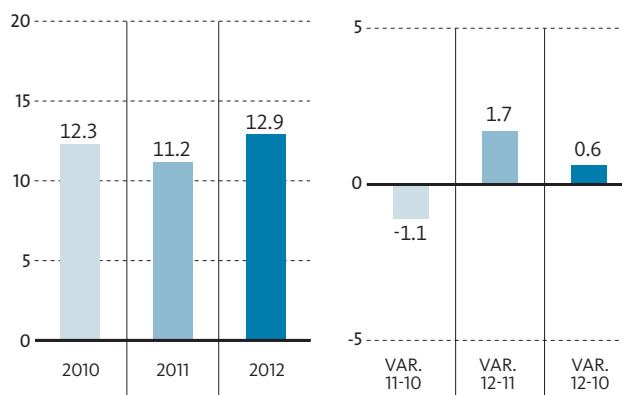
Al evaluar las características de la gente que refirió sentirse discriminada, se advierte que no hay diferencias en cuanto al género; sin embargo, la variabilidad del indicador según los años en estudio se eleva en los varones de 10,1% en 2011 a 13,6% en 2012, mientras que en las mujeres la conducta discriminatoria se percibe de igual manera en los tres años (12%). En cuanto a las diferencias por edad, dijeron sentirse más discriminados los adultos de 35 a 59 años que los adultos mayores (14,2% y 9,5%, respectivamente, en 2012), quienes a su vez demostraron valores ascendentes en la serie. La figura 4.3.5 muestra que las personas que no finalizaron sus estudios secundarios manifiestan sentirse más discriminadas año a año (12,4% en 2010, 13% en 2011 y 15,2% en 2012) en comparación con los que completaron dicho nivel educativo (12,1%, 9,5% y 11%, respectivamente).

De igual manera, los sujetos encuestados pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo o que viven en condiciones habitacionales y residenciales precarias (16,3% y 18,6%) presentaron valores mayores de discriminación que aquellos con mejores condiciones socioeconómicas y residenciales (9,8% y 10,9%) en 2012. Los análisis descriptivos según el

Figura 4.3.4

SENTIRSE DISCRIMINADO

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

aglomerado urbano no exhibieron diferencias significativas en tratos de inferioridad y discriminación hacia su persona. La figura 4.3.6 y el anexo AE 4.3.2 presentan esta situación.

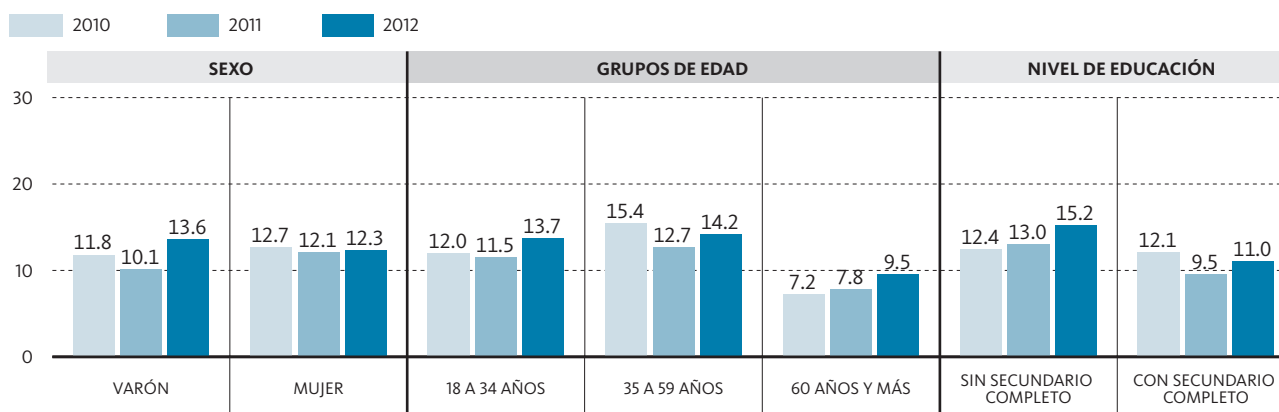
NO CONTAR CON GENTE QUE LO AYUDE ANTE UN PROBLEMA

Las redes sociales representan un importante punto de referencia para la persona, ya que cuando se

Figura 4.3.5

SENTIRSE DISCRIMINADO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

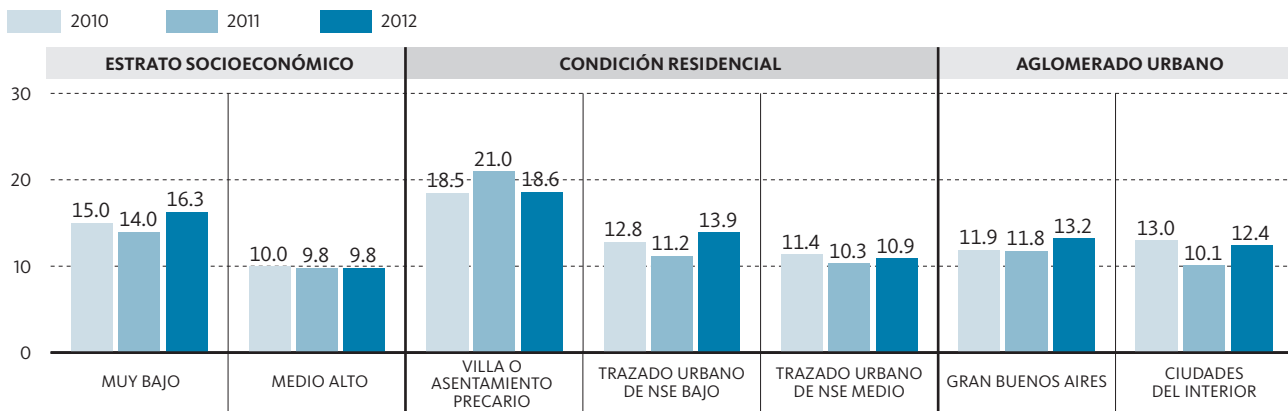


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.3.6

SENTIRSE DISCRIMINADO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

enfrenta con un problema o situaciones conflictivas que no puede resolver por sus propios medios, recurrir a los recursos relacionales de ayuda social como soportes que permitirían redefinir la situación estresante en menos dañina o fácilmente solucionable.

La importancia de dichas redes se centra en los efectos positivos sobre el sentimiento de seguridad y de bienestar que notan los sujetos. En caso de no tener acceso la persona a los recursos que necesita de parte de las redes interpersonales, disminuye su percepción de poder hacer frente a los problemas por sus propios medios, al tiempo que esta carencia en el acceso incide sobre su salud mental, pues los altos niveles de estrés que generan las situaciones de riesgo o los problemas afectan el desarrollo de sus habilidades sociales. Ello provoca en el sujeto una percepción de incapacidad para mantener relaciones seguras y reduce sus capacidades de lograr el apoyo social requerido.

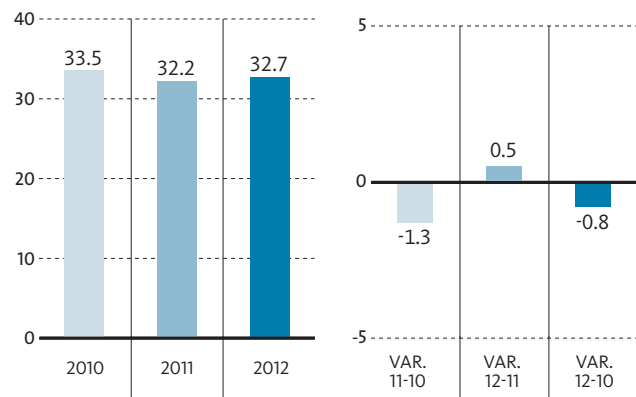
En la serie analizada se reporta que 3 de cada 10 personas afirma no contar con gente que la ayude ante un problema, como muestra la figura 4.3.7. Este déficit de relaciones sociales presenta el mayor valor en 2010 (33,5%), con un leve descenso en los años siguientes (aproximadamente 32%).

En la figura 4.3.8, la información da cuenta de una cierta predisposición a experimentar mayor riesgo con respecto a estar aislado socialmente en el caso de los varones (35% en 2010 y 2012) y en los adultos de 35 y más años de edad. Si bien el déficit por edad sufre un decremento interanual, solo en 2012 hay un

Figura 4.3.7

NO CONTAR CON GENTE QUE LO AYUDE ANTE UN PROBLEMA

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

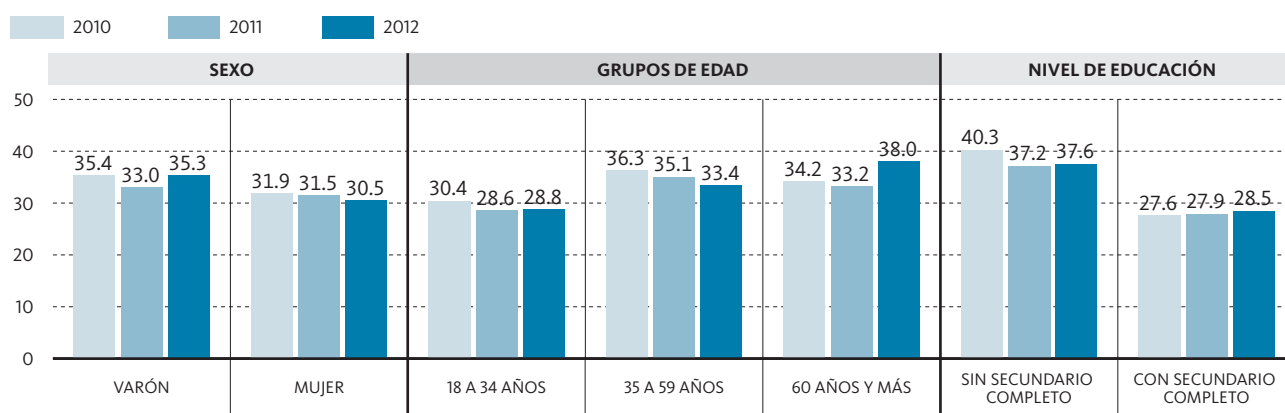
marcado aumento (de 3,8 p.p.) en los adultos de 60 años y mayores (34,2% en 2010 y 38% en 2012).

Con respecto al nivel educativo, la estratificación social y la condición residencial de los entrevistados, se vuelven a ratificar los datos presentados en el Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie Bicentenario, Años I y II. Se observa que 4 de cada 10 personas que no completaron el secundario, que pertenecen a un estrato socioeconómico muy bajo o que viven en barrios con déficits habitacionales y residenciales dicen no contar con gente que los ayude

Figura 4.3.8

NO CONTAR CON GENTE QUE LO AYUDE ANTE UN PROBLEMA SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

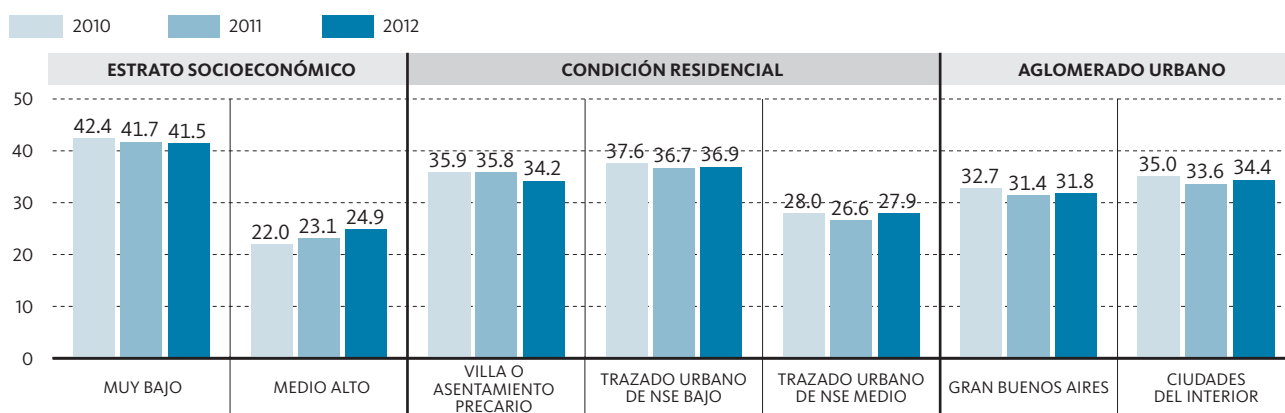


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.3.9

NO CONTAR CON GENTE QUE LO AYUDE ANTE UN PROBLEMA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

frente a los problemas, valores que se mantienen estables a lo largo de toda la serie en estudio. Pueden apreciarse valores casi iguales en los distintos aglomerados urbanos de la Argentina. Una vez más, se hace patente el vínculo entre la población que experimenta aislamiento social y la que tiene menor condición económica y residencia. De este modo, la percepción de no tener a alguien que ayude frente a las dificultades da cuenta de las persistentes brechas sociales que atraviesan la sociedad. La figura 4.3.9 y el anexo AE 4.3.3 discriminan las diferencias porcentuales por año en este indicador.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LAS CAPACIDADES SOCIALES

Tal como se acaba de describir, las variables analizadas que integran las capacidades de relación con los demás presentan brechas constantes, las que demuestran una vez más la deuda hacia el progreso y el desarrollo humano patente en la población urbana argentina. Ineludiblemente, surge la inquietud de saber cuáles son los condicionantes sociodemográficos y económicos que inciden en las desigualdades estruc-

turales para que algunas personas puedan tener mejores capacidades en sus vínculos y mejor apoyo social, mientras que otras carecen o son deficitarias de ellas. Además, se intentará comprender hasta qué punto los cambios producidos entre los años 2010 y 2012 resultan significativos a la hora de procurar mayores índices en el capital de agencia de los individuos.

La falta de amigos, sentirse discriminado y no contar con gente que ayude frente a las dificultades son las variables dependientes que buscan ser explicadas en términos de la fuerza con que factores sociodemográficos, socioeconómicos y temporales inciden en pasar de una situación de déficit o falencia (1) a una de no déficit (2). Con este propósito se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con las que inciden algunas categorías sociales en la probabilidad de presentar déficit en las capacidades constitutivas de la integración y el apoyo mutuo.

La figura 4.3.10 presenta los principales resultados de las regresiones, con los coeficientes B , el exponente de B (EXP B) y la significancia, que permiten evaluar el aporte predictivo de cada una de las variables independientes, los coeficientes de la falta de amigos, de sentirse discriminado y de no contar con gente que ayude frente a un problema, dando cuenta del grado de ajuste del modelo desde una perspectiva estadística.

En el modelo I, cuyo objeto de análisis es la falta de amigos, logró una buena capacidad de predicción (65,1% del total de la población de 18 años y más). En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes manteniendo controlados el resto de los factores intervinientes, se observa con claridad que el estrato socioeconómico, el tipo de aglomerado, la edad, el sexo, el nivel educativo, la jefatura de hogar, el tipo de aglomerado, la condición residencial y los períodos analizados en años son todos factores altamente explicativos del déficit de amigos en la población adulta urbana.

En comparación con los adultos de 35 a 59 años, los jóvenes presentan 62,7% menos probabilidades de falta de amigos, en tanto que los adultos mayores elevan dicho indicador social en un 17,1% de probabilidad. Por otra parte, en comparación con el cociente de probabilidades de sus opuestos, ser mujer o no ser jefe de hogar eleva las chances (18,8% y 11,9%) de no tener amigos personales, pero en el grupo con secundario incompleto ascienden notoriamente (80,3%).

La propensión a no contar con vínculos relacionales amistosos disminuye marcadamente conforme se desciende en la estratificación social de los habitantes: en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los del estrato socioeconómico muy bajo poseen casi 4 veces más de chances de no tener amigos (Exp (B) = 3,92), en tanto que los de estrato bajo y medio bajo aumentan más del doble sus probabilidades (Exp (B) = 2,58 y 2,20, respectivamente). También las probabilidades en la deserción de amistades difieren de manera muy significativa comparando a quienes viven en mejores zonas residenciales con quienes habitan en villas y asentamientos precarios (96,5%) y quienes pertenecen a barrios urbanos de NSE bajo (71,1%). En todos los casos se trata de factores que intervienen de manera significativa incluso controlando el fuerte efecto que presentan la edad y el nivel educativo. Nótese, asimismo, que respecto de los encuestados residentes en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de no tener amigos disminuyen 58,9% en los residentes del Conurbano Bonaerense, mientras que las mismas descienden también un 28,9% entre los que viven en otras grandes áreas metropolitanas.

Al analizar la evolución y los cambios en el curso de los tres años, las regresiones demuestran diferencias significativas en las probabilidades del déficit de amigos en 2011 y 2012 con respecto a 2010: disminuyen 19,3% en el primer bienio, en tanto que en el último año se dan en un 13,4%.

El modelo II (sentirse discriminado) alcanzó una capacidad de predicción del 57,4%. En este caso, la fuerza de los respectivos coeficientes puso en evidencia que los factores referidos a las características de los individuos, del hogar y al tipo de aglomerado son explicativos de la percepción de discriminación. El factor que refleja la variabilidad interanual como condicionante de sentirse discriminado marca una disminución levemente significativa (10,2%, $p < 0,1$) en 2011 con respecto a 2010.

Las diferencias de probabilidad de discriminación se manifestaron en aumento para el género femenino (14,4%, $p < 0,05$) y para el nivel educativo inferior (17,8%), mientras que disminuyó para quienes no son jefe de hogar (18,2%). En comparación con el cociente de probabilidades de los adultos cuya franja etaria va de 35 a 59 años, ser adulto mayor redujo en un 56,7% las chances de sentirse discriminado.

Figura 4.3.10

RAZONES DE PROBABILIDAD DE NO TENER AMIGOS, SENTIRSE DISCRIMINADO O NO CONTAR CON GENTE QUE AYUDE FRENTE A LOS PROBLEMAS SEGÚN CATEGORÍAS SOCIALES SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. Población de 18 años y más. Coeficientes beta y razón de probabilidades (Exp (B)).

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	SIN AMIGOS		DISCRIMINADO		NO CONTAR CON GENTE	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	0,172 ***	1,19	0,134 ***	1,14	-0,099 ***	0,91
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,556 ***	0,57	-0,067	0,94	-0,183 ***	0,83
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,158 ***	1,17	-0,838 ***	0,43	-0,108 **	0,90
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,589 ***	1,80	0,164 ***	1,18	0,064	1,07
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	0,112 **	1,12	-0,201 ***	0,82	-0,229 ***	0,79
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,789 ***	2,20	0,295 ***	1,34	0,267 ***	1,31
Bajo	0,949 ***	2,58	0,271 ***	1,31	0,366 ***	1,44
Muy bajo	1,365 ***	3,92	0,598 ***	1,82	0,684 ***	1,98
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	0,537 ***	1,71	0,060	1,06	-0,004	1,00
Villa o asentamiento precario	0,675 ***	1,96	0,325 **	1,38	0,539 ***	0,58
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-0,889 ***	0,41	0,595 ***	1,81	-0,798 ***	0,45
Grandes Areas Urbanas	-0,210 ***	0,81	0,104	1,11	-0,223 ***	0,80
Resto Urbano	0,047	1,05	0,269 ***	1,31	-0,408 ***	0,67
AÑO						
2010 (c)						
2011	-0,214	0,81	-0,108 *	0,90	-0,074 *	0,93
2012	-0,143	0,87	0,072	1,07	-0,056	0,95
CONSTANTE	-3,067	0,05	-2,405 ***	0,09	-0,462 ***	0,63
R cuadrado de Cox y Snell	0,102		0,015		0,038	
R cuadrado de Nagelkerke	0,177		0,029		0,052	
Porcentaje global de aciertos	65,1		57,4		57,0	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

La posibilidad de pasar por una situación de rechazo hacia su persona, por otra parte, se diferencia en la estratificación social. Así, en oposición a quienes forman parte del estrato medio alto o con mejores condiciones residenciales, los integrantes del estrato socioeconómico muy bajo o que viven en una villa o asentamiento precario mostraron más chances (81,9% y 38,3%) de sentirse discriminados, si bien entre los encuestados de los estratos bajo y

medio bajo esa probabilidad disminuyó (30% aproximadamente).

Por último, cotejados con los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, los habitantes del Conurbano Bonaerense y los del Resto Urbano Interior vieron aumentadas sus oportunidades de sentirse discriminados en un 81,3% y 30,9%, respectivamente.

El modelo III, referido al déficit de apoyo social caracterizado por no contar con alguien que ayude

frente a un problema, presenta una capacidad predictiva del 57%. Puede considerarse, por lo tanto, lo suficientemente sólido para evaluar los factores asociados a la falta de soporte social. El factor que refleja la variabilidad interanual como condicionante marcó una disminución levemente significativa (7%, $p < 0,1$) en la probabilidad de déficit de apoyo social en el año 2011 con respecto al 2010.

También en este caso se destaca que el género femenino (9,4%) y no ser jefe de hogar (15,7%) disminuye la probabilidad de no contar con alguien para solucionar los problemas. En cuanto a las brechas por edad, en comparación con los adultos de 35 a 59 años, los adultos mayores de 60 años (10,2%, $p < 0,05$) y los jóvenes (15,7%) redujeron las chances de no disponer de apoyos facilitadores de ayuda ante los problemas.

En comparación con los entrevistados de mayor nivel adquisitivo y residencial, los de peores condiciones socioeconómicas y habitacionales registraron un aumento en la incidencia de no contar con gente que ayude ante una dificultad. En tanto que dicha probabilidad se elevó para los más pobres y para los que viven en villas o asentamientos precarios (98,1% y 58,3%), las chances también subieron en el estrato bajo (44,2%) y medio bajo (30,7%). Al examinar el resto de los factores evaluados por este modelo, en oposición con los brindados por los encuestados de la Ciudad de Buenos Aires, se destaca una reducción en el déficit de apoyo social si el individuo habita en el Conurbano Bonaerense (55,5%) o en ciudades del Resto Urbano Interior (33,5%); aunque las posibilidades también se observan en un 20% en el aglomerado que integra a las otras grandes áreas metropolitanas.

4.4 RESUMEN DE RESULTADOS

La percepción negativa del estado de salud aumentó levemente en el año 2012 con respecto al bienio 2010-2011. Entre el primer y último año los valores ascendieron según las características individuales, socioeconómicas y residenciales, demostrando un mayor déficit en la percepción del estado de salud. Las mujeres, los adultos mayores, los que no tienen un secundario completo y los que pertenecen a un estrato muy bajo fueron quienes más evidenciaron problemas de salud graves o crónicos. Además, el malestar psicológico fue un indicador casi estable a lo largo de la serie en estudio.

Las personas encuestadas de género femenino y las de menor nivel educativo presentaron mayores déficits, en tanto que la brecha entre los habitantes más pobres y los más favorecidos económicamente fue notoria, posicionando a los primeros en un marcado deterioro de bienestar psicológico.

Aun cuando en la totalidad del período se observó, en todas las características, un descenso en la falta de atención médica, la no asistencia a un médico durante 2012 se manifestó más en los varones, los adultos menores de 60 años y en los habitantes de zonas residenciales precarias. Del total de los que dijeron haber realizado una consulta, aproximadamente el 30% mencionó que en dicha ocasión utilizó un sistema de salud público. Estos datos se presentan con mayor presencia en las mujeres, en los jóvenes y en los individuos de menor nivel educativo; reportando que los de menos recursos usan un sistema de atención médica pública casi en un 50%, en tanto que los de condiciones socioeconómicas y residenciales altas casi no utilizan hospitales o centros de salud públicos.

Entre los hábitos negativos relativos a la salud, el tabaquismo marcó una tendencia decreciente en los años en estudio. Si bien las mujeres mostraron fumar más en 2012, siguen siendo menos fumadoras que los varones. La edad también es un indicador importante en este hábito, ya que se eleva marcadamente cuanto más joven es la persona. Otro de los déficits incluidos en este campo, como es no practicar ejercicio físico semanalmente, exhibió un incremento en el último bienio y se presentó con mayor porcentaje en las categorías de variables referidas a menor capital socioeducativo y económico.

Las variaciones interanuales observaron un incremento en el período 2010-2012 respecto del afrontamiento negativo y las creencias de control externo. Los valores significativamente elevados en el año 2012 en el uso de estrategias evitativas de afrontamiento correspondieron a los varones, a los menores de 59 años y a quienes tienen estudios secundarios completos. No obstante, comparando las categorías de análisis, tanto las mujeres como los adultos mayores y los ciudadanos de menor nivel socioeducativo y económico presentaron con frecuencia un estilo de afrontamiento negativo. Las creencias de control externo registraron una brecha en el trienio 2010-2012 entre las mujeres, los mayores de 60 años, los de bajo nivel educativo y los que viven en el Gran Buenos Aires. Asimismo, presentaron mayores índices

de externalidad de creencias quienes poseen un nivel socioeducativo y residencial más bajo. En oposición, disminuyó la falta de objetivos y metas en el último bienio, siendo los adultos mayores de 60 años y los de estrato socioeconómico muy bajo quienes más carencia evidenciaron en proyectos de vida.

El déficit en la felicidad se presentó sólo en uno de cada diez entrevistados, con énfasis en las personas de mayor edad y menor capital educativo y económico, si bien según las características individuales los más jóvenes y los más pobres elevaron su percepción de infelicidad en los datos interanuales. Pese a ello, entre 2010 y 2012 la percepción de soledad se mantuvo igual, registrando un aumento leve en 2011 al exhibir que se sienten solos en mayor medida las personas adultas de sexo femenino, sin secundario completo y con menor nivel socioeconómico y residencial. En cambio, la percepción de no sentir paz espiritual se presentó con un porcentaje mayor en los varones y en las personas de nivel socioeconómico (NSE) medio alto, mientras que entre las de más educación decrecieron sus valores del primer al último año del período. La falta de paz se observó con mayor incidencia en los jóvenes, en los habitantes del Gran Buenos Aires y en los más pobres.

Entre los indicadores relativos a las capacidades sociales, la falta de amigos obtuvo en 2010 el mayor porcentaje, coincidiendo las diferencias en la serie entre las mujeres y los adultos mayores. A un tiempo, fue muy notoria la brecha entre la gente que tiene menor condición socioeducativa y económica. Manifestaron asimismo sentirse mayormente discriminados los ciudadanos pertenecientes a grupos sin educación secundaria completa y a sectores socioeconómicos y de condiciones residenciales con menos recursos. Por último, tres de cada diez personas afirmaron no contar con gente que los ayude ante un problema; en este marco, los varones y las personas sin secundario completo registraron mayor déficit, mientras que el estrato socioeconómico inferior se distanció en casi el doble de ausencia de apoyo social respecto del más alto. En 2012, quienes habitan en villas y barrios con trazado urbano de NSE bajo reportaron mayor déficit en este último aspecto.

4.5 NOTA DE INVESTIGACIÓN:

Trastornos de sueño: aspectos sociodemográficos y su relación con el estado de salud

**GUIDO SIMONELLI*, SOLANGE RODRÍGUEZ
ESPÍNOLA **, DANIEL PÉREZ CHADA***,
DANIEL P. CARDINALI* Y DANIEL E. VIGO***

Los trastornos del sueño son muy frecuentes en toda la población. En una encuesta realizada en grandes centros urbanos de Latinoamérica (Buenos Aires, San Pablo y México) se observó que dos tercios de la población reportaba algún problema de sueño y hasta un cuarto de la población manifestaba verse moderada o severamente afectada por dichos problemas. El diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño deben ser considerados como una cuestión de preocupación pública. Por un lado, la somnolencia diurna asociada a los trastornos de sueño se vincula con el deterioro de la capacidad de trabajo y un aumento del riesgo de accidentes de tráfico. Por otro lado, varios trastornos de salud tienen como comorbilidades o factores de riesgo asociados una alteración del sueño. Este es el caso de las enfermedades psiquiátricas como la ansiedad o la depresión; enfermedades neurológicas como Alzheimer o Parkinson; trastornos cardiovasculares como la hipertensión arterial y las afecciones coronarias; enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad; y ciertas enfermedades oncológicas (Blanco *et al.*, 2003).

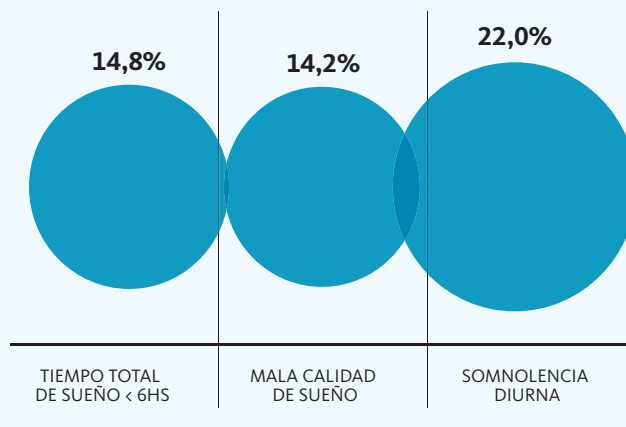
Además de los determinantes biológicos y psicológicos, la calidad de sueño se encuentra fuertemente influenciada por múltiples e importantes factores sociales, entre los cuales podemos mencionar el lugar y tipo de residencia, el estrato socioeconómico y las condiciones laborales (Patel, 2007). La mejor comprensión de estos factores asociados en el ámbito de Argentina aportará información valiosa para contribuir en el diseño de políticas de salud pública que atenúen el impacto biológico, psicológico y social de los trastornos de sueño. En este sentido, la presente investigación evaluó posibles vínculos entre trastornos de sueño, características demográficas y estado de salud, en una muestra de 5.636 adultos mayores de 18 años, relevada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina a fines de 2012.

En esta nota de investigación se reportan los resultados obtenidos por la EDSA-Bicentenario (2012) corres-

Figura 4.5.1

TRASTORNOS DEL SUEÑO

Años 2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



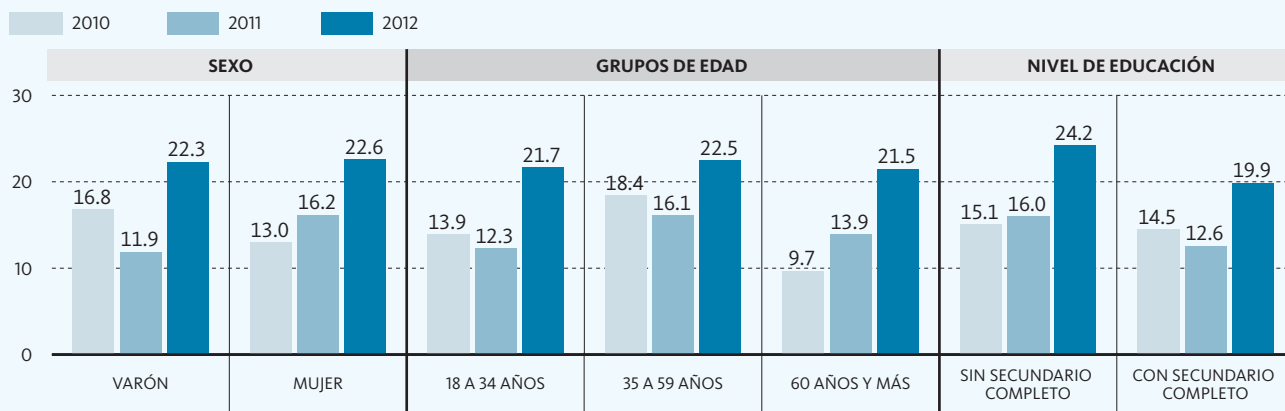
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

pondientes a cinco preguntas basadas en la versión castellana del Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (Royuela *et al.*, 1994), sumadas a una sobre hábitos de siesta. Estas preguntas fueron: 1. Durante el último mes, ¿a qué hora habitualmente se acostó para dormir por la noche?; 2. Luego de apagar la luz para dormir, ¿cuánto tiempo tardó en quedarse dormido en promedio?; 3. ¿A qué hora se levantó habitualmente por la mañana?; 4. ¿Cómo calificaría en general su calidad de sueño? (muy buena, bastante buena, bastante mala, muy mala); 5. ¿Con qué frecuencia tuvo problemas para permanecer despierto durante el día? (nunca o esporádicamente, una o dos veces a la semana, tres o más veces a la semana); 6. Si duerme siesta en forma habitual (todos o casi todos los días), ¿por cuánto tiempo lo hace? A partir de las preguntas se calculó el Tiempo Total de Sueño (TTS = tiempo en la cama - tiempo en quedarse dormido + tiempo de siesta) y se dividió TTS en tres categorías: <6 horas (hs), 6-10 hs y >10 hs; se definió “mala calidad de sueño” como la presencia de “bastante” o “muy mala” calidad de sueño; y se definió “presencia de somnolencia diurna” como la presencia de letargo o sueño una o más veces a la semana. Por otro lado, se relevaron datos de peso y altura, a partir de los cuales se calculó el índice de masa corporal (IMC = peso / altura²), definiéndose la presencia de obesidad cuando IMC \geq 30 kg/m². Se analizaron los datos obtenidos en función de sexo, edad, nivel de instrucción, estrato socioeconómico, y tipo y lugar de residencia. Asimismo, se evaluó si la presencia de trastornos de sueño se asociaba

Figura 4.5.2

TRASTORNOS DEL SUEÑO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

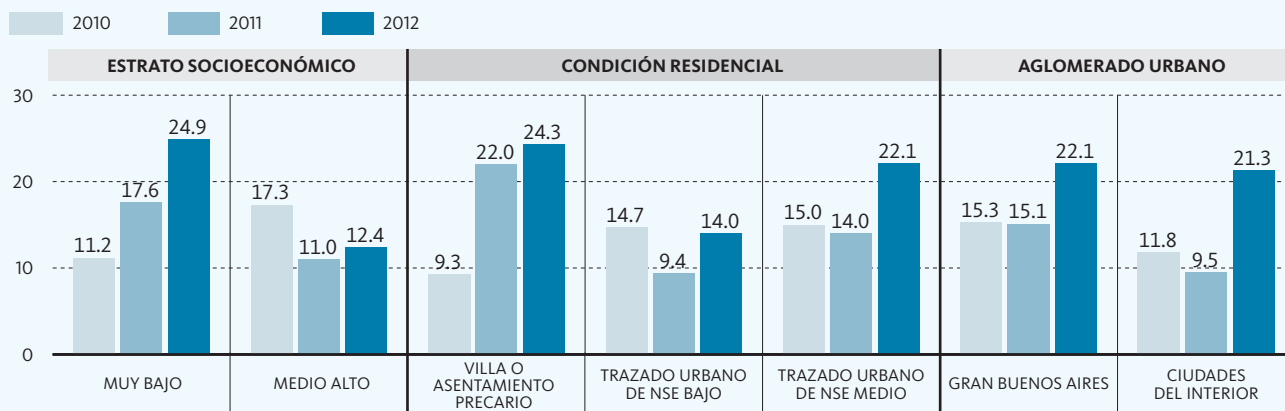


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 4.5.3

TRASTORNOS DEL SUEÑO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

al estado de salud percibido y a la presencia de obesidad. Las variables se reportan como porcentajes del total de los sujetos. La evaluación de la significancia estadística se realizó a través de un test de chi-cuadrado.

La prevalencia de trastornos en la duración del sueño fue de 14,8% (TTS <6 hs) y 7,6% (TTS >10 hs), mientras que el 14,2% de los sujetos reportó mala calidad de sueño (figura 4.5.1). Un 22% de los sujetos informó somnolencia diurna (no mostrado).

El análisis de la distribución de estos trastornos según sexo, edad y nivel de instrucción se muestra en la figura

4.5.2. Obsérvese que el porcentaje de varones con TTS <6 hs es mayor al de las mujeres ($X^2 = 15,9; p < 0,001$), mientras que el porcentaje de mujeres con mala calidad de sueño es mayor al de ellos ($X^2 = 20,2; p < 0,001$). La franja etaria de 60 o más años presenta un mayor porcentaje de sujetos con TTS >10 hs, en forma concomitante con un mayor porcentaje de sujetos con TTS <6 hs en la franja comprendida entre 35 y 59 años ($X^2 = 127,3; p < 0,001$). Esta última franja etaria presenta asimismo peor calidad de sueño ($X^2 = 12,2; p = 0,002$). El nivel de instrucción bajo se asoció con un mayor porcentaje de personas con TTS >10 hs ($X^2 = 49,5; p$

< 0,001), mala calidad de sueño ($X^2 = 12,6$; $p < 0,001$) y somnolencia diurna ($X^2 = 14$; $p < 0,001$, no mostrado).

La distribución de los trastornos de sueño según estrato socioeconómico, condición residencial y lugar de residencia se ilustra en la figura 4.5.3. El estrato socioeconómico muy bajo presentó un mayor porcentaje de sujetos con TTS >10 hs ($X^2 = 126,2$; $p < 0,001$), mala calidad de sueño ($X^2 = 23,2$; $p < 0,001$) y somnolencia diurna ($X^2 = 83$; $p < 0,001$, no mostrado). La residencia en villas o asentamientos precarios se asoció con un mayor porcentaje de sujetos con mala calidad de sueño ($X^2 = 13,2$; $p < 0,001$). En tanto que las grandes áreas metropolitanas registraron un mayor porcentaje de individuos con TTS <6 hs ($X^2 = 10,3$; $p = 0,006$) y mala calidad de sueño ($X^2 = 20,1$; $p < 0,001$).

Respecto de la prevalencia de trastornos de peso, esta fue de 53,9%, con 33% de sujetos con sobrepeso y 20,9% de sujetos con obesidad. La obesidad fue más prevalente luego de los 35 años ($X^2 = 134,7$; $p < 0,001$), en los sujetos con secundario incompleto ($X^2 = 37,9$; $p < 0,001$), en los del estrato socioeconómico más bajo ($X^2 = 61,6$; $p < 0,001$), y en las urbanizaciones informales o de nivel socioeconómico bajo ($X^2 = 52,7$; $p < 0,001$). La figura 4.5.4 muestra la relación entre trastornos de sueño y salud. Si bien la categorización y descripción del estado de salud percibido fueron detalladas en el apartado 4.1, aquí podemos apreciar que el déficit del estado de salud percibido se asoció a un mayor porcentaje de sujetos con TTS >10 hs ($X^2 = 22,2$; $p < 0,001$), mala calidad de sueño ($X^2 = 130,1$; $p < 0,001$) y somnolencia diurna ($X^2 = 5,0$; $p = 0,025$, no mostrado). La presencia de obesidad se coligó a un mayor porcentaje de sujetos con TTS <6 hs y TTS >10 hs ($X^2 = 9,5$; $p = 0,009$), mala calidad de sueño ($X^2 = 11,9$; $p = 0,001$) y somnolencia diurna ($X^2 = 7,9$; $p = 0,005$, no mostrado).

Resumiendo, las asimetrías según sexo y edad en la distribución de los trastornos de sueño, se vieron asociados a un nivel de instrucción bajo, al estrato socioeconómico muy bajo, viviendas precarias y residencia en grandes ciudades. A su vez, se ha verificado el vínculo entre mala calidad de sueño y problemas de salud, particularmente en el caso de la obesidad.

Los resultados obtenidos son consistentes con estudios que demuestran que los problemas de sueño se asocian a un número creciente de enfermedades y problemas de salud. La obesidad, en conjunto con la hipertensión, los trastornos dislipémicos y la hiperglucemia, configuran el “síndrome metabólico”. Se considera este síndrome un elemento decisivo en la epidemia actual de diabetes y de enfermedad cardiovascular, de modo que se ha convertido en

un problema mundial de salud pública. A través de mecanismos neuroendócrinos que no han sido plenamente establecidos, los distintos componentes del síndrome metabólico se asocian con la presencia de trastornos de sueño, como el síndrome de apnea obstructiva de sueño, la privación de sueño y el trabajo en turnos (Cardinali *et al.*, 2011).

Existen menos datos acerca de qué factores sociales predicen o influyen en la duración y calidad de sueño. Se ha estudiado que un mayor nivel de instrucción se relaciona con una mejor calidad de sueño debido a que posibilita un mejor nivel de ingresos (Moore *et al.*, 2002). Por otro lado, las condiciones de vivienda precaria se asocian a factores ambientales, como ruido y luz, que alteran el sueño (Simonelli *et al.*, 2013). Finalmente, las grandes ciudades presentan características diferenciales en cuanto a las condiciones laborales y posibilidades de esparcimiento (por ejemplo sociedades que trabajan 24 horas al día, los 7 días de la semana) que pueden actuar alterando patrones de sueño; Díez *et al.*, 2011; Hale *et al.*, 2007).

Para concluir, se sabe que el estrato socioeconómico, el tipo de vivienda, el lugar de residencia y el nivel de instrucción son reconocidos determinantes de la salud. Los trastornos en la duración y calidad de sueño pueden tener un papel importante a la hora de explicar cómo estos factores sociales se traducen en patologías específicas.

CAPÍTULO 5

CULTURA DEMOCRÁTICA, CONFIANZA INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y VIDA CIUDADANA

CAROLINA MORENO

Tanto las teorías de desarrollo humano como de las ciencias políticas acuerdan en reconocer a la democracia como la mejor forma de gobierno para garantizar a los ciudadanos condiciones óptimas de bienestar, desarrollo y libertad. Asimismo, existen un conjunto de derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y enumerados en diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Internacional de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales (1966) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966), que consagran un amplio abanico de derechos políticos y libertades civiles, entre ellos el derecho a la seguridad personal, al sufragio universal y libre, y a la libre participación en los asuntos públicos y en la vida cultural de una Nación (Moreno, 2012, p. 213).

En este marco, el presente capítulo tiene como principal objetivo analizar los cambios que se produjeron entre los años 2010 y 2012 en torno al compromiso ciudadano con la cultura y los valores de la democracia, haciendo hincapié en el modo en que la dinámica de la desigualdad social afecta y condiciona dicho compromiso. Para ello, en primer lugar se estudian las preferencias ciudadanas por un gobierno democrático, las percepciones sobre la eficacia del funcionamiento de la democracia para resolver los principales problemas que afectan al país, y la valoración otorgada al sufragio universal como factor de

cambio político y social. Por otro lado, se analizan los grados de confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales, de representación de intereses y de la sociedad civil, y se miden los niveles de participación política, social y solidaria, reconociendo a la misma como un aspecto fundamental del desarrollo democrático de una Nación.

Por último, considerando el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, se analiza el problema de la inseguridad como un aspecto fundamental para el desarrollo de la vida ciudadana, encarándolo desde su doble naturaleza: tanto desde la cantidad o número de delitos registrados como desde la percepción o sentimiento de inseguridad que experimentan los ciudadanos. Por su parte, se analiza la existencia de venta, tráfico o intercambio de drogas o estupefacientes como un aspecto adicional que condiciona e influye en la seguridad ciudadana.

Es importante aclarar que el contexto político y económico en el que se enmarca el presente estudio influye sobre el comportamiento de dichos indicadores. El año 2010 estuvo fuertemente condicionado por la crisis económica internacional de 2009, sin embargo, la considerada recuperación económica posterior y el despliegue, por parte del Gobierno, de políticas sociales, en medio de un panorama alentador respecto a las expectativas de crecimiento de la sociedad, favorecieron durante el bienio 2010-2011 el triunfo electoral sin precedentes de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en oc-

tubre de 2011. No obstante, dichos aspectos positivos se vieron opacados por los residuos de la crisis internacional y por cuestiones postergadas en el plano interno, como los altos índices de inflación y los graves niveles de pobreza y de desigualdad. Estas cuestiones, llevaron a que durante 2012 se produzca una nueva caída en recesión y un mayor crecimiento de la inflación teniendo consecuencias importantes sobre los niveles de empleo, pobreza y descontento ciudadano.

El presente análisis se basa en los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina-Bicentenario (2010-2016) y se centra en la descripción de la evolución 2010-2011-2012. Estudia particularmente el modo en que las características personales, sociodemográficas, económicas y residenciales de la población entrevistada afectaron las percepciones, valoraciones y comportamientos de la población adulta de áreas urbanas, influyendo en las capacidades de desarrollo humano, bienestar subjetivo e integración social a nivel del conjunto de

la sociedad. En todos estos casos, el análisis se realiza examinando incidencias porcentuales y variaciones interanuales medidas en puntos porcentuales.

Dicha evolución se analiza a partir de una serie de modelos de regresión, en función de reconocer y evaluar las condiciones estructurales bajo las cuales se reproduce la deuda social en nuestro país. Adicionalmente, se presenta una nota de investigación que aborda con mayor profundidad la problemática de la seguridad ciudadana. Cabe informar que los datos estadísticos completos empleados para la elaboración de este capítulo se encuentran disponibles en el documento digital “Barómetro III - Serie Bicentenario (2010-2011-2012). Información Estadística”, el cual puede bajarse o consultarse desde la página web del Observatorio de la Deuda Social Argentina.

A continuación, la figura 5.1 presenta un esquema detallado de las dimensiones, variables e indicadores objeto de análisis en este capítulo.

FIGURA 5.1: ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE CULTURA DEMOCRÁTICA, CONFIANZA INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y VIDA CIUDADANA

5.1 PREFERENCIAS, CONFORMIDAD Y ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA		
PREFERENCIA POR TIPO DE GOBIERNO	Es una medida subjetiva sobre la preferencia ciudadana por un gobierno con un Presidente con fuerte poder o donde el poder esté repartido entre el Presidente, el Congreso y la Justicia.	Porcentaje de personas de 18 años y más que declararon preferencia por un gobierno: Con un Presidente con fuerte poder, o Donde el poder esté repartido.
CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA	Es una medida subjetiva sobre el nivel de conformidad con el funcionamiento de la democracia.	Identifica a las personas de 18 años y más que se declaran: Nada conformes, Poco conformes, o Muy conformes.
CONSIDERACIÓN DEL VOTO COMO FACTOR DE CAMBIO	Es una medida subjetiva sobre la capacidad que tiene el voto para generar cambios en la realidad social y política de nuestro país.	Porcentaje de población de 18 años y más que declararon que el voto no sirve como factor de cambio social.

5.2 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES CIUDADANAS		
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO	Es una medida subjetiva de los niveles de confianza en el Gobierno Nacional, el Congreso y la Justicia.	Porcentaje de población de 18 años y más que declararon sobre las instituciones de referencia: Ninguna confianza, Poca confianza, Alta confianza.
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES	Es una medida subjetiva de los niveles de confianza en los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos piqueteros.	Porcentaje de población de 18 años y más que declararon sobre las instituciones de referencia: Ninguna confianza, Poca confianza, Alta confianza.
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	Es una medida subjetiva de los niveles de confianza en las ONGs/Cáritas, la Iglesia y los medios de comunicación.	Porcentaje de población de 18 años y más que declararon sobre las instituciones de referencia: Ninguna confianza, Poca confianza, Alta confianza.
5.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES POLÍTICAS, SOCIALES Y SOLIDARIAS		
PARTICIPACIÓN POLÍTICA	Es una medida objetiva de participación en partidos políticos, sindicatos o gremios y/o en grupos de protesta.	Porcentaje de población de 18 años y más que declararon haber participado en los últimos 12 meses en las instituciones o grupos de referencia.
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA	Es una medida objetiva de participación en actividades solidarias o junta de vecinos, en actividades parroquiales o de alguna institución religiosa y/o en grupos sociales.	Porcentaje de población de 18 años y más que declararon haber participado en los últimos 12 meses en las instituciones o grupos de referencia.
5.4 SEGURIDAD CIUDADANA E INTEGRIDAD CORPORAL		
HABER SUFRIDO UN HECHO DE DELINCUENCIA O VIOLENCIA	Es una medida objetiva de haber sufrido el entrevistado o algún miembro de su hogar un hecho de delincuencia o violencia en el último año.	Porcentaje de 18 años y más que declararon haber sufrido un hecho de delincuencia.
SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD	Es una medida subjetiva sobre la percepción de la probabilidad de sufrir un hecho de delincuencia.	Identifica a las personas de 18 años y más que declararon como muy o bastante probable la posibilidad de sufrir un delito.
VENTA, TRÁFICO O INTERCAMBIO DE DROGAS	Es una medida subjetiva sobre la percepción de la existencia de venta, tráfico o intercambio de drogas o estupefacientes en el barrio.	Identifica a las personas de 18 años y más que declararon que en su barrio existe venta, tráfico o intercambio de drogas o estupefacientes.

5.1 PREFERENCIAS, CONFORMIDAD Y ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA

Seguidamente se examinan las tendencias ciudadanas a preferir un gobierno con fuerte poder centrado en la figura del Presidente, en lugar de un gobierno con el poder repartido entre los tres poderes de la República (ejecutivo, legislativo y judicial). Asimismo, se analizan cuáles son los niveles de conformidad con el funcionamiento de la democracia percibidos por la ciudadanía en general, teniendo en cuenta la eficacia de la misma para resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad. Por último, considerando el sufragio como un elemento fundamental del sistema democrático y como el principal derecho político que garantiza la participación de todos los ciudadanos, se estudia el grado de consideración que otorga la ciudadanía al voto como factor de cambio social.

VALORACIÓN CIUDADANA DE LA DEMOCRACIA

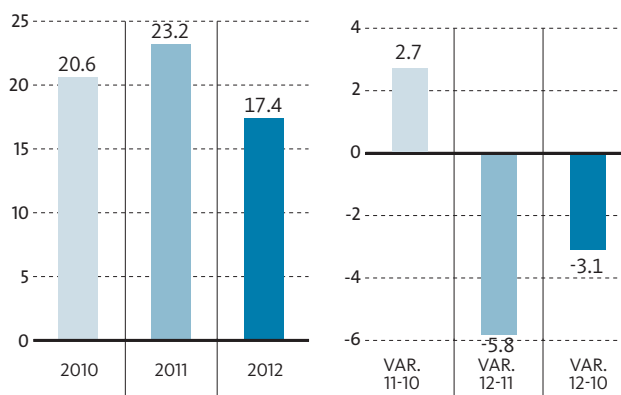
Informes anteriores del Barómetro de la Deuda Social Argentina analizan la existencia, en nuestro país, de una cierta tendencia al presidencialismo o a un fuerte manejo del poder concentrado en una sola persona o grupo de gobierno. Por esta razón, y teniendo en cuenta el principio republicano de división de poderes, a continuación se estudia cómo evolucionan los niveles de penetración de estas preferencias en la sociedad argentina y de qué manera el contexto social, político y económico genera cambios e influye en dichas preferencias.

La figura 5.1.1 da cuenta de que, tras producirse un aumento en la preferencia por un gobierno con el poder concentrado en la figura presidencial durante el bienio 2010-2011 (pasó de 20,5% a 23,2%), en 2012 se quiebra dicha tendencia para aumentar la preferencia por la elección republicana de un gobierno con el poder dividido entre el Congreso, la Justicia y el Ejecutivo nacional. Es importante destacar que el aumento de la preferencia presidencialista que se produjo en 2011 adquiere especial relevancia si se observa el contexto político y social de aquel momento, que coincidía con el fuerte apoyo que recibió la Presidencia en las elecciones de octubre de dicho año, apoyo

Figura 5.1.1

PREFERENCIA POR UN GOBIERNO CON FUERTE PODER PRESIDENCIAL

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

que comenzó a dilatarse conforme aumentaba el descontento social vinculado con la recesión, la problemática financiera, la caída del empleo y el crecimiento de la presión inflacionaria. En respuesta a esto, se produjo una disminución entre la población adulta por la elección presidencialista de concentración de poder en la figura presidencial y un consecuente aumento por la elección republicana.

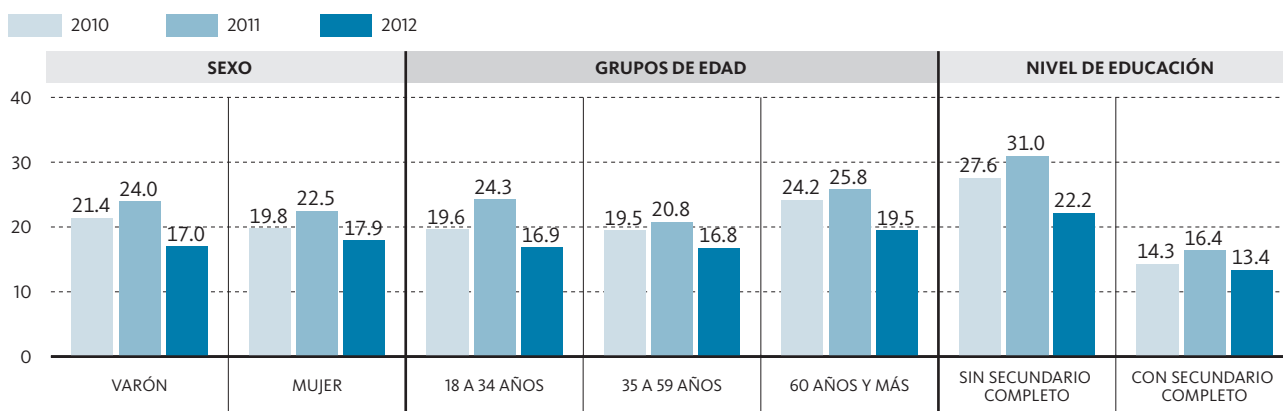
Las características sociodemográficas de la población analizada indican que no surgieron diferencias significativas por sexo o edad de los adultos encuestados. A pesar de ello, la tendencia a preferir un gobierno con fuerte poder presidencial fue más alta entre los mayores de 60 años durante todo el período de estudio, colocándose en niveles cercanos al 20% en el año 2012 (19,5%), contra 16,9% entre los más jóvenes y los de edades medias (figura 5.1.2).

Sin embargo, al analizar las condiciones educativas, socioeconómicas y residenciales de los individuos entrevistados, las figuras 5.1.2 y 5.1.3 dan cuenta de que quienes presentan condiciones más vulnerables, ya sea porque no terminaron sus estudios secundarios, porque pertenecen al cuartil inferior de la escala socioeconómica o porque residen en villas o en zonas con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo, tienden a preferir, en mayor medida, gobiernos con el poder concentrado en la figura presidencial si se los compara con quienes se hallan en condiciones socioeducativas y residenciales más favorables. Así,

Figura 5.1.2

PREFERENCIA POR UN GOBIERNO CON FUERTE PODER PRESIDENCIAL SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

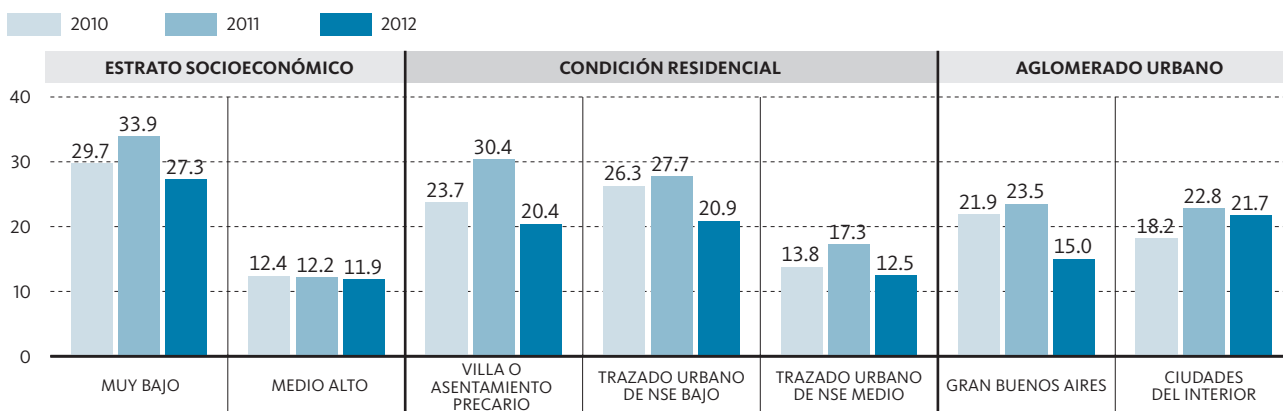


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.1.3

PREFERENCIA POR UN GOBIERNO CON FUERTE PODER PRESIDENCIAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

cuanto menor es el nivel de educación del entrevistado, más aumenta dicha preferencia en todos los años analizados (pasando, en 2010, de 14,3% entre quienes cuentan con secundario completo a 27,6% entre quienes no completaron sus estudios secundarios; de 16,4% a 31% en 2011; y de 13,4% a 22,2% en 2012, respectivamente).

A pesar de ello, la caída en la preferencia por un gobierno con fuerte poder presidencial, producida durante el último bienio de estudio, fue impulsada principalmente por el comportamiento de la población más vulnerable. Las figuras 5.1.2 y 5.1.3 muestran

que a pesar de ser estos sectores los que prefieren en mayor medida un gobierno con estas características, una importante disminución de dicha preferencia se observó entre 2011 y 2012, tanto entre quienes no terminaron el secundario (de 31% a 22,2%) como entre quienes pertenecen al estrato muy bajo (de 33,9% a 27,3%) y residen en villas o asentamientos precarios (de 30,4% a 20,4%). Por el contrario, la baja preferencia por un gobierno presidencialista se mantuvo con mayor estabilidad en niveles que no superan el 13% entre los sectores con más educación, los estratos más altos y las zonas con trazado urbano de NSE medio.

Por último, la figura 5.1.3 muestra que en el Gran Buenos Aires se produjo una importante caída de la preferencia por este tipo de gobierno (de 23,5% a 15%) durante el último bienio de estudio, a diferencia de lo ocurrido en las Ciudades del Interior del país, donde dicha preferencia se mantuvo estable en niveles cercanos al 22% en los dos últimos años.

CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

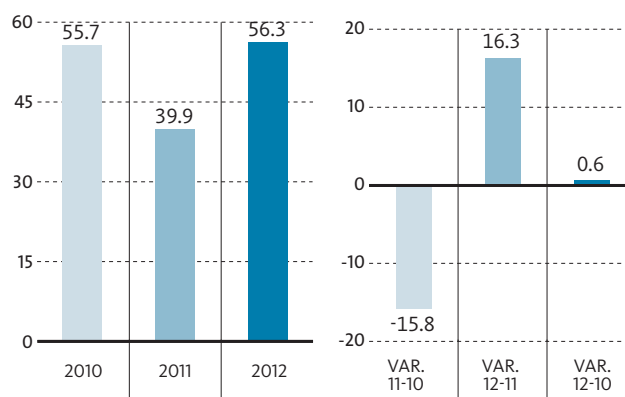
Si se considera el logro de niveles aceptables y dignos de bienestar uno de los objetivos fundamentales de la democracia como forma de gobierno, es menester evaluar la opinión que tienen los propios ciudadanos respecto del cumplimiento de dicho objetivo y cómo la democracia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Una forma de realizar dicho análisis es estudiando el déficit presente en la ciudadanía en lo concerniente a la conformidad con el funcionamiento de la democracia en el país.

Como indica la figura 5.1.4, más de la mitad de la población entrevistada declaró estar muy poco conforme con el funcionamiento de la democracia en el último año de estudio (56,3%). Coincidiendo una vez más con el contexto electoral, en el cual el oficialismo obtuvo un amplio triunfo en octubre de 2011, se produjo una importante caída en del déficit (de 15,8 p.p.) para colocarse en torno al 40% (39,9%). La desaceleración del crecimiento y la acelerada inflación de 2012 coincidieron con un aumento de 16,3 p.p. en la percepción negativa sobre la capacidad de la democracia para resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad, colocándose en niveles cercanos a los del año base (2010).

Figura 5.1.4

DEFICIT EN LA CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



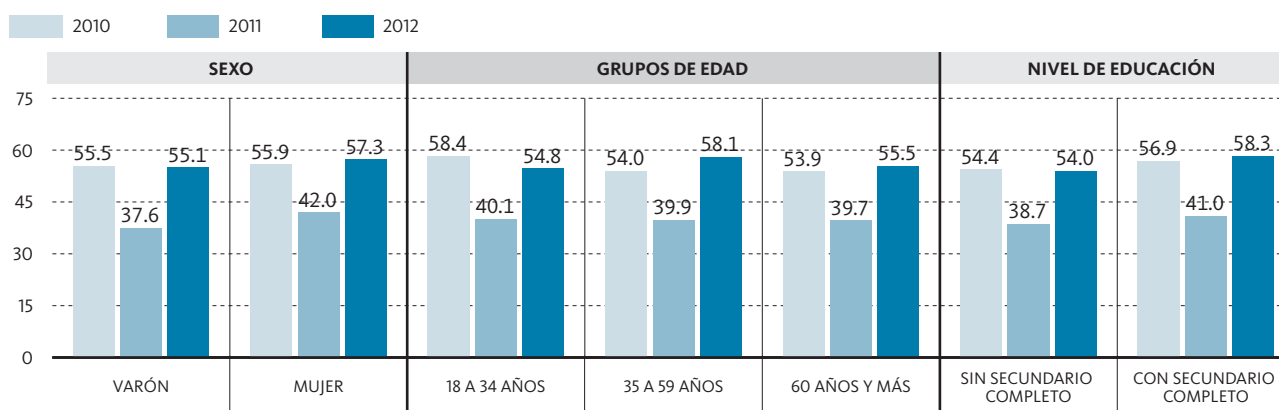
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

De acuerdo con las figuras 5.1.5 y 5.1.6, no se encuentran diferencias significativas según las características de la población entrevistada. Sin embargo, según estrato socioeconómico y condición residencial, el déficit en dicha percepción aumenta entre la

Figura 5.1.5

DEFICIT EN LA CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

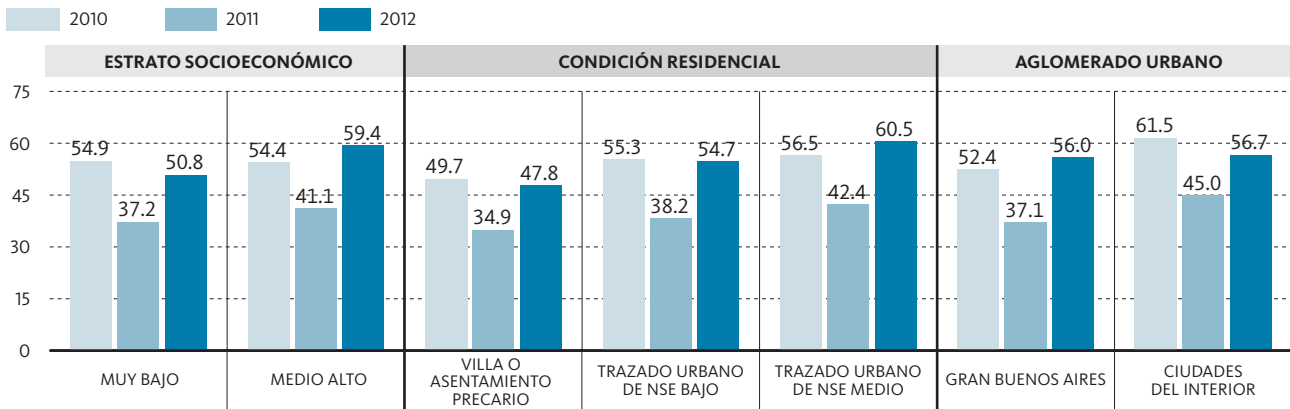


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.1.6

DEFICIT EN LA CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

población adulta del estrato y la condición residencial más alta durante todo el período de estudio, pero sobre todo durante 2012 (llegando al 59,4% contra 50,8% en el muy bajo) y en las zonas de NSE medio (60,5% contra 47,8% en villas o asentamientos precarios). Pese a no hallarse diferencias significativas según aglomerado urbano, el déficit durante el último bienio aumentó más en el Gran Buenos Aires que en las Ciudades del Interior (pasando de 37,1% a 56% en el primer caso y de 45% a 56,7% en el segundo).

CONSIDERACIÓN DEL VOTO COMO GENERADOR DE CAMBIOS

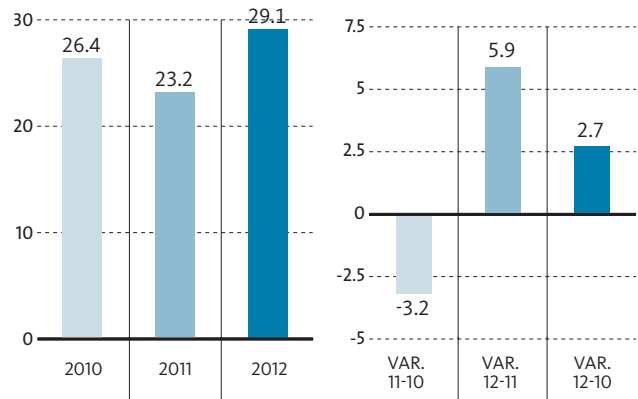
El sufragio puede ser considerado como el medio principal para generar cambios en la realidad social y política del país a través de la elección de los representantes políticos. Es por esta razón que, seguidamente, se analiza la percepción que tienen los ciudadanos sobre la capacidad del voto para generar cambios sociales. Dicho análisis se realiza teniendo en cuenta el efecto que pueda tener el contexto político particular en el que se enmarca el presente estudio.

La figura 5.1.7 revela que a pesar de la caída del déficit de 3,2 p.p. entre 2010 y 2011, este aumentó en 5,9 p.p. en 2012, llevando a que, en términos generales, entre los años 2010 y 2012 se produzca un crecimiento de en torno a 3 p.p. en el déficit en la consideración del voto como factor de cambio. Cerca

Figura 5.1.7

DEFICIT EN LA CONSIDERACIÓN DEL VOTO COMO FACTOR DE CAMBIO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

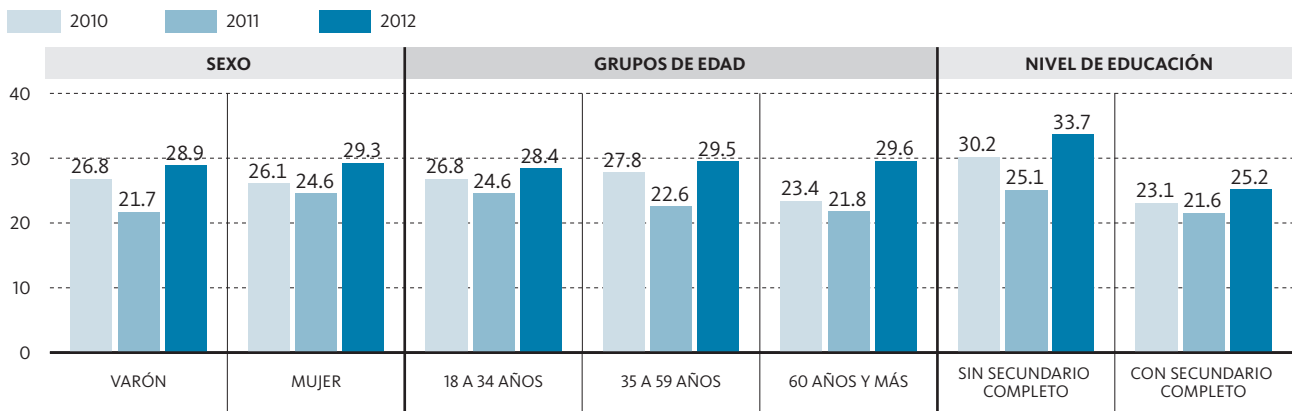
de 3 de cada 10 entrevistados respondieron, en 2012, que el voto no tiene ningún efecto sobre la realidad social del país (29,1%).

Aun cuando no hubo diferencias significativas según el sexo y la edad de los entrevistados adultos, se observa que el déficit registrado en el último año de estudio fue impulsado por un mayor crecimiento del mismo entre los varones (de 21,7% a 28,9%) y la población mayor de 60 años (de 21,8% a 29,6%) (figura 5.1.8). Un análisis según las condiciones residenciales y socioeducativas de la población encuestada muestra

Figura 5.1.8

DEFICIT EN LA CONSIDERACIÓN DEL VOTO COMO FACTOR DE CAMBIO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

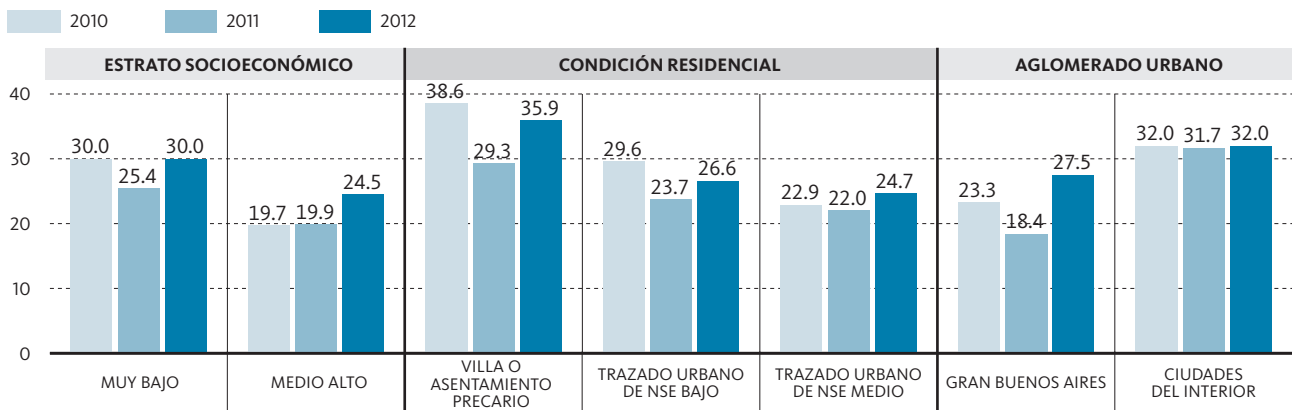


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.1.9

DEFICIT EN LA CONSIDERACIÓN DEL VOTO COMO FACTOR DE CAMBIO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

que dicho déficit afecta en mayor medida a la población menos educada y de menor nivel socioeconómico y residencial. La creencia de que el voto no sirve como factor de cambio se colocó en torno al 34% entre quienes no terminaron sus estudios secundarios (33,7%), para bajar en 2012 al 25,2% entre quienes sí lo culminaron. Asimismo, los niveles de déficit en dicho año se colocaron en 30% para el estrato muy bajo contra el 24,5% en el medio alto; y 35,9% en las villas o asentamientos precarios contra 24,7% en las zonas con trazado urbano de NSE medio. Siguiendo esta tendencia se deduce que el aumento del déficit en

el último bienio afectó en mayor medida a los sectores más vulnerables.

Por último, la creencia de que el voto no sirve para generar cambio social resulta más alta y más estable en el tiempo entre los residentes de las Ciudades del Interior que entre los que habitan en el Gran Buenos Aires. Durante todo el período, 3 de cada 10 entrevistados del interior del país respondieron que el sufragio es incapaz de generar cambios sociales. Por su parte, en el Gran Buenos Aires se produjo un importante aumento de dicho déficit entre los años 2011 y 2012, al pasar de 18,4% a 27,5%.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LAS PREFERENCIAS CONFORMIDAD Y ATRIBUTOS DEMOCRÁTICOS

La desigualdad y variabilidad observada en los diversos indicadores asociados a las preferencias, conformidad y atributos democráticos induce a preguntarnos cuáles son los condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que inciden en la preferencia por un gobierno con un presidente con fuerte poder, en la baja conformidad con el funcionamiento de la democracia y en la poca valoración del voto como factor de cambio social. Con este fin se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con las que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de responder positivamente en dichos indicadores. La figura 5.1.10 presenta los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

En cuanto al modelo I (preferencia por un gobierno con fuerte poder presidencial), cabe observar que el mismo alcanzó una bondad de ajuste en términos de predicción del 59,3%. En este caso, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, destaca el hecho de que manteniendo controladas las restantes variables intervinientes, los principales factores explicativos de la preferencia por un gobierno con fuerte poder presidencial son: el aglomerado urbano, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la edad y el momento histórico, pareciendo no tener incidencia significativa tanto el sexo como la jefatura de hogar.

Conforme se desciende en la estratificación social, aumenta de forma notoria la razón de probabilidades en favor de preferir un presidente con fuerte poder. Así pues, en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los integrantes del estrato socioeconómico bajo poseen 40% más de probabilidad y los de estrato medio bajo, 87% más. Con referencia a quienes terminaron el secundario, los sujetos que no lo terminaron presentan un 39% más de probabilidad de elegir este tipo de gobierno.

Ahora bien, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, donde parece haber mayor rechazo a esta afirmación, las probabilidades de elegir un gobierno con figura presidencial fuerte aumentan un 67% para los habitantes del Conurbano Bonaerense, un 30% para los de otras grandes áreas me-

tropolitanas y un 111% en los residentes del Resto Urbano Interior. Asimismo, se destaca el hecho de que, quienes habitan en zonas con trazado urbano de NSE bajo presentan un 10% más de probabilidad de preferir este tipo de gobierno que los residentes en zonas con trazado urbano de NSE medio.

Con respecto al momento de medición, y coincidiendo con el año electoral, se observó en 2011 una mayor razón de probabilidades (19%) en favor de preferir este tipo de gobierno que en 2010; mientras que en 2012 este comportamiento se revirtió, registrándose una propensión negativa hacia tal preferencia (19% menos).

En cuanto al modelo II (baja conformidad con el funcionamiento de la democracia) y al modelo III (no considerar al voto como factor de cambio social), cabe observar que alcanzaron una capacidad de predicción de 57,6% en el primer caso y de 57,1% en el segundo. Al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, sobresale el hecho de que, manteniendo controlados los demás factores intervinientes, resultaron explicativos del déficit en ambos indicadores: el sexo, la posición social, el aglomerado y el momento de relevamiento. Solo en el caso del modelo II incide de manera significativa la condición residencial (vivir en villa o asentamiento), mientras que para el modelo III resultaron significativas las variables edad, nivel educativo y jefatura de hogar.

En el modelo II, la razón de probabilidades en favor de no estar conforme con el funcionamiento de la democracia aumenta un 8% en los varones con respecto a las mujeres y disminuye un 64% entre los habitantes de villas con respecto a los que residen en zonas con trazado urbano de NSE medio. Por su parte, los habitantes del Conurbano Bonaerense y los del Resto Urbano, comparados con los ciudadanos de CABA, alcanzaron 73% y 89%, respectivamente, menos probabilidades de estar disconformes. En cuanto al modelo III, el riesgo de no considerar el voto como factor de cambio social aumenta con respecto a la CABA tanto en el Conurbano (23%) como en las otras grandes áreas metropolitanas y en el Resto Urbano Interior (58% y 120%, respectivamente). Asimismo, la probabilidad de considerar el voto como poco eficaz para conducir cambios resultó 21% mayor entre los ciudadanos del estrato bajo en comparación con los del medio alto, y 28% mayor entre quienes no terminaron sus estudios secundarios en comparación con quienes sí los terminaron.

Por último, en lo concerniente a los cambios ocurridos durante el período 2010-2012, tomando como

Figura 5.1.10

RAZONES DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A LAS PREFERENCIAS, ATRIBUTOS Y CONFORMIDAD CON LA DEMOCRACIA SEGÚN CATEGORÍAS SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. En porcentaje y razón de probabilidades de la población de 18 años y más.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	PREFERENCIA POR UN GOBIERNO CON FUERTE PODER PRESIDENCIAL		BAJA CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA		NO CONSIDERAR AL VOTO COMO FACTOR DE CAMBIO SOCIAL	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	-0,047	0,95	0,082**	1,09	0,088**	1,09
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	0,143***	1,15	-0,002	1,00	0,018	1,02
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,111**	1,12	-0,065	0,94	-0,126**	0,89
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,332***	1,39	-0,002	1,00	0,245***	1,28
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	-0,045	0,96	0,038	1,04	-0,051	0,95
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,097	1,10	0,169***	1,18	0,086	1,09
Bajo	0,339***	1,40	0,044	1,05	0,196***	1,22
Muy bajo	0,643***	1,90	0,052	1,05	0,125*	1,13
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	0,098*	1,10	-0,059	0,94	0,065	1,07
Villa o asentamiento precario	-0,136	0,87	-0,441***	0,64	-0,090	0,91
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	0,515***	1,67	-0,307***	0,74	0,209***	1,23
Grandes Areas Urbanas	0,263***	1,30	0,062*	1,06	0,461***	1,59
Resto Urbano	0,748***	2,11	-0,110*	0,90	0,792***	2,21
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,172***	1,19	-0,636***	0,53	-0,281***	0,76
2012	-0,206***	0,81	0,034	1,03	0,027	1,03
CONSTANTE						
	-2,356***	0,09	0,310***	1,36	-1,510***	0,22
R cuadrado de Cox y Snell						
	0,042		0,033		0,024	
R cuadrado de Nagelkerke						
	0,067		0,044		0,035	
Porcentaje global de aciertos						
	59,3		57,6		57,1	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

parámetro de comparación el año 2010, ambos modelos revelan que, manteniendo constante el resto de los factores intervinientes, disminuyen de manera significativa en 2011 las probabilidades de experimentar los mencionados déficits (en 52% para el modelo II y en 15% para el modelo III). En 2012, finalmente, las razones de probabilidad de ambos indicadores vuelven a aumentar, alcanzándose niveles significativamente similares a los de 2010.

5.2 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES CIUDADANAS

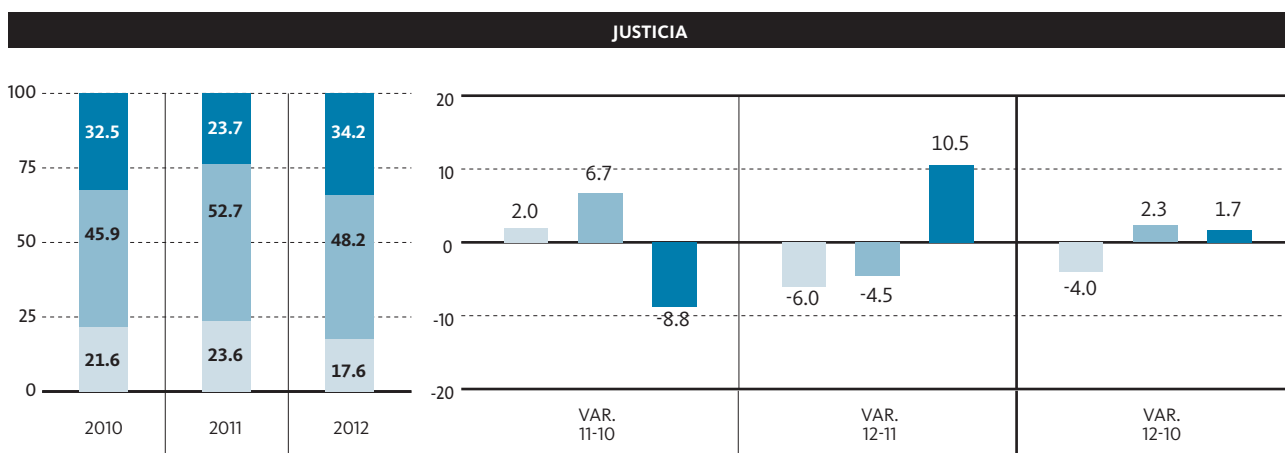
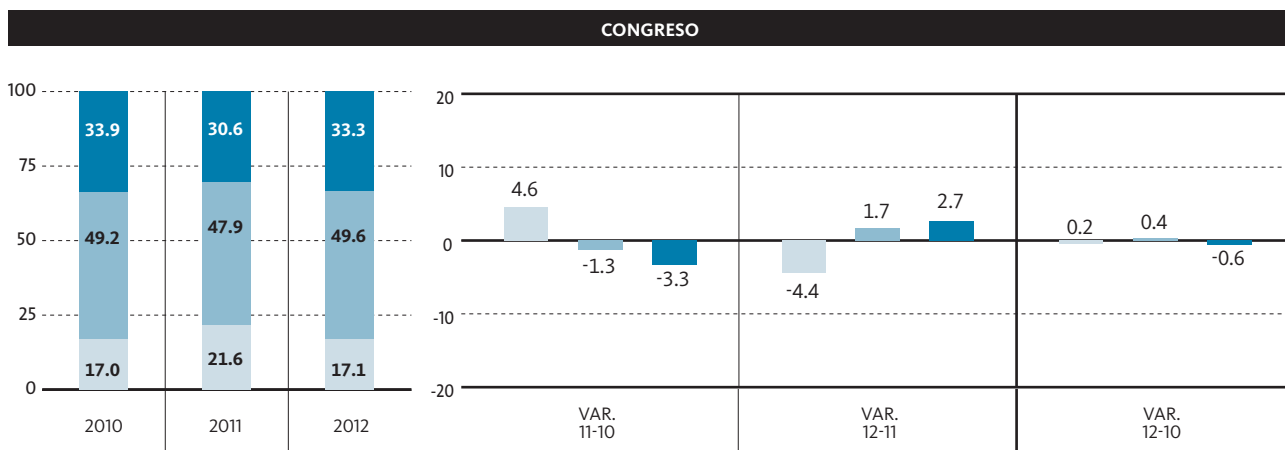
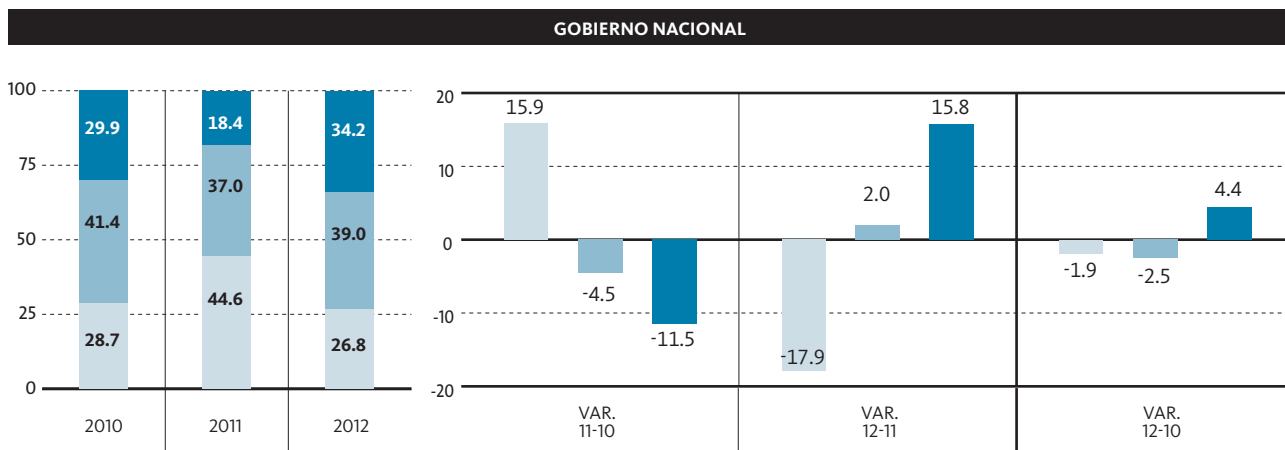
Los niveles de confianza ciudadana, el apoyo que los ciudadanos dan a la democracia y la credibilidad o apreciación que tienen de ella, incluyendo las instituciones que la conforman, son componentes claves para la sustentabilidad o perduración de la misma.

Figura 5.2.1

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

Alta confianza Poca confianza Ninguna confianza



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Por ello, los altos niveles de desconfianza política, que como se describirá a continuación, están presentes en la sociedad argentina, pueden estar indicando la existencia de una democracia débil y la ausencia de calidad gubernamental para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía. A su vez, tal como lo establece A. Sen, la desconfianza política entraña condiciones de desigualdad porque genera efectos de exclusión o formas adversas de participación en esferas relevantes de actividad (Sen, 2000).

Como se ha especificado en el último informe del Barómetro de la Deuda Argentina, Serie Bicentenario (2010-2016), Año II, es importante considerar que los niveles de confianza ciudadana suelen variar de acuerdo con el contexto económico, social y político en el cual se encuentran. Es por ello que en la consideración de la efectividad de una institución pueden invocarse cuestiones emocionales, educativas y coyunturales, ya que hay personas con mayor preparación que otras para realizar juicios más elaborados con respecto al funcionamiento institucional de una sociedad. Los grados de confianza institucional varían según el contexto político y económico, el tipo de institución analizada y las características particulares, sociodemográficas, económicas y residenciales de los individuos encuestados.

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

La figura 5.2.1 da cuenta de la existencia en nuestro país de altos niveles de desconfianza gubernamental. Siete de cada diez encuestados respondieron en los años 2010 y 2012 no confiar o confiar poco en el Gobierno Nacional. Sin embargo, en el año 2011 se produce una excepción en dicho comportamiento, ya que los niveles de alta confianza aumentaron de manera considerable con respecto al año anterior (15,9 p.p.) para colocarse en torno al 45%. Este crecimiento en la confianza en el Gobierno Nacional se produjo en medio de un contexto político particular de crecimiento económico y de elecciones presidenciales en las que el oficialismo recibió un amplio apoyo ciudadano. No obstante, el avance de los problemas económicos y el aumento del descontento social de 2012 coincidieron con una caída en los niveles de confianza gubernamental de 17,9 p.p. Es preciso destacar que el carác-

ter presidencialista del gobierno argentino favorece la poca estabilidad de este indicador y la vulnerabilidad contextual del mismo. Este argumento cobra relevancia al analizar la evolución de la confianza en las otras dos instituciones de gobierno, ya que el crecimiento económico y el contexto electoral, aparentemente, no ejercieron un efecto similar sobre las mismas. A pesar del leve incremento que en el año 2011 se produjo en la confianza en la Justicia y en el Congreso, y su posterior caída en el último año estudiado, los altos niveles de desconfianza en estas instituciones se mantuvieron más estables, afectando aproximadamente a 8 de cada 10 entrevistados durante todo el trienio.

La importante caída de la confianza en el Gobierno Nacional durante 2012 se produjo independientemente de las características personales de la población adulta entrevistada. Sin embargo, se observa una mayor disminución de la confianza gubernamental entre los varones (de 47,6% a 27,4%) y la población mayor de 35 años (de 45,3% a 24,9%). Esto generó una disminución en las diferencias según sexo y edad observadas en 2011 (cuando los varones y los grupos de edades medias presentaban niveles de alta confianza superiores a los de las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 35 años). Pese a que se observa una tendencia a confiar más en el Congreso y la Justicia entre los varones y la población de 60 años y más, la misma no presenta diferencias significativas según el sexo y la edad de la población entrevistada (figura 5.2.2).

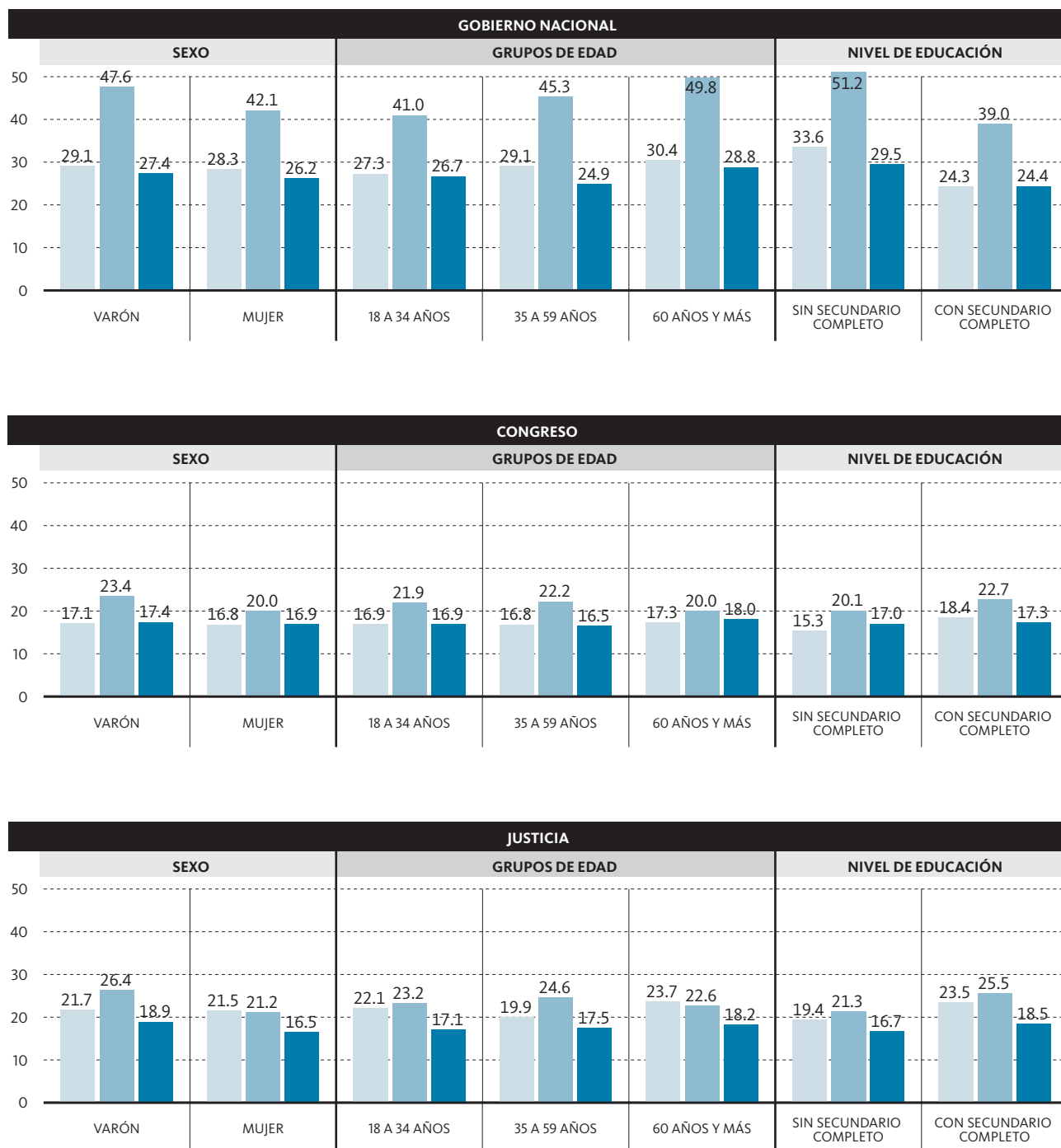
Se consignan a continuación las diferencias registradas en torno a la confianza en el Gobierno Nacional según el nivel educativo y la condición residencial de la población adulta. Durante el trienio 2010-2012, la alta confianza gubernamental fue mayor tanto entre quienes no culminaron sus estudios secundarios, como entre quienes pertenecen al cuartil inferior de la escala socioeconómica y quienes residen en villas o asentamientos precarios. De acuerdo con las figuras 5.2.2 y 5.2.3, en 2012 los niveles de alta confianza se colocaron en torno al 30% entre los que no terminaron sus estudios secundarios (contra 24,4% entre los que sí los culminaron), al 34% entre los del estrato muy bajo (contra 23,7% entre los del medio alto) y al 50% entre los que habitan en villas o asentamientos precarios (contra 23,7% en las zonas urbanas de NSE medio). Asimismo, es en estos sectores donde se produce una mayor inestabilidad en el tiempo de los niveles de confianza, ya que, por lo general, quienes se encuentran

Figura 5.2.2

**ALTA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO
SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN**

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



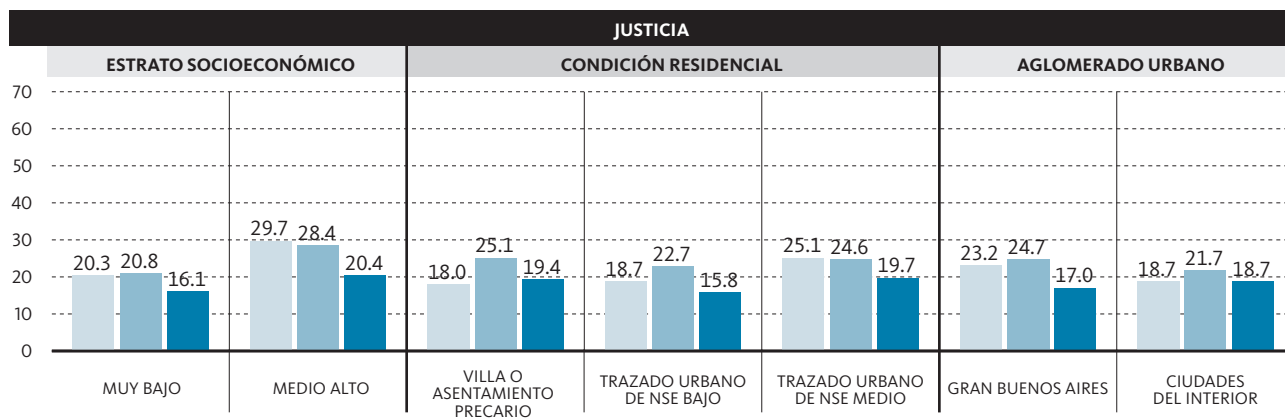
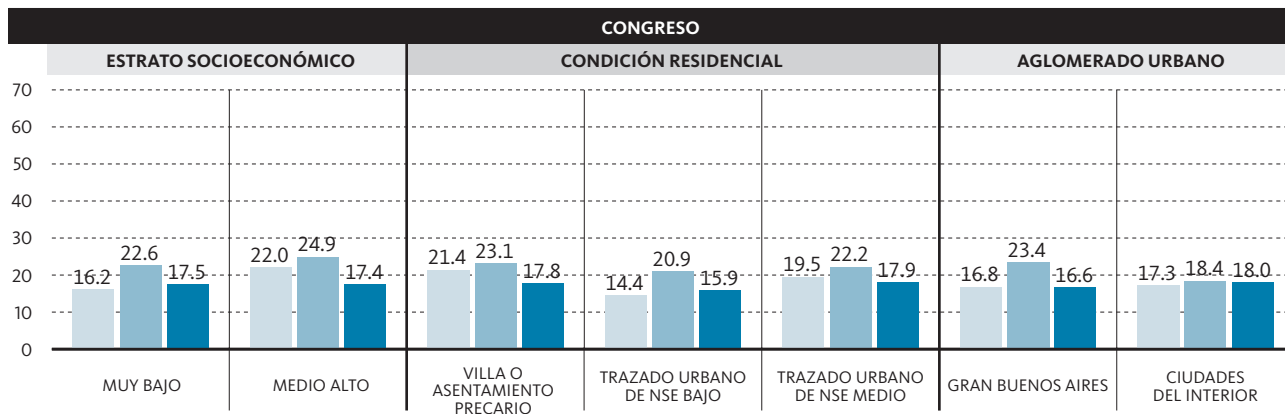
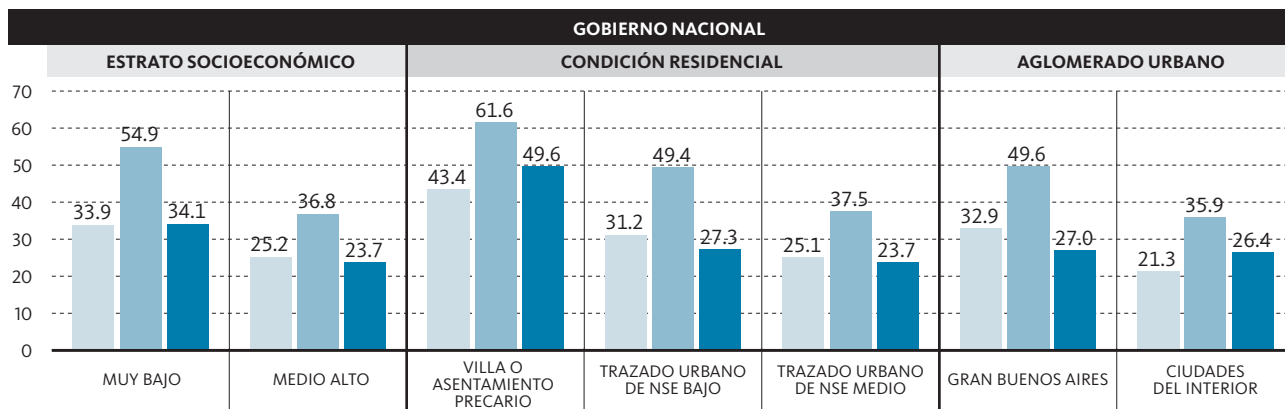
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.2.3

ALTA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica y susceptibilidad hacia las políticas sociales del gobierno se muestran más propensos a estar condicionados por la coyuntura política, social y económica.

Si se analiza la alta confianza en las otras dos instituciones de gobierno (Congreso y Justicia) según las características socioeconómicas y los niveles educativos de la población entrevistada, se observa un comportamiento algo inverso al registrado respecto del Gobierno. En general, suelen presentar mayores niveles de confianza en el Congreso y la Justicia quienes completaron sus estudios secundarios y quienes pertenecen al cuartil superior de la escala social. Por su parte, pese a la caída general de la confianza en las instituciones de gobierno producida entre 2011 y 2012, las dos últimas instituciones mencionadas presentaron niveles de confianza más estables en el tiempo. Importa destacar, sin embargo, que la caída de la confianza en las instituciones legislativa y de justicia que se produjo durante el último bienio (2011-2012) entre quienes terminaron sus estudios secundarios (de 22,7% a 17,3% en el Congreso y de 25,5% a 18,5% en la Justicia) produjo un efecto de atenuación de las diferencias entre los niveles de confianza según condición educativa de la población analizada (figuras 5.2.2 y 5.2.3).

Por último, el análisis de la confianza en las tres instituciones analizadas según el aglomerado urbano reveló en 2011-2012 una mayor caída en la población del Gran Buenos Aires que en la de Ciudades del Interior del país. En GBA, la confianza en el Gobierno Nacional pasó de 49,6% a 27%, en tanto que la confianza en el Congreso bajó de 23,4% a 16,6% y en la Justicia de 24,7% a 17%. Esto produjo un efecto similar al descrito en el párrafo anterior, atenuando las diferencias según el aglomerado urbano presentadas en años anteriores, cuando los residentes de las Ciudades del Interior presentaban menores niveles de alta confianza en las tres instituciones de gobierno que los habitantes del Gran Buenos Aires (figura 5.2.3).

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

A continuación se analizan los condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que inciden en la confianza en las diferentes instituciones de gobierno estudiadas. Con este fin se ajustaron mo-

delos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con las que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de responder positivamente en dichos indicadores. La figura 5.2.4 presenta los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

El modelo I (confianza en el Gobierno Nacional) alcanzó una capacidad de predicción del 59,3%; el modelo II (confianza en la Justicia), una bondad de ajuste en términos de predicción del 57,5%; y el modelo III (confianza en el Congreso), del 55,7%. En los tres casos, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se destaca el hecho de que, manteniendo controlados el resto de las variables intervinientes, los cambios temporales, el aglomerado urbano y el nivel socioeconómico son los principales factores explicativos de la confianza en las tres instituciones analizadas. A la vez, no parecen tener incidencia significativa la edad y la jefatura del hogar.

El análisis según sexo muestra que las probabilidades de las mujeres de confiar en las instituciones de gobierno son entre un 12% y un 17% menor, en cada modelo analizado, a las de los varones. Asimismo, si bien la razón de probabilidad entre los jóvenes en favor de confiar en las tres instituciones analizadas es menor (aunque no significativamente) a la de los adultos de entre 35 y 59 años, los jóvenes registran una menor probabilidad de confianza en el Gobierno Nacional respecto del resto de los modelos analizados (Congreso y Justicia).

Específicamente en el caso de la confianza en el Gobierno Nacional, la razón de probabilidades aumenta conforme se desciende en la estratificación social: en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los integrantes del estrato bajo poseen 10% más de probabilidad y los del muy bajo 21% más. Por el contrario, en el caso de la Justicia y el Congreso, tienen menos probabilidades de confiar en ambas instituciones los estratos menos favorecidos. Así, en el estrato bajo, la probabilidad de confiar en la Justicia baja un 28% y en el Congreso un 20%, mientras que en el estrato muy bajo la razón de probabilidad cae un 30% (Justicia) y un 10% (Congreso).

Respecto de quienes viven en zonas con trazado urbano de NSE medio, donde al parecer hay mayor rechazo a confiar en las instituciones de gobierno, para quienes viven en villas o asentamientos precarios las probabilidades de confiar en estas instituciones aumentan en un 88% (modelo I), en un 28% (modelo II) y en un 34% (modelo III).

Figura 5.2.4

RAZONES DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO SEGÚN CATEGORÍAS SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. En porcentaje y razón de probabilidades de la población de 18 años y más.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	CONFIANZA EN EL GOBIERNO NACIONAL		CONFIANZA EN LA JUSTICIA		CONFIANZA EN EL CONGRESO	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	-0,119***	0,89	-0,176***	0,84	-0,143***	0,87
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,091**	0,91	-0,038	0,96	-0,023	0,98
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,036	1,04	0,075	1,08	0,042	1,04
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,148***	1,16	-0,025	0,98	-0,065	0,94
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	-0,020	0,98	0,055	1,06	0,115**	1,12
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	-0,117**	0,89	-0,299***	0,74	-0,186***	0,83
Bajo	0,098*	1,10	-0,321***	0,73	-0,221***	0,80
Muy bajo	0,195***	1,22	-0,346***	0,71	-0,087	0,92
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	0,087**	1,09	0,004	1,00	-0,103*	0,90
Villa o asentamiento precario	0,635	1,89	0,249**	1,28	0,297**	1,35
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	0,303***	1,35	-0,256***	0,77	-0,027	0,97
Grandes Areas Urbanas	-0,192***	0,83	-0,382***	0,68	-0,091	0,91
Resto Urbano	-0,117*	0,89	-0,139*	0,87	-0,043	0,96
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,708***	2,03	0,112	1,12	0,292***	1,34
2012	-0,111***	0,89	-0,259***	0,77	0,012	1,01
CONSTANTE	-1,098***	0,33	-0,764***	0,47	-1,333***	0,26
R cuadrado de Cox y Snell	0,042		0,013		0,007	
R cuadrado de Nagelkerke	0,067		0,020		0,011	
Porcentaje global de aciertos	59,3		57,5		55,7	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Con respecto al momento de medición, y coincidiendo con el año electoral, se observa en 2011 una mayor razón de probabilidades en favor de confiar en las tres instituciones con respecto a 2010. La misma es 100% más alta en el caso de la confianza en el Gobierno Nacional, 11% en la Justicia y 33% en el Congreso. Durante el año 2012 se revierte este comportamiento, registrándose una propensión negativa hacia la confianza en el Gobierno y en la Justicia.

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES

Se analiza seguidamente la evolución de la confianza ciudadana en aquellas instituciones que suelen presentar los niveles de desconfianza más elevados en nuestro país y que, paradójicamente, encuentran en la representación de los intereses colectivos su fin

ostensible: los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos piqueteros.

Al igual que lo observado con la confianza en las instituciones de gobierno, las instituciones de representación de intereses mejoraron sus niveles de credibilidad entre los años 2010 y 2011, para luego sufrir un retroceso en 2012, con porcentajes cercanos a los del primer año de estudio. A pesar de ello, los niveles de alta confianza en los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos piqueteros en general no superaron el 13% en todos los períodos analizados. De esta forma, luego de un aumento de 4,1 p.p. en la alta confianza en los partidos políticos en el bienio 2010-2011, esta sufrió una caída de casi igual magnitud para colocarse en niveles cercanos a 9% en el año 2012. En otros términos, 9 de cada 10 entrevistados respondieron no confiar en los partidos políticos durante el último año de estudio. Lo mismo se advierte al revisar la alta confianza en los sindicatos, que alcanzó solamente al 10,8% de los entrevistados en 2012, y en mayor profundidad, la confianza en los movimientos piqueteros, cuyos niveles no superaron el 6% durante todo el período de análisis (figura 5.2.5).

El estudio según el sexo y la edad de los entrevistados muestra que el aumento de la confianza entre 2010 y 2011 en las tres instituciones analizadas se produjo fundamentalmente por su incremento entre los jóvenes y los varones de 18 años y más. Así pues, la alta confianza en los partidos políticos subió 5 p.p. en los jóvenes contra 3,4 p.p. en los adultos mayores, y 5 p.p. en los varones contra 3,2 p.p. en las mujeres. En los sindicatos, el aumento de la confianza fue de 4,8 p.p. en los varones contra 2,9 p.p. en las mujeres, mientras que en los movimientos piqueteros fue de 3,8 p.p. en el sexo masculino contra 0,4 p.p. en el femenino. La caída de la confianza durante el año 2012 afectó tanto a las mujeres como a los varones y a los tres grupos etarios analizados. Sin embargo, en el caso de los partidos políticos, la misma fue mayor entre los jóvenes y los encuestados de edades medias, lo que provocó que los adultos de 60 años y más presentaran, durante el último año de estudio, un porcentaje de credibilidad superior al resto (para colocarse en torno al 10% contra 7,6% en el resto de los grupos de edad analizados). En lo que respecta a los movimientos piqueteros, la disminución de la confianza fue impulsada fundamentalmente por aquellos grupos en los que se había incrementado en mayor medida durante el bienio 2010-2011: los varones y los jóvenes de entre 18 y 34 años. Esto ocasionó un efecto de atenuación de las

diferencias en la confianza en dicha institución según las características personales (figura 5.2.6).

Las figuras 5.2.6 y 5.2.7 indican que, aun cuando fueron los entrevistados con estudios secundarios completos, los del cuartil superior y los habitantes con trazado urbano de NSE medio quienes registraron mayores niveles de credibilidad en los partidos políticos, el aumento de la confianza en los mismos durante el bienio 2010-2011 fue impulsado, fundamentalmente, por el fuerte incremento en los sectores más vulnerables, llegando a duplicarse entre quienes no terminaron sus estudios secundarios (pasando de 5,5% a 10,7%), entre los entrevistados del estrato muy bajo (pasando de 4,7% a 11,2%) y entre los habitantes de villas o asentamientos precarios (de 5,4% a 9,4%). Durante el año 2012 la caída de la confianza partidaria en los sectores más favorecidos promovió una reducción de las diferencias según el nivel socioeducativo de la población. Sin embargo, la brecha se mantuvo en el caso de la condición residencial, colocándose en niveles cercanos al 9% en las zonas más desarrolladas, para bajar a 6,5% en las villas o asentamientos precarios.

Dicho comportamiento no se observa al analizar la evolución de la confianza en los movimientos piqueteros, ya que la misma aumenta, entre 2010 y 2011, en mayor medida entre quienes completaron la secundaria, pertenecen al estrato medio alto y habitan en zonas con trazado urbano de NSE medio. Asimismo, es en estos sectores donde se produce una mayor caída en los niveles de alta credibilidad en 2012, provocando una disminución de las diferencias según el nivel educativo y la condición socio-residencial. En el caso de los sindicatos, no se hallan diferencias significativas según las categorías de nivel educativo, estrato socioeconómico y condición residencial de la población de 18 años y más durante todo el período bajo análisis (figuras 5.2.6 y 5.2.7).

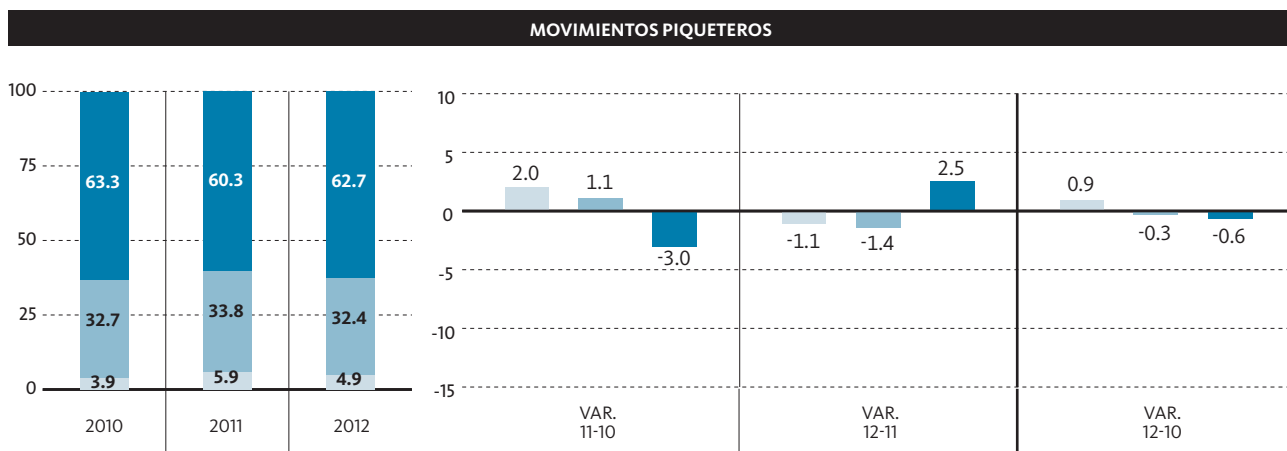
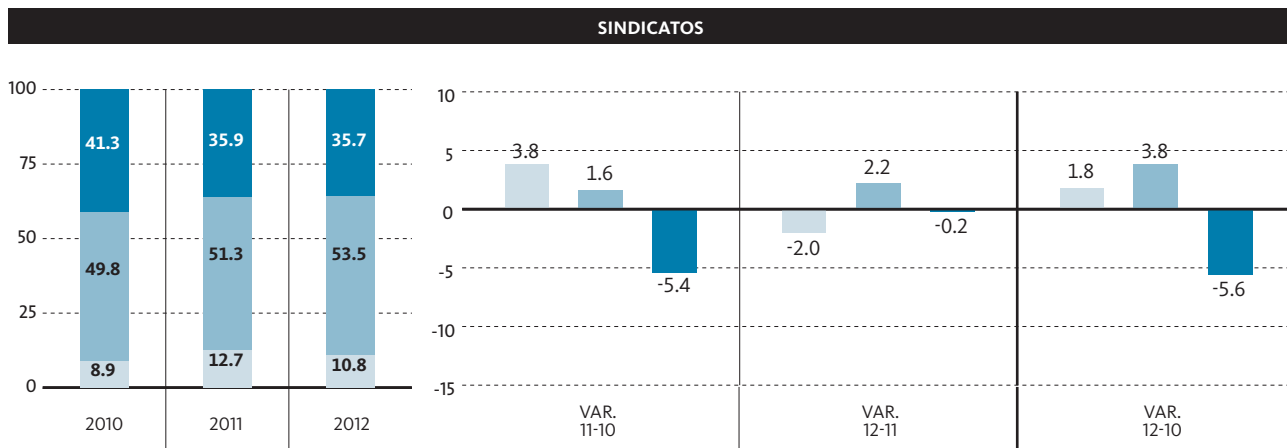
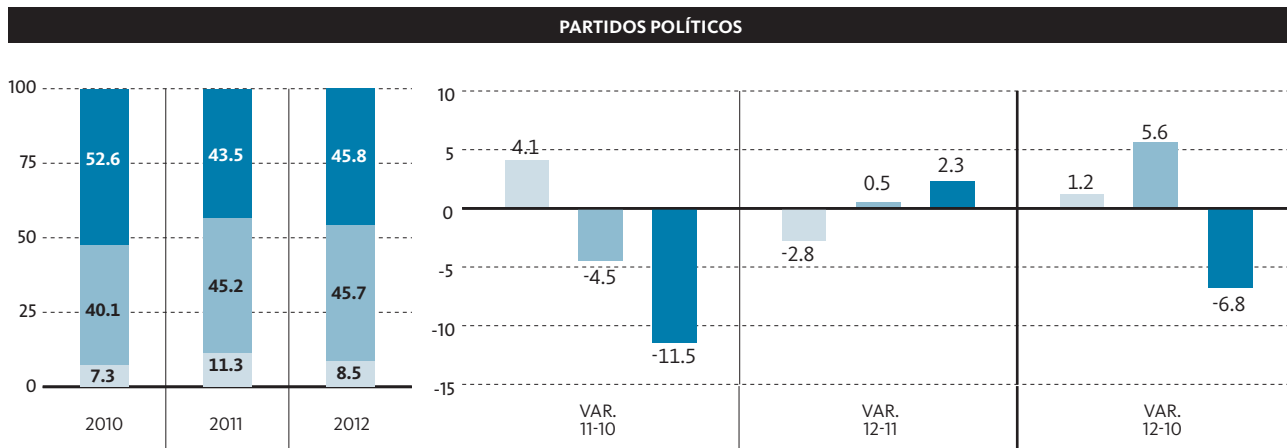
La figura 5.2.7 muestra que a pesar de ser los habitantes del Gran Buenos Aires quienes presentan niveles más elevados de confianza en los partidos políticos y los movimientos piqueteros durante el bienio 2010-2011, la fuerte caída de esta confianza en 2012 provocó que no se hallasen diferencias según aglomerado urbano en la confianza en los partidos (colocándose la alta confianza en 8,5% en ambos) y que en el caso de los movimientos piqueteros se revirtiera la tendencia, pasando a ser los habitantes de las Ciudades del Interior del país quienes registraron mayores niveles de credibilidad (5,8% contra 4,3% en el GBA).

Figura 5.2.5

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

Alta confianza Poca confianza Ninguna confianza



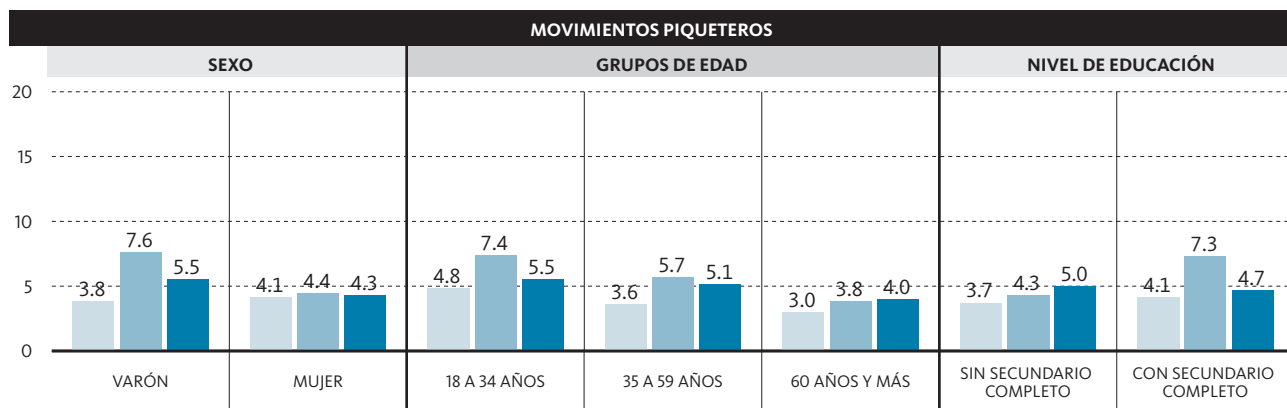
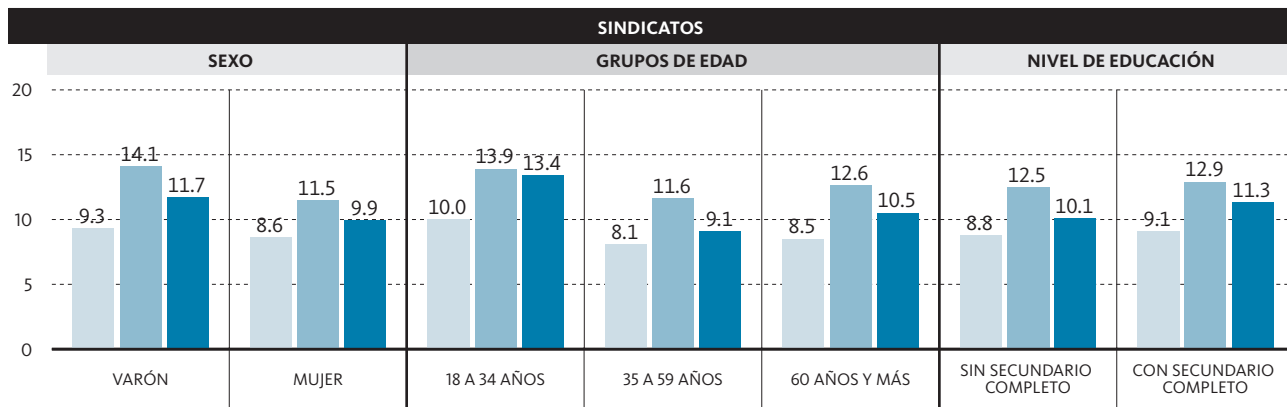
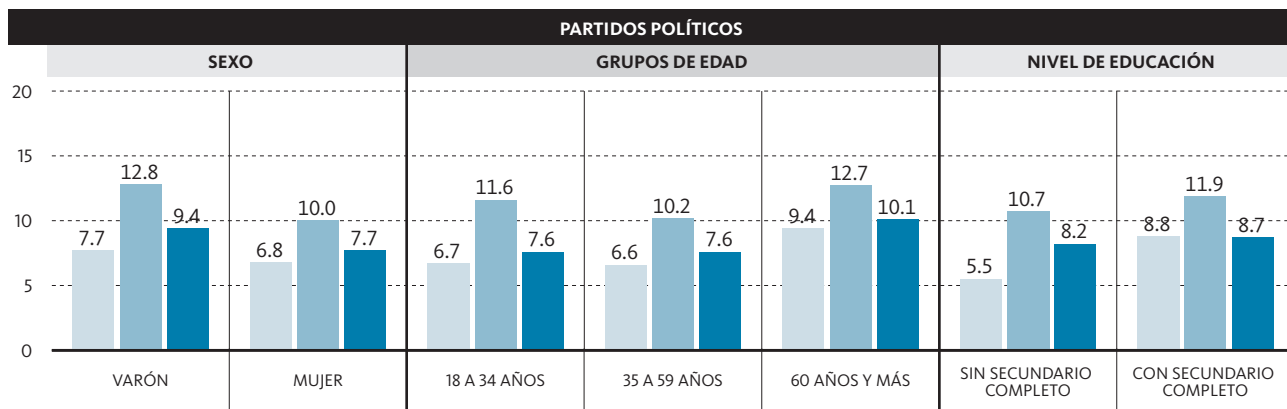
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.2.6

ALTA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



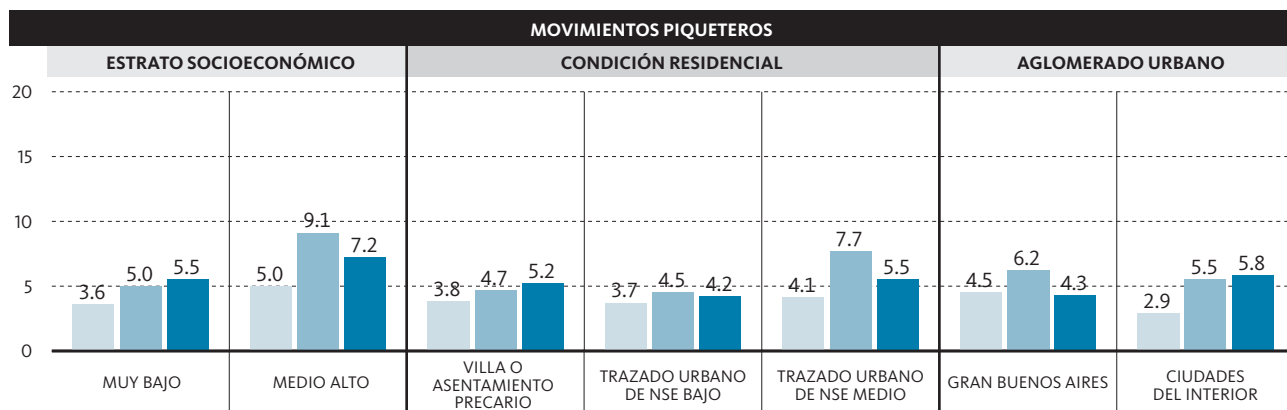
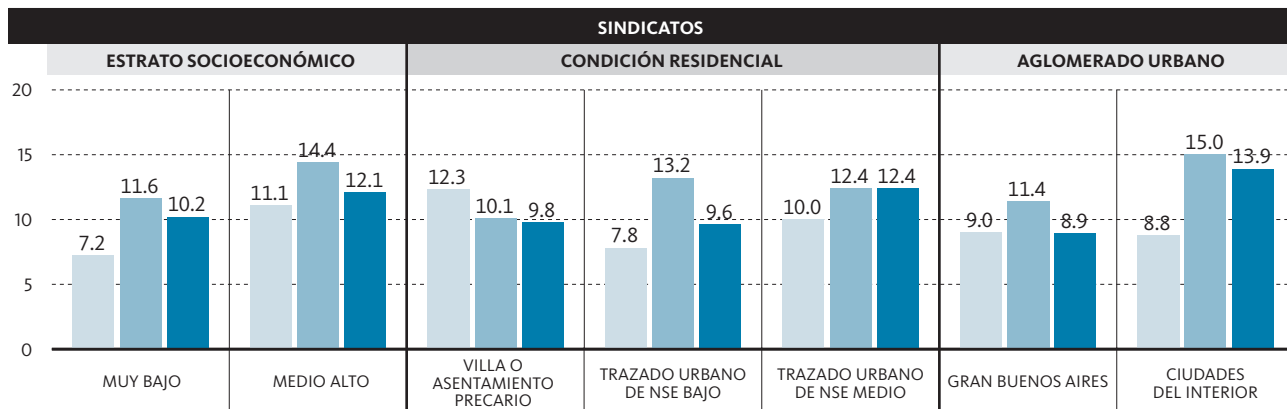
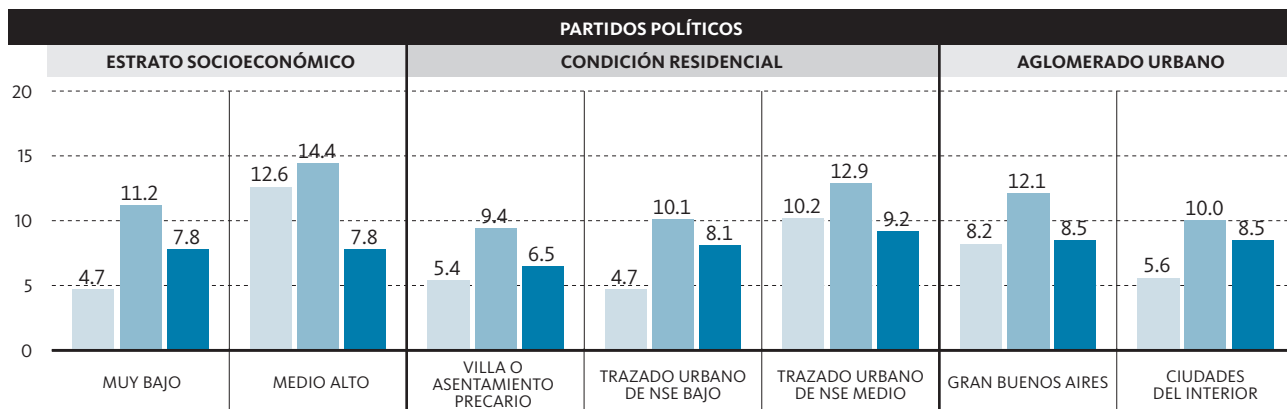
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.2.7

ALTA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES

A continuación se analizan los condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que inciden en la confianza en las diferentes instituciones de representación de intereses aquí estudiadas. Con este fin se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con las cuales una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de responder positivamente en dichos indicadores. En la figura 5.2.8 se presentan los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

El modelo I (confianza en los partidos políticos) alcanzó una bondad de ajuste del 59,3% en términos de predicción. El modelo II (confianza en los sindicatos), del 57,1%; y el modelo III (confianza en los movimientos piqueteros), del 63,4%. En los tres casos, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se destaca el hecho de que, manteniendo controladas el resto de las variables intervinientes, uno de los principales factores explicativos de la confianza en las instituciones de representación de intereses es el año de medición, a la vez que no parece tener incidencia significativa la jefatura de hogar. Entre otras variables explicativas de la confianza en los partidos políticos se encuentran la condición residencial y el estrato socioeconómico; de la confianza en los sindicatos: la edad y el sexo; y de la confianza en los movimientos piqueteros: el aglomerado urbano, el estrato y la edad.

El análisis según la pertenencia al sexo muestra una menor propensión en las mujeres que en los varones a confiar en las tres instituciones analizadas. Asimismo, respecto de la edad, los jóvenes son los que menor ra-

zón de probabilidad en favor de confiar en los partidos políticos tienen, en tanto que los adultos mayores de 60 años poseen 30% menos de probabilidad de confiar en los movimientos piqueteros que los de edades medias. Por su parte, respecto del nivel educativo, aquellos que no terminaron sus estudios secundarios tienen una mayor propensión a la confianza en las tres instituciones que quienes sí los terminaron (en el caso de los sindicatos, la razón de probabilidad en favor de los primeros aumenta un 21% con respecto a los segundos).

En el caso de la confianza en los partidos políticos y los sindicatos, la probabilidad cae conforme se desciende en la estratificación social. Concretamente, en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, los integrantes del estrato medio bajo poseen 14% menos probabilidad de confianza en los partidos políticos; los del bajo, 27% menos; y los del muy bajo, 23% menos; mientras que en el caso de los sindicatos los porcentajes fueron 11% para el estrato medio bajo, 30% para el bajo y 32% para el muy bajo. Finalmente, acerca de los movimientos piqueteros, los encuestados del estrato medio bajo registraron 43% menos probabilidades de confianza que los del medio alto.

A su vez, en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, los habitantes del Conurbano Bonaerense revelan, en los tres modelos analizados, menor razón de probabilidad. En el primer modelo la probabilidad cae 32%, en el segundo 37% y en el tercero 57%.

Con respecto a los años de medición, se observa en 2011 una mayor propensión a la confianza en las tres instituciones de gobierno que en 2010, cuando llega a superarla en un 64% en el caso de los partidos políticos, un 49% en los sindicatos y un 56% en los movimientos piqueteros. Sin embargo, aunque manteniéndose la mejora con respecto al año 2010, se observa una caída en la probabilidad a la confianza en las tres instituciones analizadas durante el año 2012.

Figura 5.2.8

RAZONES DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES SEGÚN CATEGORÍAS SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. En porcentaje y razón de probabilidades de la población de 18 años y más.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	PARTIDOS POLÍTICOS		SINDICATOS		MOVIMIENTOS PIQUETEROS	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	-0,258***	0,77	-0,173***	0,84	-0,274***	0,76
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,025	0,98	0,246***	1,28	0,293***	1,34
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,236***	1,27	0,139**	1,15	-0,367***	0,69
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,065	1,07	0,196***	1,22	0,036	1,04
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	0,103	1,11	0,029	1,03	-0,026	0,97
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	-0,140*	0,87	-0,109	0,90	-0,549***	0,58
Bajo	-0,303***	0,74	-0,348***	0,71	-0,199*	0,82
Muy bajo	-0,257**	0,77	-0,386***	0,68	-0,025	0,98
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	-0,143*	0,87	0,084	1,09	-0,034	0,97
Villa o asentamiento precario	-0,197	0,82	0,169	1,18	0,208	1,23
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-0,379***	0,68	-0,452***	0,64	-0,836***	0,43
Grandes Areas Urbanas	-0,634***	0,53	-0,161**	0,85	-0,9179***	0,40
Resto Urbano	-0,202**	0,82	0,130	1,14	-0,259**	0,77
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,500***	1,65	0,402***	1,49	0,445***	1,56
2012	0,179**	1,20	0,203***	1,23	0,231**	1,26
CONSTANTE	-1,969***	0,14	-2,096***	0,12	-2,362***	0,09
R cuadrado de Cox y Snell	0,012		0,011		0,013	
R cuadrado de Nagelkerke	0,027		0,022		0,041	
Porcentaje global de aciertos	59,3		57,1		63,4	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

En los apartados anteriores se observa cómo el contexto, los acontecimientos económicos y políticos y las características individuales de la población influyen sobre los niveles de confianza en las instituciones de gobierno y en las instituciones de representación de los in-

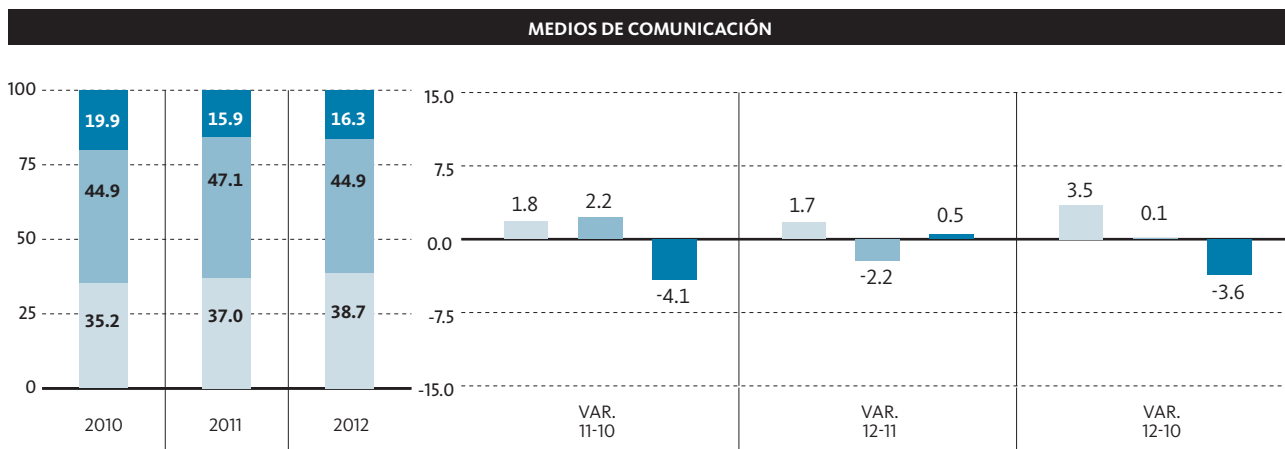
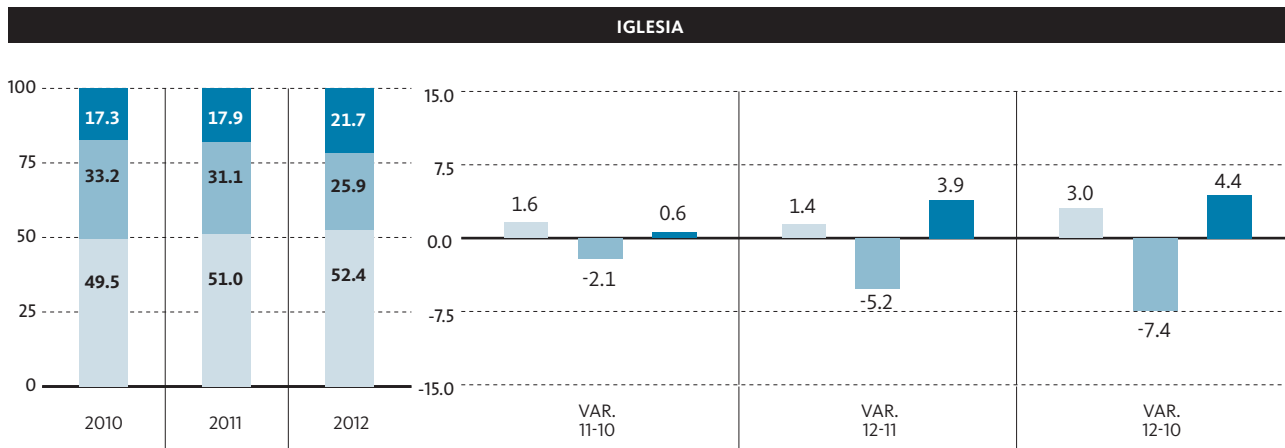
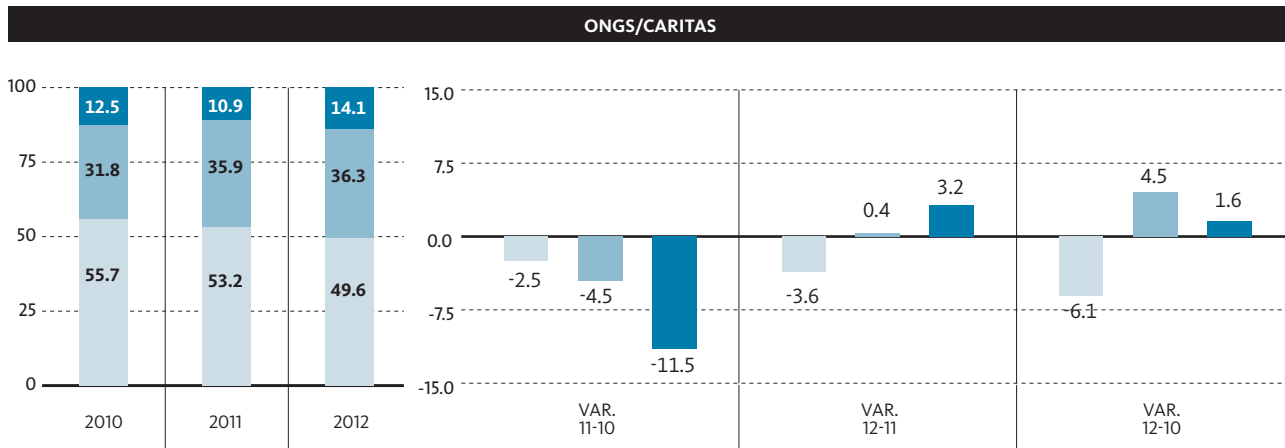
tereses ciudadanos. Sin embargo, un panorama distinto suele presentarse al analizar los niveles de confianza sobre un grupo de instituciones menos asociadas a las clásicas funciones de regulación y representación políticas de los intereses sectoriales: ONGs, Iglesia y medios de comunicación. Este tipo de instituciones presentan, en general, mayores niveles de confianza ciudadana y con mayor estabilidad temporal, y parecen estar menos condicionadas por los cambios contextuales.

Figura 5.2.9

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

Alta confianza Poca confianza Ninguna confianza



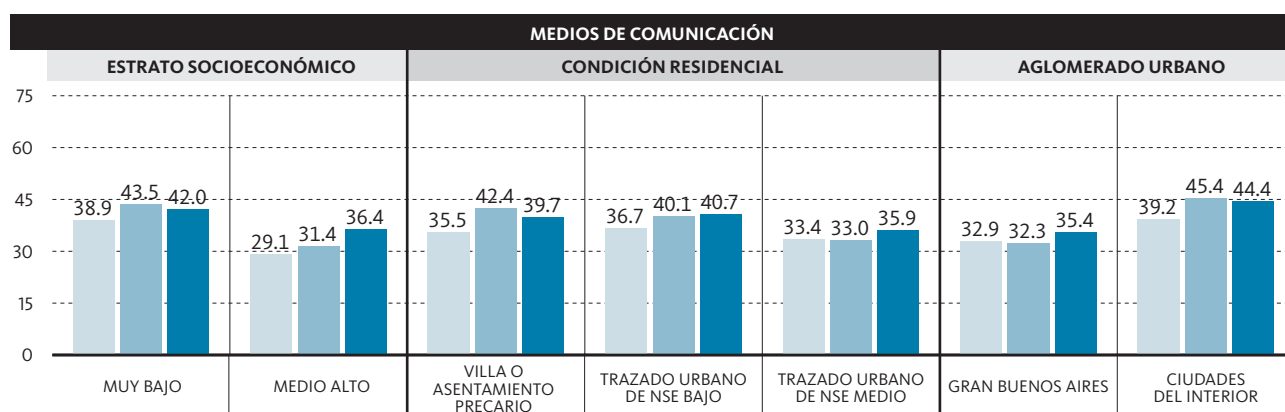
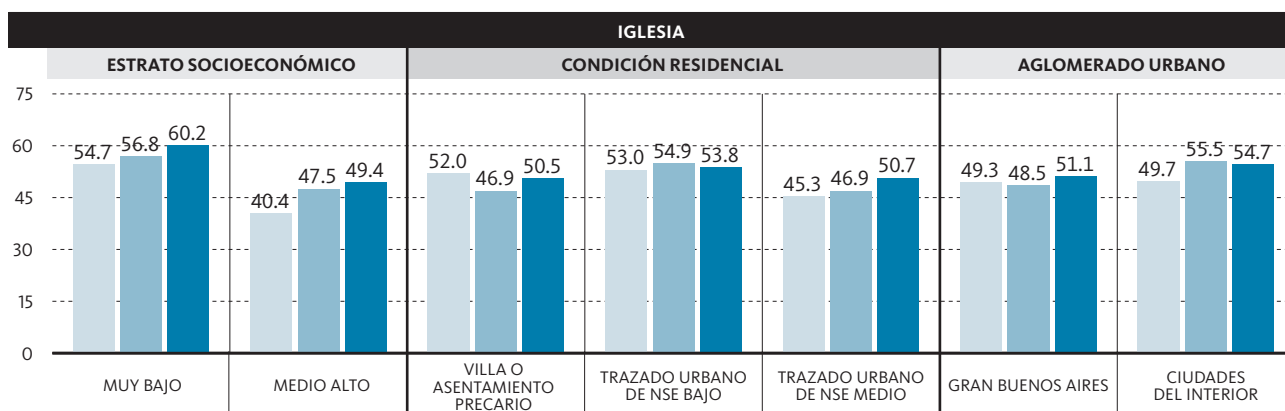
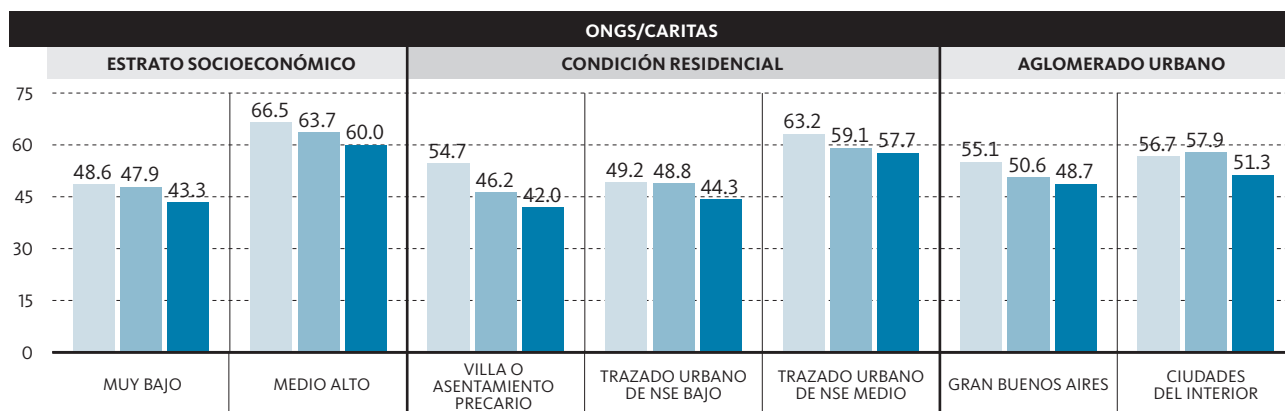
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.2.11

ALTA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

El análisis de cada institución de la sociedad civil por separado muestra que las ONGs y la Iglesia percibieron mayores niveles de confianza alta durante todo el trienio que los medios de comunicación (en torno al 50% las ONGs y la Iglesia y cerca del 39% los medios de comunicación, durante 2012). Nótese, asimismo, que la alta confianza tanto en la Iglesia como en los medios de comunicación tuvo un comportamiento ascendente durante todo el período de análisis (aumentando 3 p.p. en la Iglesia y 3,5 p.p. en los medios). De manera opuesta, la confianza en las organizaciones no gubernamentales sufrió una caída de 6,1 p.p. entre los años 2010 y 2012 (figura 5.2.9).

Si se analizan las diferencias según sexo y edad de la población encuestada, se observa que, aunque no significativamente, las mujeres y los adultos mayores de 60 años tienden a confiar más en las tres instituciones civiles que los varones y los jóvenes. Es en la confianza en la Iglesia donde se incrementan estas diferencias, colocándose la alta confianza en torno al 56% en el caso de las mujeres (contra 48,3% de los varones) y al 66% entre los mayores de 60 años (contra el 47,6% entre los jóvenes de 18 a 34 años). En cuanto a la caída de la credibilidad depositada en las ONGs, se observa que esta se produjo en todos los sectores analizados, pero sobre todo entre los adultos mayores de 60 años, que, a pesar de poseer niveles más altos de confianza que el resto de las edades, sufrieron una disminución de casi 10 p.p. durante todo el período de análisis (figura 5.2.10).

Por otra parte, se advierte que cuanto más se asciende en el nivel socioeducativo y residencial, más aumenta la confianza en las ONGs/Cáritas en los tres años de estudio, y lo inverso ocurre con la Iglesia y los medios de comunicación, instituciones donde la población más vulnerable obtiene mayores niveles de credibilidad que los encuestados de los estratos y condiciones socioeducativas más altas. Las figuras 5.2.10 y 5.2.11 muestran que aun cuando la caída en los niveles de confianza en las ONGs se produjo de manera pareja según el nivel educativo y socioeconómico de la población, según la condición residencial el análisis indica una pérdida de confianza significativamente mayor entre los residentes de villas o asentamientos precarios que entre los habitantes de zonas urbanas (colocándose la pérdida de confianza en torno a 13 p.p. en las villas, contra cerca de 5 p.p. en las otras dos condiciones analizadas). Este comportamiento ocasiona un aumento de la brecha ya existente en los

niveles de confianza en este tipo de organizaciones, para colocarse en niveles cercanos al 42% en las villas y asentamientos precarios, contra 57,7% entre los habitantes de zonas con trazado urbano de NSE medio.

En lo que concierne a confianza depositada en la Iglesia y en los medios de comunicación, los datos arrojaron los siguientes resultados. La confianza en la Iglesia fue mayor entre quienes no terminaron sus estudios secundarios (56,6%) que entre quienes sí los culminaron (48,8%); mientras que los mismos grupos registraron un 42,5% y un 35,5%, respectivamente, en cuanto a la confianza en los medios de comunicación para el último año de estudio. Asimismo, entre quienes pertenecen al cuartil inferior de la escala socioeconómica, también respecto del nivel educativo, los guarismos indican 60,2% en el estrato muy bajo contra 49,4% en el estrato medio alto para la Iglesia y 42% contra 36,4%, respectivamente, para los medios de comunicación, durante 2012. El análisis según la condición residencial, por su parte, pone en evidencia que quienes presentan niveles más elevados de alta credibilidad en ambas instituciones son los que residen en zonas con trazado urbano de NSE bajo (figura 5.2.11).

Finalmente, en la totalidad del trienio, las diferencias según aglomerado urbano revelaron niveles superiores de alta confianza en las instituciones de la sociedad civil por parte de los habitantes de las Ciudades del Interior respecto de quienes viven en el Gran Buenos Aires. Pese a una leve caída, este comportamiento se observa mayormente en la confianza depositada en los medios de comunicación, pues registra en 2012 niveles de alta confianza que llegan al 44,4% entre los habitantes del interior del país, contra 35,4% entre los del Gran Buenos Aires (figura 5.2.11).

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se analizan a continuación los condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que inciden en la confianza en las diferentes instituciones de la sociedad civil. Con este propósito se ajustaron modelos multivariados de regresión logística orientados a determinar el sentido y la fuerza con las que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de responder positivamente en dichos indicadores. En

Figura 5.2.12

RAZONES DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SEGÚN CATEGORÍAS SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. En porcentaje y razón de probabilidades de la población de 18 años y más.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	MEDIOS DE COMUNICACIÓN		ONGS / CARITAS		IGLESIA	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	0,080**	1,08	0,025	1,03	0,163***	1,18
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	0,044	1,04	-0,157***	0,85	-0,144***	0,87
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,248***	1,28	0,288***	1,33	0,710***	2,03
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	0,164***	1,18	0,035	1,04	0,221***	1,25
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	0,165***	1,18	0,194***	1,21	0,271***	1,31
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,036	1,04	-0,215***	0,81	-0,048	0,95
Bajo	0,093*	1,10	-0,401***	0,67	0,030	1,03
Muy bajo	0,137**	1,15	-0,496***	0,61	0,025	1,03
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	0,078*	1,08	-0,032	0,97	0,141***	1,15
Villa o asentamiento precario	0,103	1,11	0,094	1,10	-0,035	0,97
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-0,034	0,97	-0,912***	0,40	-0,061	0,94
Grandes Areas Urbanas	0,304***	1,35	-0,528***	0,59	0,039	1,04
Resto Urbano	0,489***	1,63	-0,541***	0,58	0,243***	1,27
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,078**	1,08	-0,108***	0,90	0,063*	1,07
2012	0,145***	1,16	-0,260***	0,77	0,110***	1,12
CONSTANTE	-1,117***	0,33	1,051***	2,86	-0,521***	0,59
R cuadrado de Cox y Snell	0,020		0,049		0,040	
R cuadrado de Nagelkerke	0,027		0,065		0,053	
Porcentaje global de aciertos	56,5		58,2		58,1	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

la figura 5.2.12 se presentan los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

El modelo I (confianza en los medios de comunicación) logró una capacidad de predicción del 56,5%; el modelo II (confianza en las ONGs/Cáritas), del 58,2%; y el modelo III (confianza en la Iglesia), del 58,1%. En los tres casos, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, se destaca el hecho de que manteniendo controladas el resto de las variables intervinientes,

los principales factores explicativos de la confianza en las instituciones de la sociedad civil son el aglomerado urbano, la edad y la jefatura de hogar. A su vez, no parecen tener incidencia significativa, en los modelos I y II, el sexo y la condición residencial.

En los tres modelos de regresión, y a diferencia de lo ocurrido con las demás instituciones estudiadas, con respecto a los varones, la razón de probabilidad en favor de confiar en las instituciones de la sociedad civil au-

menta entre las mujeres. Por su parte, en comparación con la población adulta de entre 35 y 59 años, las probabilidades de confiar en los medios de comunicación aumentan un 128%; en las ONGs/Cáritas, un 33%; y en la Iglesia, un 103% entre la población mayor de 60 años.

Asimismo, en comparación con quienes completaron sus estudios secundarios, la razón de probabilidad en favor de confiar en los medios y en la Iglesia aumenta en 17% y 24%, respectivamente entre quienes no los terminaron. Nótese, por otra parte, que la probabilidad de confiar en los medios de comunicación aumenta a medida que se desciende en la escala socioeconómica. Por el contrario, la probabilidad de confiar en las organizaciones no gubernamentales disminuye a medida en que se baja en la escala social. Así, en comparación con el estrato medio alto, la razón de probabilidad en favor a la confianza en dichas organizaciones cae un 20% en el estrato medio bajo, un 31% en el bajo y un 40% en el muy bajo.

En este mismo modelo (el II), y en comparación con los que habitan en la Ciudad de Buenos Aires, se observa una significativamente menor probabilidad en favor de confiar en las organizaciones no gubernamentales entre los residentes del Conurbano Bonarense, ya que la misma cae un 60%.

En cuanto al modelo III (confianza en la Iglesia) se observa una mayor propensión a la confianza en las mujeres, en quienes no completaron sus estudios secundarios y en los residentes en zonas con trazado urbano de NSE bajo. En comparación con los adultos de 35 a 59 años, por su parte, la razón de probabilidad en favor de esta confianza es 14% menor entre los jóvenes de 18 a 35 años y 100% mayor en la población cuya edad supera los 60 años. Con respecto a los períodos de medición, se observa una mayor propensión a la confianza en la Iglesia tanto en 2011 como en 2012 con respecto a 2010. Por último, no se hallan diferencias significativas en este modelo según estrato socioeconómico y aglomerado urbano.

5.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES POLÍTICAS, SOCIALES Y SOLIDARIAS

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) reconoce, en sus artículos 21 y 25, el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, a la reu-

nión pacífica y a la libre asociación incluyendo el derecho a fundar sindicatos. Por esta razón, la participación es un valor, un compromiso y un derecho que en las democracias actuales debe ser custodiado y promovido como elemento fundamental. Asimismo –y como ya se ha especificado en el anterior informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario, Año II–, la importancia de la participación ciudadana radica en los múltiples beneficios que brinda, tanto al sistema democrático como al propio ciudadano, desarrollando la conciencia cívica de las personas, reforzando los lazos de solidaridad, haciendo más comprensible la noción de interés general, y permitiendo que los individuos y grupos más activos intervengan en la gestión pública (Moreno, 2011).

Es fundamental tener presente que las características personales y sociales de los propios individuos afectan el grado de participación social y política. Es por ello que, tal como sostiene Brich (2001), las desigualdades económicas impiden el desarrollo de una democracia auténtica, ya que la educación, los ingresos y el estatus social están estrechamente vinculados con la participación pública. Los marginados, según el mismo autor, son generalmente los que menos participan y paradójicamente los que más se beneficiarían de las reformas políticas que podrían resultar de dicha participación.

El presente apartado estudia la evolución de la participación política (partidos políticos, sindicatos y grupos de protesta) y social (actividades solidarias, parroquiales y sociales) durante el período 2010-2012 y la influencia que ejercen tanto el contexto político y social como ciertas características personales y socioeconómicas de los propios individuos sobre dicha evolución.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Los niveles de participación política registrados durante todo el período de estudio no superan el 6%. De acuerdo con la figura 5.3.1, la participación sindical obtuvo el mayor puntaje, para colocarse en niveles cercanos al 6% en el año 2011. Sin embargo, la misma sufre una caída de 1,2 p.p. en el último bienio (2011-2012), ubicándose en torno al 5% (4,8%). Por su parte, aunque en niveles más bajos, la participación política partidaria aumenta entre 2010 y 2012 en 0,8 p.p., alcanzando en 2012 al 4,1% de los entrevistados. Por último, la participación en actividades o grupos de

protesta, aunque con un aumento de 0,7 p.p. durante el último bienio, presenta niveles muy bajos en los tres años analizados (que no superan el 3%).

El análisis según el sexo y la edad de la población encuestada muestra que fueron los varones y los jóvenes de entre 18 y 35 años quienes presentaron mayores niveles de participación política partidaria, sindical y en movimientos de protesta. La figura 5.3.2 indica que el nivel de involucramiento de los varones casi triplica al de las mujeres: en 2012, las personas de sexo masculino tuvieron cerca de 7% (6,6%) de participación política, contra solo 2% las de sexo femenino; en cuanto a la involucración sindical, los varones participan en un 7,2%, contra 2,7% de las mujeres; y en los grupos de protesta, 3,8% ellos y 1,6% ellas. Por lo demás, el aumento de la participación política y sindical de los últimos años fue impulsado, fundamentalmente, por un crecimiento entre los varones y los jóvenes, que pasó, de 2010 a 2012, de 4,5% a 6,6% en el caso de los varones y de 2,9% a 6% en el caso de los jóvenes. Por el contrario, la participación en este tipo de actividades se redujo en las mujeres y en los adultos de 35 a 59 años, y se mantuvo estable, en niveles que no superan el 3%, entre los mayores de 60 años (figura 5.3.2).

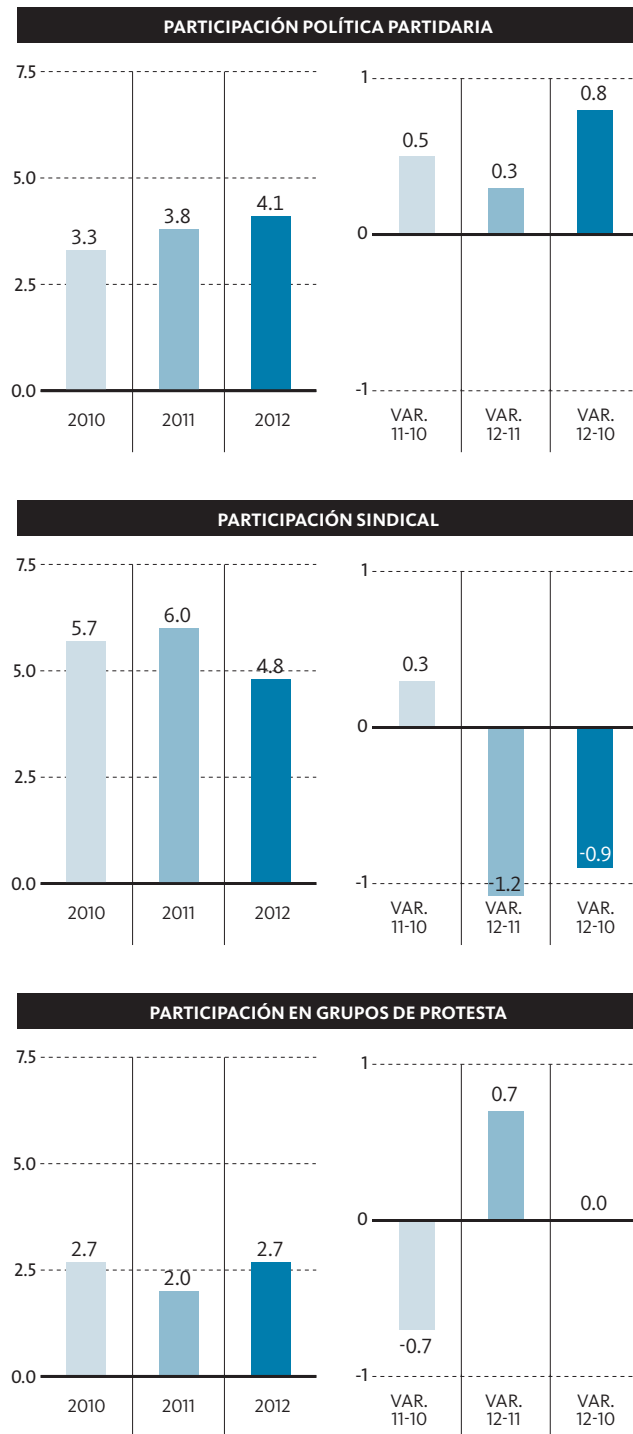
Las diferencias según el nivel educativo y socioeconómico y la condición residencial de los entrevistados ponen de manifiesto que en los tres casos analizados la participación fue más alta entre aquellos que cuentan con estudios secundarios completos, pertenecen al estrato medio alto y residen en zonas con trazado urbano de NSE medio (figura 5.3.2 y 5.3.3). Es importante destacar que, particularmente, la participación de dichos sectores en los movimientos o grupos de protesta registró una suba, en tanto que se mantuvo estable en la población más carenciada, produciendo esto un mayor crecimiento de las brechas mencionadas. Puntualmente, el porcentaje de participación en los movimientos de protesta alcanzó, en 2012, a casi 4% de quienes terminaron sus estudios secundarios (contra 1,2% de quienes no los terminaron), 8,3% en el cuartil superior (contra 1,3% en el inferior) y 6,1% en los residentes en zonas con trazado urbano de NSE medio (contra 2,7% en las zonas de NSE bajo y 3,3% en villas y asentamientos precarios).

Dichas diferencias se agudizan al analizar la participación política partidaria y sindical según el estrato socioeconómico, pues sobre todo durante 2012

Figura 5.3.1

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012.
En porcentaje de población de 18 años y más.



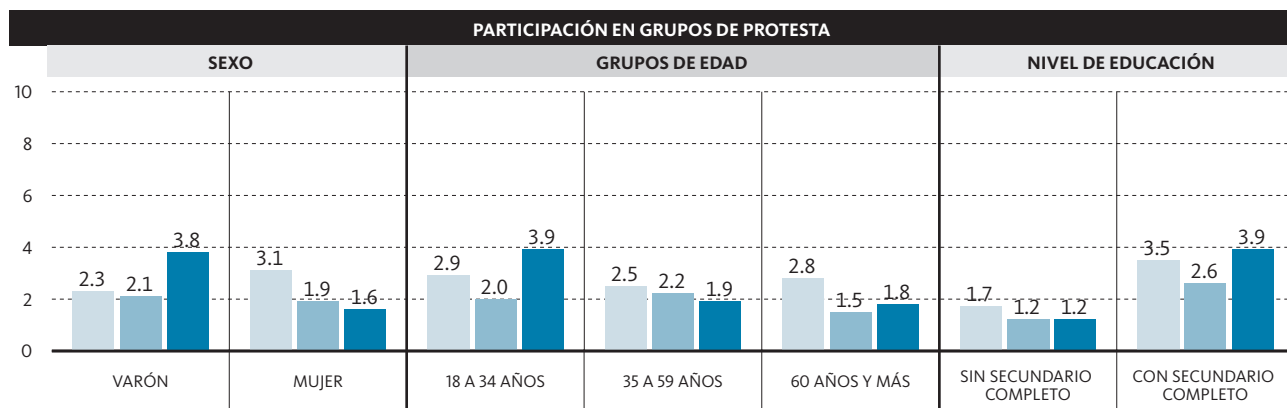
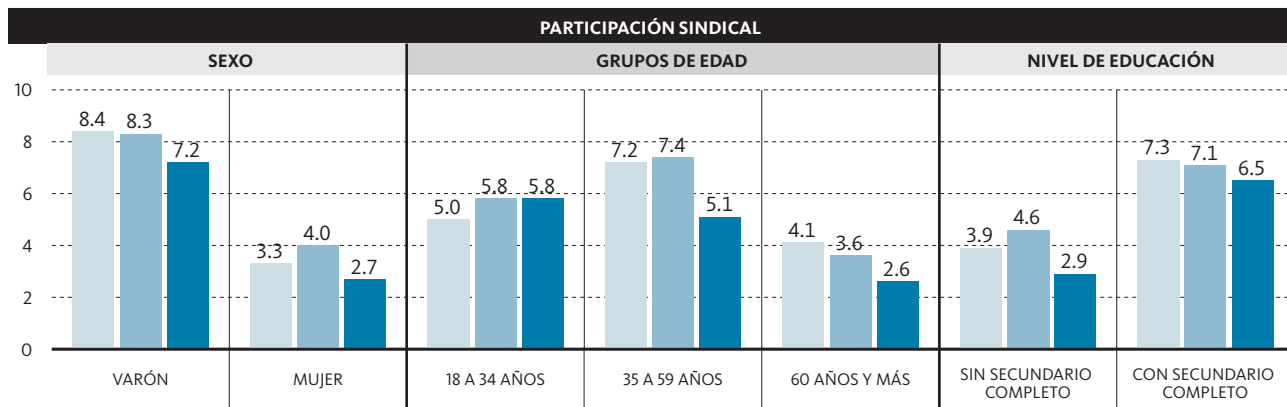
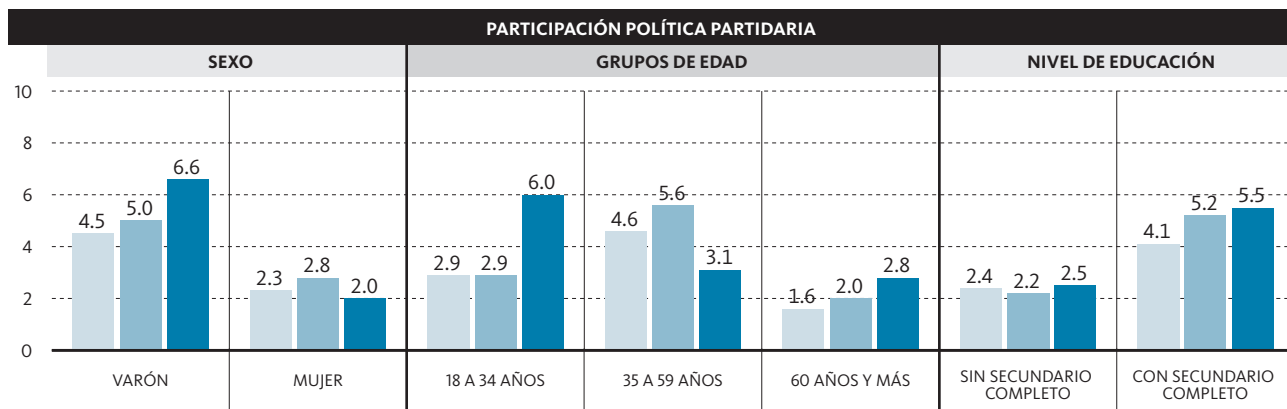
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Figura 5.3.2

PARTICIPACIÓN POLÍTICA SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



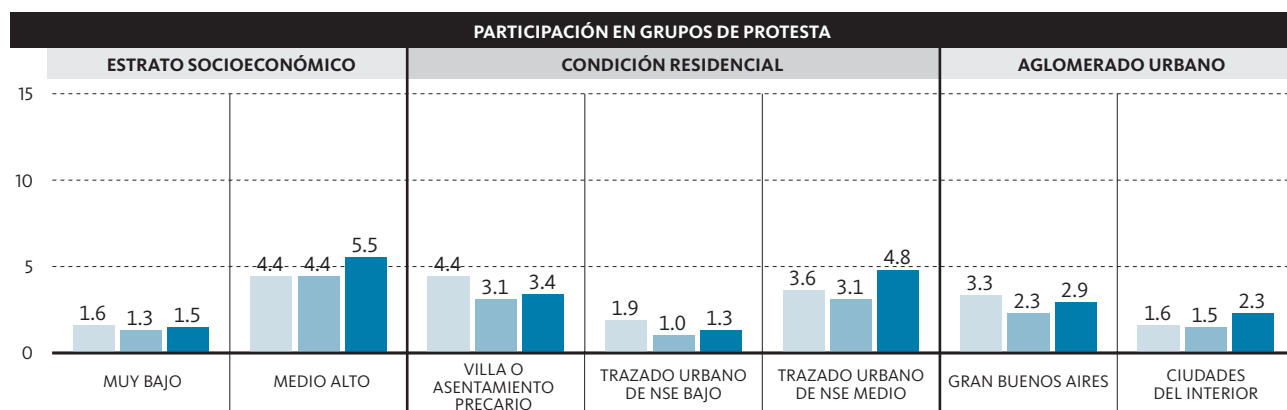
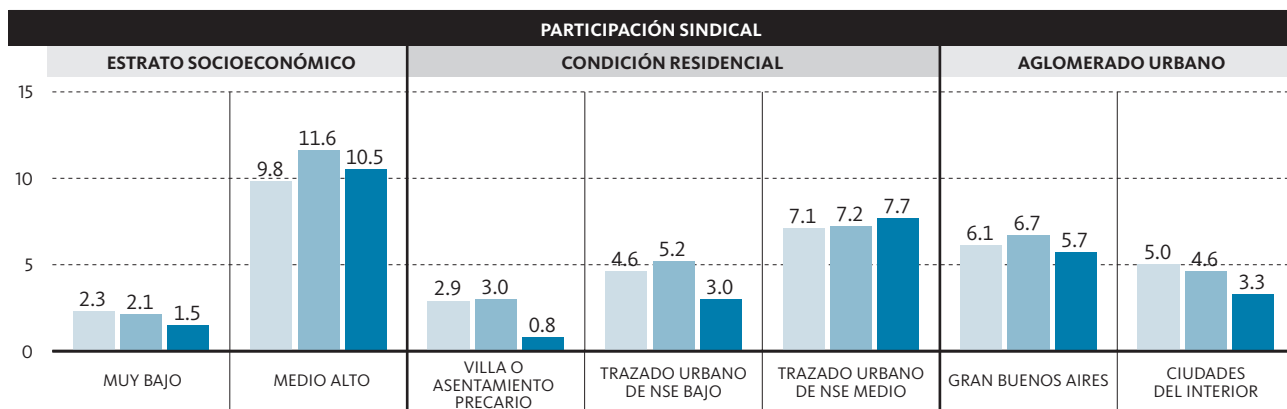
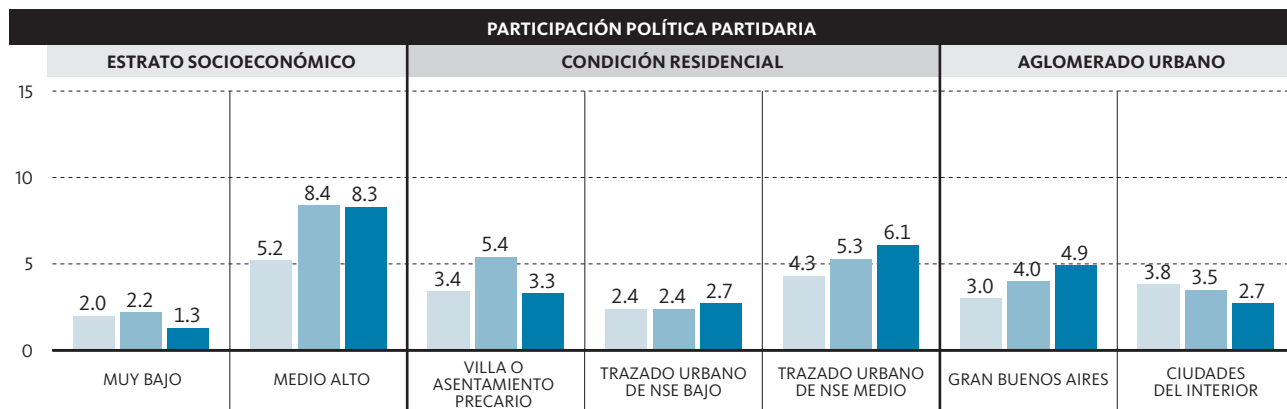
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.3.3

PARTICIPACIÓN POLÍTICA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

fue notablemente más elevada en el estrato superior que en el inferior. Así, como se puede apreciar en la figura 5.3.3, la participación política partidaria se ubica en torno al 8% en el estrato medio alto, contra 1,3% en el muy bajo; y la sindical en 10,5% contra 1,5%, respectivamente. Estas diferencias acentúan las importantes brechas sociales que perduran en nuestra sociedad, y confirman la teoría planteada por Beeghley sobre la existencia de una estrecha relación entre clase social y participación política. Según este autor, entre las diferentes causas que influyen en los bajos niveles de participación política registrados por las clases bajas se encuentra la ausencia de acceso a medios de comunicación e información, la cual genera el aislamiento social de los ciudadanos de los estratos más carenciados que no cuentan con los recursos apropiados para participar del proceso político pluralista (Moreno, 2012).

En cuanto al análisis según el aglomerado urbano, la figura 5.3.3 muestra, en las tres actividades políticas, una tendencia a una mayor participación en los residentes del Gran Buenos Aires que entre los habitantes de las Ciudades del Interior. Así, en 2012, cerca del 5% de la población radicada en el GBA respondió haber participado en actividades políticas partidarias, contra 2,7% entre los que residen en Ciudades del Interior, siendo los porcentajes para los mismos grupos, respectivamente: 5,7% contra 3,3% en actividades sindicales y 2,9% contra 2,3% en los movimientos o grupos de protesta.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

A continuación se analizan los condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que inciden en la participación política partidaria, sindical y en actividades o grupos de protesta. Con este fin se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza con que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de responder positivamente en dichos indicadores. La figura 5.3.4 presenta los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

En cuanto a la capacidad de predicción de los tres modelos, cabe observar que el modelo I (participación política partidaria) alcanzó una capacidad del 67,1%;

el modelo II (participación sindical) del 66,3%; y el modelo III (participación en actividades o grupos de protesta) de 74,2%. En los tres casos, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, manteniendo controladas el resto de las variables intervinientes, el aglomerado urbano aparece como uno de los principales factores explicativos. No obstante, en el modelo I (partidos políticos), resultan explicativos el sexo, la edad y el estrato socioeconómico, no teniendo incidencia estadísticamente significativa el nivel educativo y la condición residencial. En el modelo II (sindicatos), por su parte, inciden el estrato socioeconómico, la jefatura de hogar y el sexo. Y por último, en el modelo III (participación en actividades o grupos de protesta) inciden la edad y, en menor medida, la jefatura de hogar, el sexo, la condición residencial y el estrato socioeconómico. El año de relevamiento parece no tener incidencia significativa en los tres modelos.

La encuesta reveló una menor probabilidad de participación política en general entre las mujeres en los tres modelos analizados. En comparación con los varones, la razón de probabilidades en favor de participar en actividades políticas partidarias fue entre las mujeres un 50% menor; en actividades sindicales, un 43% menor; y en grupos de protesta, un 15% menor. También registran menores probabilidades de participación política los adultos mayores de 60 años. De este modo, si se los compara con la población de 35 a 59 años, en el caso de la participación política presentan 60% menos de probabilidad; en la sindical, 43% menos; y en la de grupos de protesta, 21% menos.

En cuanto al modelo III (grupos de protesta) y en comparación con la población de entre 35 y 59 años, la razón de probabilidades en favor de los jóvenes aumenta en un 60%. Con respecto a la participación política y sindical (modelos I y II), los jefes de hogar tienen más probabilidades de participación que los no jefes.

Acorde al análisis según nivel educativo, se observa una probabilidad de participación sindical 27% mayor entre quienes no culminaron sus estudios secundarios si se los compara con los que sí los culminaron. Asimismo, la probabilidad de participación política disminuye un 43% en el estrato bajo comparándola con el medio alto. Por su parte, la probabilidad de participación sindical decrece a medida que se desciende en la escala socioeconómica, siendo, en relación con el estrato más alto, un 50% menor en el medio bajo, un 71% menor en el bajo y un 85% menor en el muy bajo.

Figura 5.3.4

RAZONES DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA SEGÚN CATEGORÍAS SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. En porcentaje y razón de probabilidades de la población de 18 años y más.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	PARTICIPACIÓN POLÍTICA - PARTIDARIA		PARTICIPACIÓN SINDICAL		PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE PROTESTA	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	-0,692***	0,50	-0,586***	0,56	-0,163	0,85
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,021	0,98	0,040	1,04	0,345***	1,41
35 a 59 años (c)						
60 y más	-0,822***	0,44	-0,549***	0,58	-0,224	0,80
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	-0,124	0,88	0,241**	1,27	-0,144	0,87
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	-0,341***	0,71	-0,732***	0,48	-0,101	0,90
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	-0,525***	0,59	-0,680***	0,51	-0,234*	0,79
Bajo	-0,839***	0,43	-1,225***	0,29	-0,558***	0,57
Muy bajo	-0,602***	0,55	-1,899***	0,15	-0,344	0,71
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	0,084	1,09	0,279***	1,32	-0,141	0,87
Villa o asentamiento precario	0,558**	1,75	0,082	1,09	0,314	1,37
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-1,024***	0,36	-0,351***	0,70	-1,390***	0,25
Grandes Areas Urbanas	-0,875***	0,42	-0,541***	0,58	-1,155***	0,31
Resto Urbano	-0,623***	0,54	-0,606***	0,55	-1,310***	0,27
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,155	1,17	0,057	1,06	-0,322**	0,72
2012	0,227**	1,26	-0,185**	0,83	0,002	1,00
CONSTANTE	-1,693***	0,18	-1,318***	0,27	-2,293***	0,10
R cuadrado de Cox y Snell	0,024		0,036		0,016	
R cuadrado de Nagelkerke	0,087		0,104		0,080	
Porcentaje global de aciertos	67,1		66,3		74,2	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Con respecto a la condición residencial, tomando como referencia la participación de los residentes en barrios con trazado urbano de NSE medio, la razón de probabilidad en favor de la participación política y en grupos de protesta en villas y asentamientos precarios aumenta un 74% y un 36%, respectivamente. Asimismo, en comparación con la Ciudad de Buenos Aires, donde habría un mayor registro de participación, los habitantes del Conurbano Bonaerense reve-

lan un 65% menos de probabilidad de participación política, un 30% menos de participación sindical, y un 76% menos de participación en grupos de protesta.

Por último, en cuanto a los cambios ocurridos según el año en que se recabaron los datos, tomando como parámetro de comparación el 2010, se observa que manteniéndose constantes los otros factores intervinientes, en 2012 aumentan un 25% las probabilidades de participación política y disminuyen un 17%

las de participación sindical, conservándose estables las probabilidades en el caso de la participación en actividades o grupos de protesta.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

Aunque con niveles superiores a los de la participación política, la participación en organizaciones sociales y solidarias también registra valores relativamente bajos, pero con una tendencia a la caída durante los tres años de estudio. El porcentaje de personas que declararon participar en actividades sociales en 2012 no supera el 14% de los encuestados. Asimismo, la participación en actividades solidarias o en junta de vecinos, que sufrió una caída de 2,3 p.p. entre 2010 y 2012, se coloca en el último año de estudio en niveles cercanos a 9%, y la participación en actividades parroquiales en 7,7% (figura 5.3.5).

La figura 5.3.6 da cuenta de que las mujeres y los adultos mayores de 60 años tuvieron mayores niveles de participación en actividades solidarias y parroquiales que los varones, los jóvenes y los de edades medias. Así, en 2012, 9,4% de las mujeres respondieron haber participado en actividades solidarias y 8,7% en actividades parroquiales, contra 8,7% y 6,5%, respectivamente, entre los varones. Por su parte, cerca del 11% de los adultos mayores de 60 años declararon haber participado en este tipo de actividades, contra el 9% (actividades solidarias) y el 5,2% (parroquiales) de los jóvenes. No obstante, los jóvenes se comportaron de manera diferente al resto de los grupos etarios analizados, ya que la participación solidaria entre los mismos aumentó durante el último bienio (de 7,9% a 9%), disminuyendo la brecha, en este caso, según la edad de los entrevistados.

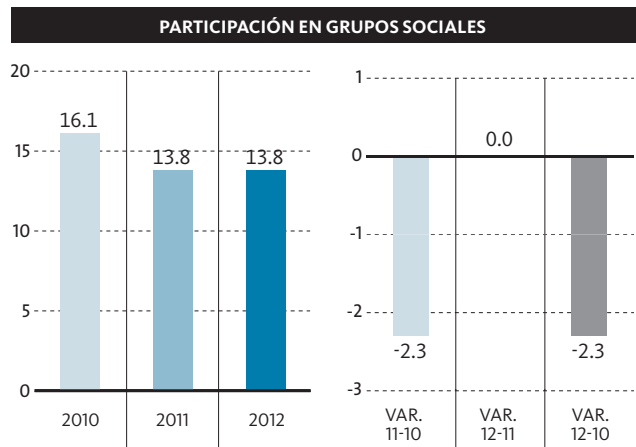
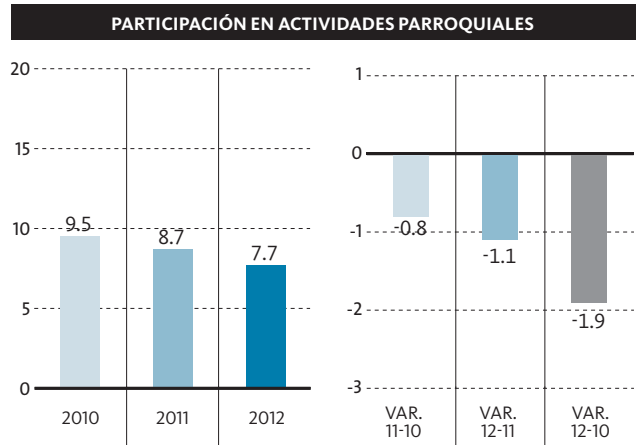
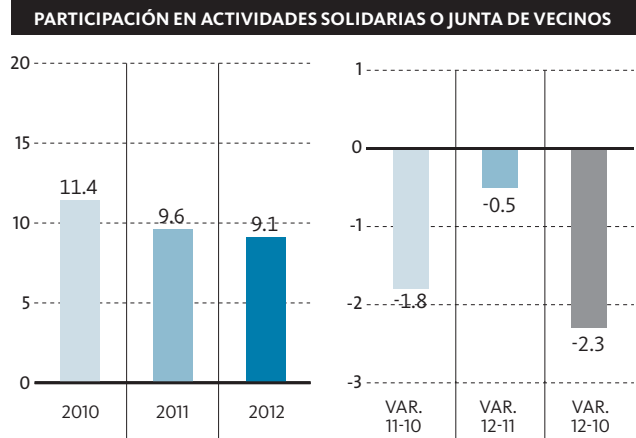
A diferencia con lo ocurrido con los otros dos tipos de actividades parroquiales y solidarias, la participación en grupos sociales fue más alta entre los varones (15,8%) que entre las mujeres (12,1%) en 2012. Esta clase de participación no arroja diferencias significativas por edad, colocándose en los tres niveles estudiados en torno al 14% (figura 5.3.6).

Con respecto al nivel educativo, la estratificación social y la condición residencial de la población, nuevamente se confirma lo manifestado en el informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina, Año II, e informes anteriores. En efecto, la participación social, solidaria y

Figura 5.3.5

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



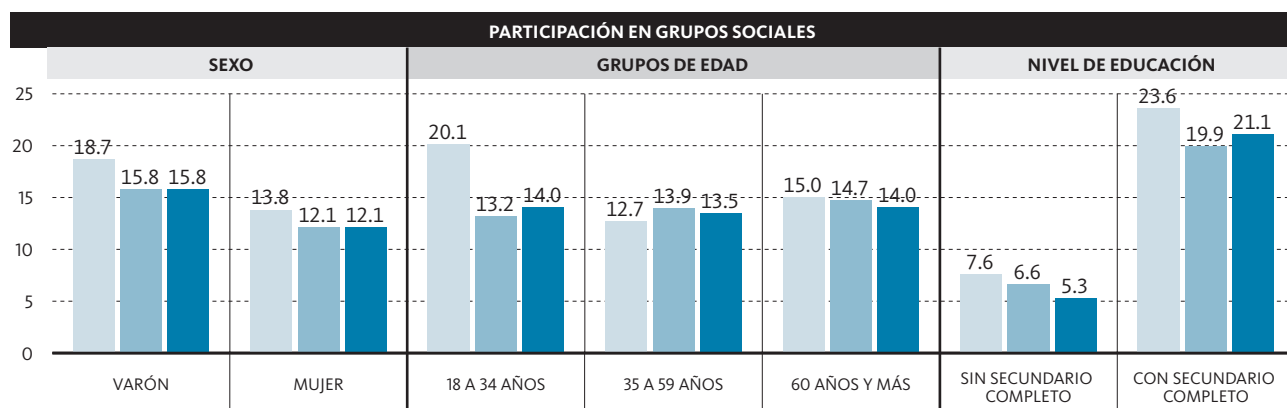
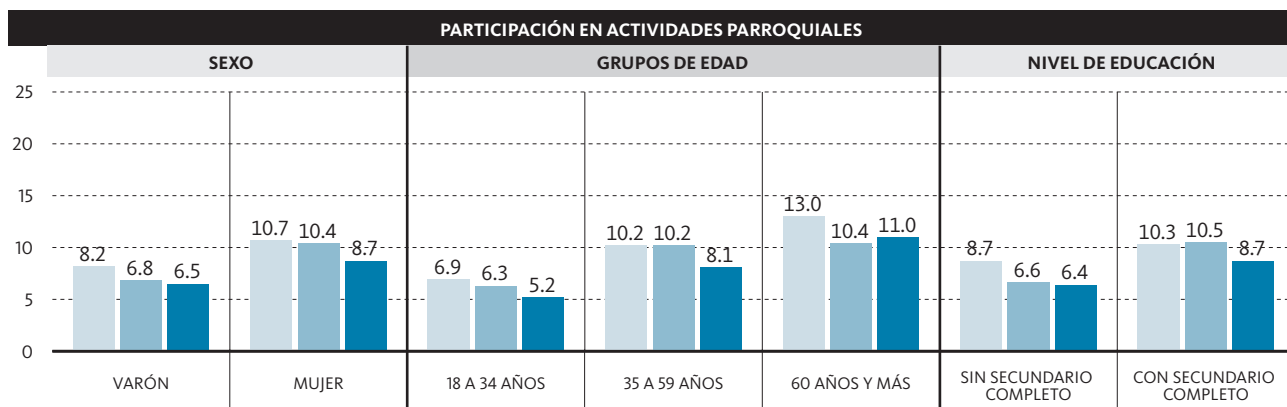
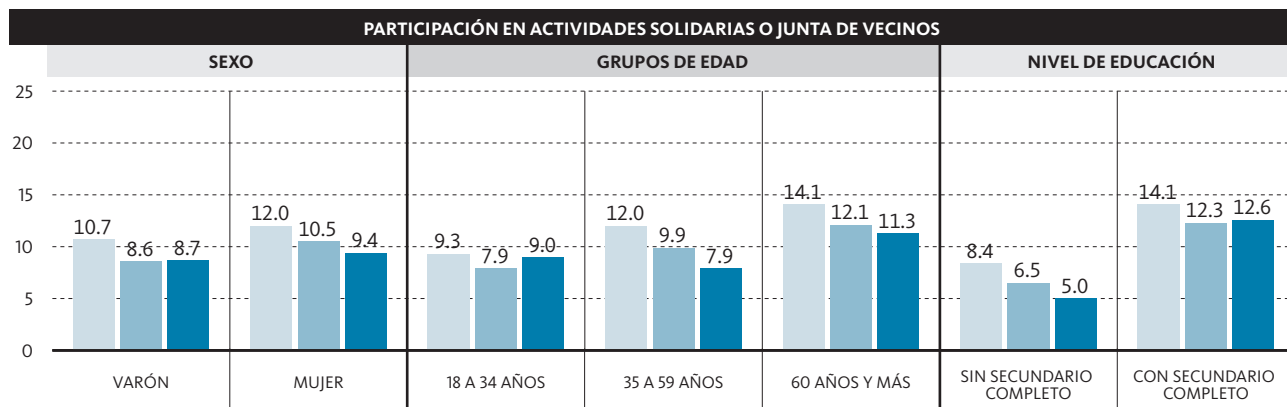
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Figura 5.3.6

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



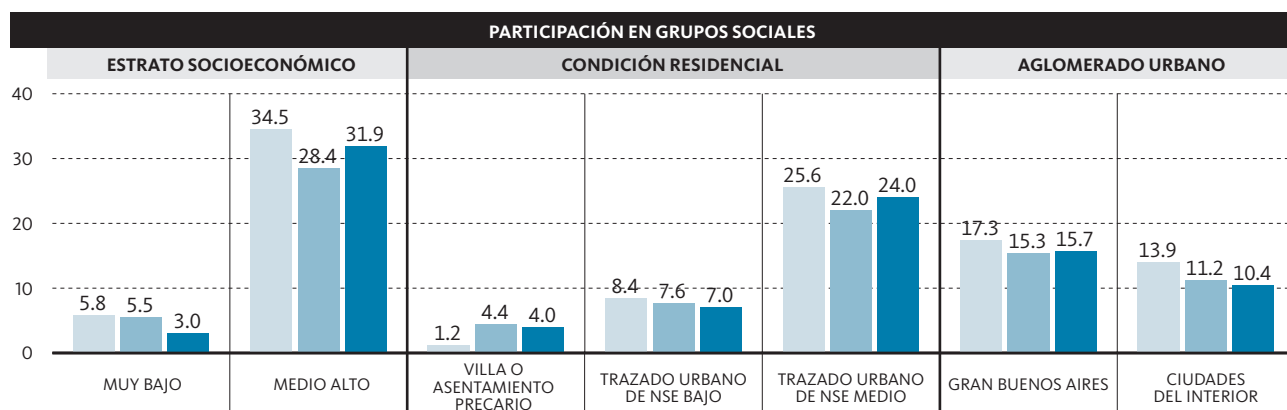
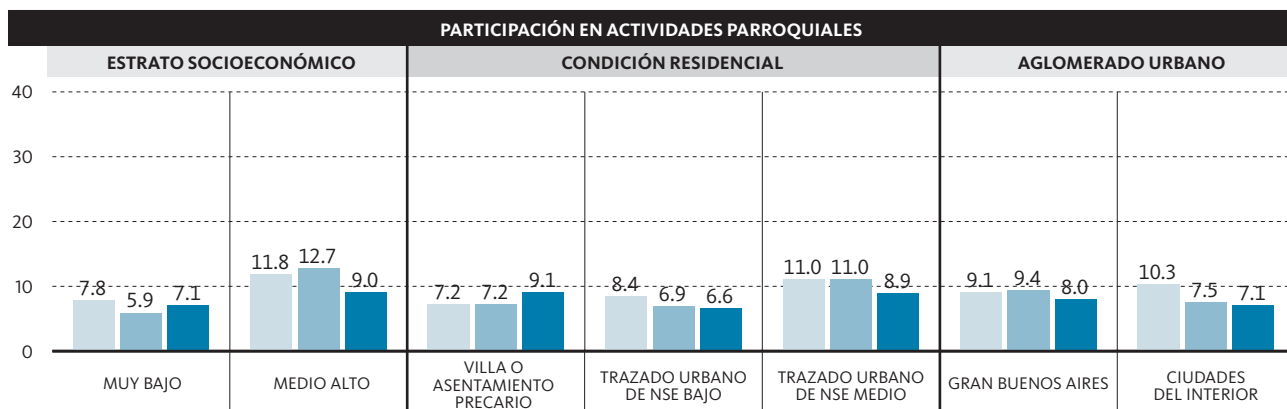
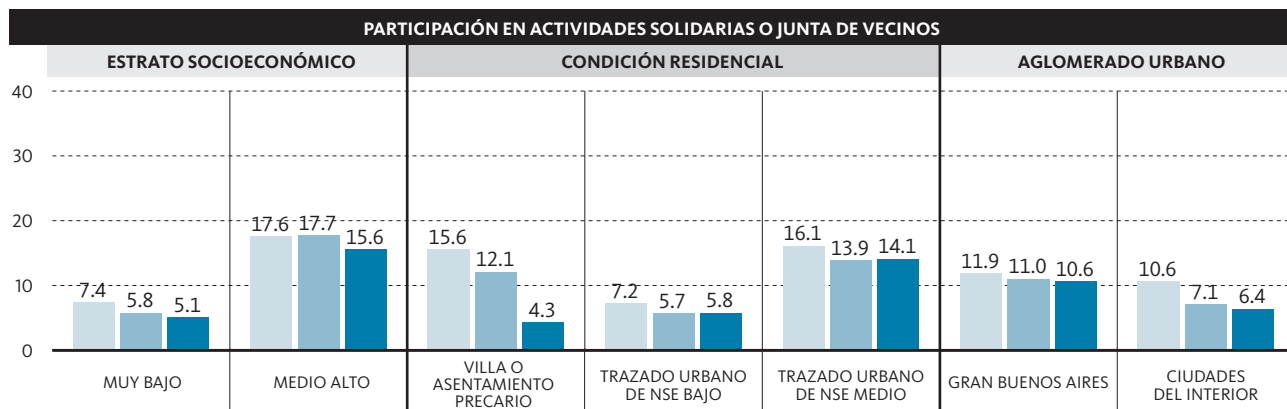
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.3.7

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

2010 2011 2012



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

parroquial se halló positivamente asociada con los niveles educativos, económicos y residenciales, ya que según se elevan dichos niveles, las personas presentan mayores posibilidades de participar en este tipo de actividades.

Las figuras 3.5.6 y 3.5.7 dan cuenta de ello, permitiendo apreciar, además, que la mayor brecha se registró en cuanto a la participación en grupos o actividades sociales. Nótese que la misma, en el año 2012 supera el 20% (21,1%) de los entrevistados con estudios secundarios completos (contra 5,3% entre los que no completaron el secundario), llega al 31,9% de los encuestados del estrato medio alto (contra 3% del muy bajo); y al 24% de los residentes en zonas con trazado urbano de NSE medio (contra el 4% de los que habitan en villas o asentamientos precarios). Un comportamiento similar se observa al analizar la participación solidaria, que se ubicó en torno al 13% de quienes completaron la secundaria (12,6%) contra el 5% de quienes no la completaron; en el 15,6% del cuartil superior contra el 5,1% del inferior; y 14,1% en los ciudadanos de las zonas con trazado urbano de NSE medio contra 4,3% de los que viven en villas. Es importante destacar que durante el último año de análisis se agudizan las brechas según condición residencial por la fuerte caída que sufrieron las villas en la participación en actividades solidarias o junta de vecinos (pasando de 12,1% en 2011 a 4,3% en 2012). Por último, en cuanto a la participación en actividades parroquiales, se observa una disminución de las diferencias según nivel educativo, estrato socioeconómico y condición residencial como consecuencia de la caída en los niveles de este tipo de participación por parte de los sectores económicos mejor posicionados y del crecimiento de la misma en la población más vulnerable.

En las tres actividades sociales y solidarias, el análisis según aglomerado urbano marca una tendencia a mayor participación entre los habitantes del Gran Buenos Aires que entre los de las Ciudades del Interior del país. De acuerdo con la figura 5.3.7, dicha tendencia se refuerza en 2012 particularmente en la participación en actividades solidarias o junta de vecinos, que alcanza al 10,6% de los encuestados del GBA, contra 6,4% de los residentes del interior del país.

Asimismo, la participación en las tres actividades, se redujo durante todo el período de estudio, en mayor medida, entre los habitantes de las Ciudades del interior para pasar de 10,6% a 6,4% la solidaria, de 10,3% a 7,1% la parroquial y de 13,9% a 10,4% la social.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

A continuación se analizan los condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que inciden en la participación parroquial, solidaria y social. Con este fin se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza en que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de responder positivamente en dichos indicadores. En la figura 5.3.8 se presentan los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

A pesar de que el modelo de participación solidaria tiene una capacidad de predicción muy baja (10% del total de la población de 18 años y más), los otros dos modelos alcanzaron una bondad de ajuste en términos de predicción del 59% (modelo de participación parroquial) y del 73% (modelo de participación social). Al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, manteniendo controladas el resto de las variables intervinientes, se deduce que el sexo, la edad y el aglomerado urbano son los principales factores explicativos del modelo de participación parroquial, a la vez que no parecen tener incidencia significativa la jefatura de hogar y la condición residencial. En los modelos II y III (participación solidaria y social) se encuentran el aglomerado, el estrato y el sexo entre las principales variables explicativas y sin incidencia significativa la jefatura del hogar y el nivel de educación.

La razón de probabilidades en favor de participar en actividades parroquiales y solidarias es 49% y 21% respectivamente, más alta entre las mujeres si se la compara con la de los varones. Sin embargo, lo contrario ocurre con el modelo II, donde al parecer las mujeres presentan menos tendencia a la participación, ya que la probabilidad es 27% mayor entre los varones. Con respecto a los de edades medias (35 a 59 años), los adultos mayores de 60 años presentaron un 22% más probabilidad de participación parroquial y solidaria y un 16% más de participación social. Si bien es menor la probabilidad entre los jóvenes de participar en actividades solidarias, nótese que la razón de probabilidad de participación en actividades sociales, en comparación con los adultos de 35 a 59 años, aumenta un 27% entre los jóvenes.

Figura 5.3.8

RAZONES DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA SEGÚN CATEGORÍAS SELECCIONADAS

Años 2010-2011-2012. En porcentaje y razón de probabilidades de la población de 18 años y más.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARROQUIALES		PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOLIDARIAS		PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	0,399***	1,49	0,197***	1,22	-0,307***	0,74
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,454***	0,64	-0,122*	0,89	0,245***	1,28
35 a 59 años (c)						
60 y más	0,203***	1,23	0,206***	1,23	0,157**	1,17
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	-0,147*	0,86	-0,125*	0,88	-0,353***	0,70
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	-0,119*	0,89	-0,101	0,90	-0,096*	0,91
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	-0,130*	0,88	-0,232***	0,79	-0,607***	0,54
Bajo	-0,225**	0,80	-0,445***	0,64	-0,951***	0,39
Muy bajo	-0,420***	0,66	-0,657***	0,52	-1,305***	0,27
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	0,084	1,09	-0,135*	0,87	-0,109*	0,90
Villa o asentamiento precario	0,349*	1,42	0,571***	1,77	-0,507**	0,60
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-0,528***	0,59	-1,084***	0,34	-1,298***	0,27
Grandes Areas Urbanas	-0,397***	0,67	-1,050***	0,35	-1,0139***	0,36
Resto Urbano	-0,395***	0,67	-0,880***	0,41	-1,203***	0,30
AÑO						
2010 (c)						
2011	-0,108*	0,90	-0,206***	0,81	-0,198***	0,82
2012	-0,261***	0,77	-0,277***	0,76	-0,196***	0,82
CONSTANTE	-1,745***	0,17	-0,936***	0,39	0,096	1,10
R cuadrado de Cox y Snell	0,016		0,043		0,114	
R cuadrado de Nagelkerke	0,037		0,090		0,202	
Porcentaje global de aciertos	59,9		10,0		73,0	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

La razón de probabilidades en favor de participar en actividades sociales y solidarias disminuye a medida que se desciende en la escala socioeconómica. Así, en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, las probabilidades de participación parroquial disminuyen un 13% entre los integrantes del estrato medio bajo, un 21% entre los del bajo y un 35% entre los del muy bajo. Asimismo, las probabilidades de participación solidaria son un 21% menores en el estrato medio bajo,

un 36% menores en el bajo y un 49% menores en el muy bajo, en tanto que las de participación social, un 45%, un 62% y un 73% menores, respectivamente. Esto podría estar indicando que el estrato medio alto es el más propenso y el que mayores probabilidades presenta en materia de participación social y solidaria.

Por último, obsérvese que en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de participación disminuyen entre los habitantes del Conur-

bano Bonaerense. Los mismos presentan un 61% menor probabilidad de participación parroquial, un 67% menor probabilidad de participación solidaria y un 73% menor probabilidad de participación social. Esto indica que la razón de probabilidad en favor de la participación social y solidaria, en relación al Conurbano Bonaerense, es significativamente mayor en la Ciudad de Buenos Aires.

5.4 SEGURIDAD CIUDADANA E INTEGRIDAD CORPORAL

Tal y como se ha profundizado en el anterior informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario, Año II, diversas teorías de desarrollo humano y tratados internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la seguridad e integridad corporal como un derecho humano fundamental de los individuos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece (en su artículo 9) que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”; y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce el “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona” (artículo 3).

En el presente apartado se evalúa el problema de la inseguridad teniendo en cuenta su doble naturaleza: tanto desde el punto de vista de la “inseguridad efectiva”, es decir, desde la cantidad o número de delitos registrados objetivamente, como desde la “inseguridad subjetiva” o sentimiento de inseguridad que experimentan los ciudadanos por temor a sufrir un delito en el futuro próximo. Ambas caras afectan y condicionan un aspecto importante del desarrollo humano y la integración social de las personas. Asimismo, se analiza la presencia o existencia de tráfico, intercambio o venta de drogas y estupefacientes en la cercanía de los hogares de la población de 18 años y más como un aspecto adicional que afecta y condicional el problema de la delincuencia.

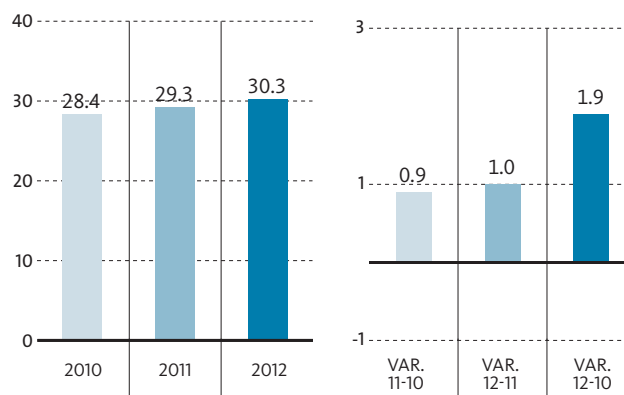
HABER SUFRIDO UN HECHO DE DELINCUENCIA O VIOLENCIA

A continuación se identifica el porcentaje de personas mayores de 18 años que han sido víctimas de un hecho de delincuencia o violencia, habiendo sufrido un hecho delictivo personalmente o algún miembro de su hogar, en el período comprendido por los 12 meses an-

Figura 5.4.1

HABER SUFRIDO UN HECHO DE DELINCUENCIA O VIOLENCIA

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

teriores a la entrevista. Como muestran los datos relevados por la EDSA-Bicentenario (2010-2016), el indicador de inseguridad efectiva tuvo un comportamiento ascendente durante todo el período de estudio, para colocarse en el año 2012 en valores cercanos al 30% (30,3%), lo que implica una variación punta a punta de aproximadamente 2 p.p. El problema de la inseguridad viene agravándose año tras año independientemente del contexto político, social o económico en el que se enmarque el análisis (figura 5.4.1).

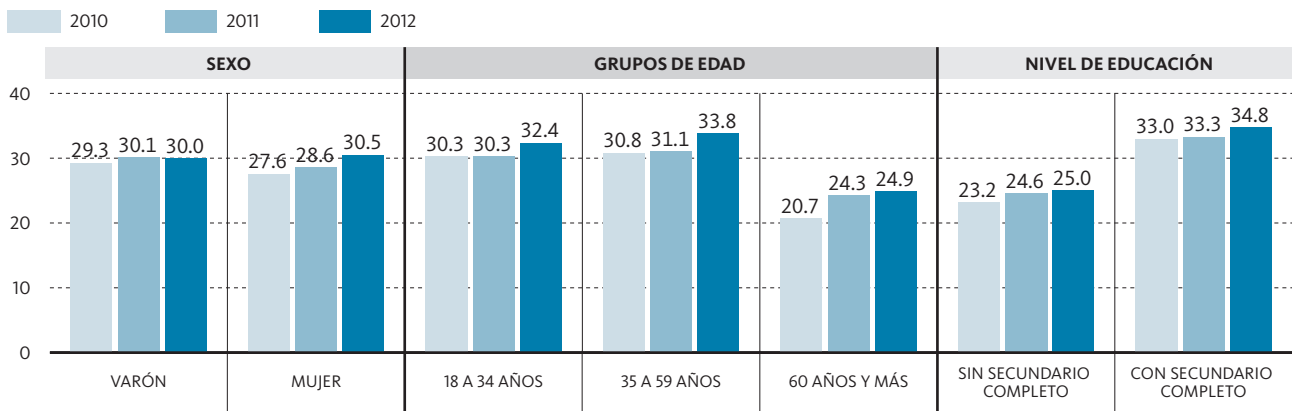
El estudio según las características personales de la población entrevistada no arroja diferencias significativas según el sexo. Sin embargo, se observa en el último año un aumento de la inseguridad entre las mujeres, pasando de 28,6% en 2011 a 30,5% en 2012 (figura 5.4.2). Asimismo, es de advertir que la población de entre 18 y 59 años de edad se encuentra en mayor condición de riesgo frente al delito que los adultos mayores de 60. La figura 5.4.2 muestra que el 32,4% de los jóvenes y el 34% de los adultos de edades medias expresaron haber sufrido un delito durante el último año, contra el 24,9% de los adultos mayores. No obstante, es importante destacar que los niveles de inseguridad durante todo el período de estudio aumentaron con mayor vigor entre la población de 60 años y más (4,2 p.p.).

Las figuras 5.4.2 y 5.4.3 revelan que son los entrevistados con estudios secundarios completos, los del cuartil superior y los que residen en zonas con

Figura 5.4.2

HABER SUFRIDO UN HECHO DE DELINCUENCIA O VIOLENCIA SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

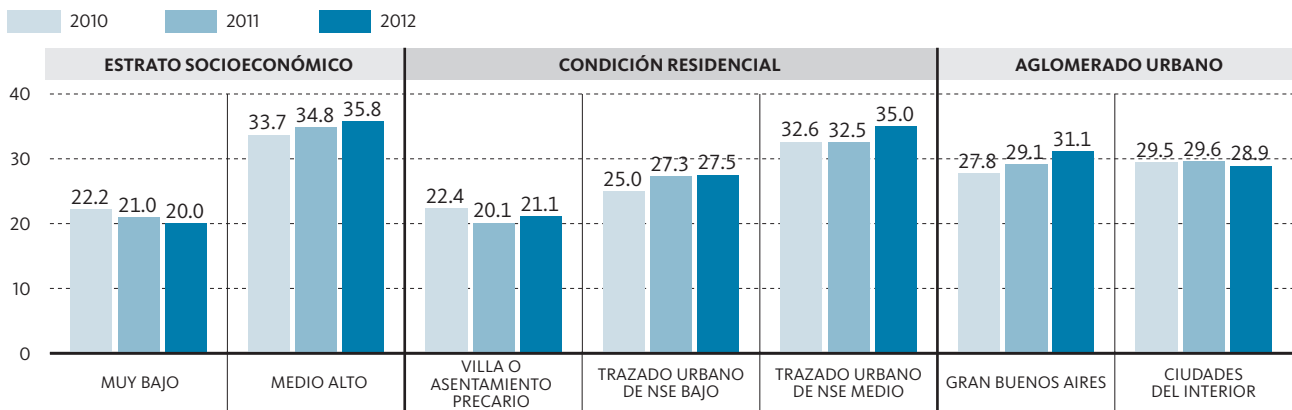


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.4.3

HABER SUFRIDO UN HECHO DE DELINCUENCIA O VIOLENCIA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

trazado urbano de NSE medio los que registran, en todos los años analizados, mayores tasas de delitos. Un 34,8% de quienes terminaron el secundario, un 35,8% de la población del estrato medio alto y un 35% de quienes residen en zonas con trazado urbano de NSE medio declararon haber sufrido un hecho delictivo durante 2012, contra un 25% de quienes no terminaron el secundario, 20% del cuartil inferior y 21,1% de los que viven en villas, respectivamente. Por último, aunque no significativamente, se observa un mayor nivel de inseguridad en el Gran Buenos Aires que en las Ciudades del Interior (figura 5.4.3).

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD

El sentimiento de inseguridad o miedo al delito, a pesar de la leve caída que tuvo lugar en 2011, al igual que la delincuencia, tuvo un compartimiento ascendente con una variación 2010-2012 de 2,3 p.p., para afectar, en el último año de estudio, a 9 de cada 10 entrevistados: 85,5% (figura 5.4.4).

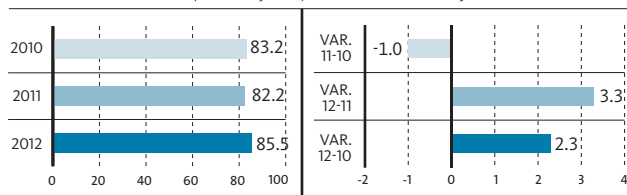
La figura 5.4.5 denota una leve tendencia a ser las mujeres y los adultos de edades medias quienes presentan una mayor propensión a este tipo de miedo,

colocándose en niveles cercanos al 88% las primeras (88,1%, contra el 82,5% de los varones) y al 89% los segundos (88,7%, contra el 83,6% de los más jóvenes y 83,7% de los adultos mayores de 60 años). El panorama es similar al analizar las diferencias según el nivel educativo de la población adulta, porque pese a ser los que cuentan con secundario completo quienes registran un mayor temor al delito, las diferencias son poco significativas entre ambos niveles estudiados. De esta forma, se observa que el sentimiento de inseguridad afecta a toda la población en su conjunto (figura 5.4.6).

Figura 5.4.4

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD

Totales y variaciones absolutas interanuales.
Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

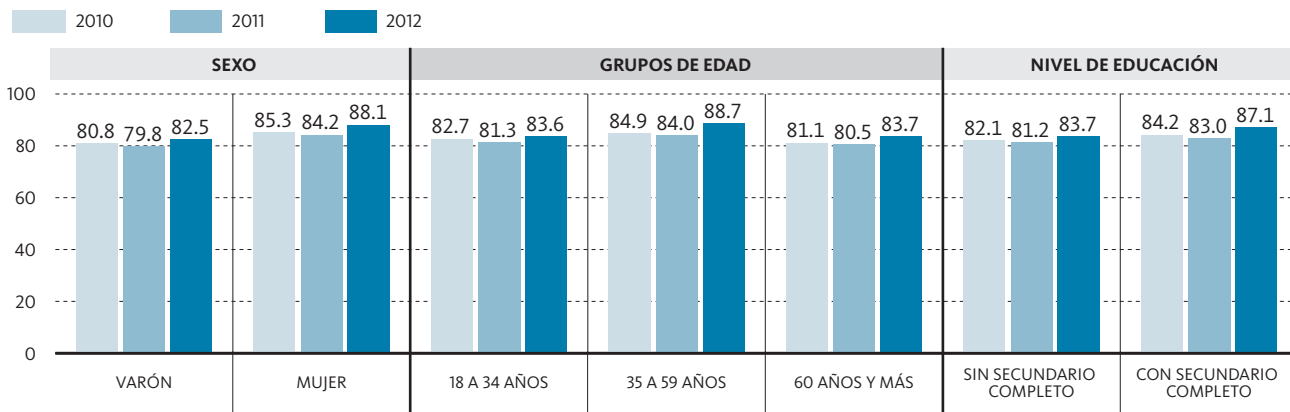


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

Figura 5.4.5

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

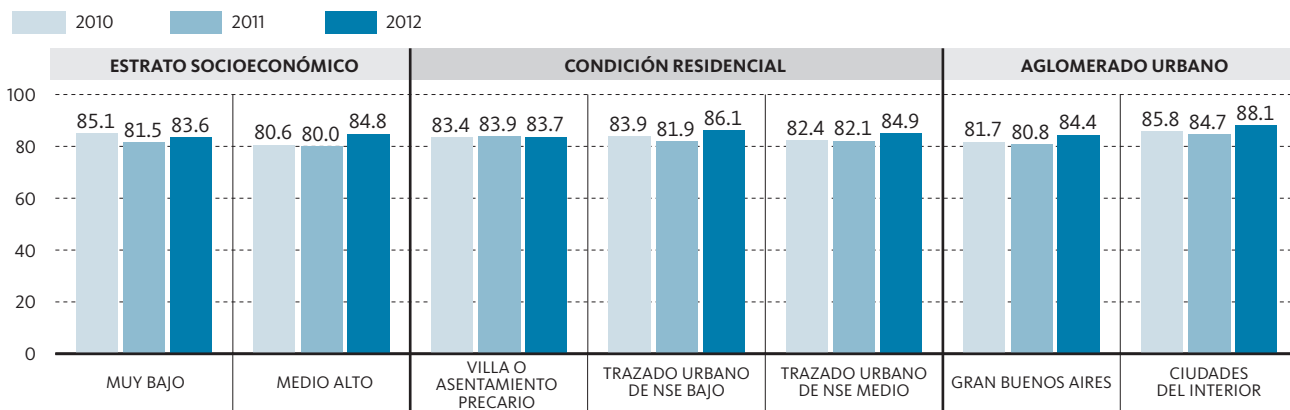


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.4.6

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

VENTA, TRÁFICO O INTERCAMBIO DE DROGAS EN EL BARRIO

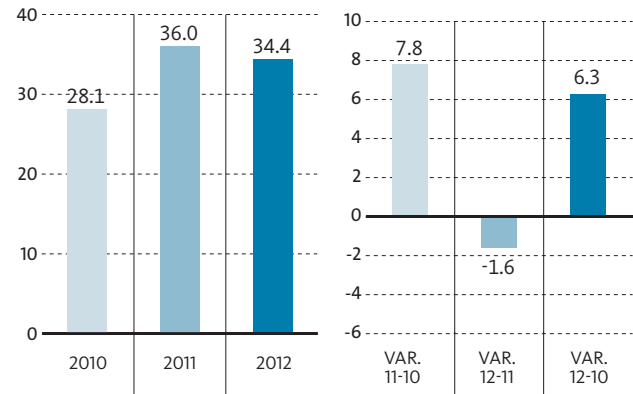
La presencia de venta, tráfico o intercambio de drogas en nuestro país es un aspecto adicional al problema del delito, ya que influye tanto en la cantidad o número de delitos registrados, como en el sentimiento de inseguridad o miedo al delito que experimentan las personas en su propio barrio o vivienda. La figura 5.4.7 muestra que dicha problemática aumenta en 6,3 p.p. entre 2010 y 2012, pese a una leve caída registrada en el último bienio, y coincidiendo con el comportamiento de la inseguridad efectiva y el sentimiento de inseguridad, pasando a afectar al 34,4% de la población analizada en el año 2012.

El análisis según sexo y edad no arroja diferencias significativas, pero si se observa una mayor tendencia al tráfico entre la población más vulnerable. Las figuras 5.4.8 y 5.4.9 muestran que la presencia de drogas en la cercanía de su hogar fue percibida más por las personas que no terminaron el secundario, las que pertenecen al cuartil inferior y las que viven en villas o asentamientos precarios que por aquellas con condiciones educativas, so-

Figura 5.4.7

PRESENCIA DE TRÁFICO, VENTA O INTERCAMBIO DE DROGAS EN EL BARRIO

Totales y variaciones absolutas interanuales. Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



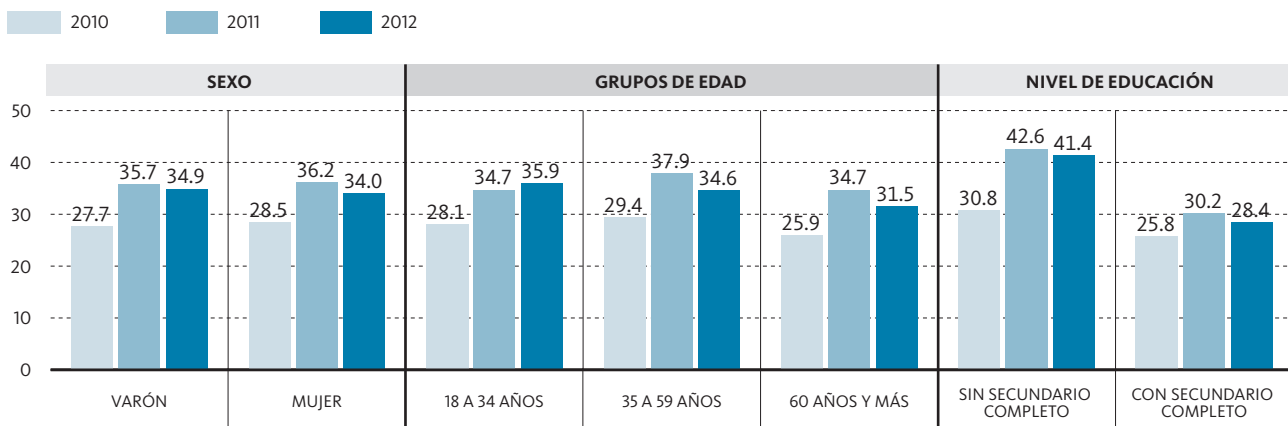
FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), ODSA, UCA.

cioeconómicas y residenciales más favorables. Estas diferencias se agudizan en el caso de la condición residencial, para llegar en 2012 casi a triplicarse el riesgo entre los habitantes de villas respecto de los que residen en zonas con trazado urbano de NSE medio (58% contra 20,6%).

Figura 5.4.8

PRESENCIA DE TRÁFICO, VENTA O INTERCAMBIO DE DROGAS EN EL BARRIO SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

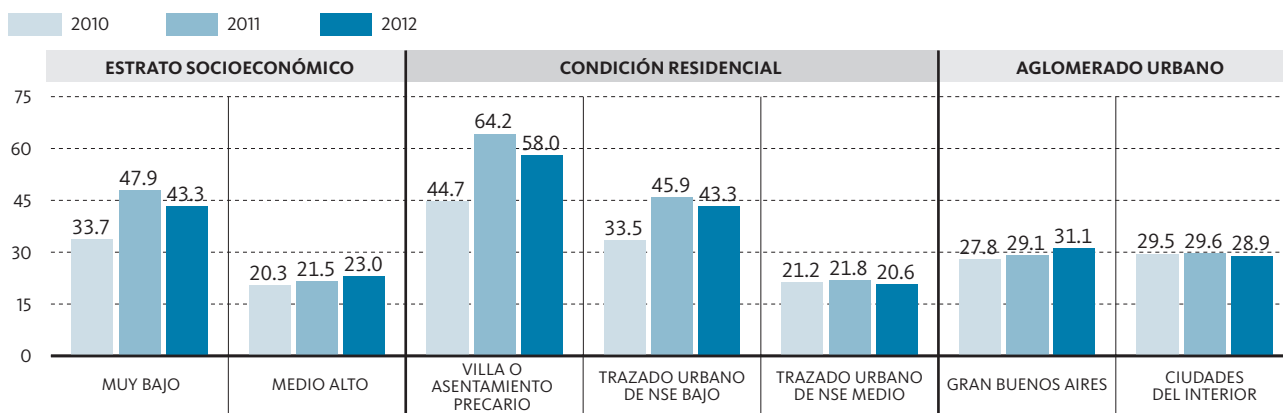


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.4.9

PRESENCIA DE TRÁFICO, VENTA O INTERCAMBIO DE DROGAS EN EL BARRIO SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN RESIDENCIAL Y AGLOMERADO URBANO

Años 2010-2011-2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

CONDICIONANTES ASOCIADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA E INTEGRIDAD CORPORAL

A continuación se analizan los condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos y temporales que inciden en la seguridad ciudadana e integridad corporal. Con este fin se ajustaron modelos multivariados de regresión logística que permiten determinar el sentido y la fuerza en que una serie de categorías sociales inciden en la probabilidad de haber sufrido un hecho de delincuencia, tener miedo al delito y habitar en un barrio con presencia de venta o tráfico de drogas. En la figura 5.4.10 se presentan los principales resultados alcanzados por cada uno de los modelos ajustados.

En cuanto a la capacidad de predicción de los tres modelos, cabe observar que el modelo I (haber sufrido un hecho de delincuencia) alcanzó una capacidad del 55,2%; el modelo II (sentimiento de inseguridad) del 56,5%; y el modelo III (presencia de venta o tráfico de drogas) de 59,7%. En los tres casos, al examinar la fuerza de los respectivos coeficientes, manteniendo controladas el resto de las variables intervinientes, la edad, el aglomerado urbano y el estrato socioeconómico aparecen como uno de los principales factores explicativos del modelo I (haber sufrido) y el II (miedo al delito). Por su parte, en dichos modelos la condición residencial parece no tener incidencia significativa. Sin embargo, la misma, aparece como el

principal factor explicativo del modelo III (presencia de venta o tráfico de drogas). También explican dicho modelo el aglomerado y el estrato socioeconómico siendo el sexo, el nivel educativo y la jefatura del hogar los factores que menor incidencia adquieren.

La razón de probabilidades en favor de haber sufrido un hecho de delincuencia es 10% más baja entre las mujeres en comparación con la de los varones. Sin embargo, son las mujeres las que presentan un 37% más de probabilidades que los varones de percibir miedo al delito o sentimiento de inseguridad (modelo II). Por último, no se hallan diferencias significativas según sexo en la probabilidad de que exista venta o tráfico de drogas en el barrio. Con respecto a los de edades medias (35 a 59 años), que parecieran ser los más afectados por el problema de la inseguridad, los adultos mayores de 60 años presentaron un 35% menos de probabilidad de sufrir un delito, un 28% menos de probabilidad de miedo al mismo y un 20% menos de probabilidad de percibir venta o tráfico de drogas en su propio barrio o vivienda. Con respecto al nivel educativo, si bien no se hallan diferencias significativas en materia de haber sufrido y presencia de drogas, la razón de probabilidades en favor de percibir miedo al delito es 30% más alta entre los que terminaron sus estudios secundarios en comparación con quienes no lo hicieron.

Al analizar el comportamiento de dichos modelos según el estrato socioeconómico se observa que la razón de probabilidades en favor de haber sufrido un hecho

Figura 5.4.10

RAZONES DE PROBABILIDAD ASOCIADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA E INTEGRIDAD CORPORAL

Años 2010-2011-2012. En porcentaje y razón de probabilidades de la población de 18 años y más.

VARIABLES DEL MODELO	MODELO I		MODELO II		MODELO III	
	HABER SUFRIDO UN HECHO DE DELINCUENCIA O VIOLENCIA		SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD		VENTA, TRÁFICO O INTERCAMBIO DE DROGAS	
	B	EXP (B)	B	EXP (B)	B	EXP (B)
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO						
SEXO						
Varon (c)						
Mujer	-0,098***	0,907	0,317***	1,373	-0,016	0,985
GRUPOS DE EDAD						
18 a 34 años	-0,140***	0,869	-0,260***	0,771	-0,092**	0,912
35 a 59 años (c)						
60 y más	-0,430***	0,650	-0,328***	0,721	-0,216***	0,805
NIVEL EDUCATIVO						
Con secundario completo (c)						
Sin secundario completo	-0,154***	0,857	-0,335***	0,716	0,050	1,052
JEFATURA DEL HOGAR						
Jefe (c)						
No jefe	0,195***	1,216	0,043	1,044	0,064*	1,066
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR						
ESTRATO SOCIOECONÓMICO						
Medio alto (c)						
Medio bajo	0,140***	1,150	0,333***	1,396	0,302***	1,352
Bajo	-0,179***	0,836	0,206***	1,228	0,148***	1,160
Muy bajo	-0,334***	0,716	0,284***	1,328	0,258***	1,294
CONDICIÓN RESIDENCIAL						
Trazado urbano de NSE medio (c)						
Urbanización formal de NSE bajo	-0,020	0,980	0,039	1,040	0,947***	2,578
Villa o asentamiento precario	-0,195*	0,823	0,017	1,017	1,431***	4,182
TIPO DE AGLOMERADO						
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (c)						
Conurbano Bonaerense	-0,277***	0,758	0,170***	1,185	-0,288***	0,748
Grandes Areas Urbanas	-0,133**	0,875	0,387***	1,472	0,034	1,035
Resto Urbano	-0,389***	0,677	0,062	1,064	-0,394***	0,674
AÑO						
2010 (c)						
2011	0,040	1,041	-0,214	0,808	0,358***	1,430
2012	0,096**	1,101	0,172***	1,188	0,257***	1,293
CONSTANTE	-0,439***	0,644	1,371***	3,937	-1,478***	0,228
R cuadrado de Cox y Snell	0,026		0,016		0,061	
R cuadrado de Nagelkerke	0,037		0,027		0,086	
Porcentaje global de aciertos	55,2		56,5		59,7	

(c) Categoría de referencia.

* Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,1)

** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,05)

*** Coeficientes betas estandarizados significativos (p-value < 0,01)

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

de delincuencia aumenta a medida en que se asciende en la escala socioeconómica. Así, en comparación con quienes forman parte del estrato medio alto, las probabilidades de haber sido víctima de un hecho delictivo es prácticamente igual para los del estrato medio bajo y cae en un 17% entre los integrantes del estrato bajo y un 29% entre los del muy bajo. Por el contrario, las probabilidades de percibir sentimiento de inseguridad y venta o tráfico de drogas en el barrio, en comparación

con el estrato medio alto, son entre un 25% y un 30% más altas en el resto de los estratos analizados.

Un aspecto que cobra relevancia significativa es la diferencia observada en materia de presencia de venta o tráfico de droga observada según condición residencial. El modelo III indica que la razón de probabilidades en favor de la existencia de venta de drogas aumenta de manera significativa a medida en que se encarece la condición residencial. Así, quienes resi-

den en villas o asentamientos precarios perciben un 318% más de probabilidades de presencia de tráfico, intercambio o venta de estupefacientes en el barrio que quienes habitan en zonas con trazado urbano de NSE medio. Algo similar ocurre al comparar estos últimos con las zonas de trazado urbano de NSE bajo que presentan un 157% más de probabilidades.

Por último, obsérvese que en comparación con residir en la Ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de haber sufrido un hecho delictivo y de presencia de tráfico de drogas disminuyen en un 25% entre los habitantes del Conurbano Bonaerense. Sin embargo, los mismos presentan un 18% mayor probabilidad de miedo al delito o sentimiento de inseguridad que quienes residen en la CABA.

5.5 RESUMEN DE RESULTADOS

El presente informe se enmarca dentro de un contexto político, social y económico particular que de alguna manera influye sobre las percepciones, valoraciones y comportamientos de la población adulta analizada. El año 2010 estuvo fuertemente condicionado por la crisis económica internacional, seguido por un año marcado por un contexto de crecimiento económico y de reformas sociales, así como un panorama alentador respecto a las expectativas de la sociedad en cuanto a la evolución de la economía del país. En 2011, la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se realizó luego del amplio triunfo electoral del gobierno oficial. Sin embargo, los resultados demuestran que dichos aspectos positivos se vieron opacados en 2012 por un mapa económico internacional complejo y por cuestiones postergadas en el plano interno, como los altos índices de inflación y los graves niveles de pobreza y desigualdad.

En términos generales, los resultados de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) han mostrado durante todo el período de estudio (2010, 2011 y 2012) una caída de 3,1 p.p. en la preferencia de la sociedad por un gobierno donde el poder esté concentrado en la figura presidencial. Sin embargo, y coincidiendo con el año electoral, en 2011 se observó un crecimiento de dicha preferencia sobre todo en la población que no terminó sus estudios secundarios, entre los del estrato muy bajo y entre los habitantes de villas o asentamientos precarios, siendo estos sectores los

que a su vez percibieron una mayor caída en dicha preferencia durante el último año analizado.

Asimismo, el déficit en la conformidad con el funcionamiento de la democracia, que había caído 15,8 p.p. durante el bienio 2010-2011, sufrió un aumento de 16,3 p.p. en 2012 para colocarse en niveles superiores a los de 2010 (56,3%). El aumento de la percepción sobre la incapacidad de la democracia para resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad se produjo en toda la población de 18 años y más, analizada independientemente de sus características personales, nivel educativo, estrato socioeconómico y condición residencial.

Algo similar ocurrió con el indicador de déficit en la consideración del voto como factor de cambio social, puesto que a pesar de la caída registrada durante el bienio 2010-2011, su ascenso en 2012 llevó a un aumento punta a punta de 2,7 p.p. En este caso, el aumento en el porcentaje de personas de 18 años y más que consideran inservible el voto para producir cambios en la realidad social del país durante el bienio 2011-2012 afectó en mayor medida a los sectores más vulnerables y a los residentes del Gran Buenos Aires, quienes registraron comportamientos más inestables durante los tres años analizados.

Un dato interesante para destacar es la considerada inestabilidad y vulnerabilidad presentadas por el indicador de confianza gubernamental. Luego de producirse un aumento de 15,9 p.p. en el nivel de confianza en el Gobierno Nacional entre 2010 y 2011, el mismo cayó en igual magnitud en 2012 para colocarse en porcentajes cercanos a los del año base (26,8%). Estos cambios se verificaron en todo el universo de la población analizada, aunque con mayor magnitud entre la población más vulnerable. Es decir, el aumento de la confianza en el primer bienio de estudio y su posterior caída se produjo con mayor impulso entre quienes no terminaron sus estudios secundarios, quienes pertenecen al cuartil inferior de la escala socioeconómica y quienes residen en villas o asentamientos precarios.

Por el contrario, los niveles de confianza en el Congreso y en la Justicia se mantuvieron relativamente más bajos y más estables en el tiempo. En este caso, fueron las personas que culminaron sus estudios secundarios y las que pertenecen al cuartil superior de la escala socioeconómica quienes presentaron, generalmente, mayores niveles de confianza en estas dos instituciones. Sin embargo, aunque no tan abrupta

como en el caso del Gobierno Nacional, la caída durante el último bienio (2011-2012) de la confianza en la Justicia y en el Congreso se produjo, sobre todo, por el comportamiento de estos sectores, llevando, al igual que con el indicador gubernamental, a un efecto de disminución de las diferencias.

De todas las instituciones analizadas, las de representación de intereses evidenciaron los niveles de credibilidad más bajos, no logrando superar el 10% en el último año de estudio, en el cual los sindicatos obtuvieron el mayor puntaje (10,8%), seguidos por los partidos políticos (8,5%) y los movimientos piqueteros (4,9%). Al igual que lo observado en las instituciones de gobierno, las de representación mejoraron sus niveles de credibilidad en 2011 para luego sufrir un retroceso en 2012. Dicho aumento se produjo fundamentalmente por el incremento de la confianza entre los jóvenes y varones de 18 años y más. Por su parte, la caída de 2012 afectó tanto a varones como a mujeres y a todos los grupos de edad analizados.

Las instituciones de la sociedad civil suelen presentar mayor estabilidad y superiores niveles de confianza que las demás instituciones analizadas. Así, las ONGs, Cáritas y la Iglesia percibieron niveles de alta confianza cercanos al 50% durante todo el período de estudio. En cuanto a la confianza en los medios de comunicación, aunque en niveles más bajos, se observó un crecimiento constante durante todo el período (de 35,2% en 2010 pasó a 38,7% en 2012). El análisis según sexo y edad mostró que las mujeres y las personas mayores de 60 años tienden a confiar más en las tres instituciones analizadas que los varones y los jóvenes. Asimismo, se observó que en la medida que asciende el nivel socioeconómico, educativo y residencial, aumenta la confianza en las ONGs/Cáritas en los tres años analizados; y lo inverso ocurre con la Iglesia y los medios de comunicación, ya que es la población más vulnerable la que obtiene mayores niveles de credibilidad en estas instituciones.

Durante el trienio estudiado, los datos revelan que los niveles de participación política no superan el 6% y los de participación social, el 16%. Dentro de las organizaciones políticas, fueron los sindicatos los que registraron mayores niveles de participación; y dentro de las organizaciones sociales y solidarias, los grupos sociales. Es importante destacar que a diferencia de lo que ocurre con la participación política, se produce un aumento año tras año en los tres ti-

pos de participación social y solidaria analizados. En general, tienden a participar más en todas las actividades quienes terminaron el secundario, quienes pertenecen al 25% superior de la escala socioeconómica y los habitantes de zonas con trazado urbano de NSE medio. Asimismo, fueron los varones y los jóvenes de entre 18 y 35 años quienes presentaron mayores niveles de participación política partidaria y sindical, en movimientos de protesta y en grupos sociales, mientras que las mujeres y las personas mayores de 60 años evidenciaron mayor participación en actividades solidarias y parroquiales.

Por último, los datos relevados demuestran que el problema de la inseguridad viene agravándose año tras año independientemente del contexto político, social o económico en el que se enmarque el análisis. El indicador de inseguridad efectiva subió de 28,4% en 2010 a 30,3% en 2012; y en los mismo años, el de sentimiento de inseguridad, de 83,2% a 85,5%. Pese a que el miedo al delito afecta a toda la población analizada, sin diferencias relevantes según las características personales y los niveles socioeducativos y residenciales, las mujeres y los entrevistados de entre 18 y 59 años registraron mayor condición de riesgo frente al delito que los varones y los adultos mayores de 60 años. Asimismo, estos resultados dan cuenta de un crecimiento de la inseguridad a medida que se escala en los niveles socioeconómicos y residenciales de la población entrevistada.

Si se analiza la venta o tráfico de drogas como un agravamiento más al problema del delito, se observa que –al igual que con la inseguridad y el miedo– el mismo sufre un aumento de 6,3 p.p. durante todo el período de estudio. Tres de cada diez entrevistados declararon percibir venta, intercambio o tráfico de drogas y/o estupefacientes en la cercanía de su hogar en el año 2012. Esta problemática afecta a toda la población, independientemente del sexo y la edad, pero en mayor medida a los entrevistados con condiciones socioeducativas y residenciales más vulnerables. Las diferencias se acentúan al comparar la situación entre las villas (58,0% de afectados) y las zonas con trazado urbano de NSE medio (20,6%).

5.6. NOTA DE INVESTIGACIÓN:

Influencia de la venta de drogas y la vigilancia policial sobre el problema de la inseguridad

CAROLINA MORENO

A continuación se analiza cómo influye la presencia de tráfico de drogas y de vigilancia policial en los barrios, sobre la cantidad de delitos registrados, y el sentimiento de inseguridad o miedo al delito que experimentan las personas en su propio barrio o vivienda. De acuerdo a lo analizado en el apartado 5.4, la presencia de venta, tráfico o intercambio de drogas aumentó en 6,3 p.p. entre 2010 y 2012, para afectar al 34,4% de la población encuestada durante el último año de estudio. Asimismo, se observa una significativamente mayor presencia de dicha problemática entre la población más vulnerable (el total asciende a 43,3% en el estrato muy bajo y 58% en las villas o asentamientos precarios).

Respecto de la influencia que ejerce sobre la inseguridad vivir en un barrio donde hay presencia de venta o tráfico de drogas, la figura 5.6.1 muestra que el porcentaje de personas de 18 años y más que dijeron experimentar algún delito durante el último año (personalmente o algún miembro de su familia) aumenta entre aquellos que respondieron contar con problemas de venta de drogas cerca de su hogar (la inseguridad pasa de 27,7% en hogares sin

tráfico de drogas a 35,2% entre aquellos con presencia de venta de drogas). Esta relación se revela en prácticamente todos los estratos y zonas residenciales analizadas, agudizándose en los estratos medios y en las zonas con trazado urbano, para pasar de 33,1% en ausencia de venta de drogas a 46,5% en presencia de la misma en el estrato medio bajo, y de 31,4% a 50,4%, respectivamente, en el medio alto. Sin embargo, este comportamiento no se reconoce entre los residentes en villas o asentamientos precarios, ya que el delito aquí se produce independientemente de la presencia o ausencia de algún tipo de intercambio de drogas en la cercanía del hogar.

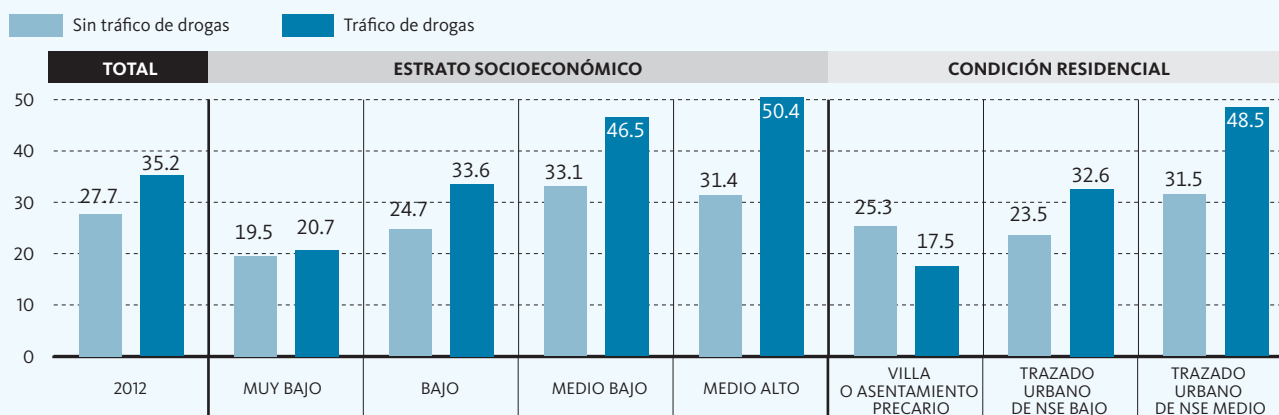
La figura 5.6.2 indica que más de la mitad de los entrevistados (51,4%) por la EDSA-Bicentenario (2010-2016) respondieron, en el año 2012, no sentirse seguros en su propio barrio o vivienda. Dicho porcentaje aumenta en los estratos más bajos, y pasa de 43,3% en el medio alto a 50,9% en el medio bajo, así como a niveles cercanos al 55% en los estratos bajo (55,4%) y muy bajo (55,7%). Lo mismo ocurre al analizar la condición residencial, puesto que el miedo al delito llega a afectar a más de la mitad de los residentes en villas o asentamientos precarios (54,4%) y en zonas con trazado urbano de NSE bajo (57,2%), reduciéndose ese porcentaje a 43,3% en zonas con trazado urbano de NSE medio.

Igual que lo observado con respecto a la inseguridad, el miedo al delito en el barrio o la propia vivienda crece en presencia de venta o tráfico de drogas. La figura 5.6.3 muestra cómo el sentimiento de inseguridad pasa de 47,4% en los casos en los que declararon no contar

Figura 5.6.1

INSEGURIDAD SEGÚN VENTA O TRÁFICO DE DROGAS POR ESTRATOSOCIOECONÓMICO Y CONDICIÓN RESIDENCIAL

Año 2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

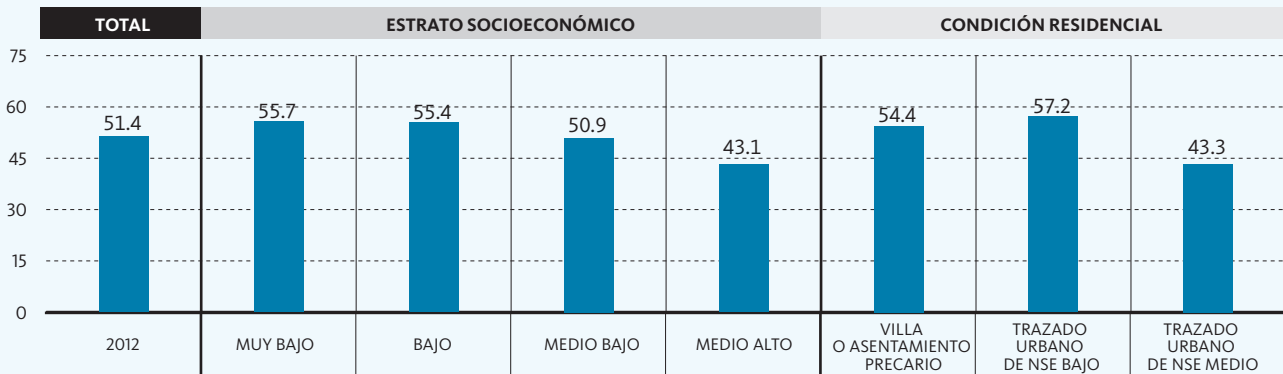


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.6.2

MIEDO AL DELITO EN EL BARRIO O VIVIENDA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y CONDICIÓN RESIDENCIAL

Año 2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

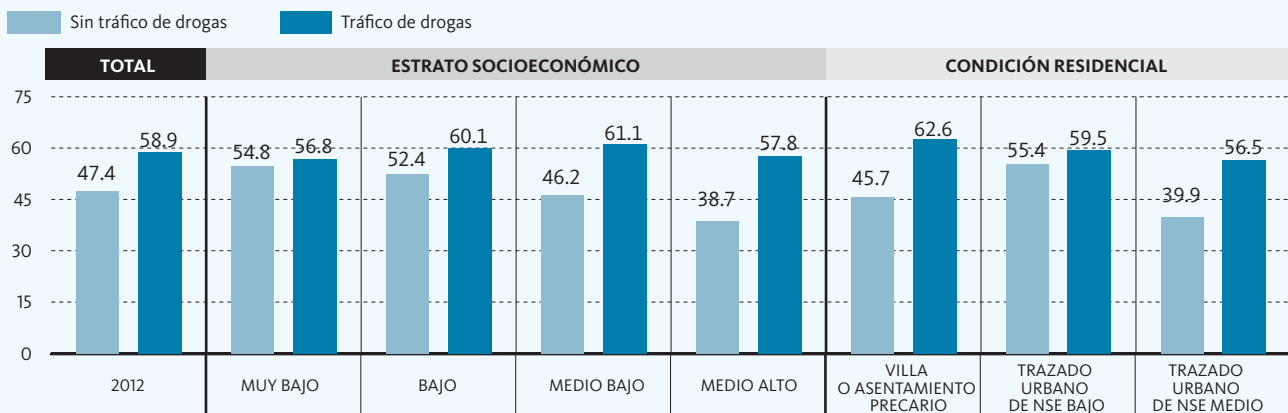


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.6.3

MIEDO AL DELITO EN EL BARRIO O VIVIENDA SEGÚN VENTA O TRÁFICO DE DROGAS POR ESTRATOSOCIOECONÓMICO Y CONDICIÓN RESIDENCIAL

Año 2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

con problemas de venta de drogas a 58,9% en presencia de la misma. Esta relación es común en todos los estratos socioeconómicos analizados, pero se agudiza todavía más en los sectores más favorecidos, pasando de 46,2% sin tráfico a 61,1% con tráfico en el estrato medio bajo, y de 38,7% a 57,8% en el medio alto. Al analizar la condición residencial de los entrevistados, se evidencia una mayor relación entre presencia de drogas y miedo al delito en las villas y en las zonas con trazado urbano

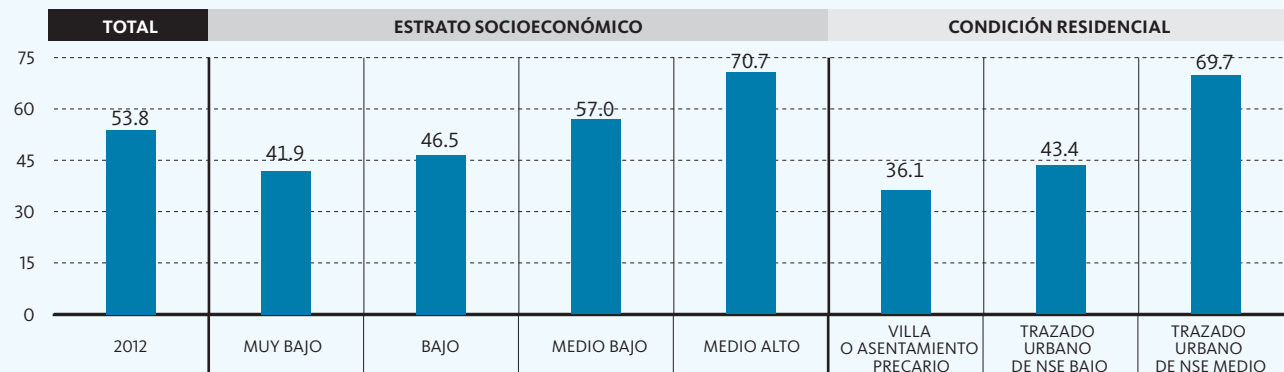
de NSE medio, y menor vínculo entre ambos problemas en el caso de los residentes de zonas con trazado urbano de NSE bajo.

Como puede verse en la figura 5.6.4, la mitad de los encuestados en el año 2012 dijeron contar con vigilancia policial cercana a su hogar. Sin embargo, un análisis según el estrato socioeconómico y la condición residencial establece importantes diferencias socio-residenciales en materia de presencia policial. Así, la vigilancia alcanza a 7

Figura 5.6.4

VIGILANCIA POLICIAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y CONDICIÓN RESIDENCIAL

Año 2012. En porcentaje de población de 18 años y más.

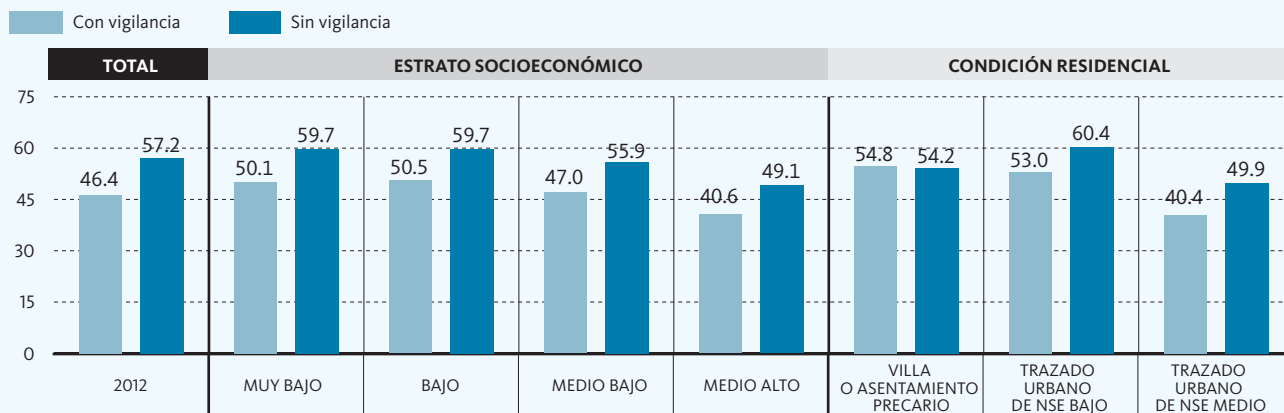


FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

Figura 5.6.5

MIEDO AL DELITO EN EL BARRIO O VIVIENDA SEGÚN VIGILANCIA POLICIAL POR ESTRATOSOCIOECONÓMICO Y CONDICIÓN RESIDENCIAL

Año 2012. En porcentaje de población de 18 años y más.



FUENTE: EDSA-BICENTENARIO (2010-2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA.

de cada 10 encuestados del estrato medio bajo (70,7%) y de las zonas residenciales de NSE medio (69,7%), y se reduce en el estrato muy bajo (41,9%) y en las villas o asentamientos precarios(36,1%).

En todos los estratos y condiciones residenciales la presencia policial cercana parece influir en la percepción de miedo o sentimiento de inseguridad en el propio barrio o vivienda. En tal sentido, el porcentaje de individuos mayores de 18 años que respondieron tener este miedo en su

propia casa o barrio pasó de 46,4% en presencia de efectivos policiales o vigilancia privada a 57,2% en ausencia de la misma (figura 5.A.5).

El análisis de los resultados demuestra que en aquellos hogares que se ven afectados por el tráfico de drogas aumenta la inseguridad en su doble aspecto: haber sufrido un delito y sentimiento de inseguridad. Si bien el problema es general, son los sectores más carenciados, pertenecientes a estratos bajos y habitantes de villas

o asentamientos precarios, quienes se ven afectados en mayor medida por esta relación. Por ello, es importante impulsar políticas destinadas a combatir la inseguridad que reconozcan su doble naturaleza y consideren la venta o tráfico de drogas como un aspecto que influye de manera evidente en el agravamiento del problema de la inseguridad.

Asimismo, se verifican diferencias importantes en la distribución de la vigilancia policial, por cuanto la misma aumenta a medida que se escala por estrato socioeconómico y/o por condición residencial. En definitiva, se observa una relación entre la presencia o ausencia de efectivos policiales y el aumento al miedo al delito en el propio barrio o vivienda en todos los sectores y condiciones socio-residenciales.

BIBLIOGRAFÍA

A

Abramo, P. (2003), “La teoría económica de la favela: cuatro notas sobre la localización residencial de los pobres y el mercado inmobiliario informal”. En *Ciudad y territorios: Estudios territoriales*, vol. XXXV, n° 136-137, Ministerio de Fomento, Madrid, 2003.

____ (2008): *Ciudad Caleidoscópica*. Río de Janeiro: Bertrand.

Abramovich, V. y Pautassi, L. (2010) (comps.), *La medición de derechos en las políticas sociales*. Buenos Aires: Rústica.

Adaszko, D. (2010), “Hábitat, salud y situación económica de los hogares”. En *Salvia et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 6, *La Deuda Social Argentina frente al Bicentenario. Progresos Destacados y Desigualdades Estructurales del Desarrollo Humano y Social en la Argentina Urbana 2004-2009*. Buenos Aires: Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), UCA, pp.: 53-134.

____ (2011a), “Las condiciones habitacionales y de acceso a bienes y servicios urbanos en la Argentina 2010. Urbanización y desigualdad estructural”. En *Salvia et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año I. Buenos Aires: Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, pp. 37-87.

____ (2011b), “La salud de la población y el acceso al sistema que la atiende. La distribución diferencial del proceso de salud-enfermedad y atención desde una perspectiva de derechos”. En *Salvia et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año I. Buenos Aires: ODSA, UCA, pp. 135-176.

____ (2012), “Condiciones de vida en el hábitat urbano”. En *Salvia et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año II. Buenos Aires: ODSA, UCA, pp. 85-131.

____ (2012), “Capacidades de subsistencia económica de los hogares”. En *Salvia et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año II. Buenos Aires: ODSA, UCA, pp. 43-84.

Adaszko, D. y Musante, B. (2011), “Aportes empíricos para la comprensión de la segregación socio residencial en la Argentina”. En *Salvia, A.* (comp.), *Deudas sociales en la Argentina posreformas*. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Aguirre, P. (2011), “Precio de los alimentos y políticas alimentarias para un futuro posible”. En *Tuñón, I.*, *Situación de la Infancia a Inicios del Bicentenario. Un enfoque multidimensional y de derechos*. Ediciones Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Serie del Bicentenario 2010-2016. Buenos Aires: Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

- Aldrich, J. y Forrest, N.** (1984), *Linear Probability, Logit and Probit Models*. Sage Publications, *Serie Quantitative Applications*, n° 45, California.
- Altimir, O.** (1979), “La dimensión de la pobreza en América Latina”. Serie Cuadernos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), n° 27 Santiago de Chile: CEPAL.
- Amigo, A. y Piccini, P.** (2010), *Discriminaciones, violencias y memoria social en situaciones de desamparo*. Anuario de Psicología. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, vol. XVII, pp. 202-224.
- ANSES** (2011). *Asignación Universal por Hijo para protección social: una política de inclusión para los más vulnerables*. Recuperado de <http://observatorio.anses.gob.ar/files/subidas/AUH%20para%20Protecci%C3%B3n%20Social.pdf> [consulta: 15 de marzo de 2012].
- Antoncich, R.** (1993), *El tema del trabajo en el Magisterio Social de la Iglesia. La Encíclica Laborem Exercens en América Latina y la Doctrina Social de la Iglesia. Trabajo y capital: perfiles de un nuevo orden económico y social*. En Antoncich, R. y Roos, L. (comp.). Buenos Aires: Ediciones Paulinas.
- Armengol Millans, R.** (2009), “Sobre las de definiciones de salud: salud mental y salud corporal”. Discurso en *X Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana*. Real academia de lengua catalana. Barcelona, 27 de enero de 2009.
- Arriagada Luco, C.** (2003), “Información y herramientas sociodemográficas para analizar y atender el déficit de habitabilidad”. Serie población y desarrollo n° 45. CELADE / ECLAC.
- Arriagada Luco, C. y Rodríguez Vignoli, J.** (2003), “Segregación residencial en áreas metropolitanas de América Latina: magnitud, características, evolución e implicaciones de política”. Santiago de Chile: CEPAL.
- Arteaga, C.** (2007), “Pobreza y estrategias familiares: Debates y reflexiones”. En *Revista Madrid*, n°17, septiembre, pp. 144-164.
- Arza, C.** (2002), “La privatización de los servicios públicos y sus impactos distributivos”. En D. Azpiazu (comp.), *Privatizaciones y poder económico*. Buenos Aires: UNQUI.
- Ashmore R.** (1970). The problem of intergroup prejudice. En Collins B.E. (ed.), *Social Psychology*, vol. 25, pp. 245–296. Reading: Addison-Wesley.

B

- Banco Interamericano de Desarrollo** (2009). *Construir ciudades. Mejoramiento de barrios y calidad de vida urbana*. Eduardo Rojas editor. Washington DC: Fondo de Cultura Económica.
- Banco Mundial** (2000), *Informe sobre el desarrollo mundial*. Washington DC: Banco Mundial.
- ____ (2005), *Equidad y desarrollo: informe de desarrollo mundial 2005*. Washington DC: Banco Mundial.
- Bandura, A.** (1986), *Social Foundations of thought and action Englewood Cliffs*, New Jersey: Prentice.
- Barrantes, R.** (1993), “Economía del medio ambiente. Consideraciones teóricas”. Documento de trabajo n° 48. IEP. Lima: Instituto de Estudios Peruanos..
- Barrera, M.; Fernández, A. y Manzanelli, P.** (2013), “Trabajo y pobreza: virtudes y desafíos de la posconvertibilidad”. *Revista Autogestión. Debates urgentes para otra economía*. Año 1, n° 2. Buenos Aires CIFRA-CTA
- Bayon, M. C.** (2005), “La ‘vieja’ pobreza en el nuevo escenario económico: privación, desempleo y segregación espacial en Argentina”. Ponencia en el X Congreso internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la Administración Pública. Santiago de Chile, octubre de 2005, disponible en: <http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20vieja%20pobreza%20en%20el%20nuevo%20escenario%20económico.pdf>.

- Beccaria, L.; Feres, J. y Sáinz, P.** (1999), *Medición de la pobreza: Situación actual de los conceptos y métodos*. Buenos Aires: 4º Taller Regional del MECOVI.
- Beccaria, L. y Minujin, A.** (1985), Métodos alternativos para medir la evolución del tamaño de la pobreza. En *Documento de Trabajo N° 6*. Buenos Aires: INDEC.
- Beccaria, L. y López, N.** (1996), *Sin trabajo*. Buenos Aires: UNICEF/Losada.
- Beccaria, L. y Perelman, P.** (1999), “La utilización del gasto y del ingreso en la medición de pobreza. Medición del gasto en las encuestas de hogares”. 3er Taller Regional del MECOVI. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), CEPAL.
- Beeghley, L.** (1986). “Social Class and Political Participation. A Review and an Explanation”. *Sociological Forum 1 n° 3*, pp. 497-498. Wayne: Eastern Sociological Society.
- Benzécri, J.P.** (1973), *L'Analyse des donnees: Tomos I y II*. Paris: Dunod.
- Blanco, M.; Kriguer, N., Pérez Lloret, S. y Cardinali, D.P.** (2003), Attitudes towards treatment among patients suffering from sleep disorders. A Latin American survey *BMC Family Practice*, vol. 4, p. 17.
- Billings, A. G. y Moos, R. H.** (1981), “The role of coping responses and social resources in attenuating the stress of life events”. En *Journal of Behavioral Medicine*, n° 4, pp. 139-157.
- Boltvinik, J.** (1990), *Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos de medición*. Caracas: PNUD.
- _____ (1991), “La medición de la pobreza en América Latina”. En “Pobreza y necesidades básicas”. *Revista Comercio Exterior*, vol. 41, n° 5. México, mayo de 1992.
- Brenlla, M. y Aranguren, M.** (2010), “Adaptación argentina de la Escala de Malestar Psicológico de Kessler (K10)”. *Revista de Psicología de la PUCP*, n° 28(2), pp. 309-340.
- Brich, A. H.** (2001), *The concepts and theories of modern democracy*. Nueva York: Routledge.

C

- Cardinali, D. P.; Cano, P.; Jiménez-Ortega, V. y Esquifino, A. I.** (2011), “Melatonin and the metabolic syndrome: physiopathologic and therapeutical implications”. *Neuroendocrinology*. Edimburgo: International Journal for Basic and Clinical Studies on Neuroendocrine Relationships, n° 93(3), pp. 133-142.
- Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad** (2005). Foro Social de las Américas, Quito, julio 2004; Foro Mundial Urbano, Barcelona, octubre 2004; Foro Social Mundial, Porto Alegre, enero 2005. Revisión previa a Barcelona, septiembre. Recuperado de http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1239291239Carta_mundial_derecho_ciudad.pdf [consulta: 15 de marzo de 2012].
- CELS** (Centro de Estudios Legales y Sociales) (2009), *Presentación de recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio. Solicitan medidas*. Recuperado de http://www.cels.org.ar/common/documentos/INDEC_recurso.pdf. [consulta: 15 de enero del 2012].
- CENDA** (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino) (2010), *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economía argentina en el período 2002-2010*. Buenos Aires: Editorial Cara o Ceca.
- _____ (2011), “El trabajo en Argentina: Condiciones y perspectivas”. Informe trimestral 20, verano 2011. Buenos Aires: CENDA.
- _____ (2011), *IPC-7 Provincias*. Recuperado de www.cenda.org.ar [consulta: 5 de junio de 2011].
- CIFRA** (2012a), *Informe de Coyuntura N° 9*. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CTA, abril de 2012.
- CIFRA** (2012b), *Informe de Coyuntura N° 11*. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. CTA, noviembre de 2012.

- Cohen, B. C.** (1963), *The press and foreign policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas** (1991), *Folleto informativo N° 16. (Rev. 1)*. Recuperado de http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs16_sp.htm. [consulta: 20 de junio de 2011].
- Corona, N.** (2003), "Integración del Saber. Un ensayo de reflexión (1° parte)". En *Consonancias*, año 2, n°5, pp. 5-12.
- Cortés, R. y Marshall, A.** (1999), "Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma social de los 90". En *Revista de Ciencias Sociales*, Instituto de Desarrollo Económico y Social. Buenos Aires: IDES.
- Cravino, M. C.** (organizadora) (2009), *Los mil barrios informales. Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires*. Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Cravino, C.; Río J. y Duarte J.** (2008), "Magnitud y crecimiento de las villas y asentamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los últimos 25 años". Ponencia presentada en el XIV Encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad de Buenos Aires, 1 al 4 de octubre de 2008.

D

- Dahlgren, G. y Whitehead, M.** (1992), *Policies and strategies to promote equity in health*. Copenhagen: World Health Organization.
- De Mattos, C.** (2006), "Modernización capitalista y transformación metropolitana en América Latina: cinco tendencias constitutivas". En Geraiges de Lemos, A. I.; Arroyo, M. y Silveira, M. L., *América Latina: cidade, campo e turismo*. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), San Pablo, diciembre 2006.
- Desai, M.** (1990), "Bienestar y pobreza: propuestas para un Índice de Progreso Social". En *Índice de Progreso Social, una propuesta. Proyecto regional para la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: PNUD.
- Diez, J. J.; Vigo, D. E.; Pérez Lloret, S. P.; Rigtters, S.; Role, N.; Cardinali, D. P. y Pérez Chada, D. P.** (2011), *Sleep habits, alertness, cortisol levels, and cardiac autonomic activity in short-distance bus drivers: differences between morning and afternoon shifts*. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*. Chicago: American College of Occupational and Environmental Medicine, 53(7), pp. 806-811.
- Donza, E.** (2012), "Satisfactores laborales y protección social". En *Salvia et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año II. Buenos Aires: ODSA, UCA, pp. 133-176.
- Dovidio, J. y Gaertner, S.L.** (1986), "Prejudice, discrimination and racism: Historical trends and contemporary approaches". En Puerías Valdeiglesias, S. (2004), Seminario México, Año 2004, vol. 56, n° 2, pp. 135-144.
- Doyal, L. y Gough, I.** (1994), *Teoría de las necesidades humanas*. Barcelona: Icaria, FUEM.
- Duhau, E. y Giglia, A.** (2004), "Conflictos por el espacio y el orden urbano". *Estudios demográficos y urbanos*, mayo-agosto, n° 056. El Colegio de México, A.C., México, pp. 257-288.
- Duncan, O. D. y Duncan, B.** (1955a), "A Methodological Analysis of Segregation Indexes". *American Sociological Review*, vol. 20, n° 2, pp. 210-217.
- ____ (1955b), "Residential Distribution and Occupational Stratification". *The American Journal of Sociology*, vol. 60, n° 5, pp. 493-503.

E

Eguía, A. y Ortale, S (2007), *Los significados de la pobreza*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
Evans, R. G. (1996), *¿Por qué una gente está sana y otra no?* Madrid: Editorial Diaz de Santos.

F

FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations) (1996), *World food summit. Rome declaration on world food security and world food summit plan of action*. Roma: FAO.

____ (2000), *El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Departamento de Desarrollo Económico y Social. Panorama Mundial de la Subnutrición*. Recuperado de <http://www.fao.org/DOCREP/X8S/X8200SX2S00.htm> [consulta: 25 de marzo de 2012]

____ (2009), *Panorama de la Seguridad Alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Una nueva agenda de políticas públicas para superar la crisis alimentaria*. Recuperado de <http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/pdf/panorama09.pdf> [consulta: 25 de marzo de 2012]

Falcón, M. y Raffo, M. (2011), *Catastro Buenos Aires 2011*. Buenos Aires: Un Techo para mi país.

Feres, J. C. y Mancero, X. (2001), “El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina”. En Serie Estudios Estadísticas y Prospectivos, n°7. Santiago de Chile: CEPAL.

G

Gasparini, L. y Sosa Escudero, W. (2001), *Bienestar y distribución del ingreso en la Argentina 1980-1998*. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Gentes, I (2006), *Estado de arte y lecciones de la gestión y valoración de cuencas hidrográficas para la gestión atmosférica en grandes urbes de América Latina*. Naciones Unidas. División de desarrollo sostenible y asentamientos humanos. Santiago de Chile: CEPAL.

Gottlieb, B. H. (1983), *Social support strategies: Guidelines for mental health practice*. Beverly Hills: Sage Publications.

Groisman, F. (2008), “Aislamiento social, segregación residencial y dinámica laboral en Argentina (2002-2007)”. VRP-WP, Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies The University of Texas at Austin.

Groisman, F. y Suárez, A. L. (2005), “Segregación urbana en el Gran Buenos Aires”. Cuartas Jornadas sobre Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina. Universidad Nacional de Gral. Sarmiento.

____ (2009): “Urban Segregation and Governance in the Americas”. Roberts, B. y R. Wilson (comps.), capítulo: “Residential Segregation in Greater Buenos Aires”. Palgrave: Universidad de Texas.

H

Hale, L. y Phuong Do, D. (2007), *Racial Differences in Self-Reports of Sleep Duration in a Population-Based Study*. *Sleep* 30(9), pp. 1096-1103.

I

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (1997), *Situación y evolución social. Rediseña del sistema de indicadores sociodemográficos*. Buenos Aires: INDEC.

_____ (2000), *Anuario estadístico de la República Argentina 2000*. Buenos Aires: INDEC.

_____ (2002), *Paridades de Poder de Compra del Consumidor*. Buenos Aires: INDEC.

_____ (2006), *Encuesta nacional de gastos de los hogares 2004/ 2005*. Informe de prensa del 26 de diciembre de 2006. Buenos Aires: INDEC.

_____ (2012), *Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Aglomerado Gran Buenos Aires*. http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=536. [consulta: 10 de abril de 2012].

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano (1972). Estocolmo. Recuperado de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/874/15.pdf> [consulta: 10 de marzo de 2012].

J

Jacinto, C. y Chitarroni, H. (2010), “Precariedades, rotación y movilidades en las trayectorias laborales juveniles”. *Revista Estudios del Trabajo* n° 39/40. Buenos Aires: ASET.

Jaramillo, S. (2010), *Hacia una teoría de la renta del suelo*. Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes.

Jargowsky, P. A. (1996), “Take the Money and Run: Economic Segregation in U.S. Metropolitan Areas”. *American Sociological Review*, vol. 61 n° 6, pp. 984-998.

Jorrat, J. R.; Fernández, M. M. y Marconi, E. H. (2008), “Utilización y gasto en servicios de salud de los individuos en Argentina en 2005. Comparaciones internacionales de diferenciales socioeconómicos en salud”. *Revista Salud colectiva*, vol. 4(1), pp. 57-76, Buenos Aires, enero-abril.

L

Lazarus, R. S. y Folkman, S. (1986), *Estrés y procesos cognitivos*. Barcelona: Martínez Roca.

Lépoire, E. y Schleser, D. (2005), *Diagnóstico del desempleo juvenil en Trabajo, ocupación y empleo. Trayectorias, negociación colectiva e Ingresos*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Lindenboim, J. (2013), “Creación de empleo, ¿hoy o ayer?”. Recuperado de <http://notas-dejl.blogspot.com.ar/2013/03/creacion-de-empleo-hoy-o-ayer.html> [consulta: 17 de abril de 2013].

Lo Vuolo, R. (2011), “La asignación universal por hijo para protección social de Argentina”. En Tuñón, I., *Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016)*, Año I. Buenos Aires: ODSA, UCA.

Lachman, M. E. y Weaver, S. L. (1998), “The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being”. *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 74, pp. 763-773.

Lefcourt, H. M. (1981), *Research of the locus of control construct*. Los Angeles: Academic Press, vol. 1, pp. 245-261.

M

Marracino, C. (s/f), *Coberturas de salud*. Cátedra Medicina preventiva y social. Universidad Nacional de Rosario. Recuperado de www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-147.pdf [consulta: 12 de abril de 2012].

Maslow, A. H. (1976), *The Farther Reaches of Human Nature*. Nueva York: Penguin.

Marshall, A. (1996), *Protección del empleo en América Latina: las reformas de los años 1990 y sus efectos en el mercado de trabajo*, en Revista Estudios de Trabajo, n° 11. Buenos Aires: Asociación Argentina de especialistas en Estudios de Trabajo.

Mendoza, A. (2012), “Los programas sociales y su relación con la seguridad alimentaria y la condición de pobreza de los hogares”. En Salvia *et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año II. Buenos Aires: ODSA, UCA, pp. 79-84.

Moore, P. J.; Adler, N. E.; Williams, D. R. y Jackson, J. S. (2002). “Socioeconomic status and health: the role of sleep”. *Psychosom Med* 64(2), pp. 337-344.

Moreno y Suárez (2011), “Cultura democrática, confianza institucional y compromiso ciudadano”. En Salvia *et al.*, Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año I. Buenos Aires: ODSA, UCA.

Moreno, C. (2011), “Cultura democrática, confianza institucional y vida ciudadana”. En Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Pontificia Universidad Católica Argentina, Barómetro de la Deuda Social Argentina serie Bicentenario (2010-2016), Año II, *Asimetrías en el desarrollo humano y social (2007/2010-2011)*. Buenos Aires: Agustín Salva Editor.

O

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) (2002), *Estrategias de reducción de la pobreza basadas en los Derechos Humanos*. Ginebra: OACDH.

_____ (2004), *Los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Un marco conceptual*. Ginebra: OACDH.

_____ (2009), *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos*. Ginebra: Consejo de Derechos Humanos, décimo período de sesiones.

Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA (2005), Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 1, *Las grandes desigualdades*. Salvia, A. y Tami, F. (coord.). Buenos Aires: Universidad Católica Argentina.

_____ (2006), Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 2, *Las desigualdades persistentes*. Salvia, A. (coord.). Buenos Aires: UCA.

_____ (2007), Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 3, *Progresos sociales 2004-2006. Avances y retrocesos de una sociedad polarizada*. Salvia, A. y Lepore, S. (coord.). Buenos Aires: UCA.

_____ (2008), Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 4, *Índices de desarrollo humano y social: 2004-2007*. Salvia, A. (coord.). Buenos Aires: Bouquet Editores.

_____ (2009), Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 5, *La deuda social argentina: 2004-2008*. Salvia, A. (coord.). Buenos Aires: Bouquet Editores.

_____ (2010), Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 6, *La Deuda Social Argentina frente al Bicentenario. Progresos destacados y desigualdades estructurales del desarrollo humano y social en la Argentina urbana 2004-2009*. Buenos Aires: UCA.

_____ (2011), *Barómetro de la Deuda Social Argentina, n° 7, Asimetrías en el desarrollo humano y social (2007/2010-2011). Progresos económicos en un contexto de vulnerabilidad persistente*. Buenos Aires: UCA.

_____ (2013), *Estimaciones de Tasas de Indigencia y Pobreza (2010-2012). Totales Urbanos*. Buenos Aires: UCA.

Oficina Internacional del Trabajo (1999), “Trabajo decente”. En *Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo*. Ginebra: OIT.

_____ (2004), *Por una globalización justa: Crear oportunidades para todos*. Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Ginebra: OIT.

_____ (2008), *Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa*. Conferencia Internacional del Trabajo, 97ª reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008.

_____ (2010), *Constitución de la OIT*. Recuperado de <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/constq.htm> [consulta: 25 de abril de 2012].

_____ (2011), “Trabajo decente para los jóvenes: el desafío de las políticas de mercado de trabajo en Argentina”. Buenos Aires: OIT.

_____ (2013a), “Tendencias mundiales del empleo 2013. Para recuperarse de una segunda caída del empleo”. Resumen ejecutivo. Ginebra: OIT.

_____ (2013b), “Frente a la crisis en Europa: Reflexiones para el caso de Argentina”. Buenos Aires: OIT.

OMS (1948), *Constitución de la Organización Mundial de la Salud*. Recuperado de <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf> [consulta: 22 de abril de 2012].

_____ (1986), *Carta de Ottawa para la promoción de la salud*. Ottawa: Canadian public health association. Disponible en: <http://www.paho.org/spanish/hpp/otawacharterSP.pdf> [consulta: 15 de abril de 2012].

_____ (2006), *Guías para la calidad del agua potable*. Recuperado de http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/es/ [consulta: 12 de abril de 2012].

_____ (2007), *El derecho a la salud*. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/> [consulta: 5 de abril de 2012].

_____ (2010), *La planificación urbana es esencial para la salud pública*. Comunicado de prensa. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/urban_health_20100407/es/index.html [consulta: 5 de abril de 2012].

Organización Mundial de la Salud / Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (2000), Informe sobre la evolución mundial del abastecimiento de agua y saneamiento en 2000. Nueva York: OMS, UNICEF.

ONU (Organización de las Naciones Unidas) (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos* (AG. Resol. 217 A III). Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.

_____ (1966a), *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* (AG. Resol. 2200 A XXII). Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.

_____ (1966b), *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. (AG. Resol. 2200 A XXI). Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.

_____ (1976), *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Recuperado de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm> [consulta: 11 de abril de 2012].

_____ (1986), *Declaración sobre el derecho al desarrollo* (AG. Resol. 41/128). Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.

_____ (2000), *Declaración del Milenio* (A. Resol. 55/2). Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.

P

Patel, S. (2007), *Social and Demographic Factors Related to Sleep Duration*. Darien: Sleep, vol. 30, n° 9, pp. 1077-1078.

Peña, D. (2002), *Análisis de datos multivariantes*. Madrid: McGrawHill.

Pérez Forniés, C. (1997), "La intervención pública sobre el suelo urbano desde el punto de vista de la teoría de los fallos de mercado". Universidad de Zaragoza: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel.

Pervin, L. A. (1989), *Goal concepts in personality and social psychology*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Pírez, P. (2000), "Servicios urbanos y equidad en América Latina. Un panorama con base en algunos casos". En CEPAL/ECLAC, *Serie Medio Ambiente y Desarrollo*, n° 26, Santiago de Chile, septiembre.

____ (2009), "La privatización de la expansión metropolitana". En Pírez, P. (ed), *Buenos Aires, la formación del presente*. Quito: Olacchi.

PNUD (2009), *Informe sobre Desarrollo Humano*. Recuperado de <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/> [consulta: 12 de abril de 2012].

____ (2000), *Objetivos de Desarrollo del Milenio*. Nueva York. Recuperado de <http://www.undp.org/spanish/mdg/> [consulta: 22 de abril de 2012].

Poder Legislativo de la República Argentina (1974). Ley N° 20.744, Régimen del Contrato de Trabajo. En Boletín Oficial, 27 de septiembre. Recuperado de <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-999/25552/texact.htm> [consulta: 23 de abril de 2012].

____ (1991). Ley 24.013, Ley de Empleo - Protección del Trabajo. En Boletín Oficial, 17 de diciembre. Recuperado de <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm> [consulta: 25 de abril de 2012].

____ (2004). Ley 25.877, Régimen laboral - Derogación de Ley 2520. En Boletín Oficial, 19 de marzo. Recuperado de <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/norma.htm> [consulta: 25 de abril de 2012].

____ (2008). Ley 26.476, Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales. En Boletín Oficial, 24 de diciembre. Recuperado de <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148719/norma.htm> [consulta: 25 de abril de 2012].

____ (2011). Ley 26.678, Convenio Relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, Convenio 102, Aprobación. En Boletín Oficial, 12 de mayo. Recuperado de <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/182044/norma.htm> [consulta: 25 de abril de 2012].

P

Pogge, T. (2005), *La pobreza en el mundo y los derechos humanos*. Barcelona: Paidós.

Pychyl, T. A. y Little, B. R. (1998), "Dimensional specificity in the prediction of subjective well-being: Personal Projects in pursuit of the PhD". *Social Indicators Research*, vol. 45, pp. 423-473.

R

- Richardson, H. W.** (1977), *The New Urban Economics: and Alternatives*. Londres: Pion Limited.
- Rodríguez, M. C. et al.** (2007), *Políticas del hábitat, desigualdad y segregación socioespacial en el AMBA*. Área Estudios Urbanos del IIGG-FSOC-UBA y Grupo Argentina de Producción Social del Hábitat-HIC-AL.
- Robine, J. M.; Jagger, C.; Mathers, C. D.; Crimmins, E. M. y Suzman, R. M.**, (2003), *Determining Health Expectancies*. Chichester: Wiley.
- Roca Cladera, J.** (1983), “Teorías alternativas para la formación espacial del valor del suelo. El caso de Barcelona”, En *Annals d’arquitectura*, N° 2. Barcelona: Treballs d’ Investigació.
- Rodríguez-Espínola, S. y Salvia, A.** (2011), “Componentes psicosociales del bienestar subjetivo. Diferenciales de desarrollo humano y de integración social”. En *Salvia et al.*, *Barómetro de la Deuda Social Argentina*, n°6, *La Deuda Social Argentina frente al Bicentenario. Progresos destacados y desigualdades estructurales del desarrollo humano y social en la Argentina urbana 2004-2009*. Buenos Aires: ODSA, UCA, pp. 177-223.
- Rodríguez Mérfel, G. M.** (2011), *Desigualdad socioeconómica y segregación residencial en la Argentina, 1991-2001. Niveles, tendencias y aportes teórico-metodológicos para su estudio*. Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Rodríguez Vignoli, J.** (2001), “Segregación residencial socioeconómica: ¿Qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?”. CEPAL-CELADE, Serie Población y Desarrollo, n° 16, Santiago de Chile.
- Rofman, R. y Oliveri, M.** (2010), *Las políticas de protección social y su impacto en la distribución del ingreso en Argentina*. Buenos Aires: Banco Mundial.
- Royuela, R. A. y Macías, F. J.** (1997), “Calidad de sueño en pacientes ansiosos y depresivos”. *Revista Psiquiatría Biológica* vol. 4, n° 6, pp. 225-30.
- Rozas, P. y Sánchez, R.** (2004), “Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual”. CEPAL, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, n° 75, Santiago de Chile, octubre de 2004.
- Russell, D.** (1982), “The measurement of loneliness”. En Peplau, L. A. y Perlman, D. (eds.), *Loneliness: sourcebook of current theory, research and therapy*. Nueva York: Wiley, pp. 81-104.
- Sabatini, F., Cáceres, G. y Cerda, J.** (2001), “Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”. Santiago de Chile, EURE, vol. 27, n° 82, pp. 21-42.

S

- Santarsiero, Luis** (2007), “El plan Más Vida como componente de las estrategias de consumo alimentario en hogares de Barrio Esperanza”. En Erguía, A. y Ortale, S. (coord.), *Los significados de la pobreza*, pp 107-120. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Salvia, A.** (1995), “Familia, unidades domésticas y estrategias de vida. Nota crítica”. En *Revista Estudios Sociológicos*, n° 37, enero-abril. CES-El Colegio de México.
- Salvia, A.** (2011a), “El desarrollo humano y social desde una perspectiva de derechos. El país real al inicio del Bicentenario (2010-2016)”. En *Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario, Serie del Bicentenario, Año I, Estado de situación del desarrollo humano y social*. Buenos Aires: ODSA, UCA.

- _____ (2011b), “La medición del progreso humano en la dimensión social como una medida de cumplimiento de derechos”. En Rojas, M. (coord.), *La medición del progreso y del bienestar. Propuestas desde América Latina*, México: Foro consultivo científico y tecnológico, A.C.
- Salvia, A.** (comp) (2008), *Jóvenes promesas. Trabajo, educación y exclusión social de jóvenes pobres en la Argentina*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires / Miño y Dávila.
- Salvia, A. y Donza, E.** (1999), “Problemas de medición y sesgos de estimación derivados de la no respuesta completa las preguntas de ingresos de la EPH (1990-1999)”. *Revista de Estudios del Trabajo*, n° 18. Segundo semestre de 1999. Buenos Aires: ASET.
- _____ (2001), “Modelo económico, desigualdad distributiva y pobreza en el Gran Buenos Aires, Argentina”, en *Revista Papeles de Población*, n° 29, pp. 55-82. México D. F.: Universidad Autónoma de México.
- Salvia, A. y Tami, F.** (2005), “Introducción: desarrollo humano y deuda social”. En Salvia, A. y Tami, F. (coord.), *Barómetro de la Deuda Social Argentina, Año I, Las grandes desigualdades*. Buenos Aires: ODSA, UCA.
- Salvia, A. y Léopore, E.** (2006), “Desafíos del enfoque de los derechos humanos y del desarrollo en la lucha contra la pobreza. Aportes al debate desde las Ciencias Sociales”. En *Jornadas Justicia y Derechos Humanos: Los Derechos Humanos y las políticas públicas para enfrentar a la pobreza y la desigualdad*. Buenos Aires: UNESCO.
- _____ (2008), *Desafíos del enfoque de los Derechos Humanos y del desarrollo en la lucha contra la pobreza*. Biblioteca virtual TOP; www.top.org.ar [consulta: 28 de abril de 2012].
- Salvia, A.; Donza, E.; Philipp, E. et al.** (2008), “Estrategias familiares y políticas públicas en auxilio del aumento de la desigualdad distributiva durante el período de reformas estructurales y la crisis de la convertibilidad. Gran Buenos Aires 1992-2003”. *Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*. Buenos Aires: SIMEL, n° 4, pp. 7-45.
- Salvia, A. et al.** (2011a), *Barómetro de la Deuda Social Argentina del Bicentenario, Serie del Bicentenario, Año I, Estado de situación del desarrollo humano y social*. Buenos Aires: ODSA, UCA.
- _____ (2011b), *Deudas y progresos sociales en un país que hace frente a su bicentenario. Argentina 2004 -2010*. Serie del Bicentenario 2010-2016. Informe especial. Buenos Aires: ODSA, UCA.
- Salvia, A. y González, S.** (2011), “Diferenciales sociales asociados a la inseguridad alimentaria de la infancia. Su relación con las asistencias económicas contributivas y no contributivas”. En *Salvia et al., Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Bicentenario. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año I*. Buenos Aires: ODSA, UCA, pp. 48-57.
- Salvia, A.; Tuñon, I. y Musante, B.** (2012), *Informe sobre la Inseguridad Alimentaria en la Argentina. Hogares Urbanos. Año 2011*. Documento de trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Buenos Aires: ODSA, UCA.
- Samuelson, P.** (1954), “The pure Theory of public expenditure”. *Review of Economics and Statistics*, n° 36, noviembre de 1954, pp. 387-389.
- Schlein, M.** (2011), “Programa de transferencias condicionadas de ingresos desde México a la “Gran Manzana”. En *Anuario 2011 Copppal Juvenil*. Buenos Aires: Confederación permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, pp. 8-12.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación** (2009), *Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS)*. Recuperado de <http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=60> [consulta: 25 de abril de 2012].
- Sejenovich, H.** (2011), “La calidad de vida, la cuestión ambiental y sus interrelaciones”. En *Vivir bien: ¿paradigma no capitalista?* La Paz: Ed. CIDES-UMSA.
- Sen, A.** (1982). *Poverty and Famines. an essay of entitlement and deprivation*. Oxford: Clarendon Press.

_____ (1980), *Equity of What? Choice, welfare and measurement*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

_____ (1992), *Inequality Reexamined*. Nueva York: Russell Sage Foundation.

_____ (1998), "Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI". En Emmerij, L. y Núñez del Arco, J. (comp.), *El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI*. Washington: BID.

_____ (2000), "Social Exclusion: concept, application and scrutiny". Social Development Papers, n° 1. Mandaluyong: Asian Development Bank.

Simonelli, G.; Leanza, Y.; Boilard, A.; Hyland, M. R.; Augustinavicius, J.; Cardinali, D. P.; Vallières, A.; Pérez Chada, D. y Vigo, D. E. (2013), "Sleep and quality of life in urban poverty: the impact of a slum-housing upgrading program", en *Journal Sleep*. Darien: Associated Professional Sleep Societies (en prensa).

Spicker, P. (1999), Definitions of poverty: eleven clusters of meaning. En Gordon, D. y Spicker, P., *The international glossary on poverty*. London: Zed Books, 150-62.

Suárez, A. L. et al. (2009), *Segregación residencial en Argentina*. Buenos Aires: PNUD. Disponible en http://www.undp.org.ar/desarrollohumano/PNUD_segregacion_nov17-screen.pdf

T

Taeuber, K. E. y Taeuber, A. F. (2009), *Residential segregation & neighborhood change*. Nuevo Brunswick (USA): Aldine Transaction.

Topalov, CH. (1984), *Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos*. México: Siglo XXI.

Torrado, S. (1995), "Vivir apurado para morir joven". En *Revista Sociedad, UBA*, octubre, Buenos Aires.

_____ (1998), *Familia y diferenciación social. -Cuestiones de método*. Buenos Aires: Eudeba.

Townsend, P. (1979), *Poverty in the United Kingdom*. Harmondsworth: Penguin.

Trajtemberg, D.; Senén González, C. y Medwid, B. (2008), "Los determinantes de la negociación colectiva en la Argentina. Debates teóricos y evidencias empíricas". Serie Trabajo, Ocupación y Empleo n° 9. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

V

Veza, E. y Bertranou, F. (2011), *Un nexo por construir: jóvenes y trabajo decente en Argentina: radiografía del mercado de trabajo y las principales intervenciones*. Buenos Aires: Oficina de País de la OIT para la Argentina.

W

Weiss, R. S. (1973), *Loneliness: The experience of emotional and social isolation*. Cambridge, Mass: MIT Press.

Y

Yujnosvky, O. (1984), *Claves políticas del problema habitacional argentino 1955-1981*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

